



**Pacto internacional
de Derechos Civiles
y Políticos**

Distr.
GENERAL

CCPR/C/AUS/98/3
22 de julio de 1999

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMITE DE DERECHOS HUMANOS

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES
CON ARREGLO AL ARTÍCULO 40 DEL PACTO

Tercer informe periódico que los Estados Partes
debían presentar en 1991

Adición

AUSTRALIA^{1/}

[28 de agosto de 1998]

^{1/} Para consultar el segundo informe periódico presentado por el Gobierno de Australia, véase el documento CCPR/C/42/Add.2; en cuanto a su examen por el Comité, véanse los documentos CCPR/C/SR. 806 a 809 y Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo tercer período de sesiones, Suplemento N° 40 (A/43/40), párrs. 413 a 460.

ÍNDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
INTRODUCCIÓN	1 - 10	3
EL PROTOCOLO FACULTATIVO	11 - 14	4
Artículo 1	15 - 39	5
Artículo 2	40 - 79	9
Artículo 3	80 - 226	19
Artículo 4	227 - 274	43
Artículo 5	275 - 276	52
Artículo 6	277 - 355	52
Artículo 7	356 - 385	70
Artículo 8	386 - 404	75
Artículo 9	405 - 621	80
Artículo 10	622 - 661	124
Artículo 11	662	133
Artículo 12	663 - 693	133
Artículo 13	694 - 718	140
Artículo 14	719 - 828	143
Artículo 15	829 - 863	166
Artículo 16	864 - 865	174
Artículo 17	866 - 944	174
Artículo 18	945 - 974	188
Artículo 19	975 - 1044	194
Artículo 20	1045 - 1060	208
Artículo 21	1061 - 1080	211
Artículo 22	1081 - 1136	215
Artículo 23	1137 - 1192	224
Artículo 24	1193 - 1229	234
Artículo 25	1230 - 1286	241
Artículo 26	1287 - 1349	254
Artículo 27	1350 - 1509	269
Índice de cuadros		306

INTRODUCCIÓN

1. El presente informe es el tercero que el Gobierno de Australia presenta al Comité de Derechos Humanos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
2. Australia presentó su primer informe en 1981, y el Comité de Derechos Humanos lo examinó en 1982. El segundo informe, presentado en 1987, fue examinado por el Comité en 1988. En el presente informe, que abarca el período de marzo de 1987 a diciembre de 1995, se tienen en cuenta las observaciones del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe de Australia.
3. El sistema constitucional de Australia es un sistema federal en el que el Gobierno Federal comparte con seis gobiernos estatales y dos gobiernos territoriales los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, cuyas competencias se distribuyen entre ellos. Por consiguiente, este informe es el fruto de la colaboración entre los gobiernos de esas nueve jurisdicciones.
4. Como la protección de los derechos humanos en Australia ha experimentado un importante desarrollo durante el período a que se refiere el informe, el Gobierno australiano ha decidido presentarlo en forma de una exposición detallada de las disposiciones legales y administrativas que guardan relación con cada uno de los artículos del Pacto, dentro de su contexto y, en lo posible, con referencia a las tendencias estadísticas, las actitudes colectivas y la evolución de la práctica. Para evitar repeticiones, no se expone en detalle la legislación o la práctica de cada Estado o Territorio con respecto a cada cuestión, sino sólo en caso de que esa legislación o práctica difiera considerablemente de la de otra jurisdicción o cuando esté justificado un análisis más a fondo.
5. El Gobierno australiano proporcionó fondos al Consejo de Derechos Humanos de Australia para que coordinara y compilara las observaciones recibidas de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos sobre una versión anterior del presente informe. En la preparación de este informe se han tenido en cuenta las cuestiones planteadas por las organizaciones no gubernamentales.
6. El informe será sometido al Parlamento Federal y se distribuirán copias a los organismos federales, los gobiernos estatales y territoriales y las organizaciones no gubernamentales. El acta resumida del examen del informe y las observaciones finales del Comité se presentarán también en el Parlamento federal y se distribuirán a los organismos federales, los gobiernos estatales y territoriales y las organizaciones no gubernamentales.
7. En el presente informe se entenderá que el término "Estados" comprende el Territorio de la Capital de Australia y el Territorio del Norte. (La situación de los territorios australianos adyacentes (Australian external territories) se examina en la sección relativa al artículo 1 infra, bajo el epígrafe "Territorios australianos"). Cuando se haga referencia al Commonwealth se entenderá que se alude a la Federación de Australia.
8. Durante el período a que se refiere el presente informe se registraron importantes avances en relación con la manera como Australia garantiza efectivamente el respeto de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos avances se refieren:

- A los derechos de los pueblos indígenas (véanse las observaciones relativas a los artículos 9 y 27);
- A los derechos del niño (véanse las observaciones relativas a los artículos 23 y 24);
- A la promulgación de la Disability Discrimination Act 1992 (Ley, de 1992, sobre Discriminación contra los Discapacitados; véanse las observaciones relativas al artículo 2);
- A la promulgación de la Racial Hatred Act 1995 (Ley, de 1995, contra el Odio Racial; véanse las observaciones relativas a los artículos 20 y 26); y
- A la promulgación de la Privacy Act 1988 (Ley, de 1988, de Protección de la Intimidad; véanse las observaciones relativas al artículo 17).

9. El 25 de septiembre de 1991, Australia se adhirió al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El 28 de enero de 1993, Australia hizo declaraciones en virtud del artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esto significa que ahora los nacionales australianos pueden denunciar ante los órganos internacionales creados en virtud de tratados de derechos humanos, es decir, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité contra la Tortura, las supuestas violaciones de sus derechos.

10. En julio de 1995, el Gobierno Federal y los gobiernos de los Estados aprobaron unos acuerdos de cooperación en materia de comunicaciones e informes internacionales sobre derechos humanos. Los acuerdos de cooperación tienen por objeto facilitar las consultas entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los Estados y Territorios para coordinar la respuesta de Australia a las denuncias individuales que plantean cuestiones relacionadas con la legislación o la práctica estatal o territorial y facilitar la cooperación para la preparación de informes concernientes a los tratados de derechos humanos.

EL PROTOCOLO FACULTATIVO

11. Durante el período a que se refiere el informe se ha notificado oficialmente a Australia la presentación de 11 comunicaciones en virtud del Protocolo Facultativo. Tres de ellas (n^{os} 490/1992, 491/1992 y 499/1992) fueron declaradas inadmisibles por el Comité, que no las transmitió al Gobierno de Australia. Una (n^o 536/1993) fue declarada inadmisible después de haber sido transmitida al Gobierno australiano. Y otra comunicación fue objeto de una decisión sobre el fondo (n^o 488/1992).

Comunicación N^o 488/1992, N. Toonen c. Australia

12. Los apartados a) y c) del artículo 122 y el artículo 123 del Código Penal de Tasmania castigaban como delito cualquier acto sexual entre personas del mismo sexo realizado en Tasmania. El autor de la comunicación 488/1992 alegó que

esas disposiciones eran discriminatorias a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 y los artículos 17 y 26 del Pacto.

13. El Comité de Derechos Humanos declaró admisible la comunicación el 5 de noviembre de 1992 y emitió su dictamen definitivo el 31 de marzo de 1994. El Comité resolvió que los apartados a) y c) del artículo 122 y el artículo 123 del Código de Tasmania constituían una injerencia arbitraria en la intimidad de las personas y que Australia había infringido el artículo 17.

14. Atendiendo al dictamen del Comité, el Fiscal General Federal (Federal Attorney-General) celebró conversaciones con el Primer Ministro y el Fiscal General del Estado de Tasmania. La posición del Gobierno tasmano era la de no adoptar ninguna disposición con respecto a las conclusiones del Comité. Por consiguiente, el Gobierno Federal promovió una reforma legislativa para dar protección a todos los australianos contra las injerencias arbitrarias en su intimidad sexual. La nueva normativa legal, establecida en la Human Rights (Sexual Conduct) Act (Ley de Derechos Humanos (Comportamiento Sexual)), entró en vigor el 19 de diciembre de 1994. Se encontrarán más detalles acerca de esta Ley en la sección relativa al artículo 17, infra.

Artículo 1

Australia

15. En la sección del documento básico titulada "Estructura política general" se expone en detalle la historia de la federación australiana. En pocas palabras, los dos hitos principales en el camino seguido por Australia hasta alcanzar la plenitud del gobierno propio fueron:

La instauración de un gobierno responsable en los seis Estados, de conformidad con la Imperial Australian Colonies Government Act 1850 (Ley Imperial, de 1850, de Régimen de Gobierno de las Colonias Australianas) (las colonias aprobaron nuevas constituciones entre 1855 y 1889); y

La federación posterior de los seis Estados en el Commonwealth de Australia el 1º de enero de 1901 en virtud de la promulgación de la Imperial Commonwealth of Australia Constitution Act 1900 (Ley Imperial, de 1900, por la que se constituye el Commonwealth de Australia).

16. De conformidad con la Constitución, contenida en la Ley Imperial de 1900, el Gobernador General de Australia, como representante de la Corona, está facultado para ejercer todas las atribuciones de la Corona en Australia. Desde el punto de vista institucional y práctico, la autonomía australiana implica unos parlamentos libremente elegidos, un poder ejecutivo responsable, un poder judicial independiente y el imperio de la ley.

Los territorios australianos

El Territorio del Norte

17. De conformidad con la Northern Territory (Self-Government) Act 1978 (Ley, de 1978, de Régimen de Autonomía del Territorio del Norte) y las leyes conexas, el Territorio del Norte dispone de instituciones políticas, representativas y administrativas separadas y de un sistema judicial propio. La Asamblea

Legislativa del Territorio del Norte tiene competencias para promulgar leyes relativas al mantenimiento de la paz y el orden y el buen gobierno del Territorio.

El Territorio de la Capital de Australia

18. Como en el caso del Territorio del Norte, la Australian Capital Territory (Self-Government) Act 1988 (Ley, de 1988, de Régimen de Autonomía del Territorio de la Capital de Australia) constituyó el Territorio de la Capital de Australia en un organismo político separado, con sus propios poder ejecutivo y asamblea legislativa.

19. El Tribunal de Magistrados (Magistrates Court) y el Tribunal Superior de Justicia (Supreme Court) del Territorio de la Capital de Australia han sido transferidos de la organización jurisdiccional federal a la del Territorio.

Papua Nueva Guinea

20. El antiguo territorio australiano de Papua y el Territorio en fideicomiso del Nueva Guinea, que habían sido administrados conjuntamente como el Territorio de Papua y Nueva Guinea, lograron la autonomía en 1973 y se independizaron de Australia en 1975.

Las Islas Cocos (Keeling)

21. Las obligaciones que en virtud del apartado e) del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas incumbían a Australia en relación con el Territorio de las Islas Cocos (Keeling) terminaron en 1984. El 6 de abril de 1984 se celebró un acto de libre determinación en presencia de una misión visitadora de las Naciones Unidas. La misión observó un proceso de votación mediante el cual el pueblo malayo cocos optó entre la independencia, la libre asociación y la integración según lo dispuesto en la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1960. La misión concluyó por unanimidad que el pueblo de Cocos había ejercido su derecho a la libre determinación de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

22. La comunidad malaya cocos y el Gobierno Federal firmaron en marzo de 1991 un protocolo de intenciones que rige la continuación del proceso de integración iniciado en 1984. El Gobierno Federal, con arreglo a ese protocolo de intenciones, promulgó posteriormente la Territories Law Reform Act 1992 (Ley, de 1992, de Reforma de la Legislación de los Territorios). A tenor de lo dispuesto en esta Ley, el antiguo régimen jurídico basado en las leyes de Singapur fue sustituido por un ordenamiento jurídico actual a partir del 1º de julio de 1992. El nuevo régimen se basa en las leyes federales y las leyes de Australia Occidental (el Estado geográficamente más cercano al Territorio y aquél con el que mantiene relaciones más estrechas).

23. La responsabilidad política por las leyes de las Islas Cocos (Keeling) sigue recayendo en el Gobierno Federal. Para que su aislamiento geográfico no redunde en desventaja de los residentes en las Islas, el Gobierno Federal celebra acuerdos de prestación de servicios con el Gobierno de Australia Occidental para proporcionarles los servicios de naturaleza estatal.

24. En el terreno pragmático, el Gobierno Federal ha ejecutado una serie de obras y mejoras importantes de los servicios para ponerlos a la altura de los del continente, entre otros la mejora del suministro de energía eléctrica a Home Island, la ampliación de la escuela de Home Island, nuevas dependencias para el personal de enfermería y la construcción de un nuevo centro de salud. En 1992 se completó la ejecución del programa de desarrollo de Home Island (de un valor de 10 millones de dólares) y se proporcionaron 90 viviendas a los residentes.

25. También en 1992, el Gobierno Federal colaboró en la reestructuración del Consejo local de las Islas Cocos (Keeling) para que pudiera asumir las competencias y funciones de un consejo de distrito rural (shire council) de Australia Occidental. Las elecciones al Consejo se celebran de conformidad con las leyes sobre la administración local de Australia Occidental aplicables. También se facilita al Consejo el acceso a las fuentes de financiación de que dispone normalmente la administración local en Australia Occidental, incluidas las subvenciones para fines generales. A los efectos de la inscripción en el censo y la votación en las elecciones al Parlamento Federal, las Islas Cocos (Keeling) forman parte del Distrito Federal del Territorio del Norte.

La Isla Christmas

26. La Ley, de 1992, de Reforma de la Legislación de los Territorios, aplicable a las Islas Cocos (Keeling), se aplica también a la Isla Christmas. De este modo, el 1º de julio de 1992 casi todo el derecho legislado y todo el common law de Australia Occidental se aplicaba como ordenamiento jurídico propio de la Isla Christmas. Se han concertado acuerdos de prestación de servicios con el Gobierno de Australia Occidental para velar por la eficiencia de los servicios. Los habitantes de la Isla Christmas eligieron su primer consejo de distrito rural en diciembre de 1992. Para los efectos de la inscripción en el censo y la votación en las elecciones al Parlamento Federal, la Isla Christmas forma parte del Distrito Federal del Territorio del Norte.

La Isla Norfolk

27. De conformidad con la Federal Norfolk Island Act 1979 (Ley Federal, de 1979, de la Isla Norfolk), la Isla Norfolk goza de un amplio grado de autonomía. La Asamblea Legislativa de la Isla Norfolk ejerce una serie de competencias de naturaleza estatal y local comparables en líneas generales con las del Territorio de la Capital de Australia y el Territorio del Norte. El Gobierno Federal retiene el derecho de veto en materia legislativa en algunas esferas, por ejemplo, la pesca, la educación y las relaciones laborales. Las competencias de la Asamblea Legislativa de la Isla Norfolk también son limitadas en lo que concierne a ciertas facultades reservadas al poder federal, como la inmigración local, las aduanas y la seguridad social.

28. La Norfolk Island (Electoral and Judicial) Amendment Act 1992 (Ley, de 1992, por la que se modifica el Régimen Electoral y Judicial de la Isla Norfolk) regula la situación de los habitantes de la Isla Norfolk que son nacionales australianos y desean votar en las elecciones federales. Dicha Ley, que modifica la Federal Electoral Act 1918 (Ley Electoral Federal, de 1918), autoriza la inscripción voluntaria de los habitantes de la Isla Norfolk que cumplen determinadas condiciones en el censo de cualquier distrito electoral de Australia (excepto los distritos de Fraser, en el Territorio de la Capital de Australia, y el Territorio del Norte).

29. La Asamblea Legislativa de la Isla Norfolk se elige por un período de tres años pero, en ciertos casos, el Administrador de la isla puede disolverla anticipadamente. En las elecciones de la Isla Norfolk el voto es obligatorio para las personas inscritas en el censo electoral de la Asamblea. La Legislative Assembly Ordinance 1979 (Ordenanza, de 1979, para la regulación de la Asamblea Legislativa) contiene disposiciones sobre el voto anticipado y el voto por correo, el escrutinio y las garantías del recuento.

Los pueblos indígenas

30. El Gobierno australiano ha seguido atentamente los debates internacionales sobre la aplicación del derecho a la libre determinación a los pueblos indígenas. En la sección del presente informe relativa al artículo 27 se proporciona información sobre las medidas por las que el Gobierno de Australia intenta propiciar el desarrollo económico, social y cultural de los indígenas australianos.

31. Durante el examen por el Comité de Derechos Humanos del segundo informe de Australia, en 1988, el Comité preguntó cuál era la posición de Australia en relación con las inquietudes manifestadas por ciertos habitantes de las islas del Estrecho de Torres con respecto al autogobierno y la autonomía. El 1º de julio de 1994 se creó una nueva organización, la Administración Regional del Estrecho de Torres, con objeto de reconocer a los isleños del Estrecho de Torres una mayor participación en las decisiones relativas a la ejecución de programas y la prestación de servicios en su región.

32. El Plan General de la Administración Regional del Estrecho de Torres (1994-1995) resume los designios y objetivos de la organización de esta manera:

Capacitar a los isleños del Estrecho de Torres para decidir sus propios asuntos con arreglo a su cultura propia, denominada Ailan Kastom, en la que basan su unidad y su fuerza;

Lograr el reconocimiento de la identidad, los derechos y las costumbres de los isleños del Estrecho de Torres como pueblo indígena;

Mejorar la calidad de vida de todos los pueblos que viven en el Estrecho de Torres;

Crear una base económica sostenible, prestar mejores servicios públicos y de salud y garantizar la protección del medio ambiente;

Reivindicar el título nativo a las tierras y las aguas del Estrecho de Torres.

33. La Administración Regional del Estrecho de Torres está encargada de:

Decidir el nivel de financiación y el tipo de programas aplicables en la región del Estrecho de Torres;

Contribuir a la elaboración y aplicación de los planes de mejora de la región;

Representar a la población local y defender sus intereses;

Elegir un comisionado a la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres que represente la región del Estrecho de Torres; y

Preparar un informe annual sobre sus actividades.

Todos los pueblos

34. El Comité de Derechos Humanos también pidió a Australia que expusiera su posición con respecto a la lucha por la libre determinación de los pueblos de Namibia, Sudáfrica, Palestina y Nueva Caledonia.

35. En la esfera internacional, el Gobierno australiano aboga activamente y vota por la descolonización y el derecho a la libre determinación de los territorios no autónomos.

36. En relación con Namibia, Australia sin reservas los esfuerzos encaminados a lograr la independencia de Namibia y se felicitaba de poder acoger a Namibia entre los miembros de la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth). Australia había proporcionado 300 ingenieros militares y personal electoral al Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para el período de transición posterior a la independencia de Namibia en 1990.

37. En lo referente a Sudáfrica, Australia había contribuido decisivamente, mediante su participación en los regímenes multilaterales de sanciones, a la decisión de Sudáfrica de dismantelar el sistema de apartheid.

38. Por lo que respecta a Palestina, Australia ha sido un firme y activo defensor del proceso de paz. Desde hace muchos años los sucesivos gobiernos australianos han apoyado la idea de una solución global basada en la aplicación de las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Australia se ha comprometido a apoyar el derecho de todos los países de la región a existir dentro de unas fronteras seguras y reconocidas, y el derecho a la libre determinación del pueblo palestino.

39. Por último, Australia estima que los intereses de Nueva Caledonia y la estabilidad regional exigen una transición ordenada y pacífica hacia una auténtica libre determinación. Para ser viable a largo plazo, el régimen político tiene que reconocer los derechos del pueblo indígena, salvaguardar los derechos de todos los demás residentes de muchos años y preservar la buena voluntad de Francia y su intervención constructiva en el Pacífico.

Artículo 2

Generalidades

40. Como se indica en el documento básico, las fuentes del ordenamiento jurídico australiano son el common law y el derecho escrito o legislado, o sea, la legislación básica o delegada emanada del Parlamento Federal o de los parlamentos de cualquiera de los seis Estados y los tres Territorios que gozan de autonomía. Los derechos enunciados en el Pacto pueden estar garantizados por cualquiera de esas fuentes del derecho.

41. En Australia, el Pacto y los demás tratados no son aplicables directamente en derecho interno. Las disposiciones de los tratados en los que Australia ha

llegado a ser parte no quedan incorporadas al ordenamiento jurídico interno por el mero hecho de la aceptación formal del tratado por Australia (aunque, en relación con sus efectos respecto del poder ejecutivo, véase bajo el artículo 24, *infra*). Por ello, el Gobierno Federal, con objeto de asegurarse de que en toda Australia el ordenamiento jurídico se ajustaba a lo dispuesto en el Pacto, celebró, desde 1968 hasta la ratificación del Pacto en 1984, amplias consultas con los gobiernos estatales. La finalidad de esas reuniones era, primeramente, determinar qué disposiciones de dicho ordenamiento eran incompatibles con el Pacto y, en segundo lugar, proponer medidas de enmienda o una reserva apropiada.

42. Desde 1985, el órgano oficial encargado principalmente de velar por la observancia del Pacto por parte de los Estados es un comité integrado por el Fiscal General Federal y los fiscales generales de todos los Estados que componen el Commonwealth de Australia, denominado Comité Permanente de Fiscales Generales. Este proceso consultivo permitió a Australia adherirse, el 25 de septiembre de 1991, al primer Protocolo Facultativo del Pacto.

43. Estos acuerdos de cooperación entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los Estados han permitido el intercambio de experiencias entre las distintas jurisdicciones. Además, la colaboración de los gobiernos estatales es indispensable para la preparación de los informes a que se refiere el Pacto, a fin de poder presentar una exposición conjunta del derecho y la práctica australianos.

44. El régimen jurídico de la Isla Norfolk carece de normas de protección de los derechos humanos. Las leyes federales no se aplican a la isla salvo que así lo dispongan expresamente. El Commonwealth se ha comprometido a consultar al Gobierno de la Isla Norfolk sobre la aplicación a la isla de la legislación federal, incluidas las leyes de derechos humanos.

45. Un comentario más detallado sobre el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto será pertinente también en relación con otros artículos, por lo que las observaciones relativas a ese párrafo se subsumen en la exposición que figura a continuación de los derechos y libertades específicos garantizados por el Pacto.

El régimen de los derechos humanos

46. El mecanismo institucional mediante el cual se protegen los derechos reconocidos en el Pacto se describe detalladamente en el documento básico, junto con un esbozo de las disposiciones legales que regulan ese mecanismo.

Leyes vigentes

47. El Gobierno Federal y los gobiernos de los Estados han promulgado disposiciones legislativas por las que se declara ilícita toda discriminación en las principales esferas de la vida pública basada en la raza, el sexo, el estado civil, el embarazo, la sexualidad y la discapacidad física o mental de la persona. Diversos órganos de defensa de la igualdad de oportunidades y de lucha contra la discriminación investigan las denuncias e intervienen como amigables compondores. Esta normativa legal se examina en detalle en relación con las disposiciones pertinentes del Pacto, especialmente el artículo 26. Por el momento conviene limitarse a enumerar las principales disposiciones legislativas.

Federales

- Sex Discrimination Act 1984 (Ley, de 1984, sobre Discriminación Sexual)
- Racial Discrimination Act 1975 (Ley, de 1975, sobre Discriminación Racial)
- Disability Discrimination Act 1992 (Ley, de 1992, sobre Discriminación contra los Discapacitados)
- Disability Services Act 1986 (Ley, de 1986, de Prestación de Servicios a los Discapacitados)
- Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986 (Ley, de 1986, reguladora de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades)
- Inspector-General of Intelligence and Security Act 1986 (Ley, de 1986, reguladora de la Inspección General de los Servicios de Seguridad e Información)
- Public Service Act 1922 (Ley, de 1922, de la Función Pública)
- Industrial Relations Act 1988 (Ley, de 1988, de Relaciones Laborales)
- Privacy Act 1988 (Ley, de 1988, de Protección de la Intimidad)
- Freedom of Information Act 1982 (Ley, de 1982, sobre Libertad de Información)
- Ombudsman Act 1976 (Ley, de 1976, reguladora del Defensor del Pueblo (*Ombudsman*))

Territorio de la Capital de Australia

- Discrimination Act 1991 (Ley, de 1991, sobre Discriminación)
- Guardianship and Management of Property Act 1991 (Ley, de 1991, de Tutela y Curatela)
- Community Advocate Act 1991 (Ley, de 1991, reguladora del Defensor del Menor o Incapacitado)

Nueva Gales del Sur

- Anti-Discrimination Act 1977 (Ley, de 1977, de Lucha contra la Discriminación)
- Industrial Relations Act 1991 (Ley, de 1991, de Relaciones Laborales)
- Ombudsman Act 1974 (Ley, de 1974, reguladora del Defensor del Pueblo (*Ombudsman*))

Territorio del Norte

- Anti-Discrimination Act 1992 (Ley, de 1992, de Lucha contra la Discriminación)
- Ombudsman (Northern Territory) Act 1978 (Ley, de 1978, reguladora del Defensor del Pueblo (*Ombudsman*) del Territorio del Norte)

Queensland

- Anti-Discrimination Act 1991 (Ley, de 1991, de Lucha contra la Discriminación)

- Criminal Justice Act 1989 (Ley, de 1989, de Jurisdicción Penal)
- Health Rights Commission Act 1991 (Ley, de 1991, reguladora de la Comisión del Derecho a la Salud)

Australia del Sur

- Equal Opportunity Act 1984 (Ley, de 1984, sobre Igualdad de Oportunidades)
- Public Sector Management Act 1995 (Ley, de 1995, de Gestión del Sector Público)
- Industrial and Employee Relations Act 1994 (Ley, de 1994, de Relaciones Laborales y Estatuto del Trabajador)
- Freedom of Information Act 1991 (Ley, de 1991, sobre Libertad de Información)
- Ombudsman Act 1972 (Ley, de 1972, reguladora del Defensor del Pueblo (*Ombudsman*))
- Police (Complaints and Disciplinary Proceedings) Act 1985 (Ley, de 1985, reguladora de las Denuncias contra la Policía y del Procedimiento Disciplinario)
- Guardianship and Administration Act 1993 (Ley, de 1993, de Tutela y Curatela)
- Mental Health Act 1993 (Ley, de 1993, de Salud Mental)

Tasmania

- Sex Discrimination Act 1994 (Ley, de 1994, sobre Discriminación Sexual)

Victoria

- Equal Opportunity Act 1995 (Ley, de 1995, sobre Igualdad de Oportunidades)
- Mental Health Act 1986 (Ley, de 1986, sobre Salud Mental)
- Intellectually Disabled Persons Act 1986 (Ley, de 1986, de las Personas con Discapacidad Psíquica)
- Guardianship and Administration Board Act 1986 (Ley, de 1986, reguladora del Consejo de Tutela y Curatela)
- Ombudsman Act 1973 (Ley, de 1973, reguladora del Defensor del Pueblo (*Ombudsman*))

Australia Occidental

- Equal Opportunity Act 1984 (Ley, de 1973, sobre Igualdad de Oportunidades)

48. El párrafo 3 del artículo 2 obliga a los Estados Partes a garantizar a las personas unas vías de recurso efectivas. El documento básico contiene una descripción resumida de los recursos internacionales y federales de que disponen los particulares en caso de violación de los derechos humanos, y de los organismos competentes. La exposición que figura a continuación se centra primeramente en las modificaciones recientes de la legislación federal y, después, en las vías de recurso que ofrecen los ordenamientos jurídicos estatales.

49. De entrada, sin embargo, conviene señalar que, en opinión de Australia, no todas las cuestiones relacionadas con los derechos humanos deben resolverse mediante el recurso a nuevas sanciones penales, sino que, en muchos casos, los derechos se preservan mejor mediante procedimientos menos formales, a menudo vinculados a la investigación, la conciliación y la presentación de un informe. Métodos como las comisiones parlamentarias especiales o las comisiones reales pueden ser apropiados para determinar el punto de equilibrio entre derechos y obligaciones, que forma parte integrante del método por el cual se protegen y promueven los derechos humanos y las libertades fundamentales. Evidentemente, este método también es aplicable cuando un asunto puede ser objeto de definición legal precisa y someterse a los métodos tradicionales de aplicación de la ley.

La Ley, de 1986, reguladora de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades

Leyes federales aprobadas después de la presentación del informe anterior

50. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades fue creada por la susodicha Ley de 1986 y tiene encomendada la supervisión de la observancia de los derechos humanos en Australia. La estructura, funciones y atribuciones de la Comisión se describen en líneas generales en el documento básico. En esencia, la Comisión es legalmente competente para recibir denuncias de discriminación en virtud de la Ley, de 1975, sobre Discriminación Racial (véase bajo el artículo 26, infra), la Ley, de 1984, sobre Discriminación Sexual (véase bajo el artículo 26, infra), la Ley, de 1992, sobre Discriminación contra los Discapacitados (véase infra), la Ley, de 1988, de Protección de la Intimidad (véase bajo el artículo 17, infra), y en relación con otros derechos humanos. La Comisión también tiene atribuidas amplias funciones de orientación, como:

- Llevar a cabo programas de investigación, educativos y de otra índole para promover entre el público la aceptación, comprensión y conciencia de los derechos humanos;
- Examinar la vigente legislación federal y, a instancias del Fiscal General, los proyectos de ley para verificar su conformidad con los derechos humanos;
- Informar al Parlamento Federal acerca de las leyes que deban elaborarse o las otras medidas que deban adoptarse en materia de derechos humanos para que Australia cumpla sus obligaciones internacionales en este campo; y
- Examinar las decisiones o actuaciones de las autoridades federales, o las medidas que éstas adopten a tenor de la legislación federal, para verificar su conformidad con los derechos humanos.

51. La Comisión también puede investigar los actos o las prácticas de la Administración pública federal o del sector privado en relación con las denuncias de discriminación en el empleo.

52. Para los efectos de esta Ley, se entiende por "derechos humanos" los derechos enunciados en los diversos instrumentos incluidos en los anexos de la Ley o mencionados en ésta. Así anexo a la Ley figuran los instrumentos

internacionales siguientes: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, el Convenio n° 111 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones.

53. Es motivo de denuncia, en particular, la discriminación por razón de raza, color, religión, edad, opinión política, origen nacional, inmigración (o la de un pariente o allegado), origen social, antecedentes médicos o penales, preferencia sexual, sexo, actividad sindical, estado civil, embarazo y discapacidad física o psíquica en esferas de la vida pública como el empleo, la educación, la vivienda y el suministro de bienes y servicios. También está prevista la denuncia por trato injusto o vejatorio en caso, por ejemplo, de que un denunciante sea objeto de dicho trato por haber interpuesto una denuncia.

54. La Comisión está facultada para intentar llegar a una solución de transacción en las denuncias sobre derechos humanos dirigidas contra las autoridades federales y presentar un informe al Fiscal General si no se logra la conciliación.

55. El Tribunal Supremo de Australia (High Court of Australia) falló en febrero de 1995 que los medios procesales por los cuales se hacía ejecutar hasta entonces lo declarado en las resoluciones dictadas por la Comisión en virtud de las leyes federales de protección de la intimidad y lucha contra la discriminación, es decir, mediante el registro de la correspondiente resolución de la Comisión en el Tribunal Federal (Federal Court), no eran constitucionalmente válidos. Esto significaba que la Comisión podía seguir resolviendo sobre casos de discriminación, pero que no se podía dar adecuado cumplimiento a lo declarado en sus resoluciones.

56. El Gobierno Federal ha restablecido un sistema anterior para ejecutar provisionalmente las resoluciones de la Comisión. Con arreglo a ese sistema, la resolución es objeto de una nueva vista ante el Tribunal Federal.

Las leyes sobre la discapacidad

57. El Gobierno Federal, desde que presentó el segundo informe, ha tomado disposiciones para mejorar los derechos de las personas que sufren de una discapacidad por medio de dos leyes, la primera de las cuales se centra en la eliminación de la discriminación (la Ley, de 1992, sobre Discriminación contra los Discapacitados) y la segunda en la infraestructura de la prestación de servicios (Ley, de 1986, de Prestación de Servicios a los Discapacitados).

58. La Ley, de 1992, sobre Discriminación contra los Discapacitados, que entró en vigor el 1° de marzo de 1993, declara ilícita la discriminación por discapacidad en las esferas siguientes: bienes raíces, empleo, educación, acceso a locales, suministro de bienes y servicios, vivienda, clubes, deporte y aplicación de leyes y programas federales.

59. La Ley declara ilícita la discriminación tanto directa como indirecta basada en la discapacidad. La discapacidad directa se define en líneas generales como, entre otras cosas, la pérdida total o parcial o la disminución de las

funciones físicas o psíquicas y la presencia en el organismo de gérmenes que causen o puedan causar enfermedades o dolencias. La discriminación por razón de discapacidad se define como el hecho de dispensar o proponerse dispensar al ofendido un trato menos favorable que el agente dispensa o dispensaría a una persona sin discapacidad en las mismas circunstancias o en circunstancias análogas.

60. Esta normativa legal obliga a los Estados y se aplica conjuntamente con la normativa estatal vigente en este campo. No obstante, en caso de conflicto la Ley federal prevalecerá sobre las leyes estatales.

61. La Ley prevé algunas excepciones en circunstancias determinadas, como en los supuestos de obligaciones relacionadas con operaciones militares, fondos de pensiones y seguros, enfermedades infecciosas, organizaciones benéficas, telecomunicaciones, pensiones y subsidios, migración y servicios de mantenimiento de la paz, medidas especiales y actos realizados por los poderes públicos. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades también puede conceder excepciones. Las disposiciones que limitan la aplicación de esas excepciones figuran en el capítulo quinto del título III de la Ley, de 1992, sobre Discriminación contra los Discapacitados.

62. La Ley estableció también, con carácter provisional, una moratoria de tres años durante la cual se consideraba que cualquier persona que actuase de conformidad con una ley estatal o federal incompatible no violaría el título II de la Ley (que establece las esferas de discriminación antes mencionadas). Ese plazo de tres años venció el 1º de marzo de 1996, y el Gobierno Federal y los gobiernos estatales han revisado su legislación para hacerla compatible con la Ley. A la expiración del plazo de tres años, los gobiernos pueden establecer una normativa legal para dar cumplimiento a la Ley. Las personas que actúen de conformidad con esa normativa no se entenderá que hayan violado el título II de la Ley. Durante el período a que se refiere el informe se han formalizado más de 700 denuncias en virtud de la Ley.

63. El Fiscal General Federal ha creado el Grupo de Trabajo sobre Normas Mínimas de la Ley de Prohibición de la Discriminación contra los Discapacitados para que le asesore acerca de la forma y contenido posibles de unas normas uniformes sobre discapacidad que puedan ser autorizadas por el Fiscal conforme a la Ley. El Grupo de Trabajo ha presentado un documento de síntesis sobre las cuestiones que han de estudiarse en relación con las normas mínimas. El documento fue distribuido a los gobiernos estatales y se han recibido observaciones al respecto. Como consecuencia de esto, se han creado tres organismos encargados de elaborar unas normas mínimas en materia de transporte, acceso a locales y empleo. Se ha elaborado un documento de síntesis sobre las normas mínimas en materia de empleo y un proyecto de norma sobre transporte accesible, que se han sometido a información pública.

64. El 9 de diciembre de 1994, el Gobierno Federal inauguró la Estrategia del Commonwealth para la Protección del Discapacitado, destinada a proporcionar un plan de acción para luchar contra la discriminación por discapacidad de carácter sistémico y poner en práctica los objetivos de la Ley, de 1992, sobre Discriminación contra los Discapacitados desde la perspectiva federal. El método adoptado se basa en las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

65. El segundo instrumento legislativo antes mencionado es la Disability Services Act 1986 (Ley, de 1986, de Prestación de Servicios a los Discapacitados). Esta Ley fue elaborada en respuesta a la presión social en favor de reformas fundamentales y urgentes en el campo de la prestación de servicios a las personas con discapacidades. La Ley se dirige a las personas con deficiencias físicas, psíquicas, intelectuales o sensoriales y permite prestar una variedad más amplia de servicios de ayuda a las personas con discapacidades, por ejemplo, en materia de vivienda, empleo y participación en las actividades de la colectividad. También se han ampliado considerablemente los servicios de defensa.

66. Un elemento importante de la Ley, de 1986, de Prestación de Servicios a los Discapacitados era una Declaración de Principios y Objetivos en la que se expone como, a juicio del Gobierno Federal, deben crearse y prestarse los servicios para las personas con discapacidad. Estos principios se centran en el derecho de los discapacitados a gozar de los mismos derechos que todos los demás miembros de la sociedad australiana, por ejemplo el derecho al respeto, la dignidad, el desarrollo, la calidad de vida, la libertad de elección, la solución menos restrictiva y la persecución de los agravios. Los principios también promueven el logro de objetivos como la competencia, la autonomía, la participación y la imagen.

67. La Comisión Australiana de Reforma Legislativa revisa actualmente, como parte de su examen general de la legislación cuya aplicación corresponde al Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Ley, de 1986, de Prestación de Servicios a los Discapacitados.

68. Por último, a fin de evitar la falta de coherencia en el ámbito federal en materia de servicios a los discapacitados, en 1991 los gobiernos australianos concertaron el Convenio entre el Commonwealth y los Estados miembros en materia de discapacidad. En virtud de ese Convenio, la competencia administrativa de los servicios de empleo para las personas con discapacidad recae en la Administración Federal, mientras que la competencia administrativa de la prestación de vivienda y servicios de apoyo para las personas con discapacidad recae en los Estados. Materias como la defensa, la investigación y el desarrollo siguen siendo competencias compartidas entre la Administración Federal y las Administraciones estatales.

69. Los gobiernos de los Estados, en cumplimiento de las obligaciones que les incumben en virtud del Convenio entre el Commonwealth y los Estados miembros en materia de discapacidad, han promulgado una normativa legal complementaria de la Ley, de 1986, de Prestación de Servicios a los Discapacitados.

70. El Gobierno Federal ha establecido una red nacional de Servicios de Defensa Jurídica contra la Discriminación por razón de Discapacidad (así como un centro de asesoramiento jurídico especializado en VIH/SIDA en Nueva Gales del Sur) financiada por medio del Programa del Centro Federal de Asesoramiento Jurídico de la Comunidad. Estos servicios, con sede en cada uno de los Estados y Territorios, proporcionan asesoramiento y asistencia jurídicos a las personas que estiman haber sido objeto de un trato discriminatorio por razón de discapacidad y que desean interponer una demanda en virtud de la Ley.

El Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres

71. El Parlamento Federal aprobó, en diciembre de 1992, la Human Rights and Equal Opportunity Amendment Act (Nº 2) (Ley (Nº 2) por la que se modifica la Ley de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades). Este instrumento legislativo regula el régimen jurídico del Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres. La Ley entró en vigor el 13 de enero de 1993 y el Sr. Michael Dodson asumió las funciones de primer Comisionado el 16 de abril de 1993.

72. La obligación principal del Comisionado es preparar, para someterlo al Gobierno Federal, un informe anual sobre el goce y el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales por la población aborígen y de las islas del Estrecho de Torres. Además, el Comisionado supervisa la aplicación de la Native Title Act 1993 (Ley, de 1993, del Título Nativo). Por este instrumento se reconocen legalmente los derechos sobre las tierras que consuetudinariamente pertenecen a los pueblos indígenas australianos y que se examinan más a fondo en la sección relativa al artículo 27, infra. En virtud de esta Ley, el Comisionado tiene encomendada la preparación de un informe anual sobre su aplicación y efectos sobre el ejercicio y goce de los derechos humanos por la población aborígen y de las islas del Estrecho de Torres. La Ley también confiere al Ministro el derecho a pedir al Comisionado que prepare un informe sobre cualquier cuestión relacionada con los derechos que según la Ley corresponden a los pueblos indígenas. El Comisionado tiene a su cargo asimismo la realización de actividades educativas y de fomento de la justicia social en favor de los indígenas australianos.

Iniciativas actuales

El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos del Comité Permanente de Fiscales Generales

73. La finalidad del grupo de Trabajo es mejorar la coordinación en las cuestiones de derechos humanos. Su cometido es trabajar en favor de una estrategia nacional coordinada en materia de derechos humanos, así como servir de base a la cooperación futura para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Australia relativas a los derechos humanos.

El Foro de las organizaciones no gubernamentales sobre los derechos humanos

74. La Administración Federal ha mantenido estrechos contactos con los Estados en relación con la preparación de informes, y el Departamento del Fiscal General Federal ha ensayado también diferentes métodos de consulta con las organizaciones no gubernamentales. En lo que se refiere al presente informe, el Departamento del Fiscal General Federal financió en parte al Consejo de Derechos Humanos de Australia para que coordinase y compilase un informe de carácter no gubernamental, que ha sido tenido en cuenta en la preparación de este informe.

75. El Gobierno Federal ha anunciado que establecerá un foro para que las organizaciones no gubernamentales se reúnan periódicamente con objeto de intercambiar información y tratar de las cuestiones de derechos humanos y su evolución en el ámbito interno. En la actualidad, las organizaciones no

gubernamentales se reúnen periódicamente en un foro auspiciado por el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio para examinar los derechos humanos desde el punto de vista internacional. Un foro análogo, coordinado por el Departamento del Fiscal General, se reunirá para debatir las cuestiones de derechos humanos desde el punto de vista interno.

76. Este Foro proporcionará a las organizaciones no gubernamentales la oportunidad específica de intercambiar información y tratar de las cuestiones de derechos humanos y su evolución en el ámbito interno. El Foro ofrecerá al Gobierno la oportunidad de interesar más directamente a las organizaciones no gubernamentales en el proceso de preparación de los informes presentados por Australia en virtud de los tratados de derechos humanos. Las organizaciones no gubernamentales podrán presentar en el Foro informes que faciliten información suplementaria para la elaboración de los informes que han de someterse en virtud de los tratados.

Investigación sobre la separación familiar de niños aborígenes

77. En aplicación de anteriores políticas asimilistas, muchos niños aborígenes fueron separados por la fuerza de sus familias. El estudio de la Oficina Australiana de Estadística sobre la población aborigen y de las islas del Estrecho de Torres, de 1994, reveló que más del 10% de los aborígenes de edades superiores a los 25 años habían sido apartados, según afirmaban, de sus familias naturales.

78. Se pide a la Comisión que comunique sus conclusiones al Fiscal General. La Comisión:

- Averiguará cuáles fueron las leyes, prácticas y políticas que en el pasado dieron lugar a la separación familiar forzosa de los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y los efectos de tales leyes, prácticas y políticas;
- Examinará la necesidad de introducir modificaciones en las actuales leyes, prácticas y políticas relativas a la presente colocación en instituciones de guarda de los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, y su idoneidad, así como los servicios y procedimientos de que disponen los afectados por las prácticas de separación (en particular, pero no exclusivamente, el acceso a los registros y la asistencia para la reunificación de las familias); y
- Examinará los principios aplicables para resolver si procede la indemnización de los afectados.

79. Sir Ronald Wilson, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, el Comisionado de Discriminación Racial y el Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres son los comisionados que principalmente tienen encomendada la investigación en nombre de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. Dicha investigación no había concluido durante el período a que se refiere el presente informe.

Artículo 3

La igualdad de la mujer

80. Históricamente, la legislación australiana contenía disposiciones que ahora se considera que eran discriminatorias para la mujer. La reforma progresiva del derecho ha permitido eliminar gradualmente y cada vez con mayor intensidad esas disposiciones. En la práctica, sin embargo, la mujer ocupa en la vida pública un lugar menos destacado que el hombre. En 1995, las mujeres constituían aproximadamente el 16% del total de los diputados en el Parlamento Federal y los parlamentos de los Estados. En enero de 1995, de los siete miembros del Tribunal Supremo de Australia (High Court of Australia), uno era mujer; de los 42 miembros del Tribunal Federal de Australia (Federal Court of Australia), cinco eran mujeres; y de los 54 miembros del Tribunal de Familia de Australia (Family Court of Australia), ocho eran mujeres. En mayo de 1995, las mujeres representaban una cuarta parte de los administradores y directores (que abarcan de los puestos de supervisión a los cargos directivos superiores).

Las leyes contra la discriminación

81. El Gobierno Federal y todos los gobiernos estatales han promulgado leyes que, a reserva de un reducido número de excepciones, proscriben la discriminación por razón de sexo (y por los motivos afines de estado civil y embarazo). La proscripción se aplica en esferas como las del empleo, la educación, la vivienda, la calidad de miembro de un club y el suministro de bienes y servicios. Los detalles de la aplicación, alcance y efectos de los regímenes legales federal y estatal se examinan en relación con el artículo 26, infra.

82. El Gobierno Federal y la mayoría de los gobiernos estatales han celebrado una serie de acuerdos de cooperación para velar por el cumplimiento de la normativa legal. Dichos acuerdos proporcionan el medio por el cual los ciudadanos de esos Estados que deseen formular una denuncia pueden acudir a una oficina única, que se ocupa de la normativa federal y estatal, para obtener asesoramiento.

El mecanismo administrativo

83. En el ámbito federal, la competencia ejecutiva en materia de condición de la mujer recae en el Primer Ministro, asistido por el Ministro miembro del Gabinete encargado de los asuntos relacionados con la condición de la mujer. La Oficina de la Condición de la Mujer, que depende del Departamento del Primer Ministro y el Gabinete, presta asesoramiento técnico y apoyo administrativo. De conformidad con el Examen de los mecanismos de asesoramiento técnico del Gobierno en materia de condición de la mujer, de 1993, los titulares de las carteras ministeriales y de otros órganos superiores de la Administración (ministers and portfolios) aplican las directrices de la política gubernamental sobre la condición de la mujer, e informan al respecto. Para facilitarles la tarea, la mayoría de los departamentos federales cuentan con una dependencia de la mujer o un funcionario encargado de los asuntos de la mujer. En el cuadro 1 figura una tabla sinóptica.

84. Algunos Estados disponen de organismos especiales encargados de velar por la igualdad de oportunidades de las mujeres. En Queensland, por ejemplo, la Dependencia de Política de la Mujer de la Oficina del Gabinete, que depende del

Primer Ministro, está encargada de promover y supervisar la política gubernamental de mejora de la condición de la mujer en Queensland. La Dependencia también tiene encomendada la coordinación de las iniciativas específicas encaminadas a satisfacer las necesidades de las mujeres de Queensland. En Australia del Sur, la Oficina de la Condición de la Mujer cumple una función similar. En abril de 1995, el Gobierno de Nueva Gales del Sur creó el primer Departamento de Asuntos de la Mujer para ocuparse desde el ámbito del Gobierno en su conjunto de una amplia variedad de cuestiones que afectan a las mujeres, con la intención de lograr la participación de los órganos superiores de la Administración en la satisfacción de las necesidades de las mujeres y promover un planteamiento coherente e innovador para fomentar los intereses de la mujer entre todos sectores de la Administración Pública. En Australia Occidental, la Oficina de Intereses de la Mujer fue reestructurada en octubre de 1995 y se convirtió en la Oficina de Elaboración de Políticas de la Mujer. La reestructuración pone de manifiesto la función de la Oficina respecto de la promoción de la condición de la mujer en el Estado y refleja un enfoque centrado en los servicios a las interesadas. El Gobierno de Tasmania también ha creado una Oficina de la Condición de la Mujer para supervisar las cuestiones políticas que afectan a las mujeres.

La Estrategia Nacional para el Acceso de la Mujer a la Jurisdicción

85. En mayo de 1995, el Primer Ministro anunció la Estrategia Nacional para el Acceso de la Mujer a la Jurisdicción, que incluía una serie de iniciativas políticas para fomentar y mejorar el acceso de las mujeres a los órganos jurisdiccionales.

86. Se creará una red nacional de centros jurídicos de la mujer en las ciudades y zonas rurales para prestar asesoramiento y asistencia a las mujeres con problemas de índole jurídica. El Gobierno Federal financiará en cuatro años la creación de esos centros. También se proporcionarán fondos para que la red de centros de la mujer puedan establecer servicios especializados para las mujeres aborígenes y las isleñas del Estrecho de Torres.

Las licencias de maternidad y paternidad

87. La normativa legal federal de relaciones laborales en su forma enmendada, que entró en vigor el 30 de marzo de 1994, autoriza a los padres que tienen un empleo u ocupación fijos a compartir la licencia sin sueldo por nacimiento de un hijo durante los primeros 12 meses de vida del niño. Salvo por un período de una semana en el momento del nacimiento, las licencias de maternidad y paternidad no pueden coincidir. Ello es así porque la finalidad principal de la disposición es permitir que la persona con licencia sea la encargada de atender al cuidado del hijo.

88. En 1995 se anunció también un subsidio de maternidad, condicionado al nivel de recursos, equivalente a seis semanas del tipo máximo de subsidio por el nacimiento de un hijo (que, en el momento del anuncio, era de 816 dólares). El subsidio de maternidad incrementará la renta familiar cuando es más necesario: en el momento del nacimiento de un hijo. Aproximadamente el 85% de las mujeres que dan a luz tendrán derecho al pago.

89. En el sector público, una importante proporción de mujeres disfrutan de licencia de maternidad con sueldo. Una licencia de maternidad de 12 semanas con

suelo completo es la prevista para los empleados de la Administración Federal, el Territorio del Norte y el Territorio de la Capital de Australia, a reserva de un período mínimo de 12 meses de servicio continuado. En Nueva Gales del Sur tienen derecho a una licencia de nueve semanas con sueldo completo, sujeto a un período mínimo de 40 semanas. En Victoria tienen derecho a una licencia de maternidad de 12 semanas con sueldo completo, condicionado a un período mínimo de 12 semanas de servicio continuado. Los padres y madres solteros tienen derecho a las prestaciones de seguridad social según el nivel de recursos. En Tasmania el derecho a las prestaciones comprende 12 meses de licencia de maternidad, de los cuales 12 semanas pueden ser de licencia de enfermedad con sueldo. Además, también se dispone de una licencia por adopción de 46 semanas. Los acuerdos incluyen a menudo el derecho a la licencia de paternidad.

90. La licencia de maternidad en el sector privado es en la mayoría de los casos sin sueldo. En Australia, las condiciones de trabajo suelen regirse por laudos o convenios de empresa que en la jurisdicción federal son aprobados por la Comisión Australiana de Relaciones Laborales. La Ley, de 1988, de Relaciones Laborales dispone que, en el cumplimiento de sus funciones, la Comisión Australiana de Relaciones Laborales deberá tener en cuenta, al elaborar el contenido del laudo, los principios enunciados en el Convenio (Nº 156) sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Educación y trabajo de la mujer

91. En Australia, el porcentaje de mujeres en la población activa es aproximadamente semejante al de los países desarrollados. Según el Australian Women's Yearbook 1995, su participación en la fuerza de trabajo se ha mantenido en torno al 52%.

92. La tasa de participación de las mujeres casadas ha crecido considerablemente, del 44,3% en agosto de 1985 al 55,2% en agosto de 1995. La participación de mujeres con discapacidad ha aumentado del 40% en 1988 al 46% en 1993. No obstante, la segregación laboral y en las ocupaciones ha continuado en el decenio de 1990. El trabajo femenino ha seguido estando concentrado en el comercio al por menor, los servicios comunitarios y de salud y el sector educativo. Estos cuatro sectores reúnen, por término medio, aproximadamente el 44% de todas las mujeres trabajadoras. Un gran número de mujeres están empleadas como oficinistas, vendedoras y trabajadoras de servicios personales. Estos grupos ocupacionales reúnen alrededor del 55% de todas las mujeres trabajadoras.

93. La limitada participación femenina en los sectores no tradicionales, como las ciencias y las técnicas, ha sido objeto de atención por medio de diversos planes y estrategias apoyados por el Gobierno. Sin embargo, los estudios en este campo se centran la mayoría de las veces en la educación, y no en las barreras a la participación de la mujer en estas esferas tradicionalmente reservadas al hombre. Mientras que cada vez son más las mujeres que emprenden estudios y reciben capacitación en esferas científicas y técnicas, es probable que la trayectoria de su carrera se distinga de la de los hombres que trabajan en esos sectores.

94. Las mujeres participan activamente en todos los aspectos de la producción y gestión agrícolas, pero están escasamente representadas en las estadísticas

agrícolas, y el estereotipo de que las mujeres desempeñan un papel secundario en el sector agrícola constituye un obstáculo para ellas.

95. En 1994, la Oficina Australiana de Economía Agrícola y de Recursos, con el apoyo de la Oficina de la Condición de la Mujer, llevó a cabo un estudio sobre la condición de la mujer en las explotaciones agrícolas. Este estudio dio pie a la participación de la Foundation for Australian Agricultural Women, la Country Women's Association of Australia y Women in Agriculture en una sesión televisada de la conferencia nacional de 1995 de la Oficina ("Perspectivas"), y a la inclusión de cuestiones sobre la mujer en las explotaciones agrícolas en el programa permanente de estudios de la Oficina. Por otra parte, el primer Foro Nacional de la Mujer Rural, celebrado en Canberra en junio de 1995, contribuyó a promover un calendario político nacional sobre la mujer rural.

96. Aunque la participación cada vez mayor de las mujeres en el mercado de trabajo ha contribuido a una mejora general de la condición económica y social de la mujer, ésta está excesivamente representada en el trabajo a tiempo parcial y ocasional. El trabajo ocasional se caracteriza por un acceso más limitado a prestaciones como vacaciones y jubilación, aunque las escalas de salarios del trabajo ocasional suelen estar ajustadas para compensar la naturaleza de ese trabajo y la correspondiente privación del derecho a prestaciones como la licencia por enfermedad y las vacaciones anuales. Alrededor del 22% de las trabajadoras a tiempo parcial de Australia preferirían trabajar más horas.

97. Como la mujer australiana en general, la mujer indígena ha mejorado su participación en el mercado de trabajo, con un crecimiento del empleo del 45% entre 1986 y 1991. En 1994, el 27% de las mujeres y el 45% de los hombres de la población indígena tenían un empleo. Más de un tercio de las mujeres indígenas de edades comprendidas entre los 34 y 44 años estaban ocupadas (incluida la participación en el Plan de proyectos de empleo en el desarrollo comunitario; véanse las observaciones relativas al artículo 27 *infra*, bajo el epígrafe "El empleo"). Sin embargo, esta tasa de empleo sigue siendo considerablemente inferior a la de los demás hombres y mujeres australianos.

98. Aunque la relación entre varones y mujeres del salario base medio semanal del trabajador adulto a tiempo completo ha sido inestable en el último decenio, se ha producido cierta reducción de las diferencias de salario entre los sexos. La relación de dicho salario base, calculada sobre la base del estudio del salario medio semanal, aumentó ligeramente del 82,7% al 84% entre agosto de 1985 y agosto de 1995. La diferencia de salarios entre los sexos es muy inferior si se excluye el personal de dirección. En mayo de 1994, la relación entre varones y mujeres del salario base medio semanal de los trabajadores adultos a tiempo completo en puestos no directivos fue del 92,1%.

99. Seguidamente se exponen brevemente algunos ejemplos de programas recientes de capacitación y empleo de la Administración Federal.

Programa de puestos de trabajo, educación y capacitación

100. El Programa de puestos de trabajo, educación y capacitación, iniciado en marzo de 1989, presta asistencia a los progenitores sin pareja pensionistas (generalmente mujeres) que intentan entrar, o volver a entrar, en la vida activa. Ese Programa es una operación de cooperación del Departamento de Seguridad Social, el Departamento de Trabajo, Educación y Capacitación y el

Departamento de Sanidad y Servicios Sociales, en la que el primero asume la responsabilidad de gestión. En 1993 se amplió el programa para incluir:

- A las mujeres nacidas antes de 1937, que no tienen hijos;
- A las personas que proporcionan cuidados a los pensionistas (es decir, personas que prestan atención domiciliaria a una persona con una grave discapacidad); y
- A algunos progenitores sin pareja que reciben prestaciones especiales por no satisfacer los requisitos de residencia para recibir una pensión monoparental (el 94% de ellos son mujeres).

El Grupo Asesor de Trabajo, Educación y Capacitación de la Mujer

101. En 1988 se creó el Grupo Asesor de Trabajo, Educación y Capacitación de la Mujer para asesorar a los ministros de los sectores competentes sobre el acceso de la mujer al trabajo, la educación y la capacitación y su participación en estas esferas. Está integrado por todas las mujeres que han sido nombradas miembro de la Junta Nacional de Trabajo, Educación y Capacitación y sus Consejos, y por representantes del sector laboral, incluidos los empleadores privados y los sindicatos. Las esferas prioritarias del Grupo en 1994-1995 fueron:

- El desempleo, en especial el desempleo de larga duración, y sus efectos en la mujer;
- La experiencia de las mujeres trabajadoras ocasionales y a tiempo parcial, en particular los efectos del ajuste estructural, incluido el sistema de negociación colectiva de este grupo de trabajadores en la empresa y su acceso a la capacitación, la seguridad en el empleo y la promoción profesional;
- El programa nacional de reforma de la capacitación, incluidas las cuestiones del aprendizaje, la "transferencia de créditos" y el "reconocimiento del aprendizaje anterior"; y la mujer en la pequeña empresa.

El Programa de Iniciativas de Estudios y Trabajo de la Mujer

102. Este Programa, gestionado por la Oficina de la Mujer en el marco del Departamento de Trabajo, Educación y Capacitación, fue creado en 1985 para:

- Encargar estudios relacionados con la elaboración de políticas de fomento del trabajo y la capacitación de la mujer;
- Proporcionar información sobre el trabajo, la educación y la capacitación de la mujer; y
- Elaborar métodos o estrategias para mejorar el acceso de la mujer al trabajo y la capacitación, y su participación en estas esferas, y fomentar su promoción profesional.

103. El orden de prioridad de las asignaciones de créditos se fijan cada año. En 1993-1994, la esfera prioritaria fue la de los proyectos sobre el programa nacional de reforma de la capacitación desde el punto de vista de la mujer, incluidos los efectos de las reformas en el lugar de trabajo, como la negociación en el ámbito de la empresa sobre el acceso de la mujer a la capacitación. En 1995 se fijaron tres esferas prioritarias: la mujer y las políticas de trabajo, educación y capacitación del Gobierno Federal expuestas en el libro blanco de 1994 titulado "Working Nation"; una evaluación del Programa de Iniciativas de Estudios y Trabajo de la Mujer; y estudios de las relaciones laborales en los sectores de la cultura, el ocio, la vivienda y la hostelería.

La política nacional de educación femenina

104. El Gobierno Federal ha financiado proyectos para la aplicación de su política nacional de educación femenina y el Plan de Acción Nacional de la Enseñanza Femenina, 1993-1997. Dicho Plan establece una estructura para que las escuelas analicen los planes de estudio, la experiencia en clase de las jóvenes, el comportamiento de los varones con las mujeres y los cambios del entorno social, físico y cultural en que las jóvenes realizan su aprendizaje. Se ha incorporado a la estructura del plan una amplia variedad de indicadores de rendimiento para supervisar los progresos y mejoras en este campo.

105. El Gobierno Federal ha financiado la labor del Grupo de Trabajo sobre la Paridad entre los Sexos, establecido por el Consejo Interministerial de Educación, Trabajo, Capacitación y Asuntos de la Juventud.

106. Por otra parte, el Proyecto de Reforma de los Planes de Estudio para tener en cuenta las cuestiones de paridad entre los sexos propició la elaboración de material de formación profesional que tratase del concepto de la igualdad entre los sexos, la aplicación de planes de enseñanza con inclusión de estas cuestiones y la igualdad entre los sexos y el plan de estudios de inglés. Se nombraron consultores en cuestiones de paridad entre los sexos para que formaran parte de cada uno de los equipos del proyecto encargados de elaborar las bases de todos los planes de estudios de ámbito nacional. Otro resultado del proyecto fue la incorporación de los principios y objetivos de la política nacional de educación femenina en las bases de los planes de estudios de todas las escuelas australianas.

107. El Gobierno Federal también ha financiado el boletín de la Red pro Paridad entre los Sexos, que tiene como finalidad promover la aplicación de los objetivos de las políticas y estrategias nacionales. El boletín ha alcanzado una difusión de 35.000 ejemplares.

El Organismo Nacional Australiano de Capacitación

108. El Organismo Nacional Australiano de Capacitación, que inició sus actividades el 1º de enero de 1994, está encargado de la elaboración y mantenimiento, en colaboración con los Estados, de los objetivos, estrategias y procesos de planificación en materia de capacitación y formación profesional acordados en el ámbito nacional. Sus objetivos son velar por que la capacitación y formación profesional satisfagan las necesidades de las empresas, favorezcan un mercado de capacitación eficaz, promuevan una red eficiente de proveedores financiados con fondos públicos, creen mayores oportunidades y resultados para los particulares y mejoren los vínculos con otros sectores educativos. Como

parte de su programa ha financiado el Plan Nacional de Acción para la Capacitación y Formación Profesional de la Mujer y un programa especial sobre la igualdad.

109. Los proyectos realizados en virtud del Plan Nacional de Acción para la Capacitación y Formación Profesional de la Mujer comprenden, en particular:

- El proyecto Child Care Alternatives, que ha permitido realizar estudios centrados directamente en las cuestiones de acceso a los servicios de guardería para los estudiantes de Educación Técnica y Complementaria con responsabilidades familiares. Este proyecto, que ya ha concluido, ha resultado en la presentación de las recomendaciones pertinentes al Gobierno y los centros de Educación Técnica y Complementaria;
- Los proyectos de investigación sobre el reconocimiento del aprendizaje anterior a los estudiantes de Educación Técnica y Complementaria. Se ha distribuido información sobre los procesos de evaluación del aprendizaje anterior; y
- El proyecto Swings and Roundabouts, que es un proyecto de investigación sobre los efectos probables de un mercado de capacitación abierto en la participación de la mujer en la educación técnica y complementaria.
- El programa especial sobre la igualdad se divide en dos partes: el programa de Cursos Preparatorios para la Mujer y el programa denominado Tradeswomen on the Move.

110. El programa de Cursos Preparatorios para la Mujer financia cursos y actividades en los centros de enseñanza secundaria y de educación técnica y complementaria destinados a preparar a las mujeres para el aprendizaje de un oficio y las prepara para matricularse en un curso de aprendizaje o preaprendizaje. Tradeswomen on the Move es una estrategia conjunta de la Federación y los Estados destinada a fomentar una mayor participación de mujeres jóvenes en oficios no tradicionales, mediante visitas de mujeres trabajadoras a los centros de enseñanza.

El Programa de Igualdad y Enseñanza Superior

111. El Programa de Igualdad y Enseñanza Superior ha proporcionado una financiación anual de 4 millones de dólares, aproximadamente, para prestar asistencia a los grupos considerados desfavorecidos en lo referente a la participación en la enseñanza superior. Estos grupos fueron identificados en unas directrices tituladas "A fair chance for all: higher education that is within everyone's reach" ("Una oportunidad para todos: la educación superior al alcance del conjunto de los ciudadanos") como los integrados por personas discapacitadas, personas de las clases socioeconómicamente desfavorecidas, mujeres (especialmente en los campos de estudio no tradicionales y los cursos de posgrado), personas originarias de zonas rurales y aisladas, y personas de familias de habla no inglesa.

El boletín

112. La Oficina de la Mujer del Departamento de Trabajo, Educación y Capacitación publica un boletín titulado "Women and work", con una difusión de 10.000 ejemplares cada número, dirigido a promover la igualdad de la mujer en las esferas del empleo, la educación y la capacitación.

La mujer y las Fuerzas Armadas

113. Antes de 1990, la política del Gobierno Federal era rechazar la participación de las mujeres en unidades de combate o análogas. Así se recogía en el artículo 43 de la Ley, de 1984, sobre Discriminación Sexual, relativo al despliegue de mujeres en servicio de combate o análogo. En 1990, sin embargo, el Gobierno Federal cambió su política y abrió a la participación de la mujer muchas más funciones en las fuerzas armadas. De resultados de ello, en la actualidad el 99% de los puestos en la Marina y la Fuerza Aérea y el 67% de los del Ejército están abiertos a la incorporación de la mujer. Sigue estando prohibida la incorporación de mujeres en puestos en que el servicio exige cometer un acto de violencia contra el enemigo en tiempo de guerra o participar directamente en la comisión de dicho acto. Esto incluye las unidades siguientes: infantería e ingenieros de combate en el Ejército, buceadores de desminado en la Marina y unidades de defensa en tierra en la Fuerza Aérea.

114. El 16 de diciembre de 1995, el Gobernador General sancionó la Sex Discrimination Amendment Act 1995 (Ley, de 1995, por la que se modifica la Ley sobre Discriminación Sexual). Esta Ley modifica el artículo 43 de la Ley sobre Discriminación Sexual para limitar la exención concedida a las Fuerzas Armadas australianas, de forma que ahora solo se aplica al servicio de combate.

115. En 1994, la cuestión del acoso sexual en la Marina saltó a debate público a raíz de supuestos incidentes de acoso sexual ocurridos en el HMAS Swan durante una misión en Asia sudoriental en 1992. La acusación más grave fue la de una agresión sexual contra una oficial médico supuestamente cometida por un compañero oficial. En 1994, las acusaciones dieron lugar a una investigación de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, Defensa y Comercio del Senado. Aunque la investigación versaba principalmente sobre el acoso sexual en la Marina, la Comisión investigó también el carácter y alcance del acoso sexual en el conjunto de las Fuerzas Armadas australianas. El informe de la Comisión del Senado sobre el acoso sexual en las Fuerzas Armadas australianas, titulado "Facing the Future Together" ("Encarar juntos el futuro"), ha sido presentado en el Parlamento Federal.

116. La Comisión apoya firmemente el principio de la igualdad de oportunidades para las mujeres en las Fuerzas Armadas australianas y hace hincapié en que, para lograr la integración, el personal de todas las categorías debe ser educado en las cuestiones de paridad entre los sexos. El informe contiene 42 recomendaciones, algunas de las cuales constan de varias partes, lo que se traduce en una total de 66 elementos distintos. Los temas van de la redefinición de las directrices y la mejora de los programas de educación y capacitación a la gravedad de la reprobación dictada contra el personal del HMAS Swan. De los 66 elementos, el Gobierno Federal apoyó 53, cuatro fueron apoyados en principio, cinco lo fueron en parte, dos no fueron apoyados y dos quedaron en examen.

Medidas de promoción

117. La Affirmative Action (Equal Employment Opportunity for Women) Act 1986 (Ley, de 1986, de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de la Mujer) se aplica a todas las organizaciones no gubernamentales con una plantilla superior a los 100 empleados y dispone que esos organismos informen al Director de Medidas de Promoción acerca de los progresos realizados en la observancia del principio de la igualdad de oportunidades en el empleo. Una parte esencial de cada programa de promoción es que los empleadores se fijen unos objetivos y previsiones y que procedan anualmente a su seguimiento y evaluación. Sin embargo, no es necesario establecer cuotas ni los empleadores están obligados ha adoptar medidas incompatibles con el criterio del mérito.

118. La Government Management and Employment Act 1985 (Ley, de 1985, de Gestión Pública y Empleo) de Australia del Sur exige la observancia del principio de no discriminación por razón de sexo, preferencia sexual, estado civil, embarazo, raza, discapacidad física o cualquier otra condición o circunstancia en la gestión del personal del sector público. La Service Act 1984 (Ley, de 1984, de la Función Pública) del Estado de Tasmania incluye disposiciones destinadas a proteger las oportunidades de empleo de las mujeres en la Administración pública tasmania. Como consecuencia de la modificación en 1980 de la Ley, de 1977, de Lucha contra la Discriminación de Nueva Gales del Sur, este Estado adoptó gradualmente la obligación de preparar y ejecutar planes de gestión del empleo que favorecieran la igualdad de oportunidades en el sector público. La Ley, de 1984, sobre Igualdad de Oportunidades de Australia Occidental incluye disposiciones análogas con respecto a la función pública de ese Estado. La Equal Opportunity in Public Employment Act 1984 (Ley, de 1984, sobre Igualdad de Oportunidades en la Función Pública) de Queensland establece que los entes públicos elaboren planes de gestión del empleo en condiciones de igualdad para fomentar la igualdad de oportunidades en favor de determinados grupos, incluidas las mujeres, y eliminar la discriminación ilícita contra ellos.

La violencia contra la mujer

119. Se han realizado progresos importantes en lo que se refiere al apoyo prestado a las mujeres víctimas de la violencia, garantizando una respuesta firme de la jurisdicción penal y analizando las actitudes colectivas. Al elaborar directrices y programas se ha adoptado una definición amplia de la violencia.

120 Las estadísticas nacionales sobre la violencia contra la mujer, especialmente en lo que concierne a su frecuencia, son escasas. Las estimaciones actuales de la gravedad del problema provienen de diversas fuentes, como los datos comunicados por la policía, los tribunales y los servicios de ayuda a la mujer, y de estudios y encuestas locales, como los sondeos telefónicos. Sus resultados no pueden refundirse en estadísticas nacionales debido a la diversidad de los métodos utilizados para reunir los datos. Muchos de los actos de violencia cometidos contra las mujeres no son denunciados. Por ejemplo, una encuesta reciente descubrió que el 75% de las agresiones sexuales no son denunciadas a la policía y que los motivos principales aducidos para no denunciarlas son que se trata de un "asunto privado" y el "temor a las represalias".

121. Las consultas celebradas por la Administración Federal en los dos últimos años ponen de manifiesto que la violencia y el miedo a la violencia siguen siendo preocupaciones esenciales de las mujeres. Por consiguiente, la adopción de medidas en los ámbitos federal y estatal sigue constituyendo una cuestión prioritaria que se ha abordado de varias maneras.

La Estrategia Nacional para el Acceso de la Mujer a la Jurisdicción

122. Se han asignado fondos para hacer frente a la violencia doméstica. En primer lugar, se han elaborado dos programas experimentales en el marco de los servicios de orientación matrimonial actualmente financiados por la Administración Federal para ensayar métodos de lucha contra la violencia doméstica. En segundo lugar, se ha proporcionado a los proveedores de los servicios capacitación en materia de violencia contra la mujer a fin de que las mujeres que soliciten ayuda puedan recibir sistemáticamente una respuesta cualificada y sensible.

123. Los dos proyectos experimentales se han establecido en servicios de orientación matrimonial u otras relaciones personales para proporcionar ayuda a las mujeres y los hijos, hacer asumir al hombre la responsabilidad de su comportamiento violento y prestar asistencia para lograr la seguridad de todos los miembros de la familia y la cesación de los actos de violencia física o sexual. Los proyectos aportarán una respuesta que tenga en cuenta a toda la familia, incluidos los grupos de mujeres y niños que han sido víctimas o testigos de la violencia doméstica.

124. El Instituto Australiano de Criminología recibe fondos, en el marco de la Estrategia Nacional para el Acceso de la Mujer a la Jurisdicción, para coordinar los estudios sobre la reacción de los órganos jurisdiccionales penales frente a la violencia contra la mujer, a fin de que el Gobierno Federal pueda disponer de estadísticas nacionales fidedignas que le sirvan de ayuda al elaborar las directrices políticas futuras en este campo.

La Estrategia Nacional sobre la Violencia contra la Mujer

125. La Comisión Nacional del Commonwealth y los Estados sobre la Violencia contra la Mujer estuvo en funciones entre 1990 y 1993. En 1992, la Comisión presentó una Estrategia Nacional sobre la Violencia contra la Mujer, que definía los objetivos esenciales y proporcionaba directrices en el marco de consejos ministeriales, a causa de las amplias atribuciones de los gobiernos estatales con respecto a las leyes, políticas y programas relativos a la violencia contra la mujer.

126. En 1993, la Comisión estableció un Centro de Información sobre la Violencia contra la Mujer, que sirve de organismo central para la difusión de información sobre la violencia contra la mujer. Véase también la sección relativa al artículo 27 infra, bajo el epígrafe "Mujeres indígenas".

Educación comunitaria

127. El Gobierno Federal encargó en 1995 la realización de una encuesta sobre las actitudes colectivas ante la violencia contra la mujer (que incluye la violencia doméstica, pero es más amplia), cuyos resultados son en gran parte alentadores. En 1995, la conciencia y conocimiento colectivos de la violencia

doméstica es mayor. Hay que destacar la coincidencia entre las actitudes de hombres y mujeres. Las diferencias importantes entre ambos sexos surgen solo en lo que respecta al mayor temor que tienen las mujeres a la violencia y a la mayor seriedad con que éstas consideran las formas no físicas de violencia.

128. Aunque ha aumentado el conocimiento colectivo de la violencia doméstica, sigue habiendo renuencia a tomar medidas y una tendencia a culpar a la víctima. Esto parecería indicar que la mayor conciencia colectiva no se ha traducido en un cambio de comportamiento personal.

129. La Administración Federal ha contribuido a fomentar una mayor conciencia de la violencia contra la mujer entre la población mediante una serie de programas de educación comunitaria. El Programa Nacional de Educación sobre la Violencia Doméstica se aplicó durante tres años, hasta junio de 1990. El Programa de Educación Comunitaria del Commonwealth , Stop Violence Against Women (Acabemos con la Violencia contra la Mujer), fue financiado hasta 1995. Preveía campañas de publicidad, subvenciones comunitarias y proyectos especiales.

Regímenes jurídicos de la violencia doméstica

130. Australia reconoce que son víctimas de la violencia doméstica tanto el hombre como la mujer, pero que se trata de una cuestión especialmente importante para las mujeres.

131. La Family Law Act 1975 (Ley, de 1975, reguladora del Derecho de Familia) contiene disposiciones que facultan a las personas mayores de edad para solicitar de la autoridad judicial que dicte auto de amparo. El titular de la patria potestad u otro representante legítimo de un menor podrá solicitar en nombre de éste dicho auto.

132. La Ley, de 1975, reguladora del Derecho de Familia también fue modificada en 1995 para velar por que el Tribunal de Familia examinase los efectos de la violencia en el ámbito familiar al dictar resoluciones en relación con los hijos (véase además la sección relativa al artículo 24 infra, bajo el epígrafe "El interés superior del menor").

133. Además de las disposiciones legales mencionadas a continuación, los gobiernos también prestan asistencia a los centros privados de acogida a jóvenes y mujeres. El Programa Federal de Alojamiento de Urgencia, en particular, aporta fondos por medio de las Administraciones estatales para proporcionar alojamiento de urgencia a corto plazo a las familias que no pueden ocupar su vivienda habitual. El Programa de Asistencia de Viviendas Subvencionadas, financiado por la Administración Federal, proporciona asimismo una serie de alojamientos subvencionados y servicios conexos de apoyo para ayudar a los hombres, mujeres y jóvenes, y a las personas que están a su cargo, que se encuentran provisional o permanentemente sin hogar a raíz de dificultades graves y que necesitan esa ayuda para llevar una vida independiente dondequiera sea posible y adecuado. Estos programas son complementarios de otros programas de asistencia en materia de vivienda y alojamiento.

Territorio de la Capital de Australia

134. En el Territorio de la Capital de Australia coexisten dos regímenes de autos o mandamientos "de no hacer" (restraining orders). Las víctimas de

violencia doméstica que no estén legitimados según la Domestic Violence Act 1986 (Ley, de 1986, sobre Violencia Doméstica) pueden instar otros mandamientos en virtud de la Magistrates Court Act 1930 (Ley, de 1930, del Tribunal de Magistrados). Las observaciones siguientes se refieren a la Ley, de 1986, sobre Violencia Doméstica.

Legitimación

135. De conformidad con la Ley, de 1986, sobre Violencia Doméstica, el cónyuge, ex cónyuge o pareja de hecho de cualquiera de las partes, o un hijo, familiar o miembro del hogar distinto de un inquilino o huésped, está legitimado para instar auto de amparo (protection order) contra la violencia doméstica. La persona legitimada o un funcionario de policía puede instar que se dicte el auto o mandamiento en los casos en que el demandado haya cometido el delito de violencia doméstica o amenazado cometerlo.

Resoluciones judiciales

136. El tribunal puede dictar un auto o mandamiento conminando al demandado a que se abstenga de realizar el acto denunciado o cualquier acto que constituya delito de violencia doméstica. Se pueden imponer una o varias prohibiciones o condiciones específicas, en particular prohibir al demandado que entre en lugares determinados, que agreda, asedie, acose, amenace o intimide a la víctima, personalmente o por medio de otra persona, y que cause daños en el patrimonio de la víctima.

137. La consideración principal del tribunal al dictar su auto es proteger al peticionario o a cualquier menor contra la violencia o el acoso.

138. Se deja al arbitrio del tribunal que, al dictar su auto, recomiende que el demandado o el peticionario, o cualquier otra persona, reciba orientación psicológica.

139. De ser necesario para garantizar la seguridad del peticionario, se puede dictar un auto provisional, por un plazo máximo de 10 días, sin notificación al demandado. Los autos de amparo pueden permanecer vigentes por un plazo de hasta 12 meses.

Armas

140. El auto cancela automáticamente la licencia de armas del demandado a menos que, si se solicita al dictarse el auto, el tribunal resuelva otra cosa. El tribunal puede decretar el secuestro e incautación de cualquier arma peligrosa en posesión del demandado.

Incumplimiento del mandamiento judicial

141. El incumplimiento de un auto de amparo constituye un acto punible. El culpable podrá ser condenado a una multa de hasta 1.000 dólares o una pena de prisión de seis meses como máximo.

Reforma

142. La Comisión de Reforma del Derecho Local del Territorio de la Capital de Australia ha revisado la legislación en vigor en dicho Territorio con respecto a la violencia doméstica. Su informe fue sometido a la Asamblea Legislativa del Territorio el 14 de diciembre de 1995.

143. El informe versa sobre la respuesta de la jurisdicción penal ante la violencia doméstica en el Territorio, incluidas cuestiones como la detención, el régimen procesal, la reunión de estadísticas, la prisión provisional, los procedimientos de libertad provisional con fianza de los delincuentes violentos, la formación especializada para los implicados en la actuación judicial y el recurso a un programa de cambio de comportamiento como alternativa a la condena. La Comisión ha formulado 110 recomendaciones, centradas en la incriminación de la violencia doméstica y la imputación de la responsabilidad de la violencia al autor del hecho delictivo. Las recomendaciones de la Comisión prevén una respuesta integrada de todos los sectores del orden jurisdiccional penal ante la violencia doméstica.

Nueva Gales del Sur

144. En 1993 se aprobó la Crimes (Domestic Violence) Amendment Act (Ley por la que se modifica el tipo penal de violencia doméstica) para que la colectividad reconociera como delito penal la agresión doméstica y que la policía y los tribunales pudieran luchar con más eficacia contra esa lacra. Este instrumento legislativo amplía la protección ofrecida a las víctimas de la violencia doméstica y refleja la aversión de la colectividad a la violencia en el seno de la familia. Modifica el Título XV, sección A, de la Crimes Act 1900 (Ley Penal, de 1900) de Nueva Gales del Sur, que versa sobre la solicitud de amparo frente a la violencia prevista.

Ámbito de aplicación

145. La Ley Penal de 1900 es de aplicación general e incluye las relaciones domésticas. Por "relación doméstica" se entiende el cónyuge, ex cónyuge o pareja de hecho, un miembro del hogar que no sea un inquilino o huésped, un familiar o una persona que mantenga una relación personal íntima con el demandado.

146. Puede instar que se dicte auto de amparo la víctima mayor de 16 años o un funcionario de policía en nombre de la víctima. El funcionario de policía está obligado a formular una denuncia si la víctima es menor de 16 años o si, a su juicio, se ha cometido o va a cometerse un acto de violencia doméstica.

Criterios

147. El auto ampara a la persona que tiene motivos racionalmente bastantes para temer, y teme efectivamente, ser víctima de un delito de violencia personal cometido por otra persona o de un comportamiento de ésta equivalente a acoso, hostigamiento, intimidación o acecho.

Resoluciones judiciales

148. El tribunal puede dictar un auto imponiendo al demandado las prohibiciones o limitaciones de comportamiento que, en opinión del tribunal, sean necesarias o

convenientes. La prohibición de acechar o intimidar a la víctima es actualmente habitual en los autos de amparo, y esos actos constituyen también un delito separado punible con una pena máxima de dos años de prisión o multa de 5.000 dólares, o ambas cosas.

149. Se puede dictar el auto a petición de parte si el demandado ha sido notificado y no comparece en la vista. Surtirá plenos efectos una vez haya sido notificado al demandado.

150. Se puede dictar un auto provisional cuando sea "necesario o apropiado", el cual surtirá efecto hasta que se dicte el auto definitivo, con lo que se garantiza una protección ininterrumpida.

151. La Ley, de 1993, por la que se modifica el tipo penal de violencia doméstica prevé la posibilidad de que un funcionario de policía solicite telefónicamente a un juez habilitado que dicte un auto provisional fuera del horario normal de los tribunales. El auto permanece en vigor por el plazo especificado y, si no se especifica, durante seis meses.

Armas

152. De conformidad con la Firearms Act 1989 (Ley, de 1989, reguladora de la tenencia y uso de armas de fuego) de Nueva Gales del Sur, el auto judicial revoca, si es definitivo, o suspende, si es provisional, la licencia para la tenencia de armas de fuego. Por otra parte, el tribunal puede dictar un auto por el que se prohíba o restrinja la tenencia por el demandado de todas las armas de fuego, o de algunas que se especifiquen, y le exija que elimine las armas en su posesión y entregue la licencia o permiso de que sea titular.

153. El Comisario de Policía debe denegar la concesión del permiso o licencia de armas de fuego si, en los últimos diez años, se ha dictado contra el solicitante un auto de amparo, a menos que éste haya sido revocado.

Incumplimiento del mandamiento judicial

154. La inobservancia del auto de amparo es un delito punible con una pena máxima de 50 unidades de penalidad (actualmente 5.000 dólares) o dos años de prisión, o ambas cosas.

155. En caso de que el incumplimiento del auto suponga un acto violento, el autor deberá ser condenado a una pena de prisión, a menos que el tribunal resuelva otra cosa o el infractor sea menor de 18 años. Si se impone una pena de prisión, el tribunal debe tener cuenta la evaluación psiquiátrica o psicológica completa y el dictamen sobre el inculcado antes de imponer la condena. Si el tribunal resuelve no imponer pena de prisión, su decisión deberá ser motivada.

156. Después de la promulgación de la Bail (Domestic Violence) Amendment Act 1993 (Ley, de 1993, por la que se modifica la fianza en casos de violencia doméstica), en caso de contravención de un auto o mandamiento vigente mediante un acto de violencia o de comisión de un delito de violencia doméstica, la concesión de la libertad provisional con fianza no se presume.

Disposiciones adicionales

157. El funcionario de policía que solicite o se disponga a solicitar telefónicamente un auto provisional podrá ordenar al demandado que permanezca en el lugar del incidente, y si esa persona se niega, podrá proceder a retenerlo en ese lugar hasta que se dicte y notifique el auto.

Isla Norfolk

158. La Isla Norfolk promulgó su normativa legal sobre la violencia doméstica en febrero de 1995. Dicha normativa legal prevé una amplia variedad de autos de amparo y mandamientos "de no hacer" y se apoya en una infraestructura de organizaciones comunitarias.

Territorio del Norte

159. A raíz de una revisión de la aplicación de la Domestic Violence Act 1992 (Ley, de 1992, sobre Violencia Doméstica), varias modificaciones importantes entraron en vigor el 1º de mayo de 1995. Esas modificaciones amplían las categorías de personas legitimadas para instar mandamientos "de no hacer" en relación con actos de violencia doméstica.

Legitimación

160. Pueden instar un mandamiento "de no hacer" los funcionarios de policía o las personas que mantienen una relación doméstica con el demandado y contra las cuales es probable que se dirija el comportamiento incriminado.

161. Cualquier persona que mantiene o ha mantenido una relación doméstica con otra persona está legitimada para solicitar el amparo de un mandamiento "de no hacer". Por "relación doméstica" se entiende la mantenida por cualquier persona que tiene o ha tenido una relación de familia con la otra persona, incluido el cónyuge o la pareja de hecho con arreglo a la tradición aborígen. Abarca también todos los parientes hasta el tercer grado inclusive según la ley (padres e hijos no naturales), así como los parientes según la tradición aborígen o la práctica social contemporánea. La "relación doméstica" comprende asimismo cualquier persona que haya ejercido o haya estado sujeta a la guarda o tutela o la patria potestad de la otra persona, cualquier persona que resida o haya residido habitualmente con la otra persona o con un pariente de ésta, cualquier persona que tenga o haya tenido una relación familiar con un hijo de la otra persona y cualquier persona que mantenga o haya mantenido una relación con la otra persona, si es del sexo opuesto, aunque ambas vivan separadas.

Criterios

162. El tribunal debe llegar a la convicción, basada en la verosimilitud de los hechos, de que el demandado ha agredido o causado lesiones a la persona con la que mantiene una relación doméstica, ha causado daños en el patrimonio de esa persona o la ha amenazado con realizar tales actos, y de que, si no queda sujeto a medidas limitativas, probablemente reincidirá en ese comportamiento o cumplirá su amenaza. Otros motivos son que el demandado observe un comportamiento provocador respecto de la otra persona, en particular, aunque no exclusivamente, un comportamiento que pueda causar a la otra persona un temor fundado de ser víctima de violencia o acoso.

Resoluciones judiciales

163. El tribunal puede decretar las medidas limitativas que estime necesarias para impedir que el demandado actúe de la manera prevista, y en particular dictar resoluciones obligándolo a observar determinado comportamiento, como, por ejemplo, un auto por el que le ordena la devolución de bienes muebles o restringe su acceso al domicilio. El plazo de vigencia del auto es el especificado. Los funcionarios de policía pueden solicitar el auto por teléfono. El tribunal o el secretario judicial pueden dictar un mandamiento provisional a petición de parte.

Armas

164. La Firearms Act 1993 (Ley, de 1993, reguladora de la tenencia y uso de armas de fuego) del Territorio del Norte, que entró en vigor en marzo de 1993, dispone que el tribunal que ordene al titular de un certificado de registro, licencia o permiso de armas que se abstenga de alterar el orden público conforme a la Ley, de 1992, sobre Violencia Doméstica deberá revocar el certificado, licencia o permiso, se haya utilizado o no el arma de fuego en el incidente, a menos que resuelva otra cosa.

Incumplimiento del mandamiento judicial

165. El incumplimiento del auto o mandamiento judicial constituye una infracción penal. La pena mínima de prisión es de siete días, y la máxima de seis meses.

Queensland

166. La Domestic Violence (Family Protection) Act 1989 (Ley, de 1989, sobre Violencia Doméstica y Protección a la Familia) de Queensland se aplica a la protección de los cónyuges, parientes y allegados del peticionario. Para la protección de cualquier otra persona víctima de violencia o acoso debe invocarse la Peace and Good Behaviour Act 1982 (Ley, de 1982, sobre el Orden Público y las Buenas Costumbres).

Legitimación

167. Solo están legitimados para instar auto de amparo por violencia doméstica de conformidad con la Ley, de 1989, sobre Violencia Doméstica y Protección a la Familia el cónyuge, ex cónyuge o pareja de hecho, una persona autorizada por escrito por el cónyuge para comparecer en su nombre o un funcionario de policía. El término "cónyuge" comprende también los padres biológicos del menor, hayan o no vivido juntos. El auto puede amparar a "parientes" y "allegados" del peticionario, términos suficientemente amplios para incluir, por ejemplo, el concepto más amplio de "pariente" en la cultura aborigen.

168. La policía está habilitada y, en algunos casos, obligada a instar autos de amparo de las víctimas de la violencia doméstica.

Criterios

169. El tribunal debe llegar al convencimiento de que el demandado ha cometido o amenazado cometer un acto de violencia doméstica contra el peticionario y de

que es probable que reincida en esa conducta o ejecute la amenaza. Se entiende que el cónyuge que induce a otra persona a cometer un acto que, de ser cometido por el cónyuge, se calificaría de violencia doméstica es autor del acto. La "violencia doméstica" comprende las lesiones intencionales, los daños en cosa ajena, la intimidación o el acoso, el ultraje al pudor sin que medie consentimiento o la amenaza de cometer tales actos.

Resoluciones judiciales

170. El tribunal puede imponer las condiciones que estime necesarias atendidas las circunstancias del caso y sean convenientes en interés del peticionario, el pariente o allegado designado y el demandado. Al imponer esas condiciones, la consideración primordial del tribunal debe ser la necesidad de proteger al peticionario, sus parientes o allegados, y el bienestar de los hijos del peticionario, si los hubiere.

171. El tribunal puede dictar un auto provisional fundándose exclusivamente en los hechos que estime suficientes y apropiados, habida cuenta de su carácter temporal.

172. Otros autos o mandamientos podrán tener una vigencia de dos años, o más si median circunstancias especiales.

173. Los funcionarios de policía podrán solicitar que se dicte auto provisional por teléfono, facsímil, radio u otros medios.

Armas

174. Los autos dictados en casos de violencia doméstica prohíben automáticamente la tenencia de armas por el demandado, salvo que el tribunal decida otra cosa. El tribunal debe revocar todas las licencias de armas extendidas a nombre del demandado, o en relación con él, durante la vigencia del auto.

Incumplimiento del mandamiento judicial

175. El que a sabiendas infringe un auto de amparo contra la violencia doméstica comete un delito y puede ser castigado a una pena máxima de 40 unidades de penalidad o un año de prisión.

176. La policía está habilitada para practicar la detención, en caso de incumplimiento del auto, sin advertir al demandado que está cometiendo una infracción.

Disposiciones adicionales

177. La normativa de Queensland en materia de funciones y atribuciones de la policía es muy amplia. El funcionario de policía que tiene motivos racionalmente bastantes para sospechar que se ha cometido un acto de violencia doméstica y que hay peligro de daño corporal o patrimonial puede detener al demandado y entrar en el domicilio para asegurarse de que no existe peligro inminente de violencia doméstica.

Otras indicaciones

178. De conformidad con un proyecto emprendido por el Consejo de Violencia Doméstica y a raíz de las encuestas hechas, se están estudiando las respuestas legislativas apropiadas ante la violencia no conyugal. En la actualidad, la Ley, de 1989, sobre Violencia Doméstica y Protección a la Familia solo se aplica a las parejas heterosexuales casadas y de hecho (vivan juntas o separadas) y a los padres biológicos de un menor o menores.

Australia del Sur

179. En Australia del Sur son dos los instrumentos legales en virtud de los cuales el órgano jurisdiccional puede dictar mandamientos "de no hacer": la Domestic Violence Act 1994 (Ley, de 1994, sobre Violencia Doméstica) y el instrumento modificativo de la Summary Procedure Act 1923 (Ley, de 1923, de Procedimiento Abreviado), que es de aplicación general.

Ámbito de aplicación

180. La Ley, de 1994, sobre Violencia Doméstica se aplica a los "miembros de la familia" que, con respecto al demandado, son:

- El cónyuge actual o anterior, o la pareja de hecho;
- Un hijo del que tiene la custodia el cónyuge o ex cónyuge; o
- Un hijo que ordinaria o habitualmente reside con el cónyuge o ex cónyuge.

Criterios

181. Cabe dictar auto de amparo con arreglo a la Ley, de 1994, sobre Violencia Doméstica por las siguientes causas:

- Cuando haya motivos racionalmente bastantes para pensar que el demandado, de no quedar sujeto a medidas limitativas, puede cometer actos de violencia doméstica; y
- Cuando el tribunal haya llegado al convencimiento de que procede, dadas las circunstancias, dictar el auto.

182. Comete violencia doméstica el que realiza una diversidad de actos, que van de causar lesiones a un miembro de la familia a someter una o varias veces a vigilancia a un miembro de la familia de modo que éste pueda sentir fundadamente inquietud o temor. Según la Ley, de 1923, de Procedimiento Abreviado hay fundamento para dictar mandamiento "de no hacer" si una persona teme fundadamente que el demandado, de no quedar sujeto a medidas limitativas, puede causar lesiones corporales o daños patrimoniales o comportarse de manera intimidatoria u ofensiva.

Resoluciones judiciales

183. La necesidad de garantizar la protección de los miembros de la familia contra la violencia doméstica es la consideración primordial que debe tener presente al tribunal al dictar auto de amparo.

184. El auto o mandamiento de amparo no tiene un plazo de vigencia determinado.

185. Puede dictarse un auto provisional en ausencia del demandado y los funcionarios de policía pueden formular la solicitud por teléfono.

Armas

186. El tribunal, al dictar un auto definitivo imponiendo medidas limitativas, debe ordenar la incautación de las armas de fuego en posesión del demandado y cancelar la licencia o permiso de armas extendido a favor de éste.

Incumplimiento del mandamiento judicial

187. El que contraviniera a lo dispuesto en el auto o mandamiento judicial incurre en un delito y puede ser condenado a una pena de dos años de prisión como máximo o multa de hasta 8.000 dólares.

Disposiciones adicionales

188. La Ley, de 1994, sobre Violencia Doméstica establece que, en lo posible, el tribunal tramitará como cuestión prioritaria las solicitudes de que dicte mandamiento "de no hacer".

Tasmania

Legitimación

189. La normativa legal de Tasmania es de aplicación general y todos pueden promover un procedimiento de amparo.

190. La Justices Act 1959 (Ley, de 1959, de Administración de Justicia) de Tasmania fue modificada en 1985 para regular la cuestión de las medidas limitativas de ámbito estatal, que han sido concebidas como un complemento del derecho penal vigente para proporcionar amparo inmediato a las víctimas de violencia doméstica. La Ley ha sido modificada varias veces desde 1985 para mejorar la protección ofrecida por las medidas limitativas, aclarar y reforzar las atribuciones de la policía para intervenir en situaciones de violencia doméstica y simplificar el procedimiento de solicitud.

191. La Ley, de 1959, de Administración de Justicia también comprende disposiciones sobre la revocación de las licencias de armas en los procedimientos de amparo contra la violencia y la prohibición impuesta a las personas a que se imponen medidas limitativas que obtengan licencia de armas.

VictoriaLegitimación

192. En caso de violencia familiar se puede, en virtud de la Crimes (Family Violence) Act 1987 (Ley, de 1987, por la que se regula el tipo penal de violencia familiar), instar al tribunal a que dicte un auto o mandamiento de intervención (intervention order) para dar amparo a los "miembros de la familia", que son, en particular, el cónyuge, el ex cónyuge o la pareja de hecho del demandado, el hijo que vive con el demandado o del que éste tiene la custodia, cualquier persona que está o ha estado unida al demandado por lazos de parentesco, incluidos los parientes directos de sobrinos, sobrinas y primos, y cualquier miembro del hogar del demandado. La Ley actualmente se aplica a las personas que han mantenido una relación personal íntima y viven separadas.

Criterios

193. Los autos o mandamientos de intervención (intervention orders) son un complemento de los medios de defensa (remedies) que ofrece la legislación penal en vigor, pero no los sustituyen. El mandamiento de intervención es un remedio civil de naturaleza análoga al mandamiento preventivo "de hacer" o "de no hacer" (injunction) destinado a proporcionar protección continua a la víctima de violencia en el hogar. El tribunal puede dictar auto de intervención si le consta que una persona:

- Ha agredido a un miembro de la familia o ha causado daños en sus bienes y es probable que vuelva a hacerlo;
- Ha amenazado con agredir a un miembro de la familia o causar daños en sus bienes y es probable que vuelva a hacerlo; o
- Ha acosado u hostigado a un miembro de la familia y es probable que vuelva a hacerlo.

194. La Crimes (Amendment) Act 1994 (Ley Penal Enmendada, de 1994) introdujo un nuevo tipo penal: el acecho (stalking). La incriminación de este acto ofrece protección a las personas que han sido seguidas, vigiladas o abordadas, o a las que se han enviado artículos ofensivos, con la intención por parte del ofensor de causar a la víctima daño físico o moral o de infundirle inquietud o temor por su seguridad o la de otra persona, y producir efectivamente ese resultado. El tribunal es competente, en determinados supuestos, para dictar un mandamiento de intervención destinado a impedir la continuación o repetición del acecho.

Resoluciones judiciales

195. El tribunal puede dictar un auto imponiendo al demandado las medidas limitativas que, a su juicio, sean necesarias o convenientes en las circunstancias del caso. Puede imponer prohibiciones específicas, entre otras ordenar que el demandado reciba orientación psicológica o requerirle a que abandone determinado lugar.

196. La consideración primordial del tribunal al dictar el auto debe ser la necesidad de garantizar la protección del miembro de la familia ofendido contra la violencia.

197. El auto sigue en vigor durante el plazo especificado y, de resultas de las modificaciones de 1995, no hay límite de duración de los autos dictados.

198. Puede dictarse un auto provisional en ausencia del demandado hasta el vencimiento del plazo fijado o hasta que el tribunal resuelva otra cosa.

199. Los funcionarios de policía pueden instar que se dicte auto provisional por teléfono o facsímil.

Armas

200. El tribunal puede revocar cualquier licencia o permiso de tenencia de armas, inhabilitar al demandado para obtener tal licencia o permiso durante un plazo máximo de 12 meses y ordenar el decomiso o la eliminación de las armas de fuego en posesión del demandado. La policía también está facultada para incautarse de cualquier arma de fuego que sepa en posesión del demandado.

Incumplimiento del mandamiento judicial

201. Contravenir a lo dispuesto en el auto o mandamiento judicial es una infracción penal. Las enmiendas de 1995 agravaron las penas impuestas hasta un máximo de 240 unidades de penalidad o dos años de prisión como máximo. La pena máxima es de cinco años si se trata de la segunda infracción o subsiguientes.

Australia Occidental

Legitimación

202. La Justices Act 1902 (Ley, de 1902, de Administración de Justicia) establece en general que se dé amparo a cualquier persona que se sienta amenazada. Pueden formular la denuncia los funcionarios de policía o el ofendido, en su persona o sus bienes, por el acto denunciado.

Criterios

203. El tribunal debe tener la certeza de que el demandado ha causado o amenazado causar lesiones o daños en cosa ajena y que es probable que vuelva a causar tales lesiones o daños o ejecute su amenaza, o de que el demandado ha observado una conducta provocadora u ofensiva que puede alterar el orden público y es probable que vuelva a comportarse de la misma manera.

Resoluciones judiciales

204. El tribunal puede dictar auto o mandamiento imponiendo al demandado las medidas limitativas que sean necesarias o convenientes para impedirle obrar de la manera prevista. La resolución judicial permanece en vigor durante un año o el plazo que en ella se indique, o hasta que sea revocada. Puede dictarse un mandamiento provisional en ausencia del demandado, después de lo cual éste debe ser citado a comparecer.

205. No existen actualmente disposiciones sobre mandamientos dictados telefónicamente.

Armas

206. Las disposiciones de la Ley relativas a las medidas limitativas no regulan expresamente la cuestión de las armas de fuego u otro tipo.

Incumplimiento del mandamiento judicial

207. El que contraviene a lo dispuesto en el mandamiento judicial, o lo incumple, incurre en infracción penal. En virtud de las enmiendas que entraron en vigor el 20 de enero de 1995, las penas aumentaron hasta 18 meses de prisión o multa de 6.000 dólares, como máximo.

208. En virtud de la reforma del Código Penal, en 1994, se creó el nuevo tipo penal del acecho, castigado con la pena máxima de tres años de prisión o de ocho años en caso del tipo agravado, consistente en cometer el delito con armas o en violación de un mandamiento "de no hacer".

Tendencias futuras

209. Como consecuencia de la reciente reforma de la Ley, de 1975, reguladora del Derecho de Familia, dirigida a proporcionar mayor protección a las mujeres atribuyendo a los magistrados (magistrates, o jueces legos) competencia para modificar o anular las resoluciones del tribunal de familia en caso de haber antecedentes de violencia doméstica, el Gobierno de Australia Occidental presentará en 1996 un proyecto de normativa legal complementaria.

210. En julio de 1995 concluyó la revisión general de los autos o mandamientos "de no hacer". El estudio recomendó una serie de modificaciones procesales y enmiendas legislativas destinadas a mejorar la eficacia de las medidas limitativas para dar protección a las víctimas de la violencia doméstica. Entre ellas figuran una nueva categoría de resolución judicial (el auto de amparo (protection order)) sobre la violencia y la incautación de las armas de fuego al dictarse dicha resolución. Está previsto presentar esas enmiendas al Parlamento en 1996.

211. Como parte de la revisión se celebró una reunión de mujeres aborígenes de todo el Estado. Lo primero y fundamental era la protección de la víctima, pero se propugnó con fuerza la convivencia familiar como medida resocializadora. Se insistió mucho en que la prisión del autor de los malos tratos no debía considerarse una solución, dado que la población reclusa contaba desde hacía mucho tiempo con una representación aborígen excesiva y que existía el deseo expreso de mantener unidas a las familias.

212. El Gobierno de Australia Occidental emprendió en noviembre de 1995 la ejecución del Plan de Acción sobre la Familia y la Violencia Doméstica, que pone de relieve la resolución del Gobierno:

- De mantener y mejorar los servicios y el apoyo prestado a las víctimas;
- De ayudar a los autores de actos delictivos a afrontar constructivamente su conducta con objeto de lograr cambios positivos;

- De proporcionar servicios y apoyo a todas las partes implicadas a fin de reducir la repetición de actos de violencia familiar y doméstica; y
- De conseguir el apoyo de los miembros de la comunidad para difundir el mensaje de que la violencia es inaceptable.

El informe "Half Way to Equal"

213. El 25 de mayo de 1989, la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Cámara de Representantes, a petición del Fiscal General, emprendió un estudio sobre la igualdad de oportunidades y derechos de la mujer en Australia.

214. El informe de la Comisión, titulado "Half Way to Equal" ("A mitad de camino de la igualdad"), fue publicado el 30 de abril de 1992. La Comisión hacía numerosas recomendaciones, en particular sugerencias para reforzar la Ley, de 1984, sobre Discriminación Sexual y mejorar el funcionamiento del Comisionado de Discriminación Sexual y la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades.

215. En diciembre de 1992 se presentó en el Parlamento Federal una respuesta al informe "Half Way to Equal". La Ley, de 1984, sobre Discriminación Sexual, y sus enmiendas, se analizan más en detalle en relación con el artículo 26, infra.

La igualdad ante la ley

216. En febrero de 1993, el entonces Fiscal General pidió a la Comisión Australiana de Reforma Legislativa que informase sobre los medios de garantizar a las mujeres la igualdad ante la ley. En julio del mismo año se publicó un documento de síntesis titulado "Equality Before the Law" ("Igualdad ante la ley"), y el informe provisional de la Comisión, titulado "Equality Before the Law - Women's Access to the Legal System" ("Igualdad ante la ley: el acceso de la mujer al sistema jurídico"), fue publicado el 3 de marzo de 1994.

217. En julio de 1994, la Comisión Australiana de Reforma Legislativa presentó la primera parte de su informe definitivo, "Equality Before the Law: Justice for Women" ("Igualdad ante la ley: justicia para la mujer") (informe n° 69, parte I). En esta parte se proponen enmiendas al ordenamiento jurídico vigente y se recomienda reforzar la Ley Federal, de 1984, sobre Discriminación Sexual y mejorar el acceso de la mujer a la jurisdicción. La segunda y última parte del informe fue publicada por el Fiscal General en enero de 1995. En ella se examina el significado de la igualdad y los prejuicios sexistas en la ley, se recomienda una Ley sobre Igualdad para dar a los parlamentos, gobiernos y tribunales orientación sobre lo que la colectividad espera de la ley y se hacen recomendaciones para promover los medios para que las necesidades y experiencias de las mujeres puedan ser tenidas en cuenta por los tribunales judiciales (courts) y los tribunales administrativos o cuasijudiciales (tribunals). La educación del personal juzgador o jurisdisciente en materia de cuestiones relativas a las desigualdades entre los sexos se analiza en la sección relativa al artículo 14, infra).

218. En los últimos años ha habido una importante descentralización del sistema de relaciones laborales en Australia que ha tomado un giro favorable a la

negociación colectiva en el ámbito de la empresa o el lugar de trabajo. En 1993, el Gobierno Federal modificó la Ley, de 1988, de Relaciones Laborales, a fin de crear en el sistema de negociación federal salvaguardias que garantizaran a todos los trabajadores, incluidas las mujeres, la accesibilidad e imparcialidad de la negociación colectiva. Entre esas salvaguardias figura la reglamentación jurídica de las condiciones mínimas de trabajo, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico interno diversos convenios de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las condiciones de trabajo relativas al salario mínimo, la igualdad de remuneración por un trabajo igual, la terminación del contrato de trabajo (incluida la protección contra el despido improcedente) y 12 meses de licencia por maternidad sin sueldo.

219. Al existir esas medidas de protección, la negociación colectiva en el ámbito de la empresa potencialmente ofrece a las mujeres varias nuevas oportunidades. La experiencia ha demostrado hasta ahora que unas disposiciones más flexibles en materia de vacaciones y horario de trabajo son un elemento cada vez más importante de los convenios para ayudar a los trabajadores con responsabilidades familiares.

220. Funcionan centros de la mujer trabajadora en Nueva Gales del Sur, el Territorio del Norte, Queensland, Australia del Sur y Tasmania. Se han asignado créditos suplementarios al Centro de la Mujer Trabajadora de Australia del Sur para ayudar a la contratación de un funcionario de enlace aborígen y crear un número telefónico gratuito.

221. Los centros proporcionan información y consejo confidencial gratuitos a las mujeres, en especial a las mujeres de familias de habla no inglesa, las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, las mujeres de zonas rurales y aisladas y las mujeres no sindicadas.

Otras obligaciones dimanantes de tratados

222. Australia también es parte en diversos instrumentos internacionales sobre, entre otras cosas, la discriminación contra la mujer, y en particular:

- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;
- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
- La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer;
- La Convención sobre los Derechos del Niño; y
- Varios convenios de la OIT, en especial el Convenio (Nº 111) sobre la discriminación (empleo y ocupación) y el Convenio (Nº 156) sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.

223. Australia ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1983 después de un debate exhaustivo con los gobiernos estatales y territoriales en el foro de la Reunión de Ministerial sobre Derechos Humanos. Australia ha formulado dos reservas a la Convención: una sobre el trabajo de las mujeres en unidades de combate o análogas de las Fuerzas

Armadas (véase supra, bajo el epígrafe "La mujer y las Fuerzas Armadas") y otra sobre la disposición relativa a la licencia de maternidad con sueldo pagado.

224. El Convenio N° 111 de la Organización del Trabajo ha sido incluido en anexo de la Ley, de 1986, de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. Por consiguiente, es uno de los instrumentos internacionales respecto de los cuales es competente la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. La Ley Federal, de 1988, de Relaciones Laborales incorpora en parte el Convenio. La recomendación de la OIT que acompaña el Convenio N° 111 y el Reglamento N° 111 figura en el anexo 9 de dicha Ley.

225. En marzo de 1990, Australia ratificó el Convenio (N° 156) sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, de la Organización Internacional del Trabajo, el cual entró en vigor en marzo de 1991. Al haber ratificado el Convenio, Australia se obliga a incluir entre los objetivos de la política nacional facilitar a las personas con responsabilidades familiares que realicen o deseen realizar una actividad laboral el ejercicio de su derecho a hacerlo sin estar sujetos a discriminación y, en lo posible, sin que sus obligaciones laborales y familiares entren en conflicto.

226. Antes de la ratificación, Australia había adoptado ya una serie de medidas que estaban en conformidad con los principios en que se inspira el Convenio N° 156 de la OIT. En 1992 se modificó la Ley, de 1984, sobre Discriminación Sexual para proscribir el despido del trabajo por razón de las responsabilidades familiares del trabajador. Para facilitar el acceso público a ese documento, el Convenio N° 156 también figura en anexo de la Ley, de 1988, de Relaciones Laborales.

Artículo 4

227. Desde la ratificación del Pacto, no han surgido en Australia situaciones excepcionales de la índole de las mencionadas en el artículo 4. Por consiguiente, no ha sido necesario estudiar la suspensión de la aplicación de las disposiciones del Pacto. Ha habido catástrofes naturales (especialmente inundaciones) que han sido objeto de declaraciones, pero éstas tienen por objeto facilitar la prestación de asistencia, incluida asistencia financiera, con miras a paliar los efectos del suceso natural.

228. Australia no dispone de una normativa legal general que autorice al Gobierno Federal o a los gobiernos estatales a adoptar medidas extremas, como reemplazar el poder civil, en situaciones excepcionales de origen natural o de otro tipo. Existen, sin embargo, una serie de disposiciones constitucionales e instrumentos legales de ámbito federal y estatal que permiten adoptar medidas de urgencia para controlar los daños a la población. Esta normativa se describe a continuación.

El marco constitucional

229. Tres disposiciones de la Constitución australiana establecen el marco general de la aprobación de leyes y la adopción de medidas por el Gobierno Federal en situaciones de excepción. La primera es el apartado vi) del artículo 51, que dispone que el Parlamento Federal tiene atribuidas la competencia

legislativa en materia de defensa del Commonwealth y los Estados y la dirección de las fuerzas armadas. La parte pertinente de esa disposición dice así:

"El Parlamento tiene, con sujeción a lo dispuesto en la presente Constitución, la potestad de dictar leyes para la paz, el orden y el buen gobierno del Commonwealth sobre las materias siguientes:

...

vi) La defensa naval y militar del Commonwealth y los distintos Estados, y la dirección de las fuerzas destinadas a defender y hacer cumplir las leyes del Commonwealth;"

230. Es competencia exclusiva del Gobierno Federal establecer la composición de las fuerzas armadas. El artículo 114 de la Constitución dispone:

"Ningún Estado podrá, sin el consentimiento del Parlamento, reclutar o mantener una fuerza naval o militar".

231. No se ha dado nunca tal consentimiento. En tiempo de conflicto armado, la defensa nacional ha correspondido siempre al Gobierno Federal, por medio de las Fuerzas Armadas australianas. En otras situaciones de excepción, como las catástrofes naturales, hay una normativa estatal que otorga las facultades excepcionales necesarias, como se expone más adelante.

232. La segunda disposición constitucional pertinente es el artículo 61, en virtud del cual se atribuye al poder ejecutivo la potestad de velar por el cumplimiento y defensa de todas las leyes federales, incluidas las relacionadas con la defensa nacional. Dice así:

"El poder ejecutivo del Commonwealth recae en la Reina, es ejercido por el Gobernador General como representante de la Reina y se extiende al cumplimiento y defensa de la presente Constitución y las leyes del Commonwealth."

233. Por último, el Gobierno Federal tiene encomendada la protección de cada Estado y conferida competencia condicional en caso de desórdenes públicos de conformidad con el artículo 119 de la Constitución:

"La Federación protegerá a cada Estado contra una invasión y, a petición del poder ejecutivo del Estado, contra disturbios interiores."

234. Estas disposiciones facultan al Gobierno Federal para hacer frente a situaciones excepcionales que afecten sus propias esferas de competencia, incluida la defensa de las leyes federales, así como para mantener y dirigir fuerzas armadas para la defensa de Australia y de cada uno de sus Estados miembros.

Tipos de situación excepcional

235. En el examen de la legislación federal y estatal que figura a continuación, la normativa legal y competencial pertinente se presenta ordenada según el tipo de situación excepcional de que se trata, es decir, estado de guerra (wartime), desórdenes públicos (civil disorder), paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad (strikes in essential services)

y catástrofes naturales (natural disasters). Se estudia primero la legislación federal seguida, en su caso, de las leyes estatales.

El estado de guerra

236. Como se ha dicho antes, el derecho a reclutar o mantener una fuerza naval o militar para utilizarla en caso de guerra (o amenaza de guerra o en el período subsiguiente a una guerra) es prerrogativa del Gobierno Federal. En la historia de Australia, las facultades constitucionales para dictar leyes para la defensa del país han sido utilizadas ampliamente.

237. No obstante, es importante señalar que el Tribunal Supremo de Australia (High Court of Australia) ha dejado bien sentado que, incluso en tiempo de guerra, esta disposición no faculta al Gobierno Federal para promulgar leyes contrarias a las demás disposiciones de la Constitución. Esto significa, por ejemplo, que la normativa legal relativa a la defensa no puede invalidar el artículo 116 que prohíbe al Gobierno Federal impedir o coartar la libertad de religión. De la misma manera, cualquier disposición legal que restrinja los derechos civiles está prohibida a menos que esa normativa legal sea verdaderamente secundaria o necesaria para la conducción de la guerra.

238. No se han adoptado disposiciones legales basándose en la segunda frase del apartado vi) del artículo 51, que permite utilizar las Fuerzas Armadas para defender y hacer cumplir las leyes del Commonwealth.

239. El Gobierno de Australia opina que cualquier disposición legal que contraviniese a lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, especialmente en su artículo 4, sería declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Australia.

Los desórdenes públicos

240. La Defence Act 1903 (Ley de Defensa, de 1903) enuncia los procedimientos para autorizar el recurso a las Fuerzas Armadas en caso de petición por un Estado de protección contra desórdenes públicos de conformidad con el artículo 119 de la Constitución. La disposición pertinente dice:

"Si el Gobernador de un Estado declara que existe una alteración grave del orden público interior de ese Estado, el Gobernador General, a petición del poder ejecutivo del Estado, podrá, mediante un bando, declarar que se ha alterado gravemente el orden público interior del Estado y hacer intervenir a las Fuerzas Permanentes (distintas de las Fuerzas de Reserva) y, en caso de que su número sea insuficiente, también a las Fuerzas de Reserva y las Milicias Ciudadanas que sean necesarias para la protección de ese Estado, y los servicios de las Fuerzas que de ese modo intervengan podrán utilizarse para proteger al Estado contra disturbios interiores:

A condición en cualquier caso de que las Fuerzas de Reserva o las Milicias Ciudadanas no sean movilizadas ni utilizadas en relación con un conflicto laboral."

241. Esta disposición es completada por los reglamentos del Ejército de Tierra y la Fuerza Aérea de Australia. No obstante la citada disposición, ningún Estado ha solicitado nunca la intervención de las Fuerzas Armadas.

242. Como se ha indicado antes, la utilización de las Fuerzas Armadas para la protección de los intereses del Commonwealth cuando los medios de que dispone el poder civil son insuficientes también es constitucional. La movilización de las Fuerzas Armadas por el Gobernador General en una situación de este género no está sujeta a ningún requisito legal. Sin embargo, según el common law la movilización puede ser decretada por el Gobernador General a instancias de un ministro si las fuerzas de seguridad no pueden resolver la situación y están en juego intereses federales. Solo ha habido dos casos de movilización para la protección de los intereses del Commonwealth: el primero en febrero de 1978, para proteger una Reunión de Jefes de Gobierno del Commonwealth, y la segunda en Papua Nueva Guinea, antes de la independencia, para proteger a las personas y los bienes frente a una asonada.

243. El recurso a las Fuerzas Armadas en ayuda de las autoridades civiles solo está justificada en las circunstancias más excepcionales y debe efectuarse de conformidad con el principio básico de la supremacía del poder civil. Las Fuerzas Armadas intervienen solo para ayudar a las Fuerzas de Seguridad, dependientes del poder civil, a restablecer y mantener el orden público y proteger a las personas y los bienes. Los miembros de las Fuerzas Armadas solo ejercen potestades civiles ordinarias, es decir, inferiores a las de los miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Territorio del Norte

244. El Código Penal del Territorio del Norte regula los delitos contra el orden público, como sedición, terrorismo, delitos contra los poderes legislativo y ejecutivo y reuniones ilícitas y alteraciones del orden público. Es delito promover o realizar actividades sediciosas, así como escribir, imprimir, pronunciar o publicar expresiones sediciosas. También es delictiva la pertenencia a una organización ilícita. Por "organización ilícita" se entiende una organización que emplea o amenaza con emplear la violencia ilícita en el Territorio, o preconiza su empleo, para alcanzar sus fines.

245. En el Territorio del Norte es delito impedir o coartar el libre ejercicio por un ministro de la Corona de las facultades de su cargo. Es delito asimismo influir en un miembro de la Asamblea Legislativa empleando fuerza, engaño, amenaza o intimidación, o corromper a esa persona mediante soborno. El Código Penal castiga como delito la asistencia a una reunión o manifestación ilícita o la participación en un motín o asonada. El Código Penal especifica también que los funcionarios de policía tienen la obligación de disolver a las personas "reunidas tumultuariamente". Es reo de un delito el que no se disuelva a requerimiento de la policía.

Queensland

246. En Queensland, el Servicio de Protección Civil del Estado está encargado de la coordinación de las actividades voluntarias de socorro en caso de catástrofe y de la educación de la población para hacer frente a situaciones catastróficas. No obstante, por lo que respecta a los desórdenes públicos, la State Counter Disaster Organisation Act 1975 (Ley, de 1975, sobre la Organización de Prevención de Catástrofes) prohíbe expresamente al Servicio de Protección Civil del Estado:

- Combatir contra el enemigo; y

- Sofocar un motín u otra alteración del orden público.

Victoria

247. La Public Safety Preservation Act 1958 (Ley, de 1958, de Protección de la Seguridad Ciudadana) de Victoria establece que el Gobernador en Consejo declarará el estado de emergencia cuando se cometa o se amenace cometer un acto que ponga o pueda poner en peligro la seguridad colectiva o el orden público. Se convocará el Parlamento y ambas cámaras resolverán si debe mantenerse el estado de emergencia proclamado por el Gobernador en Consejo. La Summary Offences Act 1966 (Ley, de 1966, sobre Faltas y Delitos Menos Graves) prohíbe el comportamiento alborotador, indecente u ofensivo y el empleo de expresiones irreverentes, indecentes u obscenas en un sitio público o en sus cercanías. La Crimes Act 1958 (Ley Penal, de 1958) castiga el delito de traición.

La paralización de servicios públicos esenciales

248. La Federal Crimes Act 1914 (Ley Penal Federal, de 1914) incrimina la conducta de quien interviene en una huelga o cierre patronal, o lo sostiene, o quien provoca, induce o incita a otro a intervenir en una huelga o cierre patronal, o a sostenerlo, o coopera con él a tal efecto, si el Gobernador General ha declarado la existencia de una situación de agitación laboral grave que perjudica o amenaza con perjudicar el tráfico o el comercio con otros países o entre los Estados. La Ley incrimina también los actos de obstrucción o entorpecimiento de la prestación de los servicios públicos proporcionados por la Administración Federal.

249. Varios Estados disponen de una normativa legal para hacer frente a la paralización de los servicios esenciales, por ejemplo, el suministro eléctrico, el abastecimiento de agua o las prisiones. Esa normativa suele atribuir a un ministro del gobierno o un funcionario de la Administración determinado competencia para dictar instrucciones encaminadas a facilitar la reanudación del servicio. Esas competencias por lo general son estrictamente limitadas en cuanto a su alcance y duración.

Nueva Gales del Sur

250. La Essential Services Act 1988 (Ley, de 1988, de Servicios Esenciales) de Nueva Gales del Sur regula la adopción de medidas y procedimientos de urgencia en situaciones de perturbación del funcionamiento de los servicios esenciales. Las características principales de la Ley son:

- La proclamación por el Gobernador de un bando o decreto declarando el estado de emergencia con respecto a la perturbación de la prestación de un servicio esencial;
- La adopción de disposiciones o la expedición de instrucciones por el ministro competente por las que se invocan facultades excepcionales para controlar, dirigir, restringir o prohibir la prestación o suministro de un servicio esencial;
- La pronta remisión del conflicto laboral relacionado con un servicio esencial a la Comisión de Asuntos Laborales de Nueva Gales del Sur;

- La adopción de diversas sanciones para garantizar el cumplimiento de las medidas excepcionales que se apliquen.

251. La Emergency and Resource Management Act 1989 (Ley, de 1989, sobre Situaciones Excepcionales y Gestión de Recursos) del Estado de Nueva Gales del Sur autoriza a declarar el estado de emergencia cuando un evento real o inminente, como un incendio, una inundación o un terremoto, pone en peligro la seguridad o la salud o destruye bienes y requiere una respuesta importante y coordinada. Debe especificarse el plazo de vigencia de las declaraciones, que está sujeto a los límites fijados en la Ley. Las autoridades pueden incautarse de bienes y exigir a las personas que abandonen determinados locales o que salgan o permanezcan fuera de la zona en general.

Territorio del Norte

252. La Essential Goods and Services Act 1981 (Ley, de 1981, de Bienes y Servicios Esenciales) es un instrumento legislativo destinado a regular y administrar determinados bienes o servicios en períodos de escasez. De conformidad con la Ley, el jefe del gobierno, mediante aviso publicado en el Boletín Oficial, puede declarar que existe penuria de determinados bienes o servicios. Mientras la declaración está en vigor, el ministro encargado de aplicar la Ley puede adoptar las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de los bienes o servicios y su uso de la manera que, a su juicio, mejor sirva los intereses de la colectividad.

253. La normativa legal aplicable a los servicios esenciales se analiza más en detalle en las secciones relativas a los artículos 8 y 22, infra.

Queensland

254. Ya no existe en Queensland ningún instrumento legislativo que verse directamente sobre la paralización de servicios esenciales. La normativa legal promulgada en Queensland (la Electricity (Continuity of Supply) Act 1985 (Ley, de 1985, sobre Continuidad del Suministro Eléctrico)), a raíz de una huelga de los trabajadores de las compañías eléctricas en la región sudoriental del Estado, fue derogada con efecto a partir del 13 de junio de 1990.

255. En Queensland, el Servicio de Protección Civil del Estado tiene prohibido poner término a una huelga o cierre patronal en virtud de la Ley, de 1975, sobre la Organización de Prevención de Catástrofes.

256. En cambio, las State Transport Acts 1938-1981 (Leyes de Transportes, 1938-1981) confieren al gobierno facultades excepcionales muy generales que a veces han sido utilizadas para declarar el estado de emergencia en caso de huelga en una empresa de suministro de un servicio esencial. Estas disposiciones no han sido aplicadas en el período a que se refiere el presente informe.

Australia del Sur

257. La Essential Services Act 1981 (Ley, de 1981, de Servicios Esenciales) de Australia del Sur dispone que el Gobernador puede, mediante un bando, declarar el estado de emergencia durante un período que no excederá de siete días. Durante el período excepcional, el ministro puede dar instrucciones en relación con el uso de los servicios declarados esenciales.

Victoria

258. En Victoria, la Essential Services Act 1958 (Ley, de 1958, de Servicios Esenciales) establece que el Gobernador en Consejo podrá declarar el estado de emergencia en relación con uno de los servicios esenciales definidos en la Ley. El bando debe ser publicado en el Boletín Oficial y tiene un período de validez de un mes.

259. La Fuel Emergency Act 1977 (Ley, de 1977, sobre el Suministro de Combustibles en Situaciones Excepcionales) dispone que el Gobernador en Consejo declarará, mediante un bando publicado en el Boletín Oficial, el estado de emergencia en materia de combustibles. El bando tiene un período de validez de siete días.

260. La Emergency Management Act 1986 (Ley, de 1986, de Gestión de Operaciones en caso de Situación Excepcional) regula la coordinación, organización y gestión de los recursos en situaciones excepcionales. El Servicio de Protección Civil del Estado de Victoria, creado en virtud de la Emergency Act 1987 (Ley, de 1987, sobre Situaciones Excepcionales) del Estado de Victoria, es competente en materia de gestión de las situaciones de excepción y operaciones de urgencia. La Vital State Industries (Works and Services) Act 1992 (Ley, de 1992, sobre las Industrias Vitales para el Estado (Obras y Servicios)) castiga como delito el hecho de impedir o coartar, o de intentar impedir o coartar, las actividades de una industria vital, que se definen en la Ley. El Gobernador en Consejo, mediante decreto publicado en el Boletín Oficial, puede declarar industria vital cualquier actividad, empresa, proyecto, obra o servicio. La proclamación es válida durante tres semanas a contar desde su publicación, a menos que sea revocada antes.

Australia Occidental

261. En Australia Occidental, la Fuel, Energy and Power Resources Act 1972 (Ley, de 1972, de Recursos Energéticos y Combustibles) contiene disposiciones sobre la conservación y utilización de las fuentes y suministros presentes y futuros de combustibles y energía en Australia Occidental. El Gobernador puede declarar el estado de emergencia en todo el Estado o en cualquier parte de éste que se especifique en la declaración.

Las catástrofes naturales

262. La mayoría de los Estados disponen de instrumentos legislativos para afrontar las situaciones excepcionales resultantes de incendios, inundaciones, tormentas y otras causas naturales. Esta normativa sectorial autoriza al poder ejecutivo a adoptar medidas para restablecer los servicios, pero en ningún caso permite suspender la aplicación del derecho común. Las medidas posibles con arreglo a la legislación son de facilitación.

263. Las Fuerzas Armadas están disponibles para prestar ayuda en caso de que las autoridades estatales no puedan hacer frente a una catástrofe natural o calamidad pública. No hay una normativa legal por la que se rija esta asistencia, pero existen instrucciones administrativas detalladas que regulan su utilización. Desde 1986, se ha prestado varias veces asistencia de este tipo, en especial en relación con el socorro en caso de inundaciones y la lucha contra los incendios de monte.

Territorio del Norte

264. La Disasters Act 1982 (Ley, de 1982, de Medidas en casos de Desastre) prevé la adopción de las medidas necesarias de protección de las personas y los bienes contra los efectos de las catástrofes y calamidades públicas. La Ley define el término "desastre" como aquel evento que causa o amenaza causar pérdida o daño a las personas o los bienes o que de cualquier modo pone en peligro la seguridad pública, y respecto del cual los recursos de los servicios públicos ordinarios son insuficientes para aplicar las medidas de intervención apropiadas. El término "desastre" comprende tanto las catástrofes naturales, por ejemplo los huracanes, como las hostilidades y los actos de violencia e intimidación.

265. El artículo 35 de la Ley, de 1982, de Medidas en casos de Desastre, confiere al Administrador potestad para declarar el estado de alarma, y el artículo 37 enumera las facultades especiales previstas durante la vigencia de ese estado excepcional, las cuales comprenden la requisita de bienes muebles, el cierre de locales, la evacuación de personas y, a ciertos efectos, la entrada domiciliaria.

266. De conformidad con el artículo 39 de la Ley, el Ministro encargado de su aplicación puede declarar el estado de emergencia. La declaración del estado de emergencia permanece en vigor durante dos días, a menos que sea revocada o anulada por una declaración de estado de alarma.

267. La Ley, de 1982, de Medidas en casos de Desastre, ha establecido un Consejo de Protección Civil y dispone que el controlador de las intervenciones en casos de desastre del Territorio es el Comisario de Policía. Dispone asimismo la creación del Servicio de Protección Civil del Territorio del Norte y el nombramiento del director de ese Servicio. Pueden ejercitar las facultades concedidas durante un estado de alarma o un estado de emergencia el Servicio de Protección Civil del Territorio del Norte, los miembros de las Fuerzas de Seguridad y las personas designadas por las comisiones regionales de protección civil.

Queensland

268. Con arreglo a la Queensland State Transport Act 1938 (Ley, de 1938, de Transportes del Estado de Queensland), el Gobernador en Consejo puede declarar el estado de emergencia por un período de tres meses, como máximo, en los casos en que probablemente estén en peligro la paz, el bienestar, el orden, el buen gobierno o la seguridad pública en la totalidad o en parte del territorio del Estado por causa de incendio, inundación o tormenta, tempestad, fuerza mayor o caso fortuito, o por cualquier otra causa o circunstancia. Una vez hecha la declaración, pueden adoptarse disposiciones para el abastecimiento de alimentos y el suministro de servicios esenciales para hacer frente a la situación excepcional.

269. La Ley, de 1975, sobre la Organización de Prevención de Catástrofes establece que dos organismos intervendrán en la gestión de las actuaciones en caso de catástrofe o calamidad pública:

- La Organización de Prevención de Catástrofes, que está encargada de la coordinación de los recursos y de velar por que se adopten todas

las medidas de planificación y prevención para paliar los efectos de las catástrofes; y

- El Servicio de Protección Civil del Estado, que está encargado de la coordinación de las actividades de voluntarios en la comunidad y de la educación ciudadana en materia de intervención en caso de catástrofe o calamidad pública.

Australia del Sur

270. La State Disaster Act 1980 (Ley estatal, de 1980, de Intervención en caso de Catástrofe) contiene disposiciones sobre la protección de personas y bienes en los casos de catástrofe o calamidad pública. La Ley autoriza:

- A la Comisión Estatal de Protección Civil, a que prepare un plan de protección civil de ámbito estatal, mantenerse en contacto con los organismos que según el Plan Estatal de Protección Civil deben participar en las operaciones y supervisar sus métodos de actuación;
- Al Comisario de Policía, a que se haga cargo de la dirección de las operaciones en calidad de coordinador estatal;
- Al Gobernador o el ministro competente, a que declare el estado de alarma (por un plazo máximo de 96 horas prorrogables por resolución del Parlamento, en el primer caso, y por un plazo máximo de 12 horas, en el segundo); y
- A financiar las actuaciones posteriores con fondos públicos.

271. La parte dispositiva de dicho instrumento legislativo no ha sido invocada desde febrero de 1983.

272. La South Australian Metropolitan Fire Service Act 1936 (Ley, de 1936, del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de Australia del Sur), la Country Fires Act 1989 (Ley, de 1989, de Lucha contra Incendios en Zonas Rurales) y la State Emergency Service Act 1987 (Ley, de 1987, del Servicio de Protección Civil del Estado) regulan y administran los organismos competentes y les confieren las competencias necesarias para intervenir en el lugar en que se ha producido una catástrofe, como un incendio.

Tasmania

273. En Tasmania, la Emergency Services Act 1976 (Ley, de 1976, de Servicios de Protección Civil) contiene disposiciones sobre la declaración de los estados de alarma, emergencia o excepción. Se entiende por catástrofe cualquier evento, incluido un ataque contra Tasmania, que causa o amenaza con causar pérdidas de vidas o bienes, daños físicos a las personas o los bienes o daños morales a las personas, o que de cualquier modo pone en peligro la seguridad de los ciudadanos. Por emergencia se entiende cualquier situación en que es probable que se produzca una catástrofe.

274. Las declaraciones tienen un alcance y una duración estrictamente limitados y confieren a las personas autorizadas facultades especiales, en particular para desalojar a personas y vehículos de cualquier zona, entrar en locales, requisar

recursos para hacer frente a la situación de excepción y cerrar carreteras al tráfico.

Artículo 5

275. Al ratificar el Pacto, Australia aceptó las obligaciones enunciadas en los párrafos 1 y 2 del artículo 5. Australia se ha comprometido a respetar en todo momento el ejercicio de los derechos civiles y políticos enunciados en el Pacto. Además, como se desprende del contenido de este informe, el Gobierno de Australia no interpreta ninguna disposición del Pacto en el sentido de que le conceda ningún derecho a dejar sin efecto los derechos y libertades reconocidos por el Pacto fuera de las limitaciones que el propio Pacto reconoce expresamente.

276. El Gobierno de Australia no ha considerado necesario promulgar leyes dirigidas específicamente a las personas o grupos de personas que pueden realizar actos encaminados a destruir o restringir los derechos y libertades reconocidos en el Pacto. El Gobierno australiano estima que las sanciones por infracciones del derecho interno y el mecanismo especial de defensa de los derechos humanos (examinados en el documento básico y la parte I) constituyen una garantía suficiente, habida cuenta de la situación interna de Australia, contra este tipo de actuación. Como se indica en las observaciones relativas a los artículos 19 y 20, Australia, como sociedad democrática, fomenta el libre intercambio y la expresión de las ideas y reconoce la existencia de conflictos ideológicos. Por consiguiente, no puede considerar el simple intercambio y expresión de las ideas como una actividad que infrinja las disposiciones de este artículo. A este respecto, se señala también a la atención del Comité el comentario incluido en este informe sobre la reserva de Australia al artículo 20 del Pacto.

Artículo 6

La pena capital

277. Como se indicaba en el segundo informe de Australia, la pena de muerte ha sido abolida en Australia a tenor de las leyes siguientes:

Federales	<u>Death Penalty Abolition Act 1973</u> (Ley, de 1973, de Abolición de la Pena de Muerte)
Nueva Gales del Sur	<u>Crimes (Amendment) Act 1955</u> (Ley Penal Enmendada, de 1955)
	<u>Crimes (Death Penalty Abolition) Amendment Act 1985</u> (Ley Penal Enmendada (Abolición de la pena de muerte), de 1985)
	<u>Miscellaneous Acts (Death Penalty Abolition) Amendment Act 1985</u> (Ley, de 1985, por la que se modifican diversas leyes (Abolición de la pena de muerte))
Queensland	<u>Criminal Code Amendment Act 1922</u> (Ley, de 1922, por la que se modifica el Código penal)

Australia del Sur	<u>Statutes Amendment (Capital Punishment Abolition) Act 1976</u> (Ley, de 1976, por la que se modifican diversas leyes parlamentarias (Abolición de la pena capital))
Tasmania	<u>Criminal Code Act 1968</u> (Ley, de 1968, del Código Penal)
Victoria	<u>Crimes (Capital Offences) Act 1975</u> (Ley Penal (Delitos punibles con la pena capital), de 1975)
Australia Occidental	<u>Acts Amendment (Abolition of Capital Punishment) Act 1984</u> (Ley, de 1984, por la que se modifican diversas leyes (Abolición de la pena capital))

La Ley Federal se aplica en el Territorio de la Capital de Australia y el Territorio del Norte.

El genocidio y los crímenes de guerra

278. Australia pasó a ser parte en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en julio de 1949. Aunque la Genocide Convention Act 1949 (Ley, de 1949, de ratificación de la Convención sobre el Genocidio) aprueba la ratificación australiana de la Convención sobre el Genocidio, no existe una normativa específica por la que se tipifique el crimen de genocidio. El planteamiento que se ha adoptado hasta ahora ha sido prever en el common law y los códigos penales de los Estados un castigo adecuado de los actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio. Así, por ejemplo, toda privación de la vida que constituya genocidio es punible como asesinato (murder) o asesinato premeditado (wilful murder) en todas las jurisdicciones.

279. La War Crimes Act 1945 (Ley, de 1945, de Crímenes de Guerra) dispone que las personas acusadas de cometer actos de genocidio en Europa durante la segunda guerra mundial serán perseguidas penalmente en Australia. Los términos del inciso ii) del párrafo 3 del artículo 7 de dicha Ley, en el que se definen los crímenes de guerra, están tomados directamente del artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

280. En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas dio a la Comisión de Derecho Internacional el mandato de preparar, con carácter prioritario, el proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional. Australia apoyó sin reservas que se diera ese mandato a la Comisión, la cual completó sus trabajos sobre el proyecto de estatuto en 1994. El genocidio figura entre los crímenes incluidos en el ámbito de competencia del tribunal con arreglo al proyecto de estatuto.

281. En su cuadragésimo noveno período de sesiones, la Asamblea General aprobó una resolución sobre el proyecto de estatuto en la que establecía un comité especial, abierto a la participación de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, para examinar las principales cuestiones sustantivas y administrativas derivadas del proyecto de estatuto y, a la luz de ese examen, estudiar las disposiciones necesarias para convocar una conferencia internacional de plenipotenciarios. Se pidió al Comité Especial que presentase su informe a la Asamblea General en su quincuagésimo período de sesiones. El

Comité Especial, que se reunió en Nueva York en abril y agosto de 1995, contó con la activa participación de Australia.

282. Australia ha promulgado la International War Crimes Tribunals Act 1995 (Ley, de 1995, de Tribunales Internacionales para los Crímenes de Guerra) y la International War Crimes Tribunal (Consequential Amendments) Act 1995 (Ley, de 1995, de Tribunales Internacionales para los Crímenes de Guerra (Modificaciones consiguientes)) que permiten a Australia prestar asistencia a dos tribunales internacionales establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y atender sus peticiones. Los dos tribunales son competentes para enjuiciar a los responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario, en particular de actos de genocidio, cometidas en la ex Yugoslavia y en Uganda. La función de Australia en los tribunales consiste, en particular, en el nombramiento de un australiano, Sir Ninian Stephen, como magistrado del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y de otro australiano, el Sr. Graham Blewit, como Fiscal Adjunto de dicho Tribunal.

El derecho a la vida

283. Las leyes civiles y penales amparan en toda Australia el derecho inherente a la vida reconocido en el párrafo 1 del artículo 6 del Pacto.

El derecho penal

284. Los aspectos principales del derecho penal de Queensland, Tasmania, Australia Occidental y el Territorio del Norte se plasman en los códigos penales de esas jurisdicciones. En otras, el derecho penal se encarna en leyes parlamentarias y el common law. El Comité de Funcionarios encargado de elaborar un código penal tipo está realizando un examen general de las diversas leyes penales de Australia con objeto de elaborar un código penal tipo que pueda ser adoptado en todas las jurisdicciones. Este código uniforme sustituirá el common law y los códigos y leyes penales vigentes en cada jurisdicción.

El homicidio injustificado (unlawful killing)

285. En todas las jurisdicciones australianas se considera delito matar ilegítimamente a otro. Tanto el common law como los códigos penales contienen disposiciones sobre los delitos de asesinato (murder), homicidio (manslaughter), tentativa de asesinato (attempted murder) y, en algunos casos, amenazas de muerte (threatening to commit murder).

286. Aunque la terminología exacta varía según las jurisdicciones, en general comete el delito de asesinato el que mata a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

- Con intención de causarle la muerte;
- Con intención de causarle un daño corporal grave;
- A sabiendas de que el acto probablemente causará la muerte o un daño corporal grave a esa persona, o habiendo podido prever ese resultado; o

- Con ocasión de la comisión de un acto o un delito grave que no sea el de asesinato (por ejemplo, en Nueva Gales del Sur un delito punible con 25 años de prisión o reclusión a perpetuidad, mientras que otros Estados se refieren simplemente a un delito o acto que pueda poner en peligro una vida humana).

287. En todas las jurisdicciones también es delito la tentativa de asesinato, así como la conspiración para cometer un asesinato y la provocación o cooperación a su ejecución. Las amenazas de asesinato constituyen una infracción penal con arreglo al derecho legislado de algunas jurisdicciones, como el Territorio del Norte, Queensland y Tasmania, y en algunos supuestos pueden ser tenidas por ilícitas con arreglo al common law.

288. Existen circunstancias que excluyen la culpabilidad, con exoneración total de la responsabilidad criminal. Comprenden aquellos supuestos en que el homicidio se cometió:

- Sin el necesario elemento psíquico (por haber obrado el imputado sin intervención de la voluntad, por causa de enajenación mental o por no haber alcanzado la mayoría de edad penal);
- Haciendo uso de una fuerza racionalmente bastante en las circunstancias para impedir la comisión de un delito grave o en el ejercicio legítimo de la potestad para detener (power of arrest);
- Haciendo uso de una fuerza racionalmente bastante en las circunstancias en defensa de la persona o derechos propios o ajenos;
- Como resultado de accidente o infortunio (cuando la conducta del infractor no es atribuible a negligencia inexcusable).

El homicidio

289. En general, el que mata ilegítimamente a otra persona en circunstancias distintas de las que constituyen el tipo del delito de asesinato es reo de homicidio. Puede haber factores que atenúen la culpabilidad del infractor y exijan, por tanto, que se le impute un delito de homicidio, voluntario o involuntario. Existe homicidio voluntario cuando se dan circunstancias modificativas como la provocación, la capacidad mental disminuida o el trastorno mental transitorio de la madre previsto en el tipo del delito de infanticidio (infanticide). El homicidio involuntario se da generalmente cuando el infractor solo pretendía causar lesiones corporales (homicidio preterintencional), actuó con negligencia inexcusable (homicidio imprudente) o realizó un acto ilícito o peligroso.

La reparación de los daños causados por un delito

290. La indemnización de los daños derivados de los delitos corresponde fundamentalmente a los Estados. No existe un plan nacional de indemnización de las víctimas de los delitos ni un órgano asesor en la materia. Los instrumentos legislativos y los órganos encargados de aplicar los planes estatales de reparación de los daños derivados de los delitos son los siguientes:

Territorio de la Capital de Australia:

La Criminal Injuries Compensation Act 1983 (Ley, de 1983, de Responsabilidad Civil derivada del Delito), respecto de la cual es competente el Consejero (Master) del Tribunal Superior de Justicia (Supreme Court);

Nueva Gales del Sur

La Victims Compensation Act 1987 (Ley, de 1987, de Reparación a las Víctimas del Delito), respecto de la cual es competente el Tribunal de Reparaciones a las Víctimas de los Delitos (Victims Compensation Tribunal);

Territorio del Norte

La Crimes (Victims Assistance) Act 1992 (Ley Penal (Auxilio a las Víctimas del Delito), de 1992), respecto de la cual es competente el Tribunal Local (Local Court);

Queensland

La Criminal Code Act 1899 (Ley, de 1899, del Código Penal), respecto de la cual son competentes los tribunales de justicia (o el Gobernador, el cual puede hacer un pago ex gratia a petición del interesado);

Australia del Sur

La Criminal Injuries Compensation Act 1978 (Ley, de 1978, de Responsabilidad Civil derivada del Delito), respecto de la cual es competente el Tribunal de Distrito (District Court);

Tasmania

La Criminal Injuries Compensation Act 1976 (Ley, de 1976, de Responsabilidad Civil derivada del Delito), respecto de la cual es competente el Consejero (Master) del Tribunal Superior de Justicia (Supreme Court);

Victoria

La Criminal Injuries Compensation Act 1983 (Ley, de 1983, de Responsabilidad Civil derivada del Delito), respecto de la cual es competente el Tribunal de Reparación Penal (Crimes Compensation Tribunal); y

Australia Occidental

La Criminal Injuries Compensation Act 1985 (Ley, de 1985, de Responsabilidad Civil derivada del Delito), respecto de la cual es competente un asesor (assessor) nombrado al efecto.

291. La Ley Penal Federal, de 1914, dispone que, cuando una persona es condenada por un delito en virtud de la legislación federal, el tribunal podrá dictar auto de reparación. En otros casos de necesidad, el Gobierno Federal examinará la posibilidad de otorgar reparación a particulares. El plan de reparación del daño del Territorio de la Capital de Australia se aplica a los delitos contra la legislación federal cometidos en el Territorio.

292. Los territorios australianos adyacentes, los Territorios de la Isla Christmas y las Islas Cocos (Keeling), también cuentan con un sistema de reparación de los daños causados por hechos delictivos. En la Isla Norfolk, el tribunal, además de la pena impuesta al condenado, puede resolver que el infractor indemnice al perjudicado, mediante pago en dinero o de otro modo, por los perjuicios sufridos directamente como resultado del delito.

293. En junio de 1993, el Comité Permanente de Fiscales Generales aprobó un conjunto de principios, basado en la Declaración de los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y la desviación de poder, como guía del trato que hay que dar a las víctimas del delito. Según el principio 10, las víctimas de delitos en que se ha empleado violencia sexual u otro tipo de violencia contra las personas tienen derecho, en caso de que el infractor no pueda dar reparación, a acogerse al plan de indemnización de las víctimas de los delitos establecido por el Estado. Se acordó que los principios serían adoptados por todas las jurisdicciones y que incumbiría a cada Estado velar por su aplicación. Se consideró que los principios servirían de base para la elaboración de un sistema uniforme de reconocimiento de los derechos de las víctimas y para proporcionar servicios de asistencia a las víctimas en toda Australia. Los principios son:

- Las víctimas de los delitos deben ser tratadas con cortesía, compasión y respeto a su dignidad;
- Las víctimas de los delitos y sus familiares deben tener acceso a la asistencia en materia social, sanitaria, psicológica, médica y jurídica que responda a sus necesidades;
- Se deben minimizar las molestias a las víctimas de los delitos y protegerse su intimidad;
- Se debe prestar a la víctima de un delito la protección necesaria contra toda violencia e intimidación por el imputado;
- Las víctimas de un delito que lo soliciten deben ser mantenidas informadas de los progresos de la investigación y persecución del delito;
- Las opiniones y preocupaciones de las víctimas deben ser tenidas en cuenta en todas las fases correspondientes de la investigación y persecución del delito;
- La víctima de un delito que sea testigo en el juicio debe ser informada del desarrollo del proceso y del papel de la víctima como testigo en la persecución del delito;
- Se debe informar al tribunal de los efectos del delito sobre la víctima, especialmente en los casos en que se ha empleado en la comisión del delito violencia sexual u otro tipo de violencia contra las personas;
- Las víctimas de un delito que lo soliciten deben ser mantenidas informadas acerca del temperamento del infractor; y

- En caso de que el infractor no pueda dar reparación, la víctima de un delito en que se ha empleado violencia sexual u otro tipo de violencia contra las personas debe poder acogerse a un plan de indemnización de las víctimas de los delitos establecido por el Estado.

Los actos de terrorismo

294. Varias leyes federales contienen disposiciones de protección contra los actos de terrorismo de conformidad con las obligaciones asumidas por Australia como parte en ciertos convenios internacionales.

295. La Crimes (Internationally Protected Persons) Act 1976 (Ley Penal (Personas Internacionalmente Protegidas), de 1976) incorpora la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, al ordenamiento jurídico interno. El artículo 8 de la Ley tipifica una serie de delitos contra las personas internacionalmente protegidas, entre otros el asesinato, el secuestro y los ataques a su persona o su libertad. La Ley define lo que hay que entender por "persona internacionalmente protegida", expresión que comprende a los jefes de gobierno, los presidentes y los agentes diplomáticos.

296. La Crimes (Aviation) Act 1991 (Ley Penal (Aviación), de 1991) incorpora al ordenamiento jurídico interno el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, y su Protocolo complementario para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional, y el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves. El Título II de la Ley tipifica una serie de delitos, entre otros los delitos de secuestro y actos de violencia a bordo de una aeronave, los delitos que afectan a una aeronave o a la explotación segura de una aeronave (incluida la destrucción de una aeronave con intención de causar la muerte), los delitos relativos a la seguridad de la aviación civil y los actos de violencia en ciertos aeropuertos y los delitos relativos a los aeródromos federales y las instalaciones de navegación aérea (que comprende la puesta en peligro de la seguridad de los aeródromos). El Título III de la Ley versa sobre el restablecimiento del control de las aeronaves y el trato a los delincuentes.

297. La Crimes (Hostages) Act 1989 (Ley Penal (Rehenes), de 1989) incorpora la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes al ordenamiento jurídico interno. El artículo 7 define la toma de rehenes (que comprende las amenazas de causar la muerte o lesiones a un rehén) y el artículo 8 especifica cuando es delito la toma de rehenes.

298. La Crimes (Ships and Fixed Platforms) Act 1992 (Ley Penal (Buques y Plataformas Fijas), de 1992) incorpora al ordenamiento jurídico interno el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y el Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental. El capítulo primero del Título II de la Ley tipifica ciertos delitos contra los buques, en particular los actos de violencia y las muertes, mientras que el Título III tipifica una serie equivalente de hechos delictivos en relación con las plataformas fijas.

299. Además, la Crimes (Biological Weapons) Act 1976 (Ley Penal (Armas Biológicas), de 1976) incorpora al ordenamiento jurídico interno la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción. El artículo 8 tipifica como delito el desarrollo, la producción, el almacenamiento o la adquisición por otros medios de ciertos agentes biológicos y toxinas y armas biológicas, o su conservación. La Nuclear Non-Proliferation (Safequards) Act 1987 (Ley, de 1987, sobre las salvaguardias contra la no proliferación nuclear) tipifica como delito el robo de material nuclear o su uso, o la amenaza de su uso, para causar lesiones a las personas o daños a los bienes.

300. La Crimes (Foreign Incursions and Recruitment) Act 1978 (Ley Penal (Reclutamiento e Incursiones en el Extranjero), de 1978) tipifica como delito hacer incursiones en Estados extranjeros para realizar actividades hostiles, así como el reclutamiento de personal y los preparativos para tales incursiones (sujeto a diversas excepciones).

301. La Public Order (Protection of Persons and Property) Act 1971 (Ley, de 1971, de Orden Público (Protección de las Personas y los Bienes)) tipifica como delito las reuniones de carácter no pacífico o previsiblemente no pacífico en ciertos lugares cerrados.

302. Por otra parte, el Gobierno Federal ha reforzado la capacidad contraterrorista de Australia por medio del Comité Asesor Permanente de Protección contra la Violencia, que proporciona a las fuerzas de seguridad formación y material suplementarios y coordina los principales ejercicios ordinarios de capacitación en la lucha antiterrorista de las fuerzas de seguridad federal y estatales, los servicios de información y las fuerzas armadas.

303. El Gobierno Federal ha mejorado también la protección del colectivo diplomático y consular mediante el incremento de los fondos anualmente dedicados a la protección de los intereses diplomáticos en respuesta a las amenazas que van surgiendo.

Las personas desaparecidas

304. Cada año desaparecen miles de australianos. En 1993-1994, 26.345 personas fueron dadas por desaparecidas. Las investigaciones en caso de desapariciones incumben fundamentalmente a los Estados y todos los servicios policiales estatales cuentan con una unidad especializada en desapariciones. La Policía Federal australiana está encargada del mantenimiento del orden en el Territorio de la Capital de Australia y también dispone de una unidad de personas desaparecidas. Generalmente, las denuncias de desapariciones, según las circunstancias en que ésta se ha producido, son investigadas por los agentes de la brigada criminal como un hecho delictivo o por el funcionario de policía que recibe la denuncia si no se dan circunstancias sospechosas.

305. Los gobiernos estatales y las fuerzas de seguridad han iniciado los trabajos para proporcionar un medio más exhaustivo para llevar la relación de las personas desaparecidas y averiguar su paradero. El Centro Nacional de Intercambio de Información Policial está elaborando una base de datos sobre personas buscadas para ponerla a disposición de todas las jurisdicciones. "Desaparecidos" será uno de los epígrafes de esta base de datos. Se insta a

todas las jurisdicciones a que aporten a la base de datos, que es un recurso a disposición de las diversas fuerzas de seguridad, una lista con datos suficientes para la identificación .

El aborto

306. En todas las jurisdicciones australianas es un hecho punible practicar o ayudar a producir un aborto, excepto en determinados supuestos. La siguiente disposición, tomada de la Ley Penal del Estado de Victoria, de 1958, es un ejemplo típico de la prohibición del aborto:

"El que con intención de producir el aborto de una mujer, esté o no embarazada, le administre ilícitamente o la incite a tomar cualquier veneno u otra sustancia nociva, o utilice ilícitamente cualquier instrumento u otro medio con la misma intención, es culpable de un delito grave (indictable offence) y será castigado con una pena de prisión del grado sexto (es decir, siete años y cinco meses)".

307. El Tribunal Superior de Justicia de Victoria falló en R. c. Davinson [1969] VLR 667 que, para que el uso de un instrumento con intención de producir el aborto sea lícito por motivos terapéuticos, es preciso que el autor haya creído sinceramente, con fundamento razonable, que el acto realizado por él:

- "Era necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer (distinto del peligro normal del embarazo y el parto que hubiera entrañado la continuación del embarazo); y
- No era desproporcionado, en las circunstancias del caso, al peligro que se trataba de evitar".

308. El mismo razonamiento fue utilizado por el Tribunal de Distrito de Nueva Gales del Sur en la sentencia dictada en R. c. Wald (1971) 3 DCR 25. Las sentencias dictadas en los asuntos R. c. Davinson y R. c. Wald fueron recogidas expresamente y aplicadas en Queensland en el asunto R. c. Bayliss y Cullen (1986) 9 QLR 8. A raíz de estas resoluciones, Nueva Gales del Sur y Australia Occidental modificaron su legislación.

309. En Australia del Sur y el Territorio del Norte, la ley especifica algunos otros supuestos en que se puede practicar lícitamente el aborto, entre ellos cuando haya grave riesgo de que, si no se interrumpe el embarazo, el feto nazca con taras físicas o psíquicas que impliquen una grave discapacidad. En Australia Occidental solo se puede practicar el aborto si es necesario para preservar la vida de la madre. En Tasmania, el aborto sigue siendo un acto punible en virtud del Código Penal de 1924, a menos que pueda justificarse aduciendo que se creía sinceramente, con fundamento razonable, que era necesario practicarlo para evitar un grave peligro para la vida de la madre o que había un riesgo sustancial de causar un grave daño a su salud física o psíquica (distinto del peligro normal del embarazo y el parto que hubiera entrañado la continuación del embarazo).

Los programas oficiales

310. En 1990, atendiendo la Recomendación 103 del Comité Nacional sobre la Violencia, que presentó su informe en febrero de dicho año, el Gobierno Federal estableció en el Instituto Australiano de Criminología un programa nacional de seguimiento de los casos de homicidio para elaborar y mantener una base de datos uniforme sobre los homicidios en toda Australia. De conformidad con este programa, el Instituto ha elaborado tres informes, en los que se analizan los años 1989-1990, 1990-1991 y 1991-1992. Actualmente los datos se utilizan de una manera generalizada para establecer pautas de orientación política para la prevención y lucha contra los homicidios injustificados.

311. A raíz de la matanza por disparos de arma de fuego realizada en Strathfield, Nueva Gales del Sur, en 1991, en la que resultaron muertas siete personas, los jefes de los gobiernos federal y estatales convinieron en la creación en el Instituto de una Unidad de Prevención de la Violencia, que ulteriormente fue incorporada en el Programa de Prevención y Lucha contra la Violencia y el Delito del Instituto.

312. Una de las tareas del programa de prevención de la violencia del Instituto es prestar asistencia práctica para la prevención o disminución de todas las formas de violencia delictiva. Otra consecuencia de la matanza de Strathfield, el premio Prevención de la Violencia, es un galardón por el que se reconocen los logros en el campo de la prevención de la violencia, y que también permite al Instituto supervisar la eficacia de los proyectos o programas relativos a la violencia y asesorar al respecto.

La utilización de las armas de fuego por las fuerzas de seguridad

313. Los funcionarios de policía están facultados para hacer un uso razonable de la fuerza al proceder a una detención y pueden legítimamente utilizar un arma de fuego en determinadas circunstancias, como en defensa propia o de terceros amenazados por un acto de violencia grave y la captura de fugitivos. Todo funcionario de policía que hace uso de un arma de fuego está obligado a notificarlo, y el uso indebido de esa arma es investigado y sancionado con arreglo a la ley penal.

314. En el período comprendido entre el examen del segundo informe en 1988 y junio de 1995, 39 personas en total han sido muertas en Australia por disparos de la policía: 18 en Victoria, siete en Nueva Gales del Sur, cinco en Queensland, tres en Australia Occidental, dos respectivamente en Australia del Sur, en Tasmania y en el Territorio del Norte. El Territorio de la Capital de Australia no ha notificado ningún caso de disparos de la policía con resultado mortal durante el período.

315. La frecuencia relativamente alta de las muertes por disparos de arma de fuego en Victoria ha suscitado las críticas de los ciudadanos y una serie de encuestas sobre los métodos de entrenamiento de la policía en el uso de las armas de fuego, su empleo y los métodos de defensa en ese Estado. En Victoria, cada caso de utilización de armas de fuego ha sido objeto de una investigación interna detallada de la policía y es procedimiento normal abrir una información judicial sobre cualquier muerte causada por disparos de la policía. El Adjunto del Defensor del Pueblo (Denuncias contra la Policía) del Estado de Victoria también ha realizado investigaciones cuando se ha formalizado ante él una

denuncia. Además, se han realizado o se están realizando varios estudios más amplios sobre el uso de las armas de fuego por la policía y otros métodos posibles como alternativa a ese uso, con el asesoramiento de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, la Real Policía Montada del Canadá, la Brigada de Investigación Criminal de la Policía Nacional australiana y el Instituto Australiano de Criminología. Los resultados de estos estudios están siendo integrados en un Proyecto de Revisión Interna del Empleo de las Armas de Fuego para determinar si las directrices y prácticas actuales son de un nivel aceptable para la colectividad y garantizar que, si no lo son, se tomen las disposiciones necesarias.

316. También como respuesta a ese empleo de las armas de fuego en Victoria, se ha establecido el proyecto Beacon para formar a la policía sobre cómo evitar los conflictos.

La responsabilidad civil (no derivada de delito)

El acto ilícito causante de muerte

317. De conformidad con la legislación de todas las jurisdicciones australianas, el acto u omisión ilícito que ocasione una muerte puede dar lugar a una acción de indemnización de daños y perjuicios por ilícito civil o a una demanda de reparación. Si la muerte se produjo como consecuencia de un accidente laboral, se podrá exigir del empleador una indemnización en virtud de la legislación sobre accidentes de trabajo de todas las jurisdicciones.

318. Si la muerte es el resultado de culpa o negligencia de otra persona, o de un acto ilícito cometido por ésta independientemente de que ese acto sea punible según la ley, la legislación de toda Australia legitima al albacea del causante a ejercitar una acción de daños y perjuicios por daños patrimoniales en nombre de los familiares del finado que hayan sufrido los daños a causa de su muerte. Además, todas las jurisdicciones australianas disponen que la mayoría de las causas de pedir subsisten en beneficio del caudal hereditario. Entre éstas figuran las acciones que el finado hubiera podido ejercitar contra el responsable de las lesiones que le causaron la muerte.

El VIH/SIDA

319. En lo que concierne al VIH/SIDA, las consecuencias públicas de los actos privados interesan de modo importante a la ley. Las relaciones en que puede producirse la transmisión van de las relaciones íntimas o personales a la prestación de servicios por los profesionales de la salud y otras personas.

320. Uno de los objetivos principales de la política de salud pública en el campo del VIH/SIDA es fomentar que los ciudadanos asuman la responsabilidad de su propia salud y eviten la infección. Esto contradice hasta cierto punto las normas de responsabilidad civil por las que se trata de indemnizar a las personas lesionadas. Por consiguiente, la respuesta de la salud pública de Australia se basa en un modelo de consenso, y no en el internamiento y el aislamiento, implicando a las personas afectadas y proporcionando programas de prevención y educación a las personas de riesgo. De ese modo, Australia intenta conciliar los intereses de la salud pública y la preocupación por las libertades cívicas.

321. Todos los Estados australianos disponen de leyes de salud pública para facilitar aún más la reducción y prevención de las enfermedades transmisibles, especial el VIH/SIDA, o están revisando su normativa legal a este respecto.

322. La alta prevalencia del VIH/SIDA en las prisiones australianas es motivo de preocupación para las Administraciones públicas de Australia. El Grupo de Trabajo Jurídico del Comité Intergubernamental sobre el SIDA recomendó en 1992 que los internos en establecimientos penitenciarios y otras instituciones tengan el mismo acceso que los demás miembros de la colectividad a los medio terapéuticos que impiden la transmisión del VIH. En la actualidad, esa recomendación solo ha sido satisfecha parcialmente. Los reclusos tienen acceso a los preservativos solamente en el Territorio de la Capital de Australia. No obstante, el Consejo de Ministros ha aprobado un programa piloto en Nueva Gales del Sur, y en Victoria hay distribuidores automáticos en las prisiones que cuentan con locales adecuados especialmente para las comunicaciones íntimas y las visitas de convivencia a los presos. En la mayoría de las jurisdicciones se distribuye lejía, bien específicamente para limpiar agujas y jeringuillas, bien, más generalmente, para cualquier fin higiénico. Sin embargo, no se distribuye lejía en las prisiones de Tasmania ni en las del Territorio del Norte.

323. Por otra parte, la transmisión del VIH por medio de la sangre y los productos sanguíneos ha sido motivo de preocupación en Australia ya que antes de 1985 los tratamientos médicos eran fuente de infección con el VIH. No obstante, el riesgo de contagiarse con el VIH por medio de una transfusión de sangre o hemoderivados ha sido prácticamente eliminado con la introducción en mayo de 1985 del análisis sistemático universal de la sangre y los tejidos y la entrevista y examen diferido de los donantes.

324. Motivo de especial preocupación era la propagación del VIH/SIDA por medio de las transfusiones sanguíneas, que dieron lugar al ejercicio de acciones de indemnización contra los bancos de sangre y que pueden haber puesto en peligro la continuación de un servicio público tan importante. Con la introducción del examen diferido de los donantes (basado en las entrevistas con los donantes acerca de sus antecedentes sexuales y de consumo de drogas por vía intravenosa) y el tratamiento térmico de los concentrados liofilizados australianos a fines de 1984 y el análisis sistemático universal de las donaciones de sangre y tejidos en 1985, el riesgo de contagiarse con el VIH por esas vías prácticamente ha sido eliminado.

325. No obstante, sigue existiendo la posibilidad de que alguna unidad de plasma infectado con el VIH haya sido utilizado en una transfusión de sangre en Australia después de 1985, como resultado de la donación recibida de un donante recién infectado con VIH que no haya producido anticuerpos del VIH a niveles detectables en el momento de la prueba correspondiente. Aunque la probabilidad acumulativa de que así suceda aumenta con el tiempo, el riesgo de que una unidad de plasma esté contaminada con el VIH sigue siendo sumamente pequeño y debe considerarse en el contexto más amplio de los beneficios aportados por las donaciones de sangre o tejidos.

326. Todas las jurisdicciones han promulgado legislación retroactiva, excepto Queensland, que se basa en una decisión del Gabinete, adoptada en 1985, que limita la responsabilidad por transmisión del VIH en transfusiones de sangre o hemoderivados regulando los procedimientos relativos a la declaración del donante y los procedimientos de análisis sistemático.

327. En mayo de 1993 se descubrió que cuatro pacientes que habían recibido tratamiento quirúrgico en Nueva Gales del Sur habían resultado infectados con el VIH en 1989 con ocasión de una intervención relativamente poco importante de carácter ambulatorio. El modo de transmisión exacto sigue siendo incierto.

328. De resultados de este incidente, el Gobierno Federal creó un grupo mixto de trabajo del Consejo Nacional Australiano sobre el SIDA y el Consejo Nacional de Sanidad e Investigaciones Médicas con el siguiente mandato:

- Examinar las vigentes "Directrices de gestión para el control de los riesgos de enfermedades infecciosas en los establecimientos de asistencia sanitaria" y hacer recomendaciones sobre su modificación o la formulación de directrices nuevas para el control de los riesgos de enfermedades infecciosas en medios no hospitalarios. Se deben tener en cuenta las posibles consecuencias para el control de las infecciones de la notificación del incidente de aparente transmisión a pacientes ocurrido en Nueva Gales del Sur;
- Formular recomendaciones específicas para la aplicación de los procedimientos de control de las infecciones en medios no hospitalarios y para velar por su observancia; y
- Formular recomendaciones sobre la investigación y notificación de episodios de la propagación de enfermedades transmisibles en medios de atención sanitaria, en particular:
 - Abordar el estudio de las enfermedades sobre una base de cooperación a escala nacional teniendo en cuenta los principios básicos de la investigación epidemiológica y las funciones y competencias de cada una de las partes;
 - Velar por que las investigaciones realizadas sean del máximo nivel;
 - Velar por el respeto de los intereses de las partes;
 - Velar por la primacía de la salud pública; y
 - Velar por que los resultados de las investigaciones se difundan de manera apropiada para conocimiento del público y el control de las enfermedades.

329. En julio de 1994, el grupo de trabajo hizo públicas las directrices tituladas "Control de las infecciones en la práctica del consultorio: asistencia médica, higiene dental y actividades paramédicas", con las que cumplía su primer mandato, es decir, revisar las directrices vigentes sobre el control de las infecciones y hacer recomendaciones sobre la formulación de directrices nuevas para el control de las enfermedades infecciosas en medios no hospitalarios.

330. Estas directrices están siendo revisadas por el Consejo Nacional de Sanidad e Investigaciones Médicas y, en septiembre de 1995, se dio a conocer el proyecto de documento titulado "El control de las infecciones en los medios de asistencia sanitaria" abriéndose un período de información pública. En su versión definitiva, ese documento marcará en el plano nacional la pauta del

control de las infecciones en los medios de asistencia sanitaria y adoptará una forma que permita su sanción legislativa por las jurisdicciones estatales.

331. El Estado de Nueva Gales del Sur ha incluido en la Health Legislation (Miscellaneous Amendment Act 1994 (Ley, de 1994, por la que se introducen diversas enmiendas en la legislación sanitaria) la potestad reglamentaria a fin de hacer posible la codificación general de las directrices sobre control de las infecciones. La HIV/AIDS Preventive Measures Act 1993 (Ley, de 1993, de Medidas Preventivas del VIH/SIDA) de Tasmania incluye el requisito de que los facultativos, las enfermeras y los dentistas apliquen las directrices vigentes sobre control de las infecciones dictadas por el Consejo Nacional de Sanidad e Investigaciones Médicas y el Consejo Nacional Australiano sobre el SIDA. El Territorio de la Capital de Australia ha promulgado una normativa legal (la Skin Penetration Act 1994 (Ley, de 1994, de Penetración Hipodérmica)) que faculta al Ministro de Sanidad para definir los códigos de práctica.

332. La tercera vía de transmisión que nos interesa es la de una madre infectada por el VIH a su hijo. Desde el comienzo de la epidemia del VIH/SIDA en este país, el diagnóstico de infección con el VIH de 39 niños (al 31 de diciembre de 1994) se atribuyó a la categoría de madre infectada con el VIH o en riesgo de serlo.

333. En los últimos años se ha obtenido información que puede utilizarse para reducir considerablemente el riesgo de que un niño nacido de una madre infectada con el VIH se contagie. Las intervenciones más importantes son evitar la lactancia materna, utilizar zidovudina (AZT) al final del embarazo y optar por un parto por cesárea y no vaginal. Aunque no existe ningún estudio que haya evaluado el efecto combinado de esas intervenciones, es plausible que si se aplican conjuntamente se pueda lograr una reducción de la tasa de transmisión de entre el 25 y el 30% al 10%. Las mujeres VIH-positivas pueden recurrir a todas esas intervenciones, pero su aplicación depende del momento de la detección de su condición. Por ejemplo, el AZT solo está a disposición de las mujeres embarazadas que saben que su sangre contiene anticuerpos del VIH antes del tercer trimestre de embarazo.

334. El Programa de Educación y Prevención ha sido la piedra angular de las actuaciones encaminadas a impedir la propagación del VIH/SIDA en Australia. Ese Programa tiene cuatro objetivos principales:

- Mejorar el conocimiento de los comportamientos de riesgo y las técnicas de evaluación del riesgo;
- Facilitar y promover el acceso a las pruebas voluntarias y las medidas y programas de prevención;
- Ayudar a las personas que viven con el VIH/SIDA a adoptar decisiones con conocimiento de causa acerca de su salud y tratamiento; y
- Reducir el mito, los temores superfluos y la discriminación.

335. El programa se centra principalmente en las personas que en virtud de sus actividades se encuentran en una posición de máximo riesgo y las personas ya infectadas. Esos grupo son: los hombres homosexualmente activos; los usuarios

de drogas inyectables y sus parejas sexuales; los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres; y las personas que viven con el VIH/SIDA.

336. Las Administraciones públicas Federal y estatales y los grupos comunitarios han elaborado una serie de programas de educación y prevención destinados a esos grupos. Por ejemplo, el Programa de Oferta de Aguja y Jeringuilla se creó para garantizar el libre acceso a agujas y jeringuillas de los usuarios de drogas inyectables a fin de minimizar el riesgo de transmisión del VIH por el uso común de agujas y jeringuillas. En consecuencia, Australia tiene una de las tasas más bajas de infección entre usuarios de drogas inyectables.

337. Las iniciativas de educación y prevención de Australia han sido reconocidas internacionalmente por su planteamiento innovador de las actividades de fomento de la salud, que implican la colaboración entre las colectividades afectadas, las Administraciones públicas en todos los ámbitos y el personal médico, científico y sanitario. La contención de la epidemia es prueba del éxito de este planteamiento.

338. Existen en el ámbito nacional una serie de organismos que estudian una amplia variedad de cuestiones relacionadas con el VIH/SIDA y otras enfermedades transmisibles y son competentes en materia de ejecución de las estrategias de educación y prevención. El Comité Intergubernamental sobre el SIDA está integrado por representantes de la Administración Federal y las Administraciones estatales y sirve de foro de enlace y coordinación de las pautas de orientación política, la financiación, los programas y las actividades relacionados con el VIH/SIDA. El Consejo Nacional Australiano sobre el SIDA es el organismo asesor fundamental del Gobierno Federal en materia de VIH/SIDA y proporciona asesoramiento independiente y técnico al Ministro de Sanidad. La Federación Australiana de Organizaciones sobre el SIDA es el organismo superior de la colectividad afectada y proporciona servicios a los grupos de la sociedad afectados por el VIH/SIDA y defiende sus intereses.

La inmunización

339. De acuerdo con el Plan Nacional de Australia para la supervivencia y la protección de los niños, el Programa Nacional de Inmunización Infantil contribuye a aumentar las posibilidades de supervivencia y desarrollo de cada niño y a que alcance el nivel más alto posible de salud. El Programa, al reducir las enfermedades prevenibles mediante vacunación, contribuirá a que la tasa de mortalidad de lactantes y niños pequeños disminuya en Australia.

340. De conformidad con el Programa Nacional de Inmunización Infantil, se fomenta la vacunación universal de los lactantes y niños pequeños con arreglo al calendario de vacunación infantil ordinaria del Consejo Nacional de Sanidad e Investigaciones Médicas. Las vacunas utilizadas con arreglo a ese calendario son suministradas por los poderes públicos federales sin ningún costo para los padres.

341. El calendario vigente recomienda el siguiente programa de inmunización:

- A los dos, cuatro y seis meses de edad: inmunización contra la difteria, el tétanos, la tosferina, la poliomielitis y la *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib);

- A los 12 meses de edad: inmunización contra el sarampión, la parotiditis (paperas), la rubéola y la Hib;
- A los 18 meses de edad: inmunización contra la difteria, el tétanos, la tosferina y la Hib; y
- A los cinco años de edad: inmunización contra la difteria, el tétanos, la tosferina y la poliomielitis.

342. Australia cuenta con un programa de vacunación universal de los niños desde hace más de cuarenta años. Sin embargo, las continuas epidemias y enfermedades prevenibles mediante vacunación ponen de manifiesto que las actuales tasas de inmunización no son suficientes para impedir la transmisión de esas enfermedades. Recientemente se han producido epidemias de tosferina y sarampión, notificándose 4.454 casos de tosferina en 1993 y 5.491 en 1994. El número de casos de sarampión notificados fue de 4.736 en 1993 y 4.806 en 1994. Entre 1983 y 1993 se produjeron 41 muertes causadas por el sarampión. En los párrafos 834 a 841 del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño se proporciona más información.

La salud de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres

Mortalidad

343. En lo que concierne a las regiones de Australia sobre las que se dispone de datos (por ejemplo, las comunidades del Territorio del Norte, Australia del Sur, Australia Occidental y Queensland), cabe afirmar que una mejor atención médica ha contribuido a un descenso general acentuado de las tasas de mortalidad infantil entre los aborígenes en los últimos dos o tres decenios. Más recientemente, entre 1982 y 1992, las tasas han permanecido estables debido a una bajada de la mortalidad neonatal (de 0 a 4 semanas) y una subida de la mortalidad postneonatal (de 4 semanas a 1 año). No obstante, las tasas de mortalidad infantil de los aborígenes siguen siendo altas y, según el lugar, pueden más que triplicar la tasa correspondiente a la totalidad de la población australiana. Por ejemplo, los datos correspondientes a Australia Occidental y el Territorio del Norte en 1992 indicaban tasas del 22,0 y el 31,5 por mil nacidos vivos, respectivamente, o sea una tasa de tres a cuatro veces más alta que la correspondiente a toda la población australiana (el 7%).

344. La insuficiencia ponderal del recién nacido, que se relaciona con una tasa de mortalidad infantil más alta, es mucho más corriente entre los lactantes aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Los nacidos de madre aborigen o isleña del Estrecho de Torres arrojan al nacer un peso medio de 3.140 gramos, 209 gramos inferior al peso medio de todos los nacidos. La tasa de natalidad de la mujer aborigen es un 46% más alta que la de las mujeres no aborígenes. Véanse los cuadros 3 y 4, que contienen datos sobre las tasas de natalidad totales de la población aborigen y la totalidad de la población australiana y las tasas de mortalidad por sexo y por grupo de edad de la población aborigen y la totalidad de la población australiana.

345. La mortalidad materna en Australia en el período de 1988-1990 disminuyó casi dos tercios con respecto a la cifra equivalente de 1970-1972. Sin embargo, los datos de que se dispone muestran que no ha habido una reducción análoga de la mortalidad materna entre las aborígenes. En 1988-1990, las madres aborígenes

representaron casi el 30% de la totalidad de las defunciones maternas, pero menos del 3% de todos los puerperios.

346. En el período de 1990-1992, la esperanza de vida de los aborígenes al nacer se estimaba entre 57 y 60 años para los hombres y entre 61 y 64 años para las mujeres, es decir, aproximadamente 15 ó 20 años menos que en el caso de los australianos no aborígenes.

Malnutrición

347. La Política Nacional de Alimentación y Nutrición identificó varios grupos de la sociedad australiana cuyos niveles nutricionales eran bajos. Entre esos grupos figuran los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres que sufren una serie de problemas relacionados con la nutrición, incluido la malnutrición. Los proyectos federales actualmente aplicados que se dirigen a mejorar el estado nutricional de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres comprenden:

- El establecimiento del Grupo de Trabajo sobre Nutrición de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, que informará al Consejo Nacional de Sanidad e Investigaciones Médicas. El Grupo de Trabajo examinará las estrategias de ejecución, evaluación, educación y capacitación culturalmente apropiadas en las zonas urbanas, rurales y aisladas;
- La elaboración de unas pautas generales de orientación política en materia alimentaria y nutricional para el Territorio del Norte, mediante las cuales, en consulta con las colectividades aborígenes, se tratará de mejorar la disponibilidad, accesibilidad y capacidad de pago en relación con los alimentos nutritivos, y que serán aplicables en otros Estados; y
- La preparación de un manual de nutrición de la colectividad aborígen y de isleños del Estrecho de Torres basado en amplias consultas con las organizaciones aborígenes y los proyectos de nutrición de toda Australia.

La salud de los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres

348. En 1992, la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres concluyó una encuesta nacional sobre las necesidades de vivienda e infraestructura comunitaria en la que se llegaba a la conclusión de que la calidad del agua disponible para uso de muchos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres es inferior a las normas de calidad del agua recomendadas por las directrices del Consejo Nacional de Sanidad e Investigaciones Médicas. De las 906 comunidades objeto de la encuesta, 311 (14.616 personas) dependían de un abastecimiento de agua que no cumplía dichas directrices.

349. Una reunión mixta de los ministros federales y estatales de sanidad y asuntos aborígenes, celebrada en diciembre de 1987, creó un grupo de trabajo para que estudiara la elaboración de una estrategia nacional de salud para los aborígenes. Su informe definitivo, publicado en marzo de 1989 y elaborado en consulta con los representantes de los poderes públicos estatales y las comunidades de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, llevó a la creación

del Grupo Aborigen de Desarrollo Sanitario para que estableciera un orden de prioridad. El Grupo presentó su informe en 1989.

350. La Estrategia Nacional de Salud de los Aborígenes comprende varias estrategias para reducir la tasa de mortalidad materna, elaborar unos medios de formación y asistencia prenatal culturalmente aceptables, fomentar y facilitar los partos hospitalarios y proporcionar recursos suficientes para unos servicios de salud apropiados, especialmente en las zonas mal servidas en este aspecto.

351. En los párrafos 719 a 742 del primer informe presentado Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño figura información más detallada acerca de las iniciativas estatales relacionadas con la salud de los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.

La amenaza de guerra

352. Australia apoya firmemente los esfuerzos internacionales para reducir la amenaza de guerra, en especial de guerra nuclear.

353. Australia sostiene desde hace mucho tiempo que la solución de las grandes cuestiones de la limitación de los armamentos y el desarme no puede dejarse simplemente al arbitrio de las principales potencias. Por consiguiente, el Gobierno australiano interviene activa y resueltamente en una amplia serie de tribunas internacionales para promover los objetivos del desarme y la no proliferación de las armas nucleares, especialmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las diversas Conferencias de las Partes encargadas del examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y otros tratados importantes y en el único foro de negociación en el sistema de acuerdos de las Naciones Unidas para la limitación de los armamentos, la Conferencia de Desarme de Ginebra. La participación e influencia de Australia en la Conferencia de Desarme ha aumentado notablemente desde el nombramiento en 1983 de un Embajador para Asuntos de Desarme, con dedicación exclusiva y sede en Ginebra.

354. Australia desempeñó un papel destacado en la negociación del Tratado sobre la Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur (Tratado de Rarotonga), que entró en vigor en 1986, y contribuyó decisivamente a la negociación de la Convención sobre las armas químicas, que se celebró en 1992. En el ámbito interno, ha promulgado la Weapons of Mass Destruction (Prevention of Proliferation) Act 1995 (Ley, de 1995, de prevención de la proliferación de las armas de destrucción en masa), que faculta al Gobierno para impedir el suministro de bienes o la prestación de servicios destinados a programas de desarrollo de armas de destrucción en masa.

355. El papel de Australia en relación con toda una serie de cuestiones de desarme multilateral, tanto nuclear como no nuclear, y sus aportaciones a los trabajos de la Conferencia de Desarme han sido y siguen siendo preponderantes en comparación con el tamaño de la nación australiana o su posición como potencia militar. Australia figura en el pequeño grupo de países del mundo que más activos se muestran en relación con estas cuestiones.

Artículo 7

356. La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no son tolerados en Australia y constituyen un delito penal y un ilícito civil en todas las jurisdicciones australianas. Australia ratificó el 8 de agosto de 1989 la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor respecto de Australia el 7 de septiembre de dicho año. Australia presentó su primer informe al Comité contra la Tortura el 9 de septiembre de 1991 (CAT/C/9/Add.8).

357. En general, y siempre que se haya probado la existencia del grado requerido de dolo o culpa penales, todo uso de la fuerza contra una persona es punible como agresión o un delito más grave. Los supuestos en que excepcionalmente el uso de la fuerza es lícito son, entre otros:

- Obrar en defensa propia o de un tercero, o en defensa de bienes propios o ajenos, siempre que no se utilice más fuerza de la que sea necesaria;
- Obrar en prevención de un delito, o al proceder legítimamente a una detención, siempre que no se utilice más fuerza de la que sea necesaria;
- El castigo legítimo de un niño por sus padres, maestro o persona que actúe in loco parentis, siempre que no se utilice más fuerza de la que sea razonable en las circunstancias; y
- Cuando pueda mediar consentimiento en el uso de la fuerza, como en un combate de boxeo.

358. En ningún caso se podrá utilizar la fuerza para arrancar una confesión, ni con fines de intimidación o coacción. Los funcionarios de policía tienen instrucciones de no recurrir a amenazas ni incentivos para obtener una confesión. En todas las jurisdicciones australianas, los tribunales gozan de amplias facultades discrecionales para no admitir, en los asuntos penales, ninguna prueba obtenida ilícita o ilegítimamente si su admisión puede redundar injustamente en perjuicio del acusado. Esta cuestión se analiza más en detalle en la sección relativa al artículo 14 infra, sobre el derecho a un juicio imparcial.

359. Además de la responsabilidad civil por delito legalmente exigible, la víctima del delito, o sus familiares en caso de muerte, tienen derecho, en todas las jurisdicciones, a interponer una demanda de daños y perjuicios por ilícito civil contra el autor del hecho punible u otra persona o entidad subsidiariamente responsable de la infracción (como el empleador, incluidas las Administraciones públicas). Se puede condenar a indemnizar los daños y perjuicios resultantes de lesión corporal, trauma psíquico, gastos médicos o de otro tipo y pérdida pecuniaria.

La imposición de castigos corporales a menores

360. Los párrafos 403 a 422 del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño contienen información detallada sobre los castigos a menores.

La policía

361. Los funcionarios de policía de cada jurisdicción no sólo están obligados por la legislación y las normas de common law, sino que sus obligaciones y deberes en calidad de tales están especificados más en detalle en el correspondiente código de conducta que les es aplicable. Los agentes han recibido órdenes de tratar a los detenidos con el debido respeto a su dignidad humana y han sido formados en el derecho penal aplicable en relación con sus funciones. Esa formación define los supuestos en que puede utilizarse la fuerza y subraya que ésta solo puede emplearse cuando sea necesaria y exclusivamente en la medida necesaria. Por ejemplo, las Ordenanzas sobre el Manual de Referencia del Cuerpo de Policía de Tasmania establecen:

- Que se evite toda violencia innecesaria al proceder a una detención;
- Que [los funcionarios] traten a las personas detenidas con toda la cortesía a que tienen derecho los ciudadanos;
- Que no se dé a los detenidos ningún motivo para afirmar que el trato recibido no ha sido cortés ni razonable;
- Que en el interrogatorio de una persona sospechosa de haber cometido una infracción penal está prohibido recurrir a amenazas, promesas o incentivos para obtener respuesta;
- Que el funcionario que efectúa el interrogatorio está obligado a llevar a la persona interrogada a presencia de un funcionario superior ajeno a la investigación, el cual tomará nota de las eventuales quejas acerca de la manera como la persona interrogada fue tratada por los funcionarios.

362. Las situaciones en que puede emplearse la fuerza comprenden las acciones en defensa propia, para impedir las lesiones al detenido u otras personas, para practicar una detención o para impedir la huida del detenido.

363. Las cuestiones relacionadas con el uso de la fuerza por la policía fueron tratadas en el informe titulado "Justice Under Scrutiny" ("La Justicia enjuiciada"), preparado por la Comisión Parlamentaria Permanente de Asuntos de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres como resultado del estudio sobre la aplicación por los poderes públicos de las recomendaciones de la Comisión Real de Investigación de las Muertes de Aborígenes en régimen de Detención, publicadas en noviembre de 1994.

364. En el informe se recomendaba que las Administraciones estatales aplicasen urgentemente normas de reclutamiento que incrementaran la representación indígena y llevaran a la práctica las recomendaciones de la Comisión Real sobre la coerción social de base comunitaria. Esas recomendaciones han sido sometidas al Consejo Ministerial del Poder Judicial.

365. Las cuestiones relacionadas con el uso de la fuerza por la policía también fueron examinadas en el informe del Comité Nacional sobre la Violencia, y se han adoptado medidas en la mayoría de las jurisdicciones para aplicar las recomendaciones que todavía no se hayan llevado a la práctica.

366. Toda acusación de sevicias o malos tratos contra un funcionario de policía puede dar lugar a que se formulen cargos contra él en dos órdenes distintos: el administrativo, conforme a las normas, reglamentos u ordenanzas de policía, y el judicial, ante los tribunales ordinarios. De conformidad con el common law, también se puede interponer contra los funcionarios de policía demanda de daños y perjuicios por acusación y denuncia falsas (malicious prosecution) y detención ilegal (false imprisonment). Las acusaciones de sevicias o malos tratos contra funcionarios de policía también pueden ser examinadas en virtud de la normativa legal aplicable a las denuncias contra los métodos policíacos.

Los establecimientos penitenciarios

367. Al igual que los funcionarios de policía, los funcionarios de prisiones no sólo están obligados por las normas del common law y el derecho penal, sino también por las del régimen disciplinario interno. La formación del funcionario de prisiones comprende la enseñanza en materia de custodia y bienestar de los reclusos y la capacitación en gestión de conflictos para que puedan encontrar una solución sin necesidad de la coacción física. En los casos en que resulta necesario recurrir a la coacción, se enseña a los funcionarios penitenciarios a aplicarla del modo menos lesivo y restrictivo que sea posible. Se enseña a los funcionarios a respetar la dignidad humana de los presos.

368. El régimen penitenciario varía según las jurisdicciones, pero generalmente es conforme a las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, cuyos principios aparecen recogidos en las Directrices Uniformes de Régimen Penitenciario de Australia. Estas directrices no son obligatorias para los Estados, sino que sirven de ayuda a las asambleas legislativas y las autoridades penitenciarias para elaborar la normativa sobre el régimen de los establecimiento penitenciarios.

369. En Nueva Gales del Sur, la normativa elaborada en cumplimiento de la Prisons Act 1952 (Ley Penitenciaria, de 1952) en materia de régimen disciplinario de los establecimientos penitenciarios dispone:

- El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero no se aplicarán más medidas coercitivas ni se hará más uso de la fuerza que el que sea necesario para la seguridad y el buen orden de la vida de los internos en la prisión;
- El tratamiento de los reclusos estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad;
- En sus relaciones con los reclusos, el funcionario de prisiones no deberá utilizar más fuerza de la que sea razonablemente necesaria en las circunstancias, evitándose en lo posible causar lesiones al interno. Entre las excepciones a esta regla figuran:
 - Impedir la fuga de un recluso;
 - Proceder, en su caso, al cacheo de la persona de un interno, o requisar un objeto peligroso o nocivo;
 - Proteger a terceras personas;

- Evitar un comportamiento inminente de carácter violento o destructivo de los internos;
- Están prohibidos los castigos siguientes: la reclusión en celda oscura o el aseguramiento con medios coercitivos físicos, el aislamiento en celda, el castigo corporal, la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes o cualquier otro castigo o sanción del que se pueda pensar racionalmente que perjudicará la salud física o psíquica del recluso.

370. No obstante la posición adoptada por Nueva Gales del Sur, el aislamiento en celda durante un período estrictamente limitado se mantiene como forma de sanción en la mayoría de las jurisdicciones, al igual que las dietas racionadas. La sanción de azotes ha sido abolida en todos los Estados excepto la Isla Norfolk, donde, sin embargo, no se ha aplicado nunca. Los castigos corporales fueron abolidos como pena prevista en el Código Penal de Australia Occidental en 1992. Esta pena no era aplicada por los tribunales desde 1962.

371. El régimen de los establecimientos penitenciarios se examina más a fondo en la sección relativa al artículo 10 infra, sobre la normativa penitenciaria. Los párrafos 872 a 879 del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño contienen información más detallada sobre los menores.

372. Los parlamentos de todas las jurisdicciones australianas han promulgado leyes que regulan el internamiento, tratamiento, revisión y alta de las personas con trastornos mentales. Los detalles de la normativa legal aplicable varían según las jurisdicciones. En algunas de ellas, la demanda de declaración de internamiento de una persona aquejada de un trastorno mental debe ser objeto de juicio contradictorio, mientras que en otras el ingreso puede hacerse por indicación médica.

373. Las disposiciones legales sobre salud mental tipifican como delito maltratar o desatender maliciosamente a una persona aquejada de un trastorno mental que recibe tratamiento psiquiátrico. La negligencia incurrida en el tratamiento o la atención a un paciente también puede dar lugar a responsabilidad civil, no solo por el daño ocasionado al paciente sino también por el causado a terceros.

374. Dada la dificultad de que pacientes ingresados en establecimientos psiquiátricos puedan hacer uso de las vías de recurso habituales, la normativa legal sobre salud mental de varias jurisdicciones comprende disposiciones destinadas a ayudarlos de otro modo. Las disposiciones de la mayoría de las jurisdicciones prevén visitas frecuentes a las instituciones de un Visitador Oficial (o equivalente), quien debe ofrecerse para acoger las quejas o denuncias y goza de una amplia potestad discrecional para realizar investigaciones, exámenes e inspecciones. La normativa suele exigir también que se lleve un registro completo del tratamiento dispensado a los pacientes. Las cartas dirigidas por los pacientes a determinados funcionarios (por ejemplo, los miembros del parlamento o el poder judicial, las autoridades de salud mental, el Visitador Oficial o el Médico Jefe) deben ser transmitidas, sin abrir, a esos funcionarios. La normativa de salud mental también contiene disposiciones sobre la revisión periódica de la evolución de los pacientes y su alta.

375. Como la Ley, de 1986, reguladora del Consejo de Tutela y Curatela del Estado de Victoria, la Guardianship and Administration Act 1990 (Ley, de 1990, de Tutela y Curatela) de Australia Occidental dispone el nombramiento de un curador para las personas con discapacidades cuando no puedan velar por su propia salud o seguridad, sean incapaces de discernimiento o requieran supervisión en beneficio de su salud y seguridad o protección y necesiten ser sometidas a la guarda de otra persona. Los curadores son nombrados por el Consejo de Tutela y Curatela, el cual procede a esa designación si no le consta que hay un medio menos restrictivo de atender a las necesidades de esa persona.

376. La misma ley establece además la Oficina del Tutor Público, entre cuyas funciones están la de actuar como abogado asesor del Consejo, examinar las demandas presentadas al Consejo, someter informes al Consejo, investigar las denuncias o acusaciones, solicitar asistencia para el tutelado o propuesto tutelado y proporcionarle información y asesoramiento, y fomentar el conocimiento y la comprensión del público difundiendo información acerca de las funciones del Consejo de Tutela y Curatela, la Oficina del Tutor Público y los tutores y curadores.

377. La Ley, de 1993, de Tutela y Curatela de Australia del Sur regula la protección de las personas con deficiencias de carácter psíquico debidas a cualquier causa. Dicha Ley establece:

- El nombramiento de un representante y administrador para que actúe en nombre de la persona sujeta a tutela o curatela;
- El sometimiento a control judicial de ciertas decisiones esenciales para la vida del tutelado;
- La creación de un Defensor Público (Public Advocate) y tutor de última instancia para promover los intereses individuales y colectivos de las personas con deficiencias de carácter psíquico;
- La imposición de una pena a quienes contravengan a lo dispuesto en la Ley.

378. El Gobierno de Tasmania ha presentado recientemente al Parlamento el Proyecto de ley de tutela y curatela, de 1995, que establece un sistema análogo al que se aplica en Victoria y Australia Occidental.

379. El tratamiento terapéutico de las personas aquejadas de trastornos mentales queda en gran parte a criterio del facultativo médico encargado de aplicarlo. No obstante, el uso de drogas se rige por la normativa legal sobre sustancias tóxicas vigente en cada jurisdicción. El recurso a medios coercitivos físicos y al aislamiento está regulado en algunas jurisdicciones, y en varias de ellas no se pueden aplicar ciertos tipos de terapia sin el consentimiento previo, en particular, del pariente más próximo del paciente.

380. Los facultativos médicos deben observar en el tratamiento de las enfermedades mentales el mismo alto grado de diligencia que en el caso de otras enfermedades. Si ese nivel de diligencia no ha sido observado y el paciente resulta perjudicado, el médico puede ser perseguido judicialmente en los ámbitos tanto penal como civil.

381. Las medidas estatales de prevención de la detención arbitraria de personas por motivos de enfermedad mental se examinan más a fondo en la sección relativa al artículo 9 infra, bajo el epígrafe "Las enfermedades mentales".

382. Salvo en una emergencia, el consentimiento del paciente, o de quienes estén legitimados legalmente para dar ese consentimiento, es un requisito necesario para que el médico pueda aplicar un tratamiento al paciente o practicar una operación. Este requisito se aplica a todos los pacientes, sean o no enfermos mentales y se encuentren o no bajo la guarda de un tercero.

383. Australia apoya la Declaración de Helsinki, aprobada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, 1964, y revisada por la 19ª Asamblea Médica Mundial, Tokio, 1975, así como las Reglas éticas internacionales para la investigación y experimentación biomédica en seres humanos publicadas en 1982 por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas ha publicado unas directrices, que actualiza periódicamente, en forma de una declaración sobre la experimentación en seres humanos y las notas suplementarias correspondientes. Muy brevemente, esas directrices requieren que la experimentación en seres humanos solo se efectúe con personas que hayan consentido libremente en participar con pleno conocimiento de lo que se trata y a sabiendas de que su bienestar y sus derechos individuales quedan debidamente protegidos.

384. La declaración requiere asimismo que los investigadores que practican la experimentación en seres humanos conozcan bien todos los aspectos de su campo de investigación y sean plenamente competentes en ellos y, además, que se atengan a los protocolos de investigación aprobados por los comités de ética de los organismos competentes. Esta declaración no tiene fuerza de ley sino que tiene por objeto fundamentalmente servir de guía en cuestiones de ética relacionadas con la experimentación en seres humanos para los investigadores y el personal de dirección de los organismos dedicados a la experimentación en seres humanos de Australia. Sin embargo, el hecho de que los investigadores sepan que si no se atienen a las directrices pueden perder sus subvenciones constituye un mecanismo regulador muy potente y eficaz.

385. De conformidad con la organización federal de Australia, los parlamentos estatales son competentes para legislar en este campo. Tres Estados, Victoria, Australia del Sur y Australia Occidental han aprobado leyes específicas para regular las técnicas reproductoras y la experimentación con embriones. En esos tres Estados las leyes prohíben las investigaciones que puedan ser nocivas para el embrión. Por otra parte, las directrices éticas publicadas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas tratan de la experimentación con embriones. Esas directrices, que están siendo revisadas, permiten la experimentación embriológica, excepto los experimentos de clonación, a condición de que el desarrollo embrionario no continúe más allá de la fase en que normalmente se produciría la implantación.

Artículo 8

386. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en Australia de conformidad con las disposiciones de la Slavery Abolition Act 1833 (Ley, de 1833, de Abolición de la Esclavitud) y la Slave Trade Act 1842 (Ley, de 1842, sobre la Trata de Esclavos) del Reino Unido, que siguen en vigor en toda

Australia. Australia también ha ratificado la Convención sobre la Esclavitud, de 1926, y la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, de 1956. Australia ha notificado a las Naciones Unidas, en cumplimiento de la resolución pertinente de la Asamblea General, que considera que sus leyes y prácticas son conformes a lo dispuesto en esas Convenciones. Australia también es parte en varias convenciones de las Naciones Unidas relativas a la trata de personas.

387. Además, en Australia el derecho penal y el derecho civil amparan a las personas de actos similares a la esclavitud o la servidumbre. Por ejemplo, la retención o secuestro (abduction) es un acto prohibido en toda Australia mediante la configuración por el ordenamiento punitivo de una variedad de tipos legales, como el rapto (de una mujer o, en algunas jurisdicciones, de cualquier persona) con una finalidad sexual, la sustracción de menores (child stealing) y el secuestro de personas (kidnapping) o el apoderamiento ilícito de buques o aeronaves (hijacking). Toda fuerza o violencia física contra una persona, o la amenaza de emplear esa fuerza o violencia, sin que medie consentimiento, es un acto tipificado como delito y también da lugar a una acción civil de indemnización por daños y perjuicios.

388. También es un acto antijurídico privar total o parcialmente de libertad a una persona, intencionalmente y sin motivo legítimo. El interesado, o sus parientes o allegados, pueden instar el procedimiento de hábeas corpus y ejercitar una acción de indemnización de daños y perjuicios por el ilícito civil de intromisión ilegítima (trespass) o detención ilegal (false imprisonment).

389. Los servicios australianos encargados de hacer cumplir la ley han descubierto recientemente pruebas de la trata de hombres, mujeres y niños asiáticos que son introducidos en Australia para dedicarlos a la prostitución. Preocupa a Australia conseguir la eliminación de esas prácticas y está estudiando la manera de garantizar que los infractores sean enjuiciados y castigados debidamente.

390. La violencia contra la mujer cometida por hombres suele implicar formas de maltrato que se traducen en coerción física, servidumbre sexual, aislamiento social forzado o privación económica. La respuesta de los poderes públicos a la cuestión general de la violencia contra la mujer se ha examinado en relación con el artículo 3.

391. Las leyes reguladoras de la prostitución, generalmente definida como el trato sexual vaginal, anal, bucal o manual entre personas del mismo sexo o de sexo diferente (incluidos los transexuales) mediante precio, varían según los Estados. La prostitución en sí es legal en toda Australia, pero las conductas concomitantes a la prostitución o relacionadas con ella son objeto de sanción penal. Desde 1985, la tendencia en Australia ha sido favorable a despenalizar y reglamentar la prostitución. Esta política refleja el reconocimiento de que, en todo el mundo, las sanciones penales han resultado ser ineficaces para reducir los casos de prostitución, han dado pie a la corrupción policial y han permitido la explotación de las prostitutas en detrimento de sus derechos humanos.

392. La legislación de la mayoría de los Estados impide que una persona que practica la prostitución se halle bajo la dependencia de otra persona. Por ejemplo, en la mayoría de las jurisdicciones australianas sigue estando

prohibido vivir de las ganancias de un trabajador del sexo (véase la Summary Offences Act 1953 (Ley, de 1953, sobre Faltas y Delitos Menos Graves) del Estado de Australia del Sur, la Police Offences Act 1935 (Ley, de 1935, sobre Contravenciones) del Estado de Tasmania y la Police Act 1892 (Ley de Policía, de 1892) del Estado de Australia Occidental). En Nueva Gales del Sur, vivir de las ganancias de una prostituta es ilegal actualmente (véase la Summary Offences Act 1988 (Ley, de 1988, sobre Faltas y Delitos Menos Graves)), pero a tenor de lo dispuesto en la Disorderly Houses Amendment Act 1995 (Ley, de 1995, por la que se enmienda la normativa aplicable a las casas de mala nota), que todavía tiene que pasar el trámite del examen en la Cámara Alta de Nueva Gales del Sur, no están comprendidos los gerentes, propietarios y trabajadores de los prostíbulos. Las prostitutas callejeras quedarán excluidas, por lo que seguirá siendo ilegal vivir de las ganancias de la prostitución en la vía pública. En Victoria, según la Prostitution Control Act 1994 (Ley, de 1994, para el Control de la Prostitución) comete un delito punible el que a sabiendas viviere en todo o en parte o se beneficiare materialmente de las ganancias de la prostitución, a no ser que la Junta de Control de la Prostitución le haya concedido la correspondiente licencia. La Ley, de 1994, para el Control de la Prostitución eleva a la categoría de delito punible obligar a una persona a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, o a proporcionar ayuda financiera a costa de la prostitución, por medio de violencia, amenaza, intimidación o suministro de drogas.

393. Algunos cuerpos legislativos han adoptado medidas específicas para impedir que se obligue a una persona a dedicarse a la prostitución. En Victoria, la Ley, de 1994, para el Control de la Prostitución tipifica como delito el hecho de obligar a una persona, por medio de violencia, amenaza, intimidación o suministro de drogas, o interviniendo engaño, falsedad u otros medios fraudulentos, a dedicarse a la prostitución o mantenerse en ella, o a proporcionar ayuda financiera a costa de la prostitución. En el Territorio del Norte, la Prostitution Regulation Act 1992 (Ley, de 1992, de Reglamentación de la Prostitución) incluye tipos penales análogos. En Queensland, el Código Penal prohíbe determinar por medios coactivos a una persona a satisfacer los deseos sexuales de otra.

394. Además, suele ser delito dirigir o regentar un prostíbulo o burdel (véase la Ley, de 1953, sobre Faltas y Delitos Menos Graves del Estado de Australia del Sur, el Código Penal del Estado de Tasmania y la Ley de Policía, de 1892, del Estado de Australia Occidental). En Victoria, la Ley, de 1994, para el Control de la Prostitución dispone que, para abrir y explotar un prostíbulo, es preciso obtener la licencia de explotación. En Nueva Gales del Sur no es delito regentar un burdel, pero está prohibido entrar en una "casa de mala nota". Con arreglo a la Disorderly Houses Act 1943 (Ley, de 1943, sobre Casas de Mala Nota), los locales utilizados habitualmente para la prostitución pueden ser declarados "casa de mala nota". La nueva Ley, de 1995, por la que se enmienda la normativa aplicable a las casas de mala nota eliminará la posibilidad de que un burdel se defina automáticamente como "casa de mala nota" por el mero hecho de ser un burdel. En adelante, un burdel será una "casa de mala nota" cuando haya verdadero libertinaje, por ejemplo sea ruidoso o violento. En el Territorio de la Capital de Australia, constituye delito conforme a la Prostitution Act 1992 (Ley, de 1992, sobre Prostitución) la falta de notificación a la Oficina de Registro de Burdeles y Agencias de Acompañantes de la explotación de un burdel dentro de los siete días siguientes a su apertura. Sin embargo, la explotación del burdel no es ilegal. En el Territorio del Norte, la Prostitution Control Act

1994 (Ley, de 1994, para el Control de la Prostitución) tipifica como delito regentar un burdel, aunque establece un sistema de licencias para las "agencias de acompañantes" en virtud del cual toda persona puede pedir una licencia de explotación a la Junta de Concesión de Licencias.

395. Los poderes públicos federales también han tomado disposiciones para impedir el tráfico internacional de niñas y mujeres con fines de prostitución. Los métodos empleados son:

- Supervisar las solicitudes de visado de los países calificados de "alto riesgo";
- Cooperar con los gobiernos extranjeros para mejorar las investigaciones criminales a través de las fronteras; y
- Sancionar penalmente a las personas que importan mujeres para trabajar ilegalmente como prostitutas.

396. La normativa legal federal sobre la explotación sexual del menor en el extranjero por australianos se examina más a fondo en los párrafos 1735 a 1738 del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño.

397. Aunque en Australia no hay leyes que específicamente consideren punible como delito obligar a otro a realizar un trabajo forzoso u obligatorio, la legislación civil y penal establece algunas sanciones que pueden ser pertinentes en caso, por ejemplo, de lesiones (assault), práctica ilegal de la detención (unlawful arrest) y detención ilegal (false imprisonment). Australia es parte tanto en el Convenio N° 29 (Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, de 1930) como en el Convenio N° 105 (Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso, de 1957) de la OIT.

398. En Australia, los contratos para la realización de una obra o servicio determinado y los contratos de trabajo se conciertan libremente de conformidad con los principios normales del derecho de obligaciones y pueden resolverse con arreglo a las cláusulas del contrato, generalmente mediante notificación hecha a las partes. En caso de incumplimiento del contrato, el tribunal generalmente no otorgará la ejecución específica. Cualquier cláusula de un contrato que pueda entenderse que contiene elementos de servidumbre o trabajo forzoso muy probablemente será declarada contraria al orden público y, por consiguiente, inejecutable.

399. Las cláusulas y condiciones de la mayoría de las formas de empleo están reguladas en toda Australia por las leyes laborales, los convenios colectivos o acuerdos de empresa y las resoluciones de los tribunales de lo social, que difieren solo en los detalles. Las leyes laborales regulan cuestiones como las medidas de seguridad, los horarios de trabajo y la remuneración de los trabajadores. Las resoluciones de los tribunales de lo social y los convenios colectivos o acuerdos de empresa regulan cuestiones como las categorías y grupos profesionales, el salario mínimo y las condiciones de trabajo. La protección de los menores y jóvenes a este respecto se examina más a fondo en relación con el artículo 24.

400. En la mayoría de las jurisdicciones australianas, las personas declaradas culpables de un delito común o una falta de common law pueden ser condenadas a una pena de prisión con trabajos forzados durante una parte de su condena. En los casos en que se exige ese trabajo o servicio de una persona como consecuencia de su condena, su ejecución se efectúa bajo la supervisión y el control de una autoridad pública, que suele actuar a tenor de la Ley Penitenciaria aplicable. La pena de prisión con trabajos forzados fue abolida en Australia Occidental en diciembre de 1992 y en el Territorio del Norte el 1º de enero de 1984, al promulgarse del Código Penal. De conformidad con la Prison (Correctional Services) Act 1980 (Ley Penitenciaria (Instituciones Penitenciarias), de 1980) del Territorio del Norte, los penados tienen el deber de realizar los trabajos que les ordene el Director de Régimen, quien debe tener en cuenta las aptitudes físicas y médicas del penado. En el Territorio de la Capital de Australia, la pena de prisión con trabajos forzados no es aplicable. A tenor de la Corrections Act 1986 (Ley, de 1986, de Instituciones Penitenciarias) del Estado de Victoria, el Director General de Administración Penitenciaria puede ordenar a cualquier penado a que participe en el programa de trabajo aprobado por el Director General. La pena de trabajos forzados fue abolida en Australia del Sur en virtud de la Criminal Law (Sentencing) Act 1988 (Ley Penal, de 1988 (Penas)).

401. En toda Australia se aplican actualmente una serie de regímenes sustitutivos del régimen penitenciario abierto, es decir, aquel en que las medidas de seguridad son menos estrictas. Estos diversos sistemas comprenden el internamiento periódico (por ejemplo, los arrestos de fin de semana), las órdenes de comparecencia (que entrañan estudio y formación académicas), el trabajo fuera del establecimiento penitenciario y los trabajos en beneficio de la comunidad. De todos ellos, solo el de trabajos en beneficio de la comunidad es pertinente en relación con este artículo. Con arreglo al sistema de trabajos en beneficio de la comunidad, puede ordenarse a un condenado, como pena sustitutiva de la privación de libertad, que se presente periódicamente para realizar trabajos no remunerados en beneficio de la comunidad. El Gobierno de Australia estima que este tipo de sistemas son conformes a las disposiciones de este artículo.

402. En casi todas las jurisdicciones se han adoptado disposiciones sobre algún sistema de trabajos en beneficio de la comunidad. Por ejemplo, en 1983 entró en vigor en el Territorio de la Isla Norfolk la Community Service Orders Act (Ley de Penas de Trabajos en Beneficio de la Comunidad). A tenor de esta Ley, el tribunal solo puede imponer al condenado una pena de trabajos en beneficio de la comunidad con el consentimiento de éste. En cualquier caso, el número de horas de trabajos en beneficio de la comunidad que pueden imponerse es proporcional a la duración de la pena de prisión que se impondría al reo.

403. Los trabajos que pueden exigirse a cualquier persona que se haya incorporado como voluntario a las fuerzas armadas o que, en caso de amenaza contra la seguridad nacional, haya sido llamada a cumplir obligaciones militares serán necesariamente, conforme a lo dispuesto en la Federal Defence Act 1903 (Ley Federal, de 1903, de Defensa), de carácter exclusivamente militar. Actualmente no existe en Australia el servicio militar obligatorio en tiempo de paz y las únicas disposiciones sobre obligaciones militares figuran en la National Service Act 1951 (Ley, de 1951, del Servicio Nacional), aunque no han sido aplicadas desde 1973.

404. Se puede ordenar al personal militar que colabore en las situaciones de emergencia mencionadas en la sección relativa al artículo 4. Este trabajo obligatorio de carácter no militar solo se impone en los supuestos previstos en el inciso iii) del apartado c) del párrafo 3 del artículo 8 y, por consiguiente, no es contrario a sus disposiciones.

Artículo 9

405. En Australia, se puede privar de libertad a una persona en los supuestos siguientes:

- A raíz de haber sido detenida por un delito, cuando esa persona se halla en detención preventiva antes de ser puesta a disposición de la autoridad judicial;
- A raíz de su ingreso en un establecimiento penitenciario, que solo puede hacerse mediante resolución judicial;
- A raíz de su detención por no encontrarse legalmente en el país, con objeto de incoar procedimiento de expulsión; y
- En los casos en que se proceda a su internamiento en una institución no penitenciaria, por ejemplo un hospital o establecimiento psiquiátrico o en un centro de reeducación de menores.

406. Además, en ciertos campos está autorizada una intervención protectora: salud mental, enfermedades contagiosas, alcoholismo y toxicomanías y menores sujetos a guarda o protección.

407. Sin embargo, la libertad y seguridad personales están garantizadas en cada una de las jurisdicciones australianas por el common law. La legislación aplicable incorpora también garantías para prevenir los abusos.

Las enfermedades mentales

408. En todas las jurisdicciones australianas, cualquier persona puede ser ingresada obligatoriamente por un tiempo limitado en un hospital para ser sometida a observación y diagnóstico (por ejemplo, por orden de un magistrado (magistrate, o juez lego) a instancia de un familiar o de la policía). El internamiento en un hospital, en cambio, requiere en algunas jurisdicciones una resolución de un tribunal de justicia (court) o, en otras, una recomendación de internamiento de dos facultativos independientes por lo menos. Son varios los mecanismos previstos para la puesta en libertad de los pacientes. Unos consisten en el internamiento por un período determinado, seguido de una revisión formal (por ejemplo, ante un tribunal de salud mental). Otros recurren a un sistema de revisión periódica ordinaria. En cada jurisdicción, la solicitud de puesta en libertad debe presentarse a la autoridad prevista en la ley o al Tribunal Superior de Justicia (Supreme Court). En las secciones siguientes se examinan detalladamente la legislación federal y las leyes estatales.

En el ámbito federal

409. Los capítulos sexto a noveno del Título I, sección B, de la Ley Penal Federal, de 1914, entraron en vigor el 17 de julio de 1990. Este instrumento

legislativo establece un nuevo régimen general aplicable a las personas a las que se ha declarado carentes de la capacidad para comparecer en juicio o exentas de responsabilidad criminal por causa de enajenación mental. Antes de la aplicación de este nuevo régimen, las personas declaradas faltas de capacidad procesal penal o exentas de responsabilidad criminal por causa de enajenación mental podían permanecer detenidas a discreción del Gobernador General.

410. Si hay indicios racionales de la existencia de un delito grave, el tribunal puede decretar el internamiento en un hospital si resuelve:

- Que el inculcado carece de la capacidad para comparecer en juicio, pero que la recobrará en el plazo de 12 meses;
- Que el inculcado podrá recibir tratamiento terapéutico en un hospital; y
- Que el inculcado no se opone a ser ingresado en el hospital.

411. Si no se reúnen las condiciones antedichas, el tribunal puede decretar el internamiento en un centro no hospitalario o la libertad provisional. La vigencia de estos autos termina cuando el inculcado recobra su capacidad procesal penal (en cuyo momento se reanuda el proceso) o a la expiración del plazo de 12 meses, si este momento es anterior.

412. Si transcurridos 12 meses el inculcado sigue falto de capacidad para comparecer en juicio, el tribunal debe resolver nuevamente si existe un tratamiento y, si el inculcado no se opone, puede decretar su internamiento en un hospital. Si no, el tribunal puede decretar la libertad definitiva o provisional del inculcado. Las condiciones impuestas tienen vigencia por un plazo máximo de tres años.

413. Si el inculcado hace objeción al internamiento, el tribunal puede decretar que sea internado en un centro no hospitalario. El período de internamiento no podrá exceder de la duración de la pena máxima de prisión que se le hubiera podido imponer de haber sido declarado culpable del delito que se le imputa. El Fiscal General Federal debe revisar la aplicación del auto cada seis meses para determinar si el inculcado debe ser puesto en libertad. Al cumplir este cometido, el Fiscal General debe tener en cuenta los dictámenes, en particular los dictámenes psiquiátricos. El auto de libertad provisional puede imponer condiciones durante cinco años y puede ser revocado por el Fiscal General en cualquier momento dentro de ese plazo. Si se revoca el auto de libertad provisional de un inculcado, el Fiscal General revisa el auto cada seis meses para determinar si debe o no proseguir el internamiento.

414. Si en una causa instruida por un delito grave se dicta el sobreseimiento libre por razón de enajenación mental, el tribunal puede decretar que el inculcado sea internado en un centro hospitalario o penitenciario por un período que no exceda de la duración de la pena de prisión que le hubiera sido impuesta de haber sido condenado en el proceso. Las atribuciones y deberes del Fiscal General Federal o, en caso de urgencia, de un funcionario del Estado en que se encuentra detenida esa persona son los mismos que en caso de continuación del internamiento de una persona sin capacidad procesal penal.

415. La pena que puede imponer a un enfermo mental el tribunal competente en un proceso penal instruido por un delito grave es la de internamiento de esa persona en un hospital u otro establecimiento para que pueda recibir tratamiento terapéutico-asistencial. La duración de esa pena no puede exceder de la de la pena de prisión que se le hubiera impuesto de haber sido condenada.

En el ámbito estatal

Territorio de la Capital de Australia

416. La Mental Health (Treatment and Care) Act 1994 (Ley, de 1994, de Salud Mental (Tratamiento y Asistencia)) fue promulgada en respuesta a las recomendaciones contenidas en el informe sobre igualdad de derechos del Comité de Examen de la Salud Mental del Territorio de la Capital de Australia. Los objetivos de la Ley son, entre otros, proporcionar tratamiento, asistencia, rehabilitación y protección a las personas con disfunción psíquica de la forma que resulte menos restrictiva para sus derechos humanos. El artículo 9 prevé la defensa de la libertad, dignidad y autoestima de las personas con disfunción psíquica.

417. El Título V de la Ley regula el internamiento de urgencia en un establecimiento aprobado de las personas con disfunción psíquica. Los funcionarios de policía, los médicos colegiados o los técnicos de salud mental pueden detener a cualquier persona aparentemente aquejada de una disfunción psíquica:

- Si creen fundadamente que esa persona está aquejada de una disfunción psíquica y consiguientemente requiere tratamiento o asistencia inmediatos y si se ha negado a recibir tratamiento o asistencia; y
- Si creen fundadamente que su internamiento es necesario en beneficio de su propia salud o seguridad o para la protección de los ciudadanos.

418. En el caso del facultativo médico y el técnico de salud mental se aplica además otro requisito: el de que crean fundadamente que no se le puede proporcionar tratamiento o asistencia adecuados en un medio menos restrictivo.

419. El funcionario de policía, el médico o el técnico de salud mental deben presentar lo antes posible un dictamen al encargado del establecimiento aprobado en que haya sido ingresada la persona de que se trate. En su dictamen deben especificar los motivos de la medida adoptada y el grado de fuerza o de asistencia requeridos para entrar en edificios o lugares cerrados y aprehender a esa persona. Dentro de las cuatro horas siguientes a su ingreso en el establecimiento, esa persona debe ser examinada por un médico, quien puede autorizar que se la mantenga en internamiento durante 72 horas como máximo. El Defensor del Menor o Incapacitado (Community Advocate) y el Tribunal de Salud Mental (Mental Health Tribunal) deben ser informados del internamiento de urgencia dentro de las 12 horas siguientes a la autorización. En un plazo de 24 horas contadas desde el internamiento de urgencia debe procederse al examen físico y psiquiátrico de la persona sometida a internamiento. El Tribunal puede decretar la continuación del internamiento durante siete días como máximo contados desde la expiración del plazo inicial.

420. El Título VI de la Ley establece los derechos de las personas con disfunción psíquica ingresadas en el establecimiento aprobado o que reciben tratamiento en él, en particular el suministro de cierta información en un lenguaje comprensible para no especialistas. Esta información comprende el derecho a obtener asistencia letrada y a solicitar una segunda opinión de un profesional de salud mental competente. También tienen derecho a comunicarse con las personas de su elección y el establecimiento debe proporcionar, a petición del interesado, medios para comunicarse por escrito. El Tribunal de Salud Mental es un nuevo órgano creado por la Ley que sustituye al Tribunal de Magistrados (Magistrates' Court) como órgano competente para resolver en los asuntos relacionados con las personas aquejadas de una disfunción psíquica. El Tribunal conoce de las demandas de puesta en libertad de las personas sometidas a internamiento involuntario con arreglo a la Ley.

421. La Ley, de 1991, reguladora del Defensor del Menor o Incapacitado dispone el nombramiento de un Defensor del Menor o Incapacitado, entre cuyas atribuciones figura proteger los derechos de las personas con una discapacidad legal (por razón de edad), física, psíquica, psicológica o intelectual y de cualquier persona cuyo estado la convierta en paciente de la medicina forense.

La Ley Penal Enmendada, de 1994

422. Como en el caso de la legislación federal y de Nueva Gales del Sur, la Ley Penal Enmendada, de 1994, junto con el Título VIII de la Ley, de 1994, de Salud Mental (Tratamiento y Asistencia), establecen un nuevo régimen aplicable a las personas a las que se ha declarado faltas de capacidad procesal penal o exentas de responsabilidad criminal por causa de enajenación mental. El Tribunal de Salud Mental es competente para resolver si una persona tiene o no capacidad para comparecer en juicio. Si se declara incapacitada a una persona para comparecer en juicio y responder de los cargos que se le imputan, en un plazo de 12 meses el tribunal juzgador debe celebrar una vista especial. En esa vista, el tribunal puede fallar que el acusado no es culpable y dictar sentencia absolutoria; si no es absuelto, el acusado puede ser remitido al Tribunal de Salud Mental para que dicte resolución sobre su salud mental o decrete su internamiento. El Tribunal de Salud Mental debe revisar cada seis meses, por lo menos, el caso de las personas sometidas a internamiento, y tiene competencia para decretar su puesta en libertad cuando sea apropiado. Cuando un tribunal decreta en una causa penal seguida contra una persona el sobreseimiento libre por razón de enajenación mental, puede resolver que esa persona se someta a la jurisdicción del Tribunal de Salud Mental para que éste dicte resolución sobre su salud mental o decrete su internamiento. En este último caso, el Tribunal debe revisar la situación de esa persona cada seis meses, por lo menos, y tiene competencia para decretar su puesta en libertad cuando sea apropiado. Salvo que se trate de un delito grave, el tribunal sentenciador también es competente para dictar las resoluciones que estime convenientes (incluida la puesta en libertad del inculpado) cuando declara a una persona exenta de responsabilidad criminal por causa de enajenación mental o a raíz de una vista especial.

423. La Ley Penal Enmendada, de 1994, fija un límite al internamiento del enajenado mental, puesto que su duración no puede exceder de la de la pena máxima de prisión que hubiera podido imponérsele de haber sido declarado culpable del delito correspondiente en un proceso penal ordinario.

Nueva Gales del Sur

424. En Nueva Gales del Sur, la Mental Health Act 1990 (Ley, de 1990, de Salud Mental) establece garantías contra la detención arbitraria de personas por motivos de salud mental. Un enajenado mental no puede ser ingresado ni internado en un hospital a menos que el médico jefe opine que ningún otro tipo de asistencia menos restrictivo es apropiado y razonablemente asequible a esa persona.

425. Los mecanismos principales para el ingreso de una persona como paciente involuntario en un hospital psiquiátrico son tres:

- Por indicación médica, mediante certificado extendido por un facultativo que debe haber examinado personalmente al paciente;
- A instancia de un pariente, allegado o asistente social, mediante solicitud presentada por escrito. La solicitud se presenta al médico jefe del hospital, quien debe tener constancia de la urgencia de la situación y de que el acceso a un facultativo médico es, dadas las circunstancias, difícil;
- Por orden gubernativa o judicial. La policía puede detener a una persona y llevarla a un hospital si descubre a esa persona en un lugar público y estima que padece enajenación mental y que ha cometido recientemente un delito o hay riesgo de que pueda autolesionarse. Una persona que comparece en juicio acusada de un delito menos grave puede ser enviada por orden del tribunal a un hospital psiquiátrico para examen y diagnóstico si aparentemente esa persona está comprendida en el ámbito de la legislación sobre salud mental.

426. En todos esos supuestos, la persona debe ser examinada por un médico dentro de las 12 horas siguientes a su ingreso en el hospital y, si se ha decretado su internamiento, debe ser examinada lo antes posible por un segundo facultativo (al menos uno de esos médicos debe ser un psiquiatra). De haber desacuerdo acerca de la procedencia del internamiento, el paciente debe ser examinado por un tercer médico (psiquiatra). La persona a la que se haya diagnosticado un trastorno mental pueden ser objeto de una medida de internamiento durante tres días como máximo. Los enfermos mentales deben ser puestos a disposición judicial lo antes posible. Un magistrado (magistrate) visita una vez por semana todos los hospitales psiquiátricos en que haya personas sometidas a internamiento y, si estima que un paciente sufre enajenación mental, podrá decretar su internamiento durante tres meses como máximo. Existe un derecho de apelación al Tribunal de Revisión de Salud Mental (Mental Health Review Tribunal). El Tribunal conoce también de las solicitudes de los médicos jefe que desean prorrogar el internamiento de un paciente por un tiempo superior al decretado originalmente por el magistrado (magistrate).

427. De conformidad con la Ley, de 1990, de Salud Mental, el Tribunal de Salud Mental debe proceder cada seis meses a un juicio de revisión respecto de cada paciente sujeto a internamiento para determinar si sigue sufriendo enajenación mental y debe proseguir el internamiento. La resolución del Tribunal, o su abstención o negativa a resolver, pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia (Supreme Court).

428. Del mismo modo que la legislación federal mencionada anteriormente, la Mental Health (Criminal Procedures) Act 1990 (Ley, de 1990, de Salud Mental (Proceso Penal)) regula especialmente el caso del presunto incapaz para comparecer en juicio por causa de enajenación mental. Un jurado o, en algunos supuestos, un juez por sí solo puede declarar a una persona incapacitada para ser juzgada por un delito por causa de enajenación mental. Después de esa declaración, basada en el grado de probabilidad, el tribunal debe remitir a esa persona al Tribunal de Salud Mental, que resolverá si la persona recobrará o no la capacidad para comparecer en juicio, resolución de la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (Supreme Court).

429. Si el Tribunal declara a la persona incapacitada para comparecer en juicio durante los 12 meses siguientes, el Fiscal General del Estado de Nueva Gales del Sur puede promover una vista especial de la causa o proponer que se dicte el sobreseimiento de las actuaciones. En este último caso, el tribunal debe decretar la puesta en libertad del inculpado. Si en una vista especial el jurado o tribunal emite un veredicto o dicta un fallo declarando al acusado exento de responsabilidad criminal por causa de enajenación mental, el tribunal debe decretar su internamiento en el establecimiento que estime adecuado hasta su puesta en libertad conforme al debido procedimiento legal.

Territorio del Norte

430. En el Territorio del Norte, la Mental Health Act 1980 (Ley, de 1980, de Salud Mental) dispone el internamiento obligatorio de los enajenados mentales. Con arreglo a esta Ley, un magistrado (magistrate) puede autorizar el internamiento de una persona por una duración de tres días si esa persona sufre una enfermedad mental que requiera tratamiento, es incapaz de gobernarse por sí misma y hay riesgo de que cause un daño a sí misma o a los demás. Para que el internamiento se prolongue después del tercer día es necesario que el Médico Forense Jefe del Territorio del Norte inste a un magistrado (magistrate) a que dicte un auto a tal efecto. En estos casos la autorización judicial no suele exceder de seis meses.

431. El médico de guardia en un hospital o cercano a él, o un funcionario de policía, pueden ordenar el internamiento de una persona que padezca una enfermedad mental sin autorización judicial. Para poder ordenar el internamiento sin autorización judicial es preciso que el facultativo o funcionario haya llegado a la conclusión de que esa persona es un enfermo mental y esté convencido:

- De que requiere asistencia y vigilancia y no es capaz de gobernarse por sí misma; o
- De que no recibe la asistencia ni está sujeta a la vigilancia adecuadas; o
- De que existe el riesgo de que se cause a sí mismo la muerte o un daño grave o de que los cause a otro; y
- De que debe ser sometida a internamiento en beneficio propio y de la comunidad.

432. Dentro de las 24 horas siguientes al internamiento sin autorización judicial, el Médico Forense Jefe debe pedir a un magistrado (magistrate) que dicte un auto a tal efecto. En un plazo de tres días, el Médico Forense Jefe debe recibir el dictamen de dos facultativos médicos independientes favorable al tratamiento del enfermo mental. Cada seis meses se repite el proceso.

433. Las personas que comparecen ante un magistrado (magistrate) tienen derecho a ser asistidos por un letrado. La persona objeto del auto, un pariente o tutor, el Médico Forense Jefe o un tercero interesado pueden instar al Tribunal Superior de Justicia (Supreme Court) a que revise el auto del magistrado (magistrate).

434. Actualmente, la Ley, de 1980, de Salud Mental está siendo revisada.

Queensland

435. La Mental Health Act 1974 (Ley, de 1974, de Salud Mental) dispone el internamiento de los enfermos mentales. La Ley se aplica asimismo a los toxicómanos y disminuidos psíquicos. La Ley, de 1991, de Salud Mental están siendo revisada para ponerla en consonancia con los Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, de las Naciones Unidas.

436. La Ley establece tres mecanismos posibles de internamiento no voluntario:

- La demanda de internamiento, formalizada por el pariente más próximo u otra persona autorizada de conformidad con el Reglamento de Salud Mental, de 1985, secundada por un facultativo médico colegiado. El internamiento con arreglo a este mecanismo tienen una duración de solo 72 horas. Su prórroga depende del dictamen de otro facultativo médico;
- La orden expedida por un juez de paz (justice of the peace), a instancia de un ciudadano formalizada ante un tribunal de justicia. Si es dictada por el tribunal, la policía puede detener a la persona para que sea examinada por un facultativo médico colegiado y una persona autorizada. Si esas personas convienen en ello, el detenido puede ser ingresado en un hospital para ser examinado. La persona solo puede ser internada conforme al dictamen de un facultativo médico independiente;
- Por orden gubernativa. Si la policía estima que la conducta de una persona puede resultar en un daño para ella o para terceros y que esa conducta es consecuencia del estado mental de esa persona, podrá ordenar su ingreso en un hospital para que sea examinada. Solo se puede proceder al internamiento conforme al dictamen de un facultativo médico independiente.

437. La Ley, de 1991, de Salud Mental del Estado de Queensland no contiene disposiciones que impidan que una persona ingresada voluntariamente abandone el establecimiento, a no ser que se haya estimado que esa persona necesita tratamiento como paciente no voluntario. Toda persona puede recurrir contra su internamiento no voluntario ante el Tribunal de Revisión de Pacientes (Patient Review Tribunal). Todos los casos de internamiento no voluntario son revisados

por el Tribunal después de 21 días de internamiento. Además, todos pueden instar al Tribunal de Revisión de Pacientes a que revise su expediente y recurrir a un órgano superior, el Tribunal de Salud Mental. Cualquier persona puede pedir una segunda opinión a otro facultativo médico y consultar a un letrado. También puede presentar una denuncia ante la Comisión del Derecho a la Salud. La Comisión del Derecho a la Salud es un organismo independiente de derecho público competente para investigar las denuncias contra los suministradores de servicios de salud en los sectores público y privado de la sanidad, servir de amigable componedor en los litigios y proteger los derechos de los usuarios de los servicios de salud.

Australia del Sur

438. En Australia del Sur, las atribuciones para el internamiento de las personas aquejadas de enajenación mental se definen en la Ley, de 1993, de Salud Mental. La Comisión de Sanidad es competente para la aplicación de la Ley. El Consejo de Tutela conoce de los recursos.

439. En Australia del Sur hay un método para el internamiento no voluntario. Un facultativo médico puede ordenar el internamiento de una persona si considera que ésta padece una enfermedad mental que requiere un tratamiento inmediato, que ese tratamiento puede lograrse mediante su ingreso e internamiento en un hospital aprobado y que dicha persona debe ser ingresada en beneficio de su propia salud y seguridad y para la protección de los terceros. Esa orden solo tiene una vigencia de tres días, en cuyo plazo debe ser confirmada o anulada lo antes posible por un psiquiatra. El internamiento puede prorrogarse solo otros 21 días por acuerdo de dos psiquiatras tras examinar al paciente. Transcurrido el plazo de 42 días, el asunto debe someterse a revisión por la autoridad judicial.

440. La Ley no especifica un límite de edad para el internamiento. Por consiguiente, los niños y adolescentes pueden ser sometidos a internamiento en ciertos supuestos.

Tasmania

441. En Tasmania, una persona puede ser sometida a internamiento no voluntario por causa de enajenación mental en virtud de la Mental Health Act 1963 (Ley, de 1963, de Salud Mental). Cada internamiento debe decretarse a instancia de un pariente y un facultativo médico.

442. El internamiento puede decretarse por un tiempo de tres días, 28 días o seis meses. Los internamientos de 28 días y seis meses requieren el dictamen de un segundo médico. El ingreso puede efectuarse con fines de observación o tratamiento. La autorización de internamiento expira una vez transcurrido un año. Un facultativo médico puede, en caso de necesidad urgente, instar el internamiento de urgencia con fines de observación; su duración es de 72 horas.

443. Puede pedirse la revisión de la decisión de internamiento. El paciente, o una persona en su nombre, pueden instar la revisión ante el Tribunal de Revisión de Salud Mental. Entre las atribuciones del Tribunal está la de decretar el alta del paciente. El paciente o un pariente próximo pueden recurrir al Tribunal Superior de Justicia (Supreme Court) si están disconformes con la decisión del Tribunal.

Victoria

444. En Victoria, una persona puede ser ingresada y sometida a internamiento en un centro psiquiátrico como paciente no voluntario solo si aparentemente padece una enfermedad mental que puede ser tratada en ese centro, es un peligro para sí misma o para otros, no puede recibir un tratamiento adecuado en un entorno menos restrictivo y no quiere o no puede dar su consentimiento para recibir el tratamiento necesario.

445. En Victoria, el principal mecanismo de ingreso no voluntario es la solicitud de un pariente o allegado del paciente, un funcionario de policía o cualquier otra persona con el respaldo de la recomendación de un facultativo médico. Antes de formular su recomendación, el facultativo debe, previa petición hecha por escrito, examinar a la persona de que se trate. Una vez ingresada en el hospital, un psiquiatra debe examinarla en un plazo de 24 horas. La policía puede detener a una persona que padece enajenación mental y llevarla ante un facultativo médico.

446. El Consejo de Revisión de Salud Mental examina de oficio los casos de todos los pacientes dentro de las seis a ocho semanas de su ingreso en un hospital. El internado puede en cualquier momento recurrir el internamiento no voluntario mediante escrito dirigido al Consejo de Revisión de Salud Mental, el Psiquiatra Jefe, un psiquiatra autorizado, un visitador social, el Defensor del Pueblo o el Comisionado de Servicios de Salud.

Australia Occidental

447. En Australia Occidental, una persona puede ser internada de forma no voluntaria en un establecimiento psiquiátrico de conformidad con la Mental Health Act 1962 (Ley, de 1962, de Salud Mental):

- Por indicación de un facultativo médico, que declare que, a su juicio, aparentemente sufre un trastorno mental que requiere tratamiento;
- Por orden judicial, dictada por el tribunal ante el que comparezca inculpada de un delito, en la que se declare que padece o presuntamente padece enajenación mental; o
- Por orden del Gobernador, en los casos en que una persona ha sido declarada incapacitada para comparecer en juicio por causa de enajenación mental por el Tribunal Superior de Justicia.

448. En los dos primeros supuestos, esa persona debe ser examinada por un psiquiatra en un plazo de 72 horas para determinar si debe o no ser internada. En el tercer supuesto, el Gobernador en Consejo Ejecutivo resuelve sobre la situación del paciente.

449. Existen varias vías de recurso:

- Cada hospital aprobado cuenta con un consejo de visitantes nombrados por el ministro y directamente responsables ante él. El consejo conoce de las demandas y recursos de los pacientes contra su internamiento y puede darlos de alta;

- Cualquier persona puede instar el alta de un paciente ante el director del establecimiento y éste debe resolver dentro de las 72 horas siguientes;
- Los pacientes pueden instar el alta ante el Director de Servicios Psiquiátricos; o
- Cualquier persona puede instar al Tribunal Superior de Justicia a que decrete el fin del internamiento en un hospital.

Las enfermedades transmisibles

450. La Federal Quarantine Act 1908 (Ley Federal, de 1908, de Cuarentena) establece controles nacionales a la circulación de personas y el movimiento de mercaderías y vehículos para impedir la introducción y transmisión de enfermedades durante una emergencia declarada de cuarentena humana. Pueden imponerse condiciones especiales de entrada a las personas, mercaderías y vehículos originarios de países o zonas declarados infectados con agentes o vectores de enfermedades sujetas a cuarentena.

451. En Australia existen en el ámbito estatal otros instrumentos legales que versan sobre cuestiones de salud pública, en particular el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). En general, las leyes de salud pública aplicables a las enfermedades transmisibles comprenden disposiciones sobre declaración de la enfermedad, competencia para decretar el internamiento o el aislamiento, competencia para declarar zonas en cuarentena y competencia para imponer pruebas obligatorias.

452. En algunas jurisdicciones, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y la infección por el VIH se han añadido a la actual enumeración de enfermedades "de declaración obligatoria" y, por consiguiente, están sujetos a un régimen jurídico análogo basado en planteamientos de salud pública más tradicionales. Como consecuencia de ello, la práctica de la declaración del VIH o el SIDA puede ser muy diferente de lo dispuesto en la normativa legal. Aunque en algunas jurisdicciones la ley exige que la declaración se efectúe nominalmente, en la práctica de la mayoría de las jurisdicciones se utilizan datos codificados. En 1989, el Gobierno Federal proclamó una estrategia nacional sobre el VIH/SIDA: la respuesta de Australia a la epidemia del VIH/SIDA desde el punto de vista de la política sanitaria. La estrategia incluía también un programa de reforma legislativa. En noviembre de 1992, el Grupo de Trabajo Jurídico del Comité Intergubernamental sobre el SIDA publicó su informe definitivo. La recomendación 2.5 decía lo siguiente:

"Las facultades conferidas por las leyes de salud pública para imponer restricciones a las condiciones de vida y empleo de las personas infectadas por el VIH que expongan a terceros a un riesgo excesivo de infección deberían caracterizarse por una serie gradual de intervenciones y utilizarse solo en casos excepcionales, aplicándose el aislamiento solo en última instancia.

La normativa legal que define los distintos tipos del delito contra la salud pública en relación con el control de enfermedades infecciosas graves que pueden transmitirse por contacto social ordinario debería revocarse o modificarse para que no se aplicara al VIH.

Debería tipificarse como delito contra la salud pública el supuesto en que una persona, a sabiendas de que está infectada por el VIH, expone a un alto riesgo de infección o infecta a otra persona sin su consentimiento. Al definirse ese delito debería preverse una causa de justificación plena cuando se insista en la adopción de medidas de protección en caso de alto riesgo. Debería aplicarse una pena menor de producirse efectivamente la infección en caso de haberse adoptado medidas de protección, conforme a las recomendaciones formuladas periódicamente por las autoridades sanitarias, pero no haber impedido éstas la transmisión de la enfermedad. La imputación de esos delitos solo debería hacerse previa aprobación de las autoridades de salud pública y no a instancia de la policía.

Los gobiernos estatales y territoriales deberían estudiar cuidadosamente la aplicación de sanciones de derecho penal especial distintas de las actuales de derecho penal común a causa del peligro de estigmatizar a grupos ya marginados."

453. En el informe también se hacían recomendaciones para ampliar los derechos de apelación y revisión y autorizar las vistas a puerta cerrada. Por ahora, las leyes el Territorio de la Capital de Australia, el Territorio del Norte y Australia Occidental no regulan ningún tipo de juicio a puerta cerrada.

454. El Grupo de Trabajo de Aplicación VIH/SIDA (organismo federal con representación ciudadana), que informa periódicamente al Comité Permanente de Fiscales Generales, está encargado del seguimiento de la aplicación de esas recomendaciones. Actualmente está preparando un informe sobre el estado de las medidas de aplicación adoptadas en relación con cada recomendación para presentarlo al Comité. Algunas jurisdicciones han creado sus propios organismos para supervisar las medidas de aplicación, por ejemplo Nueva Gales del Sur (el informe Puplick) y Australia del Sur (el informe Sarre). Se alienta a otros Estados a adoptar este modelo.

Territorio de la Capital de Australia

455. La Public Health Act 1928 (Ley, de 1928, de Salud Pública) y sus reglamentos prevén el control de ciertas enfermedades infecciosas y de declaración obligatoria, incluido el VIH/SIDA, en el Territorio de la Capital de Australia. De conformidad con sus disposiciones, en caso de enfermedad de declaración obligatoria un funcionario médico del Departamento de Sanidad está facultado para adoptar diversas medidas a fin de impedir su transmisión. El funcionario médico puede entrar en el domicilio del enfermo, examinar a los que residen en él y exigir que se sometan a un examen médico. La persona que no cumpla la orden de someterse a una prueba o proporcionar información puede ser trasladado por un funcionario autorizado a un lugar de aislamiento y retenido en él durante el tiempo necesario para asegurarse de que no es una fuente de infección.

Nueva Gales del Sur

456. En Nueva Gales del Sur, la Public Health Act 1991 (Ley, de 1991, de Salud Pública) regula el control de las enfermedades que enumera, en particular la lepra, la tuberculosis, el VIH y el SIDA. Si el Director General de Sanidad

estima fundadamente que una persona padece alguna de estas enfermedades, puede exigirse a esa persona que se someta a un examen médico.

457. Un facultativo médico autorizado por el Director General de Sanidad, si entiende fundadamente que una persona padece una de las enfermedades enumeradas y que su conducta es tal que pone en peligro la salud de los ciudadanos, puede dictar, en forma escrita, una orden de salud pública. Las órdenes de salud pública surten alguno de los efectos siguientes: obligación "de no hacer", orientación psicológica o tratamiento obligatorios, supervisión o internamiento obligatorios.

458. La persona sujeta a internamiento en virtud de una orden de salud pública puede ser autorizada a salir del lugar de internamiento, aunque solo con vigilancia constante. El tiempo de vigencia de una orden de salud pública es de 28 días y debe ser confirmada lo antes posible por la autoridad judicial local. La demanda de confirmación debe ser notificada personalmente al interesado en un plazo de tres días para que la orden surta efecto. La prórroga hasta seis meses de la orden de salud pública debe solicitarse antes de su expiración al tribunal de distrito. Se puede recurrir al tribunal de distrito o al Tribunal Superior de Justicia (Supreme Court) sobre una cuestión de derecho, o al tribunal de distrito con respecto a una resolución de prórroga.

Territorio del Norte

459. En el Territorio del Norte, un funcionario médico puede, de conformidad con la Notifiable Diseases Act 1981 (Ley, de 1981, sobre Enfermedades de Declaración Obligatoria), notificar a una persona infectada o presuntamente infectada por un germen patógeno de declaración obligatoria (incluido el VIH) que debe adoptar las medidas necesarias para el tratamiento o la prevención de la enfermedad. La persona que recibe la notificación puede recurrir ante la autoridad judicial local contra las instrucciones formuladas en la notificación. En caso de incumplimiento de la notificación, el Funcionario Médico Jefe del Departamento de Sanidad puede decretar que esa persona sea trasladada a un hospital u otro lugar y sometida a internamiento. Además, el Funcionario Médico Jefe puede obligar a una persona o grupo de personas que se sometan a un examen médico y respondan a un cuestionario para determinar si han sido infectadas por un germen patógeno determinado. El Administrador o el Ministro puede decretar el aislamiento de una zona, prohibir la circulación de personas en ella e imponer el examen y el tratamiento médicos obligatorios.

Queensland

460. En Queensland, la Health Act 1937 (Ley, de 1937, de Sanidad) enuncia disposiciones sobre el control de las "enfermedades de declaración obligatoria". Este concepto abarca el VIH desde 1988. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 36 de la Ley, toda persona puede ser sometida a internamiento previo certificado expedido por un facultativo médico, en el que éste exponga sus sospechas al Director de Sanidad quien, seguidamente, puede intervenir instando a un juez de paz (justice of the peace) a que dicte una orden de internamiento.

461. La persona sujeta a internamiento debe permanecer en el hospital o lugar de aislamiento temporal por el tiempo que el Director de Sanidad estime necesario para las pruebas o el tratamiento. Por otra parte, el encargado del hospital o lugar de aislamiento temporal puede aplicar las medidas coercitivas

que sean razonablemente necesarias para retener y aislar a esa persona y someterla a las pruebas y el tratamiento adecuados.

462. Según el Gobierno del Estado de Queensland, esas disposiciones se invocan raramente y casi invariablemente se han aplicado a personas que sufren tuberculosis pulmonar. Sin embargo, el proyecto de protocolo elaborado por dicho Gobierno para el control de las personas seropositivas cuya conducta representa un riesgo para la salud pública esboza el procedimiento para controlar a las personas seropositivas cuya conducta representa un riesgo para terceros. Se aplica este protocolo más bien que las disposiciones sobre internamiento contenidas en la Ley, de 1937, de Sanidad.

Australia del Sur

463. La Public and Environmental Health Act 1987 (Ley, de 1987, de Salud Pública y el Medio Ambiente) contiene disposiciones para el control de ciertas enfermedades transmisibles, incluido el VIH. Cuando la Comisión de Sanidad de Australia del Sur tiene indicios fundados de que una persona padece o presuntamente padece una enfermedad de declaración obligatoria sujeta a control, puede citarla por escrito a que comparezca y se someta a un examen médico. En caso de incomparecencia, un magistrado (magistrate) puede ordenar que sea detenida y examinada, a cuyo efecto puede decretar su internamiento durante 48 horas como máximo. En caso de que el examen pusiera de manifiesto que la persona no padece la enfermedad, la ley prevé el pago de una indemnización adecuada.

464. Si un facultativo médico ha certificado que una persona padece una enfermedad de declaración obligatoria sujeta a control y la Comisión entiende en interés de la salud pública que esa persona debe ser mantenida en cuarentena, un magistrado (magistrate) puede, a instancia de la Comisión, dictar una orden para su internamiento. No obstante, los motivos del internamiento deben ser notificados al interesado. La duración del internamiento solo puede ser de 72 horas como máximo, a no ser que un magistrado (magistrate), después de oír al interesado, decida prorrogarlo. La prórroga no puede exceder de seis meses, salvo autorización de un juez del Tribunal Superior de Justicia (Supreme Court). Las instrucciones y órdenes del magistrado (magistrate) para la detención y el internamiento pueden ser recurridas ante un juez del Tribunal Superior de Justicia (Supreme Court).

465. La Comisión puede imponer a una persona que padece una enfermedad de declaración obligatoria que cumpla ciertas condiciones para evitar la propagación de la infección, en particular restricciones de residencia y trabajo, supervisión obligatoria y sometimiento a un examen médico. Cabe el recurso a un magistrado (magistrate) para la revisión de esas condiciones. La inobservancia de las condiciones impuestas puede dar lugar a sanciones. No obstante, cabe el recurso ante un solo juez del Tribunal Superior de Justicia (Supreme Court).

Tasmania

466. La Public Health Act 1962 (Ley. De 1962, de Salud Pública) confiere al Ministro de Sanidad amplias competencias en materia de enfermedades infecciosas y de declaración obligatoria, en particular el VIH. El Ministro, a fin de controlar y prevenir la propagación de una enfermedad infecciosa, es competente, entre otras cosas, para obligar a cualquier persona a someterse a examen y

tratamiento médicos, imponer restricciones a la libertad ambulatoria, aislar cualquier parte del Estado y ordenar el aislamiento, cuarentena o desinfección de un grupo de personas.

467. Además de esta Ley, la HIV/AIDS Preventive Measures Act 1993 (Ley, de 1993, de Medidas Preventivas del VIH/SIDA) regula los supuestos en que procede acudir a la autoridad judicial para que decrete pruebas obligatorias. El Secretario del Departamento de Sanidad puede pedir una prueba del VIH si cree fundadamente que una persona está infectada por el VIH y se conduce de manera que constituye un riesgo para terceros. Por otra parte, cuando el Secretario estima que una persona portadora del VIH temerariamente pone en peligro a terceros o no adopta todas las medidas y precauciones razonables para impedir la transmisión del virus, el Secretario puede pedir a un magistrado (magistrate) que dicte un auto ordenando a esa persona a que se someta a evaluación médica y psicológica, aislamiento, internamiento u otras medidas restrictivas. La vigencia del auto tiene una duración de 28 días prorrogables solo por resolución judicial.

Victoria

468. La Victorian Health Act 1958 (Ley, de 1958, de Salud del Estado de Victoria) regula la situación de las personas con enfermedades infecciosas, en particular el VIH. El Director General del Departamento de Sanidad, si estima fundadamente que una persona sufre una enfermedad infecciosa, que es probable que la transmita a otros y que existe grave riesgo para la salud pública, puede dictar varias resoluciones. Puede decretar que sea sometida a examen y pruebas médicos, que acepte orientación psicológica y que su conducta y movimientos queden sujetos a medidas limitativas o restrictivas, en particular el internamiento y aislamiento.

469. La persona sujeta a internamiento, aislamiento o aislamiento provisional u otras medidas limitativas, en virtud de una resolución en vigor del Director General del Departamento de Sanidad, puede recurrir a éste instando su reforma. El interesado puede recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (Supreme Court) la resolución dictada por el Director General.

470. La Ley dispone asimismo que se proceda a pruebas obligatorias de determinadas enfermedades infecciosas en los casos en que la enfermedad pueda haber sido transmitida en un incidente en que estén implicados proveedores de atención médica o guardianes. También contiene disposiciones reguladoras de las medidas de cuarentena en una declaración de emergencia, que autorizan al Director General a limitar la libertad ambulatoria de las personas. Sin embargo, esta declaración puede ser revocada por otra posterior del Gobernador en Consejo.

Australia Occidental

471. En Australia Occidental, la Health Act 1911 (Ley de Salud, de 1911) y su Reglamento regulan el control de las enfermedades infecciosas, en particular el VIH. El Reglamento establece la sumisión a pruebas obligatorias por un funcionario de sanidad cuando hay indicios razonables de que una persona sufre una enfermedad determinada. La Ley faculta al Comisionado de Salud Pública para, con la autorización del Ministro, decretar el aislamiento, cuarentena y desinfección de lugares o cosas y prohibir a las personas que salgan del lugar

de cuarentena hasta que no hayan sido examinadas. Por otra parte, los funcionarios médicos pueden ordenar el ingreso en un centro hospitalario de cualquier persona que padezca una enfermedad infecciosa, si ello redunde en beneficio de la salud pública o si la persona carece de alojamiento adecuado.

Alcoholismo y toxicomanías

472. En la mayoría de las jurisdicciones, la normativa legal aplicable autoriza el internamiento de los toxicómanos o las personas en estado de embriaguez. A continuación se proporcionan ejemplos de esas disposiciones legales. La normativa legal de Queensland ha sido examinada anteriormente en relación con las enfermedades mentales.

Nueva Gales del Sur

473. En Nueva Gales del Sur, la Intoxicated Persons Act 1979 (Ley, de 1979, sobre Personas en Estado de Embriaguez) regula la asistencia a las personas en estado de embriaguez y su internamiento. El que se encuentre en estado de embriaguez en un lugar público, si altera con su conducta el orden público o si existe el riesgo de que pueda causar lesión a sí mismo o a otros, o desperfectos a las cosas, o si necesita ser protegido físicamente al no poder valerse debido a su embriaguez, podrá ser detenido y conducido a un establecimiento de custodia por un agente de policía u otra persona autorizada.

474. Una comisaría de policía es un establecimiento de custodia. Sin embargo, una persona en estado de embriaguez no puede ser conducida a una comisaría a menos que no haya disponible otro establecimiento de custodia y no sea conveniente acompañarla a su domicilio, o si la conducta de esa persona es demasiado violenta para que pueda ser conducida a su domicilio o a otro establecimiento de custodia.

475. El detenido permanecerá recluido en el establecimiento de custodia hasta que salga de su estado de ebriedad o transcurridas ocho horas desde su detención, si éste plazo venciere antes, o podrá ser puesto en libertad en cualquier momento a cargo de una persona responsable. En 1994, la Ley fue examinada y se recomendó que se ampliara el período de internamiento, del plazo máximo actual de ocho horas a las 72 horas.

476. A este respecto, debe mencionarse también la Inebriates Act 1912 (Ley, de 1912, sobre Ebrios Habituales), que está siendo examinada y quizás sea revocada. Esta Ley dispone que el interesado podrá optar entre contraer formalmente el compromiso de renunciar a la ingestión de bebidas alcohólicas durante un período de 12 meses como mínimo, someterse a la guarda y protección de una persona expresamente designada, en un establecimiento determinado (casa, hospital o institución) durante 28 días como máximo, ser internado en una institución autorizada o una institución pública por un plazo máximo de 12 meses, o someterse a la guarda y protección de uno o varios guardadores o de un tutor o curador durante 12 meses como máximo.

477. El tribunal debe interrogar personalmente al interesado y resolver a la vista del certificado médico expedido por el facultativo médico consultado confirmando que la persona de que se trata sufre de alcoholismo. La autoridad judicial puede decretar el internamiento preventivo, para examen médico, de los afectados y la detención y comparecencia de quienes lo eludan.

478. Un juez del Tribunal de Distrito o del Tribunal Superior de Justicia podrá, mediante providencia, prorrogar durante 12 meses como máximo las resoluciones dictadas en virtud de la Ley

Territorio del Norte

479. La Police Administration Act (Ley de Régimen de la Policía) autoriza a los funcionarios de policía a proceder a la detención y custodia de cualquier persona de la que cabe fundadamente presumir que se encuentra en un lugar público o se ha introducido sin derecho en una propiedad particular y se halla bajo los efectos del alcohol o las drogas. A estos efectos, el funcionario de policía puede, sin orden de entrada y registro, entrar en una propiedad particular, registrar a la persona de que se trate y poner a buen recaudo el dinero o los objetos de valor ocupados. Las personas en estado de embriaguez pueden ser mantenidas en detención preventiva solo durante el tiempo que permanezcan ebrias. Sin embargo, si la persona en estado de intoxicación etílica fuere detenida después de medianoche y antes de las siete de la mañana, podrá ser retenida hasta las siete y media de la mañana aunque ya no esté ebria. A la persona detenida en estado de embriaguez, mientras se encuentre bajo custodia, no podrá imputársele ningún delito, ni ser interrogada al respecto, así como tampoco podrá ser fotografiada ni podrán tomársele las huellas digitales.

Australia del Sur

480. Ninguna disposición legal de Australia del Sur autoriza el internamiento de las personas adictas a las drogas o el alcohol, a no ser que padezcan una enfermedad mental en el sentido de la Ley, de 1993, de Salud Mental (véase supra, bajo el epígrafe "Las enfermedades mentales").

481. La Public Intoxication Act 1984 (Ley, de 1984, sobre Embriaguez Pública) del Estado de Australia del Sur dispone que las personas que se encuentren en un lugar público bajo la influencia de las drogas o el alcohol podrán ser aprehendidas por un funcionario de policía u otra persona autorizada. El agente de policía o la persona autorizada deberá conducir al interesado a su domicilio, a un establecimiento aprobado por el Departamento de Sanidad, a una comisaría de policía o a una casa de templanza; en los tres últimos supuestos, deberá ser puesto en libertad tan pronto como pueda valerse. En el caso de la comisaría de policía, dentro de las diez horas siguientes a su aprehensión, y en los otros casos, transcurridas 18 horas.

Tasmania

482. La Alcohol and Drug Dependency Act 1968 (Ley, de 1968, sobre Dipsomanía y Toxicodependencia) prevé el internamiento a instancia del paciente, un familiar o el asistente social. Los tribunales de justicia también pueden dictar órdenes de internamiento en los supuestos en que una persona haya sido declarada culpable de un delito punible con pena de prisión y esa persona haya cometido el delito bajo influencia del alcohol. Los pacientes pueden recurrir ante el Tribunal de Dipsomanía y Toxicodependencia (Alcohol and Drug Dependency Tribunal) y ante el Tribunal Superior de Justicia (Supreme Court).

Victoria

483. En Victoria, la Alcoholics and Drug Dependent Persons Act 1968 (Ley, de 1968, sobre Dipsómanos y Toxicómanos) contiene disposiciones generales sobre la protección y el tratamiento de las personas que padecen, o corren el riesgo de padecer, dipsomanía o toxicodependencia y sobre su reinserción social. De conformidad con la Ley, el cónyuge de la persona denunciada, su padre o madre, un socio comercial, sus hermanos o hijos mayores de edad, un miembro del cuerpo de policía del rango de agente principal o superior o un asistente social pueden pedir a un magistrado (magistrate) que dicte un auto de internamiento. Éste dictará el auto si entiende que esa persona sufre dipsomanía o toxicodependencia. Mediante dicho auto, se ordena que el denunciado sea ingresado en un centro de evaluación y permanezca en él durante siete días. Por indicación del funcionario médico encargado de la evaluación, el auto podrá ser prorrogado siete días más.

484. Al finalizar el plazo de siete o 14 días, la persona de que se trate deberá ser dada de alta, internada en un establecimiento hospitalario o permanecer, por orden judicial, en el centro de evaluación para ser tratada. El funcionario médico puede decretar el internamiento en un establecimiento hospitalario de la persona ingresada en el centro de evaluación si dos facultativos médicos competentes certifican por escrito que se trata de un dipsómano o toxicómano. La persona sometida a internamiento en un establecimiento hospitalario tiene derecho a recurrir esa decisión. En la práctica, los pacientes suelen pedir voluntariamente que se los someta a tratamiento.

Australia Occidental

485. En Australia Occidental no es delito padecer de dipsomanía o toxicodependencia. No obstante, con arreglo a la Ley de Policía, las personas ebrias pueden ser aprehendidas por la policía y ser conducidas a una casa de templanza aprobada. De no ser posible el ingreso en una casa de templanza, las personas embriagadas pueden permanecer detenidas en los calabozos de la policía por un plazo máximo de ocho horas.

Los extranjeros en situación ilegal

486. De conformidad con el common law de Australia, los extranjeros, es decir, las personas que no poseen la nacionalidad australiana, que se encuentran legal o ilegalmente en el país no pueden ser detenidos sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. Una excepción a esta regla son los extranjeros enemigos en tiempo de guerra. Si son detenidos ilegalmente, los extranjeros tienen capacidad y legitimación para solicitar la tutela judicial.

487. El Tribunal Supremo de Australia (High Court of Australia) ha reconocido sistemáticamente la potestad del Parlamento para legislar sobre la detención y expulsión de extranjeros. En la actualidad, la Migration Act 1958 (Ley de Migración, de 1958), en su forma enmendada, establece el régimen jurídico aplicable en el ámbito nacional para la detención y expulsión de las personas que se hallen ilegalmente en Australia. En virtud de este instrumento legislativo, los extranjeros que se encuentren en territorio australiano, en tierra firme o en un puerto, sin estar provistos de visado válido son considerados extranjeros en situación ilegal.

488. El artículo 14 de la Ley de Migración, de 1958, define el extranjero en situación ilegal como el extranjero que se encuentra en la zona de migración y no es un extranjero en situación legal. El artículo 13 de la Ley define el extranjero en situación legal como el extranjero que se encuentra en la zona de migración y se halla provisto de un visado en vigor. La zona de migración es el ámbito constituido por el territorio australiano en sentido estricto y las aguas marítimas portuarias de Australia. Un habitante autorizado de la Zona Protegida (espacio creado por el Tratado del Estrecho de Torres) que se encuentra en una zona protegida en relación con la ejecución de actividades tradicionales también es un extranjero en situación legal.

489. De conformidad con la Ley de Migración, de 1958, los funcionarios autorizados (por ejemplo, los funcionarios de policía, aduanas o inmigración) tienen la obligación de detener a cualquier persona si saben, o tienen motivos racionalmente bastantes para presumir, que es un extranjero en situación ilegal. Esos funcionarios también deben detener a las personas que fuera de Australia traten de entrar en el país sin hallarse provistos de visado válido. Los funcionarios pueden detener a un extranjero en situación legal si saben, o tienen motivos racionalmente bastantes para presumir, que se halla provisto de un visado que puede ser cancelado conforme a determinadas disposiciones de la Ley de Migración, de 1958, y que tratará de eludir la comparecencia ante el funcionario o se negará de otro modo a cooperar en sus indagaciones. El extranjero detenido a estos efectos deberá ser puesto en libertad dentro de las cuatro horas siguientes a su detención. Si en algún momento se cancela el visado de un extranjero, se procederá a su detención como extranjero en situación ilegal de conformidad con el artículo 189 de la Ley, a menos que se le conceda un nuevo visado.

490. Los extranjeros en situación ilegal que reúnen los requisitos exigidos para la estancia (extranjeros a los que se instruye expediente de inmigración o que pertenecen a alguna de las categorías de personas específicamente mencionadas en el Reglamento de Migración) pueden optar a un visado transitorio (bridging visa) (subclases de visados temporales) que les confiere temporalmente un estatuto legal y permite su puesta en libertad. Los extranjeros en situación ilegal pueden solicitar cualquiera de las ocho subclases de visados transitorios, aunque solo una, el Visado Transitorio E, puede ser concedida a los sometidos a detención cautelar o preventiva. Las personas que hayan entrado ilegalmente por barco pueden optar a un Visado Transitorio E en determinados supuestos basados en:

- La edad (niños menores de 18 años y adultos mayores de 75);
- Una situación de necesidad, a causa de su salud o por haber sufrido torturas o traumas que, según el dictamen de un médico especialista, no pueden ser atendidos debidamente en un lugar de detención; o
- Su condición de familiares de un nacional australiano, un residente permanente en Australia o un nacional de Nueva Zelandia que cumpla los requisitos legales.

491. Por otra parte, cuando la persona que ha entrado ilegalmente por barco y ha solicitado un visado de asilo (protection visa) haya permanecido privada de libertad durante más de seis meses sin que su solicitud haya sido resuelta en

primera instancia, el Ministro podrá decretar que esa persona tiene derecho a un visado transitorio si estima que así lo justifica el interés público o general.

492. Podrá concederse un Visado Transitorio C en los casos en que el solicitante no haya sido descubierto anteriormente como extranjero en situación ilegal y formalice válidamente su solicitud de un nuevo visado definitivo (o sea, un visado que no es un visado transitorio ni un visado de justicia penal) o solicite que se reexamine la decisión denegatoria del visado definitivo. El Visado Transitorio C confiere un estatuto legal hasta 28 días después de que haya recaído la resolución definitiva en el expediente de solicitud de visado o en su ulterior reexamen.

493. Podrá proveerse de un Visado Transitorio D a extranjeros en situación ilegal cuando:

- Hayan intentado presentar una solicitud válida de visado definitivo pero necesiten más tiempo para formalizarla (por ejemplo, para poder pagar la tasa de tramitación);
- Siendo extranjeros en situación ilegal, no puedan o no quieran formular una nueva solicitud de visado definitivo (por ejemplo, porque desean salir voluntariamente de Australia, habiéndose presentado en el Departamento de Inmigración y Asuntos Étnicos para evitar ser sancionados si regresan) y no esté disponible ningún funcionario competente para decidir que no es necesario someterlos a detención cautelar; o
- Habiéndoselos denegado anteriormente el visado de asilo, deseen presentar una nueva solicitud de visado de asilo y se requiera tiempo para resolver si han aportado nuevas justificaciones para que se les reconozca el estatuto de refugiado. La Ley de Migración, de 1958, define el Visado de Asilo como un visado cuyo criterio de concesión es que el solicitante sea una persona que no posea la nacionalidad australiana y respecto de la cual Australia haya asumido obligaciones de asilo de conformidad con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo que la modifica.

494. Los extranjeros en situación de ilegalidad (incluidos los sometidos a detención cautelar) pueden optar a la concesión del Visado Transitorio E (subclase 050) en varios supuestos, en particular:

- Si están tomando disposiciones para salir de Australia;
- Si han interesado de la autoridad competente el reexamen en cuanto al fondo de la resolución de cancelar el visado definitivo;
- Si han interpuesto recurso en la vía judicial contra la resolución de denegar o cancelar el visado definitivo; o
- Si están intentando hacer valer por otras vías (por ejemplo, a tenor de las disposiciones de la Ley de Migración, de 1958, que autorizan al Ministro a dictar, de oficio, una resolución más favorable) su pretensión de permanecer en Australia.

495. La Migration Legislation Amendment Act (Nº 5) 1995 (Ley Nº 5, de 1995, por la que se modifica la normativa legal aplicable en materia de migración) confiere al Ministro la potestad de declarar discrecionalmente que reúne los requisitos exigidos para la estancia el extranjero que, habiendo entrado ilegalmente en Australia, haya solicitado el visado de asilo y permanecido en detención cautelar durante seis meses contados desde la fecha de la solicitud sin que haya recaído resolución en primera instancia.

496. Al proceder a la detención de un extranjero en situación ilegal, el funcionario deberá informar inmediatamente al detenido de que se le somete a detención cautelar como extranjero en situación de ilegalidad a tenor de lo dispuesto en la Ley de Migración, de 1958, y comunicarle los motivos. Por otra parte, los detenidos deben ser informados, cuanto antes, de su derecho a solicitar un visado y de los plazos a que está sujeta la solicitud. También deben ser informados por el funcionario que efectúe la detención de que deberán permanecer en detención cautelar hasta que se les otorgue el visado o sean expulsados de Australia. A petición del detenido, se le proporcionará asistencia letrada. Sin embargo, el artículo 193 de la Ley establece una excepción al requisito de informar a los detenidos de estas cuestiones, excepción que se aplica fundamentalmente a los detenidos a los que no se instruye expediente de inmigración o que han sido aprehendidos antes de entrar en la zona de migración.

497. Si el detenido aparentemente no entiende el inglés, los funcionarios tratarán ante todo de explicarle los motivos de su detención, pero deberán velar por que un intérprete se los exponga en detalle lo antes posible. Unas directrices fijan las pautas de intervención de los intérpretes. Se celebra una entrevista para proporcionar una información completa al detenido y darle a conocer sus derechos, en su caso, a permanecer en Australia. Se levanta acta de la entrevista en la que se consignan las respuestas del detenido, con ejemplares certificados por el funcionario entrevistador, el detenido y el intérprete.

498. El período de detención cautelar normalmente abarca el tiempo necesario para resolver el expediente de solicitud de visado, y su posible reexamen, así como el tiempo que se requiere para organizar la expulsión del extranjero en situación ilegal cuya solicitud haya sido denegada. La Ley de Migración, de 1958, dispone que la expulsión se efectúe lo antes posible. Aunque la mayoría de las personas a las que se aplica la Ley permanecen detenidas solo durante un breve período, la duración del tiempo de detención cautelar puede variar entre varias horas y varios años. Se da prioridad a la tramitación de las solicitudes presentadas por personas sometidas a detención cautelar, pero las múltiples solicitudes y recursos presentados por los detenidos pueden prolongar considerablemente el período de privación de libertad. La dificultad de obtener títulos de viaje para efectuar la expulsión también puede prolongar el período de detención. Ello puede deberse a dilación por parte del Estado cuya documentación se solicita o a la falta de cooperación del detenido que se niega a facilitar los datos necesarios sobre su identidad.

499. En el caso de ciertas entradas ilegales por barco, las personas interesadas pueden quedar sujetas a períodos de detención cautelar de duración variable si no tienen derecho a solicitar el asilo en Australia y es preciso tomar disposiciones para devolverlas a su país de origen.

500. Más exactamente, en lo que se refiere a las entradas ilegales por barco, las resoluciones sobre las solicitudes del visado de asilo se dictan, por

término medio, dentro de las seis semanas siguientes a la presentación de la solicitud. La duración media de la detención cautelar, desde el momento de la entrada a la concesión del visado de asilo o la expulsión de Australia, es de 15.5 semanas.

501. En los Centros de Detención para Inmigrantes, cada detenido tiene un funcionario encargado de la gestión diaria individualizada de su caso. Por otra parte, un funcionario de vigilancia del régimen de detención, con sede en las oficinas regionales del Departamento de Inmigración y Asuntos Étnicos, está encargado de controlar la situación individual de cada detenido cada 30 días o incluso antes en caso de solicitud de puesta en libertad por concesión de un Visado Transitorio E.

502. La vía legal de revisión de la detención cautelar es por medio de una solicitud de Visado Transitorio E. Si en el plazo de dos días hábiles no se hubiere resuelto en primera instancia el expediente de solicitud de visado transitorio de una persona sometida a detención cautelar, se entenderá que el visado ha sido otorgado. La resolución denegatoria del visado transitorio está sujeta a pronto reexamen por el Tribunal de Revisión de Inmigración (Immigration Review Tribunal) y la resolución denegatoria de este órgano puede ser recurrida por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal (Federal Court) por lo que respecta a los fundamentos de derecho.

503. Se notifica por escrito a los inmigrantes sujetos a detención cautelar los motivos de su detención, las disposiciones adoptadas para la custodia de sus objetos personales, el acceso a tratamiento médico, el derecho a recibir visitas, el acceso a los representantes de los medios de comunicación y a los representantes consulares, así como las disposiciones generales sobre la rutina diaria del centro de detención. Los detenidos también pueden solicitar asistencia letrada. Se procura asimismo atenuar el rigor de la detención eximiendo en lo posible del internamiento a los hijos y menores a cargo, para salvaguardar los intereses de los hijos y familiares de que se trate.

504. Las condiciones de cumplimiento de los trámites de inmigración se definen en el artículo 172 de la Ley de Migración, de 1958, según el cual se entiende que una persona ha cumplido los trámites de inmigración solamente:

- Si entra en territorio australiano;
- Si cumple los requisitos del artículo 166 (relativo a la acreditación de identidad y la posesión de la nacionalidad australiana o de un visado válido); y
- Si sale del puerto o puesto de acceso (de otro modo que como persona sujeta a detención cautelar) en que haya cumplido los requisitos del artículo 166 con el permiso del funcionario de los servicios de inmigración; o
- Si, habiéndosele denegado la admisión a trámite de su solicitud de inmigración o habiendo eludido los servicios de inmigración, obtiene posteriormente el visado definitivo.

505. Se entiende que la solicitud de inmigración de una persona ha sido admitida a trámite si esa persona ha comparecido ante un funcionario a efectos de la tramitación del expediente de inmigración y ésta no le ha sido denegada.

506. Se entiende que la autorización de inmigración de una persona ha sido denegada si esa persona comparece ante un funcionario de los servicios de inmigración a los efectos del artículo 166 de la Ley y se le cancela o deniega el visado o no puede proporcionar al funcionario de inmigración la acreditación o datos prescritos por el artículo 166.

507. Además, todo extranjero en situación ilegal tiene derecho a solicitar el reexamen en cuanto al fondo de la resolución por la que se le ha denegado la concesión del visado o se ha cancelado éste. La única excepción al derecho de reexamen concierne a los extranjeros que han comparecido ante los servicios de inmigración, se les ha denegado la entrada en Australia y no piden que se les reconozca la condición de refugiado, los cuales no tienen acceso al procedimiento de reexamen en cuanto al fondo. También se pueden recurrir por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal las resoluciones dictadas por los tribunales de reexamen por los motivos siguientes:

- Por quebrantamiento de forma;
- Por incompetencia de jurisdicción;
- Por infracción de las normas legales o reglamentarias;
- Por desviación de poder;
- Por haber existido error de derecho;
- Por haber intervenido dolo o parcialidad;
- Por falta de pruebas que justifiquen la resolución.

508. Otra excepción es cuando el Ministro, de oficio y por razones de interés nacional, declara excluida a una persona conforme al artículo 502 de la Ley de Migración, de 1958. Dicha declaración impide el reexamen por el Tribunal Administrativo de Apelación (Administrative Appeals Tribunal) de las decisiones de expulsión por motivos penales del artículo 200 y las decisiones de denegación o cancelación del visado en virtud del artículo 501 (por mala conducta), así como el reexamen en cuanto al fondo de las resoluciones de denegación o cancelación del visado de asilo basado en determinadas disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Hasta ahora, esta excepción nunca ha sido utilizada.

509. La situación de los extranjeros legales e ilegales se examina más a fondo en la sección relativa al artículo 13, infra.

Las aduanas

510. La Federal Customs Act 1901 (Ley Federal, de 1901, de Aduanas) regula las atribuciones y competencias de los funcionarios de policía y aduanas para detener y registrar a cualquier persona sospechosa de transportar ilegalmente artículos prohibidos o de ocultar en su cuerpo una sustancia ilícita. Las

atribuciones para practicar registros se dividen en tres categorías: cacheo (atribuciones conferidas exclusivamente a los funcionarios de aduanas en determinadas zonas de control de viajeros internacionales solamente), registro externo y registro interno. Con respecto a los cacheos existen directrices legales para determinar si están racionalmente justificados, y en los demás casos se aplica el criterio de los motivos racionalmente bastantes. El consentimiento en someterse a cualquier tipo de registro -cacheo, registro externo o registro interno- debe haber sido dado con el debido conocimiento de causa. Para que el consentimiento sea legal es preciso que el detenido haya sido informado de modo completo y detallado acerca de sus derechos y de la naturaleza del registro que vaya a practicarse, en un idioma que pueda comprender. Además, el funcionario debe velar por que el detenido manifieste (por escrito, en caso de registro interno, o verbal o tácitamente en caso del cacheo o registro externo) que comprende lo que se le propone y consiente en someterse a cada uno de los trámites propuestos. Se debe advertir claramente al detenido de su derecho a negarse al registro y a retirar su consentimiento en cualquier momento del procedimiento. Si subsiste alguna duda acerca de la capacidad del detenido para comprender claramente de que se trata por dificultades idiomáticas, se llamará a un intérprete para que el detenido pueda dar su consentimiento con pleno conocimiento de causa.

511. La práctica de los cacheos está sujeta a varias limitaciones. Por ejemplo, el cacheo debe ser efectuado lo antes posible y por un funcionario de aduanas del mismo sexo que el detenido. El funcionario de aduanas debe ofrecer al detenido la posibilidad de que el cacheo se realice en privado. Si el detenido se niega a ser cacheado o si, habiéndose sometido al cacheo, se niega a presentar para su inspección los objetos descubiertos durante el mismo, se aplicarán las disposiciones relativas a los registros externos.

512. El registro externo, para el que puede ser imprescindible desnudarse parcial o integralmente, si hay motivos racionalmente bastantes para pensar que el detenido no está sujeto a guarda o protección o si éste consiente en el registro, se realizará lo antes posible en un lugar de detención que preserve debidamente la intimidad. En cualquier otro caso, se pedirá a un juez de paz (justice of the peace) independiente o un funcionario superior de aduanas que dicten una orden para realizar el registro externo. El uso de la fuerza, en la medida que sea razonable y necesaria para efectuar el registro, está autorizado, pero solo en el supuesto de que un juez independiente haya examinado el fundamento de la detención y ordenado el registro.

513. La persona que dicte la orden solo puede hacerlo si le consta que hay motivos racionalmente bastantes para presumir que el detenido transporta ilegalmente artículos prohibidos. Si no se dicta la orden, el detenido debe ser puesto en libertad inmediatamente. Si se ordena el registro exterior de un detenido menor de 17 años o sujeto por otra causa a guarda o protección, el registro deberá efectuarse en presencia de su tutor o representante legal o de una persona apta para defender sus intereses y, en todo lo posible, esa persona deberá ser aceptable para el detenido.

514. El registro debe ser efectuado por una persona del mismo sexo que el detenido. Otros derechos reconocidos por las leyes son, en particular, el derecho a comunicar en cualquier momento con otra persona, salvo en ciertos supuestos procesales, en cuyo caso el funcionario de policía o de aduanas debe poner fin a esa comunicación. Los detenidos pueden ser interrogados después de

haber sido informados de que no están obligados a responder, pero sus declaraciones podrán ser utilizadas como prueba.

515. Si un funcionario de aduanas o un funcionario de policía tiene motivos racionalmente bastantes para presumir que una persona oculta dentro de su cuerpo una sustancia sospechosa (es decir, una cantidad de estupefacientes suficiente para constituir tráfico), podrá detener a esa persona para ponerla a disposición de la autoridad judicial. El funcionario que haya practicado la detención deberá conducir al detenido lo antes posible a un lugar de detención y, sujeto a ciertas condiciones, mantenerla en detención preventiva. En general, esas condiciones son que el registro interno sea realizado por un facultativo médico en un lugar reglamentariamente especificado (generalmente un hospital) o en el que se disponga de servicios técnicos paramédicos o de otro tipo. El registro interno puede comprender, en particular, radiografías, ecografías o, de ser necesario, el examen físico de las cavidades corporales.

516. Este tipo de registros internos pueden realizarse a condición de que el detenido no sea menor de 17 años o esté sujeto por otra causa a guarda o protección y de que firme por escrito su consentimiento en someterse al registro interno. El registro debe efectuarse lo antes posible.

517. Si la persona de que se trata no da su consentimiento o si está sujeta por otra causa a guarda o protección, será necesario solicitar que se dicte orden de detención. La autoridad judicial no debe dictar dicha orden a menos que entienda que hay motivos racionalmente bastantes para presumir que el detenido oculta dentro de su cuerpo una sustancia sospechosa. Los detenidos tienen derecho a estar presentes, a ser oídos y a estar representados en la vista que celebre la autoridad judicial. Según la resolución que dicte la autoridad judicial, el detenido debe ser puesto de inmediato en libertad o puede ser mantenido en detención preventiva por un plazo inicial de 48 horas. Si el detenido está sujeto a guarda o protección, se designará a una persona, que, en todo lo posible, deberá ser aceptable por el detenido, para que defienda sus intereses. Si transcurrido el plazo inicial de 48 horas el detenido no ha sido puesto en libertad y no ha consentido en someterse al registro, deberá pedirse a un juez que dicte una orden de registro interno antes de que finalice el período de privación de libertad.

518. Entre los derechos que según la ley asisten al detenido durante el período privación de libertad para ser sometido a un registro interno figuran, entre otros, el derecho a consultar un abogado de su elección y a ser informado de que no está obligado a responder a las preguntas que se le hagan, pero que todo lo que diga podrá utilizarse como prueba. El detenido también podrá hablar en cualquier momento con otra persona, salvo en ciertos supuestos procesales, en cuyo caso el funcionario de aduanas o de policía podrá poner fin a esa comunicación.

519. Otros derechos reconocidos por la ley a las personas detenidas para ser sometidas a cualquier tipo de registro personal son, en particular:

- El derecho a que los funcionarios de aduanas o de policía deban identificarse si así se les pide;

- El derecho a que los funcionarios no empleen más fuerza que la razonable y necesaria y actúen, en todo lo posible, con el debido respeto a la dignidad de la persona de que se trate;
- Si el detenido no puede expresarse en inglés o de otro modo con suficiente fluidez, el derecho a que se le proporcionen los servicios de un intérprete.

La detención

520. Según el common law, el objeto de la detención es poner el imputado a disposición de la autoridad judicial para que ésta resuelva lo que sea procedente de acuerdo con la ley. La detención de una persona puede producirse con o sin la correspondiente orden o mandamiento. A continuación se examina la detención sin mandamiento, que es la más corriente, primero según la legislación federal y, luego, según las leyes estatales.

521. De conformidad con la Ley Federal, de 1901, de Aduanas, los funcionarios de policía y de aduanas tienen atribuida la potestad limitada de detener a las personas sospechosas de contrabando o de agresión a un funcionario en el desempeño de sus funciones. No obstante, la Ley dispone que, efectuada la detención, "nadie permanecerá en detención preventiva más tiempo del estrictamente necesario para ser puesto, sin dilación indebida, a disposición de la autoridad judicial". El juez puede, a su arbitrio, decretar la prisión provisional o la libertad provisional con fianza del detenido hasta que se celebre la vista.

En el ámbito federal

522. La Ley Penal Federal, de 1914, enuncia el principio según el cual la detención es una medida cautelar de naturaleza personal que debe utilizarse solo en última instancia. La Policía Federal australiana ha reforzado administrativamente este principio: actualmente, los supervisores de la Policía Federal vigilan la idoneidad de las prácticas de detención, los funcionarios de la Policía Federal no son ascendidos con arreglo a la frecuencia de las imputaciones y detenciones efectuadas y se han adoptado procedimientos que no alientan el recurso a la detención. También se mantiene una base de datos para controlar los progresos realizados según esos criterios.

523. Los artículos 8 y 8A de la Ley Penal Federal, de 1914, regulaban la potestad para detener sin la correspondiente orden o mandamiento judicial. Estos artículos han sido derogados por la Crimes (Search Warrants and Powers of Arrest) Amendment Act 1994 (Ley, de 1994, por la que se modifica la Ley Penal en lo que concierne al régimen de las órdenes de registro y la potestad para detener), que entró en vigor el 1º de diciembre de 1994. Dicha Ley incluye en la Ley Penal Federal, de 1914, una nueva sección AA del Título I. Las enmiendas incorporan las recomendaciones de la revisión del derecho penal federal presidida por un eminente juez australiano, el Honorable Sir Harry Gibbs GCMG, AC KBE, ex Presidente del Tribunal Supremo (Chief Justice of the High Court). En sus disposiciones, estas enmiendas regulan con precisión los supuestos en que es admisible la detención sin mandamiento judicial, promoviendo así la transparencia administrativa y la justicia.

524. En primer lugar, las enmiendas restringen la potestad para practicar la "detención de un ciudadano". Cualquier persona que no es funcionario de policía puede, sin mandamiento judicial, detener a otro si tiene motivos racionalmente bastantes para creer que el detenido está cometiendo o ha cometido un delito grave (indictable offence) y que el procedimiento ordinario de la orden judicial de comparecencia dictada contra él no permitiría lograr uno o varios de los fines que se especifican. Entre esos fines figuran asegurar la comparecencia del imputado cuando fuere llamado por la autoridad judicial, impedir la continuación o repetición del delito, impedir la ocultación, pérdida o destrucción de pruebas y preservar la seguridad o bienestar de terceros. Antes de las enmiendas, la Ley no incluía el supuesto de la creencia fundada en motivos racionalmente bastantes de que la citación judicial sería ineficaz.

525. En segundo lugar, la Ley establece que un funcionario o agente de policía puede, sin mandamiento judicial, detener a cualquier persona por un delito si tiene motivos suficientes para creer que el detenido ha cometido o está cometiendo un delito y que el procedimiento ordinario de la orden judicial de comparecencia dictada contra él no permitiría lograr uno o varios de los fines especificados, algunos de los cuales se expresan en el párrafo precedente.

526. Las enmiendas también regulan la detención sin mandamiento judicial de las personas en libertad provisional con fianza y la detención de los presos que quebrantaren su condena. Otras leyes federales también disponen que las personas expresamente autorizadas pueden practicar sin mandamiento judicial la detención de quienes hubieren delinquido infringiendo sus disposiciones. Estas disposiciones suelen analizarse minuciosamente para asegurarse de que se ajustan a la política criminal establecida por el Gobierno Federal en la Ley Penal, de 1914. La potestad para practicar detenciones de los funcionarios del Servicio Secreto australiano se sitúa en un término medio entre la de los particulares y la de la policía; pueden practicar detenciones por determinados delitos, sean o no graves, con arreglo a varias Leyes.

Las garantías

527. La Crimes (Investigation of Commonwealth Offences) Act 1991 (Ley, de 1991, por la que se modifica la Ley Penal en lo que concierne al régimen de investigación del delito) ha incluido en la Ley Penal Federal, de 1914, una nueva sección C del Título I que enuncia diversas garantías en el tratamiento de la persona detenida por haber cometido un delito federal. En virtud de estas enmiendas, cualquier persona detenida por el "funcionario a cargo de la investigación" solo puede ser mantenida en detención preventiva durante cuatro horas como máximo para el esclarecimiento de los hechos antes de ser puesta a disposición judicial. En casos graves y complejos, el plazo detención preventiva podrá prorrogarse, con autorización judicial, por un nuevo plazo de ocho horas como máximo para proseguir los actos de investigación. El detenido debe ser informado, antes de ser interrogado, de su derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Con anterioridad a su interrogatorio, el detenido tiene derecho a poner en conocimiento del familiar o persona que desee el hecho de su detención y el lugar de custodia en que se halle. El detenido también tiene derecho a designar abogado y a solicitar su presencia durante el interrogatorio. El detenido que lo solicite tiene derecho a ser asistido por un intérprete.

528. Se establecen otras garantías suplementarias para los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, en particular la presencia en el interrogatorio de un acompañante y un intérprete y, si es detenido, que el hecho de la detención sea notificado a una organización aborígen de asistencia letrada. Véanse otras observaciones en la sección relativa al artículo 14, infra.

La extradición

529. Los procedimientos aplicables en caso de extradición son los establecidos en la Extradition Act 1988 (Ley, de 1988, de Extradición). Esta Ley dispone que cualquier persona detenida en virtud de una orden de detención preventiva debe ser puesta cuanto antes a disposición de un magistrado (magistrate) para que éste decreta su prisión provisional (o libertad provisional con fianza) mientras se instruye el procedimiento para determinar la procedencia de la extradición. La libertad provisional con fianza debe concederse solo en circunstancias especiales.

530. El Fiscal General Federal puede ordenar en cualquier momento el levantamiento de la prisión provisional. En cualquier caso, la persona contra la que se haya dictado auto de libertad provisional con fianza o de prisión provisional debe ser puesta en libertad incondicional después de 45 días, sin perjuicio de lo que disponga el tratado aplicable ni de la facultad discrecional del magistrado (magistrate) de prorrogar el auto si no se ha incoado aún el procedimiento para determinar la procedencia de la extradición.

531. Los derechos de la persona contra la que se ha dictado auto de libertad provisional o de prisión provisional en lo que respecta a las actuaciones judiciales para determinar la procedencia de la extradición son, entre otros, los siguientes: el derecho a estar presente en la vista, a estar representado en ella y a exponer las razones por las cuales estima que la documentación presentada por el país requirente en apoyo de la solicitud de extradición es incompleta o nula.

532. Si el reclamado consiente en la extradición, o si ésta es declarada procedente, el Fiscal General Federal decretará la prisión provisional hasta que resuelva sobre la entrega, lo que deberá hacer lo antes posible. El Fiscal General Federal, si resuelve que la persona requerida de extradición debe ser entregada, expedirá una orden autorizando que sea puesta bajo la custodia de un funcionario acompañante extranjero y trasladada fuera de Australia. De lo contrario, el Fiscal General Federal ordenará que sea puesta en libertad.

533. En caso de que el auto judicial sobre la procedencia de la extradición sea contrario a los intereses del detenido, éste puede recurrir dicha resolución ante el Tribunal Federal o el Tribunal Superior de Justicia estatal competente. El detenido también puede interesar del Tribunal Supremo, como órgano competente en primera instancia, que dicte alguna de las órdenes de prerrogativa (prerogative writs) llamadas mandamus (mandamiento judicial por el que se ordena a un órgano o tribunal inferior el cumplimiento de un deber legal) o prohibition (auto de prohibición o de inhibición por el que se pide al órgano o tribunal inferior que se abstenga de actuar), o un auto preventivo de injunction (mandamiento de hacer o de no hacer).

534. Desde la presentación del informe anterior de Australia conforme a las disposiciones del Pacto, se ha concedido anualmente la extradición de un número de personas que varía entre dos y 16.

En el ámbito estatal

535. En todas las jurisdicciones, la legislación autoriza a los funcionarios de policía a proceder a la detención sin mandamiento judicial de cualquier persona sorprendida en flagrante delito. Los funcionarios de policía también pueden practicar la detención de una persona si tienen motivos racionalmente bastantes para creer que ha cometido un delito (aunque, en Victoria, solo si se trata de un delito grave (indictable offence) y, en el Territorio de la Capital de Australia, solo si se entiende que la orden judicial de comparecencia dictada contra esa persona sería ineficaz). En algunas jurisdicciones (por ejemplo, el Territorio del Norte, Australia del Sur y Australia Occidental), los funcionarios de policía también pueden detener a una persona sin mandamiento judicial si tienen motivos racionalmente bastantes para creer que una persona va a cometer un delito.

536. Además de las leyes penales y de policía mencionadas a continuación, en cada jurisdicción leyes especiales confieren a la policía atribuciones para practicar detenciones en algunos supuestos.

Territorio de la Capital de Australia

537. De conformidad con la Crimes Act 1900 (Ley Penal, de 1900), cualquier persona puede, sin mandamiento judicial, aprehender a otra sorprendida en flagrante delito o cuando acaba de cometerlo. La Ley establece que el detenido debe ser puesto cuanto antes a disposición policial. La Ley dispone asimismo que un funcionario de policía puede, sin mandamiento judicial, detener a cualquier persona por un hecho punible conforme a la legislación del Territorio si tiene motivos racionalmente bastantes para creer que el detenido ha cometido o está cometiendo el delito y que el procedimiento ordinario de la orden judicial de comparecencia dictada contra él no permitiría lograr uno o varios de los fines que se especifican. Esos fines son: asegurar la comparecencia del imputado cuando fuere llamado por la autoridad judicial; impedir la continuación o repetición del delito u otra infracción penal; impedir la ocultación, pérdida o destrucción de pruebas; impedir las presiones, mediante amenazas, coacciones o soborno, a los testigos en la causa instruida por el delito; impedir la falsificación de las pruebas que deban presentarse en la causa instruida por el delito; o preservar la seguridad o el bienestar del imputado.

538. La Magistrates Court Ordinance 1930 (Ordenanza, de 1930, reguladora del Tribunal de Magistrados) establece los supuestos en que se puede dictar orden judicial de detención. Dispone que un magistrado (magistrate) puede dictar una orden detención si se ha presentado una denuncia contra una persona y la realidad de los hechos ha sido confirmada mediante juramento por el denunciante o un testigo. El magistrado (magistrate) también puede, si lo estima conveniente, dictar una orden de comparecencia contra el denunciado. No es necesario hacer constar en la orden o mandamiento judicial ninguna fecha determinada, sino que puede seguir en vigor hasta que sea ejecutada.

Nueva Gales del Sur

539. De conformidad con la Crimes Act 1900 (Ley Penal, de 1900), cualquier persona puede, sin mandamiento judicial, aprehender a otra sorprendida en flagrante delito o cuando acaba de cometerlo. Las atribuciones de la policía para practicar una detención son aún más amplias. Un agente de policía puede, sin mandamiento judicial, aprehender a cualquier persona si tiene motivos suficientes para presumir que ha cometido cualquier hecho punible o delito, incluso en grado de tentativa o si ha contravenido a lo dispuesto en la Ley, de 1988, sobre Faltas y Delitos Menos Graves. Sin embargo, las instrucciones del Comisario de Policía a sus funcionarios establecen el principio general de que la privación de libertad es una medida cautelar de naturaleza personal que solo debe utilizarse en última instancia. La detención preventiva solo debe efectuarse después de haber examinado todas las demás posibilidades, como notificación de infracción, notificación de presentación a la autoridad judicial, etc.

Territorio del Norte

540. En el Territorio del Norte, las atribuciones legalmente conferidas a la policía en materia de detención se enuncian en la Police Administration Act 1979 (Ley, de 1979, de Régimen de la Policía). Esta Ley establece que un funcionario de policía puede, sin mandamiento judicial, aprehender y mantener en detención preventiva a cualquier persona que, a su juicio, ha cometido, está cometiendo o va a cometer un delito.

541. El artículo 121 de la Ley, de 1979, de Régimen de la Policía dispone que un funcionario de policía puede interesar de un juez de paz (justice of the peace) que extienda una orden de detención basándose en que hay motivos racionalmente bastantes para creer que una persona ha cometido un delito. El artículo 124 de la Ley establece que el funcionario de policía, cuando no tiene en su posesión la orden de detención expedida, puede aprehender y mantener en detención preventiva a cualquier persona si tiene motivos racionalmente suficientes para creer que es la persona contra la cual se dictó la orden de detención o de ingreso en prisión. El funcionario de policía tiene la obligación de exhibir cuanto antes la orden por la que se autoriza la detención o el ingreso en prisión de esa persona. El artículo 123 de la Ley dispone que cualquier miembro de las fuerzas de policía puede, sin mandamiento judicial, aprehender y mantener en detención preventiva a cualquier persona si, a su juicio, ésta ha cometido, está cometiendo o va a cometer un delito.

542. Antes de proceder a la detención de un delincuente interestatal, la policía debe tener motivos racionalmente bastantes para creer que esa persona ha cometido un delito de naturaleza interestatal y que un hecho análogo es punible en el Territorio del Norte con pena de prisión de duración superior a seis meses.

Queensland

543. El Servicio de Policía de Queensland también tiene por norma ejercer la potestad para detener solo como último recurso. La legislación define los supuestos en que el infractor puede ser detenido sin mandamiento judicial. El Código Penal de Queensland enuncia disposiciones generales sobre las detenciones sin mandamiento judicial, y varios otros instrumentos legislativos definen el

ejercicio de atribuciones equivalentes. La Ley de Tráfico, por ejemplo, autoriza la detención sin mandamiento judicial de los culpables de infringir determinados artículos de dicha Ley. El Código Penal también establece los límites a que han de ajustarse los agentes de policía en materia de detención. La resistencia a la detención constituye un acto punible pero, por otra parte, la transgresión policial de la potestad legal para detener equivale a una agresión y el detenido puede ejercitar un grado razonable de autotutela.

544. En 1993, la Comisión de Justicia Penal de Queensland publicó los tres primeros volúmenes, seguidos en 1994 de los otros dos, de su informe relativo a las funciones de policía en Queensland. Los volúmenes I, III y IV son los que están más estrechamente relacionados con este artículo. El volumen I ofrece un panorama general de las funciones que la policía desempeña actualmente en Queensland. El volumen III versa sobre las potestades policiales para detener sin mandamiento judicial, pedir a cualquier persona su nombre y dirección y hacer circular a la gente. El volumen IV trata del interrogatorio y la detención preventiva del presunto culpable.

545. Las recomendaciones formuladas en el informe responden a dos principios generales: en primer lugar, que las atribuciones de la policía solo deben ser ampliadas cuando se haya demostrado la necesidad de hacerlo; y, en segundo lugar, que cualquier ampliación de las funciones de policía debe ir acompañada siempre de una obligación más amplia de rendición de cuentas.

546. La Comisión Parlamentaria de Justicia Penal celebró sesiones privadas y públicas sobre las recomendaciones formuladas en el informe. La Comisión hizo públicas sus conclusiones el 12 de mayo de 1995 y recomendó que las disposiciones sobre las funciones de policía se refundieran en un proyecto de ley sobre las funciones y procedimientos policiales. El Gobierno de Queensland no ha respondido todavía al informe de la Comisión Parlamentaria.

Australia del Sur

547. En Australia del Sur, la potestad para detener se define en la Ley, de 1953, sobre Faltas y Delitos Menos Graves, que dispone lo siguiente:

"Los funcionarios del cuerpo de policía podrán, sin mandamiento judicial y solamente en virtud de la presente Ley, detener a cualquier hora del día o de la noche a toda persona sorprendida en flagrante delito, o cuando tengan motivos racionalmente bastantes para creer que ha cometido o que va a cometer un delito."

548. La Ley dispone además que la policía puede detener a cualquier persona si cree fundadamente que se ha expedido una orden de detención contra ella.

Tasmania

549. De conformidad con el Código Penal de 1924 y la Ley, de 1935, sobre Contravenciones, los particulares pueden detener sin mandamiento judicial. Esta facultad existe cuando una persona es sorprendida cometiendo una infracción de la que se deriva un daño sustancial para otro.

550. Con arreglo al Código Penal de 1924, los funcionarios de policía pueden detener sin mandamiento judicial en determinados supuestos, por ejemplo a las

personas sorprendidas en delito flagrante o cuando tengan motivos racionalmente bastantes para creer que han cometido ciertos delitos.

551. Contra la detención y privación de libertad ilícitas cabe interponer recursos por la vía administrativa y la vía judicial. La víctima puede denunciar los hechos en el Departamento de Policía, a raíz de lo cual se abre una investigación interna, o interponer ante los tribunales civiles una demanda de daños y perjuicios por detención ilegal (false imprisonment), lesiones (assault and battery) y otros atentados contra la libertad y seguridad personales (trespass to the person).

Victoria

552. La potestad para detener se regula en la Ley Penal, de 1958. Cualquier persona puede detener, sin mandamiento judicial:

- Al sorprendido en flagrante delito (si la persona que practica la detención estima ésta necesaria para garantizar la comparecencia del detenido ante la autoridad judicial, para salvaguardar el orden público, para impedir otros delitos o para preservar la seguridad o el bienestar de los ciudadanos o del delincuente);
- Si así se lo ordena un funcionario de policía con potestad para detener conforme a la Ley; o
- Al que tenga motivos racionales para creer que se ha fugado estando detenido o preso o para evitar su detención.

553. Si una persona ha sido detenida al cometer una falta o delito menos grave existe la obligación legal de ponerla en libertad en cuanto ya no subsistan los motivos de su detención.

554. Además de las mencionadas potestades para detener, los funcionarios de policía pueden detener a cualquier persona si tienen motivos racionalmente bastantes para creer que ha cometido un delito grave o muy grave (tal como está definido en las leyes de Victoria).

555. El Manual de Procedimientos Operativos de la Policía de Victoria establece que los funcionarios de policía deben evitar la detención cuando el procedimiento iniciado mediante citación judicial (summons) sea el apropiado. En los casos en que sea necesaria la detención, el Manual de Procedimientos Operativos establece que el funcionario no debe emplear una fuerza excesiva ni humillar al detenido. Hay que dar al detenido amplia oportunidad de explicar las razones de los actos que han llevado a su detención y debe ser tratado con cortesía y consideración.

Australia Occidental

556. En Australia Occidental, la Ley de Policía, de 1892, y el Código Penal otorgan a la policía la potestad para detener. Una y otra Ley confieren a los agentes la potestad para detener sin mandamiento judicial a "todas las personas que tengan motivos fundados para presumir que han cometido o se disponen a cometer un delito". En 1992, la Comisión de Reforma Legislativa de Australia Occidental concluyó una revisión de las funciones de policía reguladas en la

Ley. En su informe recomendaba que se estableciese un mejor equilibrio entre la necesidad de conferir a la policía atribuciones suficientes y la necesidad de impedir intromisiones superfluas en las libertades públicas. El Gobierno de Australia Occidental está elaborando actualmente un proyecto de ley para aplicar básicamente las recomendaciones de la Comisión.

557. Las Ordenanzas de Policía disponen que se informe al detenido de las razones de su detención. El Manual de Régimen de Detención en Dependencias Policiales establece que el funcionario de policía autorizado en virtud de la Bail Act 1982 (Ley, de 1982, reguladora de la Libertad Provisional con Fianza) debe:

- Examinar lo antes posible la situación del detenido por si procede la libertad provisional con fianza; y
- Velar por que no se mantenga inútilmente la privación de libertad de ninguna persona.

558. La procedencia de decretar la libertad provisional con fianza de las personas en régimen de detención preventiva se examina a tenor de lo dispuesto en la Ley, de 1982, reguladora de la Libertad Provisional con Fianza. Si se mantiene la detención de una persona, ésta deberá ser entregada a la autoridad judicial cuanto antes o puesta en libertad en el plazo máximo de siete días contados desde el momento de su detención. Si se eleva la detención a prisión provisional, el preso será ingresado en un centro penitenciario.

559. Los detalles de la acusación formulada en la denuncia o querella se comunican al inculpado cuando comparece ante el tribunal. Aparte de informar al detenido de las razones de su detención, ninguna disposición de la ley o las directrices internas requieren que se le comuniquen los hechos concretos que se le imputan. En la práctica, es raro que no se informe a la persona privada de libertad de la acusación concreta formulada contra ella.

560. La procedencia de la libertad provisional con fianza debe examinarse en relación con todos los detenidos. La libertad provisional puede ser denegada si se estima que hay riesgo de que se trate de influir en los testigos o de falsear las pruebas o de que el detenido vuelva a delinquir o se sustraiga a la acción de la justicia, o si el detenido debe permanecer en esa situación para su propia protección.

Las razones de la detención

561. Con arreglo al common law, la detención (efectuada tanto por un funcionario de policía como por un simple particular, y con o sin mandamiento judicial) es ilegal a menos que se haya tratado razonablemente de informar al detenido de las razones de su detención. No es necesario utilizar una fórmula específica. No obstante, no será necesario comunicar las razones si, por causa de las circunstancias en que se produce la detención (por ejemplo, en el momento de cometer el delito), el detenido tiene que conocer fundamentalmente las razones por las que se le detiene o si, mediante su comportamiento, el detenido hace que no sea posible informarle de las razones de su detención. Según una opinión, esta regla puede haber sido limitada en algunas jurisdicciones por la exigencia legal de que, "a ser posible", se comuniquen las razones de la detención. La opinión que parece más fundada es que, teniendo en cuenta que los

tribunales, al interpretar las leyes, se resisten a hacer una lectura reductiva de los derechos reconocidos por el common law, las palabras "a ser posible" deben interpretarse en sentido estricto y aplicarse solo al caso en que el detenido hace imposible que se le comuniquen las razones de su detención.

562. Algunas jurisdicciones han codificado los principios enunciados en el párrafo anterior por lo que respecta a los delitos federales, por ejemplo, en la Ley, de 1994, por la que se modifica la Ley Penal en lo que concierne al régimen de las órdenes de registro y la potestad para detener. En otras jurisdicciones, como Australia del Sur, las ordenanzas de policía hacen una nueva exposición del common law.

563. El funcionario que practique ilegalmente una detención podrá ser objeto de medidas disciplinarias o de una demanda por daños y perjuicios. También podrán tomarse medidas con arreglo a la normativa aplicable en materia de denuncias contra la policía y las pruebas obtenidas a raíz de la detención podrán ser declaradas inadmisibles por el tribunal.

La notificación inmediata de los cargos

564. La detención va seguida normalmente de la inculpación formal de la persona detenida en la comisaría de policía, a la que se informa de la naturaleza del cargo o los cargos formulados contra ella.

565. Por lo que respecta a los delitos federales, la Ley, de 1994, por la que se modifica la Ley Penal en lo que concierne al régimen de las órdenes de registro y la potestad para detener dispone que toda persona detenida debe ser informada, en el momento de practicarse la detención, de los hechos que se le imputan. Sin embargo, en Australia Occidental ni la ley ni las ordenanzas de policía exigen que se informe al detenido, aparte de las razones de su detención, de los hechos concretos que se le imputan antes de su comparecencia ante la autoridad judicial. No obstante, en la práctica es raro que no se comunique a la persona privada de libertad la acusación formulada contra ella.

566. En el caso de que no se proceda a la detención del presunto responsable sino que se inicie el procedimiento contra él mediante citación judicial (summons), en los documentos judiciales que con arreglo a las prevenciones legales deben extenderse antes de someter la causa al tribunal (denuncia (information), querella (complaint), citación (summons), etc.) hay que especificar el acto o actos punibles que se imputan a esa persona. Esto implica necesariamente una mínima calificación de los hechos e ilustración de la norma penal infringida, pero no incluir datos como el nombre del denunciante o denunciantes. Se entrega copia de esos documentos al imputado.

567. Tanto la policía como los tribunales utilizan con bastante frecuencia los servicios de un intérprete cuando el imputado no entiende o no habla suficientemente el inglés. La intervención de intérpretes y otros aspectos del proceso penal se analizan más en detalle en la sección relativa al artículo 14.

La presencia de un tercero

568. La detención suele notificarse inmediatamente, antes del interrogatorio, a un pariente o allegado o al abogado. En el ámbito federal, estos derechos están garantizados en virtud de la Ley, de 1991, por la que se modifica la Ley Penal

en lo que concierne al régimen de investigación del delito, que ha incluido en la Ley Penal Federal, de 1914, las disposiciones pertinentes (sección C del Título I).

569. En Australia del Sur, toda persona detenida tiene derecho a hacer una llamada telefónica al amigo o familiar que designe, el derecho a que un letrado, pariente o allegado esté presente durante el interrogatorio y el derecho a ser asistido por un intérprete si el inglés no es su idioma materno.

570. De conformidad con la Ley Penal, de 1958, del Estado de Victoria, el funcionario investigador, antes de iniciar cualquier acto de investigación o de interrogar a una persona, debe informar a ésta del derecho que le asiste de ponerse en comunicación con un amigo, familiar o abogado y aplazar el interrogatorio o la investigación durante un plazo razonable para que esa persona pueda realizar o intentar realizar dicha comunicación. Se exceptúan los casos en que el funcionario investigador tenga motivos racionalmente bastantes para presumir que la comunicación permitirá la fuga de un cómplice o la falsificación o destrucción de pruebas, o en que el interrogatorio o las diligencias sean tan urgentes, en interés de la seguridad de otras personas, que no deban ser aplazados. Cuando se trate de personas menores de 17 años (y sujeto a ciertas excepciones), el funcionario investigador no puede investigarlas ni interrogarlas salvo en presencia de aquéllos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor, o de una persona independiente, y si, antes de proceder al interrogatorio o de practicar cualquier otro acto de investigación, ha permitido que el menor se ponga en comunicación con quien ejerza en su caso la patria potestad, tutela o guarda, o con una persona independiente. Cuando la persona que se encuentra en detención policial no posea conocimientos suficientes de inglés para comprender el interrogatorio, la Ley Penal del Estado de Victoria dispone que el funcionario investigador, antes de proceder al interrogatorio o a practicar cualquier otro acto de investigación, velará por que le asista un intérprete competente y aplazará el interrogatorio o la investigación hasta que el intérprete esté presente.

La puesta sin demora a disposición de la autoridad judicial

571. El principio de common law según el cual la detención pasa a ser ilegal si se dilata excesivamente la entrega del presunto culpable a la autoridad judicial para que ésta practique las diligencias oportunas se aplica, como tal, en algunas jurisdicciones y ha sido incorporado a la legislación en otras. Algunos de estos instrumentos legislativos establecen unos plazos dentro de los cuales se han de cumplir las prevenciones legales (por ejemplo, cuatro horas para los delitos graves en Australia del Sur, cuatro horas en caso de delito federal, excepto si el detenido es de ascendencia aborigen o isleño del Estrecho de Torres y el funcionario tiene motivos racionales para presumir que su educación o capacidad de comprensión están por debajo del nivel común, en cuyo caso el plazo aplicable es de dos horas). En otras jurisdicciones, en que no se ha fijado plazo, se aplica el requisito de evitar toda dilación indebida. En general, toda persona que encuentre en detención policial debe ser conducida cuanto antes a presencia de un magistrado (magistrate). Al determinar si una persona ha permanecido detenida más allá de ese plazo, el tribunal sopesará el interés público y los intereses del imputado. En la práctica, los detenidos suelen ser llevados a presencia de la autoridad judicial dentro de las 24 horas siguientes al acto de la detención, a no ser que medie un día feriado oficial entre el día de la detención y la reanudación de las actuaciones judiciales.

572. En Tasmania, la Criminal Law (Detention and Interrogation) Act 1995 (Ley Penal de 1995 (Detención e Interrogatorio)) dispone que la persona detenida puede permanecer bajo la custodia de un funcionario de policía durante un plazo razonable a efectos de su interrogatorio antes de ser conducida a presencia de la autoridad judicial, a la que podrá solicitarse la libertad provisional con fianza. La Ley enuncia diversos criterios con arreglo a los cuales la autoridad judicial determinará lo que constituye un plazo razonable. La Ley también establece los derechos del detenido durante la detención policial.

El derecho a ser juzgado en un plazo razonable

573. Si el acusado reconoce los hechos que se le imputan, el tribunal normalmente resolverá en la causa sin más trámites. Cuando el acusado rechaza los cargos, pueden transcurrir varios meses (es decir, más del tiempo necesario para que el acusado prepare su defensa) antes que la causa sea oída debido al elevado número de asuntos penales pendientes ante los tribunales. Ahora bien, una vez admitida a trámite la querella o formalizada la inculpación, el asunto será incluido en el lugar que le corresponda en la lista de causas que esperan el señalamiento del día para la celebración de la vista. Posteriormente, la celebración solo puede ser aplazada, a instancias de la acusación o la defensa, en ejercicio del arbitrio judicial.

574. A tenor de lo dispuesto en la Imperial Habeas Corpus Act 1679 (Ley Imperial, de 1679, de Hábeas Corpus) (o su equivalente) en todas las jurisdicciones australianas, así como en la legislación complementaria (las leyes reguladoras de la libertad provisional con fianza) en la mayoría de ellas, toda persona que no haya sido sometida a juicio dentro de determinado plazo debe ser puesta en libertad provisional con fianza o en libertad incondicional. Véanse otras observaciones sobre esta cuestión en la sección relativa al artículo 14, infra.

La libertad provisional con fianza (bail)

575. La libertad provisional con fianza (bail) suele regirse por la legislación estatal y sus disposiciones se aplican a las personas acusadas de un delito federal a tenor de lo dispuesto en la Judiciary Act 1903 (Ley, de 1903, del Poder Judicial). En todas las jurisdicciones, la normativa legal aplicable en esta materia permiten decretar la libertad provisional del inculpado hasta que se celebre la vista de la causa penal que se le instruye. Generalmente hay dos tipos de libertad provisional con fianza: la concedida por un funcionario de policía autorizado y la decretada por la autoridad judicial. Puede requerirse del inculpado que formalice un compromiso (recognisance), con o sin prestación de garantía (surety), y cumpla las condiciones que garanticen su comparecencia ante el tribunal en el día y el lugar que se especifiquen. Si el funcionario de policía deniega la libertad provisional del solicitante, éste podrá pedir de nuevo que se le conceda al comparecer ante el tribunal o, en cualquier momento, interesar del Tribunal Superior de Justicia (Supreme Court) una resolución en tal sentido.

576. En la mayoría de las jurisdicciones la presunción legal es favorable a la concesión de la libertad provisional con fianza excepto en el caso de delitos de especial gravedad, como el robo a mano armada o el tráfico de drogas, o de incomparecencia al primer llamamiento del órgano jurisdiccional que conozca de la causa. En estos casos, no se denegará automáticamente al inculpado la

libertad provisional con fianza, pero éste tendrá más dificultades para obtenerla. En el Territorio de la Capital de Australia, por ejemplo, la Bail Act 1992 (Ley, de 1992, reguladora de la libertad provisional con fianza) establece el derecho a la libertad provisional con fianza en el caso de los delitos menos graves castigados con una pena de seis meses de prisión como máximo o con multa (excepto los delitos de violencia doméstica) y crea una presunción simple en favor de la concesión de la libertad provisional en la mayoría de los demás casos. Ahora bien, en Australia del Sur, la Bail Act 1985 (Ley, de 1985, reguladora de la libertad provisional con fianza) no distingue entre diferentes clases de delitos y la presunción siempre es favorable a la concesión de la libertad provisional.

577. Todos los Estados han aprobado en los últimos años una completa normativa legal aplicable en esta esfera que refunde y pone al día las leyes vigentes reguladoras de la libertad provisional con fianza. Esta normativa generalmente enumera los elementos que las autoridades competentes han de tener en cuenta al conceder o denegar discrecionalmente la libertad provisional con fianza, las condiciones que se pueden imponer al decretar la libertad provisional con fianza y los trámites que deben cumplir la policía y los tribunales al resolver en esta materia.

578. Los elementos que hay que tener en cuenta al resolver si procede decretar la libertad provisional con fianza de un inculpado suelen ser, entre otros, los siguientes:

- La probabilidad de que el inculpado no trate de sustraerse a la acción de la justicia, en vista del estado social de esa persona y de sus antecedentes, así como de las circunstancias del delito;
- El interés del inculpado, en vista del tiempo que habrá de permanecer en prisión provisional y de su necesidad de estar libre para cualquier fin legítimo; y
- La protección y el bienestar de la comunidad, incluidas la probabilidad de que el inculpado trate de falsear las pruebas o de influir en los testigos o en los miembros del jurado y la probabilidad de que el inculpado vaya o no vaya a cometer un delito mientras se encuentre en libertad provisional.

579. Los nuevos instrumentos legislativos codifican y amplían las condiciones que se pueden imponer para conceder la libertad provisional con fianza, en parte debido a la preocupación de que un sistema de libertad provisional basado en unas garantías meramente pecuniarias fuera injusto, especialmente para con los grupos de bajos ingresos de la comunidad. Al perder importancia, como condición para decretar la libertad provisional, la situación económica y la constitución de un depósito de dinero o la prestación de otro tipo de garantía real o personal, las vigentes disposiciones legales tipifican como delito la incomparecencia del inculpado para responder de los hechos que se le imputan.

580. Después del último informe, la Ley, de 1985, reguladora de la libertad provisional con fianza del Estado de Australia del Sur ha sido modificada para que los menores de edad (es decir, los menores de 18 años en el momento en que supuestamente se cometió el delito) puedan solicitar la libertad provisional con fianza.

581. En relación con la detención ilegal (unlawful detention), en todas las jurisdicciones se puede instar el procedimiento de hábeas corpus para impugnar la legalidad de la privación de libertad de una persona. Las personas que han sido detenidas o privadas de libertad ilegalmente también pueden ejercitar una acción de indemnización por daños y perjuicios, fundada en el common law, contra la persona responsable de la detención o privación de libertad. En algunos Estados no existe un derecho creado por ley parlamentaria (statutory right) a una indemnización por detención o privación de libertad ilegales. No obstante, los órganos jurisdiccionales tienen la potestad de declarar de oficio las costas cuando se decreta el sobreseimiento libre de cargos.

Los presos y penados

582. En Australia no existe un sistema penitenciario nacional, sino que cada Estado es responsable de sus propias instituciones penitenciarias. En el Territorio de la Capital de Australia solo hay un centro de preventivos (remand centre) y los delincuentes federales y del Territorio condenados en el Territorio de la Capital de Australia son trasladados a Nueva Gales del Sur para cumplir su condena. El artículo 120 de la Constitución de Australia impone a los Estados la obligación de proveer a la retención y custodia de detenidos, presos y penados por delitos federales. Este artículo también se ha interpretado en el sentido de que impone a los Estados la obligación de proveer al cumplimiento de la pena señalada a los delincuentes federales.

583. Las cifras de la población reclusa correspondientes a toda Australia son relativamente bajas si se comparan con las de muchos otros países. Sin embargo, como se desprende del cuadro 5, la tasa nacional de población reclusa ha registrado un crecimiento gradual, especialmente en lo que concierne a los hombres. En el mes de junio de 1994, la tasa nacional de población reclusa era de 230 (reclusos por 100.000 adultos varones) frente a la cifra de 181 en junio de 1985.

584. Por lo que respecta a los preventivos (reclusos no condenados), el aumento fue del 8,5 al 11,6% del total de la población reclusa entre 1982 y 1991, como se verá más adelante. En el cuadro 6 figura el porcentaje de reclusos por jurisdicción y situación legal en junio de 1982 y junio de 1993.

585. Otros aspectos notables de la evolución de las estadísticas penitenciarias anuales de Australia en el período de 1982-1993 son, en particular, los siguientes:

- La proporción de mujeres reclusas aumentó del 3,4 al 4,8% del total de la población reclusa;
- Los reclusos nacidos en el extranjero representaron en ese período el 20% del total;
- La proporción de los condenados a penas inferiores a un año aumentó del 26,7 al 28,8%, y la de los condenados a penas superiores a cinco años disminuyó del 37,4 al 32,4%; y
- Las cifras correspondientes a los delitos castigados con penas de prisión variaron ligeramente, por ejemplo: en el caso de las personas condenadas por delitos contra la vida humana, disminuyeron

del 10,8 al 9,4%; en el de las condenadas por otros delitos contra las personas, aumentaron del 30,7 al 36,9%; y en el de las condenadas por delitos contra el patrimonio, disminuyeron del 34,6 al 28,6%.

586. Los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres siguen estando excesivamente representados en las estadísticas del sistema de justicia penal. En agosto de 1992, los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, que constituyen el dos por ciento de la población australiana, representaban el 29% de los mantenidos en régimen de detención preventiva en dependencias policiales. Una encuesta nacional realizada en 1994 puso de manifiesto que uno de cada cinco miembros de la población indígena de 13 o más años de edad había sido detenido por lo menos una vez en los últimos cinco años (véase en el cuadro 27 las cifras correspondientes a cada jurisdicción). En el caso de los varones de edades comprendidas entre los 20 y 24 años, la proporción era casi de uno de cada dos. De los que habían sido apartados de sus familias durante su niñez (uno de cada 10 de la categoría de 25 o más años de edad), el 32% había sido detenido en los últimos cinco años, frente al 19% de los que no habían sido apartados de sus familias.

587. La proporción de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en las prisiones australianas es 15 veces la del resto de la población. Las cifras correspondientes al período de 1982-1993 muestran que los reclusos considerados aborígenes representaban el 15% del total. Al 30 de junio de 1992, uno de cada siete reclusos era aborígen o isleño del Estrecho de Torres. El nivel más alto de representación de los aborígenes en las prisiones era el de Australia Occidental, donde las probabilidades de acabar en prisión eran 22 veces mayores para los aborígenes que para los no aborígenes. En los cuadros 7, 8 y 13 figuran, en lo que se refiere a los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, las cifras relativas a la prisión provisional, las tasas de población reclusa y la representación excesiva en el período de 1988-1994.

588. La población reclusa aborígen se ha duplicado en Nueva Gales del Sur entre 1989 y 1994 (de 385 a 788, véase el cuadro 7). En todas las jurisdicciones, con la excepción de Australia del Sur, el porcentaje de la población reclusa correspondiente a los aborígenes ha aumentado (véase el cuadro 8).

La evolución de la población reclusa

589. Desde 1982, la población reclusa de Australia ha aumentado en un tercio, aproximadamente, aunque ese aumento no ha sido uniforme en todas las jurisdicciones. En Nueva Gales del Sur, la población reclusa se incrementó en un 75%, aproximadamente, mientras que en Australia del Sur ese incremento fue solo del 25%. Las variaciones son a veces notables entre algunas jurisdicciones. Por ejemplo, en Australia del Sur la tasa de población reclusa disminuyó en más del 27% entre 1983 y 1984, y en Queensland la tasa de población reclusa era en 1987 de 120 por 100.000 adultos, mientras que en 1993 la tasa había disminuido hasta 89 (véase el cuadro 9). En los cuadros 10 y 11 figuran las cifras de penados y las tasas por 100.000 adultos, respectivamente, correspondientes a cada jurisdicción en el período de 1982 a 1993.

Las diferencias entre los Estados

590. La variación de las tasas de población reclusa según los Estados se indica en el cuadro 9 y queda puesta de manifiesto en la evolución de la población reclusa antes mencionada. No está nada claro por qué el Territorio del Norte, Nueva Gales del Sur y Australia Occidental tienen unas tasas de población reclusa considerablemente más altas que otras jurisdicciones australianas. Aunque la gravedad y la naturaleza de los delitos varían según las jurisdicciones, es difícil establecer una relación directa entre los delitos denunciados o que llegan a conocimiento de la policía y la tasa de población reclusa. Como se examina más adelante en la sección relativa al artículo 14, bajo el epígrafe "Los órganos jurisdiccionales", el poder judicial de cada jurisdicción australiana es independiente. La variación de las tasas de población reclusa quizás se deba en parte a diferencias de las normas y prácticas aplicables en las distintas jurisdicciones en materia de penas.

591. El cuadro 12 muestra el número de penados ingresados en los establecimientos penitenciarios de cada jurisdicción en junio de 1994 y la tasa de población reclusa. Una vez más, el Territorio del Norte, Nueva Gales del Sur y Australia Occidental registran una tasa de población reclusa más alta que otras jurisdicciones.

592. El elevado número de reclusos en el Territorio del Norte y Australia Occidental puede deberse en parte a que en esas jurisdicciones la población aborigen, cuyas tasas de población reclusa son muy altas, es más importante. El cuadro 13 muestra la elevada proporción de reclusos aborígenes en comparación con los no aborígenes. La tasa de población reclusa del Territorio del Norte también resulta influida por la juventud y la elevada proporción de varones de su población.

593. Aunque el número de habitantes, el nivel de urbanización, los índices de delincuencia y las estructuras de la justicia penal de Nueva Gales del Sur y Victoria son muy parecidos, un adulto de Nueva Gales del Sur tiene casi el doble de probabilidades de ingresar en prisión que un adulto de Victoria. La tasa más alta de población reclusa de Nueva Gales del Sur es, en parte, el resultado de la aplicación de principios diferentes en materia de penas. En Nueva Gales del Sur, la posibilidad de imponer una pena privativa de libertad de ejecución periódica contribuye a aumentar la población total de penados. Asimismo, Nueva Gales del Sur recurre con más frecuencia a la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, mientras que Victoria la impone en muy pocos casos. Ahora bien, si se excluyen las penas privativas de libertad de ejecución periódica y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, las diferencias de población reclusa parecen obedecer en parte a que en Nueva Gales del Sur los reclusos permanecen más tiempo privados de libertad, pero, sobre todo, a que los condenados ingresan en prisión con mucha más frecuencia que en Victoria.

594. Sin embargo, por falta de datos comparables a escala nacional, no es posible determinar si los reclusos de Nueva Gales del Sur permanecen más tiempo privados de libertad que los reclusos de Victoria porque los tribunales de Nueva Gales del Sur imponen penas de prisión más largas por delitos equiparables, o porque los tribunales de Nueva Gales del Sur se ocupan de delincuentes más peligrosos. Además, la Sentencing Act 1989 (Ley, de 1989, sobre Determinación de la Pena) de Nueva Gales del Sur ha tenido por efecto el aumento de la duración

de la prisión provisional y, por lo tanto, del tamaño de la población reclusa. Esta Ley se analiza más en detalle en la sección relativa al artículo 15 infra, sobre la imposición de la pena.

Los presos preventivos (remandees)

595. Como se analiza en dicha sección, la legislación de todos los Estados australianos recoge el principio de que, por regla general, las personas en espera de ser juzgadas no deben ser sometidas a prisión provisional. Esta medida se decreta en caso de que se crea que el presunto culpable constituye un peligro para otros, de que haya alguna probabilidad de fuga antes del juicio si no es sometido a prisión provisional o de que exista el riesgo de que trate de influir en los testigos. Estas excepciones no deben dar lugar a una situación en la que una gran proporción de reclusos sean en realidad preventivos en espera de juicio.

596. En la práctica, sin embargo, la parte de la población reclusa constituida por presos preventivos ha ido aumentando poco a poco con los años y los aumentos del número de preventivos son mayores que el aumento del número de presos y penados en conjunto.

597. Entre 1982 y 1993, la tasa de presos preventivos (véase el cuadro 14) de Australia aumentó en casi un 55%. Aunque su número ha aumentado en cada jurisdicción, ese aumento no ha sido uniforme. En el Territorio del Norte, por ejemplo, la tasa de presos preventivos aumentó muy rápidamente en 1985 y 1986, pero disminuyó con la misma rapidez en los años subsiguientes y, de hecho, dicha tasa fue menor en 1993 que en 1982. El cuadro 15 indica el número de presos preventivos el día del levantamiento del censo de cada año entre 1982 y 1993.

El control jurisdiccional de las detenciones

598. Toda persona privada de libertad puede instar el procedimiento de hábeas corpus, mencionado anteriormente en este informe, para impugnar la legalidad de la detención. Dicho procedimiento se puede instar para demostrar que una persona está detenida ilegalmente, por ejemplo, en una cárcel o en las dependencias de una comisaría de policía acusada de un supuesto delito, o cuando quien ejerce la patria potestad, tutela o guarda de un menor lo retiene ilegalmente por la fuerza o cuando una persona ha sido internada en un hospital psiquiátrico. Un pariente, tutor o allegado puede acudir a un tribunal de justicia en nombre y representación del detenido. El detenido será puesto inmediatamente en libertad, a menos que se demuestre que la detención es legal.

599. También se puede instar el procedimiento de hábeas corpus cuando se oponen obstáculos indebidos a la concesión de la libertad provisional con fianza, o cuando el importe de la garantía exigida es tan excesivo que, en la práctica, equivale a denegarla. (véase R. c. Rochford; Ex parte Harvey (1967) 15 FLR 149).

El derecho a indemnización

600. Cualquier persona que haya sido detenida o privada de libertad ilegalmente tiene derecho a una indemnización que puede hacer valer ante los tribunales ejercitando las acciones de common law por acusación y denuncia falsas (malicious prosecution) y detención ilegal (false imprisonment). La detención ilegal es un atentado contra la libertad y seguridad personales que se comete

cuando voluntariamente una persona somete directamente a otra a la privación total de su libertad ambulatoria sin justificación legítima. El acto lesivo proporciona al perjudicado un remedio jurídico contra los responsables de la privación de libertad. La prueba del daño no es necesaria porque "[l]a ley atribuye suma importancia a la libertad y seguridad personales, de suerte que toda intromisión ilegítima en ese valor de la personalidad debe ser indemnizable incluso sin prueba de daño específico" (Murray c. Departamento de Defensa [1988] 2 All ER 521). Por consiguiente, cualquier persona que haya sido víctima de detención ilegal puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios, incluso de carácter punitivo o ejemplar.

601. En diciembre de 1992, el Parlamento Federal modificó la Ley de Migración, de 1958, para limitar los efectos de una resolución del Tribunal Supremo que había dado lugar a una serie de demandas de indemnización por privación ilegal de libertad de extranjeros que se encontraban ilegalmente en Australia. Esas modificaciones reflejaban la opinión de todos los partidos de que la privación de libertad de esas personas estaba en realidad legalmente justificada. Así, el instrumento legislativo por el que se modificaba la normativa vigente suprimía el derecho de common law a interponer una demanda de indemnización de daños y perjuicios por detención ilegal fundada en la privación ilegal de libertad ambulatoria a tenor de lo dispuesto en la Ley de Migración, de 1958, y lo sustituía por el derecho legislativamente establecido a una indemnización de un dólar diario. A raíz de una resolución judicial posterior, el instrumento legislativo de enmienda por el que se suprimía el derecho de common law a una indemnización por detención ilegal fue derogado.

Las muertes de aborígenes en régimen de detención

602. La Comisión Real de Investigación de las Muertes de Aborígenes en Régimen de Detención, establecida en 1987, fue creada conjuntamente por el Gobierno Federal y los gobiernos estatales en respuesta a las preocupaciones expresadas por ciudadanos aborígenes y no aborígenes de que muchas de esas muertes eran el resultado de la conducta impropia de funcionarios de policía y de prisiones.

603. El informe definitivo de la Comisión Real fue presentado al Parlamento Federal el 9 de mayo de 1991. La Comisión investigó las muertes ocurridas en régimen de detención entre el 1º de enero de 1980 y el 31 de mayo de 1989 de 99 aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y llegó a la conclusión de que dichas muertes no habían sido causadas por actos dolosos de violencia o brutalidad cometidos por funcionarios de policía o de prisiones. No obstante, los miembros de la Comisión criticaron las condiciones de vida de los reclusos y señalaron el generalmente escaso grado de diligencia profesional. La Comisión Real también llegó a la conclusión de que el alto número de muertes de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres bajo custodia de la policía y la Administración penitenciaria obedecía principalmente a la elevada proporción de tales personas que se encontraban sometidas a uno u otro tipo de régimen de detención. El análisis de las 99 muertes de aborígenes en régimen de detención ponía de manifiesto que en cada caso la condición de aborígen desempeñaba un papel importante y, en la mayoría de los casos, primordial en el hecho de su detención y de su muerte en esa situación. En el informe definitivo se hacían 339 recomendaciones que abarcaban esferas diversas, del sistema de justicia penal, policía y prisiones a la situación social y sanitaria de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Muchas de ellas se dirigían también a las organizaciones y comunidades de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, las

autoridades locales y los medios de comunicación. Las recomendaciones de la Comisión versan asimismo sobre otras iniciativas y actividades en curso, en particular:

- La iniciativa sobre las relaciones entre el Commonwealth y los Estados miembros, en particular los estudios relativos a los acuerdos financieros entre el Commonwealth y los Estados y la coordinación de los servicios prestados a los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres;
- La Estrategia Nacional de Salud de los Aborígenes (véase el epígrafe "La salud de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres", en la sección relativa al artículo 6 supra); y
- El informe de la Encuesta Nacional sobre la Violencia Racista (véase la sección relativa al artículo 20, infra).

604. Todos los gobiernos cooperan en un programa de seguimiento de la aplicación de estas recomendaciones. El Gobierno Federal presenta informes sobre las medidas adoptadas en su jurisdicción, reúne y publica datos sobre detención y muertes y elabora directrices y medidas para la modificación de los procedimientos, normas de actuación y prácticas en sus relaciones con los Estados. Los Estados también presentan informes anuales sobre la aplicación de las recomendaciones. De conformidad con las recomendaciones de la Comisión Real (recomendaciones segunda y tercera), se ha creado en cada jurisdicción un Consejo Asesor de Justicia Aborígen. También se ha establecido un Consejo Nacional Asesor de Justicia Aborígen.

605. En su contestación al informe, el Gobierno Federal convino en que la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres se encargaría de presentar los informes anuales sobre la aplicación de las recomendaciones por el Gobierno Federal. El Instituto Australiano de Criminología está encargado de informar anualmente al Parlamento australiano de la evolución de las muertes en régimen de detención. El gobierno de cada Estado también prepara un informe anual sobre la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Real que son de su incumbencia. Un organismo comunitario, el Comité de Fomento de la Justicia Aborígen también promueve y supervisa la aplicación de las recomendaciones.

606. La primera recomendación del informe hacía hincapié en la necesidad de consultar a las organizaciones de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y de recurrir a ellas para la aplicación de las recomendaciones. El Gobierno Federal apoyó sin reservas esta recomendación.

607. Muchas de las actividades relacionadas con la aplicación de la primera recomendación en 1992-1993 giraron en torno a la adopción de disposiciones generales sobre seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Real que eran de la incumbencia del Gobierno Federal y presentación de informes. Hasta ahora, el establecimiento de esos mecanismos de seguimiento e información ha requerido:

- La coordinación entre la Administración Federal y las Administraciones estatales;

- El seguimiento de la aplicación por un total de 24 departamentos y organismos federales;
- La adopción de disposiciones para obtener un informe sobre la aplicación de cada una de las recomendaciones de competencia federal;
- La adopción de disposiciones para obtener un informe sobre cada una de las iniciativas financiadas con fondos del programa elaboradas en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Real;
- Una evaluación del "estado de la aplicación de las recomendaciones aprobadas..." (apartado b) de la recomendación primera); y
- Velar constantemente por la máxima participación posible de la población aborigen y de las islas del Estrecho de Torres en todos los aspectos del proceso de aplicación y seguimiento.

608. Los informes anuales del Gobierno Federal sobre la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Real tienen una distribución muy amplia que abarca, en particular, a todos los miembros de la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres y los consejeros regionales, a más de 2.000 organizaciones de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres de toda Australia y al público en general por medio de las oficinas de información de los departamentos y organismos.

609. La Comisión Real llegó a la conclusión de que, en su mayoría, los indígenas detenidos en dependencias policiales lo estaban como medida de protección (protective custody) por haber sido encontrados en avanzado estado de embriaguez en lugar público en aquellas jurisdicciones en que la embriaguez había sido despenalizada. Muchos otros se encontraban detenidos en dependencias policiales por embriaguez, en aquellas jurisdicciones en que ésta no había sido despenalizada. Ante esa situación, la Comisión Real recomendó, entre otras cosas, la despenalización de la embriaguez en público y la creación de establecimientos no carcelarios, debidamente financiados, para el cuidado y tratamiento de las personas ebrias (véanse la recomendaciones 79 a 85).

610. La embriaguez en público fue despenalizada en el Territorio del Norte en 1974, en Nueva Gales del Sur en 1979, en el Territorio de la Capital de Australia en 1984 y en Australia Occidental en 1989. Victoria y Queensland no han despenalizado la embriaguez en público. En Tasmania, las personas incapaces de gobernarse a sí mismas todavía pueden ser detenidas.

611. En 1994, la Comisión Permanente de Asuntos de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres de la Cámara de Representantes llevó a cabo un estudio de la aplicación de las recomendaciones por los poderes públicos. La Comisión Parlamentaria publicó su informe, titulado "Justice Under Scrutiny" ("Análisis de la Justicia"), en noviembre de 1994. La Comisión concluyó que los resultados de la aplicación de las recomendaciones sobre el desvío de las personas ebrias de la detención policial a otros lugares eran dispares. Se han creado casas de templanza en Australia del Sur (cinco), en Queensland (una, y está previsto crear otras tres), en Victoria (dos), en Australia Occidental (cinco, y está en estudio la creación de otras cuatro) y en el Territorio de la Capital de Australia (una). En el Territorio del Norte las patrullas nocturnas han

demostrado ser eficaces para evitar las detenciones policiales. Ahora bien, el informe señalaba asimismo que dos jurisdicciones no habían despenalizado la embriaguez en público y había pruebas documentales de un aumento del número de detenciones policiales por embriaguez en una jurisdicción y una falta de conciencia por parte de la policía de otras jurisdicciones de la existencia de otras soluciones para sustituir a la detención en las dependencias policiales.

612. Las competencias de la Administración Federal en materia de ejecución de penas privativas de libertad, detención y prisión provisional son muy limitadas ya que la mayoría de las fuerzas de policía, los centros de detención para menores y los órganos jurisdiccionales caen dentro de la esfera de competencia de los Estados. El Gobierno Federal de la época escribió a los ministros competentes de los gobiernos estatales acerca de estas cuestiones. Sin embargo, los poderes públicos federales han participado en esferas como la educación y capacitación de la policía, los funcionarios de prisiones y los funcionarios de juzgados y tribunales, y en la informatización de los encausamientos, lo que permitirá un mejor seguimiento de las detenciones e inculpaciones.

613. Las recomendaciones 86 a 88 versan sobre la evitación de la detención policial, en particular los insultos deben dejar de ser motivo de detención o imputación, la detención debe ser una medida que, por principio y en la práctica, solo debe utilizarse en última instancia y deben fomentarse los principios de control social.

614. El informe "Justice Under Scrutiny" demuestra que la aplicación de estas recomendaciones es desigual en todas las jurisdicciones. El Ministro Federal de Justicia ha remitido el informe, por conducto del Consejo Ministerial de la Administración de Justicia, al Consejo de Ministros de Policía de Australasia para que lo examine y adopte medidas al respecto.

La situación después del informe de la Comisión Real

615. Entre el 31 de mayo de 1991, fecha en que la Comisión Real presentó su informe definitivo, y el 30 de junio de 1994, al parecer murieron en régimen de detención en las dependencias policiales, los establecimientos penitenciarios y los centros de detención para menores de Australia 34 indígenas y 193 no indígenas, o sea, en total 227 personas.

616. Estas cifras representan por término medio 10,8 muertes de aborígenes cada año desde la presentación del informe de la Comisión Real, frente a la cifra de 10,5 muertes anuales en el período estudiado por la Comisión. También hay que destacar que desde mayo de 1989, fecha final de las muertes investigadas por la Comisión Real, al parecer se han registrado en toda Australia 59 muertes de aborígenes y 304 de no aborígenes en régimen de detención. Por lo que respecta a los aborígenes, esa cifra representa por término medio 11,6 muertes anuales. Los datos preliminares relativos al período que termina a fines de 1995 indican un aumento del número de muertes de aborígenes en todos los tipos de régimen de detención. Los cuadros 28, 29 y 30 muestran el número de muertes en régimen de detención por año, autoridad competente y condición de aborigen o no en el período de 1980 a 1995.

617. Para reducir significativamente el número de muertes en régimen de detención es evidente que sigue siendo necesario que todos los gobiernos adopten

medidas enérgicas para aplicar las recomendaciones de la Comisión Real de Investigación de las Muertes de Aborígenes en régimen de Detención.

618. En 1995, la Oficina de Evaluación y Auditorías de la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres evaluó las respuestas de los gobiernos a la Comisión Real. El Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres formuló otros comentarios sobre el proceso de información y seguimiento en la exposición que hizo ante la Comisión Permanente de Asuntos de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres de la Cámara de Representantes, en su encuesta sobre el informe del Commonwealth acerca de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Real de Investigación de las Muertes de Aborígenes en régimen de Detención, y en su segundo informe anual de 1994. En conjunto, estos informes constituyen una evaluación completa de la aplicación y seguimiento de las recomendaciones de la Comisión Real.

619. Atendiendo a los informes, la dependencia de seguimiento ha definido unas estrategias que permiten tener en cuenta las preocupaciones y problemas planteados. Esas estrategias han obtenido la aprobación de la Junta de Comisionados y el Consejo Ejecutivo de la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres. Para poner en práctica estas estrategias, la Junta nombró un Comisionado encargado de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Real de Investigación de las Muertes de Aborígenes en régimen de Detención y el Consejo Ejecutivo de la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres asignó a la dependencia de seguimiento de la Comisión Real un crédito suplementario de 170.000 dólares para salarios.

Los jóvenes delincuentes

620. En cada una de las jurisdicciones, la legislación de protección de menores confiere a los funcionarios de policía u otras personas autorizadas la potestad de detener, sin mandamiento judicial, a determinados menores. En los párrafos 640 a 675 del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño se proporcionan más datos.

621. En los párrafos 1483 a 1691 del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño se proporciona más información sobre los jóvenes delincuentes.

Artículo 10

622. La creación, el mantenimiento y la administración de los establecimientos penitenciarios de preventivos y de cumplimiento de penas de Australia son de la competencia de las Administraciones estatales. En virtud de la Christmas Island Act 1958 (Ley, de 1958, de la Isla Christmas), la Cocos (Keeling) Islands Act 1995 (Ley, de 1995, de las Islas Cocos (Keeling)) y la Removal of Prisoners (Territories) Act 1923 (Ley, de 1923, sobre los Traslados de Penados de los Territorios), las personas que han sido declaradas culpables de un delito en la Isla Christmas o en las Islas Cocos (Keeling) y a las que se ha impuesto luego una pena de prisión son trasladadas a Australia Occidental para cumplir la condena.

623. El análisis que figura a continuación versa primero sobre la reserva formulada por Australia a este artículo del Pacto y, después, sobre las

disposiciones específicas de cada Estado relativas a la separación de los internos, el régimen de los detenidos y presos antes de la condena, el sistema penitenciario, el régimen de los menores delincuentes y, finalmente, los programas de tratamiento para la consecución de la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad.

La reserva

624. Si bien las jurisdicciones australianas aceptan los principios y objetivos enunciados en el artículo 10 del Pacto, Australia ha mantenido su reserva a este artículo en lo que se refiere a los párrafos 2 y 3. Esa reserva dice:

En lo que se refiere al apartado a) del párrafo 2, se acepta el principio de la separación como objetivo que debe alcanzarse progresivamente. En lo que se refiere al apartado b) del párrafo 2 y a la segunda frase del párrafo 3, la obligación de separar a los menores de los adultos se acepta solo en la medida en que las autoridades competentes consideren que esa separación es beneficiosa para los interesados."

625. Las razones de esta reserva se basan en la evolución de las ideas sobre las sanciones penales que el Derecho debe asignar al delito. Generalmente se sostiene que separar a los menores de los demás delincuentes no siempre es conveniente, por ejemplo, cuando la separación puede resultar en realidad en un régimen de aislamiento o en unas condiciones de vida más rigurosas que las de la población reclusa en general. En las regiones escasamente pobladas de Australia, donde el costo de alojar por separado a presos preventivos y penados no estaría justificado en las circunstancias actuales, hay dificultades para llevar a efecto las medidas de separación previstas.

626. Por estas razones, la legislación o la práctica tal vez no se ajusten plenamente a las disposiciones sobre separación del párrafo 2 de este artículo. No obstante, desde la presentación del segundo informe periódico de Australia se han adoptado nuevas disposiciones para lograr la separación prevista.

627. En la Conferencia de Directores de Instituciones Penitenciarias, celebrada en 1989, se ratificaron las Directrices Uniformes de Régimen Penitenciario de Australia. Este nuevo conjunto de directrices completa las Reglas Mínimas Uniformes en su aplicación a los centros penitenciarios de Australia.

628. De acuerdo con las directrices, los presos preventivos son separados de los penados en la medida de lo posible. El régimen de los preventivos es distinto del de los penados, permitiéndose a los primeros, en lo posible, las comunicaciones privadas con sus parientes, allegados y letrados; no están obligados a trabajar ni a llevar el uniforme de la prisión.

La separación

629. La Ley Penitenciaria (Instituciones Penitenciarias) de 1980 dispone que los detenidos a disposición judicial (contra los que se ha dictado fallo condenatorio pero a los que todavía no se ha impuesto una pena) y los presos preventivos deberán estar separados de los penados.

Nueva Gales del Sur

630. La Ley Penitenciaria, de 1952, dispone que "... hasta donde sea posible y razonable se procederá a una completa separación de los internos y, en consecuencia, los condenados estarán separados de los demás reclusos y las diferentes clases de condenados de las diferentes clases de otros reclusos...". Esto supone, en general, la separación de los presos preventivos y los jóvenes.

Queensland

631. El sistema de separación aplicado en Queensland supone, en la mayoría de los casos, que los preventivos estén separados de los condenados.

Australia del Sur

632. La Administración Penitenciaria de Australia del Sur ha adoptado las Reglas mínimas de las Naciones Unidas como base teórica de sus actividades. De acuerdo con esas Reglas, los presos preventivos son alojados separadamente de los que cumplen condena. La mayoría se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de Preventivos de Adelaida, que es un establecimiento especializado que entró en servicio en 1986.

Tasmania

633. El número de presos en Tasmania es, por término medio, de 300, de los cuales quizás 30 son presos preventivos. Si bien el Prison Regulations 1974 (Reglamento penitenciario, de 1974) dispone la separación de preventivos y penados, ello no es siempre posible debido al pequeño número de internos. Por ejemplo, el número total de mujeres internas suele girar en torno a las ocho personas. La separación de las presas preventivas de las mujeres penadas equivaldría a establecer un régimen de aislamiento. Cuando las dependencias penitenciarias lo permiten, los presos acusados de delitos graves están separados de los acusados de delitos menos graves.

634. En 1997 debería terminarse un nuevo establecimiento penitenciario para presos preventivos en Hobart, que permitirá proceder en mejores condiciones a la separación de preventivos y penados. También permitirá separar a los presos preventivos según sus necesidades.

Victoria

635. En Victoria, la separación entre los internos según que estén o no cumpliendo condena ha mejorado desde el último informe, pero aún no es completa. Aunque la mayoría de los presos preventivos varones permanecen recluidos en el Centro Penitenciario de Preventivos de Melbourne, que aloja a 240 internos, la Cárcel Metropolitana sigue funcionando como departamento de ingresos en el que se admite a detenidos, presos y penados en virtud de mandamiento u orden de la autoridad judicial. Las mujeres retenidas en prisión provisional permanecen en la Cárcel de Fairlea. Si bien entre los reclusos de la Cárcel Metropolitana y la Cárcel de Fairlea hay presos preventivos, no es práctico mantener la separación entre ambos grupos de internos, aunque algún tipo de separación evidentemente es posible.

Australia Occidental

636. En Australia Occidental, el Prison Regulations 1982 (Reglamento Penitenciario, de 1982) establece que los presos preventivos deben en lo posible estar separados de los penados. Los preventivos pueden permanecer durante cortos períodos en las cárceles regionales debido a la lejanía de Perth. Los preventivos mayores de edad también pueden ser retenidos en las cárceles metropolitanas cuando el Centro Penitenciario de Preventivos está lleno. La separación se mantiene en lo posible, aunque no siempre es práctico habida cuenta de la necesidad de velar por el acceso de los preventivos a los servicios de orden laboral, recreativo, médico y de otro tipo. Los presos preventivos están sometidos a un régimen penitenciario diferente, en particular en lo que concierne a las visitas de sus abogados para facilitar su defensa.

El régimen penitenciario antes de la condena

637. Como se ha examinado ya en relación con los artículos 7 y 9, ninguna persona puede ser privada de libertad en Australia sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. Las leyes parlamentarias federales y estatales, el common law y las ordenanzas de policía determinan el régimen aplicable a detenidos y presos.

638. Todo acto que infrinja estas normas, como una agresión, puede constituir una infracción penal y dar pie al ejercicio de las acciones penales y civiles ordinarias. Como se indica en el documento básico, existen también mecanismos con arreglo a los cuales las denuncias contra la policía pueden ser investigadas por una autoridad independiente (el defensor del pueblo o un órgano jurisdiccional especial independiente), que puede recomendar que se adopten las medidas apropiadas. La policía también puede adoptar medidas disciplinarias internas. Con respecto a la Isla Norfolk, no existen disposiciones de este tipo. Los malos tratos ocasionados a detenidos o presos para reunir pruebas (por ejemplo, una confesión), hacen que el órgano jurisdiccional deje éstas sin efecto por haber sido obtenidas ilícita o indebidamente. Los malos tratos a detenidos o presos también hacen inadmisibles el reconocimiento de los hechos.

639. A continuación se analizan los regímenes de prisión provisional de algunos Estados.

Territorio del Norte

640. Toda persona privada de libertad o detenida es objeto de un reconocimiento. En el momento de la detención se examina si la persona detenida presenta señales de sevicias o síntomas de angustia, o si precisa recibir atención médica. Deben adoptarse medidas para tratar de reducir la ansiedad y desorientación que puedan sufrir las personas detenidas. Las mujeres detenidas solo pueden ser cacheadas por una persona de su mismo sexo. Los hombres deben estar separados de las mujeres.

641. El funcionario a cargo de la comisaría de policía debe elaborar y aplicar un plan de visitas a las celdas, con objeto fundamentalmente de impedir que los detenidos puedan desarrollar un sentimiento de desesperación, aislamiento o abandono que lleve a un deterioro de su salud física o psíquica.

Australia del Sur

642. En Australia del Sur, los funcionarios a cargo de las comisarías de policía son responsables de la seguridad y el cuidado de los retenidos bajo custodia en su comisaría.

643. El Manual de Funciones Generales de la Policía establece, en la ordenanza general 5750:7.3, que los funcionarios a cargo de las comisarías serán responsables de la seguridad y el cuidado de los retenidos bajo custodia en su comisaría. Deben velar por que las disposiciones de vigilancia y supervisión sean las adecuadas para impedir que los detenidos se causen lesiones a sí mismos o las causen a terceros, o que causen daños a las cosas. Cuando un detenido pueda ser víctima de agresión por sus codetenidos, será mantenido en aislamiento todo el tiempo que permanezca bajo custodia de la policía.

Tasmania

644. En Tasmania, las personas que se encuentran retenidas bajo custodia de la policía tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos a la seguridad personal, con la reserva de que los funcionarios de policía pueden hacer uso de la fuerza racionalmente necesaria para impedir su fuga y para proceder a su cacheo y a los trámites de su admisión. Tanto el reglamento como las instrucciones administrativas internas de la policía hacen hincapié en la prevención de las sevicias a los detenidos. Se debe visitar regularmente a los detenidos y tener en cuenta factores como su estado mental, sus tendencias suicidas, etc. Estos datos deben anotarse en el Libro de ingresos y las cuestiones de especial interés deben comunicarse a los supervisores.

645. La vigilancia de las personas que permanecen bajo custodia policial está siendo transferida progresivamente a la División de Servicios Penitenciarios del Departamento de Justicia. Cuando termine la construcción del nuevo centro de preventivos de Hobart, en 1997, las personas retenidas bajo custodia de la policía serán entregadas a los Servicios Penitenciarios inmediatamente después de ser inculpadas, si no se les concede la libertad provisional con fianza. Dichos Servicios ya han asumido esas funciones en Tasmania septentrional.

El sistema penitenciario

646. Como se indicaba en las observaciones preliminares sobre este artículo, la creación, el mantenimiento y la administración de los establecimientos penitenciarios de preventivos y de cumplimiento de penas de Australia son de la competencia de las Administraciones estatales. Así, las personas condenadas por delitos contra las leyes federales son internadas en establecimientos penitenciarios estatales de conformidad con el artículo 120 de la Constitución de Australia, que dispone:

"Cada Estado dictará disposiciones para proveer a la retención y custodia en sus establecimientos penitenciarios de las personas acusadas o condenadas por delitos contra las leyes del Commonwealth, y para el castigo de las personas condenadas por esos delitos, y el Parlamento del Commonwealth podrá promulgar leyes para llevar a efecto a esta disposición".

647. En los establecimientos penitenciarios estatales también son internados los condenados por delitos en los Territorios australianos cuya población no es suficientemente grande para justificar un sistema penitenciario separado. Por ejemplo, todos los presos de la Isla de Norfolk están internados en establecimientos penitenciarios de Nueva Gales del Sur y los presos del Territorio de la Capital de Australia pueden cumplir su condena en Nueva Gales del Sur.

648. En todas las jurisdicciones estatales australianas, la normativa penitenciaria enuncia disposiciones sobre la creación, el mantenimiento y la administración de instituciones destinadas a la retención y custodia de detenidos y presos y a la ejecución de las penas privativas de libertad. Esa normativa es la siguiente:

Nueva Gales del Sur: Prisons Act 1952 (Ley Penitenciaria, de 1952)

Territorio del Norte: Prisons (Correctional Services) Act 1980 (Ley Penitenciaria (Instituciones Penitenciarias), de 1980)

Queensland: Corrective Services Act 1988 (Ley, de 1988, de Instituciones Penitenciarias)

Australia del Sur: Correctional Services Act 1982 (Ley, de 1982, de Instituciones Penitenciarias)

Tasmania: Prison Act 1977 (Ley Penitenciaria, de 1977)

Victoria: Corrections Act 1986 (Ley, de 1986, de Instituciones Penitenciarias)

Australia Occidental: Prisons Act 1981 (Ley Penitenciaria, de 1981)

649. En general, la legislación provee al bienestar y la protección de los reclusos. Dispone, por ejemplo, que se proporcione a los internos una alimentación y un ejercicio adecuados y asistencia sanitaria, que sus objetos personales sean guardados en lugar seguro durante su internamiento y que se les devuelvan en el momento de su excarcelación, y que se faciliten la práctica de los ritos religiosos y las actividades recreativas y profesionales. Los servicios médicos de los establecimientos penitenciarios efectúan un seguimiento de la situación médico-sanitaria e informan al funcionario a cargo del establecimiento sobre cuestiones de salud e higiene.

650. Todos los establecimientos penitenciarios australianos proporcionan toda la variedad de servicios médicos, dentales, farmacéuticos y psiquiátricos. La asistencia médica y dental básica es gratuita. Los establecimientos de mayor tamaño disponen de enfermería y otras dependencias sanitarias y de personal médico a tiempo completo. En las zonas más remotas, los servicios médicos son prestados por facultativos locales por contrato. Los internos también pueden ser trasladados a centros hospitalarios extrapenitenciarios. En Victoria se ha creado con tal fin en un hospital público una sala especial por motivos de seguridad. En Nueva Gales del Sur, además del Hospital de Long Bay, que está ubicado dentro del complejo penitenciario de Long Bay, existe un pabellón cerrado en un hospital público, el Hospital Prince Henry.

651. Se regulan las visitas de familiares y amigos a los internos, así como sus comunicaciones con otras personas. La correspondencia de ciertos reclusos puede ser abierta, pero existen excepciones legales a esta regla. Por ejemplo, la Ley Federal, de 1986, reguladora de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades dispone que la correspondencia entre reclusos y la Comisión no debe ser abierta por los funcionarios penitenciarios. En el ámbito estatal, un ejemplo es la Ley Penitenciaria (Instituciones Penitenciarias) de 1980 del Territorio del Norte, que prohíbe al funcionario a cargo del establecimiento penitenciario abrir las cartas dirigidas a la oficina del Ministro competente, el Defensor del Pueblo, el Director o el abogado del interno. El Juez de Vigilancia (o su equivalente), nombrado de acuerdo con la ley, realiza visitas frecuentes a los establecimientos penitenciarios, informa al Ministro discrecionalmente o cuando así lo previene la ley e investiga la reclamaciones que formulen los internos. En Victoria, la Ley de Instituciones Penitenciarias, de 1986, confiere a los internos el derecho a que no se abran las cartas que dirijan al Defensor del Pueblo o que reciban de él. Los internos tienen un derecho condicional a recibir otras cartas no censuradas por el personal penitenciario.

652. Los malos tratos a los detenidos constituyen una infracción penal en la mayoría de los casos y también pueden dar lugar al ejercicio de una acción civil por daños y perjuicios. Los internos pueden denunciar los malos tratos ante el Defensor del Pueblo, el Juez de Vigilancia (o equivalente), el funcionario a cargo del establecimiento penitenciario o el Ministro competente, quienes tienen potestad para iniciar la investigación de la denuncia.

653. En general, las infracciones penales en el ámbito penitenciario están definidas en las leyes y correspondientes reglamentos. Sin embargo, el funcionamiento cotidiano del centro penitenciario es competencia del jefe de servicios o Director, quienes pueden establecer normas para facilitarlo. Esas normas deben ser compatibles con la ley de delegación. Las supuestas infracciones a las normas son resueltas generalmente, después de oír al preso, por el director de la prisión o un magistrado (llamado Juez o Tribunal de Vigilancia Penitenciaria (Visiting Justice or Tribunal) en algunas jurisdicciones). En todos los casos la resolución puede ser recurrida. Por ejemplo, de conformidad con la Ley, de 1982, de Instituciones Penitenciarias de Australia del Sur, el detenido o preso puede recurrir ante el Tribunal de Vigilancia Penitenciaria sobre una cuestión de derecho. En algunas jurisdicciones, los tribunales de justicia han fallado que el Tribunal de Distrito (District Court) conoce en segunda instancia, abierta a nuevas alegaciones fácticas y nuevas probanzas, de los recursos interpuestos contra las resoluciones del Juez de Vigilancia. Por ejemplo, en el asunto R. c. Fraser [1977] 2 NSWLR 867, en Nueva Gales del Sur, el tribunal afirmó el principio según el cual la instrucción de un procedimiento disciplinario ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria debe ser lo más semejante posible a la tramitada ante un tribunal local extrapenitenciario.

654. Las sanciones que pueden imponerse a los reclusos por infracción a las normas penitenciarias son muy diversas y tienen por objeto mantener el orden y la disciplina y proteger a los demás reclusos y los empleados del establecimiento penitenciario. Las sanciones comprenden la retirada de beneficios penitenciarios y medidas como el aislamiento en celda o la limitación de la dieta. No obstante, algunas jurisdicciones prohíben la imposición de la sanción de aislamiento. Por ejemplo, la Ley de Nueva Gales del Sur establece que

el recluso no puede ser encerrado en celda oscura ni se le pueden aplicar medios coercitivos físicos, ni ser objeto de castigos corporales o aislamiento o de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La reinserción social

655. Uno de los fines principales del sistema penitenciario de Australia es la reinserción social. Como se ha indicado antes, los establecimientos penitenciarios también proporcionan servicios de educación y formación. Como se ha mencionado en las observaciones relativas a los artículos 7 y 8, todas las jurisdicciones australianas han aprobado disposiciones legales sobre la remisión condicional a prueba (probation) y la libertad condicional (parole), algunos de los Estados sobre la pena de trabajos en beneficio de la comunidad (community service orders) y varias jurisdicciones sobre los programas de salidas para realizar actividades laborales.

656. El Instituto Australiano de Criminología reúne y difunde información sobre todos los sistemas de penas privativas y no privativas de libertad. Cada año, desde 1982, ha levantado un censo de todas las personas reclusas en centros penitenciarios oficiales, y cada dos años aproximadamente, desde 1985, un censo de todas las personas que cumplen penas no privativas de libertad. Los resultados de estos censos son utilizados generalmente para fines de investigación y planificación.

657. En varias jurisdicciones se han elaborado, con la integración en la sociedad como objetivo primordial, programas de ayudas a la excarcelación y de asistencia pospenitenciaria. Queensland aplica amplios programas de trabajos en beneficio de la comunidad y un programa de salidas para realizar actividades laborales. En Australia Occidental ciertos internos pueden participar en un programa de salidas para realizar trabajos en beneficio de la comunidad antes de obtener la libertad condicional o de extinguir condena. El programa tiene como objetivo ayudar a los reclusos que han cumplido penas superiores a 12 meses de prisión a integrarse de nuevo en la sociedad.

658. Las disposiciones legales sobre rehabilitación también contribuyen al proceso de reinserción social. La normativa federal sobre la cancelación de la anotación de antecedentes penales (spent convictions) entró en vigor el 30 de junio de 1990. Esa normativa figura en el Título VII, sección C, de la Ley Penal Federal, de 1914, y se aplica a los condenados a una pena privativa de libertad de una duración máxima de 30 meses. Prohíbe a los órganos federales incurrir en cualquier discriminación por razón de esos antecedentes delictivos (sean por delito federal o delito estatal) cuando hayan transcurrido diez años desde la fecha de la condena sin que haya delinquido de nuevo. En el caso de ser menor de edad, este plazo será de cinco años. Estas disposiciones confieren al reo el derecho a la no divulgación de los antecedentes cancelados (artículo 85ZW). Estas disposiciones son más amplias que las enunciadas en la Ley, de 1986, reguladora de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades y confieren atribuciones más amplias al Comisionado de Protección de la Intimidad, quien puede investigar las supuestas violaciones al tramitar y resolver denuncias. La Ley, de 1986, de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades da efecto al compromiso asumido por Australia respecto del Convenio (Nº 111) relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación de la Organización Internacional del Trabajo. La Ley versa sobre las mismas formas de discriminación que el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo y

autoriza que se determinen por reglamento otras nuevas. El 1º de enero de 1990 entró en vigor el Reglamento por el que se declaraban discriminatorios a efectos de la Ley, en materia de empleo y ocupación, otros 12 supuestos, entre los cuales figuraba la discriminación basada en los antecedentes penales. Por consiguiente, al Comisión de Derechos Humanos es competente para investigar y tratar de resolver las denuncias de discriminación presentadas por personas que alegan haber sido discriminadas en materia de empleo u ocupación a causa de sus antecedentes penales.

659. La normativa legal enuncia excepciones en favor de determinadas personas u órganos y para ciertos efectos. Por ejemplo, la persona que emplea a otras para el cuidado de menores está exenta de la aplicación de esta normativa a los efectos de determinar si el futuro empleado ha sido condenado por un delito sexual. Se prevé el establecimiento por reglamento de otras excepciones. La normativa se aplica asimismo a la discriminación atribuible a organismos privados o públicos en los mismos supuestos cuando la disposición legal infringida pertenece al ordenamiento federal o al de un Territorio no autónomo.

660. Queensland, Australia Occidental, Nueva Gales del Sur y el Territorio del Norte cuentan con disposiciones legales por las que se establecen sistemas de cancelación de los antecedentes delictivos en esas jurisdicciones. En Nueva Gales del Sur, la Criminal Records Act 1991 (Ley, de 1991, de Antecedentes Penales) dispone que se cancelarán los antecedentes penales de cualquier persona que haya permanecido sin delinquir durante determinado plazo (que es de diez años para los mayores de edad y de tres para los menores). La normativa no se aplica a ciertas condenas, en particular las que imponen penas de privación de libertad de más de seis meses y las condenas por delitos sexuales. La Criminal Law (Rehabilitation of Offenders) Act 1986 (Ley Penal de 1986 (Rehabilitación del Delincuente)) del Estado de Queensland y la Spent Convictions Act 1988 (Ley, de 1988, de Cancelación de Antecedentes Delictivos) del Estado de Australia Occidental disponen, en particular, que toda persona o autoridad que evalúe la idoneidad de una persona para desempeñar un empleo u ocupación no debe tener en cuenta ninguna condena que se haya anotado en los antecedentes penales de esa persona respecto de la cual el plazo de rehabilitación haya vencido y no haya empezado a correr de nuevo. Algunas profesiones están exentas del deber de no tener en cuenta la condenas, por ejemplo, la policía, los maestros. La Ley Penal de 1986 (Rehabilitación del Delincuente)) de Queensland fue modificada en 1990 para prever plazos de rehabilitación diferentes según el tipo de delito por el que la persona hubiere sido condenada. Estos plazos son los siguientes:

- Cinco años, en el caso de una persona condenada por un delito menos grave (simple offence) o un delito grave (indictable offence) que haya sido enjuiciado por el procedimiento abreviado ante el Tribunal de Magistrados (Magistrates Court); y
- Diez años, en el caso de que la causa haya sido juzgada en los tribunales superiores en virtud de un acto de inculpación formal (on an indictment).

Los menores delincuentes

661. En los párrafos 430 a 438 del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño se informa detalladamente sobre la reunión y análisis de datos sobre menores. En los

párrafos 1483 a 1691 de dicho informe se proporciona más información sobre los menores delincuentes.

Artículo 11

662. Todas las jurisdicciones australianas cumplen las disposiciones de este artículo. El common law establece una clara distinción entre las leyes relativas al orden público, el Estado y sus ciudadanos (o sea, las leyes penales) y las leyes relativas a las relaciones privadas entre particulares, por ejemplo las disposiciones sobre obligaciones y contratos. El incumplimiento de una obligación contractual solo da lugar a la posibilidad de obtener una resolución judicial ordenando el cumplimiento específico del contrato o el pago de una indemnización por daños y perjuicios. En el supuesto de que una persona no cumpla la resolución judicial, un tribunal de justicia determinará a su arbitrio la sanción que debe aplicarse a la persona responsable.

Artículo 12

663. El Gobierno Federal estima que la ley y la práctica australianas se ajustan a lo dispuesto en este artículo. Aunque no hay un derecho absoluto a entrar libremente en Australia, a circular libremente por su territorio ni a salir libremente de él, las restricciones existentes son pocas y se consideran compatibles con las disposiciones de los párrafos 3 y 4 de este artículo. Esas restricciones se exponen a continuación.

La libertad de circulación por el territorio de Australia

664. No hay en Australia leyes que regulen en general la circulación de los nacionales o extranjeros por su territorio. Sin embargo, hay controles específicos a la entrada en algunas zonas del país. Se ejercen controles a la entrada en cuatro tipos de tierras:

- Algunos territorios australianos adyacentes;
- Las tierras de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres;
- Las tierras reservadas para fines de defensa; y
- Ciertos parques nacionales.

665. Estas excepciones se examinan sucesivamente en los párrafos siguientes. En general, las tierras australianas pueden ser de propiedad absoluta de la Corona, estar sujetas al título nativo o ser de propiedad privada (es decir, en virtud de títulos de dominio, pleno o absoluto (freehold) o en arrendamiento (leasehold), concedidos por la Corona, incluso a aborígenes e isleños del Estrecho de Torres a tenor de la legislación sobre los regímenes de tenencia de la tierra). La tierra cuya titularidad está reservada a la Corona suele estar adscrita a un fin específico, y la Corona se reserva el derecho a controlar el acceso a la misma de conformidad con el fin al que la tierra está adscrita. La extensión del derecho de los beneficiarios del título nativo a regular la entrada en sus tierras depende de sus leyes y usos tradicionales, pero puede abarcar el derecho a la posesión exclusiva o el derecho a excluir a determinados grupos de personas. Los propietarios particulares de tierras también tienen un derecho general a regular la entrada en su propiedad y, a ser necesario, pueden

oponerse a la entrada sin autorización mediante el ejercicio de una acción por intromisión ilegítima (action in trespass). A su vez, los propietarios particulares pueden estar sujetos a ciertos derechos reservados a la Corona (por ejemplo, en relación con los minerales del terreno) y a la legislación que autoriza la entrada de las autoridades públicas en beneficio del interés general (por ejemplo, en relación con la salud pública).

666. Por lo que respecta a la libertad de circulación entre los Estados, la Constitución de Australia dispone en su artículo 92 que:

"... el comercio y las relaciones entre los Estados, por vía terrestre o marítima, serán absolutamente libres."

667. Esta garantía, que ha sido objeto de interpretación judicial, se entiende que abarca la libre circulación tanto de las personas como de las mercancías. El término "relaciones" ha sido interpretado en el sentido de que abarca toda migración o movimiento de personas de un Estado a otro, lo que incluye tanto a los ciudadanos particulares como a los miembros de la clase empresarial. Esta libertad se mantuvo incluso durante la guerra. No se aplica, sin embargo, al comercio y las relaciones con los Territorios (incluido el Territorio del Norte). La Ley, de 1978, de Régimen de Autonomía del Territorio del Norte establece, en el artículo 49, una garantía separada, aunque análoga, de la libertad de circulación entre los Estados y el Territorio del Norte.

Los territorios adyacentes (external territories)

668. El ámbito de aplicación de la Ley de Migración, de 1958, se extiende a las Isla Christmas y las Islas Cocos (Keeling) y establece también la libre circulación por el territorio de dichas islas, y entre ellas y otras zonas de Australia.

669. La entrada y residencia en la Isla Norfolk se rigen por la Inmigration Act 1980 (Ley de Inmigración, de 1980) de la Isla Norfolk. Según esta Ley, cuya aplicación depende del Gobierno de la Isla Norfolk, existen cuatro clases de visados de entrada. El visado de visitante autoriza a permanecer durante 120 días como máximo en la Isla Norfolk. Se pueden otorgar permisos temporales de entrada por un período de un año como máximo, con sujeción o no a condiciones relacionadas con el trabajo. Se pueden conceder permisos generales de entrada por períodos de cinco años y seis meses como máximo, también sujeto o no a condiciones. Los permisos de residencia autorizan a una persona a residir permanentemente en la Isla Norfolk, sin ninguna restricción.

670. Para más detalles sobre las Islas Cocos (Keeling), la Isla Christmas y la Isla Norfolk, véanse las observaciones relativas al artículo 1 supra.

Tierras de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres

671. De conformidad con la legislación australiana, la libertad de circulación no está sujeta a ninguna restricción propia de los australianos aborígenes o isleños del Estrecho de Torres.

672. En los casos en que los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres han adquirido un título de dominio pleno (freehold title), los derechos de entrada de los visitantes están sujetos a las mismas disposiciones en materia de

intromisión ilegítima (trespass) que se aplican a la colectividad en general. No obstante, ciertos instrumentos legislativos han concedido, con respecto a grandes extensiones de territorio, especialmente en Australia del Sur, la titularidad de dominio pleno a los propietarios tradicionales de la tierra o a los consejos de tierras aborígenes que reciben el título en fideicomiso (in trust) en beneficio de los propietarios tradicionales aborígenes. En el caso de las tierras a que se refieren esas disposiciones legislativas, las personas que no son propietarios tradicionales o no pertenecen a ninguna de las categorías exentas (por ejemplo, la policía, los médicos, los miembros (o candidatos a diputado) del Parlamento, ciertos funcionarios públicos y los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres titulares de derechos tradicionales que no son de propiedad) están obligadas a solicitar formalmente de los propietarios tradicionales o del consejo de tierras competente para administrarlas la autorización para penetrar en ellas.

673. En los casos en que las tierras han sido arrendadas o reservadas para beneficio exclusivo de determinadas comunidades u organizaciones de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, se aplican restricciones análogas. Pueden entrar libremente solo los miembros de la comunidad o grupo exento de que se trata, y los demás deben solicitar la autorización de la comunidad o la autoridad pública estatal competente.

674. En Australia del Sur, la Pitjantjatjara Land Rights Act 1981 (Ley, de 1981, de Derechos a la Propiedad de la Tierra de la Comunidad Pitjantjatjara) y la Maralinga Tjarutja Land Rights Act 1984 (Ley, de 1984, de Derechos a la Propiedad de la Tierra de la Comunidad Maralinga Tjarutia) confieren el título de dominio pleno (freehold title) a los propietarios tradicionales como se ha expuesto anteriormente. En virtud de estas Leyes, toda persona distinta de un propietario tradicional que penetre en las tierras sin la autorización del organismo al que se ha concedido la titularidad comete una infracción penal. El Tribunal Supremo ha confirmado, en una resolución de 1985, que esas restricciones, conjuntamente con el sistema de autorización de entrada, constituyen una "medida especial" en favor de la población aborigen y, como tal, constituye una exención legítima de la aplicación de la Ley Federal, de 1975, sobre Discriminación Racial, que está basada en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Las limitaciones de entrada enunciadas en dichas Leyes no están sujetas, por lo tanto, a las prohibiciones de discriminación por motivos de raza establecidas en esa Ley.

Las restricciones por motivos de defensa nacional

676. Existen en Australia controles a la entrada en determinadas zonas terrestres y marítimas y en el espacio aéreo, exceptuadas por razones de defensa nacional, y controles de acceso a establecimientos, instalaciones y otros bienes utilizados para tales fines. Esas limitaciones se imponen por ley con objeto de salvaguardar la seguridad nacional.

Los parques nacionales

676. El acceso a las zonas protegidas de Australia, como los parques nacionales, generalmente está abierto al público, pero puede limitarse en determinadas zonas, e incluso prohibirse, para salvaguardar los fines para los

que fue creada la reserva, por ejemplo, preservar zonas de singular importancia histórica o ecológica.

677. En Queensland, la Recreation Areas Management Act 1988 (Ley, de 1988, de Gestión de Espacios Naturales) contiene disposiciones sobre las zonas que han de ser declaradas espacios naturales protegidos y los controles de acceso del público a esas zonas mediante la percepción de derechos y tasas, la limitación del acceso a ciertas zonas y la expedición de permisos de acampada, así como el control de los movimientos de personas y vehículos por las zonas que puedan resultar nocivos para el medio ambiente. Las zonas que han sido declaradas espacios naturales son, entre otras, la Isla Fraser, la Isla Moreton y la Isla Green. En otros Estados existe una normativa semejante. Estos mecanismos de control son medios generalmente aceptados de limitación del acceso a zonas de importancia ecológica.

678. Las leyes de Tasmania prevén la prohibición de entrada en ciertas zonas donde se realizan actividades forestales. No se trata de una prohibición general, sino que solo se puede aplicar con respecto a zonas determinadas en virtud de una orden especial del Ministro competente.

Las restricciones en caso de situación excepcional

679. El derecho a circular libremente por el territorio de Australia y a salir libremente de él también puede ser limitada por las leyes de algunos Estados. De conformidad con la Ley, de 1975, sobre la Organización de Prevención de Catástrofes, las autoridades del Estado de Queensland pueden ordenar la exclusión de los particulares de cualquier lugar, el cierre de cualquier carretera al tráfico o el cierre de cualquier lugar público cuando se haya declarado el estado de calamidad pública. De conformidad con la Emergency and Rescue Management Act 1986 (Ley, de 1986, de Gestión de Operaciones de Salvamento en caso de Situación Excepcional), las autoridades del Estado de Nueva Gales del Sur pueden imponer a los ciudadanos la obligación de salir de una zona de emergencia o peligro, o de no entrar en ella. De conformidad con la Ley, de 1986, de Gestión de Operaciones en caso de Situación Excepcional, las autoridades del Estado de Victoria, cuando se ha declarado el estado de calamidad pública o una zona ha sido declarada zona de emergencia, pueden limitar la libertad de circulación. De conformidad con la Ley, de 1976, de Servicios de Protección Civil de Tasmania, cuando se ha declarado el estado de emergencia, las autoridades pueden excluir a los ciudadanos de cualquier lugar. La Ley, de 1982, de Medidas en casos de Desastre del Territorio del Norte faculta a las autoridades, en caso de calamidad pública, a evacuar a cualquier persona de cualquier lugar. De conformidad con la Ley estatal, de 1980, de Intervención en caso de Catástrofe, las autoridades de Australia del Sur pueden ordenar o prohibir la entrada o los movimientos de personas en la zona damnificada o de emergencia (véase también la sección relativa al artículo 4 supra, bajo el epígrafe "Tipos de situación excepcional").

La salida del territorio de Australia

680. El derecho de las personas a salir del territorio de Australia está sujeto, en el caso de los nacionales, a los controles sobre la expedición de pasaportes. Todas las personas, incluidos los nacionales australianos, están obligadas a acreditar su identidad, por medio de un título de viaje nacional, y

a facilitar sus datos personales mediante la correspondiente tarjeta de pasajero debidamente rellena.

681. Por lo que respecta a los refugiados, Australia es parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y el Protocolo de 1966 que la modifica, que enuncia varias obligaciones en lo que concierne a los viajes de los refugiados. La pretensión de cualquier persona de obtener el asilo en Australia es evaluada en la forma prescrita por la Convención sobre los Refugiados. El 1º de septiembre de 1994, mediante la modificación de la Ley de Migración, de 1958, se creó el Visado de Asilo, que es el medio por el cual Australia ofrece dar acogida a las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Convención sobre los Refugiados. El solicitante que se ha visto reconocer la condición de refugiado obtiene un Visado de Asilo que le autoriza a residir permanentemente en Australia.

682. El régimen de los refugiados en Australia se analiza más en detalle en las secciones relativas al artículo 9 supra, bajo el epígrafe "Los extranjeros en situación ilegal", y el artículo 13 infra, bajo el epígrafe "Los extranjeros en situación legal".

683. En Australia, las personas que pueden acreditar su identidad y nacionalidad australiana tienen derecho al pasaporte australiano, de conformidad con la Passports Act 1938 (Ley de Pasaportes, de 1938), excepto en los contados supuestos siguientes:

- Cuando el solicitante sea una persona menor de 18 años que no esté ni haya estado nunca casada, a no ser
 - que haya obtenido el consentimiento de su tutor, curador o representante legal;
 - que un tribunal haya autorizado al menor a abandonar Australia; o
 - que se den otras circunstancias especiales;
- Cuando haya motivos para creer que se ha expedido en Australia un mandamiento de detención contra el solicitante;
- Cuando el solicitante esté obligado, en virtud de mandamiento judicial dictado a tenor de una ley australiana, de garantía de libertad condicional o de garantía o fianza de libertad provisional, a permanecer en Australia o a abstenerse de solicitar el pasaporte australiano;
- Cuando haya motivos para creer que el solicitante del pasaporte está obligado para con el Gobierno Federal a satisfacer una deuda de dinero a consecuencia
 - de los gastos realizados por el Gobierno Federal por cuenta del solicitante en un país extranjero;
 - del dinero prestado al solicitante por el Gobierno Federal cuando aquél se encontraba fuera de Australia; y

- de los gastos realizados por el Gobierno Federal para costear el retorno del solicitante a Australia desde un país extranjero o en relación con ese retorno;
- Cuando el Ministro haya llegado a la opinión de que esa persona, si se le expide el pasaporte australiano, probablemente observará un comportamiento
 - que puede poner en peligro la seguridad de Australia o de un país extranjero;
 - que puede poner en peligro la salud o la seguridad física de otras personas, en Australia o en un país extranjero; o
 - que puede menoscabar los derechos y libertades de otras personas enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en Australia o en un país extranjero.

684. La aplicación de todas estas excepciones está sujeta a la potestad discrecional del Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio, quien puede ordenar que se expida el pasaporte aunque se den las condiciones para denegarlo. El Ministro también puede cancelar un pasaporte. No se lleva un registro de los pasaportes que han sido denegados, pero en el caso de mayores de edad esa denegación es sumamente rara. Las decisiones relativas a la expedición, denegación o cancelación de pasaportes están sujetas al control del Tribunal Administrativo de Apelación. Sin embargo, las solicitudes de pasaporte de menores sujetos a resoluciones judiciales que prohíben su salida de Australia son denegadas automáticamente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70A(1) de la Ley, de 1975, reguladora del Derecho de Familia.

685. La Ley de Migración, de 1958, no autoriza a impedir que una persona abandone Australia. Sin embargo, la Ley institucionaliza la práctica consistente en pedir a los viajeros que salen de Australia que acrediten su identidad y faciliten sus datos personales, generalmente en forma de una tarjeta de pasajero debidamente rellena y el pasaporte.

686. Por otra parte, es práctica administrativa de los inspectores de migración controlar y entrevistar a varios pasajeros de salida, entre los cuales son más probables:

- El residente extranjero que sale temporalmente sin visado;
- Una persona admitida temporalmente en Australia que ha rebasado el período de estancia autorizado;
- El nacional australiano cuyo título de viaje ha expirado; y
- El hombre de mar despedido de su buque y desembarcado en Australia sin autorización.

687. El Programa de Migración tiene por objeto elegir a las personas que, en el momento de la selección para inmigración, más pueden aportar a Australia, ya por su relación con nacionales australianos o residentes permanentes, ya por su posible contribución económica.

688. A fin de proteger a la comunidad australiana, todos los solicitantes de residencia permanente deben satisfacer los criterios del interés general, que comprenden un control de salud. El control de salud debe permitir determinar que el interesado no padece ninguna enfermedad transmisible de carácter grave o mortal que constituya una amenaza para la salud pública en Australia, ni cualquier otra enfermedad que pueda resultar peligrosa para otros miembros de la comunidad. Asimismo, el interesado debe estar libre de toda enfermedad o dolencia que requiera un tratamiento o cuidados de importancia. No obstante, el Ministro de Inmigración y Asuntos Étnicos puede dispensar discrecionalmente del cumplimiento de los requisitos de salud en determinadas circunstancias.

689. De conformidad con la Ley de Migración, de 1958, los residentes permanentes extranjeros necesitan un visado para volver a entrar en Australia, que puede ser obtenido antes de salir del país o en una misión australiana en el extranjero. Las disposiciones de migración vigentes hacen depender el derecho del residente al visado de retorno de la duración de su estancia en Australia durante los tres años anteriores a la solicitud. La obligación de los residentes permanentes de cumplir los requisitos de residencia para obtener el visado de retorno es coherente con la estructura del Programa de Migración.

690. Las disposiciones reguladoras del retorno de los residentes establecen asimismo plazos generosos para los familiares (incluido el cónyuge) de nacionales australianos. Así, la persona que acompaña al extranjero al cónyuge de un ciudadano australiano puede obtener un visado de retorno de cinco años a condición de que, en los últimos cinco años, haya sido residente permanente en Australia. Se conceden exenciones a las personas que no reúnen los requisitos de residencia si redundan en interés de Australia que conserven el derecho de residencia permanente. Además, las personas que pierden la condición de residente permanente pueden, por supuesto, volver a solicitar la autorización de migración a Australia.

691. Los viajeros internacionales de 12 o más años de edad están obligados, por imperativo legal, a pagar un impuesto de salida antes de abandonar Australia. El impuesto de salida constituye un medio de percibir ingresos fiscales. Su objeto no es impedir la salida de Australia ni disuadir de ésta. El importe del impuesto (25 dólares a fines de 1995) es pequeño en comparación con otros costos del viaje internacional.

692. La Departure Fee Act 1980 (Ley, de 1980, sobre Derechos de Salida) de la Isla Norfolk impone un derecho de 25 dólares a las personas que salen de la isla. Hay varias excepciones relativas, por ejemplo, a las personas que abandonan la Isla Norfolk después de una visita de menos de 24 horas, las personas en tránsito y las personas que dejan la isla con fines médicos o educacionales.

693. El Tratado del Estrecho de Torres, ratificado en 1985, entre Australia y Papua Nueva Guinea establece, entre otros regímenes, una zona protegida para preservar el modo de vida y los medios de subsistencia de los habitantes tradicionales de la región del Estrecho de Torres. El Tratado permite a los habitantes tradicionales a ambos lados de la frontera circular libremente y proseguir sus actividades tradicionales sin los controles normales a la inmigración, dentro de los límites de la zona protegida. Ello se logra por medio de una serie de comités y órganos de consulta que participan en la aplicación y gestión del tratado.

Artículo 13

694. Solo el Gobierno Federal puede ordenar la expulsión de Australia de un extranjero que se halle legal o ilegalmente en territorio australiano. Ningún gobierno australiano tiene potestad para decretar la deportación o extrañamiento de un nacional. El Gobierno Federal estima que las disposiciones vigentes cumplen los requisitos de este artículo.

695. En esta sección se analizan los criterios de expulsión y las vías de recurso a disposición del extranjero

- en situación legal, contra el cual se ha dictado una orden de expulsión; o
- en situación ilegal, que va a ser expulsado de Australia.

Los extranjeros en situación legal

696. La expulsión se rige por las disposiciones de la Ley Federal de Migración, de 1958. Los residentes permanentes extranjeros pueden ser expulsados de Australia por haber cometido un delito o por razones de seguridad nacional.

697. El extranjero, para que se le apliquen las disposiciones de expulsión por motivos penales, tiene que haber sido condenado por un delito a la pena capital o una pena de prisión superior a un año. Si el delito cometido fuere de la índole de los de traición (treason), favorecimiento del enemigo (treachery), sabotaje, sedición militar (mutiny), ayuda a la fuga de prisioneros de guerra, conspiración para la sedición o tentativa de cometerla, ello es motivo suficiente para la expulsión.

698. Ahora bien, en el caso de otros delitos, el autor solo podrá ser expulsado si fuere residente permanente en Australia, o si fuere un neozelandés titular de un visado permanente o de categoría especial que, en el momento de la comisión del delito, hubiere vivido en Australia menos de diez años en total. Solo si se dan esas condiciones, podrá el Ministro decretar la expulsión de la persona de que se trate.

699. Al adoptar una decisión de expulsión por motivos penales, el Ministro debe tomar en consideración diversos elementos, en particular los derechos humanos del individuo de que se trate, las obligaciones de Australia con arreglo a los tratados internacionales y los sufrimientos o dificultades a que se exponga el interesado, incluido cualquier indicio de que pueda sufrir persecución en el país a que va a ser expulsado.

700. Para ser expulsada por razones de seguridad nacional, la persona de que se trate debe

- representar, a juicio del Fiscal General, una amenaza para la seguridad de Australia o de uno de sus Estados o Territorios; y
- haber sido objeto de una evaluación desfavorable en materia de seguridad por la Organización de Servicios de Contraespionaje de Australia.

701. Australia tiene por norma proporcionar al extranjero cuyo expediente de expulsión se esté tramitando amplia oportunidad para alegar lo que considere adecuado antes de que se adopte la decisión de expulsión.

702. Toda persona contra la que se ha firmado una orden de expulsión es informada de oficio de su derecho a interponer los recursos procedentes. También se informa al interesado de la posibilidad de acudir a una oficina de defensores de oficio para determinar si tiene derecho o no a asistencia letrada gratuita.

703. Ahora bien, los recursos son diferentes según el fundamento de la orden de expulsión. Cuando la orden de expulsión ha sido firmada por haberse cometido un delito de la índole de los de traición (treason), favorecimiento del enemigo (treachery), sabotaje, sedición militar (mutiny), ayuda a la fuga de prisioneros de guerra, conspiración para la sedición o tentativa de cometerla, el residente permanente puede recurrir de la decisión ante un Comisionado nombrado por el Gobernador General. El Comisionado debe ser juez o jurista de reconocida competencia. Cuando la orden de expulsión ha sido firmada por motivos penales distintos de los arriba mencionados, el residente permanente puede recurrir ante el Tribunal Administrativo de Apelación.

704. Los residentes permanentes que pueden ser objeto de expulsión por razones de seguridad nacional pueden recurrir la valoración según la cual constituyen una amenaza para la seguridad ante el Tribunal de Apelación en materia de Seguridad (Security Appeals Tribunal).

705. Además, los residentes permanentes tienen derecho a impugnar la validez de la orden de expulsión ante el Tribunal Federal (Federal Court) o el Tribunal Supremo de Australia (High Court of Australia).

Los extranjeros en situación ilegal

706. La Ley de Migración, de 1958, dispone que todo funcionario que sabe o tiene motivos racionales para presumir que una persona es un extranjero en situación irregular, debe proceder a su detención. Los extranjeros en situación de ilegalidad deben permanecer en detención preventiva o cautelar hasta que sean expulsados de Australia o se les conceda un visado.

707. El extranjero en situación ilegal detenido a disposición de las autoridades de inmigración que haya agotado todas las vías de recurso será expulsado de Australia. Toda expulsión llevará consigo la prohibición de entrada en territorio australiano por un período máximo de cinco años. No obstante, se prevén exenciones a la prohibición de entrada por razones humanitarias o imperiosas.

El caso de los refugiados

708. La detención cautelar de los extranjeros en situación de ilegalidad (es decir, los extranjeros que se encuentran en territorio australiano, en tierra firme o en un puerto, sin un visado válido) se analizó más en detalle en las observaciones relativas al artículo 9 supra. Como se dijo entonces, la Ley de Migración, de 1958, establece un régimen uniforme de detención cautelar y expulsión de las personas que se hallan ilegalmente en Australia. Esta sección versa especialmente sobre las personas que entran ilegalmente en Australia y solicitan que se les reconozca la condición de refugiado.

709. Australia concede asilo a las personas a las que se reconoce la condición de refugiado a tenor de lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951. La obligación de no devolución ni expulsión de los refugiados se cumple en Australia de conformidad con las disposiciones de la Ley de Migración, de 1958. La Ley regula la concesión de visados de asilo a las personas a las que se reconoce la condición de refugiado en los términos de la Convención, en su forma modificada por el Protocolo de 1967. Australia se considera obligada asimismo, al resolver sobre la expulsión de un extranjero que ha cometido un delito grave, a tener en cuenta las disposiciones de la Convención contra la Tortura relativas a la no devolución ni expulsión de cualquier persona que esté en peligro de ser sometida a tortura.

710. La Ley de Migración, de 1958, dispone que se concedan visados de asilo a los extranjeros que se encuentren en Australia y respecto de los cuales Australia haya contraído obligaciones de protección de conformidad con la Convención sobre los Refugiados y el Protocolo que la modifica. Este visado constituye una autorización de residencia permanente. Todos los miembros de la familia de la persona a la que se concede el visado de asilo obtienen el mismo estatuto jurídico, si se encuentran también en Australia.

711. Las solicitudes de asilo en calidad de refugiado son examinadas por funcionarios del Departamento de Inmigración y Asuntos Étnicos, por delegación del Ministro. Las personas competentes para resolver el expediente examinan la información pertinente sobre el país de origen del solicitante, así como los datos o alegaciones en que el solicitante fundamente su pretensión. El Departamento de Inmigración y Asuntos Étnicos reúne y mantiene amplia información sobre los países, centrada principalmente en las cuestiones de derechos humanos, para que sea utilizada en la instrucción de los expedientes de asilo. El expediente solo se resuelve una vez que el interesado ha tenido la oportunidad, en trámite de audiencia, de quedar enterado de cualquier valoración desfavorable y de presentar los documentos y justificaciones que estima pertinentes con respecto a esa valoración.

712. De conformidad con la Ley de Migración, de 1958, el solicitante del visado de asilo tiene derecho, si su petición fuere denegada, a interponer recurso ante el Tribunal de Revisión de Asilo y Refugio (Refugee Review Tribunal). Este Tribunal es un organismo autónomo de derecho público competente para reexaminar en cuanto al fondo las decisiones sobre el reconocimiento o no reconocimiento de la condición de refugiado. El Tribunal actúa como órgano unipersonal y no aplica, para el enjuiciamiento de las pretensiones, el principio contradictorio. El Tribunal puede ejercitar todas las atribuciones y potestades del funcionario encargado de la resolución del expediente y puede confirmar, modificar, revocar y reemplazar una decisión o, en determinados supuestos, devolver el expediente para nuevo examen.

713. El Ministro competente en asuntos de inmigración puede emitir un certificado definitivo que tiene por efecto imposibilitar el reexamen de la decisión. Dicho certificado, en el que se deben hacer constar las razones de interés público por las que no se autoriza el reexamen, debe someterse al Parlamento, lo que permite el control parlamentario de la decisión.

714. El Tribunal tiene el deber de efectuar el reexamen de manera imparcial, justa, económica, informal y rápida. No está sujeto a ningún tecnicismo, formulismo jurídico ni reglas de prueba, y debe administrar justicia con arreglo

al derecho substantivo y el fondo de la cuestión. Las resoluciones del tribunal son públicas, pero la identidad del solicitante o los solicitantes se mantiene en la más estricta confidencialidad.

715. El miembro principal del Tribunal puede remitir la decisión directamente al Tribunal Administrativo de Apelación en los casos en que estime que el asunto plantea una cuestión o principio importante de aplicación general. En tal caso, el Tribunal Administrativo de Apelación puede ejercitar las mismas funciones de reexamen que el Tribunal de Revisión.

716. El Ministro puede también, discrecionalmente, sustituir la resolución del Tribunal de Revisión o el Tribunal Administrativo de Apelación por una resolución más favorable si estima que ello redundaría en beneficio del interés general. Contra la resolución desfavorable dictada por el Tribunal de Revisión de Asilo y Refugio o el Tribunal Administrativo de Apelación se puede interponer recurso contencioso-administrativo por una cuestión de derecho ante el Tribunal Federal. En cualquier fase del procedimiento se puede interponer recurso de revisión judicial (judicial review) ante el Tribunal Supremo. Los solicitantes del visado de asilo solo pueden interponer recurso de revisión judicial después de la fase de reexamen ante el Tribunal de Revisión.

717. La Ley de Migración, de 1958, enuncia las causas de revisión judicial de las resoluciones, que se analizan en la sección relativa al artículo 9 supra.

El Tratado del Estrecho de Torres

718. En las observaciones relativas al artículo 12 se hizo referencia al Tratado del Estrecho de Torres. Procede señalar, en relación con el artículo 13, que los nacionales de Papua Nueva Guinea, quienes, como habitantes tradicionales del Estrecho de Torres, tienen acceso sin los controles de inmigración normales al territorio australiano, quedarían sujetos, si se desplazaran fuera de los límites de "la Zona Protegida o las proximidades de ésta" o dejaran de desarrollar actividades tradicionales pero permaneciesen en un área sometida a la jurisdicción australiana, a los requisitos normales de visado que establece la Ley de Migración, de 1958.

Artículo 14

719. La información general sobre la organización judicial australiana figura en el documento básico de Australia.

Los órganos jurisdiccionales

Independencia

720. En Australia, cada ámbito político-administrativo, el federal y el estatal, incluye los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

721. En el ámbito federal, la Constitución de Australia establece una estricta separación entre el poder judicial y los demás poderes del Estado.

722. De conformidad con el artículo 71 de la Constitución de Australia, el ejercicio de la potestad jurisdiccional federal corresponde exclusivamente a los

tribunales de justicia ordinarios: el Tribunal Supremo (High Court), los tribunales creados por el Parlamento Federal o un tribunal de un Estado al que se ha conferido el ejercicio de la potestad jurisdiccional federal. Por "potestad jurisdiccional federal" se entiende el ejercicio de la potestad jurisdiccional en relación con una o varias de las clases de litigios a que se refieren los artículos 75 y 76 de la Constitución (en los que se define la competencia del Tribunal Supremo en primera instancia).

723. Esto no significa que los jueces no puedan ser nombrados para formar parte de órganos no jurisdiccionales (véase la resolución dictada por el Tribunal Supremo en 1995 en el asunto Grollo c. Comisario de la Policía Federal 31 ALR 225; 69 ALJR 724). Se nombra a jueces para formar parte de órganos no jurisdiccionales como los tribunales administrativos o cuasijudiciales (tribunals), las comisiones de reforma legislativa, las comisiones reales y las comisiones especiales de investigación. Mientras desempeñan estas funciones, los jueces no suelen ocupar la plaza para la que fueron nombrados en un órgano jurisdiccional, pero perciben los emolumentos que corresponden a cada cual como miembro de la judicatura y ningún otro complemento.

724. Tampoco significa que funcionarios que no pertenecen a la carrera judicial no puedan ejercer funciones jurisdiccionales. La delegación de funciones jurisdiccionales en jueces que no son técnicos o de carrera es válida si se realiza bajo el control del poder judicial y si el ejercicio de las funciones jurisdiccionales está sujeto a una supervisión efectiva.

725. El artículo 72 de la Constitución refuerza la independencia de los órganos jurisdiccionales federales al establecer que los jueces del Tribunal Supremo o de cualquier tribunal creado por el Parlamento Federal no serán removidos ni separados de su cargo a menos que las dos Cámaras del Parlamento Federal lo soliciten por causa de "mala conducta o incapacidad probada".

726. En cambio, la mayoría de las constituciones estatales no afianzan la independencia de los órganos jurisdiccionales estatales. Concretamente, aunque las constituciones estatales enuncian disposiciones sobre la inamovilidad en el cargo de los jueces de rango superior análogas a las del artículo 72 de la Constitución de Australia, esas disposiciones pueden en la mayoría de los casos ser modificadas o abrogadas por una ley del Parlamento estatal. (La Constitución de Australia solo puede ser modificada si la mayoría de votantes de la mayoría de los Estados y la mayoría absoluta de los electores de toda Australia aprueban la modificación.) Por otra parte, la postura ortodoxa es que la potestad jurisdiccional estatal puede ser ejercida tanto por un órgano administrativo como por un tribunal de justicia.

727. Sea cual sea la postura estrictamente constitucional, los parlamentos y gobiernos estatales han observado tradicionalmente ciertos usos que contribuyen a la salvaguardia de la independencia de los órganos jurisdiccionales estatales. De hecho, esos usos han garantizado que la independencia de los tribunales de justicia en el ámbito estatal sea comparable a la que gozan los tribunales de justicia en el ámbito federal.

728. Si se alega mala conducta, el uso en Australia, en los ámbitos tanto federal como estatal, es crear una comisión que investigue las denuncias contra el juez o los jueces de que se trate y recomiende las medidas que hayan de adoptarse al Parlamento correspondiente.

Nombramiento

729. Los jueces desempeñan las funciones de su cargo hasta la jubilación forzosa. La edad de jubilación de todo el personal juzgador o jurisdicente actualmente en activo se ha fijado en los 70 años. Los jueces federales actualmente son nombrados para desempeñar el cargo hasta los 70 años de edad (o antes, con la aprobación del Parlamento Federal). En algunos Estados, se puede pedir a los jueces que han rebasado la edad de jubilación que presten su colaboración para hacer frente al exceso de trabajo de ciertos órganos jurisdiccionales.

730. La reforma del sistema de selección del personal juzgador es objeto de un debate permanente en Australia. En especial, se ha reconocido la necesidad de una mayor diversidad étnica y un mayor número de mujeres en el proceso de selección. En septiembre de 1993, el entonces Fiscal General Federal publicó un documento de debate titulado "Judicial appointments - procedure and criteria" ("Procedimiento y criterios de los nombramientos judiciales"). Ese documento ponía de relieve, entre otras cuestiones, el carácter limitado de las consultas para el nombramiento de jueces y los estrechos límites dentro de los cuales era posible buscar candidatos para el cargo de juez, principalmente entre los abogados en ejercicio. La cuestión de los nombramientos para la judicatura también fue señalado en la Declaración del Gobierno Federal sobre el estado de la Justicia y en la respuesta del Gobierno al informe "Gender Bias and the Judiciary" ("Los prejuicios sexistas y la judicatura"), que fue hecho público en mayo de 1994 por la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y Constitucionales del Senado.

731. Algunas jurisdicciones han adoptado disposiciones para nombrar personal juzgador de diversos orígenes. En 1994, el Fiscal General de Queensland nombró diez jueces de paz (justices of the peace) especialmente calificados, con atribuciones de magistrado (magistrate), procedentes de las comunidades indígenas locales.

732. En algunas jurisdicciones se puede recurrir, en determinadas circunstancias, a asesores (assessors) no forenses. En Australia del Sur, por ejemplo, el Reglamento del Tribunal Superior de Justicia prevé que el tribunal recurra a los servicios de un asesor debidamente calificado para que colabore con el tribunal. En Nueva Gales del Sur, se pueden nombrar asesores técnicos y especialistas en conciliación debidamente calificados para que formen parte del Tribunal del Medio Ambiente y el Territorio (Land and Environment Court). El Presidente de dicho Tribunal puede disponer que ciertas cuestiones sean sometidas a un asesor, en cuyo caso la decisión de éste es la del tribunal, o se puede recurrir a un asesor para que ayude al tribunal en sus actuaciones.

733. No existen reglas sobre el ascenso de los jueces. En todas las jurisdicciones, los ascensos se producen por nombramiento. Todos los jueces de un mismo órgano jurisdiccional perciben idéntica remuneración (excepto, en algunos casos, el Presidente). Tribunales administrativos especializados revisan periódicamente la escala de sueldos.

Imparcialidad

734. De conformidad con el common law australiano, el juez debe abstenerse del conocimiento de un asunto si considera que concurren en él circunstancias que lo privan de la idoneidad subjetiva o de las condiciones para hacerlo con imparcialidad y neutralidad o para fallar con ecuanimidad y objetividad. El juez debe inhibirse del conocimiento del asunto si tiene un interés pecuniario en él o una relación personal con las partes.

735. La parte contra la que se haya fallado el asunto, y que estime fundadamente que la persona que ha intervenido en él en ejercicio de funciones jurisdiccionales no es, por la causa que sea, imparcial, puede recurrir la resolución. En segunda instancia, la condena puede ser anulada o puede ordenarse que se deje sin efecto.

736. En 1993, la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y Constitucionales del Senado estableció una comisión de encuesta sobre los prejuicios sexistas y la judicatura, a fin de determinar si la publicidad que se hacía de las observaciones de los jueces en las causas por delitos sexuales reflejaba con exactitud una incapacidad de la judicatura para comprender las cuestiones relativas a las diferencias de trato por razón de sexo y para reaccionar debidamente ante esa incapacidad. Las respuestas del Gobierno Federal se examinan en el epígrafe siguiente, relativo a la formación.

Formación

737. Los programas de formación de la judicatura tienen por objeto corregir la posible parcialidad en que puedan incurrir los jueces por razones de sexo, educación y formación cultural fomentando en ellos una mayor sensibilidad hacia los problemas transculturales y las diferencias de trato por razón de sexo.

738. En respuesta a las recomendaciones del Comité Permanente de Acceso a la Jurisdicción, la Comisión Real de Investigación de las Muertes de Aborígenes en régimen de Detención (véanse otras observaciones en las secciones relativas a los artículos 9 y 27), se han proporcionado fondos para los programas de formación del personal juzgador a cargo del Tribunal de Familia y el Instituto Australiano de Administración Judicial. También se han ejecutado otros programas, por ejemplo, en Australia del Sur, y en Nueva Gales del Sur a cargo de la Comisión Judicial de Nueva Gales del Sur. Estos programas se han centrado especialmente en la sensibilidad a las diferencias de trato por razón de sexo y los problemas transculturales.

739. Por lo que respecta a la sensibilidad a las diferencias de trato por razón de sexo, la Comisión Australiana de Reforma Legislativa recomendaba en su informe "Equality Before the Law" ("Igualdad ante la ley") que el personal jurisdicente, tanto los jueces técnicos y de carrera (judges) como los jueces legos (magistrates), que conoce de los asuntos de derecho de familia y de violencia familiar y doméstica fuera sensible a la dinámica de la violencia contra la mujer en el hogar.

740. El Tribunal Federal también ha adoptado una serie de iniciativas encaminadas a fomentar la sensibilidad hacia las diferencias de trato por razón de sexo. Dichas iniciativas son, entre otras, constituir un comité, integrado por jueces de rango superior, sobre las cuestiones de igualdad entre hombres y mujeres, autorizar a sus miembros a participar en seminarios sobre las diferencias de trato por razón de sexo y promover un programa de reuniones entre

jueces y abogadas que intervienen en las vistas del Tribunal. Estos programas tienen como fin permitir que los jueces, tanto técnicos y de carrera (judges) como legos (magistrates), y otro personal juzgador cobren mayor conciencia de las posibles diferencias de trato por razón de sexo. También se han consignado créditos para el Instituto Australiano de Administración Judicial para que elabore propuestas de cursos de iniciación para los jueces recién nombrados.

741. En respuesta a las recomendaciones expresas de la Comisión Nacional sobre la Violencia contra la Mujer, el Gobierno consignó créditos en el ejercicio 1993-1994 para que el Tribunal de Familia (y el Tribunal de Familia de Australia Occidental) elaborasen un programa de sensibilidad hacia las desigualdades entre mujeres y hombres destinado a los jueces y otro personal juzgador.

742. En lo que se refiere a la enseñanza del derecho, el Departamento de Trabajo, Educación y Capacitación, por medio de su Fondo Nacional (de Reserva) para Necesidades Prioritarias, proporcionó financiación para preparar documentación monográfica para su uso en el plan de estudios común del primer ciclo de derecho.

743. Por lo que respecta a la sensibilidad hacia los problemas transculturales, el Instituto Australiano de Administración Judicial ha emprendido proyectos sobre varios temas relacionados con esta cuestión.

744. El Tribunal Federal ha constituido un comité de sensibilidad hacia la cultura de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres que ofrece programas en este campo al personal de cada una de las ocho secretarías del tribunal. También está preparando programas voluntarios para los jueces del Tribunal.

745. El Tribunal Nacional del Título Nativo (National Native Title Tribunal) ha iniciado programas de fomento de la sensibilidad hacia los problemas transculturales en los que también participan jueces del Tribunal Federal.

746. El Tribunal Administrativo de Apelación también ejecuta programas de perfeccionamiento para los miembros del tribunal que incluyen temas como las desigualdades entre hombres y mujeres y los problemas transculturales.

El jurado

747. En Australia, el derecho a un juicio por jurado se aplica en relación con los delitos graves (indictable offences). En lo referente a los delitos graves tipificados en la legislación federal, el derecho al juicio por jurado está garantizado por el artículo 80 de la Constitución de Australia, que dispone lo siguiente:

"El enjuiciamiento de los delitos graves tipificados en una ley del Commonwealth tendrá lugar mediante acusación formal ante el tribunal del jurado, y la causa se verá en el Estado en que se hubiere cometido el delito o, si el delito no se hubiere cometido en ningún Estado, en el lugar o los lugares que determine el Parlamento (Federal)."

748. El Tribunal Supremo ha sostenido que este derecho constitucional exige que el veredicto sobre culpabilidad en los delitos federales se pronuncie solo si hay unanimidad entre los miembros del jurado (Cheatle c. la Reina (1993) 177 CLR 591). En la actualidad, cuatro Estados y un Territorio prevén en sus

disposiciones el veredicto por mayoría: Australia del Sur, Australia Occidental, Tasmania, Victoria y el Territorio del Norte. Cuando en una de esas jurisdicciones se enjuicia un delito federal, el veredicto por mayoría no es posible.

749. En algunas jurisdicciones, el acusado tiene derecho a optar por el juicio sin jurado. No obstante, el Tribunal Supremo falló por mayoría (en el asunto Brown c. R (1986) 160 CLR 171; 60 ALJR 257) que, en el caso de los delitos federales, el artículo 80 de la Constitución impide que el acusado formalmente de un delito de esa naturaleza pueda ejercitar esa opción.

750. En la mayoría de las jurisdicciones, el acusado de un delito menos grave enjuiciado por el procedimiento abreviado tiene derecho a que un juez lego o magistrado (magistrate) conozca de la causa hasta la sentencia definitiva, en vez de ser juzgado en un juicio con jurado por un juez técnico o de carrera (judge). Las infracciones penales menores, las infracciones de tráfico y las infracciones de reglamentos son enjuiciadas verbalmente ante un magistrado por el procedimiento abreviado, sin derecho al juicio con jurado. En los pleitos civiles, el juicio suele celebrarse ante un juez técnico o de carrera único. En algunos litigios, por ejemplo en los casos de difamación, puede recurrirse al jurado.

751. Las leyes federales y estatales regulan el servicio de jurado. La Federal Jury Exemption Act 1965 (Ley Federal, de 1965, reguladora de las excusas para actuar como jurado) y su reglamento eximen a determinadas personas de ese servicio, como los diputados del Parlamento, los funcionarios de la policía federal y ciertos miembros de las fuerzas de defensa. Los funcionarios o empleados del Tribunal Supremo, el Tribunal Federal y el Tribunal de Familia de Australia, los abogados en ejercicio y algunas otras clases de personas también están exoneradas de la obligación de servir como jurado.

752. En el Territorio de la Capital de Australia, la Juries Act 1967 (Ley del Jurado, de 1967) dispone que no reúne los requisitos para actuar como jurado quien haya sido condenado por ciertos delitos (generalmente delitos dolosos graves), el quebrado que no haya obtenido la rehabilitación, quienes no saben leer y escribir el inglés, los ciegos, sordos o mudos, quien no pueda desempeñar la función de jurado por razón de una discapacidad física o psíquica, el incapaz o quien esté al servicio de la administración de justicia. La Ley dispone asimismo que están exentos del servicio como jurado, entre otras, las personas siguientes: los ministros del culto, los abogados (barristers, solicitors) en ejercicio, los facultativos médicos, los directores de periódico y los mayores de 60 años. La autoridad judicial también puede excusar a ciertas personas, como las mujeres embarazadas o las personas que padecen una enfermedad. No existe discriminación por razón de sexo, raza, religión o pertenencia a un grupo político.

753. En Victoria, la Juries Act 1967 (Ley del Jurado, de 1967) establece exenciones análogas del servicio como jurado. Una comisión parlamentaria está examinando esas exenciones. Esta revisión es resultado del temor de que la composición actual de los jurados no refleje debidamente la comunidad en general, lo que debilitaría el fin esencial del sistema de jurados, es decir, garantizar el derecho de las personas a ser juzgadas por sus iguales.

754. En las causas penales, las partes pueden formular ante el tribunal antes de la celebración de la vista su oposición a la constitución del jurado. El acusado tiene reconocido legislativamente el derecho a formular cierto número de recusaciones sin causa de candidatos a jurados, y a un número ilimitado de recusaciones con causa.

La igualdad ante los tribunales de justicia y otros tribunales

755. En general, todas las personas son iguales ante los tribunales judiciales (courts) y los tribunales administrativos o cuasijudiciales (tribunals) de Australia. En Queensland, sin embargo, a tenor de lo dispuesto en la Public Trustee Act 1978 (Ley, de 1978, del Curador Público) el patrimonio del condenado por un delito grave a una pena de tres o más años de prisión puede quedar sujeto a la administración del Curador Público (Public Trustee). El efecto de esa administración (conforme al artículo 95 de dicha Ley) es que el penado carece de legitimación procesal activa y pasiva en relación con el ejercicio de cualquier acción de naturaleza patrimonial, la reclamación del pago de una deuda o cualquier demanda por daños y perjuicios, sin el consentimiento del Curador Público, dado por escrito.

756. Aunque estrictamente no constituyen excepciones al principio general de igualdad ante la ley, existen algunas otras limitaciones procesales que pueden impedir a determinadas personas, por ejemplo los menores y los incapaces, ejercitar personalmente la acción ante un tribunal. No obstante, el pariente más próximo o el tutor pueden ejercitar la acción en nombre y representación de esas personas, o puede adoptarse una disposición especial a tal efecto. Por ejemplo, según la Ley Federal, de 1975, reguladora del Derecho de Familia, el tribunal puede decretar que el menor objeto de un procedimiento de guarda o de otro de los procedimientos previstos en la ley tenga una representación procesal independiente, y puede dictar los autos necesarios para ello. El menor también tiene derecho a solicitar una representación procesal separada en esos casos.

La audiencia pública

757. Salvo disposición expresa en contrario, las actuaciones de todos los tribunales de justicia australianos son públicas. Por consiguiente, las actuaciones judiciales se celebran en un lugar y circunstancias que indiquen claramente al público interesado que tiene derecho a asistir libremente a ellas.

758. La mayoría de las jurisdicciones imponen limitaciones al acceso del público, incluidos los medios de comunicación, a la vista de las causas, pleitos y litigios en que intervienen menores. Los siguientes son ejemplos de limitaciones al acceso del público:

- En Nueva Gales del Sur, la Children (Criminal Proceedings) Act 1987 (Ley Procesal Penal de Menores, de 1987) dispone que el público en general debe ser excluido de los procesos penales en que sea parte un menor. No obstante, las personas encargadas de preparar una reseña de las actuaciones para su divulgación a través de un medio de información pública tienen derecho a asistir a la vista, a menos que el tribunal ordene otra cosa;
- En Australia del Sur, el tribunal debe ordenar al público que abandone la sala si la víctima de un supuesto delito sexual es un menor. En ese caso, el tribunal, a instancia de la persona a que esa orden perjudique, puede dar cuenta de las pruebas practicadas y las actas del proceso;

- Las actuaciones del Tribunal de Familia son públicas pero el Presidente puede, a su arbitrio, excluir a una o varias personas o decretar que la vista se celebre a puerta cerrada; y
- Algunas sesiones de los tribunales administrativos o cuasijudiciales (tribunals) también pueden celebrarse a puerta cerrada.

La publicidad de las actuaciones judiciales

759. Las resoluciones más importantes de los tribunales de justicia (courts) federales y estatales se publican en los repertorios de jurisprudencia. Algunos tribunales administrativos o cuasijudiciales (tribunals) también publican sus decisiones en repertorios análogos. Cuando las actuaciones son públicas, la prensa también puede publicar los detalles del proceso. La publicación en la prensa de las actuaciones judiciales públicas está sujeta a la decisión que el titular del órgano jurisdiccional puede adoptar, a su arbitrio, prohibiendo de forma absoluta o condicional la publicación de pruebas, si entiende que tal publicación puede perjudicar a la administración de justicia. El tribunal también puede prohibir discrecionalmente la publicación del nombre de las partes o los testigos en interés de la administración de justicia. En el caso del Tribunal de Familia, la ley establece que las partes, "sus testigos, colaboradores o supuestos colaboradores" no pueden ser identificados de ningún modo en las comunicaciones al público, por ejemplo, en la prensa, la radio o la televisión.

760. En Queensland, la Children's Services Act 1965 (Ley, de 1965, de Protección del Menor) prohíbe la publicación de cualquier noticia en la que se identifique a un menor o por la que se pueda llegar a su identificación. La publicación solo es posible por resolución expresa de la autoridad judicial. Además, la Juvenile Justice Act 1992 (Ley, de 1992, reguladora de la Jurisdicción de Menores) prohíbe la publicación de cualquier dato identificador relativo a una causa penal instruida a un menor.

761. La publicidad de las actas de los procesos sustanciados en el Tribunal Federal, el Tribunal Supremo, la Comisión Australiana de Relaciones Laborales, el Tribunal de Familia y el Tribunal Administrativo de Apelación está garantizada por medio del servicio de información judicial de la Administración Federal, llamado Auscript. Hasta 1989, los tribunales de justicia y las partes podían obtener gratuitamente copia testimoniada de las actas, puesto que la Administración Federal subvencionaba Auscript a tal efecto. Desde 1989, Auscript ha sido privatizado y el costo de las certificaciones debe ser sufragado por quienes las solicitan. En la actualidad, la Administración Federal está estudiando las técnicas que podrían contribuir a incrementar la disponibilidad de las actas para los litigantes y reducir su costo.

El desacato a los tribunales (contempt of court)

762. El concepto de desacato a los tribunales (contempt of court) comprende los principios de common law que regulan las atribuciones de los tribunales de justicia en materias como el mantenimiento del orden en la sala, las tentativas de influir en los participantes en un proceso (incluida la publicación de documentos), los actos públicos de menosprecio a la autoridad judicial y la desobediencia dolosa de las resoluciones judiciales.

763. La publicación de ciertas informaciones puede constituir desacato si crean un verdadero riesgo de perjuicio para alguna de las partes en un pleito o causa cuya vista esté pendiente. Las disposiciones sobre desacato también abarcan la publicación de datos que puedan prejuzgar la decisión del tribunal al suministrar a éste información de la que no debía haber dispuesto y que le pondría en una situación difícil para resolver el asunto con imparcialidad y objetividad.

764. En abril de 1983, la Comisión Australiana de Reforma Legislativa inició la revisión de las normas sobre desacato aplicadas por los órganos que ejercen la potestad jurisdiccional en el ámbito federal. En su informe definitivo, publicado en 1987 con el título "Contempt" ("Desacato"), la Comisión expresaba su preocupación por hecho de que el desacato al tribunal cometido en audiencia pública sea juzgado en un procedimiento abreviado por el propio presidente del tribunal, en oposición real o potencial a lo dispuesto en el artículo 14, que exige que cualquier acusación se sustancie ante un tribunal independiente e imparcial. La Comisión puso seriamente en tela de juicio la idoneidad de este procedimiento y formuló la observación de que, aunque la oposición no fuera real sino solo aparente, ello podía empañar a ojos del público la imagen del sistema jurisdiccional. En conclusión, la Comisión hizo las siguientes recomendaciones con respecto al artículo 14.

- El actual principio general de responsabilidad por desacato al tribunal cometido en audiencia pública debería sustituirse por una serie de infracciones penales en las que se tipificaran las conductas observadas dentro de la sala de vistas o en sus proximidades que se deben considerar inaceptables.
- La persona a quien se impute la comisión de alguna de esas infracciones no debería ser juzgada por el presidente del tribunal, a no ser que ambos convengan en ese modo de enjuiciamiento.
- La potestad del presidente del tribunal de recurrir a otros medios para sancionar cualquier conducta impropia, en especial ordenando la expulsión de la sala de la persona o las personas que perturbaren la vista de la causa, debería ser mantenida.

765. A mediados de 1991 se distribuyó un documento de debate sobre el informe de la Comisión Australiana de Reforma Legislativa para recabar comentarios y observaciones, que posteriormente fue remitido al Comité Permanente de Fiscales Generales junto con un documento en el que se exponía la posición del Gobierno Federal. En mayo de 1993 se aprobó un proyecto de ley tipo, basado en las recomendaciones de este último documento.

La presunción de inocencia

766. El precepto fundamental del sistema de administración de justicia de Australia es que se presume inocente al acusado hasta que se pruebe su culpabilidad. En el proceso penal, la actividad probatoria corresponde a las partes acusadoras, que tienen el deber de probar los hechos que alegan como fundamento de sus pretensiones "sin que queden dudas razonables" ("beyond reasonable doubt") (a menos que la disposición legal que tipifica el delito establezca otra norma sobre carga de la prueba (standard of proof)). No obstante, en determinadas circunstancias la ley dispone la inversión o

desplazamiento de la carga de la prueba sobre la parte o partes acusadas del delito, que tienen que probar los hechos que fundamentan su excepción u oposición (o, mejor dicho, demostrar la falsedad o inexactitud de los hechos constitutivos de la pretensión penal). Con arreglo a la política criminal del Gobierno Federal, la carga de probar la inexactitud de los hechos constitutivos de la pretensión penal no debe imponerse nunca, salvo en circunstancias evidentes y excepcionales, a la parte acusada en un proceso penal. La Comisión Permanente de Estudio de Proyectos de Ley del Senado analiza los proyectos de ley federal para garantizar que solo se imponga al acusado la carga de probar la inexactitud de los hechos constitutivos de la pretensión penal:

- Cuando los hechos alegados por la parte acusada como fundamento de su oposición sean particularmente conocidos de dicha parte; y
- Cuando sería sumamente difícil y costoso para la parte acusadora probar la inexactitud de los hechos alegados por la parte acusada como fundamento de su oposición.

767. La norma sobre carga de la prueba que grava a la parte acusada en estas circunstancias es la del proceso civil, basada en un cálculo de probabilidades (balance of probabilities).

768. En algunos supuestos, la parte acusada, en particular cuando desea alegar una excepción o causa de justificación prevista por la ley, soporta una carga de la prueba indiciaria o presuntiva (evidential burden of proof). Por carga de la prueba indiciaria o presuntiva se entiende la carga de alegar o señalar indicios que apuntan a una posibilidad razonable de que el hecho existe o no existe. Por ejemplo, solo se requiere que la parte acusada alegue el error invencible como causa de justificación para desplazar sobre la parte acusadora la carga de probar su inexistencia (He Kaw Teh c. R (1984-85) 157 CLR 523).

769. La Federal Criminal Code Act 1995 (Ley, de 1995, del Código Penal Federal) codifica y aclara la normativa vigente en este campo. El Código desplegará progresivamente todos sus efectos hacia el año 2000.

Párrafo 3 a)

El deber de informar sin demora al detenido de los hechos que se le imputan

770. Cuando se detiene a una persona, el common law y, en algunos casos, las disposiciones legislativas disponen que sea informada de las razones de su detención (arrest) en el momento en que se practique ésta. Si la persona no es detenida sino que se procede contra ella mediante citación judicial (summons), todas las jurisdicciones establecen que la naturaleza y causa de la imputación se consignen en los documentos necesarios para que el órgano jurisdiccional inicie la instrucción de la causa. La legislación de algunas jurisdicciones dispone que en la cédula de citación se proporcione al imputado información suficiente sobre la naturaleza de la acusación formulada contra él o "se indique sucintamente el objeto de la denuncia", y en otras establece que se llenen los formularios prescritos. En esos formularios se requiere siempre que se exponga brevemente la naturaleza de la denuncia, pero sin llegar a divulgar el nombre de ninguna persona cuya denuncia haya dado lugar a la imputación de los hechos punibles.

771. En relación con el juicio, el acusado también debe ser informado de la identidad de los testigos de cargo y de la naturaleza de las pruebas. Si se ocultan hechos determinantes para la causa, una eventual condena puede ser anulada en segunda instancia.

El deber de informar en otros idiomas

772. El artículo 23N de la Ley Penal Federal, de 1914, establece que toda persona que no entiende o no habla el inglés tiene derecho a ser asistida por un intérprete durante el interrogatorio policial. En cuanto el funcionario a cargo de la investigación tenga motivos racionalmente bastantes para presumir que el imputado no puede expresarse con bastante soltura, el interrogatorio y la investigación no pueden iniciarse ni continuar sin que esté presente un intérprete.

773. La Ley Penal Federal, de 1914, también dispone que se instruya a los presuntos responsables de sus derechos en un idioma que les sea comprensible y que se informe de igual modo al detenido de su derecho a ponerse en comunicación con un amigo o pariente y a designar abogado y solicitar su presencia durante el interrogatorio.

774. El artículo 23H de la Ley enuncia garantías especiales para los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, al reconocerles el derecho a que una persona de su confianza esté presente cuando se les reciba declaración (en particular, un abogado, un pariente, un asistente social de los aborígenes u otra persona elegida por el detenido).

775. Se han adoptado disposiciones para confeccionar una lista de personas dispuestas a colaborar o servir de intérprete a los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres detenidos u objeto de investigación por delitos federales.

776. Por otra parte, la detención debe notificarse a una organización aborígen de asistencia letrada. En cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Real de Investigación de las Muertes de Aborígenes en régimen de Detención, los Servicios de Asistencia Jurídica a los Aborígenes han recibido financiación suplementaria para que puedan prestar servicios adicionales, como el de abogado de oficio, a los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres detenidos.

777. La Comisión Australiana de Reforma Legislativa recomendó en su informe "Multiculturalism and the Law" ("La pluralidad cultural y el Derecho") que se modificaran los artículos 23H, 23K y 23N de la Ley Penal Federal, de 1914, a fin de que un intérprete o asistente estuviese presente en el interrogatorio siempre que el funcionario investigador tuviera motivos racionalmente bastantes para creer necesaria esa presencia (párr. 3.54). La Comisión estimaba que el estándar actualmente aplicado (o sea, que el funcionario tenga motivos racionalmente bastantes para creer que el detenido es un aborígen o isleño del Estrecho de Torres o un menor de 18 años, o que no puede hablar el inglés con suficiente soltura) es demasiado alto. Con arreglo al estándar actual, debe haber motivos racionalmente bastantes para creer, y el funcionario debe creer efectivamente. El informe está siendo estudiado por el Gobierno.

778. En el informe de 1994 sobre el acceso a la Jurisdicción se recomendaba que el Gobierno Federal, por conducto del Comité Permanente de Fiscales Generales, continuase alentando a los Estados a promulgar leyes que garantizaran el derecho

a un intérprete durante toda la instrucción de una causa penal. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta la pequeña proporción de causas instruidas con arreglo a la Ley Federal.

779. La legislación del Territorio de la Capital de Australia, Australia del Sur y Victoria exigen que se recurra a los servicios de un intérprete durante el interrogatorio policial. Algunos otros Estados están revisando su normativa legal sobre el uso de intérpretes. En Nueva Gales del Sur, el Fiscal General ha establecido, conjuntamente con la Comisión de Asuntos Étnicos, un grupo de trabajo encargado de examinar y evaluar la función y el uso de intérpretes en el ordenamiento jurídico del Estado. En Queensland, las disposiciones del Código Penal están siendo revisadas para atender a las observaciones sobre el recurso a los intérpretes formuladas por el Fiscal General Federal en el informe sobre el sistema jurídico, de 1991. En Tasmania, la Ley Penal de 1995 (Detención e Interrogatorio) reconoce al detenido el derecho a recurrir a los servicios de un intérprete durante el interrogatorio para poder comprender las preguntas que se le hacen.

Párrafo 3 b)

780. En Australia se debe dar al acusado tiempo suficiente para preparar su defensa. Si está previsto que la vista se celebre antes de que el acusado haya tenido tiempo suficiente para preparar su defensa, el órgano jurisdiccional tiene la potestad de fijarla para una fecha posterior, potestad que casi siempre ejercita, salvo cuando considera que el aplazamiento no redundaría en interés de la justicia.

781. En toda Australia se reconoce el derecho del acusado de un delito, que se encuentra en prisión provisional, a comunicarse con su defensor a los efectos de preparar la defensa. El derecho de comunicación con el defensor está regulado por ley en algunas jurisdicciones. Por ejemplo, en el Territorio del Norte el preso puede recibir visitas de su letrado con una periodicidad razonable y con el consentimiento del Director de Instituciones Penitenciarias.

Párrafo 3 c)

782. Por lo general, cuando una persona ha reconocido los hechos que se le imputan (pleads guilty) el tribunal no suele demorarse en dictar sentencia. Las dilaciones se producen (con variaciones según las jurisdicciones) cuando la oposición a la pretensión punitiva determina la vista de la causa en audiencia pública. La duración de los retrasos depende de la disponibilidad de tribunales y jueces y de las circunstancias del caso, por ejemplo, el tiempo que necesite la defensa para preparar sus argumentos jurídicos o el tiempo necesario para encontrar un defensor.

783. Las leyes penales de varios Estados establecen que el acusado puede solicitar al tribunal la apertura del juicio y el sobreseimiento de la causa si no es procesado dentro de determinado plazo, contado desde la admisión de su petición. Los tribunales tienen competencia implícita para dictar auto de sobreseimiento libre o provisional cuando entienden que, por el transcurso del tiempo o por otras causas, el acusado no puede tener un juicio imparcial. Los datos que figuran a continuación, aunque incompletos, permiten hacerse una idea de la situación en algunas jurisdicciones:

- Tiempo que transcurre entre la detención y la imputación formal del delito: en Australia Occidental, como en la mayoría de las jurisdicciones, la inculpación es inmediata;
- Tiempo que transcurre entre la imputación del delito y el comienzo de la vista de la causa: en Australia Occidental, entre dos y cuatro meses; en Australia del Sur, entre tres y cuatro meses;
- Tiempo que transcurre entre el comienzo de la vista de la causa y la sentencia o fin del proceso: variable, según la naturaleza de la causa;
- Tiempo que transcurre entre la interposición del recurso y la resolución en segunda instancia: en Australia occidental, cuatro meses aproximadamente.

784. En las zonas más remotas de Australia se plantea un problema especial de dilación de la apertura del juicio, ya que no siempre el tribunal está disponible inmediatamente para ver la causa. Las dificultades lingüísticas también pueden a veces constituir un obstáculo para que las actuaciones comiencen de forma inmediata. No obstante, se hace todo lo posible por reducir al mínimo los retrasos. En el Territorio del Norte, por ejemplo, tribunales de magistrados itinerantes (circuit magistrates' courts) viajan a las ciudades más importantes de las regiones alejadas dos veces por mes y por lo menos una vez por mes a las zonas más remotas. Siempre que sea necesario, se puede reunir un tribunal especial integrado por uno o dos jueces.

785. El Territorio de la Capital de Australia ha adoptado un procedimiento que tiene como finalidad juzgar lo antes posible a las personas inculpadas de un delito. En la actualidad, la dilación entre la inculpación y la comparecencia del acusado ante el tribunal puede llegar a ser de seis meses. Con arreglo al nuevo procedimiento, la persona a la que se imputa un delito puede firmar un compromiso voluntario de comparecer. Ello permite a la policía continuar la instrucción preparatoria sin proceder a la detención de esa persona ni citarla a comparecer. A cambio de firmar el compromiso, la policía se compromete a someter la causa al tribunal en un plazo de diez días hábiles. Una vez en el tribunal, la sustanciación de la causa prosigue normalmente. Este plan se aplica tanto a los menores como a los mayores de edad.

Párrafo 3 d)

La asistencia del acusado a la vista

786. Salvo en circunstancias excepcionales, el juicio no se celebrará sin la preceptiva asistencia del acusado. Cuando el acusado altere el orden de tal manera que no se pueda continuar la sesión, el tribunal podrá decidir que sea expulsado, pero la sesión no continuará sin la presencia del abogado defensor. El acusado también tiene derecho a consultar los autos, en particular lo actuado en su ausencia.

El procedimiento ex parte

787. En las causas por delitos menos graves instruidas por el procedimiento abreviado, cuando el acusado no comparezca habiendo sido citado con las

formalidades prevenidas, el tribunal podrá decidir discrecionalmente celebrar el juicio y dictar sentencia en la causa en ausencia del acusado. En algunas jurisdicciones el acusado puede optar por presentar por correo un escrito de reconocimiento de los hechos, por ejemplo con respecto a faltas de tráfico, y en ese caso se dictará sentencia en ausencia del acusado. En esos supuestos, el tribunal está obligado a tener en cuenta todo lo alegado por el acusado en su declaración escrita.

El derecho de defensa y el derecho a la asistencia de abogado

788. El derecho de toda persona a defenderse personalmente o a la asistencia de letrado está reconocido en toda Australia. Cuando el acusado no tenga defensor, especialmente en caso de infracciones penales graves, el tribunal normalmente le informará de su derecho a designar un abogado de su elección o a pedir que se le designe uno de oficio.

789. En el asunto McInnes c. R (1979) 27 ALR 449, el Tribunal Supremo falló que toda persona tenía derecho a la asistencia de abogado, pero que este derecho era un derecho condicionado, por lo menos en la medida en que había que tener en cuenta los intereses de la Corona, de los testigos y jurados y de la administración de justicia. Por consiguiente, el juez sentenciador (trial judge) puede mandar, a su arbitrio, que la vista continúe cuando el acusado no haya nombrado defensor aunque haya manifestado el deseo de ser defendido por letrado, a condición de que no haya error judicial o denegación de justicia (miscarriage of justice). El ejercicio de esta potestad discrecional del juez está sujeta a revisión en segunda instancia. El tribunal de segunda instancia debe examinar si se han respetado todas las garantías de una recta administración de justicia y evaluar las posibilidades del acusado de obtener la absolución de haber sido defendido por abogado.

790. En el asunto Dietrich c. R ([1992] 177 CLR 292), el Tribunal Supremo examinó la postura que debe adoptar el juez sentenciador ante la petición de suspensión o sobreseimiento formulada por una persona acusada de un delito grave que, sin que medie culpa de su parte, no consigue abogado defensor. El Tribunal Supremo falló que, en tal caso, si se deniega la petición de suspensión del juicio y si en razón de la falta de defensor del acusado el proceso no es imparcial, la condena del acusado puede ser revocada por un tribunal de segunda instancia por causa de infracción de las garantías de una recta administración de justicia al haber sido condenado el acusado sin haber sido objeto de un juicio imparcial.

791. Un gran número de organizaciones proporcionan asistencia letrada. Los regímenes de asistencia letrada más importantes de Australia y sus principales fuentes de financiación son las siguientes:

- Las comisiones de asistencia letrada de cada Estado, financiadas conjuntamente por las administraciones federal y estatales (en particular, mediante los intereses de las cuentas fiduciarias de los abogados);
- Los 126 centros comunitarios de asistencia jurídica, financiados por la administración federal o las administraciones estatales, o ambas; algunos son subvencionados por las administraciones locales (generalmente en especie y no mediante financiación directa);

- Los Servicios de Asistencia Jurídica a los Aborígenes, financiados principalmente por la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres;
- Los regímenes, de base legislativa o no legislativa, financiados por el Departamento del Fiscal General Federal por conducto de la Oficina de Asistencia Letrada y Servicios a la Familia;
- Ciertos jueces legos (chamber magistrates) de Nueva Gales del Sur, que prestan asistencia jurídica y son financiados por la Administración del Estado;
- La Oficina de Defensores Públicos de Nueva Gales del Sur, que presta asistencia letrada en asuntos penales y es financiada por la Administración del Estado; y
- La abogacía, puesto que las comisiones de asistencia letrada dedican gran parte de su presupuesto a remitir asuntos a los abogados en ejercicio. A cambio, los abogados aceptan el 80% o menos de la escala de honorarios en la mayoría de los turnos de oficio. También prestan servicios jurídicos voluntarios a los centros comunitarios de asistencia jurídica y aceptan intervenir pro bono.

792. Las comisiones de asistencia letrada son los proveedores más importantes de servicios jurídicos, ya que representan algo más del 80% del gasto público total en asistencia letrada (incluidos los intereses de las cuentas fiduciarias). La mayor parte de la financiación de las comisiones de asistencia letrada es aportada por la Administración federal, que proporciona el 57,4% de las contribuciones públicas. En el cuadro 17 se indican las fuentes de financiación de las comisiones de asistencia letrada en el período 1987-1993.

793. Por lo que respecta a los regímenes, de base legislativa o no legislativa, administrados por el Departamento del Fiscal General Federal, se puede prestar asistencia financiera en las causas que pueden sentar jurisprudencia a los efectos de resolver una cuestión importante de derecho federal que, a juicio del Fiscal General, afecta a los derechos de un sector de la ciudadanía o de un grupo de personas en su mayor parte social o económicamente desfavorecidos. Los solicitantes, además de cumplir los requisitos legales, deben poder demostrar su falta de recursos económicos y que hay buenas perspectivas de que el proceso concluya con éxito. A continuación se indican los regímenes, de base legislativa o no legislativa, en virtud de los cuales el Fiscal General está facultado para autorizar asistencia jurídica o financiera. Los regímenes de base legislativa son los siguientes:

- La Aboriginal and Torres Strait Islander Heritage Protection Act 1984 (Ley, de 1984, de Protección del Patrimonio de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres) (artículo 30.2));
- La Aboriginal Land Rights (Northern Territory) Act 1976 (Ley, de 1976, de los derechos sobre las tierras aborígenes en el Territorio del Norte) (artículo 54C);
- La Administrative Appeals Tribunal Act 1975 (Ley, de 1975, del Tribunal Administrativo de Apelación) (artículo 72);

- La Australian Security Intelligence Organisation Act 1979 (Ley, de 1979, de la Organización Australiana de Servicios de Seguridad Interior) (artículo 72);
- La Conciliation and Arbitration Act 1904 (Ley, de 1904, de Conciliación y Arbitraje) (artículos 132H, 132J, 141A, 141B y 168);
- El Defence Force Discipline Appeals Regulations (Reglamento de Régimen Disciplinario de las Fuerzas de Defensa (Recursos)) (artículo 11);
- La Disability Discrimination Act 1992 (Ley, de 1992, sobre Discriminación contra los Discapacitados) (artículos 105 y 106);
- La Federal Proceedings (Costs) Act 1981 (Ley Procesal Federal (Pago de costas), de 1981);
- La Freedom of Information Act 1982 (Ley, de 1982, sobre Libertad de Información) (artículo 66);
- La Industrial Relations Act 1988 (Ley, de 1988, de Relaciones Laborales) (artículo 342);
- La Judiciary Act 1903 (Ley, de 1903, del Poder Judicial) (artículo 69.3));
- La Jurisdiction of Courts (Cross-vesting) Act 1987 (Ley, de 1987, sobre distribución de la competencia entre los tribunales de justicia) (artículo 65.5));
- La National Crime Authority Act 1984 (Ley, de 1984, reguladora de la Autoridad Nacional de Política Criminal) (artículo 27);
- La Native Title Act 1993 (Ley, de 1993, del Título Nativo);
- El Navigation (Marine Casualty) Regulations (Reglamento de Navegación (Accidentes Marítimos)) (artículo 29);
- La Privacy Act 1988 (Ley, de 1988, de Protección de la Intimidad) (artículo 102);
- La Proceeds of Crime Act 1987 (Ley, de 1987, sobre los Efectos del Delito) (artículo 102);
- Racial Discrimination Act 1975 (Ley, de 1975, sobre Discriminación Racial) (artículos 25ZB y 25ZC);
- La Sex Discrimination Act 1984 (Ley, de 1984, sobre Discriminación Sexual) (artículos 83 y 84);
- La Trade Practices Act 1974 (Ley, de 1974, reguladora de las prácticas comerciales) (artículo 170);

- La War Crimes Act 1945 (Ley, de 1945, de Crímenes de Guerra) (artículo 19); y
- La War Veterans Act (Ley de Veteranos de Guerra) (artículo 69).

794. Los regímenes de base no legislativa conciernen:

- A los procesos relativos a cuestiones de medio ambiente;
- A los procesos en el extranjero en materia de patria potestad o tutela (secuestro de niños);
- A los procesos en el extranjero en circunstancias especiales;
- A las Comisiones Reales y de encuesta; y
- A los procesos en circunstancias especiales.

El acceso a la defensa de oficio

795. El derecho reconocido a los inculcados de un delito de que se les nombre de oficio abogado para su defensa es una de las garantías de un juicio imparcial. El derecho a que se les designe un defensor de oficio, enunciado en el artículo 14, se refuerza, en el ámbito del ordenamiento jurídico interno australiano, por la resolución dictada por el Tribunal Supremo en el asunto R. c. Dietrich ([1992] 177 CLR 292). En esta causa, la mayoría afirmó que cuando el acusado de un delito grave, por no haber conseguido, sin que medie culpa de su parte, representación letrada para su defensa, solicite la suspensión o el sobreseimiento de las actuaciones, se dictará sin más trámite, salvo en circunstancias excepcionales, el sobreseimiento provisional hasta que designe abogado defensor. Ello impone, en realidad, a la Administración federal o estatal la obligación de financiar la defensa en ciertos procesos judiciales por delito grave. Lo significativo del asunto Dietrich es que la mayoría acordó que depende de las circunstancias de cada caso si la falta de abogado defensor determina la falta de imparcialidad del proceso.

796. Las comisiones de asistencia letrada adoptan el principio de que, en general, las personas a quienes se otorga asistencia letrada deben tener el derecho a designar un abogado de su elección. En realidad, ese principio está recogido en la normativa legal reguladora de las comisiones de asistencia letrada. En los últimos años, sin embargo, algunas comisiones han adoptado "reglas de disponibilidad". Estas reglas, aunque solo se han aplicado restrictivamente, permiten que las comisiones de asistencia letrada denieguen al beneficiario de la asistencia que designe un abogado de su elección. Por ejemplo, las comisiones de asistencia letrada del Territorio de la Capital de Australia, Victoria y Nueva Gales del Sur aplican una regla de esta índole en los procesos penales, de modo que la Sección de Inculpaciones por Delito Grave acepta la defensa de la causa si tiene capacidad para ello. Esas comisiones tampoco permiten que el beneficiario de la asistencia designe un letrado de su elección en las causas penales de que conoce un tribunal de primera instancia (court of petty sessions), ya que la designación de un abogado defensor se puede obtener mediante el turno de oficio administrado por la comisión correspondiente.

797. Las personas que, por aplicación de la Ley de Migración, de 1958, se encuentran en régimen de detención preventiva, aunque no son consideradas delincuentes, tienen derecho a pedir asistencia letrada. Si tal asistencia se deniega a un extranjero por su condición de no residente, éste podrá recurrir si no se tienen en cuenta las circunstancias del caso, en virtud de la resolución del Tribunal Supremo en el asunto R. c. Dietrich.

Los requisitos de la defensa de oficio

798. Los requisitos para obtener la designación de oficio de abogado defensor en relación con los asuntos menos graves pueden variar según el régimen con arreglo al cual se solicita asistencia letrada y el órgano al que se solicita ésta. Los regímenes de asistencia letrada de Australia suelen incluir en los procedimientos de solicitud criterios para determinar los medios económicos del solicitante. También es acostumbrado pedir a quienes pueden aportar una contribución financiera para sufragar el costo de la asistencia que, en aras del interés general, así lo hagan. La prestación de asistencia depende de cuestiones como la clase de asunto para el que se solicita, los medios económicos del solicitante, el fondo del asunto y la disponibilidad de fondos.

799. En 1994, una de las conclusiones del informe sobre el acceso a la Jurisdicción fue que la política de asistencia letrada del Gobierno Federal no había sido suficientemente enérgica ni innovadora. El informe señalaba que la falta de dirección estratégica a escala nacional había resultado en falta de eficiencia y un acceso desigual a la asistencia letrada.

800. Se han adoptado medidas para garantizar el uso más adecuado de los recursos públicos para ayudar a quienes necesitan asistencia letrada. Las principales reformas en esta esfera comprenden mejorar la eficiencia de las instituciones jurídicas esenciales y reducir la demanda de servicios jurídicos, por ejemplo, fomentando la mediación y la orientación en el campo del derecho de familia y favoreciendo la prevención del delito en el ámbito comunitario.

Párrafo 3 e)

801. La norma general en todas las jurisdicciones es que el acusado o su defensor tiene derecho a hacer preguntas o repreguntas a los terceros que testifican. El acusado puede asegurar la comparecencia de cualquier testigo que pueda ser llamado a declarar mediante una citación a comparecer, que impone a quien es entregada la obligación de presentarse ante el tribunal. Esta regla se aplica por igual a la acusación y la defensa. Algunos testigos potenciales, como los menores y las personas incapacitadas por deficiencia psíquica, pueden ser inhábiles por incapacidad natural y, por lo tanto, no pueden ser llamados a declarar. Otras excepciones se refieren a los cónyuges. De otro modo, la regla general es que todas las personas tienen capacidad (competent) y pueden ser llamadas (compellable) a declarar como testigo. Si el testigo no concurriere al llamamiento judicial para declarar, el tribunal podrá ordenar que se le obligue coercitivamente a comparecer.

802. Ciertos tipos de información pueden estar protegidos por el deber de sigilo en virtud de un privilegio. Existe un número limitado de categorías de privilegio, por ejemplo, el privilegio de "la Corona" y el privilegio de las comunicaciones entre el abogado y el cliente. Tanto la acusación como la defensa pueden alegar esos privilegios. El tribunal determinará si ha quedado demostrada

la existencia del privilegio, pero esto no afecta al derecho a obtener la comparecencia de un testigo. Un aspecto importante es el del privilegio contra la autoinculpación, que se examina más adelante en relación con el apartado g) del párrafo 3 del artículo 14.

Párrafo 3 f)

803. En la práctica, el nombramiento de un intérprete en las causas penales en que su intervención es necesaria se efectúa sin que implique ningún gasto para el inculcado. Cuando existe un problema de comunicación, el órgano jurisdiccional hace todo lo posible para que el inculcado comprenda la naturaleza de los cargos que se le imputan y de las pruebas presentadas contra él, y autoriza habitualmente a recurrir a los servicios de un intérprete. También autoriza habitualmente al inculcado a designar su propio intérprete. La estrategia federal en materia de asistencia jurídica y paridad de armas impone a los organismos policiales y judiciales financiados por la Administración federal a facilitar el uso de intérpretes profesionales siempre que sea necesario.

804. El Tribunal de Familia proporciona a las partes la asistencia gratuita de un intérprete durante las reuniones de orientación o mediación. Se proporcionan los servicios de un intérprete si lo solicita una de las partes o si el consejero o mediador estima que una de las partes no entiende o no habla suficientemente el inglés. El personal de secretaría también presta asistencia a las personas que acuden a las secretarías del Tribunal Federal sin un conocimiento suficiente del inglés recurriendo, bien a sus propios funcionarios que conocen varios idiomas, bien al Servicio Telefónico de Interpretación. Últimamente, el Tribunal ha adoptado el sistema de listas de procesos de divorcio con ayuda de intérprete en su secretaría de Sidney, con intérpretes de mandarín y cantonés de guardia. A las personas con problemas de sordera se les proporciona la asistencia de intérpretes conocedores del lenguaje por signos.

805. En los tribunales administrativos o cuasijudiciales (tribunals) federales no existe un derecho legislativamente reconocido a la asistencia de un intérprete. Sin embargo, algunos de esos tribunales han dictado normas o directrices con arreglo a las cuales se proporcionan generalmente, cuando son necesarios, los servicios de un intérprete. El Tribunal Administrativo de Apelación (Administrative Appeals Tribunal) proporciona a las partes y los testigos la asistencia de intérpretes cuando sus servicios son necesarios en el proceso. Las Directrices del Tribunal de Apelación de la Seguridad Social (Social Security Appeals Tribunal) reconocen la necesidad y la importancia de los intérpretes y de la forma de nombrarlos. La parte actora puede indicar en su impreso de demanda si desea la asistencia de un intérprete en el Tribunal. Se le vuelve a preguntar, cuando llama por teléfono para concertar una cita, si necesitará los servicios de un intérprete. En el Tribunal de Revisión de Inmigración (Immigration Review Tribunal) o el Tribunal de Revisión de Asilo y Refugio (Refugee Review Tribunal) hay base legal, aunque no un derecho, para obtener la asistencia de intérprete. En ambos órganos, el presidente puede mandar, cuando comparezca ante el Tribunal una persona que no domina suficientemente el inglés, que la comunicación con ella se efectúe por conducto de un intérprete. En la práctica, los tribunales administrativos o cuasijudiciales (tribunals) proporcionan la asistencia de un intérprete si así se les solicita o cuando parece ser necesaria.

806. Algunos Estados han promulgado leyes para garantizar el derecho a hacerse asistir por un intérprete. Por ejemplo, la Evidence Act 1995 (Ley, de 1995, sobre la prueba procesal) del Estado de Nueva Gales del Sur contiene una disposición que reproduce literalmente la de la Federal Evidence Act 1995 (Ley Federal, de 1995, sobre la prueba procesal) que confiere a todos los testigos el derecho a testificar por conducto de un intérprete a menos que puedan entender y hablar el inglés con fluidez suficiente para comprender las preguntas y prestar testimonio. En el Territorio de la Capital de Australia, cualquier persona que sea parte o testigo en un proceso tiene derecho a hacerse asistir por un intérprete si no es capaz de expresarse eficazmente en inglés. En Victoria, los testigos y las partes en los procesos sustanciados ante el Tribunal de Menores (Children's Court) y los acusados en los procesos tramitados ante el Tribunal de Magistrados (Magistrates' Court) por un hecho punible con pena de prisión tienen derecho, si consta al Tribunal que la persona de que se trata no entiende suficientemente el inglés, a la asistencia de un intérprete. En Australia del Sur, los testigos en cualquier causa, pleito o litigio tienen derecho a hacerse asistir por un intérprete si el inglés no es su idioma materno y no lo dominan con bastante soltura.

807. La Comisión Real de Investigación de las Muertes de Aborígenes en régimen de Detención determinó que los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, si no podían entender las actuaciones procesales en inglés o si no podían expresarse en inglés, necesitaban tener acceso a los servicios de un intérprete. Posteriormente se proporcionaron fondos para el establecimiento de programas de capacitación de intérpretes calificados de idiomas de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en relación con varias de esas lenguas.

808. El nombramiento de intérpretes judiciales calificados de idiomas de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en las localidades en que la población aborígen y de isleños del Estrecho de Torres es importante permitirá crear unas condiciones de acceso a los tribunales más justas y equitativas para los hablantes de esos idiomas.

809. Se han ejecutado programas experimentales de capacitación de intérpretes de Pitjantjatjara, que han permitido formar ocho intérpretes calificados semiprofesionales, de criollo del Estrecho de Torres, con dos titulados, y de Walmajarri, Jaru y Kriol, de los que han salido 13 intérpretes. Además, se proporcionaron fondos a una institución del Territorio del Norte para que incluyera entre las materias de su programa de formación de intérpretes la interpretación jurídica, lo que ha dado lugar a la titulación de tres intérpretes de Kriol y dos de Diambarrpuyngu. Otros tres participantes han obtenido certificados de enseñanza técnica y complementaria y, con un poco más de trabajo, concluirán sus estudios con un título semiprofesional.

810. En 1996, se han previsto nuevos programas en Australia Occidental, en Nyangumarta y en Alice Springs en Arrernte, el Desierto Occidental y Warlpiri.

811. El Comité Permanente de Fiscales Generales está estudiando la propuesta de promulgar leyes uniformes para garantizar a las personas que no hablan inglés el derecho a la asistencia de un intérprete. El Comité ha abordado la cuestión de los intérpretes en relación con las recomendaciones formuladas por el Departamento del Fiscal General Federal en su informe "Access to Interpreters in the Legal System" ("La posibilidad de acceso a un intérprete en el ordenamiento jurídico"). Recientemente, el Comité ha formulado unas directrices nacionales

sobre la disponibilidad de intérpretes en los tribunales. Los Fiscales Generales están a la espera de que se adopte un sistema nacional de inscripción y acreditación de intérpretes, cuestión que está siendo examinada por los ministros de asuntos étnicos.

Párrafo 3 g)

El interrogatorio policial

812. Toda persona tiene derecho a guardar silencio cuando es interrogada por la policía en relación con un delito. Si opta por contestar, su declaración podrá ser presentada como prueba en una fase ulterior del proceso. Las Instrucciones de los Comisarios de Policía suelen disponer que la policía advierta al presunto responsable de un hecho punible de la posibilidad de que sus declaraciones sean presentadas como prueba en una fase posterior del proceso.

813. La ley establece la obligación en ciertos casos de contestar algunas preguntas de la policía, pero suelen referirse a cuestiones como las circunstancias personales (nombre y apellidos) y la dirección de las personas presentes en el lugar de un accidente de tráfico. En Victoria, la obligación de dar a conocer el nombre y apellidos y las señas es más amplia. El artículo 456AA de la Ley Penal, de 1958, establece que la negativa a dar nombre y dirección a petición de un funcionario de policía constituye un delito en determinados supuestos, es decir, cuando el funcionario de policía tenga motivos racionalmente bastantes para creer que esa persona ha cometido o va a cometer un delito o que puede ayudarle en la investigación de un delito grave.

814. De conformidad con el common law, la confesión de un delito por el imputado solo es admisible si se hace voluntariamente. La confesión obtenida por una autoridad empleando cualquier género de amenaza o incentivo podrá ser considerada involuntaria por el tribunal y, por consiguiente, inadmisibile.

815. En Nueva Gales del Sur y el Territorio de la Capital de Australia y en los tribunales de justicia federales, la regla de la voluntariedad ha sido sustituida por la de la credibilidad. En estas jurisdicciones, la prueba de la confesión no es admisible a menos que el acto de la confesión y el modo de obtenerla no hayan sido influidos por ningún género de acto violento, abusivo, inhumano o degradante dirigido contra cualquier persona, ni por la amenaza de realizar alguno de esos actos. Por otra parte, el valor probatorio de una confesión hecha durante el interrogatorio oficial, o como resultado de la acción de una persona que puede influir en el procesamiento, no es admisible a menos que las circunstancias en que se hizo la confesión hagan improbable que su veracidad resultase afectada. Las circunstancias que debe tener en cuenta el tribunal son las características o condiciones de la persona que hizo la confesión (como su edad, personalidad, educación y cualquier incapacidad), la naturaleza del interrogatorio y cualquier amenaza, promesa o incentivo. No toda confesión voluntaria sería admisible necesariamente con arreglo al criterio de credibilidad.

816. En general, las confesiones o admisiones de hechos por los presuntos responsables de un delito deben ser grabadas en cinta magnetofónica siempre que sea posible. Por lo que respecta a los delitos federales, la Ley Penal Federal, de 1914, establece que, cuando no sea posible grabar en cinta magnetofónica la confesión en el momento mismo en que se haga, se levantará acta de las

declaraciones del imputado en la que se consignará la admisión de hechos o confesión y de la que se dará lectura al imputado, quien deberá poder refutar cualquiera de los elementos contenidos en ella. Este acto debe ser grabado en cinta magnetofónica. En la práctica suele utilizarse la grabación en vídeo, lo que proporciona la mejor indicación posible de la credibilidad de la prueba. En Tasmania no es obligatorio grabar electrónicamente las confesiones durante el interrogatorio policial. No obstante, la policía de Tasmania se esfuerza por grabar en vídeo las confesiones siempre que ello es posible. La Ley Penal de 1995 (Detención e Interrogatorio) dispone que la policía debe imperativamente grabar en vídeo el interrogatorio durante el cual se hace una confesión o admisión de hechos, a menos que ello resulte imposible o que la policía pueda dar una explicación razonable de los motivos por los cuales no fue posible efectuar la grabación. La Ley define lo que constituye a estos efectos una explicación razonable.

El examen de los testigos

817. En la mayoría de las jurisdicciones, el acusado puede prestar declaración como testigo en favor de sí mismo o de un coimputado, pero no ser obligado a ello. De ese modo, el acusado no está obligado a declarar y no incurrirá en desacato si opta por no hacerlo. En algunas jurisdicciones australianas también está prohibido por disposición de la ley que el tribunal haga al acusado reconvenções por haberse negado a declarar.

818. Generalmente, el acusado puede optar por guardar silencio o por declarar bajo juramento o promesa. En la Isla Norfolk, el acusado puede prestar declaración sin que se le exija juramento o promesa. Cuando el acusado opta por declarar bajo juramento, las normas que rigen la práctica de la prueba limitan el alcance del contrainterrogatorio, por ejemplo, en lo referente a la credibilidad del acusado.

La autoinculpación

819. En Australia existen disposiciones legales que obligan a prestar declaración, pero con ciertas reservas. Por ejemplo, el procedimiento de certificación previsto en las leyes federal y de Nueva Gales del Sur sobre la prueba. De conformidad con la Ley Federal, de 1995, sobre la prueba procesal, los tribunales de justicia federales o del Territorio de la Capital de Australia pueden exigir a un testigo, salvo cuando el testimonio tienda a probar la comisión de un delito en el extranjero, que declare contra sí mismo si ello redundará en interés de la justicia. En esos casos, el testigo tiene derecho a un certificado por el que se le concede inmunidad y protección en relación con su testimonio. Ni el testimonio por el que se ha concedido el certificado, ni ninguna información, documento o efecto obtenido como consecuencia directa o indirecta de la declaración del testigo, pueden ser utilizados contra éste en un proceso sustanciado en un tribunal australiano, excepto en un proceso penal instruido por falso testimonio.

Los menores

820. Los párrafos 1391 a 1482 del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño contienen información detallada sobre los menores y la Administración de justicia.

El derecho a los recursos

821. La legislación de todas las jurisdicciones australianas reconoce el derecho a que la sentencia condenatoria y la pena impuesta sean sometidas a un tribunal superior, conforme a lo prevenido en la ley. También existen las órdenes de prerrogativa (prerogative writs). En algunos casos, la presentación del recurso está sujeta a la autorización del tribunal superior. El requisito de la autorización es un medio de garantizar que el recurso se presente por un motivo válido y, en la práctica, nunca se deniega la autorización si el recurso está debidamente fundado y se presenta dentro del plazo prescrito. El Tribunal Supremo de Australia (High Court of Australia) es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes para todas las jurisdicciones.

822. Cada jurisdicción tiene un sistema de recursos establecido por ley parlamentaria. En Nueva Gales del Sur, la pena impuesta por el tribunal local puede recurrirse en apelación ante el tribunal de distrito. El plazo de presentación del recurso es el único límite a que está sujeto el derecho a recurrir de cualquier persona. El condenado por el Tribunal Superior de Justicia (Supreme Court) en primera instancia puede recurrir la pena impuesta ante el Tribunal de Apelación de lo Penal (Court of Criminal Appeal). Este recurso de apelación consistirá en un nuevo conocimiento fáctico de la causa. Por lo que respecta a los delitos graves (indictable offences), el condenado puede, con autorización del tribunal, recurrir la pena impuesta ante el Tribunal de Apelación de lo Penal.

823. En Australia del Sur, el condenado por un delito en un proceso penal iniciado por querrela (on complaint) puede recurrir en apelación al Tribunal Superior de Justicia. El condenado por un delito en un proceso penal iniciado por denuncia (on information) puede, previa autorización del tribunal, recurrir en apelación al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para obtener una reducción de pena. Vista la apelación, el Pleno del Tribunal, si estima que hubiera debido imponerse otra pena, casará la sentencia dictada en primera instancia y dictará nueva sentencia ajustada a Derecho, o desestimaré el recurso. Solo ha lugar a la reforma peyorativa de la pena cuando el Director de Encausamientos Públicos (Director of Public Prosecutions) la solicita con autorización del Pleno del Tribunal y éste accede a lo solicitado.

La indemnización por error judicial (miscarriage of justice)

824. Australia ha mantenido la siguiente reserva con respecto a este párrafo:

"Australia formula la reserva de que la indemnización por error judicial en los supuestos a que se refiere el párrafo 6 del artículo 14 puede obtenerse por la vía administrativa en vez de a tenor de una disposición legislativa concreta."

825. En todas las jurisdicciones existen procedimientos administrativos para obtener una indemnización por error judicial en los supuestos previstos en el párrafo 6 de este artículo. La razón por la cual Australia mantiene su reserva al artículo 14 es que la obligación de pagar una indemnización en caso de error judicial enunciada en el párrafo 6 de este artículo tiene una base legislativa, mientras que, en Australia, los procedimientos para obtener una indemnización no se basan necesariamente en una disposición de esa naturaleza. El procedimiento de indemnización por error judicial se refiere a los supuestos en que el error

es atribuible a la autoridad judicial, no a los errores que pueda haber cometido un jurado.

La prohibición de segundo procesamiento por el mismo delito (double jeopardy)

826. El ordenamiento jurídico australiano reconoce el principio non bis in idem, que es el fundamento de la excepción de cosa juzgada que se propone como cuestión de previo pronunciamiento alegando haber sido ya absuelto (autrefois acquit) o condenado (autrefois convict) por los mismos hechos. En el asunto Davern c. Messel (1984) 53 ALR 11, el Tribunal Supremo estableció por mayoría dos límites a la aplicación del principio:

- Cuando sea el condenado quien recurra en apelación, no se aplicará el principio non bis in idem; y
- El principio non bis in idem no impedirá al tribunal superior corregir el error en que hubiere incurrido el tribunal inferior al anular una condena.

827. El artículo 4C.1) de la Ley Penal Federal, de 1914, reconoce que el efecto de cosa juzgada puede manifestarse en virtud de la legislación federal, puesto que dispone que, cuando una acción u omisión constituya delito a tenor de dos o más leyes federales o a tenor de una ley federal y el common law, el autor de la infracción podrá, salvo disposición en contrario, ser juzgado y castigado con arreglo a cualquiera de esas leyes federales o de conformidad con el common law, pero no podrá ser castigado dos veces por la misma acción u omisión.

828. El artículo 4C.2) de la Ley Penal Federal, de 1914, dispone que, cuando una acción u omisión constituya delito a tenor de una ley federal y una ley estatal, el autor de la infracción no podrá ser castigado por ese delito de conformidad con la legislación federal si ya hubiere sido castigado con arreglo a la legislación estatal.

Artículo 15

Leyes penales retroactivas

829. En todas las jurisdicciones australianas, la norma general es que las leyes que modifican disposiciones legales anteriores no se aplican a los hechos o acontecimientos pasados, afectando así a derechos, privilegios, obligaciones o responsabilidades existentes, salvo que dichas leyes, o la documentación de acompañamiento, expresen la intención contraria. Por consiguiente, a menos que el Parlamento así lo disponga expresamente, no puede procederse a una inculpación por hechos que no constituían un delito en el momento en que se realizaron. Esta aplicación retroactiva de una ley penal sería contraria a las tradiciones políticas australianas. De la jurisprudencia existente se desprende claramente que, aunque el principio de no retroactividad en la aplicación del derecho penal no está garantizado constitucionalmente, tanto el Parlamento como los tribunales lo consideran de gran importancia, y sólo deja de aplicarse en circunstancias excepcionales. La protección contra toda merma de la presunción de no retroactividad es una de las características más permanentes del mandato de la Comisión del Senado de Escrutinio de Leyes, Reglamentos y Ordenanzas, que vela por que las propuestas legislativas no afecten indebidamente a los derechos

y libertades individuales. Las comisiones establecidas con el mismo objeto por legislaturas estatales tienen mandatos similares en ese aspecto.

830. Sin embargo, en Polyukhovich v. Commonwealth (1991) 172 CLR 501, el Tribunal Superior refrendó la validez de la legislación en el caso de una modificación de la War Crimes Act 1945 (Ley de 1945 de Crímenes de Guerra), que estipulaba que se consideraría "crimen de guerra" todo delito grave (con inclusión del asesinato) cometido durante la guerra entre el 1º de septiembre de 1939 y el 8 de mayo de 1945.

831. En su decisión, el Tribunal Supremo reconoció los peligros y la posible injusticia que entrañaba la creación retroactiva de delitos penales y reconoció que la no retroactividad del derecho penal es un principio fundamental del derecho internacional. Sin embargo, argumentó que en el caso de transgresiones morales muy graves hay razones de peso para considerar que el interés público de poder exigir responsabilidades a los transgresores tiene precedencia sobre la necesidad de la sociedad de proteger a las personas de su inculpación retroactiva en virtud de legislación inexistente en el momento de los hechos.

832. Otra ocasión en que se plantearon esas cuestiones fue la modificación retroactiva del artículo 154 del Código Penal del Territorio del Norte mediante un proyecto de ley aprobado en febrero de 1991. La finalidad de la modificación retroactiva era anular una opinión consultiva emitida en diciembre de 1990 por el Tribunal Penal de Apelación del Territorio del Norte que restringía la aplicación de ese artículo.

833. Con arreglo al artículo 154 del Código Penal, constituye un delito toda acción u omisión que ocasione grave peligro para la población, o cualquier miembro de ella, en circunstancias en que cualquier persona habría previsto el peligro. El Tribunal emitió la opinión de que el peligro debía afectar a la población en general o a algún miembro de ella, y no a personas conocidas del acusado. El Gobierno del Territorio del Norte promulgó modificaciones retroactivas para que ese artículo se aplicara también cuando el acusado conoce a la víctima. Aunque reacio a promulgar una modificación retroactiva de una disposición penal, lo hizo en este caso por las razones siguientes:

- No existía constitucionalmente la posibilidad de recurrir la decisión ante el Tribunal Superior; y
- De no introducirse la modificación, se habrían derivado situaciones injustas (en que, por ejemplo, acusados de violencia doméstica tuvieran que ser absueltos o juzgados por delitos más graves).

Modificaciones de las penas

834. La mencionada presunción de no retroactividad del common law se aplica también en lo que respecta a las modificaciones de las penas. En general, los tribunales entenderán que, a menos que ésa sea a todas luces la intención del Parlamento, no deben aplicarse retroactivamente los incrementos de penas. Así se desprende claramente de la jurisprudencia existente sobre esa cuestión. En Samuels v. Sangaila [1977] 16 SASR 397, el Tribunal Supremo de Australia Meridional mencionó tres casos ingleses resueltos en sentido contrario y sostuvo que había presunción en contra de la aplicación retroactiva de un incremento de pena, a menos que el Parlamento indicara claramente lo contrario. Esa posición

fue la adoptada también por el Tribunal Supremo de Victoria en Baker v. Stewart; Wilson v. Kerr (1979) VR 17. Además, en Hele v. Semple (1986) 42 SASR 295, el Tribunal Supremo de Australia Meridional determinó que cuando antes de juzgarse un delito se ha reducido la pena correspondiente, debe aplicarse al acusado esa reducción.

835. En algunas jurisdicciones esos principios tienen fuerza de ley. En el plano federal, el artículo 4F de la Ley Penal de 1914 dice lo siguiente:

"Cuando una ley agravare la pena o la pena máxima aplicable a un delito, tal agravación sólo de aplicará a los delitos perpetrados después de la entrada en vigor de la disposición legal por la que se agravare la pena o la pena máxima.

Quando una ley redujere la pena o la pena máxima aplicable a un delito, tal reducción se aplicará a los delitos perpetrados antes de la entrada en vigor de la disposición legal por la que se redujere la pena o la pena máxima, pero no afectará a las penas impuestas antes de su entrada en vigor."

836. Se han introducido modificaciones análogas en diversas jurisdicciones, por ejemplo, la Interpretation Act 1987 (Ley de Interpretación de 1987) de Nueva Gales del Sur, la Interpretation of Legislation Act 1984 (Ley de Interpretación Legislativa de 1984) de Victoria y la Penalties and Sentences Act 1992 (Ley de Penas y Sentencias de 1992) de Queensland. Esas leyes estipulan asimismo que, a menos que se explicita la intención contraria, la derogación total o parcial de una ley no "afectará a las penas, sanciones o castigos aplicados por la infracción" de esa ley o disposición. La Ley de Interpretación de 1978 del Territorio del Norte excluye específicamente toda aplicación retroactiva de reglamentos, normas y estatutos que afecte a los derechos u obligaciones de las personas. El artículo 33A de la Ley de Interpretación de 1967 del Territorio de la Capital de Australia es idéntico al artículo 4F de la Ley Federal.

837. En Australia Occidental, la nueva Sentencing Act 1995 (Ley de Sentencias de 1995), todavía no promulgada, estipula que, si en el período comprendido entre la comisión del delito y la aplicación de la sentencia se modifica la pena estipulada para ese delito, se aplicará al acusado la más leve de las penas previstas.

Sentencias

Legislación federal

838. El 17 de julio de 1990 entró en vigor una parte nueva, IB, de la Ley Penal de 1914, por la que se consolidó y modificó la legislación federal sobre sentencias. Las modificaciones afectaban, entre otras cosas, a las directrices sobre la imposición de penas, con el fin de lograr un mayor grado de certidumbre y equidad. Aunque las sentencias entrañan en general un proceso discrecional, en la parte IB se indican las cuestiones que deben tomarse en consideración para la imposición de penas a acusados de delitos federales, como los antecedentes del acusado, y estipula que, cuando proceda, deben tenerse en cuenta las leyes consuetudinarias de los aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres. El párrafo 2) del artículo 16A de la Ley Penal de 1914 establece que, al dictar

sentencia, los tribunales "tomarán en consideración" tales cuestiones cuando sean pertinentes y las conozca el Tribunal.

839. En la Ley Penal de 1914 se indican actualmente los diversos factores que han de tenerse en cuenta al dictar sentencia por delitos de ámbito federal. Entre esos factores destacan los siguientes:

- La naturaleza y las circunstancias del delito;
- Las circunstancias personales de la víctima; y
- El carácter, los antecedentes, la edad, los medios y las condiciones físicas o mentales del acusado.

840. Se ha reforzado el principio de que sólo deben aplicarse penas de prisión como último recurso. Sin embargo, cuando un tribunal determina que procede aplicar una pena de prisión, la sentencia es firme. Cuando se condena a prisión al autor de un delito federal, si el tribunal fija un período de prisión incondicional o establece disposiciones para la puesta en libertad bajo palabra y compromiso personal, ése será el período efectivo de privación de libertad antes de que pueda solicitarse la puesta en libertad condicional o bajo palabra y compromiso personal. Esos períodos no podrán ser objeto de rebajas de pena salvo en el caso de reducciones otorgadas por los Estados por razón de huelgas de funcionarios de prisiones (párrafo 4) del artículo 19AA de la Ley Penal de 1914).

841. Se puso gran cuidado en garantizar que la introducción de un mayor grado de certidumbre en la imposición de las penas no diera lugar a períodos más largos de prisión. En los Estados en los que los períodos de prisión incondicional podían ser objeto de reducción, se estipuló específicamente que el período de prisión incondicional de los reos federales debía ajustarse para tener en cuenta que no se le aplicarían reducciones. Además, el tribunal debe explicar al interesado que la sentencia de prisión se compone de un período de encarcelamiento y de un período que puede cumplirse en la comunidad, con arreglo a las condiciones de la libertad condicional o de la libertad bajo palabra y compromiso personal.

Legislación estatal

842. El período de cárcel que cumple efectivamente el condenado depende de la sentencia originaria, del sistema de reducciones y de las formas de libertad condicional aplicables en las distintas jurisdicciones. Las normas que determinan la fecha de puesta en libertad son complejas y difieren de un Estado a otro.

Territorio de la Capital de Australia

843. En el Territorio de la Capital de Australia, los presos preventivos permanecen en el Centro de Prevención de Belconnen, y, por carecer el Territorio de cárceles, los reos cumplen sus sentencias en prisiones de Nueva Gales del Sur, aunque son sentenciados con arreglo a la legislación del Territorio. Su puesta en libertad condicional también se rige por la legislación del Territorio de la Capital de Australia.

844. En la Ley Penal de 1990 del Territorio de la Capital de Australia se estipulan las cuestiones que ha de tomar en consideración el tribunal para dictar sentencia, entre las que se cuentan la naturaleza y circunstancias del delito, las circunstancias personales de la víctima si el acusado tenía conocimiento de ellas, y la formación cultural, el carácter, la edad, los medios, los antecedentes y las condiciones físicas o mentales del acusado.

Nueva Gales del Sur

845. En Nueva Gales del Sur, hasta 1989 tanto los jueces como los presos y la comunidad daban por supuesto que los condenados a cadena perpetua sólo cumplirían de 11 a 15 años de prisión. La Ley de Sentencias de 1989 garantiza el cumplimiento efectivo de las penas de prisión impuestas por los tribunales.

846. En virtud de la Crimes (Life Sentences) Amendment Act 1990 (Ley Penal Modificada (Cadena Perpetua) de 1990), la Sentencing (Life Sentences) Amendment Act 1990 (Ley Modificada de Sentencias (Cadena Perpetua) de 1990) y la Prisons (Serious Offenders Review Board) Amendment Act 1990 (Ley Modificada de Prisiones (Junta de Revisión de Penas por Delitos Graves)), han suprimido la cadena perpetua indeterminada. La Ley Penal Modificada (Cadena Perpetua) de 1990 estipula que la pena de cadena perpetua debe aplicarse hasta el fin de la vida natural del condenado. En la actualidad son sólo dos los delitos a los que puede aplicarse la pena máxima de cadena perpetua: el asesinato y el tráfico de drogas en cantidades comerciales, con arreglo a la Drug Misuse and Trafficking Act 1985 (Ley de 1985 sobre el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas). Para todos los demás delitos, la pena de cadena perpetua fue sustituida por una pena máxima de 25 años de prisión.

847. La Ley Modificada de Sentencias (Cadena Perpetua) de 1990 prevé la revisión de las penas de cadena perpetua que se están cumpliendo. Una vez cumplidos ocho años de la pena de cadena perpetua, cualquier condenado puede solicitar ante el Tribunal Supremo la revisión de la pena para que quede dividida en un período mínimo de cumplimiento obligatorio y un período adicional. El Tribunal Supremo puede, a su discreción, rechazar la solicitud. Puede asimismo decidir que el condenado no pueda volver a presentar una solicitud o tenga que esperar un plazo determinado para hacerlo. Si el Tribunal decide que no pueda volver a presentarse una solicitud, el condenado tendrá que cumplir la pena de cadena perpetua hasta el final de su vida. La decisión del Tribunal Supremo puede recurrirse.

848. Entre las iniciativas recientes en materia de rehabilitación se cuenta la Criminal Records Act 1991 (Ley de Antecedentes Penales de 1991), promulgada el 31 de mayo de 1991 y administrada por el Departamento de Policía de Nueva Gales del Sur, que prevé la cancelación de los antecedentes penales una vez transcurrido un determinado período de buena conducta (diez años para los adultos y tres años para los menores). El sistema no se aplica a determinadas penas, como las penas de prisión de más de seis meses y las penas impuestas por delitos sexuales.

Sentencing Law 1989

849. La Sentencing Law 1989 (Ley de Sentencias de 1989) introdujo cambios importantes en el procedimiento de imposición de penas, dándole mayor flexibilidad. Anteriormente se imponía una sola pena de prisión, que se dividía

en un período mínimo de prisión incondicional y otro período que podía cumplirse en régimen de libertad condicional o a prueba con arreglo a la Probation and Parole Act 1983 (Ley de Libertad Condicional o a Prueba de 1983). La Ley de Sentencias de 1989 modificó la forma de calcular la fecha de puesta en libertad en Nueva Gales del Sur:

- El tribunal fija primero un período mínimo que el condenado debe cumplir en la cárcel, al término del cual podrá procederse a su puesta en libertad en el caso más favorable.
- El tribunal fijará a continuación un período adicional en el que el condenado podrá ser puesto en libertad condicional.
- Cuando no se fija un período adicional, el período mínimo se denomina período fijo de encarcelamiento.
- Las penas de no más de seis meses han de ser períodos fijos de encarcelamiento.
- Los condenados a penas de no más de tres años serán puestos en libertad condicional en cuanto se cumpla el período mínimo obligatorio, y los condenados a penas de más de tres años podrán ser puestos en libertad condicional por la Junta de Revisión una vez cumplido el período mínimo.
- Un juez inspector puede incrementar el período mínimo de encarcelamiento en 28 días por cada infracción de la disciplina carcelaria.
- Por el anexo 3 de la Ley de Sentencias de 1989 se eliminaron las reducciones.

Queensland

850. En Queensland no se encarcela "sin posibilidad de puesta en libertad". Los condenados a cadena perpetua han de cumplir 13 años de pena para poder solicitar la libertad condicional.

851. La Penalties and Sentences Act 1991 (Ley de Penas y Sentencias de 1992) establece directrices en las que se detallan los casos en que puede aplicarse cada pena, los principios pertinentes y los factores que hay que tener en consideración al dictar sentencia. Según la Ley, el encarcelamiento es un castigo de último recurso, por lo que cuando un tribunal impone una pena de prisión debe declarar en sesión pública sus razones para hacerlo.

Australia Meridional

852. Australia Meridional fue la primera jurisdicción del país que incorporó a su legislación directrices sobre la imposición de penas. La Criminal Law (Sentencing) Act 1988 (Ley Penal (Sentencias) de 1988) estipula claramente que sólo deben imponerse penas de cárcel cuando, atendiendo a todas las circunstancias del caso, se considere la forma de castigo más apropiada. La Ley tiene por objeto consolidar la legislación relativa a la imposición de penas y dotar a los tribunales de mayor flexibilidad a la hora de dictar sentencia (con

la excepción del Tribunal de Menores, no incluido en las disposiciones de la Ley). Además, los tribunales han de tomar en consideración la capacidad de pago del acusado antes de imponerle una multa. En la Ley se exponen los criterios que ha de aplicar el tribunal antes de dictar sentencia. Uno de esos criterios es el efecto del delito en la víctima, por lo que, con el fin de facilitar la tarea del tribunal, se le presentan informes sobre los efectos en la víctima.

Tasmania

853. La Criminal Code Amendment (Life Prisoners and Dangerous Criminals) Act 1994 (Ley por la que se modifica el Código Penal (Cadena Perpetua y Delincuentes Peligrosos) de 1994) abolió en Tasmania la cadena perpetua de cumplimiento obligatorio y dispuso que los presos ya condenados a cadena perpetua podían presentar al Tribunal Supremo una solicitud de conmutación de pena.

854. Al imponer una pena de cadena perpetua, el tribunal debe indicar que el condenado no podrá ser puesto en libertad condicional o bien fijar un período mínimo de cumplimiento obligatorio. Para todas las demás penas, la Parole Act 1977 (Ley de Libertad Condicional de 1977) establece en la mitad de la duración de la pena el período mínimo de cumplimiento obligatorio.

855. En virtud de los reglamentos de la Prisons Act 1977 (Ley de Prisiones de 1977), los presos pueden obtener reducciones de penas por buena conducta, hasta un máximo de tres meses, a condición de que no excedan de la tercera parte de la pena ni reduzcan su duración a menos de tres meses.

Victoria

856. En 1991, el Gobierno de Victoria promulgó la Sentencing Act (Ley de Sentencias), que se modificó en 1993. En ella se incluyeron por primera vez directrices sobre la imposición de penas en las que se esbozan los factores que deben tener en cuenta los tribunales para dictar sentencia (artículos 5 y 6). El tribunal no debe imponer una pena más severa que la necesaria para lograr su finalidad (párrafo 3) del artículo 5), ni una pena que entrañe el encarcelamiento del reo a menos que sea la única forma de lograr la finalidad de la sentencia (párrafo 4) del artículo 5). La Ley contempla nuevas situaciones en las que el tribunal puede decidir no emitir un fallo condenatorio y amplía las posibilidades de imponer penas diferentes de las de privación de libertad. La finalidad de la Ley es proporcionar a los tribunales opciones más flexibles para que puedan dictar las sentencias más apropiadas.

857. La Sentencing (Amendment) Act 1993 (Ley Modificada de Sentencias de 1993) se promulgó principalmente para incrementar las penas aplicables por delitos sexuales graves y delitos violentos, facultar a los tribunales para imponer penas indefinidas a las personas condenadas por delitos graves, y establecer nuevas categorías de delitos. De las disposiciones relativas a la imposición de penas indefinidas están excluidos expresamente los jóvenes, definidos como personas que en el momento en que se dicta la sentencia no hayan cumplido los 21 años.

858. En el artículo 3 de la Ley se incluyen como delitos graves los siguientes:

- El asesinato;

- El homicidio;
- Los delitos siguientes contemplados en la Ley Penal de 1958:
 - Lesiones graves causadas intencionalmente;
 - Amenaza de muerte;
 - Violación;
 - Agresión con intención de violar;
 - Incesto, a menos que ambas personas hayan cumplido los 18 años y realicen el acto sexual voluntariamente;
 - Penetración sexual de un menor de 16 años;
 - Relación sexual con un menor de 16 años;
 - Rapto o retención de un menor de 16 años;
 - Secuestro;
 - Atraco a mano armada;
- La infracción de disposiciones de la Ley Penal de 1958;
- Los delitos de common law de violación y agresión con intención de violar; y
- Conspiración para cometer cualquiera de los delitos mencionados, tentativa de cometerlos o incitación a cometerlos.

859. En casos de delitos graves, el tribunal puede imponer una pena indefinida, cualquiera que sea la pena máxima prescrita. Incumbe a la fiscalía la carga de la prueba de que el acusado constituye un peligro grave para la comunidad. Una sentencia indefinida excluye la posibilidad de libertad condicional.

860. Antes de imponer una pena indefinida, el tribunal debe cerciorarse, con un grado elevado de certidumbre, de que el acusado constituye un grave peligro para la comunidad, y debe tomar en consideración:

- Si la naturaleza del delito grave es excepcional;
- Cualquier elemento pertinente contenido en la transcripción certificada de cualesquiera actuaciones contra el acusado en relación con un delito grave;
- Cualquier informe médico o psiquiátrico u otros informes pertinentes;
- Los riesgos graves que se derivarían para miembros de la comunidad de no imponerse una pena indefinida;

- La necesidad de proteger a los miembros de la comunidad de los riesgos mencionados; y
- Cualquier otro elemento que el tribunal estime pertinente.

861. El artículo 18H de la Ley contempla la posibilidad de revisar una sentencia indefinida, a solicitud del Director de Acusación Pública, una vez cumplido el período mínimo de la pena, y posteriormente a intervalos de tres años, a solicitud del condenado.

862. La Corrections (Remissions) Act 1991 (Ley de 1991 sobre Penas (Reducciones)) se aplica conjuntamente con la Ley de Sentencias, y contempla la anulación o reducción de penas y la concesión de permisos previos a la excarcelación. Garantiza el cumplimiento por los condenados de los períodos mínimos de encarcelamiento impuestos por el tribunal.

Australia Occidental

863. En los últimos tiempos se ha promulgado en Australia Occidental nueva legislación sobre la imposición de penas que amplía las opciones de los tribunales a la hora de dictar sentencias. Se dispone asimismo en particular que, antes de pronunciar una sentencia determinada, el tribunal ha de cerciorarse de que no procede aplicar ninguna de las opciones enumeradas antes en la legislación. Además, el tribunal no puede imponer una pena de prisión a menos que lo justifique la gravedad del delito o resulta aconsejable para proteger a la comunidad.

Artículo 16

864. Según el common law de Australia, la personalidad jurídica se adquiere al nacer. Por consiguiente, nadie puede tener derechos ni obligaciones legales antes de su nacimiento. No obstante, pueden adquirirse al nacer derechos acumulados anteriormente. Así ocurre, en particular, en el caso de lesiones prenatales por negligencia. Los tribunales australianos han fallado que hay fundamento para la incoación de actuaciones cuando el niño nace vivo con lesiones y discapacidades. Otro caso es el de la adquisición al nacer de derechos sobre propiedades o intereses en fideicomiso.

865. La legislación australiana no contempla ningún caso en que pueda restringirse o anularse la personalidad política, por lo que todas las personas están sometidas a la ley y tienen, por consiguiente, derecho a la protección de la ley. Sin embargo, puede restringirse la capacidad legal de obrar de una persona por razones tales como la minoría de edad o la enajenación mental.

Artículo 17

866. La legislación australiana no reconoce un derecho general a la intimidad. Sin embargo, la vida privada está protegida por diversas leyes federales y estatales, el common law e instrucciones administrativas. En particular, la Federal Privacy Act 1988 (Ley Federal de 1988 de Protección de la Intimidad) protege la confidencialidad de la información relacionada con las actividades de la administración federal y de algunas actividades no gubernamentales. La legislación estatal y el common law prevén también recursos en caso de agresión o detención ilegal (examinados antes en relación con los artículos 6 y 7),

allanamiento de propiedad (examinados antes en relación con el artículo 12) y abuso de confianza (examinados más adelante en el presente capítulo), negligencia y actividades molestas.

867. El presente capítulo se centra ante todo en dos aspectos del derecho a la vida privada: los derechos respecto de la información en poder de la administración federal y la protección de la reputación de las personas por medio de leyes contra la difamación y otras restricciones a la actividad de los medios de comunicación. Posteriormente se examina la protección de la vida privada en relación con la familia y el hogar.

Confidencialidad de la información

Privacy Act 1988

868. En 1988 el Gobierno Federal promulgó la Privacy Act 1988 (Ley de 1988 de Protección de la Intimidad), que, entre otras finalidades, protege la confidencialidad de la información sobre las personas reunida por la mayoría de los departamentos y organismos de la administración federal. Fueron impulsos importantes para la promulgación de la Ley la ratificación por Australia en 1980 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las recomendaciones formuladas en su informe sobre la confidencialidad de la información por la Comisión Australiana de Reforma Legislativa.

869. La Ley de 1988 establece normas mínimas que han de observar la mayoría de los departamentos y organismos de la administración federal en la reunión, el almacenamiento, la utilización y la divulgación de datos personales, a fin de proteger la confidencialidad de la información sobre las personas. Junto con la Freedom of Information Act 1982 (Ley de 1982 sobre la Libertad de Información), permite a las personas acceder a la información que sobre ellas posean esos departamentos y organismos, y corregirla si es necesario. Esas normas, denominadas principios sobre la confidencialidad de la información, se basan en las Directrices sobre la protección del carácter privado de los datos personales y las corrientes transfronterizas de datos, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

870. El concepto de información personal se define en la Ley de 1988 como información o una opinión, ya sea verdadera o no, y esté registrada o no en un soporte material, sobre una persona física cuya identidad sea evidente o pueda deducirse razonablemente de la información u opinión.

871. Por razones de interés público, los principios sobre la confidencialidad de la información no se aplican a determinadas organizaciones, entre las que destacan los servicios de seguridad e información.

872. La Ley de 1988 protege asimismo la información sobre los números de identificación fiscal asignados por la Oficina Tributaria de Australia para identificar a las personas, las empresas y otras entidades que presentan declaraciones de renta a la Oficina. Para evitar que los números de identificación fiscal pudieran utilizarse como base de un sistema nacional de identificación, se incluyeron en la Ley disposiciones que regulan la utilización y divulgación de los números. La utilización o divulgación no autorizadas de los números de identificación fiscal constituyen asimismo infracciones de la

Taxation Administration Act 1953 (Ley de 1953 sobre la Administración Tributaria).

873. En 1990 se modificó la Ley para proteger la información crediticia sobre los consumidores en poder de instituciones de crédito y agencias de calificación crediticia. Las modificaciones introducidas limitan el alcance de los datos que pueden reunir sobre los consumidores las agencias de calificación crediticia y las circunstancias en que pueden elaborar informes con esos datos. Las modificaciones regulan asimismo la utilización y divulgación por parte de las instituciones de crédito de los datos de los informes de calificación crediticia, y estipulan el derecho de las personas a acceder a la información de las agencias de calificación crediticia y a solicitar su corrección, así como a ser informadas cuando los datos facilitados por una agencia de calificación crediticia contribuyan a la denegación de un préstamo por una institución de crédito.

874. Por la Ley de 1988 se creó el cargo de Comisionado de Defensa de la Vida Privada, con las siguientes funciones:

- Examinar las propuestas legislativas o de otra índole que puedan tener consecuencias negativas para la intimidad de las personas, e informar al respecto;
- Investigar y supervisar las novedades pertinentes en materia de tecnología informática y de elaboración de datos;
- Promover la comprensión y aplicación de los principios de confidencialidad de la información, a través de la publicación de directrices y la aplicación de programas educativos; e
- Investigar los actos o prácticas de departamentos y organismos de la administración federal que puedan infringir algún principio de confidencialidad de la información, en desempeño de la función de vigilancia del Comisionado o atendiendo a reclamaciones de personas.

875. Pueden presentar reclamaciones al Comisionado las personas que consideren que ha sido vulnerada su vida privada por alguna infracción de la Ley de 1988 de Protección de la Intimidad, la Ley de 1990 sobre el Programa de Comprobación de Datos o las disposiciones de la Ley Penal de 1914 que protegen la información sobre antecedentes penales.

876. En relación con la Ley Penal de 1914, las personas con condenas anuladas o redimidas no están obligadas en ningún caso a revelar a otras personas esos antecedentes (subartículos 85ZT(1) y 85ZV(1)). Además, si una persona tiene conocimiento de los antecedentes penales de otra, la Ley le prohíbe tener en cuenta esa información o divulgarla sin el consentimiento del interesado.

877. Se considera una intromisión en la vida privada el incumplimiento de los principios sobre la confidencialidad de la información, las directrices sobre los números de identificación fiscal formuladas por el Comisionado o las normas sobre la información crediticia que figuran en la Ley de 1988 y en el Código de Conducta establecido por el Comisionado. Los departamentos y organismos de la administración federal y los receptores de números de identificación fiscal no deben actuar en forma que suponga una intromisión en la vida privada de las

personas, y las agencias de calificación crediticia y las instituciones de crédito no deben infringir la Ley ni el Código de Conducta. La infracción de los principios sobre la confidencialidad de la información o de las directrices sobre los números de identificación fiscal no conlleva sanciones penales ni responsabilidad civil por daños. Sin embargo, se prescriben sanciones pecuniarias de hasta 150.000 dólares por diversas infracciones de las disposiciones sobre información crediticia de la Ley. Las personas pueden presentar una reclamación al Comisionado por cualesquiera intromisiones en la vida privada contempladas en la Ley. El Comisionado está facultado para investigar independientemente esas reclamaciones y formular determinaciones al respecto (incluso sobre el pago de una indemnización por pérdidas o daños resultantes de la infracción). Esas determinaciones son vinculantes para los departamentos u organismos pertinentes de la administración federal. No lo son, en cambio, para los receptores de números de identificación fiscal o las instituciones de crédito que no sean organismos de la administración federal. En tales casos, el Comisionado o el reclamante pueden incoar procedimientos ante el Tribunal Federal, que las examina de novo.

878. La Ley de 1988 deja abierta la posibilidad de recurrir a otros procedimientos civiles, por ejemplo requerimientos judiciales, contra injerencias en la vida privada. En el caso de denegación de acceso a documentos que contienen información personal o de negativa a corregirlos, se dispone de recursos en virtud de la Ley de 1982 sobre Libertad de Información, incluido el recurso al Tribunal Administrativo de Apelación.

879. Después de que la divulgación del informe de la Comisión Independiente contra la Corrupción de Nueva Gales del Sur revelara la existencia de un comercio de información confidencial, la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Cámara Federal de Representantes llevó a cabo una investigación sobre la medida en que se protegían la información confidencial y la información comercial en poder de la administración federal. En su informe de junio de 1995, la Comisión Permanente formuló un total de 39 recomendaciones sobre diversas cuestiones, como la responsabilidad del personal directivo en los asuntos relacionados con la confidencialidad y la seguridad de la información, la adecuación de las salvaguardias jurídicas y administrativas contra la utilización indebida de la información sobre terceras partes, la adecuación de las penas y sanciones aplicables a los funcionarios que divulguen indebidamente información, la aplicación y racionalización de la legislación penal para proteger la información confidencial sobre terceras partes, y las medidas correctivas e indemnizaciones en casos de divulgación indebida de información.

Abuso de confianza

880. Además de la Ley de 1988, el derecho de equidad reconoce en Australia una obligación general de confidencialidad resultante de la relación especial entre quien facilita la información confidencial y quien la divulga. Cuando una persona recibe información que no es de propiedad ni conocimiento públicos, la ley le prohíbe utilizarla en forma no autorizada y la obliga a rendir cuentas de cualesquiera beneficios obtenidos de esa utilización. Una consideración importante es la de si el receptor de la información sabía o debía saber que la información se facilitaba con un fin limitado y no podía utilizarse con ningún otro fin. Puede argumentarse que la divulgación obedece al interés general, pero esa consideración se ha interpretado en Australia en sentido restringido,

por lo que sólo se aplica a casos en los que la información divulgada se refiere a delitos o faltas graves o riesgos para la salud pública. Sin embargo, la confidencialidad no está protegida cuando la invoca el Gobierno, a menos que al divulgar la información de que se trate pueda perjudicarse al interés público (interpretado en este caso en sentido amplio).

881. Existen varios recursos en caso de violación de la confidencialidad. Entre las medidas adoptadas por los tribunales en el pasado se cuentan el interdicto de divulgación, la liquidación de beneficios y la indemnización por daños y perjuicios.

Freedom of Information Act 1982

882. La protección de la vida privada de adultos y menores se garantiza también en Australia a nivel federal por el derecho, contemplado en la Freedom of Information Act 1982 (Ley de 1982 sobre Libertad de Información) de acceder a la información que sobre cada persona posean los departamentos y organismos de la administración federal y solicitar su corrección.

883. Esta Ley complementa la Ley de 1988 sobre Protección de la Intimidad al eximir de la obligación de atender a las solicitudes de acceso en el caso de documentos el acceso a los cuales entrañe la divulgación no justificada de información sobre otras personas.

884. La Ley de 1982 establece también un mecanismo de consulta previa a la divulgación de los documentos que contengan información sobre personas. Ese mecanismo se aplica cuando se recibe una solicitud de acceso a un documento y el funcionario encargado de tramitarla estima que la persona interesada podría reclamar fundamentadamente la aplicación al documento de la excepción mencionada. En tal caso, el funcionario no debe permitir el acceso al documento hasta que, en la medida en que sea viable, se haya brindado a la persona interesada oportunidad razonable de presentar alegaciones, y se hayan examinado éstas. También se contempla la posibilidad de recurrir contra la decisión de no aplicar al documento la excepción prevista en la ley.

885. El Ministro de Justicia inició un examen de la Ley, que se realizó conjuntamente por la Comisión de Reforma Legislativa de Australia y el Consejo de Revisión Administrativa. El informe final se publicó el 31 de diciembre de 1995.

Acceso a los historiales médicos

886. No existe en Australia un derecho automático de acceso a los historiales médicos en poder de instituciones de atención de salud del sector privado. En diciembre de 1995 el Tribunal Superior de Australia examinó un recurso contra una decisión del Tribunal de Apelación de Nueva Gales del Sur de denegar a la solicitante el acceso a su historial médico en una consulta privada (Breen v. Williams). Al término del período que abarca el presente informe todavía no se había emitido un fallo.

Bases de datos de la administración federal

Bases de datos de departamentos

887. Como se ha señalado, la reunión, el almacenamiento, la utilización y la divulgación de todos los datos personales en poder de departamentos de la administración federal se rigen por las disposiciones de la Ley de 1988 de Protección de la Intimidad. La Ley Penal de 1914 y los reglamentos de la Public Service Act 1922 (Ley de la Función Pública de 1922) contienen disposiciones que restringen la difusión de información. Algunos departamentos, sin embargo, cuentan con mecanismos adicionales de protección de la vida privada de las personas. A continuación se exponen los ejemplos del Departamento de Seguridad Social y la Oficina Tributaria de Australia.

888. Dentro del Departamento de la Seguridad Social, la Dependencia de Supervisión de la Confidencialidad, dependiente de la División de Servicios Jurídicos, funciona como órgano consultivo en cuestiones relacionadas con la defensa de la vida privada. También publica regularmente instrucciones y manuales nacionales de políticas, prácticas y procedimientos para promover entre todo el personal pertinente el correcto manejo de la información de conformidad con la legislación sobre confidencialidad.

889. Además, las disposiciones sobre confidencialidad contenidas en la Social Security Act 1991 (Ley de Seguridad Social de 1991) protegen la información personal sobre los usuarios de que dispone el Departamento de la Seguridad Social frente al acceso (incluido el acceso informático), la utilización, la demanda o la divulgación no autorizados. Esas disposiciones prohíben expresamente y sancionan con severidad el acceso no autorizado a información de los beneficiarios de la seguridad social o su divulgación no autorizada.

890. Se permite la divulgación de información personal sobre los usuarios en circunstancias determinadas, como cuando la persona afectada otorga su consentimiento o cuando el Secretario del Departamento de la Seguridad Social certifica que la divulgación se justifica por algún fin de interés público, por ejemplo el de investigar algún delito grave o hacer frente a una situación en que está en peligro la vida de personas.

891. La Oficina Tributaria de Australia está encargada de la recaudación de los impuestos federales, por lo que también reúne y almacena información sobre la situación financiera de personas y empresas.

892. La Oficina considera muy grave el acceso no autorizado a los datos de los contribuyentes, y sus funcionarios pueden ser objeto de procedimientos penales o disciplinarios por infracciones de la confidencialidad de la información. Antes de empezar a trabajar para la Oficina, todos sus funcionarios tienen que firmar un compromiso de confidencialidad, que comprende un documento sobre seguridad de la información por el que se les prohíbe acceder a información confidencial que no guarde relación directa con su trabajo. Para recordar al personal sus obligaciones, la Oficina cuenta con una amplia campaña interna sobre cuestiones de confidencialidad y seguridad.

893. Entre los mecanismos de seguridad vinculados a la reunión y elaboración de los datos sobre los contribuyentes se cuentan controles de seguridad, algunos de los cuales se basan en contraseñas para el acceso informático y tienen por

objeto impedir el acceso a los datos de personal no autorizado. Los funcionarios han de obtener la aprobación de un superior para acceder a un determinado sistema informático. Existen asimismo pistas de auditoría que permiten detectar los intentos de acceso no autorizado a sistemas y datos. Cuando personal autorizado realiza consultas no autorizadas de información sobre los contribuyentes, esas pistas de auditoría facilitan la labor de detección e investigación.

894. La Oficina aplica la política de procesamiento de la administración federal, formulada por el Director General de Acusaciones Públicas. Los casos pueden someterse a la jurisdicción de los tribunales penales o a los procedimientos de disciplina interna de la Oficina, con arreglo a las disposiciones de la Ley de la Función Pública.

895. En los casos de consulta o divulgación no autorizadas de información sobre los contribuyentes, pueden aplicarse a los funcionarios reos de delitos penas máximas de dos años de cárcel, una multa de 10.000 dólares, o ambas sanciones. Si el caso se somete al proceso disciplinario interno, los culpables pueden ser amonestados, multados, destituidos o despedidos, según la gravedad de la infracción. Durante el período comprendido entre el 1º de julio de 1990 y el 19 de diciembre de 1995 se incoaron 21 procedimientos penales y 48 procedimientos disciplinarios.

Sistema de información sobre nombramientos

896. Con el fin de obtener datos para informar al Gobierno sobre los progresos realizados hacia el objetivo anunciado de lograr la igualdad entre mujeres y hombres en los nombramientos de la administración federal, la Comisión de la Función Pública utiliza el sistema informático Appoint. Los ministerios utilizan el sistema para informar cada seis meses a la Comisión sobre los nombramientos a los órganos que dependen de ellos.

897. Los ministerios pueden introducir, extraer y coordinar información sobre los nombramientos. Sin embargo, la información comunicada a la Comisión de la Función Pública es de carácter global y no comprende datos sobre nombramientos concretos.

898. Appoint se diseñó para computadoras personales no conectadas a una red que utilizaran el sistema operativo Microsoft Disk. Con el fin de proteger el carácter confidencial de la información almacenada, los datos no se introducen en ninguna red, fuera de los mecanismos arbitrados en cada ministerio para su transmisión. La Comisión de la Función Pública sólo recibe información agregada en disco de computadora, y no a través de una red. Incumbe a los usuarios de los ministerios la responsabilidad de establecer mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger los datos personales.

Censos

899. La Census and Statistics Act 1905 (Ley de 1905 sobre el Censo y las Estadísticas) garantiza el carácter confidencial de la información reunida regularmente en los censos de ámbito nacional que podría vincularse a personas concretas.

900. La Ley de 1905 obliga a todo el personal de la Oficina Australiana de Estadística (incluido el personal supernumerario) a no comunicar jamás datos personales a ninguna persona ni organización ajena a la Oficina. Quienquiera que infrinja esa norma puede ser sancionado con una multa de hasta 5.000 dólares y/o una pena de hasta dos años de cárcel, aunque ya no trabaje en la Oficina.

901. Se aplican estrictas medidas de seguridad para el traslado de los formularios censales cumplimentados desde los puntos de reunión hasta el centro de elaboración, y se emplea personal de seguridad para impedir todo acceso no autorizado al centro de elaboración. Los nombres y las direcciones de personas y unidades familiares reunidos en el censo se almacenan en archivos informáticos. Los resultados del censo se divulgan de manera que no permitan la identificación de personas o unidades familiares. Con ese fin, los cuadros estadísticos publicados sólo contienen clasificaciones generales y se someten a ligeros ajustes aleatorios.

902. Con el fin de garantizar la confidencialidad de la información sobre las personas, los formularios del censo se destruyen una vez extraídos los datos estadísticos pertinentes, y los nombres y direcciones de personas y unidades familiares no se almacena en archivos informáticos.

903. En la Isla de Norfolk la confidencialidad del censo está garantizada por una disposición de la Ordenanza de 1961 sobre el Censo y las Estadísticas en virtud de la cual el Jefe de Estadística y todo el personal que interviene en la elaboración de los resultados del censo han de suscribir una declaración de fidelidad y secreto. En virtud de una orden permanente del Jefe de Estadística, todos los formularios censales y el material conexo se destruyen una vez tabuladas las cifras definitivas.

904. La decisión de no guardar la información sobre las personas y las unidades familiares fue adoptada por el Gobierno de la Isla de Norfolk tras ponderar cuidadosamente los argumentos en pro y en contra de la medida. Un factor importante fue el fundado temor a la erosión de la confianza pública en el censo, que haría que las personas se mostraran más reacias a facilitar información completa y exacta sobre sí mismas. Otra consideración fue la del costo sustancial que entrañarían el almacenamiento de los datos y el acceso a ellos.

Legislación estatal

905. La Ley de 1988 de Protección de la Intimidad, de ámbito federal, se aplica también, con limitadas excepciones, a todos los organismos del Territorio de la Capital de Australia, donde la Ombudsman Act 1989 (Ley de 1989 sobre el Defensor del Pueblo) permite asimismo la investigación exhaustiva de las reclamaciones contra actuaciones de funcionarios.

906. En Nueva Gales del Sur, un Comité de Protección de la Intimidad establecido en 1975 realiza estudios sobre cuestiones relacionadas con la defensa de la vida privada, presenta informes y recomendaciones a organismos públicos y no gubernamentales, e investiga reclamaciones de particulares o de sus representantes. Aunque el Comité está facultado en cierta medida para solicitar información de las personas, procura resolver todas las reclamaciones por negociación y conciliación. No tiene autoridad para imponer la aplicación de sus recomendaciones. El Comité ha publicado numerosos informes y directrices

para promover la toma de conciencia sobre las cuestiones relativas a la defensa de la vida privada.

907. En abril de 1994 se presentó al Parlamento de Nueva Gales del Sur un proyecto de ley sobre defensa de la vida privada y protección de datos, pero expiraron los plazos de su trámite parlamentario al cambiar el Gobierno de Nueva Gales del Sur a principios de 1995. Se volvió a presentar posteriormente como proyecto de ley no gubernamental. El Gobierno de Nueva Gales del Sur también está considerando la posibilidad de introducir legislación sobre ese asunto.

908. En Queensland, la Privacy Committee Act 1984 (Ley de 1984 sobre el Comité de Protección de la Intimidad) estableció un comité encargado de investigar las cuestiones relativas a la protección de la vida privada y asesorar al respecto al Fiscal General. La Ley de 1984 expiró el 14 de junio de 1991. Queensland está estudiando actualmente la posibilidad de aplicar a los organismos del sector público los principios sobre la confidencialidad de la información.

909. En Australia meridional se estableció en 1989 un Comité de Protección de la Intimidad, entre cuyas funciones se cuenta la de velar por el cumplimiento de principios sobre confidencialidad de la información basados en los contenidos en la Ley Federal de 1988 de Protección de la Intimidad. La Adoption Act 1988 (Ley de 1988 sobre Adopciones) de Australia Meridional cuenta asimismo con diversas disposiciones de protección de la vida privada de los niños. Además, la Freedom of Information Act 1991 de Australia Meridional contiene las mismas disposiciones de protección de la vida privada que la Ley homónima de 1982 del Commonwealth.

910. El Departamento de Servicios de Salud y Servicios a la Comunidad de Tasmania aplica una estricta política de protección de la vida privada. La Adoption of Children Act 1988 (Ley de 1988 sobre la Adopción de Niños) y la Child Protection Act 1974 (Ley de 1974 de Protección de la Infancia) contienen disposiciones estrictas sobre confidencialidad de la información. En las esferas de la salud y la educación se otorga gran importancia al derecho de los niños a la intimidad.

911. En Victoria, en virtud de la Children and Young Persons Act 1989 (Ley de 1989 de Protección de la Infancia y la Juventud), constituye un delito revelar información confidencial sobre una persona sin el consentimiento de ésta.

912. En el informe N° 1 de la Comisión sobre la Administración Pública de Australia Occidental se indicaron más de 100 leyes y reglamentos que restringen la utilización por departamentos de la administración y otros organismos públicos de información obtenida en el desempeño de sus funciones. La Comisión ha formulado diversas recomendaciones en materia de confidencialidad. El Gobierno de Australia Occidental está preparando una respuesta a las recomendaciones de la Comisión.

913. La Children's Court of Western Australia Act 1988 (Ley de 1988 sobre el Tribunal de Menores de Australia Occidental) prohíbe la difusión pública de cualquier información sobre actuaciones judiciales que permita la identificación de un menor. Los tribunales de adultos pueden prohibir la publicación de material identificador cuando comparecen ante ellos menores o cuando la identificación de adultos pueda afectar negativamente a menores.

Difamación

914. El honor y la reputación de una persona están sustancialmente protegidos por las acciones civiles y penales que pueden incoarse por difamación. La protección que brindan las leyes sobre difamación está sujeta a algunas excepciones, como las aplicables a las observaciones formuladas durante actuaciones parlamentarias o judiciales (véase una explicación más detallada sobre los privilegios parlamentarios en relación con el artículo 19, infra). Las leyes contra la difamación no reconocen el derecho de acción colectiva.

915. Las leyes contra la difamación son complejas y su grado de detalle varía de una jurisdicción a otra, y hasta el momento no han tenido éxito los intentos de armonizarlas a nivel nacional; sin embargo, en una reunión del Comité Permanente de Fiscales Generales celebrada el 3 de noviembre de 1994 se acordó constituir un grupo de trabajo de ámbito nacional para examinar un proyecto de ley sobre difamación que había de preparar la Comisión de Reforma Legislativa de Nueva Gales del Sur en 1995, y formular observaciones al respecto. El grupo de trabajo examinará diversas cuestiones que dificultan actualmente la armonización de la legislación nacional sobre la materia.

916. El renovado impulso de armonización legislativa es resultado de las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Australia en Theophanous v. The Herald and Weekly Times Limited (1994) 124 ALR 1 y Stephens v. West Australian Newspapers Limited (1994) 124 ALR 80, que modificaron la aplicación de las leyes contra la difamación en lo que se refiere a las afirmaciones formuladas durante debates sobre cuestiones políticas. El Tribunal Supremo decidió por mayoría que la legislación actual infringía la libertad de expresión sobre cuestiones políticas que garantizaba implícitamente la Constitución. En opinión de la mayoría del Tribunal, el ordenamiento existente, ya se basara en las leyes o en la jurisprudencia, no tenía suficientemente en cuenta el derecho a la libertad de expresión para buscar un equilibrio entre éste y la protección de la reputación de las personas.

Prensa

917. La vida privada está también protegida en cierta medida en Australia por determinadas restricciones que aplican voluntariamente los medios de comunicación. Por ejemplo, en la declaración de principios del Consejo de Prensa de Australia se subrayan, entre otras cosas, el respeto debido a los derechos y sensibilidades privados y la obligación de cerciorarse de la veracidad y exactitud de las declaraciones, y se requiere que no se publiquen las noticias obtenidas por medios deshonestos o injustos o cuya publicación entrañe un abuso de confianza.

918. Análogamente, cada miembro de la Asociación de Periodistas Australianos suscribe un código de ética que le obliga a "respetar todas las confidencias recibidas en el ejercicio de su profesión" y a "utilizar tan sólo métodos leales y honestos para obtener noticias, fotografías y documentos". El Consejo de Prensa de Australia ha establecido un procedimiento por el que las personas pueden presentar reclamaciones a periódicos y revistas y solicitar reparación por las publicaciones que les afecten.

919. En la actualidad, están tratando de conseguir el derecho absoluto o condicional de proteger sus fuentes negándose a contestar a preguntas legítimas

de los tribunales u otros órganos facultados para solicitar información. En ese contexto, la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y Constitucionales del Senado está examinando los derechos y obligaciones de los medios de comunicación.

Medios de comunicación electrónicos

920. La Broadcasting Services Act 1992 (Ley de 1992 sobre Servicios de Radiodifusión) contempla la aplicación a los programas de códigos deontológicos y el establecimiento de procedimientos de reclamación respecto de los medios de comunicación electrónicos. En virtud de la Ley, los grupos industriales que representan a los titulares de licencias de radio y televisión comerciales y de interés comunitario tienen la obligación de elaborar códigos deontológicos aplicables a la programación y establecer procedimientos de reclamación. Los códigos pueden abordar, entre otras cuestiones, la necesidad de garantizar la objetividad y exactitud de los programas de noticias y de actualidad y de evitar la representación peyorativa de las minorías.

921. Cada código deontológico debe registrarse ante la Autoridad de Radiodifusión de Australia, que antes de aceptarlo debe cerciorarse de que ofrece salvaguardias apropiadas para la comunidad en relación con las cuestiones que abarca, ha recibido el apoyo de la mayoría de los proveedores de servicios de radiodifusión en la rama de actividad de que se trate, y se han brindado al público oportunidades razonables de formular observaciones sobre el código. Al elaborar los códigos, las empresas de radiodifusión deben tener en cuenta las investigaciones pertinentes llevadas a cabo por la Autoridad. Ésta está facultada para imponer normas obligatorias si estima que los códigos deontológicos no se han elaborado adecuadamente o no han dado los resultados deseables.

922. Las quejas en relación con el contenido de los programas o los anuncios o el incumplimiento de un código deontológico pueden dirigirse ante todo al proveedor del servicio. Si el reclamante considera insatisfactoria la respuesta de éste o no ha recibido respuesta en un plazo de 60 días, puede presentar su queja a la Autoridad, que tiene la obligación de investigar todas las reclamaciones que se le remitan en debida forma.

923. En las investigaciones, la Autoridad tiene amplias facultades discrecionales para reunir información, y puede comunicar posibles indicios de delito al Director de Acusación Pública. En el caso de que sus conclusiones sean desfavorables para las empresas nacionales de radiodifusión (Australian Broadcasting Corporation y Special Broadcasting Service), la Autoridad puede presentar un informe por escrito sobre la cuestión al Ministro de Comunicaciones y Actividades Artísticas, que está obligado a remitirlo a su vez al Parlamento.

Otras disposiciones de protección de la vida privada

Familia y hogar

924. Como se menciona más adelante en relación con el artículo 23, en Australia ni los tribunales ni el poder legislativo han definido el concepto de "familia", por lo que no existe ninguna norma jurídica concreta que proteja a la familia, como entidad diferenciada, de actuaciones arbitrarias o ilícitas, sino que esa protección deriva de diversas leyes y de la jurisprudencia. Se mencionan a

continuación algunas disposiciones concretas. Es ilegal separar a un menor de la custodia de su padre o de su madre, excepto en ejecución de una orden de un tribunal o de alguna otra autoridad legítima (por ejemplo, en cumplimiento de la legislación sobre el bienestar de la infancia mencionada en relación con los artículos 9 y 24). Al hacerlo se incurriría en diversos delitos, y el padre o la madre del menor podría acudir a un tribunal para recuperar la custodia de su hijo. Las agresiones físicas contra familiares constituyen un delito que justifica la adopción de medidas legales para proteger a los miembros de la familia amenazados de ulterior violencia. Esa cuestión se trata más detalladamente en la sección dedicada a la violencia doméstica, en relación con el artículo 3.

Conducta sexual

925. En relación con la actividad sexual voluntaria entre adultos, el Parlamento Federal aprobó el 9 de diciembre de 1994 la Human Rights (Sexual Conduct) Act 1994 (Ley de 1994 de Derechos Humanos (Comportamiento Sexual)), que entró en vigor el 19 de diciembre de 1994 y en virtud de la cual los actos sexuales voluntarios realizados en privado entre adultos no pueden ser objeto de ninguna injerencia arbitraria basada en leyes federales o estatales.

926. El origen de la Ley fue una comunicación al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En diciembre de 1991, un ciudadano tasmano, el Sr. Nick Toonen, se dirigió al Comité para pedirle que examinara los incisos a) y c) del artículo 122 y el artículo 123 del Código Penal de Tasmania y determinara si eran compatibles con el párrafo 1 del artículo 2 y los artículos 17 y 26 del Pacto. En virtud de las disposiciones en cuestión, que se aplicaban tanto a los actos privados como a los públicos, la penetración anal, ya fuera heterosexual u homosexual, y otras "prácticas indecentes" entre hombres constituían un delito. El Comité emitió la opinión de que los incisos a), c) del párrafo 122 y el párrafo 123 del Código Penal de Tasmania constituían una injerencia arbitraria en la vida privada de las personas, y determinó que Australia infringía el artículo 17 del Pacto. Por su parte, el Comisionado de Derechos Humanos decidió llevar a cabo un examen independiente de los artículos pertinentes del Código Penal de Tasmania y presentar un informe oficial al respecto al Fiscal General en virtud de los poderes que le otorgaba la Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986 (Ley de 1986 sobre la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades). El informe fue presentado posteriormente al Parlamento el 23 de agosto de 1994. Tras examinar las disposiciones del Código Penal de Tasmania, el Comisionado de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que eran incompatibles con el artículo 17, el párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 26. En respuesta a las opiniones del Comité y del Comisionado, y ante la renuencia del Gobierno de Tasmania a modificar las disposiciones en cuestión, el Gobierno Federal promulgó la Ley de 1994 sobre Derechos Humanos (Comportamiento Sexual). Ésta trata sólo de las relaciones sexuales privadas y voluntarias entre adultos, por lo que no afecta a otras leyes que regulan la conducta sexual en público, las relaciones sexuales con menores y los actos sexuales no voluntarios.

Intervención indebida de la policía

927. En lo que se refiere a la entrada de agentes de policía en domicilios particulares, en todas las jurisdicciones australianas se contempla la posibilidad de registros sin mandamiento judicial en tres casos: por

consentimiento; con arreglo al common law, como condición necesaria para efectuar un arresto válido; o en virtud de poderes específicos otorgados por la ley.

928. A nivel federal, la principal base legal aplicable a los registros con o sin mandamiento deriva de la Ley Penal de 1914, modificada por la Crimes (Search Warrants and Powers of Arrest) Act 1994 (Ley Penal de 1994 (Mandatos de Registro y Facultad de Detener)). Con la Ley Penal de 1914 y sus modificaciones se codificaron las disposiciones federales respecto de los mandamientos de registro, aunque también se derivan diversos poderes de registro de otras leyes, como la Proceeds of Crime Act 1987 (Ley de 1987 sobre el Producto de los Delitos) y la Financial Transaction Reports Act 1988 (Ley de 1988 sobre la Constancia de las Transacciones Financieras).

929. En relación con los registros sin mandamiento, la ley exige en general que exista por lo menos una sospecha razonable de que se encontrarán sobre la persona registrada o en la propiedad registrada objetos ilegalmente obtenidos o armas. Los parlamentos han tendido en medida creciente a limitar el poder estatutario de efectuar registros sin mandamiento a situaciones en que se obtiene el consentimiento de los interesados o en que concurren circunstancias de especial urgencia.

930. En relación con los registros con mandamiento, la Ley Penal de 1914 estipula que puede emitirse un mandamiento si el magistrado o funcionario encargado de hacerlo considera que hay motivos fundados para sospechar que pueda encontrarse material probatorio en el lugar del registro dentro de las 72 horas siguientes. Ese límite de 72 horas permite obtener un mandamiento con antelación cuando se prevé el inminente traslado de material probatorio al lugar del registro. La Ley estipula asimismo que los magistrados legos no podrán emitir mandamientos de registro ni de detención en relación con delitos federales. Sólo podrán hacerlo los jueces de paz u otras personas empleadas por un tribunal y debidamente autorizadas para ello.

931. Con arreglo a la Ley Penal de 1914, el mandamiento debe ejecutarse en un plazo de siete días, y debe estipularse claramente su finalidad. En el mandamiento deben indicarse el delito en relación con el cual se emite, una descripción del lugar del registro, el tipo de material probatorio que debe buscarse, el nombre del funcionario responsable, el período de validez y las condiciones de ejecución.

932. La ejecución de un mandamiento de registro no autoriza por sí sola a registrar o detener a personas que se encuentren en el lugar del registro, a menos que en el propio mandamiento se autorice explícitamente el cacheo de personas. Sin embargo, si una persona obstaculiza los movimientos de un agente de policía durante la ejecución de un mandamiento de registro, comete un delito y puede ser detenida sin mandamiento para impedir que persista en su actitud de obstrucción.

933. En Coco v. The Queen (1994) 68 ALJR 401, el Tribunal Superior impuso límites a la entrada de la policía en locales de propiedad privada con el fin de instalar dispositivos de escucha. En el apartado referente a la vigilancia de las comunicaciones se describen las operaciones de vigilancia realizadas al amparo de la Telecommunications (Interception) Act 1979 (Ley de 1979 sobre la Interceptación de Telecomunicaciones).

934. Existen diversos recursos penales y civiles para proteger la vida privada. En derecho civil, la figura de intromisión ilegítima sirve para impedir la entrada de una persona en la propiedad de otra sin justificación legal, y la de actividades molestas protege ulteriormente el goce de la propiedad de la tierra restringiendo la emisión de ruidos, humo y otros elementos molestos desde propiedades adyacentes. También pueden aplicarse figuras penales tales como las de comportamiento ofensivo, alteración del orden público o infracciones de la legislación sobre medio ambiente. En todos los Estados está prohibido asimismo exigir el pago de bienes y servicios no solicitados.

Correspondencia

935. Rara vez se producen injerencias en el correo, pues en la Ley Penal de 1914 se introdujeron figuras delictivas tales como la intromisión en el correo, el robo de correo y su retención ilegal. Además, en virtud de la Australian Postal Corporation Act 1989 (Ley de 1989 de la Administración Postal de Australia), la Administración Postal (Australia Post) debe desempeñar sus funciones en forma compatible con las obligaciones de Australia dimanantes de todos los convenios suscritos.

936. La Ley de 1989 estipula las circunstancias en las que los empleados de Australia Post pueden revelar información postal, por razones policiales o de seguridad nacional.

937. La Ley prohíbe el acceso al contenido del correo, salvo cuando sea necesario para que Australia Post pueda cumplir su obligación de entrega o en ejecución de mandamientos federales o estatales. Se considera justificada la apertura de correo con los siguientes fines:

- Reparar el envío postal;
- Obtener la información necesaria para la entrega del envío; o
- Destruir artículos peligrosos para la seguridad pública.

938. Cuando se ha abierto o examinado un envío postal, éste debe entregarse acompañado de una nota que así lo indique, especificando las disposiciones invocadas. La Australian Security Intelligence Organization Act 1979 (Ley de 1979 de la Organización de Seguridad e Información de Australia) prohíbe a los empleados de Australia Post revelar información sobre el envoltorio o el contenido de un envío postal, excepto en ejecución de un mandamiento emitido por razones de seguridad nacional.

939. Además, puede procederse a la apertura de correo a solicitud de funcionarios de aduanas si existen sospechas razonables de que un envío contiene algún artículo sujeto a derechos de aduanas o cuya importación o exportación está prohibida por la legislación federal.

940. La correspondencia de los presos puede ser objeto de inspección en interés de la seguridad carcelaria. También puede inspeccionarse la correspondencia de las personas internadas en instituciones psiquiátricas, de conformidad con las disposiciones de la legislación pertinente y, en algunas jurisdicciones, con las normas internas de la institución de que se trate.

Vigilancia de las comunicaciones

941. La interceptación de telecomunicaciones está prohibida por la Ley de 1979 sobre la Interceptación de Telecomunicaciones, de ámbito federal, a menos que lo autorice un mandamiento emitido por una autoridad competente en interés de la seguridad nacional o para investigar determinados delitos graves, que pueden ser, además del secuestro y el asesinato, los delitos punibles con no menos de siete años de prisión y que ocasionen la muerte o lesiones graves a una persona, estén relacionados con el tráfico de estupefacientes o entrañen fraude grave o importante pérdida de ingresos para la administración federal o alguna administración estatal.

942. Los organismos a los que se otorgan mandamientos deben informar al ministro competente de la asistencia obtenida en relación con cada mandamiento. Además, se presenta anualmente al Parlamento Federal un informe sobre el alcance y la eficacia de las interceptaciones con mandamiento que se han llevado a cabo con fines policiales. La Ley de 1979 sobre la Interceptación de Telecomunicaciones también prevé la inspección de los documentos pertinentes por el Defensor del Pueblo en casos de interceptaciones efectuadas por la Policía Federal Australiana y la Autoridad Penal Nacional, por el Inspector General de Información y Seguridad en casos en que intervenga la Organización de Seguridad e Información de Australia, así como por los defensores del pueblo estatales.

943. La mayoría de las jurisdicciones cuentan también con legislación que regula la utilización de dispositivos de escucha. En general, la legislación prohíbe la escucha de conversaciones privadas por ese medio a menos que la persona que utilice el dispositivo sea parte en la conversación o haya sido facultada por una autoridad competente para utilizarlo en relación con la investigación de delitos graves.

944. El Gobierno Federal está examinando la necesidad de ampliar la protección del carácter privado de las telecomunicaciones. En diciembre de 1992 la autoridad nacional de regulación del sector de las telecomunicaciones, AUSTEL, publicó un informe titulado "La privacidad de las telecomunicaciones". Como parte de la respuesta a ese informe, AUSTEL, a petición del Ministro de Comunicaciones y Actividades Artísticas, estableció un Comité Asesor de Protección de la Vida Privada, que está actualmente examinando diversas cuestiones, como la comercialización por medio de las telecomunicaciones y la tecnología que permite mostrar el número de teléfono desde el que se llama.

Artículo 18

945. En Australia, la libertad de pensamiento, conciencia y religión y sus manifestaciones se consideran en gran medida cuestiones de ámbito personal. Son muy pocas las disposiciones legislativas que imponen restricciones al ejercicio de esas libertades, y no se ejerce coerción alguna para inducir a nadie a modificar sus opiniones o convicciones o renunciar a ellas. Las leyes existentes en relación con las cuestiones abordadas en ese artículo se refieren principalmente a la religión, según se esboza a continuación.

946. El censo de 1991 registró la presencia en el país de más de 70 religiones. Están representadas todas las principales religiones del mundo, así como otras menos extendidas, como la Sociedad de los Amigos, el baha'ismo y el caodaísmo.

Alrededor del 77 por ciento de los australianos censados se identificaba con alguna fe religiosa. Más de la mitad se declararon anglicanos o católicos.

Libertad de religión

Legislación federal

Garantía constitucional

947. La Constitución de Australia no reconoce poderes legislativos concretos que permitan al Gobierno Federal legislar directamente en cuestiones de religión o convicciones. De hecho, el artículo 116 de la Constitución dispone lo siguiente:

"En el Commonwealth no se dictará ninguna ley para oficializar una religión, para imponer la observancia de una religión, ni para fomentar la libre práctica de una religión, y no se exigirán pruebas de religión para el desempeño de funciones o cargos públicos en el Commonwealth".

948. El artículo 116 sólo obliga al Gobierno Federal, y no restringe la facultad de legislar en cuestiones de religión o de convicciones a nivel estatal. En la siguiente sección se esboza la legislación estatal en materia de libertad religiosa.

949. El alcance de la libertad religiosa garantizada por la Constitución se ha examinado en dos importantes decisiones del Tribunal Supremo de Australia que se reseñan a continuación.

950. En el caso Attorney-General for Victoria; ex rel. Black v. Commonwealth (1981) 55 ALJR 155, el Fiscal General de Victoria sostuvo que algunas disposiciones de la legislación federal, al otorgar ventajas a las escuelas administradas por órganos religiosos o en su nombre, infringían la "cláusula de no oficialidad" del artículo 116 de la Constitución. El Tribunal Superior rechazó este argumento e interpretó que el artículo 116 prohibía al Gobierno Federal promulgar legislación "para otorgar a una determinada religión u órgano religioso la condición de religión o iglesia estatal (o nacional)". Las leyes impugnadas estaban encaminadas a fomentar la educación y no tenían el propósito ni el efecto de atribuir a ninguna religión u órgano religioso la condición de religión o iglesia oficial. Uno de los efectos de este caso fue el reconocimiento de que el Estado puede colaborar con las autoridades religiosas, por lo menos para conseguir un "fin seglar".

951. En 1983 el Tribunal Superior examinó el concepto de "religión" en el caso Church of the New Faith v. The Commissioner for Payroll Tax (1982-1983) 154 CLR 120, que se planteó cuando la Iglesia de la Nueva Fe sostuvo que era una religión y que, en cuanto tal, reunía las condiciones para acogerse a determinadas exenciones fiscales con arreglo al ordenamiento jurídico del Estado de Victoria. Se pidió autorización especial para apelar ante el Tribunal Supremo con el fin de dilucidar si la cientología era una religión. El Tribunal dictaminó que lo era.

952. El Tribunal Superior decidió que el concepto de religión no debía limitarse a las religiones teístas. En tres fallos separados, los miembros del Tribunal fijaron las características o criterios por los que podía identificarse

una "religión". En un fallo conjunto, el juez Mason, Presidente en funciones, y el juez Brennan declararon:

"La libertad de religión, paradigma de la libertad de conciencia, constituye la esencia de una sociedad libre. La función principal de la ley al definir la religión consiste en delimitar una esfera dentro de la cual la persona sometida a la ley es libre de creer y de actuar de conformidad con sus convicciones sin restricciones jurídicas... La falta de una definición universalmente satisfactoria indica una dificultad fundamental para adoptar una definición con fines jurídicos. No puede adoptarse una definición por el simple hecho de que satisfaga a la mayoría de la comunidad o porque corresponda a un concepto admitido por esa mayoría en el momento de que se trate. El desarrollo del derecho hacia la completa libertad de religión e igualdad religiosa quedaría subvertido y las garantías contenidas en el artículo 116 de la Constitución perderían su carácter de bastión de la libertad si se definiera la religión de manera que quedaran excluidas de su ámbito aquellas religiones que no pertenecieran a las principales corrientes de pensamiento religioso. Aunque la libertad religiosa y la igualdad religiosa benefician a todas las religiones genuinas, las religiones minoritarias -que no están bien establecidas y aceptadas- necesitan especial protección... Es más exacto afirmar que quienes necesitan protección no son las propias religiones, sino sus fieles... Sería contradictorio que la ley protegiera al mismo tiempo los credos de diferentes religiones que son incompatibles... Se concede protección para mantener la dignidad y libertad de cada persona a fin de que pueda adherirse a la religión que elija o no adherirse a ninguna. Al concederse a todos por igual la libertad de religión, no se restringe la diversidad de convicciones religiosas que gozan de inmunidad legal... No puede haber una discriminación aceptable entre las instituciones que derivan su carácter de religiones a las que la mayoría de la comunidad reconoce como tales y aquellas otras que lo derivan de religiones que carecen de reconocimiento general" (págs. 130 a 132).

953. La Ley de la Función Pública de 1922 trata de la discriminación por motivos de religión en el empleo de la administración federal. Esa Ley fue modificada por la Ley de 1984 de Reforma de la Función Pública, con el fin, entre otros, de garantizar que en los nombramientos, traslados y ascensos dentro de la administración pública se aplicaran procedimientos que impidieran la discriminación por motivos de religión y otros motivos.

Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades

954. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades fue creada por la Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986 (Ley de 1986 sobre la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades), con funciones de conciliación en casos de discriminación laboral u ocupacional por motivos de religión, incluidas posibles infracciones por la administración federal del derecho a la libertad de religión proclamado en el párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 18 del Pacto.

955. La Ley de 1986 fue ampliada en febrero de 1993 con el fin de facultar a la Comisión para investigar actos o prácticas de la administración federal que fueran incompatibles con los derechos proclamados en la Declaración sobre la

eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones (declaración de las Naciones Unidas).

956. La Comisión puede examinar asimismo la legislación de ámbito federal para determinar si está en conformidad con el Pacto o con la Declaración de las Naciones Unidas e informar al Fiscal General sobre las medidas que podría adoptar la administración federal en cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Además, la Comisión puede llevar a cabo investigaciones, impartir programas educativos y realizar otras actividades tendentes a promover la comprensión y aceptación de esos derechos.

Legislación estatal

957. La Discrimination Act 1991 (Ley de 1991 sobre Discriminación) del Territorio de la Capital de Australia proclama ilegal la discriminación por convicciones religiosas. Estipula que un empleador no puede denegar a sus empleados permiso para celebrar una determinada práctica religiosa durante la jornada laboral, a condición de que se trate de una práctica que las personas de esa convicción religiosa tengan por necesaria o deseable, de que pueda llevarse a cabo razonablemente durante la jornada laboral y de que no reporte al empleador un perjuicio indebido. También se considera ilegal la discriminación fundada en la religión en diversas otras esferas, como el acceso a organizaciones profesionales o sindicales, el acceso a la educación (con algunas excepciones) y el acceso a bienes, servicios, locales y alojamiento.

958. En Nueva Gales del Sur, la Anti-Discrimination Act 1977 (Ley de 1977 contra la Discriminación) no trata de la discriminación ilegal fundada en la religión o las convicciones religiosas, por considerarse, desde un planteamiento más general, que la legislación contra la discriminación no debía restringir el derecho fundamental de las organizaciones religiosas a propagar su religión de conformidad con sus doctrinas.

959. La Comisión de Reforma Legislativa de Nueva Gales del Sur estudió el posible alcance del concepto de discriminación religiosa durante su actual examen de la Ley de 1977. A finales de 1995 se publicó un documento de discusión con proyectos de recomendaciones.

960. En el Territorio del Norte, la Anti-Discrimination Act 1992 (Ley de 1992 contra la Discriminación) estipula que ninguna persona discriminará contra otra por sus creencias o actividades religiosas.

961. En Queensland, la Anti-Discrimination Act 1991 (Ley de 1991 contra la Discriminación) prohíbe la discriminación religiosa. Además, con arreglo al Código Penal de Queensland constituye un delito perturbar cualquier reunión con fines de culto religioso o agredir o molestar a un ministro o sacerdote durante el desempeño de sus funciones religiosas.

962. En Australia Meridional, la Summary Offences Act 1953 (Ley de Faltas de 1953) prohíbe interrumpir o perturbar cultos religiosos e interrumpir o molestar a los oficiantes en cualquier reunión religiosa.

963. En Tasmania, la Constitution Act 1934 (Ley Constitucional de 1934) establece la siguiente garantía de libertad de conciencia y religión:

"Se garantizan a todo ciudadano la libertad de conciencia y el derecho al libre culto y a la práctica de la religión, sin menoscabo del orden público ni de la moralidad.

No se impondrán restricciones a ninguna persona, ni se le exigirá prestar juramento, por su religión o creencias religiosas, y no se impondrá ninguna prueba de religión para la ocupación de un cargo público o el ejercicio de cualquier función pública".

964. En Victoria, la Equal Opportunity Act 1995 (Ley de Igualdad de Oportunidades de 1995) prohíbe la discriminación directa o indirecta fundada en creencias o actividades religiosas, salvo la ejercida por instituciones o escuelas religiosas cuando es necesaria para no herir sensibilidades religiosas o para la observancia de creencias o principios religiosos pertinentes.

965. En Australia Occidental, la Equal Opportunity Act 1984 (Ley de Igualdad de Oportunidades de 1984) prohíbe en diversas circunstancias la discriminación fundada en convicciones religiosas o en su ausencia.

Libertad de manifestar las creencias religiosas

966. En Australia la libertad de manifestar las creencias religiosas está sujeta a restricciones de aplicación general con arreglo a las leyes ordinarias del Commonwealth. En el ya mencionado caso de Church of the New Faith v. The Commissioner for Payroll Tax (1982-1983) 154 CLR 120, el juez Mason, Presidente en funciones, y el juez Brennan expresaron así el principio:

"La esfera de inmunidad legal delimitada por el concepto de religión no puede abarcar toda conducta que observe una persona al poner en práctica su fe en lo sobrenatural. La libertad de actuar de conformidad con las propias convicciones religiosas no es tan absoluta como la libertad de creer, ya que las leyes generales que defienden y protegen a la sociedad no pueden ser derogadas alegando que existe una obligación religiosa de quebrantarlas. La conducta que observe una persona para poner en práctica su fe en lo sobrenatural es religiosa, pero queda excluida del ámbito de inmunidad legal delimitado por el concepto de religión si contradice las leyes ordinarias, esto es, si contradice aquellas leyes que no discriminan contra la religión en general o contra determinadas religiones o contra un tipo de comportamiento que es característico tan sólo de una religión" (págs. 135 y 136).

967. Por ejemplo, en el caso Adelaide Company of Jehovah's Witnesses Inc. v. Commonwealth (1943) 67 CLR 116, el Tribunal Supremo estimó que el artículo 116 de la Constitución impedía que el Gobierno promulgara leyes para prohibir la profesión de doctrinas o principios que, aunque se sostuvieran en virtud de convicciones religiosas, fueran perjudiciales para el esfuerzo bélico que estaba llevando a cabo Australia. El caso se planteó a raíz de una declaración del Gobierno Federal durante la Segunda Guerra Mundial, en virtud de la cual diversas organizaciones, incluidos los Testigos de Jehová de Adelaide, fueron consideradas perjudiciales para la defensa de Australia. Agentes federales ocuparon los locales de esa Iglesia en Adelaide, confiscaron los archivos y expulsaron a miembros de la iglesia del edificio.

968. Sin embargo, no existe ninguna ley que limite específicamente el ejercicio del derecho a la libertad de religión. De vez en cuando se ha expresado preocupación por las actividades de algunas sectas religiosas, que podrían atentar contra los derechos y libertades de otros miembros de la comunidad. El Gobierno Federal ha adoptado la posición de que no procede legislar para restringir las actividades de sectas religiosas. Sin embargo, en la medida en que tales actividades infrinjan leyes existentes, en particular la legislación penal, el problema debe plantearse, como se suele hacer en esos casos, ante los tribunales.

969. De hecho, la práctica de las creencias religiosas se ve facilitada por diversas leyes. Los ingresos de las instituciones religiosas están exentos del pago del impuesto sobre la renta. Varias jurisdicciones tipifican especialmente como delito la perturbación de una reunión legítima de personas con fines de culto. En algunas jurisdicciones, la confesión hecha por una persona a un sacerdote tiene carácter confidencial. Existen también disposiciones para que los sacerdotes oficien en las bodas y sobre la financiación de las escuelas confesionales. La Defence Act 1903 (Ley de Defensa de 1903) prevé algunas exenciones de la obligación del servicio militar en el caso de que Australia sea atacada o invadida por fuerzas armadas enemigas. Se exime del servicio a las personas cuyas creencias religiosas u otras convicciones no les permiten participar en una guerra o en operaciones bélicas. Además, la Ley prevé también la exención de las personas cuyas convicciones no les permitan participar en una guerra determinada o en operaciones bélicas determinadas.

970. En las cárceles se dispone la celebración de servicios religiosos y se permite a los presos el contacto regular con sacerdotes, si así lo desean. En Victoria, en virtud de la Corrections Act 1986 (Ley de Penas de 1986) todo preso tiene derecho a un régimen especial de comida si el director de la cárcel lo estima necesario por razones médicas o religiosas o por ser el preso vegetariano. Los presos tienen asimismo derecho a practicar la fe religiosa de su elección y, cuando ello no comprometa la seguridad ni la buena administración de la cárcel, a reunirse con otros presos para la práctica de su religión y a poseer los artículos necesarios para el culto.

971. Hay otras muchas disposiciones concernientes a las convicciones y prácticas religiosas. Entre ellas figuran la exención de la obligación de formar parte de un jurado para los sacerdotes y miembros de órdenes religiosas, el reconocimiento de la objeción de conciencia (incluida la fundada en la religión) a la afiliación sindical, la no aplicación de la Ley de 1986 sobre la Comisión Federal de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades y la Ley de 1984 sobre Discriminación Sexual a determinados actos o prácticas religiosas, medidas para proteger lugares sagrados aborígenes, el reconocimiento de obligaciones religiosas que entrañan ritos especiales de sacrificio de animales, disposiciones especiales para permitir la votación por correo o la votación anticipada cuando las convicciones religiosas o la pertenencia a una orden religiosa impidan acudir a las urnas, exenciones fiscales a las ventas de artículos religiosos y otras exenciones fiscales para órganos religiosos, así como la posibilidad de hacer una declaración bajo palabra, si se prefiere, en lugar de prestar juramento sobre la Biblia, al deponer en procedimientos judiciales y de otra índole.

Educación religiosa

972. En todas las jurisdicciones de Australia se imparte enseñanza tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. Todas las escuelas están obligadas a cumplir determinadas normas docentes estipuladas por el Departamento de Educación de la jurisdicción de que se trate. Un porcentaje elevado de las escuelas privadas están administradas por iglesias o comunidades religiosas. Se reconoce que esas escuelas desempeñan una función importante en la educación de los niños en Australia. En la sección G se presenta información sobre el sistema educativo australiano, y puede encontrarse información detallada sobre la enseñanza religiosa en las escuelas en los párrafos 346 a 351 del primer informe de Australia en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño.

Limitaciones

973. La libertad de las personas para ejercer plenamente sus convicciones está sujeta a algunas limitaciones. En la mayoría de las jurisdicciones existen leyes que disponen que si un padre o una madre se niega (generalmente por motivos religiosos) a autorizar que su hijo reciba una transfusión sanguínea y dos o más médicos legalmente facultados opinan que esa transfusión es necesaria para salvar la vida del niño, se considerará a todos los efectos que el médico legalmente facultado que practique la transfusión lo ha hecho con la autorización de la persona a quien compete legalmente autorizarla.

974. Aunque está previsto que se celebren servicios religiosos en las cárceles y que los reclusos mantengan contactos regulares con sacerdotes si así lo desean, dada la propia naturaleza de esas instituciones puede no ser posible que algunos reclusos observen todos los aspectos de su religión (por ejemplo, los relativos al modo de vestir y a prescripciones alimentarias).

Artículo 19

975. En Australia toda persona tiene derecho a sustentar sus opiniones sin injerencia alguna. Aunque en general también se reconoce a todas las personas el derecho a la libertad de expresión, el ejercicio de ese derecho en la práctica está restringido en cierta medida por las leyes y prácticas que se esbozan a continuación.

976. El grado en que las leyes y prácticas pueden restringir la libertad de expresión es una cuestión que está sujeta en sí misma a vigilancia. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades puede recibir denuncias de violaciones del artículo 19 del Pacto en ámbitos de responsabilidad federal. En el Territorio de la Capital de Australia, Queensland, el Territorio del Norte, Victoria y Australia Occidental existen leyes que permiten formular denuncias por discriminación basada en creencias, opiniones o actividades religiosas o políticas.

977. En relación con las restricciones a la libertad de expresión, en las secciones siguientes se trata de la propiedad y el contenido político de los medios de radiodifusión, la utilización por funcionarios y periodistas de la información en poder de la administración pública, las leyes de censura, la figura del desacato a los tribunales y los privilegios parlamentarios en materia de libertad de expresión. Ya se han mencionado, en relación con el artículo 14, las restricciones a la publicación de procedimientos judiciales. También se han

examinado, en relación con el artículo 17, las restricciones impuestas a la libertad de expresión por las disposiciones relativas a la difamación. También pueden afectar a la libertad de expresión las leyes de varias jurisdicciones australianas que reglamentan las reuniones públicas y la conducta en lugares públicos. Esa cuestión se examina más adelante, en las observaciones sobre el artículo 21.

Radio y televisión

Propiedad

978. La regulación de las emisiones de radio y televisión es competencia en Australia del Gobierno federal, de conformidad con la Broadcasting Services Act 1992 (Ley de 1992 de Servicios de Radiodifusión) y la Radiocommunications Act 1992 (Ley de Radiocomunicaciones de 1992). En general, la primera regula los tipos de servicios para los que se requiere una licencia, y la segunda establece el tipo de licencias para las tecnologías de transmisión. Los párrafos siguientes sólo se refieren a las disposiciones de la Ley de 1992 de Servicios de Radiodifusión, que guardan mayor relación con las cuestiones tratadas.

979. El Parlamento Federal se propone aplicar diferentes niveles de reglamentación a los diversos servicios de radiodifusión, en función de la influencia que éstos tengan en la opinión pública. Las categorías de servicios con un público muy reducido están autorizadas al amparo de "licencias generales" y no requieren la obtención de licencias específicas, excepto los permisos técnicos pertinentes. Los servicios con un público más amplio o de mayor influencia están sujetos a un régimen de licencias individuales. La entidad reguladora establecida en el marco de la Ley es la Australian Broadcasting Authority (ABA) (Autoridad Australiana de Radiodifusión).

980. La Ley de 1992 de Servicios de Radiodifusión contempla los seis tipos de servicios que se enumeran a continuación.

- Servicios nacionales. Abarcan los servicios de televisión y de radio proporcionados por la Australian Broadcasting Corporation y el Special Broadcasting Service y por lo general se financian con cargo al presupuesto del Estado. Son gratuitos y no están sujetos a un régimen de licencias.
- Servicios comerciales. Abarcan todos los servicios de televisión y de radio de interés general que se proporcionan con el fin de obtener un beneficio por la inclusión de publicidad comercial. Son gratuitos, pero están sujetos a un régimen de licencias.
- Servicios comunitarios. Se proporcionan gratuitamente con fines de interés comunitario, pero no pueden formar parte de una empresa con fines de lucro. Están sujetos a un régimen de licencias.
- Servicios por suscripción. Corresponden a programas de gran popularidad que se proporcionan a los espectadores por suscripción o a una tarifa por visión. Están sujetos a un régimen de licencias.

- Servicios por suscripción especializados. Se proporcionan a grupos con intereses especiales, en ámbitos geográficos reducidos, por un período limitado o en una ocasión concreta. No están sujetos a un régimen de licencias.
- Servicios especializados abiertos. Son similares a los servicios por suscripción especializados, pero se proporcionan sin cobrar cargas directas a los espectadores que disponen de equipo de recepción adecuado. No están sujetos a un régimen de licencias.

981. Las licencias deben renovarse cada cinco años como máximo. En la mayoría de los casos, la renovación es automática. La ABA sólo rechaza las nuevas solicitudes o solicitudes de renovación cuando estima que existe un riesgo importante de infracción de la Ley de 1992 de Servicios de Radiodifusión o de incumplimiento de las condiciones de la licencia.

982. La ABA administra la concesión de bandas de frecuencias a los solicitantes. El Ministro competente ha reservado algunas de las bandas para los servicios de radiodifusión nacionales o para su concesión gratuita a servicios comunitarios mediante un proceso de selección basado en los méritos comparativos. El resto de los canales se adjudica mediante un proceso de asignación basado en el precio o, en los mercados de servicio único, a través de un procedimiento administrativo. El proceso de asignación se restringe inicialmente a las empresas de radiodifusión comerciales y se abre posteriormente a otros tipos de entidades.

983. La Ley de 1992 de Servicios de Radiodifusión establece claros mecanismos de control de las licencias con el fin de alentar la diversidad entre los servicios de radiodifusión más influyentes y de garantizar su control efectivo por los australianos.

984. En relación con la televisión comercial, la concesión de licencias por la ABA está sujeta a las tres condiciones siguientes.

- Nadie debe controlar licencias cuyo ámbito geográfico abarque en conjunto a más del 75 por ciento de la población de Australia.
- Nadie debe disponer de más de una licencia de televisión comercial en la misma zona, salvo en circunstancias especiales y previa aprobación de la ABA.
- Está prohibido el control extranjero de licencias de televisión comercial, la participación de una persona extranjera en una empresa titular de una licencia no debe ser superior al 15 por ciento, y la participación extranjera total no debe rebasar el 20 por ciento.

985. En lo que se refiere a la radio comercial, nadie puede disponer de más de dos licencias en la misma zona.

986. Además, no se permite a ninguna persona controlar:

- Una licencia de televisión comercial y una licencia de radio comercial en la misma zona;

- Una licencia de televisión comercial y un periódico en la misma zona; ni
- Una licencia de radio comercial y un periódico en la misma zona.

987. La radio comercial está sujeta a menos limitaciones que la televisión comercial porque el mayor número de emisiones de radio reduce la influencia de las emisiones concretas.

988. Por último, la ABA regula la titularidad de los cargos de dirección de empresas relacionadas con los medios de difusión.

- Nadie puede ser director de una empresa que controle, o de varias empresas que conjuntamente controlen, una combinación prohibida de medios de difusión.
- Una persona que controle una o más licencias de emisión comercial o periódicos no puede ser director de una empresa de medios de difusión si entre la persona y la empresa controlarían una combinación prohibida de medios.
- No pueden ser extranjeros más del 20 por ciento de los directores de una empresa titular de una licencia de televisión comercial.

989. Con el fin de reducir la incertidumbre entre las empresas titulares de licencias y sus propietarios, la ABA está facultada para indicar si, en su opinión, una disposición determinada constituye o no una forma de control. Las prescripciones en materia de presentación de información se reducen al mínimo necesario para la vigilancia efectiva del régimen de control.

Contenido

990. Como se señaló en relación con el artículo 17, la Ley de 1992 de Servicios de Radiodifusión y la ABA se ocupan también del contenido de los programas emitidos. Existen normas de contenido nacional para la televisión comercial y normas de programación infantil para la televisión comercial y comunitaria. Se aplica un régimen flexible que permite el desarrollo y la evolución de los códigos deontológicos y las normas de programación en respuesta a las actitudes cambiantes del público. La ABA está facultada para establecer normas o imponer como condición para la observancia de los códigos de prácticas si éstos no se están cumpliendo.

991. La Ley de 1992 impone asimismo algunas restricciones para las emisiones de carácter político:

- Los contenidos políticos deben atribuirse claramente a sus autores;
- Durante un corto período antes de la fecha de los comicios queda prohibida la emisión por televisión de mensajes de carácter electoral; y
- Si, durante un período electoral, una empresa de radiodifusión emite mensajes de carácter electoral, debe brindar asimismo oportunidades razonables de emitir mensajes electorales a todos los partidos

políticos que participen en las elecciones y que estuvieran representados en la cámara del parlamento para la que se celebran las elecciones en su última sesión antes del período electoral.

992. Esas restricciones son menos estrictas que las condiciones impuestas por la Ley antecesora de la Ley de 1992. En efecto, anteriormente estaba prohibida en todo momento, con limitadas excepciones, la emisión de propaganda política. La prohibición se aplicaba a todos los niveles de la administración, a todos los gobiernos y tanto a las empresas de radiodifusión nacionales (Australian Broadcasting Commission y Special Broadcasting Service) como a las empresas titulares de licencias.

993. Además, la Ley prohibía la emisión de notificaciones de departamentos y organismos de la administración federal durante el período inmediatamente anterior a las elecciones o referendums federales, y de departamentos y organismos del Territorio del Norte y del Territorio de la Capital de Australia durante el período inmediatamente anterior a las elecciones en esas jurisdicciones.

994. El Comisionado de Derechos Humanos expresó oficialmente al Gobierno Federal su oposición a esa Ley por considerarla incompatible con los artículos 19 y 25 del Pacto. La constitucionalidad de la prohibición de la propaganda política fue puesta a prueba en 1992 en el caso Australian Capital Television Pty. Ltd. v. Commonwealth ((1992) 108 ALR 577). Se pidió al Tribunal Superior que decidiera si existía implícitamente una libertad constitucional de comunicación que invalidara los artículos de la Ley que prohibían la propaganda política. En su decisión, seis de los siete jueces sostuvieron que el sistema de democracia representativa tutelado por la Constitución implicaba necesariamente libertad de comunicación, que los diversos jueces describieron como: "libertad de comunicación, por lo menos respecto de la discusión pública y política" (juez Mason, Presidente del Tribunal); "la libertad para debatir las cuestiones políticas y económicas que constituye un pilar esencial del sistema de gobierno representativo" (juez Brennan); "la libertad... de comunicación sobre las cuestiones referentes al gobierno del Commonwealth" (jueces Deane y Toohey); "libertad de expresión política" (juez Gaudron); y "libertad de participación, asociación y comunicación respecto de la elección de los representantes del pueblo" (juez McHugh).

995. El razonamiento del Tribunal se basa en la garantía constitucional implícita de libertad de comunicación respecto de las cuestiones políticas. Esa libertad se considera esencial para el funcionamiento adecuado del sistema de gobierno democrático y representativo, y, aunque no se trata de un derecho absoluto, las restricciones impuestas por la Ley antecesora se consideraban (con una opinión disidente) más estrictas de lo razonablemente necesario.

996. En 1992 surgió otro caso referente al derecho constitucional implícito a la comunicación. El motivo fue la publicación en el periódico The Australian de un artículo en el que se calificaba a la Comisión Australiana de Relaciones Laborales de "corrupta" y "sumisa". Se argumentó que esa descripción contravenía el apartado ii) del inciso d) del párrafo 1 del artículo 229 de la Industrial Relations Act 1988 (Ley de 1988 de Relaciones Laborales), que estipulaba que ninguna persona debía utilizar palabras tendentes a desprestigiar a la Comisión de Relaciones Laborales. En el caso Nationwide News v. Wills ((1992) 108 ALR 681) el pleno del Tribunal Superior falló que la ley contravenía

la libertad constitucional implícita de debate público sobre cuestiones políticas y económicas y de comunicación de información y opiniones sobre cuestiones referentes al Gobierno.

997. Algunos jueces reconocieron que en "una sociedad ordenada" era necesario imponer algunas restricciones a la comunicación con el fin de conciliar intereses públicos contrapuestos. El juez Mason, Presidente del Tribunal, sugirió en Australian Capital Television Pty. Ltd. v. Commonwealth que debía distinguirse entre restricciones impuestas a ideas o información y restricciones de actividades o modalidades de comunicación, e indicó que consideraba más justificable el segundo tipo de restricciones. Para determinar si una restricción es justificable conviene tener en cuenta:

- Si guarda proporción con el interés público al que hay que atender (Australian Capital Television Pty. Ltd. v. Commonwealth); y
- Si es posible proteger ese interés público "mediante una restricción menor de la libertad de comunicación" (Nationwide News v. Wills).

Censura

998. Las atribuciones de censura del Gobierno Federal derivan del artículo 51 (Poder de regular el comercio exterior e interestatal) y el artículo 122 (Poder de promulgar leyes respecto de los Territorios) de la Constitución de Australia.

999. Esas atribuciones se precisan en el Reglamento de Aduanas (Importaciones Prohibidas) y el Reglamento de Aduanas (Películas Cinematográficas), que autoriza el establecimiento de la Junta de Censura Cinematográfica y un órgano de apelación, la Junta de Revisión de Cine y Publicaciones.

1000. Las películas importadas para su exhibición pública se examinan a la luz de esos reglamentos para determinar si procede su registro. Una vez registradas, la Junta de Censura las clasifica de conformidad con las leyes pertinentes de los Estados, en virtud de acuerdos concertados con el Gobierno Federal desde 1949.

1001. El Gobierno Federal y los gobiernos de los Estados han acordado coordinar la clasificación de vídeos, publicaciones y juegos de ordenador, tomando como modelo legislativo la Classification of Publications Ordinance 1983 (Ordenanza de 1983 sobre la Clasificación de Publicaciones) del Territorio de la Capital de Australia.

1002. Los acuerdos de 1949 entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los Estados (y los acuerdos sucesores), conjuntamente con el acuerdo mencionado en el párrafo anterior, constituyen el marco jurídico para la clasificación de películas, vídeos, publicaciones y juegos de ordenador.

1003. A pesar de esos acuerdos, algunos Estados siguen teniendo determinadas atribuciones. Los ministros competentes de Australia Occidental y Australia Meridional pueden modificar decisiones de la Junta de Censura y de la Junta de Revisión respecto de películas cinematográficas en sus Estados respectivos. En Australia Occidental ese poder abarca también los vídeos. Australia Occidental mantiene un régimen separado para la clasificación de publicaciones. Australia Meridional y Tasmania cuentan con juntas de clasificación de publicaciones que

pueden modificar decisiones de la Junta de Censura respecto de vídeos para uso doméstico; las juntas de Australia Meridional y de Australia Occidental pueden modificar asimismo las decisiones de los funcionarios encargados de la clasificación de publicaciones (véase infra). En Tasmania, la clasificación de obras literarias compete a la junta estatal.

Vídeos y películas cinematográficas

1004. En Australia es obligatoria la clasificación de películas cinematográficas, vídeos para uso doméstico y juegos de ordenador. La Junta de Censura adopta sus decisiones al respecto por mayoría y aplicando criterios establecidos en la legislación pertinente y en directrices de clasificación oficialmente publicadas y actualizadas periódicamente para adaptarlas a la evolución de las actitudes de la población. Las decisiones de la Junta de Censura se basan asimismo en los principios fundamentales del Código Nacional de Clasificación:

- Los adultos deben poder leer, ver y escuchar lo que deseen;
- Los menores deben ser protegidos de los materiales que puedan perjudicarlos o perturbarlos;
- Todas las personas deben ser protegidas de la exposición a materiales no solicitados que consideren ofensivos; y
- Deben tenerse en cuenta las inquietudes del público respecto de:
 - Escenas que justifiquen o fomenten la violencia, en particular de índole sexual; y
 - Representaciones degradantes de personas.

1005. La Junta está facultada para:

- Rechazar el registro de una película importada para su exhibición pública si, en su opinión, es "blasfema, indecente u obscena", "contraria a la moralidad", o "indeseable desde el punto de vista del interés público".
- Clasificar una película como:

G	Autorizada para todos los públicos;
PG	Supervisión familiar recomendada para menores de 15 años;
M15+	Recomendada para mayores de 15 años;
MA15+	Autorizada con restricciones para los menores de 15 años;
R18+	Autorizada para mayores de 18 años; o
Rechazada	Clasificación denegada.
- Clasificar los vídeos comerciales como:

G	Autorizado para todos los públicos;
---	-------------------------------------

PG	Supervisión familiar recomendada para menores de 15 años;
M15+	Recomendado para mayores de 15 años;
MA15+	Autorizado con restricciones para los menores de 15 años;
R18+	Autorizado para mayores de 18 años;
X	Autorizado para mayores de 18 años, con la advertencia de que puede contener imágenes explícitas de actos sexuales no violentos y voluntarios entre adultos (únicamente en el Territorio de la Capital de Australia y en el Territorio del Norte); o
Rechazado	Clasificación denegada.

- Clasificar los juegos de ordenador como:

G	Autorizado para todos los públicos;
G8	Autorizado para mayores de ocho años;
M	Recomendado para mayores de 15 años;
MA	Autorizado con restricciones para los menores de 25 años; o
Rechazado	Clasificación denegada.

- Aprobar o rechazar materiales publicitarios relacionados con las películas, los vídeos o los juegos.

1006. Los funcionarios de la Oficina de Clasificación de Películas y Publicaciones se encargan de clasificar las publicaciones para todos los Estados, excepto Australia Occidental y Tasmania, en las siguientes categorías:

No restringida;
Restringida - Categoría 1;
Restringida - Categoría 2; o
Clasificación denegada.

1007. Cuando entre en vigor la nueva Ley, esa función se asignará a la Junta de Clasificación (que sustituirá a la Junta de Censura).

Ejecución de las normas

1008. Las recomendaciones de la Junta de Censura sobre el contenido de las películas y cintas de vídeo no clasificadas en la categoría G deben figurar obligatoriamente, junto con la clasificación, en las propias cintas de vídeo y en todos los anuncios publicitarios referentes a las películas.

1009. La ejecución de esa norma y de otras medidas conexas compete a las autoridades estatales.

Publicaciones

1010. La clasificación de las publicaciones impresas es actualmente voluntaria. En virtud de la Federal Classification (Publications, Films and Computer Games) Act (Ley Federal de Clasificación (Publicaciones, Películas y Juegos de Ordenador)), que entrará en vigor el 1º de enero de 1996, la

clasificación será obligatoria para determinados materiales, por ejemplo revistas pornográficas. En junio de 1992, como adelanto de esa legislación y atendiendo a las inquietudes del público, los ministros competentes aprobaron nuevas directrices para la clasificación de publicaciones, que imponen controles más estrictos sobre lo que constituye material aceptable para las portadas de las revistas.

1011. Algunos funcionarios de la Oficina de Clasificación de Películas y Material Impreso, del Departamento del Fiscal General, están encargados de la clasificación de publicaciones en nombre de los gobiernos del Territorio de la Capital de Australia, el Territorio del Norte, Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria y Australia Meridional. Como ya se ha indicado, Australia Occidental y Tasmania cuentan con sistemas propios.

Autopista de la información

1012. El crecimiento de la autopista de la información entrañará la difusión de información y el desarrollo de las comunicaciones internacionales interactivas a una escala y a un ritmo sin precedentes. La velocidad, el volumen y la complejidad de las comunicaciones y la difusión de información por medios electrónicos y el carácter inherentemente transnacional de las nuevas tecnologías plantean dificultades para las normas y sistemas jurídicos existentes.

1013. En 1994, un grupo de trabajo conjunto del Departamento del Fiscal General y del Departamento de Comunicaciones y Actividades Artísticas examinó las cuestiones planteadas por la necesidad de un marco jurídico para la autopista de la información. El informe del grupo de trabajo, relativo a la regulación de los sistemas informáticos de comunicaciones, se publicó en octubre de 1994. El grupo de trabajo abogaba por un sistema basado en la elaboración y adopción de un código de conducta (que incluyera la aplicación de directrices para los distintos tipos de contenidos), reforzado por sanciones penales para garantizar su observancia.

1014. En el contexto del informe del grupo de trabajo y a instancias de los ministros responsables de la censura a nivel federal y estatal, en la segunda mitad de 1995 se celebraron consultas con empresas participantes y muchos usuarios de la nueva tecnología. En particular, el Ministro de Comunicaciones y Actividades Artísticas pidió a la ABA que investigara la naturaleza y el contenido de los nuevos servicios en línea y formulara estrategias y medidas para garantizar que los proveedores de servicios en línea tuvieran en cuenta las inquietudes del público. La ABA no había concluido su investigación durante el período abarcado por el presente informe.

1015. La difusión de material ofensivo por un servicio de telecomunicaciones está sancionada por la Ley Penal de 1914, cuyo artículo 85ZE dice lo siguiente:

"Ninguna persona utilizará, en forma deliberada o temeraria, un servicio de telecomunicaciones para amenazar u hostigar a otra persona, ni de una manera que las personas razonables consideren en todas las circunstancias ofensiva.

Pena: Un año de cárcel".

Información oficial

Funcionarios públicos

1016. Todas las jurisdicciones australianas exigen que sus funcionarios públicos mantengan confidencial la información relativa a su trabajo, deberes y responsabilidades. La administración federal y algunas administraciones estatales imponen también restricciones a las observaciones que pueden hacer en público los funcionarios.

1017. A nivel federal, el artículo 70 de la Ley Penal de 1914 y el Reglamento 35 de la Ley de la Función Pública de 1922 prohíben a los funcionarios públicos federales revelar información sino en el desempeño de sus funciones oficiales.

1018. En Nueva Gales del Sur, el Código de Conducta del sector público reconoce a los funcionarios públicos, en tanto que miembros de la comunidad, el derecho de formular observaciones y participar en el debate público sobre cuestiones políticas y sociales. Sin embargo, indica también las siguientes circunstancias en las que se considera improcedente la formulación de observaciones públicas por los empleados de la administración:

- Cuando pueda interpretarse que esas observaciones, aunque se formulen a título particular, constituyen la posición oficial de la administración o de la organización a la que pertenece el funcionario; o
- Cuando esas observaciones, independientemente de la relación que guarden con las tareas normales del funcionario, representan una crítica suficientemente fuerte o persistente para suscitar en la opinión pública la interpretación de que el funcionario en cuestión no está dispuesto a aplicar o administrar en los aspectos que guarden relación con sus propias funciones las políticas del Gobierno en el poder.

1019. El Código especifica que un funcionario público sólo puede revelar otra información oficial o documentos obtenidos por razón de su cargo cuando así lo exija la ley, en el desempeño de sus funciones, al testificar ante un tribunal o cuando se le haya autorizado debidamente para ello.

1020. El Código constituye una exposición de las condiciones de empleo en el sector público de Nueva Gales del Sur. Por consiguiente, su infracción puede constituir una falta disciplinaria con arreglo a la Ley de Gestión del Sector Público, y dar lugar a las sanciones correspondientes, que pueden abarcar desde la amonestación o la suspensión de funciones hasta la incoación de procedimientos penales o civiles.

1021. Las restricciones que impone el Código a los pronunciamientos públicos de los empleados de la administración de Nueva Gales del Sur no constituyen una limitación general del derecho a la libertad de expresión, sino que indican situaciones concretas en las que ese derecho se restringe de conformidad con las condiciones de empleo en el sector público. Esas restricciones se limitan a los pronunciamientos públicos no autorizados que puedan comprometer la integridad y el prestigio de la administración.

1022. Las jurisdicciones que cuentan con legislación que protege la revelación de información en interés público en determinadas circunstancias son las siguientes:

- Australia Meridional (Whistleblowers Protection Act 1993);
- Territorio de la Capital de Australia (Public Interest Disclosures Act 1994);
- Queensland (Whistleblowers Protection Act 1994); y
- Nueva Gales del Sur (Public Interest Disclosures Act 1994).

1023. En el plano federal, la introducción de la Ley de 1982 sobre la Libertad de Información y de otra legislación administrativa indicó un cambio de actitud del Gobierno y la administración federales hacia la divulgación de información oficial. El Comité Gibbs (encargado de examinar la legislación penal federal) sobre la revelación de información oficial, el Comité del Senado sobre la Revelación de Información Oficial en Interés Público y el informe de la Comisión de Investigación sobre la Organización de Seguridad e Información de Australia han formulado sendas propuestas al respecto.

1024. Refiriéndose a la divulgación de información oficial, el Comité Gibbs señaló en su informe que:

"Las disposiciones generales de la legislación actual son esencialmente erróneas y, además, presentan graves deficiencias desde el punto de vista de la aplicación eficaz de la ley".

1025. El Comité recomendó que la prohibición general de divulgación contenida en el Reglamento 35 sobre la Función Pública se sustituyera por disposiciones de protección de categorías específicas de información (como algunos tipos de información relacionados con los servicios de información y de seguridad, la defensa, las relaciones exteriores y la policía). Como parte de sus reformas, el Comité Gibbs recomendó asimismo un plan para la protección de los funcionarios que revelaran información en interés público y la investigación de sus acusaciones.

1026. El Comité del Senado sobre la Revelación de Información Oficial en Interés Público se constituyó el 2 de septiembre de 1993 y presentó su informe, titulado "En interés público" el 30 de agosto de 1994. También abogó por que se protegiera a los funcionarios que divulgaran información oficial en interés público la Comisión de Investigación sobre la Organización de Seguridad e Información de Australia (Comisión Samuels).

1027. La información que posee la administración federal puede ser solicitada por particulares en virtud de las disposiciones de la Ley de 1982 sobre la Libertad de Información, que prevé el acceso (y el derecho de corrección) a una amplia gama de información, incluida la concerniente a las actividades de departamentos federales y autoridades públicas y la información documental mantenida por esos órganos. Ese acceso está sujeto a excepciones, por ejemplo, para proteger intereses públicos fundamentales o la vida privada y los asuntos comerciales de la persona a quien se refiere la información.

1028. Existe legislación similar sobre libertad de información en todos los Estados, con la excepción del Territorio del Norte.

Periodistas

1029. En Australia se estableció en 1952 un mecanismo de autocontención voluntaria de los medios de comunicación respecto de la publicación de información de carácter delicado relacionada con la defensa, la seguridad y los servicios de información, conocido como D Notice system, por las notificaciones en los que se basa, e inspirado en un sistema británico similar que data de 1912. El fundamento del sistema es el reconocimiento por las organizaciones de medios de comunicación, tanto a nivel editorial como de gestión, de que puede resultar conveniente en interés público no divulgar determinadas categorías de información. Los D Notices son notificaciones en las que se definen las categorías de información que conviene proteger.

1030. Un comité integrado por representantes de los medios de comunicación y del Gobierno puede enviar a los medios de comunicación notificaciones en las que brinde asesoramiento y orientación sobre determinadas cuestiones y pida que no se publiquen determinadas informaciones. Asimismo, los medios de comunicación pueden dirigirse al comité para solicitar orientación sobre otras cuestiones no incluidas en ninguna notificación antes de publicar información que pueda tener consecuencias para la seguridad nacional. La inobservancia de las notificaciones no está sujeta como tal a sanciones penales, pero el artículo 79 de la Ley Penal de 1914 prohíbe la divulgación de determinadas categorías de información en circunstancias que podrían coincidir con las de una notificación.

1031. A principios de 1994 se inició una investigación judicial (Comisión Samuels) para estudiar determinadas acusaciones de antiguos miembros del Servicio Secreto de Información de Australia (ASIS). En esa investigación se examinó el sistema de notificaciones, mientras la prensa observaba que éste había caído en desuso. Estaban vigentes a la sazón cuatro notificaciones, una de las cuales se refería a los empleados y las actividades del ASIS. La Comisión presentó su informe en marzo de 1995, recomendando el fortalecimiento del sistema de notificaciones, y el Gobierno Federal aceptó esa recomendación.

1032. La Comisión recomendó asimismo que se reformaran las disposiciones que prohibían la divulgación primaria y secundaria de información oficial, pero que en lo referente a la divulgación secundaria se retrasaran los cambios para que tuviera oportunidad de funcionar el sistema de notificaciones. La respuesta del Gobierno Federal, esbozada ante el Senado el 1º de junio de 1995, consistió en anunciar su intención de promulgar legislación que prohibiera la divulgación directa y secundaria no autorizada de algunas categorías de información muy estrictamente definidas al tiempo que se revitalizaba el sistema de notificaciones. Ese sistema seguiría siendo voluntario, y se clarificaría la legislación existente sobre divulgación de información oficial.

1033. Se han iniciado conversaciones con los medios de comunicación sobre la revitalización del sistema de notificaciones y la reforma de las disposiciones relativas a la divulgación secundaria de información.

Organización de Seguridad e Información de Australia

1034. La Australian Security Intelligence Organization Act 1979 (Ley de 1979 sobre la Organización de Seguridad e Información de Australia) especifica las funciones de esa Organización en relación con el concepto de "seguridad", definido como protección de los australianos contra actos de espionaje, sabotaje, violencia de intencionalidad política e injerencia extranjera, entre otros peligros. Además, el derecho a defender causas, protestar o disentir por medios legítimos está protegido por el artículo 17A de la Ley, que estipula lo siguiente:

"La Ley no limitará el derecho de las personas a defender causas, protestar o disentir por medios legítimos, y el ejercicio de ese derecho no se considerará por sí mismo perjudicial para la seguridad, lo que se tendrá en cuenta al definir las funciones de la Organización".

Privilegio parlamentario

1035. Las cámaras de los diversos parlamentos australianos, sus comisiones y sus miembros gozan de determinados poderes, prerrogativas e inmunidades que se denominan privilegios parlamentarios. En general, esos privilegios derivan de determinadas disposiciones de la legislación, como el artículo 49 de la Constitución de Australia, que dice lo siguiente:

"Los poderes, prerrogativas e inmunidades del Senado y de la Cámara de Representantes, así como de sus miembros y de las comisiones de cada cámara serán los que declare el Parlamento, y hasta esa declaración serán los de la Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido y de sus miembros y comisiones en el momento en que se estableció el Commonwealth".

1036. En el Reino Unido, el privilegio parlamentario dimana del artículo 9 de la Bill of Rights 1689 (Declaración de Derechos de 1689), que dispone lo siguiente:

"Que la libertad de palabra, debate o procedimiento en el Parlamento no puede ser impugnada ni recusada en ningún tribunal ni en ningún otro lugar fuera del Parlamento".

1037. El Parlamento Federal ha declarado determinados aspectos de los poderes, prerrogativas e inmunidades del Parlamento en la Parliamentary Privileges Act 1987 (Ley de 1987 sobre Privilegios Parlamentarios). Sin embargo, esa Ley precisa que sus disposiciones no entrañan la modificación de los poderes, prerrogativas e inmunidades de que antes de su entrada en vigor gozaban cada cámara y los miembros y comisiones de cada cámara, salvo cuando la propia Ley disponga lo contrario. La Ley estipula, en parte, que las palabras o actos no se considerarán ofensivos para una Cámara únicamente porque resulten difamatorios o críticos respecto del Parlamento, una cámara, una comisión o un miembro.

1038. Además, la Parliamentary Papers Act 1908 (Ley de 1908 sobre Documentos Parlamentarios) trata de la publicación de los documentos parlamentarios y protege a la imprenta y a la editorial que los publiquen de cualquier responsabilidad dimanante de la publicación. En cuanto a la Parliamentary Proceedings Broadcasting Act 1946 (Ley de 1946 sobre la Retransmisión de

Sesiones Parlamentarias) autoriza la retransmisión de sesiones parlamentarias y garantiza la inmunidad respecto de cualquier responsabilidad civil o penal que pueda resultar de la retransmisión de cualquier parte de esos procedimientos.

1039. Los tribunales australianos han entendido que las legislaturas coloniales (ahora estatales) no han heredado íntegramente los privilegios de la Cámara de los Comunes, sino sólo los razonablemente necesarios para su existencia y el desempeño adecuado de sus funciones y obligaciones. Esa interpretación relativamente restrictiva ha inducido a la mayoría de los parlamentos australianos a legislar para definir el privilegio parlamentario.

1040. Algunos de los Estados han otorgado a su parlamento y a sus miembros y comisiones los poderes, prerrogativas e inmunidades de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña (Constitution Act 1975 (Victoria), Constitution Act 1934 (Australia Meridional), Constitution Act 1867 (Queensland), Parliamentary Privileges Act 1891 (Australia Occidental)). Los miembros de los parlamentos de Queensland y de Tasmania están exentos de responsabilidades penales y civiles por cualquier pronunciamiento oral o por escrito durante sesiones parlamentarias. En Nueva Gales del Sur la mayoría de los privilegios del Parlamento dependen todavía del principio de necesidad, aunque se le han otorgado algunos poderes y privilegios específicos. Por ejemplo, la inmunidad absoluta contra acusaciones por difamación abarca también a los testigos que hayan de declarar ante cualquiera de las cámaras o una de sus comisiones (Parliamentary Evidence Act 1901 (Nueva Gales del Sur)).

1041. Los poderes, prerrogativas e inmunidades de los miembros de la Asamblea Legislativa del Territorio del Norte se estipulan en la Legislative Assembly (Powers and Privileges) Act 1992, en virtud de la cual los poderes (exceptuados los legislativos), las prerrogativas y las inmunidades de la Asamblea y de sus miembros son los mismos otorgados a la Cámara de Representantes federal. La Ley dispone que la libertad de expresión que rige los debates y los procedimientos de la Asamblea no podrá ser impugnada ni recusada en ningún tribunal ni en ningún otro lugar fuera de la Asamblea, establece la inmunidad parlamentaria frente a acciones legales y, aunque no contempla específicamente el desacato a la Asamblea, faculta a la propia Asamblea para determinar si ha sido objeto de un agravio e imponer alguna sanción al autor del mismo.

1042. Un caso en el que se planteó la cuestión del privilegio parlamentario fue el que enfrentó en 1990 ante el Tribunal de Distrito al Sr. Lewis, miembro del Parlamento, y a Stephen Wright y el periódico The Advertiser. En la Cámara de Representantes de Australia Meridional, el Sr. Lewis formuló una pregunta en relación con el Sr. Wright y una subdivisión de propiedades de éste. El Sr. Wright contestó en una carta que publicó The Advertiser acompañada de un artículo. El Sr. Lewis incoó procedimientos contra el Sr. Wright y The Advertiser, reclamando daños y perjuicios por difamación. Una solicitud de interrogar al Sr. Lewis fue denegada por considerarse contraria al privilegio parlamentario. Se presentó un recurso contra esa decisión ante el pleno del Tribunal Supremo, en el que dos jueces opinaron que en las circunstancias de ese caso la persona demandada por un miembro del Parlamento por difamación tenía derecho a interrogar a ese miembro del Parlamento sobre los aspectos fácticos de las afirmaciones formuladas ante la Cámara.

Desacato a los tribunales

1043. La figura de desacato a los tribunales abarca por lo general los principios de common law referentes a las atribuciones de un tribunal para ocuparse de cuestiones tales como el mantenimiento del orden en la sala, los intentos de influir sobre los participantes en un caso (incluso mediante la publicación de materiales), la denigración pública de magistrados y la desobediencia intencional de mandamientos judiciales. En una decisión del Tribunal Superior en el caso Gallagher v. Durack (1983) 152 CLR 238, la mayoría del Tribunal explicó la relación existente entre el desacato al Tribunal y la libertad de expresión de la manera siguiente:

"La ley trata de armonizar dos principios, cada uno de los cuales reviste fundamental importancia, pero que, en algunas circunstancias, parecen entrar en conflicto. Uno de ellos es el de la libertad de palabra, de manera que toda persona tenga el derecho de hacer comentarios de buena fe sobre cuestiones de importancia pública, incluida la administración de la justicia, aun si el comentario es insolente, erróneo u obstinado. El otro principio es el de la necesidad, a los efectos de mantener la confianza pública en la administración de la ley, de un método seguro e inmediato de reprimir las imputaciones contra los tribunales de justicia que, de continuar, fueran probablemente a menoscabar su autoridad. La autoridad de la ley descansa en la confianza pública, y es importante para la estabilidad de la sociedad que no se ponga en entredicho la confianza del público por ataques infundados contra la integridad o la imparcialidad de los tribunales o los jueces. Sin embargo, en muchos casos el sentido común de la comunidad constituye suficiente salvaguardia frente a la difamación escandalosa contra un tribunal o un juez, y el recurso sumario de multa o encarcelamiento tan sólo se aplica cuando el tribunal está convencido de su necesidad en interés de una administración de la justicia ordenada y sin temor y cuando los ataques son injustificables".

1044. Las propuestas tendentes a modificar los principios sobre el desacato a los tribunales se examinan supra en relación con el artículo 14.

Artículo 20

1045. Australia ha mantenido su reserva al artículo 20, que dice lo siguiente:

"Australia entiende que los derechos previstos en los artículos 19, 21 y 22 son compatibles con lo dispuesto en el artículo 20; por consiguiente, el Commonwealth y sus Estados constituyentes, que han legislado con respecto al contenido del artículo en materias de carácter práctico en interés del orden público, se reservan el derecho de no dictar nuevas disposiciones legislativas sobre estas materias".

1046. Esa reserva refleja la sólida tradición australiana de libertad de expresión, que sustentan el Gobierno Federal y los gobiernos estatales. Cuando exista una necesidad clara de restringir ese derecho en interés público o quizás por razones de diplomacia internacional, el Gobierno Federal actuará, como ha actuado en el pasado, para prohibir o reprimir determinadas formas de propaganda. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial el Gobierno Federal

prohibió la propaganda por parte de nacionales de países enemigos y sometió a censura algunas formas de comunicación.

1047. Se han presentado al Gobierno Federal diversos informes sobre la existencia de violencia racial en Australia. En respuesta, el Gobierno Federal promulgó la Racial Hatred Act 1995 (Ley de 1995 sobre el Odio Racial), que entró en vigor el 13 de octubre de 1995. Esa Ley constituye una importante vía de reclamación ante la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades para las personas afectadas por comportamientos racistas. Sus disposiciones constituyen una posición de equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho de todas las personas a vivir sin temor a la violencia y el odio racial. No puede ser objeto de una reclamación con arreglo a la Ley nada que se diga o haga razonablemente y de buena fe en el contexto de declaraciones, publicaciones, discusiones o debates con fines académicos, artísticos o científicos o cualquier otra finalidad de interés público.

Propaganda en favor de la guerra

1048. En Australia no está prohibida en general la propaganda en favor de la guerra. La vaguedad de la expresión "propaganda en favor de la guerra" que se utiliza en el artículo 20 plantea ciertas dificultades al Gobierno Federal. Como se ha indicado en la sección anterior, el Gobierno sólo estaría dispuesto a prohibir la propaganda de esa índole si se manifestara claramente la necesidad de adoptar tal medida.

1049. En la actualidad están prohibidas diversas actividades que podrían incluirse en el concepto de "propaganda en favor de la guerra". Por ejemplo, la Crimes (Foreign Incursions and Recruitment) Act 1978 (Ley Penal (Incursiones Extranjeras y Reclutamiento) de 1978) prohíbe el reclutamiento y entrenamiento en Australia de personas que tengan el propósito de llevar a cabo actividades hostiles en países extranjeros y prohíbe a los ciudadanos australianos y a los residentes de larga duración realizar tales actividades.

1050. También es pertinente la Ley Penal Federal de 1914, que contempla los delitos de traición y sedición, así como la Diplomatic and Consular Missions Act 1978 (Ley de 1978 sobre Misiones Diplomáticas y Consulares), que prohíbe determinados tipos de propaganda conexa y faculta a los tribunales para emitir mandamientos con el fin de reprimir falsas pretensiones de estatuto diplomático consular y ordenar la retirada de banderas, insignias, etc., relacionadas con esas falsas pretensiones.

1051. Australia ha aceptado varias "oficinas de información" de organizaciones políticas tales como la South West Africa Peoples' Organization (SWAPO), el African National Congress, el Front de Libération National Kanake et Socialiste (FNLKS) y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Queda estipulado que el único objeto de esas oficinas es la difusión de información, y que no deben propugnar la violencia como medio para lograr sus objetivos. No gozan de ninguna situación de privilegio, están sometidas al derecho australiano y no reciben asistencia financiera alguna del Gobierno de Australia. Para aprobar el establecimiento de una "oficina de información" se requiere la confirmación de que se aceptan esas condiciones.

Incitación

1052. Aunque no existe actualmente una prohibición general de incitación a la discriminación, hostilidad o violencia mediante el fomento del odio nacional, racial o religioso, se establecen algunas restricciones.

1053. El apartado A del artículo 7 de la Ley Penal Federal de 1914 tipifica como delito el hecho de que cualquier persona:

- Incite, inste, ayude o estimule; o
- Imprima o publique cualquier escrito que incite, inste, ayude o estimule:

A la comisión de delitos contra cualquier ley federal o de un territorio o a la realización de cualquier actividad destinada a la comisión de esos delitos.

1054. La Ley Penal Federal de 1914 tipifica también el delito de sedición, que abarca el grado de tentativa y el asesoramiento y la información al servicio de actividades sediciosas. En las "actividades sediciosas" quedan incluidas las realizadas con objeto de promover "sentimientos de enemistad y hostilidad entre diversas categorías de súbditos de Su Majestad a fin de poner en peligro la paz, el orden o el buen gobierno del Commonwealth". (Se prevén excepciones en el caso de determinadas acciones realizadas de buena fe.)

1055. La Ley Penal Federal prevé también la posibilidad de que el Fiscal General federal solicite al Tribunal Federal que declare que una organización constituye una asociación ilícita. Entre las organizaciones a las que puede aplicarse esa disposición figuran las que, mediante propaganda, propugnan o fomentan el derrocamiento por la fuerza o la violencia del Gobierno establecido del Commonwealth o de un Estado o de cualquier otro país civilizado o de un gobierno organizado. Constituye un delito el que cualquier persona, de palabra o por escrito, entre otras cosas, propugne o fomente el derrocamiento por la fuerza o la violencia de tal gobierno. También constituye un delito el que una persona, por violencia, amenazas o intimidación de cualquier clase, obstaculice o impida el libre ejercicio, por cualquier otra persona, de un derecho u obligación políticos.

Legislación estatal

1056. La incitación a la violencia también se tipifica como delito en la legislación de los Estados, y en algunas jurisdicciones se precisan más las categorías delictivas. Nueva Gales del Sur, el Territorio de la Capital de Australia y Australia Occidental han promulgado legislación relativa a la incitación al desprecio racial. En el common law es ilegal toda incitación a cometer un delito.

1057. En Queensland el delito de sedición se contempla en el Código Penal de 1899. Por intención sediciosa se entiende la que busca cualquiera de los objetivos siguientes:

- Provocar el odio o el desprecio hacia el Soberano;

- Incitar a la desafección hacia el Soberano o el Gobierno o la Constitución legítimos de Queensland o hacia su Parlamento o su administración de justicia;
- Procurar, por medios ilegítimos, la alteración en cualquier aspecto de la organización legítima del Estado; y
- Promover sentimientos de enemistad y hostilidad entre diversas categorías de súbditos de Su Majestad.

1058. La Ley tipifica como delito realizar cualquier actividad con intención sediciosa o juramentar a una persona para que cometa un acto de traición o un asesinato.

1059. En Victoria el delito de traición se contempla en la Ley Penal de 1958. El delito de incitación ha dejado de ser una figura del common law para incorporarse a la legislación.

1060. La legislación estatal que prohíbe la discriminación racial se examina ulteriormente en relación con el artículo 26.

Artículo 21

1061. En Australia todas las personas son libres de organizar reuniones y participar en ellas, salvo en la medida en que la legislación o el common law regulen ese derecho. El tipo de regulación varía de una jurisdicción a otra. De ahí que en ninguna jurisdicción australiana, salvo Queensland, se estipule expresamente el derecho de reunión pacífica. Por otra parte, en ninguna jurisdicción de Australia se proscribe ese derecho. A continuación se esbozan en primer lugar las disposiciones penales, en segundo lugar la legislación de autorización y, por último, los recursos disponibles.

Legislación penal

1062. En general, todas las reuniones, ya se celebren en público o en privado, están sometidas, en interés del orden público y de los derechos y libertades de otras personas, a los controles generales disponibles con arreglo al derecho penal para hacer frente a situaciones en las que se teme que de otro modo podría producirse un comportamiento tumultuoso o una perturbación del orden público. Los comportamientos punibles pertinentes con arreglo al common law son los de riña, refriega y tumulto. Las figuras pertinentes contempladas en la legislación son las de reunión ilegal, conducta indebida en lugar público, translimitación, incitación a la comisión de un delito, conducta ofensiva, y resistencia a la autoridad.

1063. La figura de reunión ilegal se contempla en la legislación del Territorio del Norte, el Territorio de la Capital de Australia, Australia Occidental y Tasmania. En Tasmania, Australia Occidental y el Territorio del Norte figura en el capítulo del código penal que trata de reuniones ilegales y perturbaciones del orden público. En general, hay reunión ilegal cuando tres o más personas se reúnen con un propósito común, legal o ilegal, en circunstancias que causan alarma o miedo en personas que se encuentran en las proximidades, o cuando las personas participantes en la reunión manifiestan intenciones que

hacen temer una perturbación del orden público a las personas que se encuentran en las proximidades.

1064. En el Territorio de la Capital de Australia y en todos los lugares de propiedad de la administración federal se aplica en lo que respecta a las reuniones públicas la Public Order (Protection of Persons and Property) Act 1971 (Ley de 1971 (Protección de Personas y Propiedades)), en virtud de la cual es un delito tomar parte en una reunión "en forma que dé lugar a un temor razonable de que la reunión se desarrolle de manera que conduzca a violencia física indebida contra personas o daños a propiedades".

1065. Las reuniones se regulan por una disposición similar en relación con los lugares protegidos o las personas protegidas (establecimientos y personal diplomáticos y consulares, organizaciones internacionales y determinadas categorías de personal). La Ley crea asimismo figuras delictivas aplicables a la violencia cometida, los daños causados y la tenencia de armas durante una reunión.

1066. En el Territorio del Norte la Observance of Law Act 1921 (Ley de 1921 sobre la Observancia de la Ley) crea la figura de conducta indebida en lugar público, y faculta a la persona que conduzca o presida la reunión pública a pedir a la policía que expulse a la persona que incurra en tal comportamiento. El Reglamento General de la Policía estipula que el oficial a cargo de una comisaría de policía debe tener conocimiento de toda reunión política abierta al público que se celebre en su zona, y ha de disponer que permanezcan de servicio suficientes policías para controlar al número de personas que se prevé que asistirán a la reunión. De ser posible, policías de paisano deben mezclarse discretamente con la multitud mientras se despliega visiblemente el personal uniformado. La policía debe mantener en esas reuniones una actitud estrictamente neutral, limitándose a velar por que se cumplan las instrucciones legítimas de quien presida la reunión.

1067. Cuando resulte evidente que la reunión puede volverse violenta, el oficial responsable de la policía debe adoptar todas las precauciones posibles para evitar lesiones a oradores o espectadores. Cuando los efectivos disponibles lo permitan y el ambiente lo aconseje, deberá asignarse protección policial a las personalidades principales que participen en la reunión. En tales casos, si se ha recibido un aviso con suficiente antelación, conviene preparar instrucciones por escrito que abarquen esa contingencia.

1068. En Tasmania, en virtud de la Police Offences Act 1935 (Ley de 1935 sobre Perturbaciones del Orden Público) es ilegal perturbar una reunión pública desde dentro de la sala o edificio en que se celebre la reunión o desde sus proximidades.

1069. En relación con el comportamiento ofensivo, la mera manifestación de opiniones políticas o la violación de las normas del buen gusto no se consideran fundamento suficiente para condenar (Ball v. McIntyre (1966) 9 FLR 237). Análogamente, la desobediencia a la orden de un agente de policía de que se ponga término a una actividad legítima no constituye resistencia a la autoridad (Forbutt v. Blake (1981) 51 FLR 465).

Legislación de autorización

Nueva Gales del Sur

1070. En Nueva Gales del Sur, la Summary Offences Act (Ley de Faltas) protege en alguna medida a los participantes en una reunión pública o procesión.

1071. La parte cuarta de la Ley de Faltas establece un mecanismo por el que el organizador de una reunión o procesión propuestas en cualquier lugar público debe enviar una notificación por escrito, con siete días de antelación como mínimo, al Comisionado de Policía o a algún agente de policía. El incumplimiento de ese requisito no constituye una falta. Sin embargo, los participantes en una reunión que no haya sido "autorizada" serán responsables de los actos cometidos con el fin de participar en la reunión, o de la obstrucción del paso de personas o vehículos por un lugar público.

1072. Si la notificación se ha enviado con menos de siete días de antelación o el Comisionado no ha comunicado al organizador que no se opone a la celebración de la reunión, el organizador puede solicitar una orden judicial que autorice la reunión. El artículo 25 de la Ley faculta al Comisionado para solicitar del Tribunal Supremo una orden por la que se prohíba la reunión, a condición de que previamente haya solicitado y examinado explicaciones del organizador.

Queensland

1073. En Queensland entró en vigor el 23 de julio de 1992 la Peaceful Assembly Act 1992 (Ley de Reunión Pacífica de 1992), que tiene por objeto:

- Reconocer el derecho de reunión pacífica;
- Garantizar, en la medida en que proceda, que las personas puedan ejercer su derecho a participar en reuniones públicas;
- Garantizar que el ejercicio del derecho a participar en reuniones públicas sólo esté sujeto a las restricciones que son necesarias y razonables en una sociedad democrática para salvaguardar:
 - La seguridad pública;
 - El orden público; y
 - Los derechos y libertades de otras personas; y
- Garantizar que el derecho de las personas a participar en reuniones públicas pueda ejercerse sin mediar pagos por licencias, permisos u otras formas de autorización.

1074. Según la Ley de Reunión Pacífica, las reuniones públicas pueden ser autorizadas o no autorizadas. Las reuniones no autorizadas deben respetar las normas de tráfico y las reglamentaciones pertinentes de la autoridad local. No obstante, las reuniones no autorizadas son en principio legales. Las reuniones autorizadas están cubiertas por las disposiciones de inmunidad de la Ley y sus participantes quedan exentos de responsabilidad civil o penal por obstrucción de lugar público, a condición de que la reunión se desarrolle esencialmente de

conformidad con lo estipulado en la autorización. La Ley prevé que, para que pueda autorizarse una reunión en un lugar público, el organizador notifique sus intenciones al Comisionado de Policía y a la autoridad local. Si la reunión ha de atravesar un lugar público de la jurisdicción de otra autoridad local, ésta ha de ser también avisada. Si recibe la notificación con un mínimo de cinco días de antelación, el Comisionado o la autoridad local (o cualquiera de las autoridades locales, si más de una ha recibido la notificación) puede, si se cumplen determinadas condiciones, solicitar al Tribunal de Magistrados que prohíba la reunión. Esas condiciones son la de que se haya seguido un proceso especificado de consulta y mediación y la de que el solicitante, teniendo presentes las finalidades de la Ley, haya llegado a la conclusión razonable de que la reunión pondría en peligro la seguridad de las personas, causaría graves desórdenes públicos o afectaría a derechos o libertades de las personas.

1075. Cuando la notificación se ha hecho con menos de cinco días hábiles de antelación, el organizador puede solicitar al Tribunal de Magistrados que autorice la reunión. No está obligado a hacerlo si cada autoridad competente le ha notificado por escrito que no se opone a la celebración de una reunión, o si se ha seguido el procedimiento especificado de mediación.

Australia Meridional

1076. La Public Assemblies Act 1972 (Ley de Reuniones Públicas de 1972) estipula que la intención de celebrar una reunión en un lugar público puede comunicarse al Ministro, al Comisionado de Policía o al funcionario municipal competente. Cualquiera de esas personas puede impugnar la reunión, sobre la que entonces ha de decidir un juez. Si la reunión ha sido notificada, no ha encontrado oposición y se celebra de conformidad con lo estipulado en la propuesta, los participantes están exentos de responsabilidades civiles o penales por obstrucción de lugar público. La Ley no prevé ningún recurso específico en casos de obstaculización de una reunión legal.

1077. El artículo 59 de la Summary Offences Act 1953 (Ley de Faltas de 1953) faculta al Comisionado de Policía o al alcalde o presidente del consistorio para cursar instrucciones razonables con el fin de regular el tráfico y mantener el orden en casos de "eventos especiales" en lugares públicos. Cuando se han cursado instrucciones en virtud de ese artículo, un agente de policía puede dar órdenes a personas para garantizar el cumplimiento de esas instrucciones. La desobediencia a esas órdenes constituye una falta.

Tasmania

1078. El Reglamento de Tráfico (Misceláneo) de 1968 dispone que cuando haya de celebrarse una procesión en Hobart, Glenorchy o Launceston, deberá expedir el permiso correspondiente el Comisionado de Policía. Constituye una falta participar en una procesión a menos que se haya obtenido ese permiso y se sigan las instrucciones del Comisionado.

Australia Occidental

1079. En Australia Occidental, la Public Meetings and Processions Act 1984 (Ley de 1984 de Reuniones Públicas y Procesiones) estipula que para celebrar una reunión pública o una procesión por la calle ha de solicitarse un permiso del Comisionado de Policía. El permiso puede otorgarse incondicionalmente, o sujeto

a determinadas condiciones, o puede incluso denegarse o suspenderse si existen motivos razonables para temer graves desórdenes públicos, daños a propiedades, molestias, obstrucción excesiva de lugar público o riesgos para la seguridad. El solicitante puede entonces recurrir ante un magistrado. Los participantes en una reunión pública o procesión para la que se ha concedido un permiso no infringen otras disposiciones relativas a la circulación de vehículos o de peatones o a la obstrucción de calles.

Recursos

1080. No están previstos recursos concretos para el caso de que se obstaculice indebidamente o se impida de otro modo la celebración de una reunión legal. Sin embargo, atendiendo a las circunstancias de tal obstaculización, podrán incoarse procedimientos por agresión o detención injustificada. Todas las jurisdicciones tienen disposiciones para el examen de las quejas por un tribunal independiente o un defensor del pueblo, que pueden aplicarse a cualquier actuación indebida de la policía. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades está facultada para investigar las quejas contra medidas adoptadas por organismos federales o en virtud de leyes federales, cuando esas medidas o leyes menoscaben el derecho proclamado en este artículo.

Artículo 22

1081. En Australia la libertad de asociación está sujeta a pocas restricciones. Salvo en el caso de las asociaciones proscritas como asociaciones ilícitas, por lo general la legislación se ocupa de reglamentar las formas de asociación y sus correspondientes competencias y obligaciones. Los grupos políticos y organizaciones de derechos humanos gozan de la misma libertad de asociación que las organizaciones constituidas con otros fines. A continuación se esbozan someramente los tipos de asociaciones reconocidos por la legislación australiana, y se reseñan las disposiciones aplicables a los partidos políticos, las organizaciones de derechos humanos, las asociaciones ilícitas y los sindicatos.

Tipos de asociaciones

1082. La legislación australiana prevé diversas formas de funcionamiento de las asociaciones. Con arreglo al derecho de sociedades, las asociaciones pueden estar registradas o no registradas. Las asociaciones registradas gozan de muchas ventajas. Por ejemplo, pueden actuar como personas jurídicas, demandar y ser demandadas, poseer bienes y realizar transacciones comerciales. Al mismo tiempo están sujetas a determinadas normas, como la obligación de dar a conocer sus fines, de presentar estados de cuentas debidamente comprobados y de mantener registros de accionistas y propietarios.

1083. En lo que respecta a grupos más reducidos, como organizaciones o clubes comunitarios, la constitución en sociedad puede resultar menos ventajosa que la flexibilidad que entraña el funcionamiento como asociación no registrada.

1084. Algunas jurisdicciones estipulan el registro obligatorio de determinados clubes, normalmente los de mayor tamaño, que cuentan con locales propios y tienen licencia para expendir bebidas alcohólicas.

1085. La mayoría de las leyes contra la discriminación se aplican concretamente a la afiliación a clubes, aunque varían su grado de aplicación y las excepciones previstas. Por ejemplo, en Victoria la Equal Opportunity Act 1995 (Ley de 1995 de Igualdad de Oportunidades) se aplica a los clubes sociales, recreativos, deportivos o de servicio comunitario o a las organizaciones de servicio comunitario que ocupan tierras de la Corona o que reciben directa o indirectamente asistencia financiera del Gobierno del Estado o de un municipio. La Equal Opportunity Act 1984 (Ley de 1984 de Igualdad de Oportunidades) de Australia Occidental y la Sex Discrimination Act 1984 (Ley de 1984 sobre Discriminación Sexual) del Commonwealth se aplican a los clubes de al menos 30 socios que mantienen sus propios locales, total o parcialmente, con cargo a los fondos de la asociación y venden o suministran bebidas alcohólicas para el consumo en sus locales. En el Territorio de la Capital de Australia, la Discrimination Act 1991 (Ley de 1991 sobre Discriminación) se aplica a los clubes titulares de una licencia en virtud de la Liquor Act 1975 (Ley de 1975 sobre Bebidas Alcohólicas).

Partidos políticos

1086. La legislación australiana no impone restricción alguna a la libre formación de asociaciones políticas, incluidos partidos. Un partido político puede constituirse en diversas formas, entre ellas como asociación registrada o no registrada. De cualquier modo, la existencia de partidos políticos está reconocida en la legislación por la Ley Electoral de 1918 del Commonwealth.

1087. La Ley Electoral de 1918 estipula que un partido debe estar registrado para que pueda figurar su nombre junto al de sus candidatos en la papeleta de votación, así como para recibir financiación electoral. Funcionan partidos no registrados, y sus candidatos pueden presentarse a las elecciones, aunque no bajo el nombre del partido.

1088. Para que se pueda registrar en virtud de la Ley, un partido político debe cumplir algunos requisitos. Tiene que tener por lo menos un miembro electo en el Parlamento Federal o en el de alguno de los Estados, contar con un mínimo de 500 militantes, y estar constituido con arreglo a unos estatutos escritos. La Ley estipula asimismo que no pueden registrarse determinados nombres, como los que resulten obscenos o sean demasiado parecidos a los de otros partidos políticos ya registrados. Se prevé la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Administrativo de Apelación contra la decisión de denegar o cancelar el registro de un partido político.

1089. La Ley Electoral de 1918 del Commonwealth impone algunos controles a las actividades de los partidos políticos en Australia. Por ejemplo, todo candidato que concurra a una elección debe presentar a la Comisión Electoral una declaración del monto o valor y otros detalles pertinentes de las donaciones recibidas durante el período electoral. La Ley prohíbe recibir donaciones superiores a un monto determinado, a menos que el partido político conozca el nombre y la dirección del donante. Además, todos los candidatos deben presentar a la Comisión Electoral una declaración pormenorizada de los gastos en que hayan incurrido durante la campaña electoral. La Ley obliga a todos los partidos políticos a presentar al término de cada ejercicio estados financieros en que se indiquen los montos totales recibidos y gastados durante el año.

1090. Australia cuenta actualmente con más de 25 partidos políticos registrados con arreglo a la Ley de 1918, entre ellos el Partido de los Pueblos Indígenas de Australia, los Demócratas Australianos, el Partido Laborista Australiano, el Grupo Llamamiento a Australia (Fred Nile), el Partido Liberal de Australia, el Partido Nacional de Australia y el Partido Republicano de Australia.

Organizaciones de derechos humanos

1091. Como se ha señalado, no existen en Australia disposiciones específicas que regulen el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos pueden constituirse como asociaciones registradas o no registradas.

1092. A nivel federal, el Gobierno alienta el funcionamiento de organizaciones de derechos humanos mediante financiación directa o, más indirectamente, consultándolas en relación con determinadas cuestiones relacionadas con la justicia. En la actualidad las organizaciones de derechos humanos se reúnen regularmente en un foro con el Gobierno Federal para examinar cuestiones de derechos humanos desde una perspectiva internacional.

1093. Organizaciones de derechos humanos participaron también en la preparación del primer Plan de Acción Nacional sobre derechos humanos y de las aportaciones del Gobierno Federal a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague y a la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos. La delegación enviada por Australia a esa conferencia contaba con representantes de organizaciones no gubernamentales.

Asociaciones ilegales

1094. Algunas asociaciones son ilegales en virtud de la legislación australiana. Por ejemplo, el artículo 30A de la Ley Penal de 1914 del Commonwealth dispone que son ilegales las asociaciones que, por su constitución o propaganda, propugnen o fomenten el derrocamiento por la fuerza o la violencia de la Constitución o del Gobierno establecido del Commonwealth o de los Estados o que estén relacionadas con asociaciones que tienen tal fin, o que propugnen o fomenten la realización de actos sediciosos. La pertenencia o la prestación de asistencia a una de esas asociaciones constituye en general un delito.

1095. En algunas jurisdicciones australianas existen también leyes que sancionan como delito el comercio habitual con delincuentes notorios ("ladrones" en algunas jurisdicciones), prostitutas reconocidas o personas que hayan sido condenadas por carecer de medios lícitos de sustento. Esas disposiciones tienen por objeto prevenir los delitos desalentando las relaciones con delincuentes. Esa legislación se considera necesaria para mantener la seguridad y el orden públicos y preservar los derechos y libertades de terceros.

Sindicatos

1096. La comunidad australiana reconoce el derecho de sindicación y la libertad de los sindicatos para organizarse de conformidad con los intereses de sus afiliados.

1097. Según el estudio suplementario de la Oficina Australiana de Estadística sobre la situación laboral en Australia, en agosto de 1994:

- Había en Australia 6.525.800 asalariados;
- De ellos estaban afiliados a sindicatos en su empleo principal 2.283.400, es decir el 35 por ciento del total; y
- El 37,9 por ciento de los hombres empleados y el 31,3 por ciento de las mujeres empleadas estaban afiliados a sindicatos.

1098. Sin embargo, la afiliación sindical está disminuyendo, En el año concluido el 30 de junio de 1994 disminuyó en 109.900 personas, es decir, en un 4 por ciento, y de 1990 a 1991 había disminuido en un 1 por ciento, de 1991 a 1992 en un 7 por ciento y de 1992 a 1993 en un 4 por ciento.

1099. En Australia la fundación y el funcionamiento de los sindicatos no están sujetos a requisitos formales ni sustantivos. Sin embargo, para su registro o reconocimiento con arreglo al ordenamiento federal o estatal de relaciones laborales, los sindicatos deben cumplir determinados requisitos estipulados por la legislación. Esos requisitos varían de una jurisdicción a otra y se reseñan a continuación. El registro o el reconocimiento con arreglo a los diversos sistemas de relaciones laborales entrañan determinadas ventajas y obligaciones.

Registro

Legislación federal

1100. La Industrial Relations Act 1988 (Ley de Relaciones Laborales de 1988) del Commonwealth rige el sistema de relaciones laborales a nivel federal. A grandes rasgos, las condiciones para el registro en el sistema federal son las siguientes:

- El sindicato ha de ser una organización de empleados constituida de buena fe;
- Ha de contar con un número mínimo de afiliados (véase infra la sección relativa al tamaño de los sindicatos); y
- Ha de contar con unos estatutos que regulen cuestiones tales como el funcionamiento democrático de la organización y las condiciones de afiliación y de baja.

Ventajas del registro

Derecho de sindicación

1101. Ante todo, la Ley protege el derecho de las personas a sindicarse. El párrafo 1 de su artículo 261 dice lo siguiente:

"A reserva de cualquier laudo u orden de la Comisión Australiana de Relaciones Laborales, toda persona que cumpla los requisitos para afiliarse a una organización de empleados con arreglo a los estatutos de la organización en cuanto a las ocupaciones o sectores en que han de estar

empleados sus miembros, tiene derecho, salvo en caso de mala reputación notoria, y previo pago de las cuotas correspondientes:

a ser admitida como miembro de la organización; y

a permanecer en ella mientras observe lo dispuesto en los estatutos".

1102. En los párrafos 7) a 12) del artículo 261 se establecen procedimientos por los que el Tribunal de Relaciones Laborales constituido en virtud de la Ley (véase infra) puede examinar y resolver reclamaciones en relación con el derecho de personas a afiliarse a organizaciones registradas con arreglo a la Ley o a permanecer en ellas.

Protección contra la discriminación

1103. En segundo lugar, la Ley de Relaciones Laborales de 1988 prohíbe a los empleadores despedir a un empleado o discriminarlo en su situación laboral por su pertenencia a un sindicato o su actividad en él. También está prohibido inducir a un empleado a abandonar su sindicato.

1104. En tercer lugar, la Ley reconoce el derecho de huelga en determinadas circunstancias especificadas. Excepto en casos de comportamientos que causen o puedan causar lesiones personales, destrucción o daños de propiedades o la apropiación indebida de propiedades, ningún Estado ni territorio tiene legislación que impida acciones reivindicativas "protegidas".

1105. Por "acciones protegidas" se entiende acciones reivindicativas adoptadas en apoyo de un acuerdo certificado propuesto por un empleado o por un sindicato registrado. Esas acciones están protegidas sólo durante el "período de negociación" de ese acuerdo. El "período de negociación" comienza siete días después de que la parte solicitante comunique por escrito a la otra parte o demás partes interesadas y a la Comisión Australiana de Relaciones Laborales su voluntad de concertar y certificar un acuerdo, y concluye cuando se firma un acuerdo escrito o cuando la parte solicitante comunica por escrito a la otra parte o demás partes interesadas que ya no desea concertar el acuerdo, o la Comisión Australiana de Relaciones Laborales declara terminado el período de negociación de conformidad con lo dispuesto en la legislación.

Boicots secundarios

1106. Entre las modificaciones de la Ley de Relaciones Laborales de 1988 se cuenta la inclusión del artículo 162, que prohíbe los boicots secundarios. Esa prohibición no se aplica, sin embargo, a los casos en que el boicot se declara en apoyo de reivindicaciones que afectan directamente a la persona que adopta la medida. También está exenta de la prohibición la actividad de los piquetes pacíficos.

1107. No pueden incoarse procedimientos penales contra una persona simplemente porque haya participado en un boicot. Por otra parte, una persona que haya sufrido pérdidas o daños como consecuencia de un boicot puede obtener reparación ante el Tribunal de Relaciones Laborales.

Obligaciones que entraña el registro

1108. El registro, que es voluntario, entraña ciertas obligaciones para los sindicatos. En el sistema federal, por ejemplo, esas obligaciones son las siguientes:

- Cumplir determinados requisitos, estipulados por la legislación, que tienen por objeto garantizar el control democrático de las organizaciones por sus miembros y la protección de sus intereses;
- Notificar a la Comisión Australiana de Relaciones Laborales los conflictos laborales en los que sea parte la organización y comparecer ante la Comisión cuando ésta lo solicite en procedimientos relativos a un conflicto laboral en los que la organización sea parte; y
- Aceptar, a reserva de los derechos de revisión y apelación previstos por la ley, las decisiones de la Comisión en las cuestiones que afecten a la organización de que se trate y a sus miembros (la inobservancia de los laudos y órdenes de la Comisión puede conducir a la cancelación del registro de la organización infractora).

Negociación colectiva

1109. En 1993 el Gobierno Federal modificó la Ley de Relaciones Laborales de 1988 para establecer un sistema de acuerdos certificados y acuerdos flexibles de empresa en sustitución del sistema de laudos de alcance sectorial.

Tamaño de los sindicatos

1110. En 1990 el Gobierno Federal aumentó de 1.000 a 10.000 el número mínimo de afiliados que ha de tener un sindicato para que se permita su registro. También se previó la posibilidad de cancelar el registro de los sindicatos registrados que contaran con menos de 10.000 afiliados a menos que demostraran que circunstancias especiales justificaban su mantenimiento.

1111. El requisito de afiliación mínima fue objeto de una reclamación de la Confederación de la Industria Australiana y de la Organización Internacional de Empleadores ante el Comité sobre la Libertad de Asociación de la Organización Internacional del Trabajo (caso N° 1559). Los reclamantes argumentaron que ese requisito restringía injustificadamente el registro de nuevas organizaciones de empleados en empresas individuales y pequeñas industrias y limitaba la libertad de los empleados para escoger un sindicato al que afiliarse.

1112. Tras examinar la reclamación y la respuesta del Gobierno, el Comité llegó a la conclusión de que la introducción del requisito de contar con un mínimo de 10.000 afiliados "podría influir indebidamente en la libre elección de un sindicato por los trabajadores, aun cuando el registro federal sea sólo una de las alternativas para la protección de sus derechos".

1113. El Comité recomendó que el Gobierno "adoptara medidas para que no se exigiera a los sindicatos contar con 10.000 afiliados ni demostrar la existencia de circunstancias especiales para poder acceder a los beneficios dimanantes del registro en el sistema federal".

1114. Posteriormente el Gobierno Federal modificó la Ley de Relaciones Laborales de 1988 con el fin, entre otras cosas, de reducir de 10.000 a 100 el número mínimo de afiliados para el registro de nuevos sindicatos o el mantenimiento de los ya registrados, y suprimir las disposiciones referentes a la revisión del registro de las organizaciones con un número de afiliados inferior al mínimo estipulado. Esas modificaciones entraron en vigor el 2 de enero de 1994.

1115. En el cuadro 18 se clasifican los sindicatos por tamaños. El número de sindicatos registrados a nivel federal disminuyó de 148 en diciembre de 1984 a 47 en agosto de 1995.

Tribunal de Relaciones Laborales

1116. El Tribunal de Relaciones Laborales de Australia empezó a funcionar el 30 de marzo de 1994 y se ocupa de las siguientes cuestiones:

- Aplicación e interpretación de los laudos y órdenes de la Comisión Australiana de Relaciones Laborales;
- Determinadas cuestiones referentes a las organizaciones registradas y sus afiliados;
- Acciones relacionadas con boicots secundarios;
- Acciones relacionadas con despidos improcedentes; y
- Aplicación de los derechos de los empleados con arreglo a las nuevas disposiciones sobre prestaciones mínimas.

1117. Algunas de estas cuestiones, que figuran prominentemente entre las nuevas esferas de trabajo del Tribunal, eran antes competencia de la antigua División Laboral del Tribunal Federal.

1118. El Tribunal de Relaciones Laborales está integrado por un total de 11 jueces nombrados en diferentes lugares de Australia, lo que garantiza que la mayoría de las capitales cuenten con un juez de asuntos laborales. Todos los jueces forman parte a la vez del Tribunal de Relaciones Laborales y del Tribunal Federal.

Legislación estatal

Nueva Gales del Sur

1119. El 23 de agosto de 1991 entró en vigor la Industrial Arbitration (Unions) Act 1991 (Ley de 1991 sobre el Arbitraje Laboral (Sindicatos)), que racionaliza el régimen aplicado a las organizaciones laborales en Nueva Gales del Sur. Los nuevos sindicatos y asociaciones de empleadores y empleados se constituirán y registrarán con arreglo a la nueva Ley.

1120. Se han examinado cuidadosamente las medidas referentes al mantenimiento de la situación jurídica de los sindicatos existentes. En primer lugar, los sindicatos existentes no constituidos en sociedad mantendrán su registro con arreglo a la nueva Ley y se constituirán en sociedad cuando el Registrador

Industrial confirme que cumplen los requisitos de la nueva parte 11 de la Ley. En segundo lugar, los sindicatos existentes ya constituidos en sociedad con arreglo a otras leyes de Nueva Gales del Sur seguirán registrados al amparo de la nueva Ley y tendrán que cumplir los requisitos pertinentes de la nueva parte 11, pero en lo demás seguirán rigiéndose por las disposiciones de la ley con arreglo a la cual se constituyeron. Para facilitar el paso del antiguo sistema al nuevo, las disposiciones transitorias otorgan a los sindicatos existentes un período de 18 meses, a partir de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, para cumplir los nuevos requisitos de la parte 11 de la Ley de 1991 sobre el Arbitraje Laboral (Sindicatos).

1121. La Ley regula las elecciones sindicales y las obligaciones de los dirigentes, así como la responsabilidad financiera de los sindicatos y sus funcionarios. Estipula asimismo que, además de la posibilidad de suspensión o cancelación en virtud de la Essential Services Act 1988 (Ley de 1988 sobre Servicios Esenciales), cuando un sindicato incurre en comportamientos indebidos, la Comisión de Relaciones Laborales puede suspender o cancelar su registro, según la gravedad de las faltas.

Queensland

1122. La legislación de Queensland prevé y alienta el registro de organizaciones de empleados y empleadores, que se consideran esenciales para el funcionamiento del sistema laboral.

1123. La parte 14, "organizaciones sindicales", de la Industrial Relations Act 1990 (Ley de Relaciones Laborales de 1990) trata, entre otras cuestiones, del registro de las organizaciones sindicales de empleadores y empleados, así como de la baja de afiliados.

1124. La sección 2 de la parte 14 de la Ley esboza los requisitos y procedimientos para el registro. En particular, en el artículo 328 se indican los procedimientos que han de seguirse cuando una asociación solicita ser registrada.

1125. La solicitud de registro de una asociación de empleadores ha de acompañarse de una lista de los afiliados, con sus nombres y apellidos y direcciones comerciales; una lista de cargos electos; los estatutos de la asociación; en el caso de asociaciones integradas por más de una persona, una copia de la resolución por la que se decidió solicitar el registro; una lista de funciones asignadas a los empleados; pormenores de los mecanismos de control de las propiedades y fondos invertidos de la asociación; y el importe de las tasas correspondientes.

1126. A menos que la comisión laboral del Estado estime que concurren circunstancias especiales que justifican el registro, tanto las asociaciones de empleadores como las de empleados están sujetas a un requisito numérico. La Ley estipula que una organización de empleados ha de contar por lo menos con 100 afiliados que sean asalariados, y una asociación de empleadores ha de contar con afiliados que conjuntamente hayan empleado a un promedio mensual de por lo menos 100 asalariados durante el período de seis meses inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.

1127. Además, la Ley de 1990 estipula que no se concederá el registro a menos que:

- Los estatutos de la asociación estén en conformidad con la Ley y sean aprobados por la comisión laboral del Estado;
- El nombre de la asociación no sea el de otra asociación existente;
- El registro de la asociación contribuya a promover los objetivos de la Ley; y
- No exista ninguna otra organización a la que sea razonablemente posible afiliarse.

1128. El artículo 387 de la Ley de 1990 regula el procedimiento por el que puede darse de baja un afiliado a una organización sindical. La baja se produce cuando el afiliado notifica su intención por escrito a la organización, ya sea por correo o por entrega directa.

Australia Meridional

1129. La Industrial and Employee Relations Act 1994 (Ley de Relaciones Laborales de 1994) regula el establecimiento de asociaciones sindicales de empleados. Se establece libertad absoluta de asociación, por lo que ninguna persona puede ser obligada a afiliarse a una asociación o a permanecer en ella. Al mismo tiempo, si una persona reúne las condiciones para pertenecer a una asociación, nadie (salvo la propia asociación en cumplimiento de sus estatutos) puede impedirle afiliarse a la asociación o permanecer en ella.

1130. El artículo 122 de la Ley de 1994 estipula las condiciones en que la Comisión de Relaciones Laborales de Australia Meridional puede registrar una asociación. Ésta ha de reunir los requisitos pertinentes (es decir, contar con un mínimo de 100 afiliados que sean asalariados o constituir una sección o parte de un sindicato registrado a nivel federal); sus estatutos han de estar en conformidad con la Ley; deben cumplirse determinadas condiciones prescritas (si las hubiere); y el registro de la asociación ha de efectuarse de conformidad con las disposiciones y objetivos de la Ley.

1131. En Australia Meridional es ilegal discriminar a favor o en contra de una persona por su pertenencia o no pertenencia a un sindicato.

Victoria

1132. La Employee Relations Act 1992 (Ley de 1992 sobre Relaciones Laborales), que sustituye a la Industrial Relations Act 1979, regula el reconocimiento de las "asociaciones de empleados". Se reconocerá a una asociación cuando sea una "asociación genuina en relación con el empleador o el sector de que se trate" y haya sido autorizada por un asalariado del empleador o del sector de que se trate para representarlo en negociaciones o procedimientos. El reconocimiento otorga a la asociación el derecho de participar en procedimientos y de representar a sus afiliados en la negociación de acuerdos laborales.

Australia Occidental

1133. En virtud de una modificación de la Industrial Relations Act 1979 (Ley de Relaciones Laborales de 1979), es ilegal tratar favorablemente o desfavorablemente a una persona por su pertenencia o no pertenencia a una organización de empleados o empleadores.

Territorios

1134. Durante 1992, la Oficina de los Territorios celebró conversaciones con diversas organizaciones sindicales, entre ellas el Consejo de Sindicatos Australianos, el Consejo Sindical de Australia Occidental, la Unión de Trabajadores de la Isla de Christmas, otros sindicatos y los organismos competentes del Commonwealth y de la administración de Australia Occidental con miras a normalizar las relaciones laborales en los territorios del Océano Índico.

1135. El ámbito de aplicación de la Federal Industrial Relations Act 1988 (Ley Federal de Relaciones Laborales de 1988) se extendió a la Isla de Christmas y las Islas Cocos (Keeling) a partir del 1º de julio de 1992. El Ministro de Relaciones Laborales acordó registrar a la Unión de Trabajadores de la Isla de Christmas (UCIW) por un período de tres años con arreglo a la Ley de 1988, y considerar como laudos de la Comisión Australiana de Relaciones Laborales los laudos pronunciados en virtud de la Ordenanza de 1976 de Relaciones Laborales de la Isla de Christmas. La UCIW ha solicitado y obtenido el registro como organización de empleados en virtud de la Ley de 1988.

1136. La Employment Act 1988 (Ley del Empleo de 1988) de la Isla de Norfolk prohíbe despedir o tratar discriminatoriamente a un empleado por su condición de cargo electo, delegado o afiliado de una organización dedicada a promover o proteger los intereses del conjunto de los empleados o de una categoría de empleados.

Artículo 23

1137. En Australia la familia es una unidad social fundamental cuya importancia está reconocida implícita y explícitamente. Las cuestiones relacionadas con el matrimonio y la protección de la familia competen al Gobierno Federal y a los Estados. El artículo 51 de la Constitución de Australia faculta al Gobierno Federal para promulgar leyes que promuevan "la paz, el orden y el buen gobierno" de Australia en relación, entre otras cosas, con:

- Los matrimonios;
- Las causas matrimoniales y de divorcio; y, en relación con ellas, los derechos de los padres, la patria potestad y la tutela de niños; y
- Las prestaciones por maternidad, las pensiones de viudedad y las pensiones alimenticias.

1138. El Gobierno Federal está facultado para legislar sobre el matrimonio, el divorcio y cuestiones tales como los derechos de los padres, la patria potestad

y la tutela de los hijos en casos de divorcio. En el caso de relaciones de hecho, la responsabilidad constitucional es de los Estados, a los que también incumbe la regulación y prestación de los servicios de salud y comunitarios.

1139. En ejercicio de sus poderes constitucionales, el Parlamento Federal ha promulgado la Marriage Act 1961 (Ley de 1961 sobre el Matrimonio), la Family Law Act 1975 (Ley de 1975 sobre el Derecho de Familia) y diversa legislación de asistencia social.

La familia

1140. El principio de que la familia es la unidad fundamental de la sociedad se proclama explícitamente en la Ley federal de 1975 como en la legislación estatal correspondiente. Por ejemplo, figura en la Family Court Act 1975 (Ley de 1975 sobre el Tribunal de Familia) de Australia Occidental, y en la Children's Protection Act 1993 (Ley de 1993 sobre la Protección de la Infancia) y la Family and Community Services Act 1972 (Ley de 1972 sobre Servicios a la Familia y a la Comunidad) de Australia Meridional.

1141. El reconocimiento positivo del principio se afianzó cuando en virtud de la Ley federal de 1975 se creó el Instituto de Estudios sobre la Familia, que tiene por función alentar investigaciones coordinadas sobre los factores que afectan a la estabilidad matrimonial y familiar en Australia, con objeto de promover la protección de la familia como unidad natural y fundamental de la sociedad. Los Estados cuentan asimismo con mecanismos por los que se refuerza ese principio. Por ejemplo, en Australia Meridional la Oficina de la Familia y la Infancia promueve la sensibilización de todos los departamentos de la administración pública sobre las cuestiones y necesidades de las familias, así como la utilización en la administración pública de informes sobre el impacto familiar, con el fin de tener en cuenta los efectos que tienen sobre las familias las decisiones del sector público.

1142. En Australia, como en otros países occidentales, la modalidad de familia más extendida es, con mucho, la familia nuclear convencional. En 1993 había en el país 4,63 millones de familias. Como se muestra en el cuadro 19, esa cifra puede desglosarse como sigue: el 42,9 por ciento de las familias estaban integradas por parejas con hijos, el 9 por ciento por un solo progenitor con sus hijos, el 32 por ciento por parejas sin hijos, y el 10,2 por ciento por personas mayores de 15 años que vivían solas.

1143. En el último decenio ha aumentado el número de familias monoparentales encabezadas por mujeres. También ha aumentado el número de parejas de hecho. En 1992 las parejas de hecho representaban el 8 por ciento del total, y el 56 por ciento de las parejas que se casaron en ese año habían convivido antes del matrimonio, frente a sólo un 16 por ciento de las parejas que contrajeron matrimonio en 1975. Además, en 1993 los hijos nacidos fuera del matrimonio representaban el 25 por ciento del total de los nacimientos, lo que supone un aumento del 6 por ciento respecto de 1963. Al mismo tiempo se ha incrementado el reconocimiento de la paternidad (véase el cuadro 20).

1144. También es superior a la norma histórica la proporción de parejas sin hijos. Durante los últimos 20 años, la población infantil ha permanecido prácticamente constante, en torno a 3,8 millones. Sin embargo, la proporción de niños sobre la población ha disminuido de alrededor del 30 por ciento a finales

del decenio de 1950 al 22 por ciento en 1993, y se calcula que en 2041 se situará entre 17 y 19 por ciento. Esa tendencia es consecuencia del descenso de la tasa de fecundidad, de 2,5 hijos por mujer en 1973 a 1,9 en 1993. En 1992 el promedio de hijos era de 1,9 en las familias biparentales y de 1,6 en las familias monoparentales.

1145. En los últimos 20 años han disminuido las tasas de nupcialidad y ha aumentado la edad media al contraer el primer matrimonio (véase el cuadro 21). Ello se debe en parte a la mala situación económica, a modificaciones de la legislación sobre el divorcio y a cambios en las actitudes hacia el matrimonio y la vivienda familiar. En 1993 la edad media de las mujeres que contrajeron matrimonio fue de 26 años, y la de los hombres de 29 años.

1146. El Gobierno Federal aprovechó el Año Internacional de la Familia para rendir homenaje a las familias australianas y promover una mejor comprensión de sus aportaciones a la sociedad australiana. En Australia Meridional el Gobierno nombró "embajadores familiares", y se celebrará en breve una Cumbre sobre la Familia.

1147. En 1994 el Gobierno Federal estableció un Consejo de Servicios a la Familia para que lo asesorara en las cuestiones de su competencia. El Consejo comprende representantes de los tres órganos principales que reciben financiación para prestar servicios a las familias (Relationships Australia, Centacare Australia y Family Services Australia), así como a personas escogidas por sus conocimientos generales y especializados sobre cuestiones relacionadas con los servicios a la familia.

Medidas de apoyo a las familias

1148. Todos los gobiernos australianos aplican medidas de apoyo a las familias. Cabe destacar los servicios de intervención temprana y preservación de la familia en casos en que se aprecia un riesgo elevado de que los padres pierdan la tutela de sus hijos; servicios específicos de preservación para familias de niños con discapacidades; medidas de apoyo a las familias aborígenes; programas de preparación para el matrimonio o la relación y de formación familiar; y centros comunitarios y actividades de desarrollo de vecindarios.

1149. En la sección E del informe inicial presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño figura más información sobre las disposiciones de ámbito estatal.

Subsidios para servicios suplementarios

1150. Se proporcionan subsidios para servicios suplementarios a niños con necesidades especiales o adicionales, a fin de que puedan recibir atención apropiada en los servicios generales y éstos se presten en forma adecuada a la cultura o el desarrollo de cada niño.

Apoyo a programas

1151. Se proporciona asistencia para la capacitación en el servicio y la mejora de la gestión con el fin de promover la eficiencia y mejorar la base de conocimientos de los servicios a la infancia financiados por la administración

federal. Los servicios de actividades para la juventud promueven actividades estructuradas y apoyo positivo entre coetáneos en el marco de un programa innovador de actividades extraescolares y de vacaciones para niños de 11 a 16 años.

Inmigración y familias étnicas

1152. La inmigración familiar es un componente integral del programa de inmigración. En el marco de la categoría familiar preferencial, se gestiona la inmigración de cónyuges, prometidos, hijos a cargo, niños cuya adopción se ha solicitado, progenitores, compañeros interdependientes y otros allegados. Los solicitantes deben demostrar que tienen una relación estrecha con el garante, satisfacer los criterios de selección pertinentes y cumplir los requisitos médicos y de carácter.

1153. También puede gestionarse la inmigración de miembros de la familia ampliada (hermanos, progenitores en edad laboral que no cumplan el criterio de "equilibrio familiar", hijos independientes, sobrinos) a través de un sistema de selección por puntos. En la prueba por la que se asignan los puntos se valoran la edad y las aptitudes ocupacionales del solicitante y se otorgan puntos adicionales por el grado de integración del garante en Australia.

Matrimonio

1154. En general, en Australia todos los hombres y mujeres en edad de contraer matrimonio tienen derecho a casarse y fundar una familia siempre que tengan la debida capacidad jurídica para ello. El derecho al matrimonio y los procedimientos matrimoniales se rigen en Australia por la Marriage Act 1961 (Ley de 1961 sobre el Matrimonio), de ámbito federal. Los derechos y obligaciones de los contrayentes (y las disposiciones aplicables a la disolución del matrimonio) figuran en la Ley de 1975 sobre el Derecho de Familia, de ámbito federal, que se aplica a todos los Estados.

1155. En virtud de la Ley de 1961, pueden celebrar matrimonios los ministros de una religión reconocidos como celebrantes autorizados, los registradores de distrito y demás personas autorizadas por el Fiscal General como celebrantes. Las personas que se proponen contraer matrimonio deben notificarlo al celebrante por lo menos un mes civil antes del matrimonio, pero con no más de seis meses de antelación. El celebrante debe transmitir el certificado oficial del matrimonio a un registrador de distrito del Estado en que se celebró.

1156. En cuanto a la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la Ley de 1961 enumera los siguientes impedimentos para la celebración de un matrimonio válido:

- Un matrimonio anterior no anulado;
- La existencia de una relación prohibida;
- La falta de auténtico consentimiento, por haberse obtenido éste coercitiva o fraudulentamente; y
- Minoría de edad.

1157. La edad mínima legal a la que las personas son libres de contraer matrimonio es de 18 años para ambos sexos. Un varón o una mujer menor de 18 años pero que haya cumplido los 16 puede contraer matrimonio con una persona del sexo opuesto que haya cumplido los 18 años si cuenta con el consentimiento del padre, la madre o un tutor y la autorización de un juez o magistrado que, tras examinar los hechos y circunstancias pertinentes, determine que circunstancias excepcionales justifican que se permita el matrimonio aunque el solicitante no haya alcanzado la edad de 18 años.

1158. Como se ha señalado, el matrimonio es nulo si no ha habido verdadero consentimiento de alguna de las partes. Los matrimonios tribales de los aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres, celebrados a menudo sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes, no se reconocen a efectos de la Ley de 1961. Se reconocen, en cambio, en el Territorio del Norte para determinados fines, por ejemplo en asuntos tales como reclamaciones sobre el patrimonio de un cónyuge difunto y la situación de los hijos.

1159. En todas las jurisdicciones los presos pueden contraer matrimonio si cuentan con el debido permiso de las autoridades carcelarias. Las solicitudes se examinan caso por caso, lo que permite a las autoridades tomar en consideración las necesidades del preso y las condiciones de disciplina en el sistema penitenciario.

1160. Los matrimonios contraídos en el extranjero se reconocen en Australia. La norma general es la de que un matrimonio se reconoce como válido en Australia si lo era en el país en que se contrajo en el momento de su celebración, o adquirió validez posteriormente en ese país.

Derecho a fundar una familia

1161. El Gobierno viene aportando fondos para actividades de planificación de la familia a nivel nacional e internacional desde 1973, y en 1974 estableció en el Departamento Federal de Salud su Programa de Planificación de la Familia, en cuyo marco se proporcionan fondos a asociaciones no gubernamentales de planificación de la familia y organizaciones de planificación natural de la familia de ámbito estatal para la aplicación a nivel profesional y de la comunidad de programas de educación, información y capacitación. Todos los servicios médicos de planificación de la familia pueden acogerse a las prestaciones de seguro de salud.

1162. En el marco de Medicare funciona un sistema de asistencia de salud que proporciona servicios hospitalarios gratuitos. Los anticonceptivos orales, que constituyen el método anticonceptivo más utilizado por las mujeres jóvenes, están subvencionados por un plan de prestaciones farmacéuticas, y otros anticonceptivos están exentos del impuesto sobre las ventas. El objetivo del Programa de Planificación de la Familia es promover la salud y el bienestar sexuales y reproductivos de todos los grupos de la comunidad en el contexto de un desarrollo sostenible.

1163. Es prácticamente uniforme la legislación federal y estatal sobre la filiación de los niños concebidos por inseminación artificial o fecundación in vitro. La legislación federal pertinente, que consiste en el artículo 60B de la Ley de 1975 sobre el Derecho de la Familia, sólo se aplica en el contexto de esa

Ley. Por lo general, en cuestiones relacionadas con la filiación se aplica a todos los efectos la legislación estatal correspondiente.

1164. En términos generales, la legislación estatal atribuye a todos los efectos la paternidad del niño al marido o cónyuge de facto de la mujer que da a luz como resultado de un procedimiento de inseminación artificial o fecundación in vitro, a condición de que haya prestado su consentimiento al procedimiento de fecundación. Todas las jurisdicciones, con la excepción de Nueva Gales del Sur, tienen también disposiciones sobre la maternidad. En Australia Meridional, el Territorio del Norte y el Territorio de la Capital de Australia la mujer que da a luz como resultado de un procedimiento de fecundación in vitro con el óvulo de una donante se considera la madre del niño. En Victoria, Queensland, Australia Occidental y Tasmania esa presunción sólo es aplicable a una mujer casada que se haya sometido al procedimiento de fecundación con el consentimiento de su marido.

Adopción

1165. En Australia la regulación de los procedimientos de adopción de niños compete principalmente a los Estados. La mayoría de los Estados australianos han reformado o están reformando su legislación sobre adopciones, que data del decenio de 1960. De 1964 a 1968 se promulgaron en todos los Estados leyes sobre adopción basadas en un proyecto de ley modelo que aprobó el Comité Permanente de Fiscales Generales. En esas leyes se introdujo el principio, ya establecido en la legislación relativa a los pleitos sobre custodia, de que la consideración principal debía ser la de proteger el bienestar y los intereses del niño. El niño adoptado se considera a todos los efectos como fruto del matrimonio de los padres adoptivos, por lo que legalmente deja de ser hijo de sus progenitores biológicos. También se adoptaron principios uniformes para el registro de las adopciones y el reconocimiento jurisdiccional de las resoluciones de adopción extranjeras y de otros Estados.

1166. En la sección E del informe inicial presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño figura más información sobre las disposiciones de los Estados y Territorios en materia de adopción.

Derechos y responsabilidades de los cónyuges

1167. En virtud de la Ley Federal de 1961 sobre el Matrimonio, los derechos y responsabilidades derivados del matrimonio son los mismos para ambos cónyuges.

1168. En el ordenamiento jurídico de Australia, el matrimonio con un ciudadano australiano no permite obtener automáticamente la ciudadanía australiana. La Australian Citizenship Act 1948 (Ley de 1948 sobre la Ciudadanía Australiana) estipula, entre otras cosas, que para que se pueda otorgar la ciudadanía australiana a una persona, ésta debe haber cumplido 18 años de edad y haber sido en total residente permanente de Australia durante uno de los dos años o dos de los cinco años anteriores a la solicitud. También puede otorgarse la ciudadanía australiana a una persona que sea residente permanente y cónyuge de un ciudadano australiano si ha vivido ininterrumpidamente en Australia como residente permanente durante los 12 meses anteriores a la solicitud y podría sufrir considerables dificultades o padecimientos de no concedérsele la ciudadanía. En el caso, poco frecuente, de que una persona pierda su nacionalidad o ciudadanía al contraer matrimonio con un ciudadano de Australia, el Departamento de

Inmigración y Asuntos Étnicos puede concederle un trato especial para agilizar el proceso de concesión de la ciudadanía australiana y evitarle la condición de apátrida. El Ministro está facultado para optar por ese procedimiento con arreglo al párrafo 9) del artículo 13 de la Ley de 1948.

1169. La Ley especifica asimismo las situaciones en las que un ciudadano australiano puede perder su ciudadanía. Eso ocurre, por ejemplo, cuando un ciudadano australiano hace algo cuyo único o principal propósito es adquirir la nacionalidad o ciudadanía de un país extranjero, y que tiene por efecto la adquisición de esa nacionalidad o ciudadanía. Esa disposición, sin embargo, no se aplica al acto de contraer matrimonio.

1170. Los derechos y responsabilidades de los progenitores en relación con los niños habidos fuera del matrimonio están regulados por la Ley de 1975 sobre el Derecho de Familia, excepto en Australia Occidental, donde se aplica la legislación estatal. En 1995, el Gobierno Federal promulgó modificaciones de la Ley de 1975, suprimiendo los conceptos conexos de custodia y derechos de visita y las responsabilidades de tutela actualmente confiadas a los padres. El concepto de custodia, en particular, ha tenido connotaciones de propiedad de los niños. En algunos casos, ha conducido al padre o a la madre a quien se había confiado la custodia a creer que el niño era posesión suya y que podía hacer lo que quisiera con él, regulando incluso las visitas del otro progenitor, a pesar de órdenes judiciales en contrario.

1171. La Ley define la responsabilidad de los padres como conjunto de derechos, poderes, responsabilidades y facultades que la legislación otorga a los padres y tutores en relación con los niños. Ya no se considera a los padres tutores legales del niño, sino depositarios de esa responsabilidad. Es importante destacar que el concepto de responsabilidad de los padres no otorga expresamente derecho alguno respecto del niño. Ya no hay, por ejemplo, un derecho de custodia ni derechos de visita, sino que los padres tienen la obligación de ejercer su responsabilidad atendiendo a los intereses del niño. La Ley estipula también claramente que la responsabilidad de los padres no depende de si están casados o separados o nunca han estado casados ni han convivido.

Divorcio

1172. Por la Ley de 1975 sobre el Derecho de Familia se estableció el Tribunal de Familia de Australia, concebido como jurisdicción especializada en la que se examinarían y resolverían los casos matrimoniales. El Tribunal de Familia de Australia Occidental desempeña en ese Estado las mismas funciones que el Tribunal de Familia de Australia en otras jurisdicciones. Excepto en Australia Occidental, los procedimientos relacionados con la Ley de 1975 pueden incoarse ante el Tribunal de Familia de Australia o, en algunos casos, ante el tribunal de primera instancia competente. En Australia Occidental la jurisdicción originaria para aplicar la Ley corresponde al Tribunal de Familia de Australia Occidental. En el Territorio del Norte, la jurisdicción corresponde concurrentemente al Tribunal de Familia y al Tribunal Supremo. El Registro de Sydney del Tribunal de Familia de Australia es el registro principal para cuestiones relacionadas con el derecho de familia en la Isla de Norfolk, salvo en los asuntos de los que puede entender un tribunal de primera instancia.

1173. Al examinar los casos, el Tribunal de Familia de Australia está obligado por la Ley de 1975 a tener en cuenta la necesidad de otorgar la máxima protección y asistencia posibles a la familia como unidad básica natural de la sociedad, en particular cuando es responsable del cuidado y la educación de hijos a cargo.

1174. En virtud de la Ley de 1975, una sentencia provisional de divorcio no se convierte en definitiva hasta que el tribunal se cerciora de que no hay hijos del matrimonio menores de 18 años o, de haberlos, se han adoptado las disposiciones necesarias para garantizar su bienestar, o se dan circunstancias especiales que justifican una sentencia definitiva aun en ausencia de tales disposiciones.

1175. Tanto el Tribunal de Familia de Australia como el Tribunal de Familia de Australia Occidental se establecieron con un servicio de asesoría que constituye parte integral del Tribunal. Al establecer ese servicio, la intención del Gobierno Federal era alentar a las partes a resolver sus diferencias con la asistencia de profesionales sin necesidad de un fallo impuesto por el Tribunal. Además de ese servicio de asesoramiento, la Ley de 1975 prevé la prestación de otros servicios similares de asesoramiento y mediación matrimonial sufragados por el Gobierno Federal.

Parejas de hecho

1176. Las relaciones patrimoniales y financieras entre las parejas de hecho se rigen por la legislación estatal, aunque el Tribunal Federal de Familia puede ejercer su jurisdicción en determinados casos en virtud de los mecanismos de traspaso previstos en la legislación. Cuatro Estados cuentan con disposiciones legales que han sustituido o suplementado al régimen del common law, en un intento de evitar las injusticias resultantes a menudo de la aplicación de los principios del derecho fiduciario y de propiedad a las diferencias surgidas en las relaciones de pareja. Sin embargo, esas disposiciones varían considerablemente de un Estado a otro. Por ejemplo, la legislación del Territorio de la Capital de Australia contiene disposiciones que regulan la transmisión de propiedades entre personas que han convivido en una relación sentimental. Nueva Gales del Sur, que siguió las recomendaciones formuladas en 1983 por la Comisión de Reforma Legislativa de Nueva Gales del Sur, ha otorgado a los tribunales amplios poderes para regular la relación financiera entre parejas de hecho. En cambio, la legislación de Victoria sólo se aplica a la propiedad inmobiliaria. El Territorio del Norte cuenta con un régimen similar al de Nueva Gales del Sur. En Australia Occidental a finales de 1995 se estaba redactando un proyecto de ley sobre las propiedades de las parejas de hecho, con la intención de presentarlo al Parlamento en 1996.

1177. En el informe de la Comisión Conjunta sobre la aplicación e interpretación de determinados aspectos de la Ley de 1975 sobre el Derecho de Familia se exponían diversos argumentos en favor de la elaboración de un único conjunto de disposiciones aplicables a las parejas de hecho en toda Australia. Mientras no se armonice la legislación, podrán producirse situaciones injustas cuando las parejas se trasladen a Estados en los que la ley otorga menor protección en caso de disolución de la pareja.

1178. El Gobierno Federal no está constitucionalmente facultado para promulgar legislación sobre parejas de hecho. Para ello ha de haber una delegación de

poderes por parte de los Estados en el Gobierno Federal. De producirse ese traspaso, el Gobierno Federal podría promulgar legislación que regulara el reparto de propiedades en caso de disolución de una unión de hecho y remitiera esos procedimientos a la competencia del Tribunal de Familia de Australia. Hasta la fecha, el único Estado que ha indicado su intención de traspasar esos poderes al Gobierno Federal es Queensland, donde se está preparando actualmente legislación en ese sentido.

Servicios de salud

1179. El sistema nacional australiano de seguro de salud, Medicare, tiene por objeto garantizar que todas las familias que la necesiten tengan acceso a atención de salud. Medicare promueve ese objetivo de diversas maneras. Las personas contribuyen a sufragar el costo del sistema de salud del país en medida proporcional a su capacidad económica. La financiación federal, junto con la parte de la financiación estatal derivada de la asistencia financiera federal a los Estados, procede de ingresos tributarios generales y de un gravamen obligatorio destinado a Medicare. Ambos mecanismos de recaudación de ingresos son progresivos y garantizan que los contribuyentes de ingresos más elevados aporten más que los de ingresos más bajos.

1180. Los acuerdos concertados entre la administración federal y los Estados garantizan que todos los australianos puedan recibir atención hospitalaria gratuita como pacientes públicos. En lo que respecta a la atención médica no hospitalaria recibida de médicos elegidos por los pacientes, Medicare ofrece descuentos respecto de un baremo de honorarios para una amplia gama de consultas, operaciones y pruebas diagnósticas. Además, permite a los médicos facturar globalmente, de manera que los pacientes no pagan nada de su bolsillo y los médicos aceptan los descuentos como pago íntegro por los servicios prestados.

1181. A través de su plan de prestaciones farmacéuticas, Medicare subvenciona una amplia gama de productos farmacéuticos prescritos por receta médica para tratamientos necesarios.

1182. Existen además mecanismos de seguridad para aliviar el gasto médico de las familias. Los pagos que excedan de un determinado nivel anual (excluidos los honorarios médicos por encima del baremo) están plenamente subvencionados por Medicare, que también proporciona subsidios específicos para determinados servicios de salud de extrema necesidad, como servicios de detección de cáncer de cérvix y de mama, servicios de obstetricia y otros servicios de salud para la mujer; atención odontológica para personas desfavorecidas y de bajos ingresos; procedimientos de tecnología avanzada, como resonancias magnéticas, radioterapia y trasplantes de órganos; servicios de asistencia médica a zonas remotas; actividades de prevención del VIH/SIDA y otras enfermedades; campañas de vacunación infantil y de promoción de la salud, como las de prevención del uso de drogas; y la Estrategia Nacional de Salud Rural, que tiene por objeto mejorar la salud de la población de las zonas rurales de Australia.

1183. Medicare no abarca la Isla de Norfolk, que cuenta con su propio sistema de atención de salud. Todas las personas adultas (excepto las acogidas a la seguridad social u otras personas exentas) pagan un gravamen anual, actualmente de 260 dólares, para financiar ese sistema, que proporciona servicios hospitalarios y quirúrgicos gratuitos cuando el gasto médico por persona o

unidad familiar ha superado en el año de que se trate el umbral de 3.000 dólares. Las prestaciones del sistema no están sujetas a un tope máximo, pero se aplican restricciones a los tratamientos fuera de la isla o en el extranjero.

Seguridad social

1184. El sistema de seguridad social de Australia proporciona numerosos tipos de pensiones, prestaciones y subsidios. Algunos se dirigen específicamente a las familias, mientras que otros, aunque de alcance más general, también protegen a las familias, a las que se aplican a tasas más elevadas.

1185. Los pagos por pensiones, subsidios y prestaciones básicos están sujetos a tributación. Sin embargo, el sistema de desgravaciones especiales garantiza que los beneficiarios que carezcan de otros ingresos gravables y los pensionistas que no reciban otros ingresos gravables en cuantía suficiente para reducir el nivel de su pensión en realidad no pagan impuestos. En general, las prestaciones adicionales no son gravables.

1186. La Isla de Norfolk no está incluida en el sistema australiano, sino que dispone de su propio sistema de seguridad social, que se rige por la Social Services Act 1980 (Norfolk Island) (Ley de Servicios Sociales de 1980 (Isla de Norfolk)). En general, el nivel de las prestaciones sociales en la Isla de Norfolk equivale a alrededor del 80 por ciento de las de Australia.

Subsidio familiar básico

1187. El subsidio familiar básico se paga a padres o tutores por la gran mayoría de los niños menores de 16 años. Aunque se aplica un límite máximo de ingresos y patrimonio, éste es relativamente elevado, por lo que sólo queda excluida del subsidio una pequeña proporción de las familias.

1188. El subsidio familiar básico se paga por cada niño hasta el final del año en el que cumple 18 años o abandona sus estudios secundarios, a menos que esté recibiendo una beca en el marco de algún programa educativo prescrito. Para poder recibir el subsidio, el solicitante debe ser residente en Australia, y el menor ha de ser residente en Australia o hijo a cargo de un residente en Australia y vivir con esa persona.

1189. El subsidio familiar básico se incrementa en una cantidad adicional en caso de parto múltiple (tres niños o más) hasta que los niños cumplen seis años. También se pagan montos adicionales añadidos al subsidio básico a las familias trabajadoras de bajos ingresos, las que reciben suplemento de ingresos y las que residen en viviendas alquiladas en el mercado privado. Las familias monoparentales que tienen derecho a pagos adicionales del subsidio familiar reciben también un incremento especial.

Subsidio para el cuidado de los hijos

1190. A partir del 1º de julio de 1995 empezó a pagarse a través del sistema de seguridad social un subsidio por el cuidado de los hijos. Ese subsidio, que mejora un sistema anterior similar, se paga al miembro de la pareja que tiene la responsabilidad principal del cuidado de hijos menores de 16 años. Con ese subsidio se reconoce la aportación a la familia y a la sociedad de los encargados del cuidado de los hijos, y, lo que es muy importante, proporciona a

esas personas una fuente independiente de ingresos y un reconocimiento financiero de la valiosa labor que realizan. El subsidio por el cuidado de los hijos ofrece mayores opciones a los padres que tienen que compaginar el trabajo con las responsabilidades familiares. También presta asistencia a familias en que el padre o la madre no puede trabajar por la necesidad de atender a un hijo con discapacidad.

1191. El nivel máximo del subsidio por el cuidado de los hijos es equivalente al subsidio de desempleo y está sujeto a un tope máximo de ingresos y patrimonio. Sin embargo, el componente no gravable del subsidio, equivalente al subsidio que se pagaba en el sistema anterior, es independiente de los ingresos principales de la familia. Ese componente básico del subsidio sólo puede reducirse en función de los ingresos personales del receptor.

Suplemento de ingresos

1192. Hasta 1994 los niveles del suplemento de ingresos eran mayores para las parejas que para las personas que vivían solas. Sin embargo, en septiembre de ese año se introdujo un nuevo subsidio, que se pagará directamente al cónyuge dependiente en vez del monto adicional pagado actualmente a los receptores de subsidios por búsqueda de trabajo, por cambio de empleo, por enfermedad y por cónyuge a cargo.

Artículo 24

1193. Todas las jurisdicciones australianas reconocen las necesidades especiales de cuidados y protección que tienen los niños, en particular cuando no están atendidos por sus familias. Existen disposiciones legales y programas destinados específicamente a proteger a los niños y proporcionar asistencia en situaciones de riesgo. Compete tanto al Gobierno Federal como a los gobiernos de los Estados promulgar y aplicar legislación de atención y protección a la infancia.

1194. Australia es parte en la Convención sobre los Derechos del Niño y presentó su informe inicial de conformidad con el inciso a) del párrafo 1 del artículo 44 de la Convención en diciembre de 1995. En él puede encontrarse información adicional sobre las cuestiones que se tratan a continuación.

Definición de niño

1195. En la sección B del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño figura información detallada sobre la definición de niño para fines tales como el matrimonio, la responsabilidad penal, el consentimiento sexual y el empleo.

Empleo

1196. En Australia los salarios y las condiciones de trabajo de los menores de edad están regulados por una combinación de legislación y laudos arbitrales. Aunque no existe una prohibición general de emplear a menores antes o después de la jornada escolar o durante los fines de semana o las vacaciones, se aplican algunas restricciones. La legislación (principalmente de ámbito estatal) regula las cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad ocupacionales, la edad mínima a la que los menores pueden dejar de ir a la escuela, las restricciones

al empleo de menores, y el empleo de menores en trabajos determinados. Tampoco existe legislación general que regule el tipo de empleo ni las horas de empleo de menores a partir de la edad en que pueden dejar de asistir a la escuela (por lo general, 15 años). En la sección H c) del informe inicial presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño figura más información sobre la legislación estatal que regula el empleo de menores.

1197. Las edades mínimas de alistamiento en las fuerzas armadas de Australia son las siguientes:

Marina:	16 años
Ejército de tierra:	17 años
Aviación:	17 años

1198. Australia participa en el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas encargado de elaborar un protocolo sobre la participación de menores en conflictos armados. Por lo general, el personal menor de 18 años de las fuerzas armadas de Australia no es enviado a zonas en las que podría tener que participar directamente en un conflicto armado. A la luz de la elaboración del protocolo, el Gobierno de Australia está examinando activamente la cuestión del alistamiento de voluntarios menores de 18 años y la participación directa de menores de 18 años en los combates.

Educación

1199. En Australia es obligatoria, y responsabilidad principalmente de los Estados, la enseñanza primaria y secundaria entre las edades de seis años (cinco en Australia Meridional) y 15 años (16 en Tasmania). Los niños han de asistir a una escuela pública o a una institución educativa autorizada por el departamento de educación correspondiente u otro organismo educativo competente. En las escuelas públicas la matrícula es gratuita para la enseñanza primaria y secundaria. Se prevén excepciones de la obligación de asistencia a la escuela en casos de enfermedad del niño o de su padre o su madre, cuando el niño recibe una educación satisfactoria en su casa o cuando necesita tratamiento psiquiátrico especial que aconseje dispensarlo de la asistencia a la escuela.

1200. En la sección G del informe inicial presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño figura información más detallada sobre la legislación y los programas educativos federales y estatales.

No discriminación

1201. Como se indica infra en relación con el artículo 26, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales han promulgado legislación contra la discriminación, que, salvo en el caso de Victoria, abarca también la discriminación por edad.

1202. En la legislación australiana los niños gozan del mismo derecho que los adultos a presentar demandas por discriminación. Sin embargo, en la práctica suelen ser los padres o tutores quienes las presentan en nombre de los niños. Aunque no se dispone de ningún estudio específico sobre el recurso por niños a las disposiciones antidiscriminatorias de la legislación, se han formulado diversas demandas por discriminación resultante de discapacidad en las esferas de la enseñanza y la prestación de servicios. Puede encontrarse información más

detallada en los párrafos 170 a 198 del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño.

1203. En lo que se refiere a los derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio, en todas las jurisdicciones, con la excepción de Australia Occidental, se ha promulgado legislación tendente a eliminar las consecuencias jurídicas de la ilegitimidad, que colocaban antes en situación de desventaja a los hijos no legítimos. En Australia Occidental se han modificado diversas leyes para eliminar las principales desventajas de la ilegitimidad, por ejemplo en lo que respecta a la transmisión de propiedades, la sucesión intestada o con testamento y el pago de pensiones alimenticias por la familia del testador. La Ley Federal de 1975 sobre el Derecho de Familia se aplica por igual a los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio en lo que respecta a la tutoría, la custodia, el derecho de visita y las pensiones alimenticias (excepto en Australia Occidental, donde a los hijos nacidos fuera del matrimonio se aplica la legislación estatal).

1204. Las disposiciones relativas a los hijos nacidos como resultado de procedimientos de inseminación artificial por donantes o de fecundación in vitro y a los padres de esos niños se examinan más detalladamente en relación con el derecho a fundar una familia contemplado en el artículo 23.

Bienestar de la infancia

1205. El principio rector de la mayor parte de la legislación federal y estatal referente a la situación de la infancia es la obligación de tener en cuenta los intereses del niño.

Derecho de familia

1206. En relación con el derecho de familia, se aplica el principio general de que la responsabilidad principal del cuidado y la protección de los niños incumbe a la familia, por lo que sólo procede separar a los hijos de sus padres en situaciones de malos tratos o abandono. Las modificaciones introducidas en 1983 a la Ley de 1975 sobre el Derecho de Familia otorgaron jurisdicción al Tribunal de Familia en lo referente al bienestar de los niños. En virtud de la Ley Federal de 1995 de Reforma del Derecho de Familia, aprobada por el Parlamento el 21 de noviembre de 1995, la consideración primordial debe ser la defensa de los intereses del niño, lo que concuerda con las formulaciones utilizadas en la Convención sobre los Derechos del Niño, que Australia ratificó en 1990.

1207. En el párrafo 208 del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño figura información más detallada sobre la aplicación de la Ley sobre el Derecho de Familia.

Niños carentes de un entorno familiar

1208. Tanto el Gobierno Federal como los gobiernos de los Estados cuentan con legislación y servicios para atender a los niños carentes de un entorno familiar. En la sección E del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño figura información más detallada al respecto.

Seguridad

1209. La legislación australiana de protección de los consumidores se aplica también al bienestar físico de los niños. En los párrafos 743 a 748 del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño figura información más detallada al respecto.

Trabajo y familia

1210. Las disposiciones relativas al permiso por maternidad y paternidad se examinan supra en relación con el artículo 3. La sección siguiente trata en primer lugar de la asistencia en el marco laboral a los trabajadores con responsabilidades familiares, a continuación del cuidado de los hijos y, por último, de la manutención de los hijos de padres divorciados.

Convenio N° 156 de la OIT

1211. Australia ratificó el Convenio N° 156 de la OIT en marzo de 1990, y el 11 de febrero de 1993 se puso en práctica una estrategia tendente a dar aplicación práctica al Convenio creando un clima de opinión favorable a atender a las necesidades de los trabajadores con responsabilidades familiares. Esa estrategia abarca las siguientes cuestiones generales: discriminación, condiciones de empleo, facilidades de entrada y participación en la fuerza de trabajo, servicios comunitarios y planificación, y formación profesional y capacitación.

1212. La Sex Discrimination Act 1984 (Ley de 1984 sobre Discriminación Sexual) prohíbe el despido de empleados como consecuencia de sus responsabilidades familiares. Las responsabilidades familiares se definen como las que se derivan de la obligación de un empleado de atender o mantener a un hijo a su cargo o a cualquier otro miembro de su familia inmediata que lo necesite. La Ley de Relaciones Laborales de 1988 también prohíbe el despido por responsabilidades familiares. Véase también la información relativa a la licencia por maternidad y paternidad en relación con el artículo 3, supra.

Manutención de los hijos

1213. La Ley Federal de 1975 sobre el Derecho de Familia contiene disposiciones relativas a la manutención de los hijos, que se aplican en todos los Estados excepto en Australia Occidental, que cuenta con legislación compatible. El objeto de esas disposiciones es garantizar que se atiendan debidamente las necesidades de los niños mediante su participación razonable en los ingresos, la capacidad económica, el patrimonio y los recursos financieros de los padres (incluidos, en su caso, el padrastro o la madrastra) y que los padres participen equitativamente en la manutención de los hijos. Con esas disposiciones se pretende garantizar niveles adecuados de manutención.

1214. El Programa de Manutención Infantil fue introducido por el Gobierno Federal para garantizar, en la medida de lo posible, que los hijos de padres separados siguieran recibiendo ayuda financiera de ambos progenitores, de conformidad con su respectiva capacidad económica. Se basa en el principio de que la responsabilidad principal de la manutención de los hijos incumbe a sus padres. En la sección E del primer informe presentado por Australia de

conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño figura información detallada sobre ese programa y la recuperación de los gastos de manutención.

Cuidado de los niños

1215. El Programa de Servicios a la Infancia se aplica a nivel federal para ayudar a las familias con hijos a cargo a participar en la fuerza de trabajo y en las actividades de la comunidad en general garantizando que las familias de ingresos bajos y medianos dispongan de servicios de guardería asequibles, aumentando la disponibilidad y mejorando la calidad de esos servicios y alentando servicios innovadores, como los de asistencia doméstica, los de asesoramiento familiar o financiero y los servicios educativos parlamentarios. En el cuadro 22 se muestra cómo ha evolucionado la utilización de diversas modalidades de servicios de guardería. En los párrafos 1017 a 1025 del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño figura información más detallada al respecto.

Salud y nutrición

1216. Por lo general, la calidad de la atención de salud a la infancia es elevada en Australia, aunque los niños que viven en zonas remotas y aisladas, en particular los de comunidades aborígenes y de isleños del Estrecho de Torres, gozan de menos ventajas que los de las zonas más pobladas. En la sección F del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño figura información más detallada al respecto.

Niños solicitantes de asilo

1217. La Migration Act 1958 (Ley de Inmigración de 1958) autoriza la detención y retención de los no ciudadanos que se encuentren en situación ilegal, por haber expirado su visado o por haber entrado en el país sin autorización. Desde noviembre de 1989 han llegado a Australia en barco 1.928 personas no autorizadas, entre ellas 502 niños, y de ellas han nacido en el país otros 62 niños. De esas personas, 876 han abandonado Australia para volver a su país de origen o viajar a otro país, 446 han recibido autorización para permanecer en Australia, y 593 se encuentran detenidas en espera de decisiones sobre sus solicitudes o apelaciones, la resolución de litigios o una orden de expulsión del país. Entre los detenidos se encuentran 206 niños.

1218. Cuando es posible, procura evitarse la detención de los niños. El Reglamento de Inmigración promulgado en el marco de la Ley de Inmigración estipula que el Ministro puede conceder un visado a un no ciudadano menor de edad cuando en interés del menor es preferible encomendarlo al cuidado de un ciudadano australiano, de un residente permanente en Australia o de un ciudadano neozelandés. Desde el 1º de septiembre de 1994 se ha optado por ese procedimiento aun en el caso de que haya sido rechazada la solicitud de un visado de protección y la decisión esté sujeta a revisión judicial.

1219. Hay ocasiones en que no puede evitarse la detención de menores, por ejemplo cuando ha de mantenerse detenido al padre o tutor del niño y no pueden adoptarse disposiciones alternativas adecuadas para su cuidado. Se hace todo lo posible para reducir al mínimo el período de detención de los menores. Las personas detenidas tienen acceso a servicios educativos, de salud y de asistencia social. Existe un programa educativo para impartir enseñanza

preescolar y primaria a los niños durante su estancia en los dos centros de detención prolongada de inmigrantes no autorizados. Esos centros disponen de aparatos de televisión y vídeo y algún equipo gimnástico, y en ellos se pueden practicar también deportes de pelota, así como algunas otras actividades recreativas, como jardinería y costura. En los apartados a) e i) de la sección H del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño figura información más detallada sobre la situación de los niños solicitantes de asilo y menores no acompañados.

Malos tratos a niños

1220. En todas las jurisdicciones australianas se reconocen las especiales necesidades de los niños en materia de cuidado y protección, en particular cuando no los pueden proporcionar las familias. Existen legislación y programas destinados específicamente a proteger a la infancia y proporcionar asistencia a niños que se encuentran en situaciones de riesgo. Algunas jurisdicciones cuentan asimismo con leyes concretas que prohíben toda actividad pornográfica en la que intervengan niños. En las secciones E y H c) del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño figura información detallada al respecto.

Uso indebido de drogas

1221. Existen diversas iniciativas federales y estatales encaminadas a reducir el uso indebido de drogas por menores. En la sección H c) del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño figura más información sobre las iniciativas y la legislación federales y estatales contra las drogas.

Registro de nacimientos

1222. Las cuestiones concernientes al registro de nacimientos en Australia se rigen por las leyes de los Estados. Todos los Estados exigen el registro de los nacimientos, pero los plazos varían. En Queensland, Australia Meridional, Tasmania, Victoria, Australia Occidental y el Territorio del Norte, el registro debe efectuarse en un plazo de dos meses, mientras que en Nueva Gales del Sur el plazo es de un mes, y en el Territorio de la Capital de Australia, de 28 días.

Nombre y apellidos

1223. Todos los Estados exigen que al registrar un nacimiento se consigne, entre otros datos, el apellido del niño. En Australia Meridional, Queensland, Tasmania, el Territorio de la Capital de Australia, el Territorio del Norte, Australia Occidental y la Isla de Norfolk no es obligatorio inscribir asimismo un nombre de pila, que puede añadirse al registro posteriormente. En la mayoría de las jurisdicciones australianas también es posible modificar el apellido registrado de un niño en determinadas circunstancias. El common law (en la medida en que no ha sido sustituido por leyes) permite también la modificación del apellido por razones de reputación y buena fama. En Australia Occidental la Child Welfare Act 1947 (Ley de 1947 del Bienestar de la Infancia) permite al Director General de Desarrollo de la Comunidad dar un apellido a un niño.

1224. Como ilustran los dos casos que se exponen a continuación, en los últimos tiempos ha dejado de darse por supuesto que un niño debía ser inscrito

en principio con el apellido del padre. En el Registro de Nueva Gales del Sur se acostumbraba inscribir al niño con el apellido del padre, hubiera o no dado su consentimiento la madre, en el caso de las parejas casadas que hubieran mantenido apellidos diferentes. Sin embargo, en el reciente caso Ms L. v. Registrar of Births, Deaths and Marriages, el Tribunal de Igualdad de Oportunidades de Nueva Gales del Sur determinó que el servicio de registro estaba sujeto a la Ley de 1977 contra la Discriminación y que esa práctica suponía una discriminación contra la madre por motivos de sexo y estado civil. El Tribunal indicó que, en caso de desacuerdo entre el padre y la madre, podía optarse por registrar la solicitud que se hubiera recibido antes.

1225. En segundo lugar, en un caso no especificado juzgado por el Tribunal de Familia el 18 de agosto de 1993, el juez Warwick determinó que el registro de los dos apellidos separados por un guión constituía una solución adecuada en casos de desacuerdo. En el caso en cuestión, al nacer el niño se le impuso el apellido de la persona considerada como su padre, en cumplimiento de la legislación pertinente de Queensland. El juez consideró que el hecho de que la propia mujer hubiera adoptado el apellido de su marido mientras cohabitaba con él no significaba por sí solo que diera su consentimiento a la inscripción del niño con ese apellido. Señaló lo siguiente:

"Lo que hay que tener en cuenta es el grado de identificación del niño con el apellido y las dificultades o situaciones embarazosas que entrañaría para él la utilización de un apellido distinto de aquél con el que se le inscribió".

1226. En Australia la ciudadanía es una cuestión de ámbito federal, mientras que el registro de nacimientos se rige por la legislación estatal.

Nacionalidad

1227. Los niños nacidos en Australia antes del 20 de agosto de 1986 adquirirían en general la ciudadanía australiana por el mero hecho de su nacimiento en el país. Los nacidos en Australia con posterioridad a esa fecha adquieren la ciudadanía australiana en virtud de su nacimiento en Australia:

- Si por lo menos uno de los padres era ciudadano australiano o residente permanente en el momento del nacimiento; o
- Si el niño ha residido habitualmente en Australia durante los 10 años siguientes a su nacimiento.

1228. La Australian Citizenship Act 1948 (Ley de 1948 de la Ciudadanía Australiana) fue modificada en 1986 para que puedan adquirir la nacionalidad australiana los niños nacidos en Australia que no adquieran ninguna nacionalidad por el hecho de su nacimiento y que de otro modo serían apátridas. Antes de otorgar la ciudadanía australiana a una persona, el Ministro de Inmigración y Asuntos Étnicos ha de comprobar que el interesado haya nacido en Australia, que no sea ni haya sido nunca ciudadano de otro país, y que no tenga ni haya tenido nunca derecho a adquirir la ciudadanía de otro país.

1229. Los niños nacidos en el extranjero de padre o madre australianos pueden adquirir la ciudadanía australiana si se los inscribe a tal efecto. La Ley de 1948 faculta asimismo al Ministro de Inmigración y Asuntos Étnicos para otorgar

la ciudadanía a menores y permite la inclusión de los hijos menores de 16 años en el certificado de ciudadanía australiana otorgado al progenitor a cuyo cargo estén.

Artículo 25

Participación en los asuntos públicos

1230. Los ciudadanos australianos pueden participar en los asuntos públicos de diversas formas. Como se ha señalado supra en relación con el artículo 22, la legislación australiana no impone restricciones a la libre formación de asociaciones políticas, incluidos partidos políticos. Más adelante se examinan los requisitos para la presentación de candidaturas a cargos electivos. Sin embargo, la forma principal de participación es el voto en las elecciones que se celebran periódicamente para escoger a representantes en el Parlamento Federal, los parlamentos estatales y la administración local (véanse infra las explicaciones relativas a las elecciones parlamentarias).

1231. Los ciudadanos pueden asimismo postularse para ocupar diversos cargos públicos no electivos, a condición, por supuesto, de que reúnan los requisitos exigidos. Las vacantes para algunos puestos se anuncian en la prensa nacional, y en otros casos, como el de las vacantes judiciales, pueden efectuarse los nombramientos sin anuncio de vacantes.

1232. Tanto los ciudadanos como los no ciudadanos pueden presentar peticiones al Parlamento. El reciente aumento del número de grupos de presión y de personas dedicadas profesionalmente a esas actividades ha proporcionado otro canal para la transmisión a los gobiernos de las opiniones de personas y grupos interesados. Los órganos públicos solicitan a veces opiniones y comentarios de organizaciones de la sociedad civil o de personas concretas con miras a la formulación de las políticas del sector público. Esas consultas pueden tener lugar por escrito o en el marco de reuniones oficiales en las que los consultados presentan personalmente la información requerida. También puede designarse a ciudadanos para participar en diversos consejos y comisiones oficiales, a título personal o como representantes de organizaciones de consumidores u otros intereses.

1233. Como se menciona en el documento básico y en el presente informe en relación con los artículos 3 y 26, la Sex Discrimination Act 1984 (Ley de 1984 sobre Discriminación Sexual) abarca las prácticas discriminatorias en la aplicación de leyes y programas federales. La Racial Discrimination Act 1975 (Ley de 1975 sobre Discriminación Racial) y la Disability Discrimination Act 1992 (Ley de 1992 sobre Discriminación a los Discapacitados), de ámbito federal, también prohíben la discriminación en esferas específicas. A continuación se detallan la legislación antidiscriminatoria y las disposiciones aplicables en concreto al empleo en la función pública.

Asuntos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres

1234. Habida cuenta de las desventajas geográficas y económicas que padecen los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, el Servicio de Información Electoral para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres y la Comisión Electoral Australiana (véase la sección correspondiente, infra) utilizan programas educativos especiales y los entramados organizativos comunitarios para

garantizar que los miembros de esas comunidades puedan cumplir sus obligaciones y ejercer su derecho de voto como ciudadanos de Australia.

1235. Además de participar en las elecciones federales, estatales y locales, los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres pueden votar también en las elecciones de la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres. El artículo 104 de la Aboriginal and Torres Strait Islander Commission Act 1989 (Ley de 1989 sobre la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres) dispone que se celebren cada tres años elecciones a los consejos regionales. Las primeras elecciones a los consejos regionales se celebraron el 3 de noviembre de 1990, y las segundas el 4 de diciembre de 1993.

1236. El artículo 100 de la Ley encomienda a la Comisión Electoral Australiana la organización de las elecciones a los consejos regionales. En el cuadro 23 se indica el número de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres que votaron en las más recientes elecciones federales y de la Comisión.

1237. Los miembros electos de los consejos regionales eligen a su vez a 17 comisionados de zona ante la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres. La Comisión queda compuesta por esos 17 comisionados y otros dos nombrados por el Ministro de Asuntos de los Aborígenes y de los Isleños del Estrecho de Torres. Compete a los consejos regionales asignar fondos a los programas locales con arreglo a las directrices formuladas por la Comisión, así como contribuir a la elaboración y la aplicación de planes regionales destinados a mejorar la vida económica, social y cultural de sus comunidades.

Las mujeres y los asuntos públicos

1238. Aunque siguen insuficientemente representadas en los niveles superiores, la proporción de mujeres en puestos de responsabilidad dentro de la administración pública australiana ha continuado mejorando desde 1980. La participación de mujeres en el Senior Executive Service (es decir, en la categoría directiva superior) de la función pública aumentó del 4 por ciento en 1984 al 18 por ciento en agosto de 1995. En junio de 1995, el 81,6 por ciento de las funcionarias superiores ocupaba puestos de los niveles inferiores de esa categoría, mientras que en el caso de los varones la proporción era del 71,8 por ciento.

1239. Las mujeres también están insuficientemente representadas en los parlamentos australianos. En 1995 eran mujeres el 16 por ciento del total de los parlamentarios federales y estatales. Las proporciones eran de 22 por ciento en las cámaras altas del Parlamento Federal y de los parlamentos estatales y del 14 por ciento en las cámaras bajas.

1240. En los últimos años tres Estados o territorios han tenido gobiernos encabezados por una mujer, y el Territorio de la Capital de Australia cuenta actualmente con una mujer Primer Ministro.

1241. La proporción de mujeres en cargos electos de la administración local es superior a la de los parlamentos federal y estatales. La proporción de mujeres entre los concejales pasó del 13 por ciento en 1986 al 20 por ciento en junio de 1992. En 1992 estaban ocupados por mujeres el 19,5 por ciento de los cargos electos de la administración local, lo que representa menos de la cuarta parte

de la participación masculina. Es similar la relación entre hombres y mujeres en la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres mencionada en la sección anterior. En las elecciones más recientes convocadas por la Comisión se aplicaron medidas tendentes a promover el registro y el voto de las mujeres y la presentación de candidaturas femeninas.

1242. En octubre de 1994 la Conferencia de Ministros de Estado del Commonwealth sobre la Situación de la Mujer publicó un documento de debate titulado "Las mujeres y los parlamentos de Australia y Nueva Zelandia", y los principales partidos políticos están esforzándose por alentar la participación de la mujer en la vida política.

Comisión Electoral Australiana

1243. La Comisión Electoral Australiana, establecida el 21 de febrero de 1984, se encarga de organizar las elecciones y los referéndums federales. Una de sus principales funciones es promover el conocimiento público de las cuestiones electorales y parlamentarias, por ejemplo aplicando programas educativos y de información. También tiene las siguientes funciones:

- Mantener los censos electorales federales y velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la inscripción obligatoria;
- Organizar las elecciones a senadores y miembros de la Cámara de Representantes y referéndums sobre leyes propuestas para modificar la Constitución de Australia, y aplicar la ley sobre la obligación de votar;
- Proporcionar información y asesoramiento sobre cuestiones electorales al Parlamento y a departamentos y autoridades federales;
- Realizar y promover investigaciones sobre cuestiones electorales;
- Publicar materiales sobre cuestiones relativas a su función;
- Organizar elecciones a cargos de sindicatos y demás organizaciones registradas conforme a lo dispuesto en la Ley de 1988 sobre Relaciones Laborales;
- Examinar asuntos electorales que le sean remitidos por el Ministro y demás cuestiones electorales que la Comisión estime pertinentes, y presentar los correspondientes informes; y
- Prestar asistencia en cuestiones relacionadas con las elecciones y referéndums a las autoridades de países extranjeros o a organizaciones internacionales.

Informe Fitzgerald

1244. En julio de 1989, el Sr. Tony Fitzgerald presentó su informe a la Comisión de Investigación sobre posibles actividades ilegales e irregularidades policiales conexas (Informe Fitzgerald) en Queensland. Como medida preventiva, el Informe Fitzgerald recomendó la creación de dos comisiones independientes, la Comisión de Justicia Penal y la Comisión de Revisión Electoral y Administrativa,

con funciones de vigilancia y de reforma legislativa. El Gobierno de Queensland aplicó esa recomendación en 1989.

1245. La Comisión de Revisión Electoral y Administrativa fue establecida en virtud de la Electoral and Administrative Review Act 1989 (Ley de Revisión Electoral y Administrativa de 1989) para proceder a un examen amplio e independiente de la legislación administrativa y electoral. La Comisión estaba facultada, en particular, para presentar informes al Parlamento y al Primer Ministro de Queensland con miras a lograr y mantener :

- La eficiencia en el funcionamiento del Parlamento; y
- La honestidad, imparcialidad y eficiencia de:
 - Las elecciones;
 - La administración pública estatal; y
 - La administración local.

1246. La Comisión de Revisión Electoral y Administrativa se ocupaba exclusivamente de sistemas, principios y prácticas, y no de casos concretos de supuesta ineficiencia, corrupción o parcialidad.

1247. La labor de la Comisión concluyó en agosto de 1993 con la publicación de su informe, titulado "Examen de la preservación y promoción de los derechos y libertades de la persona".

Elecciones parlamentarias

Derecho de sufragio

1248. Es un requisito fundamental de cualquier sistema democrático que, en la medida de lo posible, todas las personas con derecho a voto puedan ejercer ese derecho. El sistema federal australiano comprende dos niveles principales de gobierno, el federal y el estatal. A ellos se añade el local, que se rige por la legislación promulgada por cada Estado. En cada nivel, los gobiernos son elegidos por votación secreta en elecciones periódicas dentro de los plazos fijados por la ley.

1249. Como norma general, en las elecciones federales y estatales tienen la obligación de registrarse y votar todos los ciudadanos australianos que cumplan las condiciones. El derecho de sufragio en las elecciones al Parlamento Federal y a los parlamentos estatales está sujeto a tres condiciones básicas: edad, nacionalidad y residencia. En general, todos los ciudadanos australianos que residen normalmente en la circunscripción electoral de que se trate y que tengan por lo menos 18 años de edad tienen tanto el derecho como la obligación de inscribirse y votar.

1250. Existen disposiciones especiales para la inscripción de los miembros del Parlamento, los electores residentes en países extranjeros, los electores itinerantes, las personas de 17 años de edad, las personas que se encuentren trabajando en la Antártida, los habitantes de la Isla de Norfolk (véase más información en relación con el artículo 1), y los electores que no deseen que

aparezca su dirección en las listas electorales. A nivel federal y en algunos Estados se exime de la obligación de votar a las personas cuyas convicciones religiosas se lo prohíban.

Elecciones periódicas

1251. En cada jurisdicción australiana existe legislación que estipula la periodicidad de cada tipo de elección, como las elecciones por voto secreto. La periodicidad con que han de celebrarse las elecciones para las cámaras de una legislatura varían de tres a seis años. La cámara baja del Parlamento Federal (la Cámara de Representantes) y los parlamentos de Queensland y del Territorio de la Capital de Australia son elegidos por tres años. La cámara alta del Parlamento Federal (el Senado) es elegida por seis años, con elecciones rotatorias para cumplir la mitad de los escaños cada tres años, salvo en caso de doble disolución. Los parlamentos de Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia Occidental, Australia Meridional, Tasmania y el Territorio del Norte son elegidos por cuatro años. La libre expresión de la voluntad de los electores está también protegida en la legislación de todas las jurisdicciones por disposiciones detalladas referentes a los recintos, el escrutinio y los procedimientos electorales. Las prácticas irregulares están recogidas en figuras delictivas, en particular el incumplimiento o negligencia de los deberes oficiales, el cohecho y la coacción.

Elecciones a la administración local

1252. Leyes sobre la administración local (promulgadas por los parlamentos de los Estados) regulan la celebración de elecciones periódicas y el ejercicio del derecho de sufragio. Las normas electorales varían de una jurisdicción a otra. Por ejemplo, en Australia Meridional todos los residentes tienen derecho a votar en las elecciones a la administración local, sean o no ciudadanos australianos. En esas elecciones, las personas con derecho a voto lo tienen también a ser elegidas. En numerosas jurisdicciones el sufragio es obligatorio y está sujeto a las mismas condiciones que se aplican a nivel del Estado correspondiente.

Candidatos

1253. Existen diversos partidos políticos, de mayor o menor implantación, que funcionan a nivel federal, estatal y local. Los electores pueden escoger entre diferentes candidatos o diferentes programas (que a menudo son los de determinados partidos políticos). La formación de partidos políticos se examina en relación con el artículo 22, supra.

1254. La elección a un parlamento australiano no depende de la pertenencia del candidato a un partido. Se exigen, sin embargo, algunas condiciones. En lo que respecta al Parlamento Federal, el artículo 44 de la Constitución inhabilita a toda persona que:

- Esté ligado por cualquier forma de fidelidad, obediencia o adhesión a una potencia extranjera, o sea súbdito o ciudadano, o goce de los derechos o privilegios de los súbditos o ciudadanos, de una potencia extranjera; o

- Haya sido condenada por traición o esté esperando o cumpliendo una sentencia por delitos punibles en la legislación federal o estatal con penas de no menos de un año de cárcel; o
- Sea insolvente o haya quebrado y no haya sido rehabilitada; o
- Tenga algún interés pecuniario directo o indirecto en algún acuerdo con la administración pública federal, salvo en calidad de miembro y conjuntamente con otros miembros de una sociedad anónima integrada por más de 25 personas (se aplican algunas excepciones); o
- Sea titular de algún cargo remunerado por la Corona, o reciba una pensión asignada por la Corona con cargo a fondos federales.

1255. En relación con la obligación de los funcionarios de dimitir si desean presentarse como candidatos a una elección, los artículos 47C y 82B de la Ley de la Función Pública de 1922 estipulan que un funcionario que haya renunciado a su puesto para presentarse a una elección parlamentaria federal o estatal, pero no haya salido elegido, puede solicitar su readmisión.

1256. Las consecuencias del incumplimiento de esa obligación de dimitir fueron examinadas por el Tribunal Superior en el caso Sykes v. Australian Electoral Commission ((1993) 115 ALR 645), en el que se argumentó que un funcionario había infringido el artículo 44 de la Constitución de Australia al no renunciar a su puesto en la administración pública de Victoria (en el que se le había otorgado una excedencia) antes de presentarse como candidato a un escaño en la Cámara de Representantes del Parlamento Federal. En consecuencia, se declaró nula su elección.

1257. Los funcionarios públicos que deseen presentarse a elecciones a un parlamento estatal, la Asamblea Legislativa del Territorio del Norte o la Asamblea Legislativa del Territorio de la Capital de Australia también tienen en algunos casos que renunciar a sus puestos en la administración, cuando así lo dispone la legislación estatal pertinente. En cambio, no se exige la renuncia de los funcionarios cuando se trata de elecciones a órganos de la administración local.

1258. En la Isla de Norfolk, toda persona que haya sido condenada a una pena de no menos de un año de cárcel o que haya quebrado y no haya sido rehabilitada no puede ser miembro de la Asamblea Legislativa de la Isla de Norfolk.

1259. Un miembro de una cámara del parlamento no puede, sin abandonar su escaño, presentarse a elecciones a la otra cámara.

Inhabilitación para votar

1260. El artículo 93 de la Federal Electoral Act 1918 (Ley Electoral Federal de 1918) inhabilita para inscribirse y votar en las elecciones federales a las siguientes personas: personas que sufran de enajenación mental; personas que estén cumpliendo una pena de por lo menos cinco años de cárcel; personas condenadas por traición y a las que no se haya concedido un perdón; titulares de visados temporales; y no ciudadanos que se hallen ilegalmente en el país.

1261. En su informe sobre las elecciones federales de 1993, el Comité Permanente Conjunto sobre Asuntos Electorales recomendó otorgar el derecho de sufragio a todos los presos. Esa recomendación se fundaba en parte en la constatación por parte de la Comisión Electoral Australiana de que el actual sistema creaba dificultades administrativas. Sin embargo, el Gobierno anunció recientemente que, aunque no aplicaría la recomendación, buscaría medios de agilizar los procedimientos actuales.

1262. En la legislación de los Estados se estipulan las causa de inhabilitación para votar en las elecciones estatales. Las normas actualmente aplicadas en cuanto al derecho de sufragio de los reclusos son las siguientes:

- En Nueva Gales del Sur están inhabilitadas para votar las personas que se encuentren cumpliendo una pena de cárcel de 12 meses o más.
- En el Territorio del Norte, todos los presos pueden actualmente inscribirse y votar, pero se promulgará en breve nueva legislación acorde con las normas federales.
- En Queensland y el Territorio de la Capital de Australia se aplican las mismas normas que a nivel federal.
- En Australia Meridional se permite votar a todos los reclusos.
- En Tasmania están inhabilitados para votar todos los reclusos.
- En Victoria está inhabilitada para votar toda persona que se encuentre cumpliendo una pena de cárcel de cinco años o más.
- En Australia Occidental está inhabilitada para votar toda persona que se encuentre cumpliendo una pena de cárcel de 12 meses o más.

Arreglos especiales de votación

1263. En todas las jurisdicciones, los ciudadanos que no puedan acudir a una cabina de votación el día de las elecciones pueden concertar arreglos especiales para votar anticipadamente o por correo. Se concede esa posibilidad a los electores federales que:

- No se encuentren durante las horas de votación en el día de las elecciones en el Estado o Territorio donde estén inscritos;
- No se encuentren durante las horas de votación en el día de las elecciones a una distancia de menos de ocho kilómetros, por la carretera más cercana transitable, de cualquier cabina de votación que se encuentre abierta en el Estado o Territorio en cuyo censo estén inscritos a efectos electorales;
- Se encuentren durante las horas de votación en el día de las elecciones viajando en condiciones que les impidan votar en cualquier cabina de votación en el Estado o Territorio en cuyo censo electoral estén inscritos;

- Se encuentren gravemente enfermos o impedidos y, a causa de tal enfermedad o impedimento, no puedan acudir a ninguna cabina de votación para votar o, en el caso de las mujeres, no puedan acudir a ninguna cabina de votación para votar por estar próximas a dar a luz;
- Se encuentren en un establecimiento que no sea un hospital, en el que se atienda a las personas gravemente enfermas o impedidas o próximas a dar a luz, y no puedan acudir a ninguna cabina de votación para votar por tener que prestar esa atención;
- Estén internadas en un hospital durante las horas de votación en el día de las elecciones y no puedan votar en el hospital en ese día ni entregar su voto con anterioridad a un equipo electoral móvil;
- A causa de su pertenencia a una orden religiosa o por sus convicciones religiosas:
 - Tengan vedada la asistencia a una cabina de votación; o
 - No puedan votar durante las horas de votación en el día de las elecciones o durante la mayor parte de esas horas;
- Estén cumpliendo una pena de prisión, o estén de otro modo detenidos o encarcelados legalmente;
- Hayan solicitado que su dirección no figure en las listas electorales; o
- No puedan acudir a una cabina de votación por tener que trabajar durante todo el día de la votación.

1264. Los equipos electorales móviles permiten ejercer su derecho de sufragio a los votantes que no pueden desplazarse. Esos equipos visitan prisiones, algunas residencias de ancianos, hospitales y zonas remotas del país. También existen disposiciones para que puedan votar las personas que se encuentren en el día de la votación fuera de su circunscripción pero dentro del Estado en el que estén inscritos.

1265. Con el fin de facilitar a los ciudadanos de otros países el ejercicio de su derecho de sufragio, se permite a las embajadas organizar la votación de sus ciudadanos que se encuentren en Australia cuando se celebren elecciones en sus respectivos países. Análogamente, las embajadas australianas pueden organizar la participación en las elecciones federales y estatales de los ciudadanos australianos que se encuentren en el extranjero.

Tamaño del cuerpo electoral

1266. Australia acepta el concepto general de sufragio universal e igual. En su informe inicial (párrs. 420 a 422) se hacía referencia al hecho de que el número de electores de algunas circunscripciones rurales era menor que el de algunas circunscripciones urbanas, por lo que se incluyó la siguiente declaración en el instrumento de ratificación de Australia:

"Se acepta la referencia al 'sufragio universal igual' que figura en el apartado b) del artículo 25, sin perjuicio de las leyes que disponen que al delimitarse las circunscripciones electorales podrán tenerse en cuenta factores tales como los intereses regionales...".

1267. Esa declaración fue retirada en 1984, y desde entonces se ha avanzado hacia una mayor igualdad en el valor del voto, medido por el tamaño del cuerpo electoral.

1268. El artículo 24 de la Constitución de Australia dispone que el número de miembros de la Cámara de Representantes elegidos en cada uno de los Estados será proporcional al número respectivo de habitantes.

1269. El artículo 7 de la Constitución estipula que la representación en el Senado será igual para todos los Estados, con independencia de su población. La Ley Electoral del Commonwealth de 1918 contiene disposiciones destinadas a garantizar que (en cada Estado o Territorio) sean aproximadamente iguales las listas electorales de las circunscripciones para la Cámara Federal de Representantes.

1270. La base para cada redistribución electoral es un cupo de electores, obtenido mediante la división del número total de electores del Estado o Territorio por el número de miembros de la Cámara de Representantes que han de elegirse en él. Al proceder a la redistribución, no pueden crearse circunscripciones que supongan una desviación de más del 10 por ciento del cupo pertinente, y debe procurarse que, transcurridos tres años y seis meses desde la redistribución, el número de electores de cada circunscripción dentro de cada Estado no se haya desviado en más de un 2 por ciento del promedio del Estado. Además de esas condiciones fundamentales, deben tomarse debidamente en consideración respecto de cada circunscripción electoral:

- La comunidad de intereses dentro de la circunscripción, incluidos los intereses económicos, sociales y regionales;
- Los medios de comunicación y de viaje en la circunscripción electoral;
- Las tendencias demográficas en el Estado;
- Las características físicas y la extensión de la circunscripción electoral; y
- Los límites de las circunscripciones existentes en el Estado.

1271. El momento en que hay que proceder a las redistribuciones federales se determina con arreglo a una fórmula establecida en la Ley Electoral del Commonwealth de 1918, y no está sometido a ningún control político. Las redistribuciones deben practicarse por lo menos cada siete años, siempre que haya un nivel de desajuste en el número de votantes, lo que se considera que ocurre cuando más de la tercera parte de las circunscripciones electorales de un Estado se desvían más de un 10 por ciento del promedio del Estado durante un período de más de dos meses, o cuando se modifique el número de miembros de la Cámara de Representantes que deban ser elegidos en un Estado. Las redistribuciones son realizadas por un órgano independiente presidido por un

magistrado del Tribunal Federal y no están sujetas a veto gubernamental o parlamentario. Se conceden amplias oportunidades al público para formular sugerencias y observaciones sobre posibles líneas de demarcación y formular objeciones a propuestas iniciales ampliamente difundidas.

1272. El principio de que los cuerpos electorales no deben variar en más de un 10 por ciento del número medio de electores en cada circunscripción está incluido actualmente en las leyes que rigen todos los sistemas electorales estatales (por lo menos en lo que se refiere a las circunscripciones para las elecciones a la cámara baja). El margen es del 5 por ciento en Nueva Gales del Sur, del 10 por ciento en Tasmania, Victoria y Queensland (salvo en cinco distritos de más de 100.000 kilómetros cuadrados, en los que se aplica un coeficiente de ponderación equivalente al 2 por ciento de la superficie del distrito), del 15 por ciento en Australia Occidental y del 20 por ciento en el Territorio del Norte.

1273. En Australia Occidental se aplica un sistema de demarcación de zonas que distingue entre zonas metropolitanas y no metropolitanas y que da lugar a variaciones del valor del voto. A finales de 1993, la relación entre el número de electores de la circunscripción más numerosa y el de la menos numerosa en las elecciones a la Asamblea Legislativa era aproximadamente de tres a uno. Esa desigualdad fue objeto de litigio ante el Tribunal Superior, en el que se argumentó que en la Constitución de Australia se proclama un principio general de igualdad de los electores en las elecciones federales y estatales.

1274. En Queensland, un sistema introducido por ley para aumentar el valor del voto en cinco circunscripciones rurales ha creado una desigualdad de dos a uno entre la circunscripción más numerosa y la menos numerosa en las elecciones al Parlamento de ese Estado.

Acceso a la función pública

1275. Todos los ciudadanos australianos (y en algunas jurisdicciones los extranjeros) pueden acceder en condiciones de igualdad al empleo en la administración pública de Australia. Pueden obtener un puesto permanente en la administración pública federal todos los ciudadanos australianos de menos de 65 años de edad, y para escoger entre los candidatos que reúnen las condiciones requeridas se aplica un sistema de concurso abierto por méritos. Pueden exigirse por ley determinados requisitos, como un examen médico, y para algunos puestos se exigen requisitos académicos o profesionales. La confirmación del nombramiento suele condicionarse a un período de prueba, normalmente de seis meses. A nivel estatal se aplican las mismas normas, aunque la ciudadanía australiana no es por lo general un requisito fundamental.

1276. Algunos puestos de la administración pública entrañan conocimiento de asuntos clasificados como secretos en interés de la seguridad nacional o acceso a zonas restringidas. Otros entrañan tareas de confianza, como la custodia de suministros, equipo o fondos públicos. Los funcionarios que han de desempeñar esas tareas delicadas deben recibir una acreditación de seguridad, para lo que son evaluados por el Departamento competente, en consulta con la Policía Federal Australiana y la Organización de Seguridad e Información de Australia. La clasificación nacional de acceso restringido por razones de seguridad consta de cuatro categorías: de máximo secreto, secreto, confidencial y restringido. Las personas a las que se deniegue acreditación o se otorgue sólo acreditación

limitada para el empleo en la administración pública federal tienen derecho a solicitar una revisión ante el Tribunal de Apelaciones en Asuntos de Seguridad, establecido en virtud de la Ley de 1979 sobre la Organización de Seguridad e Información de Australia.

Ascensos

1277. Los ascensos en la administración pública federal se basan en la evaluación de la eficiencia relativa. Los puestos vacantes suelen ser anunciados con el fin de que todo funcionario del servicio pueda solicitar un ascenso o un traslado. Los puestos vacantes están a menudo, aunque no necesariamente, abiertos a personas ajenas a la administración pública. En las directrices para la contratación externa en el nivel no ejecutivo de la administración pública federal, por ejemplo, se dispone que puede contratarse a personas ajenas a la administración pública anunciando debidamente las vacantes.

Criterios de mérito para la selección de personal

1278. La Public Service Act 1922 (Ley de 1922 sobre la Función Pública) estipula que la contratación y los ascensos en la administración pública deben basarse en concursos de méritos. En virtud del párrafo 1 del artículo 33 de la Ley, los nombramientos deben basarse en una evaluación de la idoneidad relativa de los candidatos. En el párrafo 1 del artículo 50A se dispone que los secretarios de departamento seleccionen para cada ascenso al más eficiente de los candidatos. Las decisiones relativas a nombramientos, traslados y ascensos deben adoptarse sin:

- Discriminación por motivos de afiliación política, raza, color, origen étnico, extracción social, religión, sexo, preferencias sexuales, estado civil, embarazo, edad o discapacidad física o mental;
- Discriminación prohibida por la Racial Discrimination Act (Ley sobre Discriminación Racial), la Sex Discrimination Act (Ley sobre Discriminación Sexual) o la Disability Discrimination Act (Ley sobre Discriminación a los Discapacitados); o
- Cualquier otra forma de discriminación injustificada (párr. 3) del artículo 33).

1279. Como se ha señalado en otras secciones del presente informe, existen diversas disposiciones contra la discriminación aplicables a la función pública federal, que figuran en las siguientes leyes:

- Public Service Act 1922 (Ley de 1922 sobre la Función Pública);
- Racial Discrimination Act 1975 (Ley de 1975 sobre Discriminación Racial);
- Sex Discrimination Act 1984 (Ley de 1984 sobre Discriminación Sexual);
- Disability Discrimination Act 1992 (Ley de 1992 sobre Discriminación a los Discapacitados);

- Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986 (Ley de 1986 sobre la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades);
- Affirmative Action (Equal Employment Opportunity for Women) Act 1986 (Ley de 1986 de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de la Mujer); y
- Equal Employment Opportunity (Commonwealth Authorities) Act 1987 (Ley de 1987 sobre la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (Organismos del Commonwealth)).

1280. Excepto cuando se trata de nombramientos para puestos superiores de la administración, los ascensos pueden ser recurridos alegando mayor eficiencia. Esos recursos son examinados por comités de apelaciones sobre ascensos que establece el Organismo de Protección y Revisión de Méritos y que son independientes de los procesos de selección de los departamentos. Los ascensos a los puestos superiores no son recurribles, pero los solicitantes rechazados pueden pedir la revisión de los ascensos por el Organismo si ha habido grave defecto en el proceso de selección o se ha infringido el artículo 33 de la Ley de la Función Pública al incurrirse en patronazgo, favoritismo o discriminación. Los nombramientos a puestos ejecutivos superiores son aprobados por el Comisionado de la Función Pública, que es independiente del proceso de selección de los departamentos.

1281. La Ley de la Función Pública prevé la adopción de medidas disciplinarias cuando un funcionario público no cumple con sus obligaciones. La infracción puede consistir, por ejemplo, en prácticas de patronazgo, favoritismo o discriminación. Las reclamaciones por discriminación en esos casos pueden ser examinadas por el Organismo de Protección y Revisión de Méritos o por la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades.

1282. El artículo 22B de la Ley de la Función Pública impone a los departamentos y organismos de la administración federal la obligación de aplicar programas de igualdad de oportunidades en el empleo destinados a impedir que se encuentren en situación de desventaja las mujeres, las personas no angloparlantes, las personas con discapacidades y las personas de ascendencia aborigen y de isleños del Estrecho de Torres.

1283. En 1986, la Fuerza de Defensa Australiana formuló explícitamente una política respecto de la homosexualidad (Instrucción de Defensa 15-3) por la que "cuando un miembro [de la Fuerza de Defensa] reconoce participar en actos homosexuales, o se demuestra su participación, deberá examinarse la conveniencia de rescindir su contrato". En diciembre de 1990, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades recibió una reclamación de un miembro de la Fuerza de Defensa por discriminación fundada en sus preferencias sexuales. La Comisión investigó la queja y pidió a la Fuerza de Defensa que explicara las razones en las que se fundaba su política respecto de la homosexualidad, habida cuenta de las obligaciones internacionales de Australia en materia de derechos humanos y supresión de la discriminación en el empleo y la ocupación. Además de tratar de resolver por conciliación la queja concreta presentada, la Comisión inició negociaciones con el Departamento de Defensa y la Fuerza de Defensa para resolver el asunto en el plano normativo. El resultado de esas negociaciones fue el compromiso por parte de la Fuerza de Defensa de elaborar, en consulta con la Comisión, una política no discriminatoria. A principios de 1992, tras 12

meses de negociaciones, se llegó a un acuerdo sobre una nueva política no discriminatoria respecto de conductas sexuales inaceptables de los miembros de la Fuerza de Defensa Australiana, que se sometió al Ministro de Defensa para su aprobación. El Comisionado de Derechos Humanos determinó que la Comisión debía ejercer asimismo los poderes que le otorgaba el artículo 31 de la Ley de 1986 sobre la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades e informar oficialmente de la cuestión al Fiscal General. El informe de la Comisión se presentó al Fiscal General el 25 de septiembre de 1992, y, tras debatir la cuestión en el Gabinete, el Primer Ministro anunció el 23 de noviembre de 1992 el levantamiento de la prohibición impuesta por la Fuerza de Defensa Australiana a la homosexualidad. El informe de la Comisión se presentó al Parlamento Federal el 24 de noviembre de 1992.

Igualdad de oportunidades en el empleo

1284. La Comisión Federal de la Función Pública ha formulado un plan titulado "Igualdad de oportunidades en el empleo: plan estratégico para la administración pública australiana en el decenio de 1990", con los siguientes objetivos:

- Eliminar la discriminación injustificada contra miembros de los grupos acogidos al plan en relación con los siguientes aspectos:
 - Nombramientos, ascensos y traslados permanentes o temporales;
 - Evaluación del desempeño profesional y pago de primas de productividad;
 - Actividades de capacitación y perspectivas de carrera; y
 - Condiciones de empleo;
- Permitir a los miembros de los grupos acogidos al plan competir por los ascensos y traslados y seguir su carrera profesional en igualdad de condiciones con el resto del personal; y
- Aumentar o mantener la representación de los grupos acogidos al plan en todos los niveles y estructuras de la administración pública sobre la base de la competencia abierta por méritos.

1285. En Nueva Gales del Sur, Queensland, Victoria, Australia Meridional, Australia Occidental, el Territorio del Norte y el Territorio de la Capital de Australia, la legislación estatal contra la discriminación se aplica también a la discriminación en la contratación y los nombramientos de la administración pública estatal. En Australia Meridional, la Public Sector Management Act 1995 (Ley de 1995 de Gestión del Sector Público) estipula que en la administración de personal del sector público debe aplicarse el principio de no discriminación por motivos de sexo, sexualidad, estado civil, embarazo, raza, discapacidad física u otros motivos. Todas las decisiones de selección deben basarse en una evaluación adecuada de los méritos. En virtud de la State Service Act 1984 (Ley de 1984 sobre la Administración Estatal) de Tasmania, el empleo en la administración pública de ese Estado se basa exclusivamente en criterios de mérito, y todas las prácticas de la administración se basan en el principio de igualdad de oportunidades de empleo. En Queensland, la Equal Opportunity in

Public Employment Act 1992 (Ley de 1992 sobre la Igualdad de Oportunidades de Empleo en la Administración Pública) obliga a los organismos del sector público a establecer planes tendentes a promover la igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación contra las mujeres, los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, las personas procedentes de medios no angloparlantes y las personas con discapacidades.

1286. En la Isla de Norfolk, la Public Service Ordinance 1979 (Ordenanza de 1979 sobre la Función Pública) estipula que la Junta de la Función Pública debe velar, entre otras cosas, por que la administración pública de la Isla de Norfolk siga siendo una fuente deseable de empleo para las personas con capacidad e iniciativa. Se aplican medidas administrativas para garantizar que el empleo en la administración pública se base exclusivamente en el principio del mérito y no se ejerza discriminación alguna fundada en el sexo, la sexualidad, el estado civil, la raza o el embarazo. La Junta de la Función Pública está facultada para emplear a personas con discapacidades físicas modificando sus funciones según aconsejen las circunstancias.

Artículo 26

Legislación federal

1287. Como se explica en las secciones siguientes, la discriminación está prohibida en virtud de la Racial Discrimination Act 1975 (Ley de 1975 sobre Discriminación Racial), la Sex Discrimination Act 1984 (Ley de 1984 sobre Discriminación Sexual) y la Disability Discrimination Act 1992 (Ley de 1992 sobre Discriminación a los Discapacitados). La legislación prevé diversas excepciones y permite la adopción de medidas especiales para promover la igualdad entre los grupos.

1288. El Gobierno Federal ha promulgado asimismo la Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986 (Ley de 1986 sobre la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades), que faculta a la Comisión para investigar cualesquiera actuaciones o prácticas de la administración federal que puedan ser incompatibles con derechos humanos reconocidos por la Ley.

1289. La Comisión investiga y trata de resolver por conciliación las reclamaciones presentadas al amparo de cualquiera de las leyes mencionadas. Si no da resultado la conciliación con arreglo a la Ley de 1975 sobre Discriminación Racial, el Comisionado encargado del caso puede remitir la queja a la Comisión para que la examine en sesión pública. Si estima fundamentada la reclamación, la Comisión emitirá un dictamen al respecto. Si las partes no cumplen el dictamen, podrán incoarse nuevos procedimientos ante el Tribunal Federal, que está facultado para volver a examinar la cuestión e imponer la aplicación del fallo que emita. Véase más información sobre los poderes y funciones de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades en relación con el artículo 2, supra.

1290. La discriminación en cuanto a la terminación del empleo también está prohibida en virtud de la Industrial Relations Act 1988 (Ley de 1988 sobre Relaciones Laborales), modificada en 1993. El párrafo 1) del artículo 170DF de la Ley prohíbe el despido por las siguientes causas:

- Ausencia temporal del trabajo por enfermedad o lesión;

- Afiliación sindical o participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo, o durante la jornada laboral con el consentimiento del empleador;
- No afiliación a un sindicato o una asociación que haya solicitado el registro como sindicato con arreglo a la Ley de 1988 sobre Relaciones Laborales;
- Candidatura a un cargo de representación sindical, o actuación como representante de los empleados;
- Presentación de una demanda contra el empleador por supuesta violación de leyes o reglamentos, participación en los procedimientos correspondientes o recurso a las autoridades administrativas competentes;
- Raza, color, sexo, preferencia sexual, edad, discapacidad física o mental, estado civil, responsabilidades familiares, embarazo, religión, opiniones políticas, origen nacional, o extracción social;
- Ausencia del trabajo durante la licencia por maternidad o paternidad.

1291. El párrafo 2) del mismo artículo contiene una excepción a lo dispuesto en el párrafo 1):

"No obstante lo estipulado en el párrafo 1), podrá despedirse a una persona por su raza, color, sexo, preferencia sexual, edad, discapacidad física o mental, estado civil, responsabilidades familiares, embarazo, religión, opiniones políticas, origen nacional, o extracción social, cuando se trate de una característica que constituye un requisito inherente para ocupar el puesto en cuestión".

1292. El alcance de la excepción al párrafo 1) del artículo 170DF basada en los requisitos inherentes del puesto fue objeto de una decisión dictada en 1995 por el juez Wilcox, Presidente del Tribunal de Relaciones Laborales de Australia, en el caso Christie v. Qantas Airways Ltd. (incorporating Allman v. Australian Airlines Ltd.), en el que se determinó que debía entenderse que la palabra "inherentes" se refería a requisitos fundamentales, esenciales o intrínsecos al puesto, y no podía aplicarse a condiciones que fueran en realidad innecesarias, aunque les otorgara gran importancia el empleador.

Programas de promoción e igualdad de oportunidades

1293. Existe a nivel federal legislación en materia de igualdad de oportunidades en el empleo aplicable tanto al sector público como al sector privado. En la mayoría de las jurisdicciones el sector público tiene la obligación de aplicar programas de igualdad de oportunidades en el empleo para grupos determinados, que pueden incluir a las mujeres, las personas no angloparlantes, las personas con discapacidades y las personas de ascendencia aborigen, según las jurisdicciones. La igualdad de oportunidades en el empleo se examina ulteriormente en el presente informe en relación con el artículo 25.

1294. En relación con el sector privado, las disposiciones pertinentes son las de la Affirmative Action (Equal Employment Opportunity for Women) Act 1980 (Ley de 1986 de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de la Mujer), en virtud de la cual todas las instituciones de enseñanza superior, las empresas privadas con más de 100 empleados, los programas de capacitación, los sindicatos, las escuelas no gubernamentales y los grupos comunitarios tienen la obligación de elaborar y aplicar programas de promoción de la mujer y presentar informes anuales sobre los progresos logrados.

1295. La Ley de 1986 estipula los siguientes ocho elementos de que debe constar todo programa de promoción:

- Declaración de política sobre el programa de promoción;
- Nombramiento de un coordinador del programa;
- Consulta con los sindicatos;
- Consulta con los empleados;
- Realización de un análisis estadístico de la fuerza de trabajo;
- Examen de las políticas y prácticas en materia de personal;
- Formulación de estimaciones y objetivos; y
- Vigilancia y evaluación de la aplicación del programa.

Medidas especiales

1296. La legislación mencionada no requiere la adopción de medida alguna que sea incompatible con el criterio del mérito. Se entiende que el trato diferenciado ha de tener efectos positivos, de manera que no contravenga la garantía de igualdad que entraña la expresión "protección imparcial de la ley". Las medidas de promoción pueden ser necesarias para compensar desigualdades pasadas y garantizar la igualdad futura para los grupos históricamente subordinados.

1297. En la mayoría de las leyes australianas contra la discriminación, se prevén excepciones en los casos en que la discriminación es el resultado de la aplicación de medidas tendentes a promover la igualdad, lo que permite a los empleadores y a otras partes adoptar medidas positivas para compensar los efectos de la discriminación pasada.

1298. A nivel federal, la Ley de 1975 sobre Discriminación Racial prevé una excepción correspondiente a la aplicación de medidas especiales para mejorar la situación de determinados grupos raciales o étnicos. La Ley de 1984 sobre Discriminación Sexual contiene una exención general aplicable a las medidas tendentes a garantizar que las mujeres, y en particular las casadas y las embarazadas, gocen de las mismas oportunidades que las demás personas. La Ley de 1992 sobre Discriminación a los Discapacitados contiene una exención referente a las disposiciones que tengan razonablemente por objeto garantizar que las personas con discapacidades gocen de las mismas oportunidades que las

demás. La legislación antidiscriminatoria de los Estados contiene asimismo excepciones.

1299. Los órganos federales y estatales de derechos humanos e igualdad de oportunidades supervisan la aplicación de las leyes para comprobar que no tengan efectos discriminatorios injustificables.

Discriminación racial

1300. La Racial Discrimination Act 1975 (Ley de 1975 sobre Discriminación Racial), la primera ley promulgada en Australia a nivel federal sobre esa cuestión, da cumplimiento en parte a las obligaciones contraídas por Australia en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Sus principales objetivos son:

- Promover la igualdad ante la ley de todas las personas, independientemente de su raza, color, u origen nacional o étnico; y
- Prohibir que se discrimine contra personas por su raza, color, u origen nacional o étnico.

1301. El artículo 9 de la Ley prohíbe la discriminación directa e indirecta por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico que tenga la finalidad o el efecto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de cualquier derecho humano o libertad fundamental en las esferas política, económica, social o cultural o cualquier otra esfera de la vida pública. En virtud de la Ley, los empleadores son responsables subsidiarios de los actos discriminatorios de sus agentes o empleados.

1302. La Racial Hatred Act 1995 (Ley de 1995 sobre el Odio Racial), que entró en vigor el 13 de octubre de 1995, creó una nueva prohibición civil contra el odio racial por la inserción en la Ley de 1975 sobre Discriminación Racial de los nuevos artículos 18B a 18E, por los que se declara ilegal, fuera de la esfera privada:

- Todo acto cuyo resultado previsible en todas las circunstancias sea ofender, insultar, humillar o intimidar a otra persona o a un grupo de personas; y
- Todo acto motivado por la raza, el color o el origen nacional o étnico de la otra persona o de algunas o todas las personas del grupo.

Discriminación sexual

1303. La Sex Discrimination Act 1984 (Ley de 1984 sobre Discriminación Sexual) da cumplimiento en parte a las obligaciones contraídas por Australia en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y de determinados aspectos del Convenio N° 156 de la OIT sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares. Sus principales objetivos son:

- Promover la igualdad entre hombres y mujeres;

- Eliminar la discriminación basada en el sexo, el estado civil o el embarazo y, en lo referente a los despidos, en las responsabilidades familiares; y
- Eliminar el acoso sexual en el trabajo, en las instituciones educativas, en el suministro de bienes y servicios, en la facilitación de alojamiento y en la aplicación de los programas de la administración federal.

1304. La Ley de 1984, modificada en diciembre de 1985, prohíbe la discriminación fundada en el sexo, el estado civil o el embarazo, así como el despido basado en las responsabilidades familiares del empleado. También se prohíbe el acoso sexual en diversas esferas de la vida pública. Se prevén cinco exenciones permanentes de la aplicación de la Ley:

- Empleo por organismos estatales;
- Empleo por instituciones educativas establecidas con fines religiosos;
- Discriminación por asociaciones voluntarias en cuanto a la concesión de ventajas o prestación de servicios a sus miembros y la admisión de nuevos miembros;
- Actos realizados en cumplimiento de una orden de un tribunal, una determinación de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades o una decisión de un tribunal competente para fijar el salario mínimo y otras condiciones de empleo; y
- Exclusión de actividades deportivas en determinadas situaciones.

1305. El Gobierno Federal está examinando la conveniencia de mantener, modificar o eliminar esas exenciones.

Discriminación a los discapacitados

1306. La Disability Discrimination Act 1992 (Ley de 1992 sobre Discriminación a los Discapacitados), que entró en vigor el 1º de marzo de 1993, tiene los siguientes objetivos principales:

- Eliminar la discriminación contra las personas con discapacidades en esferas especificadas;
- Promover la aceptación por la comunidad del principio de que las personas con discapacidades tienen los mismos derechos fundamentales que las demás; y
- Garantizar, en la medida de lo posible, que las personas con discapacidades gocen de los mismos derechos de igualdad ante la ley que el resto de la comunidad.

1307. La Ley se examina más detalladamente supra en relación con el artículo 2, en la sección referente a la legislación sobre discapacidades.

Discriminación por edad

1308. La Ley de 1986 sobre la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades confía a la Comisión las funciones dimanantes de las responsabilidades de Australia en virtud del Convenio N° 111 de la OIT sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación). En 1989, el Gobierno Federal promulgó reglamentos que daban cumplimiento al Convenio N° 111 de la OIT especificando la edad como uno de los motivos de discriminación incluidos en el mandato de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades en cuanto a la igualdad de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación, de conformidad con el Convenio. Entre las funciones de la Comisión se cuenta la investigación de reclamaciones de discriminación por edad en el empleo y la ocupación en la administración federal o estatal o en el sector privado.

1309. Sin embargo, la Ley de 1986 no prohíbe la discriminación por edad, por lo que muchas reclamaciones no pueden resolverse por conciliación, especialmente en los casos en que el empleador está obligado a aplicar legislación que contiene disposiciones discriminatorias.

Legislación estatal

Territorio de la Capital de Australia

1310. La Discrimination Act 1991 (Ley de 1991 sobre Discriminación) del Territorio de la Capital de Australia prohíbe la discriminación por sexo, sexualidad, transexualidad, estado civil, responsabilidades familiares, embarazo, raza, convicciones religiosas o políticas, discapacidad, pertenencia o no pertenencia a una asociación u organización de empleadores o empleados, edad, profesión, oficio, ocupación, o vinculación (familiar o de otra índole) con una persona identificada por referencia a una de las características mencionadas, así como el acoso sexual y la denigración racial.

1311. Las esferas en que está prohibida la discriminación son las siguientes: empleo, asociaciones de negocios, organizaciones profesionales, órganos de calificación, agencias de empleo, educación, acceso a locales, bienes y servicios, alojamiento y pertenencia a clubes. La administración de la Ley y la adopción de decisiones al respecto competen al Comisionado sobre Discriminación.

Nueva Gales del Sur

1312. En Nueva Gales del Sur, la Anti-discrimination Act 1977 (Ley de 1977 contra la Discriminación) prohíbe la discriminación por raza, color, nacionalidad, origen étnico o nacional, sexo, embarazo, estado civil, discapacidad, padecimiento de VIH/SIDA, homosexualidad y edad, así como la denigración racial o de la homosexualidad y la jubilación obligatoria. La figura penal de denigración racial grave se aplica a los actos públicos que entrañan amenaza de daño físico a personas o propiedades.

1313. En virtud de la Ley de 1977 se prohíbe la discriminación en el empleo, las asociaciones de negocios, los sindicatos, los órganos de calificación, las agencias de empleo, la educación, el acceso a lugares y vehículos, el suministro de bienes y servicios, el alojamiento y el ingreso en clubes registrados. La administración de la Ley compete al Presidente de la Junta de Lucha contra la

Discriminación y el Tribunal de Igualdad de Oportunidades emite decisiones vinculantes al respecto.

1314. Además de la Ley de 1977, Nueva Gales del Sur cuenta con diversas disposiciones que prohíben conductas discriminatorias. Por ejemplo, la Industrial Relations Act 1991 (Ley de 1991 sobre Relaciones Laborales) prohíbe que un empleador o una organización discriminen contra una persona por no pertenecer a una organización de empleados o negarse a participar en acciones de reivindicación.

Territorio del Norte

1315. En el Territorio del Norte, la Anti-Discrimination Act 1992 (Ley de 1992 contra la Discriminación) prohíbe el acoso sexual y la discriminación por raza, sexo, sexualidad, edad, estado civil, embarazo, maternidad o paternidad, amamantamiento, discapacidad (física, psicológica, fisiológica o intelectual), participación en actividades de sindicatos o de asociaciones de empleadores, convicciones o actividades religiosas, opiniones, afiliación o actividad políticas, antecedentes médicos o penales no pertinentes y vinculación con una persona identificada por referencia a una de las características mencionadas.

1316. Las esferas en las que se prohíbe la discriminación son la educación, el empleo, el alojamiento, el suministro de bienes y servicios, el acceso a locales, el ingreso en clubes, la suscripción de seguros y la jubilación.

1317. La legislación prevé excepciones cuando sean razonablemente necesarias para proteger la salud pública, en relación con algunas actividades deportivas y para promover la igualdad de oportunidades para personas desfavorecidas.

1318. La Ley establece la Comisión de Lucha contra la Discriminación, y su administración compete al Comisionado de Lucha contra la Discriminación. En Darwin funciona también una oficina regional de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades.

1319. Por la Ombudsman (Northern Territory) Act 1978 (Ley de 1978 sobre el Defensor del Pueblo (Territorio del Norte)) se establece la Oficina del Defensor del Pueblo, cuya función es investigar en medidas administrativas adoptadas por departamentos u organismos y las actuaciones de agentes de policía en situaciones en que no existieran alternativas razonables.

1320. Toda persona o entidad puede formular una reclamación ante el Defensor del Pueblo. Tras concluir su investigación sobre una "medida administrativa", el Defensor del Pueblo informa a un funcionario superior del departamento de que se trate y posteriormente al Ministro. En su informe puede formular recomendaciones. Si no considera satisfactorias las medidas correctivas adoptadas, puede presentar un informe al Ministro, que ha de transmitirlo a su vez al Parlamento en el plazo de tres días hábiles.

Queensland

1321. En Queensland, la Anti-Discrimination Act 1991 (Ley de 1991 contra la Discriminación) prohíbe la discriminación por sexo, estado civil, embarazo, responsabilidades familiares, amamantamiento (sólo en lo que se refiere al suministro de bienes y servicios), edad, raza, discapacidad, religión, opiniones

o actividades políticas, actividades sindicales, actividades sexuales legítimas o asociación o vinculación con una persona identificada con referencia a cualquiera de las características mencionadas, así como el hostigamiento sexual y la incitación al odio racial o religioso.

1322. Las esferas en las que está prohibida la discriminación son las siguientes: empleo; asociaciones de negocios; organizaciones laborales, profesionales o comerciales; órganos de calificación; agencias de empleo; educación; suministro de bienes y servicios; jubilación; seguros; transmisión de tierras; alojamiento; ingreso y participación en clubes; administración de leyes y programas estatales; administración local; y publicidad.

1323. La administración de la Ley compete al Comisionado de Lucha contra la Discriminación, y cuando procede emite decisiones al respecto el Tribunal contra la Discriminación. Las diferencias en relación con la Ley se resuelven por conciliación o, de no conseguirse por ese medio, ante el Tribunal. Las decisiones del Tribunal pueden imponerse a través de otras instancias judiciales.

1324. Además, la Ley prohíbe la discriminación fundada en la edad. Se prevé una exención en el caso de los salarios por el trabajo juvenil, lo que permite remunerar a los trabajadores menores de 21 años con arreglo a su edad. Las disposiciones de la Ley no se aplican a los beneficios y concesiones que pueden otorgarse en función de la edad. Por ejemplo, las empresas de autobuses pueden ofrecer tarifas reducidas para los menores de 12 años y los mayores de 70. Por último, se prevé la posibilidad de exigir la presencia de un adulto para proporcionar determinados bienes y servicios a un menor, si puede temerse razonablemente que, en ausencia de un adulto, el menor pueda causar problemas o poner en peligro su propia integridad o la de otras personas. Asimismo, puede discriminarse contra otra persona si ésta está sujeta a una incapacidad legal que guarda pertinencia con la transacción de que se trate. Por ejemplo, no está prohibido negarse a suscribir un contrato con un menor de edad.

1325. También en Queensland la Health Rights Commission Act 1991 (Ley de 1991 sobre la Comisión de Derechos de Salud) se propone la supervisión, el examen y la mejora de los servicios de salud mediante el establecimiento de una Comisión de Derechos de Salud accesible e independiente, que:

- Preserve y promueva los derechos de salud;
- Reciba y resuelva las reclamaciones respecto de los servicios de salud;
- Permita a los consumidores y proveedores de servicios de salud contribuir a la mejora de esos servicios;
- Imparta educación y asesoramiento sobre los derechos y responsabilidades en la esfera de la salud; y
- Ayude a los consumidores y proveedores de servicios de salud a resolver las quejas que surjan.

1326. La Comisión de Derechos de Salud está encabezada por un Comisionado de Derechos de Salud entre cuyas funciones se cuenta la de encontrar y proponer

formas de mejorar los servicios de salud y de preservar e incrementar los derechos de salud. La Comisión ha elaborado un Código de Derechos y Responsabilidades en Materia de Salud, que se ha presentado al Ministerio de Salud para su examen,

Australia Meridional

1327. En Australia Meridional, la Equal Opportunity Act 1984 (Ley de 1984 sobre Igualdad de Oportunidades) prohíbe la discriminación por raza, sexo, sexualidad (homosexualidad, bisexualidad y transexualidad), estado civil, embarazo, discapacidad física o intelectual, o edad, así como el acoso sexual.

1328. Las esferas en las que se prohíbe la discriminación son las siguientes: asociaciones de negocios; órganos de calificación; agencias de empleo; educación; suministro de bienes y servicios; y alojamiento y propiedad inmobiliaria. La administración de la Ley compete al Comisionado de Igualdad de Oportunidades y al Tribunal de Igualdad de Oportunidades.

1329. Administrativamente, el concepto de discriminación por discapacidad se ha interpretado en forma muy amplia en el marco de la Ley de 1984 sobre Igualdad de Oportunidades con el fin de que las personas afectadas por el VIH tengan acceso al mecanismo de reclamación.

1330. La aplicación de la Ley de 1984 está sujeta a las siguientes excepciones:

- Instituciones de beneficencia que atienden exclusivamente a personas de raza, sexo, sexualidad, estado civil o edad determinados, a personas con discapacidades o a mujeres embarazadas;
- Planes que beneficien a personas de raza, sexo, estado civil o edad determinados o a personas con un tipo de discapacidad determinado;
- Discriminación razonable en el empleo por la apariencia física o la indumentaria, cuando esa apariencia o indumentaria sea característica o expresión de la sexualidad de esa persona;
- Discriminación por conducta sexual en cuanto a la admisión de nuevos socios en empresas con menos de seis socios;
- Discriminación por embarazo, discapacidad o edad en empleos en que esas características podrían constituir un peligro;
- Discriminación por embarazo, discapacidad o edad en empleos que entrañen una respuesta adecuada a posibles situaciones de emergencia;
- Discriminación por embarazo en el caso de despido de una mujer embarazada por no estar en condiciones de desempeñar adecuadamente sus tareas sin poner en peligro su integridad y la de su hijo o por no poder responder adecuadamente a posibles situaciones de emergencia relacionadas con sus funciones, y si no existe ninguna otra tarea que el empleador pueda razonablemente encomendarle;

- Discriminación por sexo, sexualidad, estado civil o embarazo en relación con actividades religiosas;
- Discriminación por edad cuando se actúa en cumplimiento de un laudo arbitral o acuerdo concertado o aprobado de conformidad con la Ley de 1972 sobre Relaciones Laborales;
- Discriminación por edad en una asociación que haya establecido, con criterios genuinos y razonables, diferentes categorías de afiliación para diferentes grupos de edades; y
- Discriminación dimanante de la carencia de capacidad jurídica de un menor.

1331. Las medidas correctivas previstas con arreglo a la Ley de 1984 sobre Igualdad de Oportunidades dependen de la naturaleza de la reclamación, y pueden consistir en:

- Procedimientos de conciliación (utilizados cuando la finalidad es arbitrar medidas de reparación para un caso concreto, como el pago de daños y perjuicios, la readmisión del afectado o la presentación de disculpas);
- Compromiso de aplicar una política de igualdad de oportunidades; y
- Cambios estructurales en el marco de un programa educativo.

1332. Las decisiones y órdenes del Tribunal de Igualdad de Oportunidades pueden recurrirse ante el Tribunal Supremo de Australia Meridional.

Tasmania

1333. En 1995 Tasmania promulgó la Sex Discrimination Act (Ley sobre Discriminación Sexual), por la que se prohíbe la discriminación por sexo, estado civil, embarazo, maternidad o paternidad, y responsabilidades familiares, en las esferas del empleo, la educación y la capacitación, el suministro de bienes y servicios, el alojamiento, el ingreso y la participación en clubes, la administración de leyes y programas estatales, y los convenios laborales. También se prohíben las vejaciones por esos motivos y el acoso sexual.

1334. La aplicación de la Ley está sujeta a las siguientes excepciones:

- Fideicomisos benéficos destinados específicamente a hombres o a mujeres, a mujeres embarazadas, o a personas de un determinado estado civil o con determinadas responsabilidades familiares;
- Discriminación por sexo, estado civil, embarazo, maternidad o paternidad o responsabilidades familiares, cuando resulte razonablemente necesaria para dar aplicación a una ley estatal o federal o a un mandamiento judicial;

- Programas destinados específicamente a hombres o a mujeres, a mujeres embarazadas, o a personas de un determinado estado civil o con determinadas responsabilidades familiares;
- Discriminación por sexo:
 - En una institución religiosa, si la requieren las doctrinas de la institución o de su religión; o
 - En el sistema educativo, a efectos de matriculación en escuelas o albergues no mixtos; o
 - En el empleo, a efectos de alojamiento de personas menores de 18 años; o
 - En el empleo, si se basa en requisitos razonables para un puesto determinado; o
 - En el alojamiento, cuando se trate de alojamiento compartido para menos de cinco personas adultas; o
 - En el suministro o utilización de instalaciones, cuando se destinan razonablemente a personas de un sexo; o
 - En relación con cualquier servicio ofrecido por un club, si:
 - No es viable su utilización simultánea o en la misma medida por hombres y mujeres; y
 - Se ofrece a hombres y mujeres por separado, o a hombres y mujeres en una proporción justa y razonable; o
 - En cuanto a la admisión en un club, si se trata de un club exclusivamente masculino o femenino;
- Discriminación por responsabilidades familiares, maternidad o paternidad, embarazo o estado civil, si la persona de que se trata requiere servicios e instalaciones especiales que resultaría excesivamente difícil proporcionar;
- Discriminación por sexo en actividades deportivas competitivas en las que la participación está restringida a hombres o a mujeres mayores de 12 años; o
- Discriminación por sexo, estado civil, embarazo, maternidad o paternidad o responsabilidades familiares en el suministro de servicios relacionados con los seguros o la jubilación.

1335. Las medidas de reparación aplicables en virtud de la Ley de 1994 sobre Discriminación Sexual son las siguientes:

- Una orden por la que se prohíba al demandado repetir o continuar los actos o comportamientos discriminatorios;

- Una orden por la que se obligue al demandado a reparar cualquier pérdida o perjuicio sufridos por el demandante;
- Una orden por la que se obligue al demandado a emplear, readmitir o ascender al demandante;
- Indemnización por pérdidas o perjuicios;
- Imposición de una multa;
- Una orden por la que se declare nulo o se modifique un contrato o acuerdo;
- Una orden por la que se obligue al demandado a retractarse o disculparse; o
- Cualquier otra orden que el tribunal considere apropiada.

1336. Las decisiones u órdenes del tribunal pueden recurrirse ante el Tribunal Supremo de Tasmania.

Victoria

1337. En junio de 1995 el Parlamento de Victoria promulgó la Equal Opportunity Act 1995 (Ley de 1995 sobre Igualdad de Oportunidades), por la que se derogó y sustituyó la Ley homónima de 1984.

Antecedentes

1338. La nueva Ley se elaboró en respuesta a un informe de 1993 de la Comisión Parlamentaria de Revisión de Leyes y Reglamentos de Victoria, que había llevado a cabo un examen exhaustivo de la Ley de 1984 para determinar si constituía un instrumento eficaz y eficiente para eliminar la discriminación y ofrecer reparación a sus víctimas. La Comisión presentó su informe en noviembre de 1993, formulando numerosas recomendaciones de reforma de las disposiciones antidiscriminatorias de Victoria. Muchas de las recomendaciones de la Comisión se incorporaron a la Ley de 1995.

Fundamentos

1339. La Ley de 1995 sobre Igualdad de Oportunidades prohíbe la discriminación directa e indirecta por motivos de: edad (por lo que, entre otras cosas, se suprime la edad obligatoria de jubilación), discapacidad, actividad laboral, actividad sexual lícita, estado civil, rasgos físicos, convicciones o actividades políticas, embarazo, raza, creencias o prácticas religiosas, sexo, maternidad, paternidad o responsabilidades familiares, y vinculaciones personales, en las esferas del empleo, la educación, el suministro de bienes y servicios, el alojamiento, el ingreso en clubes, los deportes y la administración local. Victoria es la primera jurisdicción australiana que prohíbe la discriminación por "rasgos físicos", definidos en la Ley como "la estatura, el peso, el tamaño u otras características corporales" de la persona. Además, la Ley prohíbe solicitar información que pueda utilizarse con fines discriminatorios, así como las vejaciones y el acoso sexual.

1340. La aplicación de la Ley está sujeta a excepciones, entre las que destacan las siguientes:

- Discriminación en la contratación de empleados para la prestación de servicios domésticos o personales;
- Discriminación por sexo en la contratación de empleados cuando así lo requieran realmente las características del trabajo;
- Discriminación por convicciones o actividades políticas en relación con empleos tales como el de asesor ministerial o el de funcionario de un partido político;
- Ofrecimiento de empleo exclusivamente a personas con determinadas características para la prestación de servicios de atención o promoción de personas con las mismas características, si con ello se asegura una mayor eficacia en la prestación de esos servicios;
- Limitación de la oferta de empleo a parientes del empleador en su negocio propio;
- Discriminación en la contratación para puestos en pequeñas empresas de no más de cinco empleados;
- Imposición a los empleados de normas de conducta e indumentaria que resultan razonables a la luz de la naturaleza y las circunstancias de su trabajo;
- Discriminación en el empleo para trabajos que entrañen el cuidado, la enseñanza o la supervisión de niños, cuando el empleador tenga motivos fundados, a la luz de todas las circunstancias pertinentes, para considerar que tal discriminación es necesaria para proteger el bienestar físico, psicológico o emocional de los niños;
- Discriminación necesaria para el cumplimiento de la legislación, o autorizada por ésta. Conviene señalar que la Ley obliga al Ministro (el Fiscal General de Victoria) a proceder a un examen de toda la legislación de Victoria para determinar las disposiciones que entrañan alguna forma de discriminación o pueden conducir a ella;
- Discriminación necesaria para dar cumplimiento a una orden de un tribunal;
- Discriminación por edad, sexo, estado civil o discapacidad en relación con fondos de jubilación, cuando sea necesaria para dar cumplimiento a legislación federal o se base en datos actuariales o estadísticos;
- Obras de beneficencia;
- Discriminación por instituciones o escuelas religiosas, cuando es necesaria para evitar herir sensibilidades religiosas o acorde con creencias o principios religiosos pertinentes;

- Discriminación necesaria para la observancia de las creencias o principios religiosos genuinos de una persona;
- Discriminación respecto de clubes privados;
- Discriminación por discapacidad o características físicas, cuando es razonablemente necesaria para proteger la salud o la seguridad de una persona;
- Discriminación para proporcionar a personas con una característica determinada servicios, prestaciones o instalaciones destinados a:
 - Atender a las necesidades especiales de esas personas; o
 - Evitar o reducir una desventaja que padecen esas personas en relación con sus necesidades educativas, de alojamiento, de capacitación o de asistencia social.

Procedimientos

1341. La Ley de 1995 sobre Igualdad de Oportunidades prevé la presentación de reclamaciones por discriminación a la Comisión de Igualdad de Oportunidades. Contiene una nueva disposición en virtud de la cual el padre o la madre de un menor o el propio menor pueden presentar a la Comisión reclamaciones por discriminación. Una vez presentada la reclamación, la Comisión de Igualdad de Oportunidades tiene 60 días para investigar su fundamento y aceptarla o rechazarla. Su decisión de rechazar una queja puede ser revisada, a solicitud del demandante, por el Tribunal contra la Discriminación.

1342. Las reclamaciones a las que la Comisión de Igualdad de Oportunidades considera razonablemente posible aplicar un procedimiento de conciliación se remiten al Conciliador Principal. Cuando la Comisión considera que la reclamación no puede resolverse por conciliación, el demandante puede solicitar que la examine el Tribunal contra la Discriminación. En diversas etapas del proceso de conciliación, los demandantes tienen la posibilidad de remitir la reclamación al Tribunal o de solicitar a éste que revise una decisión de la Comisión. La Ley prevé asimismo el examen rápido de determinados tipos de reclamaciones, cuando concurren circunstancias especiales que aconsejan resolver lo antes posible el caso.

1343. La Ley de 1995 introduce un procedimiento para resolver las denominadas "reclamaciones especiales". Cuando una parte en una reclamación considera que ésta tiene carácter "especial", puede solicitar al Tribunal que la remita al Tribunal Supremo de Victoria. El Tribunal Supremo puede emitir las mismas órdenes que el Tribunal contra la Discriminación (enumeradas infra). La Ley prevé mecanismos para la recuperación por las partes de las costas de una "reclamación especial" ante el Tribunal Supremo. Por ejemplo, cuando un organismo estatal solicita la remisión de una "reclamación especial" al Tribunal Supremo, la Ley obliga al Tribunal a ordenar al Estado o al organismo estatal pagar las costas adicionales en que incurra la otra parte como resultado de la elevación de la demanda al Tribunal Supremo. También se dispone que el perdedor de un pleito pueda recuperar parte de las costas de la "reclamación especial" con cargo al Fondo de Costas de Apelación. La decisión del Tribunal Supremo

sobre una "reclamación especial" puede recurrirse, en relación con una cuestión de derecho, ante el Tribunal de Apelaciones de Victoria.

Recursos

1344. Tras atender a las pruebas y escuchar las alegaciones de las partes, el Tribunal contra la Discriminación puede declarar probada la reclamación o cualquier parte de ella y adoptar una o más de las siguientes medidas:

- Ordenar al demandado que se abstenga de cometer nuevas infracciones de la Ley de 1995 sobre Igualdad de Oportunidades en relación con la reclamación;
- Ordenar al demandado que adopte alguna medida especificada en la orden con el fin de reparar cualquier daño o perjuicio sufrido por el demandante como resultado de la infracción;
- Declarar probada la reclamación o cualquier parte de ella, pero sin adoptar ninguna otra medida al respecto; o
- Declarar no probada la reclamación o cualquier parte de ella y desestimar la reclamación o su parte no probada.

1345. El Tribunal puede asimismo emitir órdenes sobre las costas de cualesquiera procedimientos incoados ante él, aunque, en el reciente caso de Jacobs v. Towergrange Pty. Ltd. (EOB 31/93), ha indicado que ejercerá esa facultad con cautela. Las órdenes del Tribunal pueden recurrirse, en relación con una cuestión de derecho, ante el Tribunal Supremo de Victoria.

Australia Occidental

1346. En Australia Occidental, la Equal Opportunity Act 1984 (Ley de 1984 sobre Igualdad de Oportunidades) prohíbe el acoso racial o sexual y la discriminación por sexo, estado civil, embarazo, responsabilidades familiares, raza, convicciones religiosas o políticas, discapacidad física o intelectual, o edad.

1347. Las esferas en las que se prohíbe la discriminación son las siguientes: empleo, asociaciones de negocios, organizaciones profesionales o sindicales, órganos de calificación, agencias de empleo, educación, acceso a lugares y vehículos, suministro de bienes, servicios e instalaciones, alojamiento, e ingreso y participación en clubes.

1348. La administración de la Ley compete al Comisionado de Igualdad de Oportunidades. En el caso de que el Comisionado no consiga resolver el caso por conciliación, la reclamación se remite al Tribunal de Igualdad de Oportunidades, que es un órgano independiente. Si el Comisionado desestima una reclamación, el demandante puede apelar contra esa decisión ante el Tribunal de Igualdad de Oportunidades. El Tribunal puede adoptar las siguientes medidas:

- Conceder una indemnización por un monto de hasta 40.000 dólares;
- Ordenar al demandado que se abstenga de repetir o continuar sus actos ilegales de discriminación;

- Ordenar al demandado que adopte medidas para reparar las pérdidas o los daños causados al demandante; o
- Declarar nulo un contrato.

1349. En lo que respecta a la denigración racial, el Código Penal de Australia Occidental castiga la posesión, publicación o exhibición de textos o imágenes con la intención de promover el odio racial o acosar a un grupo racial. Esas disposiciones no se aplican a la comunicación verbal.

Artículo 27

Aspectos generales

1350. En el cuadro 24 se muestra que el 42 por ciento (cerca de siete millones) de los 16,9 millones de personas que residían en Australia en el momento del censo de 1991 había nacido en el extranjero, o uno de sus progenitores, o ambos, habían nacido en el extranjero. En 1986 la proporción era del 40 por ciento. En el cuadro 25 se desglosa también la población de Australia por país de nacimiento en los años 1981, 1991 y 1994, y en el cuadro 26 se indica el número de inmigrantes por principales lugares de origen y el de sus hijos nacidos en Australia. En cuanto a los pueblos indígenas de Australia, había aproximadamente 239.000 aborígenes y 27.000 isleños del Estrecho de Torres (es decir, el 1,6 por ciento de la población total).

1351. Todas las personas residentes en Australia, ya sean indígenas o inmigrantes, tienen los mismos derechos y obligaciones básicos. La política multicultural de Australia consiste en aceptar la contribución de todas las culturas sin fomentar el separatismo étnico o cultural. Se otorga a todos los australianos la oportunidad de participar plenamente en nuestra sociedad y de contribuir a enriquecerla.

1352. No obstante, las políticas multiculturales y las políticas indígenas se ha desarrollado tradicionalmente por separado. Los pueblos indígenas constituyen un grupo singular de la sociedad australiana y sus necesidades e intereses han requerido, y siguen requiriendo, especial atención.

1353. En el comentario al presente artículo se ha mantenido esa división, pues se esboza en primer lugar la situación de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, y la política y la legislación pertinentes con respecto a ellos, para abordar a continuación la política multicultural aplicable en general a los descendientes de los inmigrantes posteriores.

1354. La protección de los derechos contemplados en este artículo se otorga en el marco del mecanismo general de derechos humanos existente en Australia; su aspecto fundamental es la prohibición de la discriminación racial. Los mecanismos generales de derechos humanos se examinan en mayor profundidad en el documento básico y en la sección referente a la legislación federal aprobada desde la presentación del informe anterior, relación con el artículo 2, supra.

Aborígenes e isleños del Estrecho de Torres

1355. En toda Australia, los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres tienen diversos estilos de vida -como miembros de comunidades urbanas o rurales,

en la periferia de las ciudades o en comunidades remotas con estilos de vida tradicionales.

1356. La población indígena es considerablemente más joven que la población en general. La media de edad cuando se realizó el censo de 1991 era inferior a 20 años, con alrededor de un 40 por ciento de menores de 15 años. En cambio, la media de edad nacional era superior a 30 años. (Véase más información sobre la esperanza de vida en la sección referente a la salud, infra.)

1357. Según las previsiones, en el período de cinco años hasta la realización del siguiente censo, en 1996, el número de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres habrá aumentado en un 13 por ciento, hasta situarse en 303.000, y para 2001 habrá llegado a 340.000.

Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres

1358. La Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres se creó en virtud de la Ley de 1989 sobre la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres, mediante la fusión del Departamento de Asuntos de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres y la Comisión para el Desarrollo Aborigen. La finalidad de la reestructuración fue crear una estructura representativa y consultiva que permitiera a los australianos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres participar en los procesos de adopción de decisiones que afectaran a sus vidas.

1359. Entre los objetivos de la Ley de 1989 sobre la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres figuran los siguientes:

- Garantizar la máxima participación posible de los pueblos indígenas de Australia en la formulación y aplicación de las políticas públicas que los afecten;
- Promover los conceptos de autogestión y autosuficiencia de los indígenas;
- Incrementar el desarrollo económico, social y cultural de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres; y
- Garantizar la coordinación en la formulación y la aplicación de todas las políticas y programas pertinentes sin reducir en modo alguno la responsabilidad de todos los gobiernos de prestar servicios a los pueblos indígenas.

1360. Uno de los elementos cruciales del funcionamiento eficaz de la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres es el sistema de Consejos Regionales, que representan a los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres en todas las regiones de Australia. Todos los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres votan para elegir a sus representantes en los Consejos Regionales, que a su vez eligen a los Comisionados que integran la Junta de la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres mediante un sistema de demarcación por zonas. El Ministro de Asuntos de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres nombra a otros dos comisionados.

1361. Los isleños del Estrecho de Torres cuentan con sus propios mecanismos de representación de conformidad con la Ley de 1989 sobre la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres:

- La Administración Regional del Estrecho de Torres, que representa a los isleños del Estrecho de Torres y a los Aborígenes que viven en la zona del Estrecho de Torres. Empezó a funcionar el 1º de julio de 1994, y tiene competencias similares a las de la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres. Véase también la sección referente a los pueblos indígenas, en relación con el artículo 1, supra;
- El Comisionado del Estrecho de Torres, que es elegido de entre los miembros de la Administración Regional del Estrecho de Torres y representa a la zona del Estrecho de Torres y a su Administración en la Junta de Comisionados de la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres; y
- La Junta Asesora de los Isleños del Estrecho de Torres, que representa los intereses de los isleños del Estrecho de Torres que viven fuera de la zona del Estrecho. Su cometido es asesorar al Ministro de Asuntos de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres y a la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres a fin de promover el progreso económico, social y cultural de los isleños del Estrecho de Torres que viven fuera de la región del Estrecho. Esta infraestructura permite abordar tanto las cuestiones que afectan a los isleños que residen en la zona del Estrecho de Torres como las que afectan a los que residen en otras regiones de Australia.

1362. Estas estructuras de representación cuentan con el respaldo de estructuras administrativas, como la Oficina Regional del Estrecho de Torres de la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres, y la Oficina de Asuntos de los Isleños del Estrecho de Torres sita en Canberra.

Reconciliación aborígen

1363. El establecimiento del Consejo de Reconciliación Aborígen en virtud de la legislación aprobada en 1991 y la creación de la Dependencia de Reconciliación Aborígen enmarcada en el Departamento del Primer Ministro y el Gabinete son también medidas administrativas encaminadas a garantizar los derechos de los pueblos indígenas en el marco legislativo y social del país.

1364. El objetivo fundamental del Consejo es promover la reconciliación entre los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres y la comunidad australiana en un sentido más amplio. El mandato del Consejo expira el 1º de enero de 2001, coincidiendo con el centenario de la Federación de Australia.

1365. El Consejo ha determinado que el proceso de reconciliación comprende ocho cuestiones clave. Se trata de:

- Entender mejor la importancia de la tierra y el mar para los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres;

- Mejorar la relación entre los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres y el resto de la comunidad;
- Reconocer que el patrimonio cultural de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres es una parte valiosa del patrimonio cultural de Australia;
- Fomentar la conciencia de que todos los australianos son dueños de una propiedad común;
- Promover la sensibilización con respecto a las causas que impiden a los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres lograr un nivel justo y adecuado por lo que respecta a la salud, la vivienda, el empleo y la educación;
- Propiciar una mayor respuesta de la comunidad para afrontar las causas subyacentes de los niveles inaceptablemente elevados de aborígenes e isleños el Estrecho de Torres que se encuentran en prisión (véase más información infra);
- Incrementar las oportunidades de que los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres puedan controlar su propio destino; y
- Determinar si el proceso de reconciliación se puede promover mediante la adopción de un documento de reconciliación, una modificación de la Constitución, o algún otro tipo de cambio en la legislación vigente.

1366. El Consejo está integrado por un máximo de 25 miembros, incluidos al menos 12 aborígenes y dos isleños del Estrecho de Torres, y en él está representada la comunidad australiana en general. El Presidente y el Vicepresidente de la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres son miembros de oficio. Entre los miembros del Consejo figuran también personas nombradas por el Gobierno y por los partidos de la oposición representados en el Parlamento Federal.

Reconocimiento del derecho consuetudinario

1367. El Gobierno de Australia reconoce que aunque el artículo 27 no establece el derecho a la diferencia cultural ni al reconocimiento de la legislación indígena, algunas leyes consuetudinarias y tradiciones pueden promover el goce de los derechos dimanantes de ese artículo.

1368. En 1986 la Comisión de Reforma Legislativa de Australia publicó un informe titulado "Reconocimiento del derecho consuetudinario aborígen". El informe de la Comisión contenía recomendaciones sobre la forma de reconocer el derecho consuetudinario en el marco de la legislación general de Australia y hacía un llamamiento a los gobiernos federales y estatales para que aplicaran las recomendaciones relativas a cuestiones de su competencia.

1369. Las recomendaciones formuladas por la Comisión de Reforma Legislativa de Australia en el informe de 1986 se basaban en los siguientes principios rectores:

- El sistema jurídico australiano debe reconocer, en la forma adecuada, el derecho consuetudinario aborigen;
- Ese reconocimiento se debe llevar a cabo sobre la base de la legislación general y en su marco;
- Se debe evitar la creación de estructuras jurídicas nuevas y distintas a menos que se demuestre claramente que son necesarias; y
- En la mayoría de los casos, la codificación y la aplicación directa no son formas adecuadas de reconocimiento, como tampoco es deseable la exclusión de la legislación general.

1370. Habida cuenta de que la mayor parte de los delitos que se cometen en Australia son delitos contra la legislación de los Estados, muchas de las recomendaciones que figuran en el informe de la Comisión de Reforma Legislativa de Australia guardan relación con asuntos que competen fundamentalmente a los gobiernos estatales. Sin embargo, tanto el Gobierno Federal como algunos gobiernos estatales han tratado de aplicar las recomendaciones de la Comisión y de tener en cuenta los acontecimientos acaecidos desde que se publicara el informe de la Comisión. Varios organismos federales han reconocido en su funcionamiento el derecho consuetudinario en la forma recomendada por la Comisión de Reforma Legislativa, y el Gobierno Federal y los gobiernos estatales colaboran en varios órganos y foros en los que se examinan cuestiones relacionadas con el reconocimiento del derecho consuetudinario.

1371. A continuación se examinan los principales aspectos que se abordan en el informe.

Derecho penal e imposición de penas

1372. El reconocimiento del derecho consuetudinario en el sistema de justicia penal a nivel estatal y federal ha sido de carácter general y no discriminatorio, pues ha abarcado las leyes y costumbres de todos los grupos minoritarios, en lugar de otorgar un reconocimiento legislativo específico al derecho consuetudinario o a las prácticas de los australianos indígenas.

1373. En particular, los tribunales pueden tener en cuenta el origen étnico en casos en los que se alega provocación, así como en relación con otras circunstancias atenuantes o eximentes. Al dictar sentencia, los tribunales tienen en cuenta el derecho consuetudinario de la comunidad a la que pertenece el acusado. En virtud de la Ley Penal Federal de 1914 el tribunal debe tener en cuenta el origen cultural del acusado a la hora de dictar sentencia. Durante el juicio, la discreción del fiscal es lo suficientemente amplia como para permitir que se tengan en cuenta consideraciones relacionadas con el derecho consuetudinario.

1374. Actualmente, el Comité de Funcionarios Encargados de Preparar un Código Penal Modelo está preparando dicho código (para más información véase la sección referente a la legislación penal, en relación con el artículo 6, supra) que entrará en vigor en 2001. Los pueblos indígenas participan en los seminarios públicos relativos a la preparación del Código y las partes indígenas interesadas presentan observaciones y comunicaciones. El Comité está examinando una recomendación de la Comisión de Reforma Legislativa de Australia de que se

introduzca un eximente parcial basado en el derecho consuetudinario por el que el asesinato se reduciría a homicidio.

Mecanismos locales de justicia de las comunidades aborígenes

1375. En la actualidad, la demanda de mecanismos locales de justicia en las comunidades aborígenes es incierta. Sin embargo, la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres ha observado que, en algunos Estados, existe una tendencia a reconocer oficialmente los mecanismos locales de justicia. Por ejemplo, en el Territorio del Norte existe un reconocimiento creciente de la idoneidad de los mecanismos alternativos de solución de diferencias como método para resolver los litigios en el seno de las comunidades, a fin de mantener la armonía social en un entorno reducido. En el Territorio, se considera que la solución alternativa de diferencias es un mecanismo que promueve la autogestión y la autosuficiencia de las comunidades aborígenes. La Oficina para el Desarrollo Aborígen está preparando una estrategia en materia de legislación y justicia aborígen en la que se prevé incluir los mecanismos locales de justicia.

1376. En Queensland, la aplicación de un programa de iniciativas de justicia local en 1995/1996 propagará el concepto de comité de justicia de la comunidad en las zonas indígenas. La finalidad es permitir a las comunidades de aborígenes y de isleños del Estrecho de Torres establecer o consolidar comités de justicia de la comunidad a fin de que reduzcan la delincuencia en las comunidades y participen en el funcionamiento y la aplicación del sistema de justicia estatal. El programa complementará otras iniciativas en materia de justicia indígena, como la iniciativa de capacitación de jueces de paz, los reglamentos del Consejo de la Comunidad, la policía y los tribunales de la comunidad y los proyectos de mediación aborígen.

Pruebas y derechos de propiedad

1377. El reconocimiento del derecho consuetudinario por parte del Gobierno Federal con respecto a las pruebas se ha logrado, fundamentalmente, mediante la modificación de la Ley Penal de 1914. En el párrafo 16A 2) m) de dicha Ley se establece que el entorno cultural de la persona es un factor que se debe tener en cuenta al dictar sentencia.

1378. La Comisión de Reforma Legislativa de Australia recomendó que se aprobara un instrumento legislativo para que aborígenes familiarizados con su derecho consuetudinario y sus tradiciones pudieran prestar declaración sobre esas costumbres y tradiciones sin que dicha declaración se desestimara como mero rumor u opinión. También se recomendó que se protegiera el carácter secreto de esa información. En la Native Title Act 1993 (Ley de 1993 sobre Títulos de Propiedad de los Nativos) y en la Aboriginal Land Rights (Northern Territory) Act 1976 (Ley de 1976 de Derechos de los Aborígenes sobre las Tierras (Territorio del Norte)) se establecen algunas disposiciones para la prueba del derecho consuetudinario. En la Ley de Derechos de Propiedad de los Nativos de 1993 se establece que el Tribunal de Derechos de Propiedad de los Nativos puede, por iniciativa propia o a petición de una de las partes, ordenar que la investigación o parte de ella se desarrolle en privado. Para determinar si la investigación se debe desarrollar en privado, el Tribunal debe tener debidamente en cuenta los intereses culturales y consuetudinarios de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.

Matrimonio, hijos y propiedad familiar

1379. El Departamento del Fiscal General Federal ha identificado varios problemas relacionados con la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Reforma Legislativa de Australia por lo que respecta al reconocimiento del matrimonio tradicional. El Departamento se opone al reconocimiento de los matrimonios en los que uno de los cónyuges sea demasiado joven para contraer matrimonio con arreglo a la legislación australiana. También se opone a la poligamia y a los matrimonios sin consentimiento. Sin embargo, con el fin de mejorar los efectos de la falta de reconocimiento jurídico de esas relaciones, todas las jurisdicciones han aprobado leyes en las que se reconocen esas relaciones en general (legislación de facto) o para fines determinados (situación de los hijos, seguridad social).

1380. En el Territorio de la Capital de Australia, Australia Meridional y Nueva Gales del Sur los cónyuges de facto pueden participar en la distribución de una parte de la herencia de una persona fallecida abintestata.

1381. En el informe de la Comisión de Reforma Legislativa de Australia se recomienda el reconocimiento funcional del matrimonio tradicional como respuesta más adecuada al derecho consuetudinario en ese ámbito. Muchos organismos federales se han esforzado por incorporar ese reconocimiento en el desempeño de sus funciones. Para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Reforma Legislativa de Australia, el Departamento Federal de Seguridad Social ha adoptado un enfoque administrativo en virtud del cual los miembros de una relación tradicional "principal" reciben las prestaciones de la seguridad social a la tarifa correspondiente a las personas casadas y las otras partes en la relación a la tarifa aplicable a las personas solteras. Ese enfoque se estableció en colaboración con el entonces Departamento de Asuntos Aborígenes. El Departamento de la Seguridad Social sugiere que con ese enfoque se tienen en cuenta los arreglos domésticos polígamos tradicionales, por los que en un matrimonio tradicional el marido sólo suele mantener a la primera mujer.

1382. El Departamento Federal de Relaciones Laborales ha recogido las recomendaciones de la Comisión de Reforma Legislativa de Australia en la Safety and Rehabilitation and Compensation Act 1988 (Ley de Seguridad y Rehabilitación e Indemnizaciones de 1988). En la Ley la definición de cónyuge se ha ampliado a fin de que incluya, en el caso de los empleados pertenecientes a la raza aborígen o descendientes de los habitantes indígenas de las islas del Estrecho de Torres, a toda persona reconocida como cónyuge con arreglo a la tradición de la tribu o grupo del empleado.

1383. En el Territorio del Norte, los cónyuges tradicionales tienen derecho a reclamar las prestaciones correspondientes a la indemnización por accidente (incluida la indemnización de los trabajadores), la indemnización por muerte, la indemnización por daños, las prestaciones por repatriación y la pensión de jubilación.

1384. En el Territorio del Norte, la ley permite, en distintos grados y de distintos modos, distribuir los bienes de una persona fallecida con arreglo al derecho consuetudinario tradicional.

1385. Por lo que respecta al cuidado de los huérfanos u otros niños aborígenes mantenidos por sus familias, el Gobierno Federal ha participado en el desarrollo

y aplicación del principio relativo a la custodia de los niños aborígenes. Dicho principio se examina más en profundidad en la sección referente a los niños desfavorecidos, en relación con el artículo 24, supra.

Derechos de tenencia de tierras

1386. El movimiento en favor de los derechos de tenencia de tierras ha sido la manifestación más evidente de la exigencia de los australianos indígenas de que se reconozca su derecho consuetudinario. Recientemente se han producido algunos acontecimientos importantes en relación con los derechos de tenencia de tierras y el derecho consuetudinario de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. El 1º de noviembre de 1994 empezó a aplicarse la Federal Native Title Act 1993 (Ley Federal de 1993 sobre Títulos de Propiedad de los Nativos) (con excepción de la parte 10). La Ley de Títulos de Propiedad de los Nativos de 1993 se aprobó en respuesta a una decisión histórica del Tribunal Superior en el caso Mabo v. Queensland (No. 2) (1992) 175 CLR 1, que se denomina Mabo (No. 2). El caso se inició en 1982 cuando un grupo de isleños del Estrecho de Torres encabezado por el Sr. Eddie Mabo inició una lucha, que se prolongó durante un decenio, para conseguir que se reconociera su derecho tradicional a la propiedad de las tierras de las Islas Murray.

Mabo (No. 2)

1387. El Tribunal Superior de Australia decidió en Mabo (No. 2) que los isleños del Estrecho de Torres en cuestión, el pueblo de Meriam, tenían derecho frente al resto del mundo a la posesión, ocupación, uso y disfrute de la mayor parte de las tierras de las islas Murray, en el Estrecho de Torres. Para llegar a esa conclusión, la mayoría del Tribunal estimó que el derecho consuetudinario de Australia reconoce una forma de derecho de propiedad a la tierra de los nativos. Ese derecho de propiedad a la tierra de los nativos existe de conformidad con las leyes y costumbres de los pueblos indígenas:

- En los lugares en los que esos pueblos han mantenido su conexión con la tierra; y
- Cuando su derecho de propiedad no se ha anulado en virtud de una ley imperial, colonial, federal o estatal.

Tierra de nadie

1388. El Tribunal rechazó la doctrina tradicional de que Australia era tierra de nadie (es decir, tierra no perteneciente a ninguna persona) en el momento de la colonización europea, con la consecuencia de que, en ese momento, la propiedad absoluta de las tierras correspondía a la Corona, sino que aceptó que los derechos de propiedad de los nativos sobrevivieron a la colonización, aunque con sujeción a la soberanía de la Corona. El juez Brennan, con el acuerdo del juez Mason y el juez McHugh, señaló que el Tribunal no podía perpetuar una opinión del common law que era injusta, no respetaba a todos los australianos como iguales ante la ley y no estaba en conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Los jueces Deane, Gaudron y Toohey también rechazaron la doctrina de la tierra de nadie, por considerarla repugnante e incompatible con la realidad histórica.

Títulos de propiedad de los nativos

1389. El contenido de los títulos de propiedad de los nativos se determina en función de las leyes y costumbres tradicionales de los titulares de esos derechos, aunque existen algunas características comunes. Se trata de derechos inalienables (es decir que no pueden transferirse) sino renunciando a ellos en favor de la Corona o de conformidad con las leyes y costumbres tradicionales. Los derechos de propiedad nativos pueden protegerse, cuando corresponda, mediante la incoación de procedimientos legales. Esos derechos pueden corresponder a una comunidad, un grupo o una persona, según el contenido de las leyes y costumbres tradicionales, y no cesaron en el momento de la colonización europea.

Relación con otros intereses

1390. Los títulos de propiedad de los nativos no tienen primacía jurídica con respecto a otros derechos de propiedad. Esto se desprende claramente de Mabo (No. 2) y de la ulterior decisión del Tribunal Superior en Western Australia v. the Commonwealth (1995) 128 ALR 1, en la que se refrendó la validez de las disposiciones fundamentales de la Ley de Títulos de Propiedad de los Nativos de 1993. La Corona puede hacer concesiones con respecto a las tierras objeto de títulos de propiedad de los nativos y puede anular esos derechos de propiedad en caso de que exista alguna incompatibilidad. Además, al igual que en el caso de los demás derechos jurídicos, incluidos los derechos de propiedad, la Corona puede emitir decisiones judiciales sobre los títulos de propiedad de los nativos, anularlos o expropiar las propiedades a las que se refieren.

Ley de Títulos de Propiedad de los Nativos de 1993

1391. En respuesta a la decisión de Mabo (No. 2), el Gobierno Federal aprobó la Ley de Títulos de Propiedad de los Nativos de 1993. En resumen, la Ley:

- Reconoce los títulos de propiedad de los nativos y establece los principios básicos pertinentes;
- Dispone la convalidación de leyes antiguas que puedan haber quedado invalidadas debido a la existencia de títulos de propiedad de los nativos;
- Establece el futuro régimen de protección de los títulos de propiedad de los nativos y las condiciones impuestas a los actos que afecten a las tierras y los recursos hídricos objeto de derechos de propiedad de los nativos;
- Prevé mecanismos para establecer los títulos de propiedad de los nativos, fijar las indemnizaciones correspondientes, y determinar posibles concesiones o actuaciones con respecto a los derechos de propiedad de los nativos sobre las tierras y los recursos hídricos; y
- Establece disposiciones en relación con otra serie de cuestiones, incluida la creación del Fondo Nacional para las Tierras Aborígenes y de los Isleños del Estrecho de Torres (véase infra).

1392. Según la Ley, los títulos de propiedad de los nativos incluyen una amplia gama de derechos e intereses entre los que figuran los derechos de caza, pesca y recolección (véanse los apartados 1) y 2) del artículo 223). Sin embargo, pueden comprender derechos mucho más amplios (véase la sentencia del Tribunal Superior en Mabo (No. 2)).

1393. Como se indicaba anteriormente, la Ley de 1993 sobre Títulos de Propiedad de los Nativos exime a los titulares de esos derechos de los requisitos federales o estatales en materia de licencias de caza, pesca o recolección. El titular de esos derechos puede llevar a cabo esas actividades en ejercicio de su título de propiedad y para satisfacer sus necesidades personales, domésticas y comunales con fines no comerciales.

1394. La Ley establece un marco institucional encargado de las cuestiones relacionadas con los títulos de propiedad de los nativos. Como medio más eficaz de atender a las cuestiones relacionadas con los títulos de propiedad de los nativos, la Ley establece un nuevo órgano, el Tribunal Nacional de Títulos de Propiedad de los Nativos, y otorga al Tribunal Federal jurisdicción sobre estos asuntos.

1395. El Tribunal Nacional de Títulos de Propiedad de los Nativos es un órgano independiente que se creó el 1º de enero de 1994 para que se ocupara de las demandas relacionadas con los títulos de propiedad de los nativos, de las reclamaciones de indemnización y de la autorización de futuras actuaciones relacionadas con los títulos de propiedad de tierras y recursos hídricos de los nativos. Las solicitudes se presentan inicialmente al Registrador de los Títulos de Propiedad de los Nativos. Si se cumplen varios requisitos, el Registrador debe aceptar la solicitud de que se expida un título de propiedad presentada por los reclamantes a menos que estime que la solicitud carece de fundamento o no resulta aceptable a primera vista. En ese caso, la solicitud se remite a un miembro presidencial, que debe dar al solicitante la oportunidad de demostrar que realmente tiene derecho a que se registren los títulos que reclama. Aunque la aceptación de la solicitud es una cuestión de procedimiento, es un requisito indispensable para que el Tribunal pueda examinar el caso. El Tribunal trata de mediar en los casos de reclamación de títulos de propiedad de los nativos y de indemnizaciones conexas, pero si su mediación es infructuosa la cuestión se remite al Tribunal Federal.

1396. El Tribunal Nacional de Títulos de Propiedad de los Nativos desempeña también una función significativa por lo que respecta a determinar si determinadas actividades futuras, en particular mineras, pueden desarrollarse en tierras objeto de un título de propiedad de los nativos o tierras objeto de una reclamación. Los titulares y las personas que han reclamado títulos de propiedad de los nativos gozan del derecho especial de ser informados de esas actividades y de negociar su ejecución. No tienen, sin embargo, derecho de veto, y si no puede llegarse a un acuerdo, el Tribunal Nacional de Títulos de Propiedad de los Nativos puede determinar si la actividad puede ejecutarse y, en tal caso, en qué condiciones.

1397. El Tribunal Federal se ocupa de las reclamaciones controvertidas relacionadas con títulos de propiedad de los nativos o con indemnizaciones. El Tribunal atiende también las apelaciones sobre cuestiones de derecho presentadas por el Tribunal Nacional de Títulos de Propiedad de los Nativos en relación con propuestas de medidas futuras que afecten a tierras y recursos hídricos objeto

de títulos de propiedad de los nativos y examina las decisiones dictadas por los miembros presidenciales de no aceptar las solicitudes de emisión de títulos de propiedad de los nativos.

1398. Tanto el Tribunal Nacional de Títulos de Propiedad de los Nativos como el Tribunal Federal están obligados a desempeñar sus funciones de la manera más sencilla y económica, y no tienen que atenerse a determinadas formas jurídicas, tecnicismos ni normas en materia de pertinencia y admisibilidad de las pruebas. Deben tener en cuenta la cultura y las costumbres de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.

1399. La Ley establece también la creación de órganos de representación de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, financiados por el Commonwealth, para que representen a los demandantes en relación con las negociaciones y los litigios sobre títulos de propiedad de los nativos, los ayuden a presentar sus reclamaciones y colaboren en la solución de desacuerdos entre demandantes rivales.

1400. El Comisionado de Justicia Social de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres se encarga de la preparación de un informe anual sobre la aplicación de la Ley de 1993 sobre Títulos de Propiedad de los Nativos y sobre los efectos de dicha Ley sobre el ejercicio de los derechos humanos de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. La Ley otorga al Ministro el derecho de pedir al Comisionado que prepare un informe sobre cualquier otra cuestión relacionada con los derechos de los pueblos indígenas contemplada en la Ley.

Fondo para las tierras

1401. La Land Fund and Indigenous Land Corporation (ATSIC Amendment) Act 1995 (Ley de 1995 sobre la Sociedad de Tierras de los Indígenas y el Fondo para las Tierras (Modificación de la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres)) fue aprobada por el Parlamento Federal el 21 de marzo de 1995. La finalidad del Fondo para las Tierras es favorecer a los australianos indígenas, especialmente a aquellos que, por haber sido desposeídos o quedado desconectados de sus tierras tradicionales, no satisfacen los criterios requeridos para poder optar a los títulos de propiedad de los nativos. Esos indígenas tienen acceso al Fondo para comprar, administrar y mantener tierras. En virtud de la Ley se establece también la Sociedad de Tierras de los Indígenas, que se encarga de la compra de tierras y promueve la gestión sostenible de las tierras adquiridas a fin de que produzcan beneficios financieros, culturales y sociales a los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres y a sus hijos. En el ejercicio económico de 1994-1995 el Fondo para las Tierras se dotó con 200 millones de dólares. (La Sociedad empezó a funcionar el 1º de junio de 1995.)

Territorio de Jervis Bay

1402. Por la Federal Aboriginal Land Grant (Jervis Bay Territory) Act 1986 (Ley Federal de 1986 de Concesión de Tierras Aborígenes (Territorio de Jervis Bay)) se establece el Consejo de la Comunidad Aborigen de Wreck Bay como órgano corporativo al que el ministro competente puede otorgar títulos de propiedad absoluta inalienable de las tierras del Territorio de Jervis Bay. En 1987 se hizo una concesión inicial de 403 hectáreas (el pueblo de Wreck Bay y sus

alrededores) y en 1995 también se otorgaron al Consejo el parque nacional y los jardines botánicos de Jervis Bay.

Estados

1403. En virtud de la Ley de 1993 sobre Títulos de Propiedad de los Nativos, los órganos estatales declarados competentes por el Gobierno Federal pueden también examinar las reclamaciones de títulos de propiedad de nativos. Cuando un órgano estatal ha sido reconocido por el Gobierno Federal, los demandantes pueden optar por presentar su reclamación ante dicho órgano o ante el Tribunal Nacional de Títulos de Propiedad de los Nativos. Los criterios y las normas por los que se rigen esos órganos estatales se establecen en el artículo 251 de la Ley de 1993.

1404. Hasta la fecha, Australia Meridional (Native Title (South Australia) Act 1994) (Ley de 1994 sobre Títulos de Propiedad de los Nativos (Australia Meridional)) es el único Estado cuyos órganos han sido reconocidos. También se ha determinado que el ordenamiento de las actividades mineras en tierras cuyos títulos de propiedad están en manos de los nativos y el régimen de compra obligatoria de dichas tierras cumple los criterios establecidos por el Gobierno Federal. Queensland también ha adoptado los instrumentos legislativos necesarios para crear el Tribunal de Títulos de Propiedad de los Nativos de Queensland, Queensland Native Title Tribunal (Native Title (Queensland) Act 1994) (Ley de 1994 sobre Títulos de Propiedad de los Nativos (Queensland)), pero el Tribunal todavía no ha sido reconocido por el Gobierno Federal.

1405. A continuación se enumeran otros instrumentos legislativos estatales que otorgan también derechos sobre las tierras a los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Véase asimismo la sección referente a las tierras de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, en relación con el artículo 12, supra.

Territorio de la Capital de Australia

1406. La Australian Capital Territory Native Title Act 1994 (Ley de 1994 sobre Títulos de Propiedad de los Nativos del Territorio de la Capital de Australia) da efecto a la intención del Territorio de la Capital de Australia de participar en el plan nacional establecido en virtud de la Ley Federal de 1993 sobre Títulos de Propiedad de los Nativos. La Ley del Territorio de la Capital de Australia convalida y confirma los títulos de propiedad existentes, la legislación y las prácticas y usos de ordenamiento de las tierras en la medida en que lo permite la Ley del Commonwealth. En el Territorio de la Capital de Australia las reclamaciones relacionadas con títulos de propiedad de los nativos se presentan al Tribunal de Títulos de Propiedad de los Nativos del Commonwealth.

Nueva Gales del Sur

1407. En Nueva Gales del Sur se aprobó la Aboriginal Land Rights Act 1983 (Ley de Derechos sobre las Tierras de los Aborígenes de 1983), como legislación correctiva destinada a favorecer y otorgar importantes derechos en tierras de la Corona a los representantes de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres que sufrieron una grave injusticia y enormes pérdidas al verse privados de sus tierras tras el primer asentamiento de colonos blancos. En virtud de esa

Ley se pueden hacer concesiones de tierras a los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, permitiéndoles de ese modo gestionar sus propias tierras.

1408. En virtud de la Ley de Derechos sobre las Tierras de los Aborígenes de 1983 se dispone el pago anual del 7,5 por ciento de la contribución territorial del Estado al Consejo de las Tierras Aborígenes de Nueva Gales del Sur. La Ley dispone que la mitad de esa suma se invierta y la otra mitad se utilice para la administración de los consejos estatales regionales y locales que se ocupan del ordenamiento de las tierras. La asignación de la contribución territorial se suprimirá en 1998, año en el que se espera que el fondo de inversión ascienda a aproximadamente 500 millones de dólares y, mediante nuevas inversiones, alcance la autosuficiencia.

1409. La Ley de Derechos sobre las Tierras de los Aborígenes de 1983 refuerza el derecho de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres a su propia cultura y religión. La Ley reconoce la inseparabilidad de la cultura, la religión y la tierra, garantiza el respeto de los derechos sobre las tierras de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, e incluye una disposición encaminada a la creación del Consejo de las Tierras Aborígenes, que tiene autoridad sobre las tierras y competencia para comprar nuevas tierras.

Territorio del Norte

1410. En el Territorio del Norte, la propiedad de las tierras por parte de los aborígenes se rige principalmente por la legislación federal, es decir, por la Ley de Derechos sobre las Tierras de los Aborígenes (Territorio del Norte) de 1976. Sin embargo, en la Pastoral Land Act 1992 (Ley de 1992 de Tierras de Pastoreo) también se tienen en cuenta los intereses de los aborígenes. En virtud de esa Ley, las asociaciones aborígenes reconocidas en virtud de la legislación federal o del Territorio pueden recibir títulos de propiedad de tierras destinadas a la construcción de viviendas para la comunidad. Las ventajas que suponen esos títulos de propiedad de "zonas para viviendas de la comunidad" son la protección frente a la compra obligatoria (con excepción de los derechos de paso para servicios esenciales) y la protección frente a la enajenación. Además, en virtud de la Aboriginal Land Act 1978 (Ley de 1978 sobre Tierras de los Aborígenes), se requieren permisos para entrar en las tierras de los aborígenes, salvo en el caso de un grupo concreto de personas, y el Administrador puede restringir la entrada en las zonas marítimas colindantes de las tierras de los aborígenes.

Queensland

1411. En Queensland, la Aboriginal Land Act 1991 (Ley de 1991 sobre Tierras de los Aborígenes) y la Torres Strait Islander Land Act 1991 (Ley de 1991 sobre Tierras de los Isleños del Estrecho de Torres) establecen la posibilidad de conceder y reclamar determinadas categorías de tierras de Queensland.

Australia Meridional

1412. Australia Meridional fue el primer Estado de Australia en aprobar una ley relativa a los derechos sobre las tierras de los aborígenes (y los isleños del Estrecho de Torres). En virtud de la Pitjantjatjara Land Rights Act 1981 (Ley de 1981 relativa a los Derechos sobre las Tierras de los Pitjantjatjara) y de la Maralinga Tjarutja Land Rights Act 1984 (Ley de 1984 relativa a los

Derechos sobre las Tierras de los Maralinga Tjarutja) algunas tierras de Australia Meridional se reservan para los aborígenes (y los isleños del Estrecho de Torres). Por lo que respecta a las tierras de los Pitjantjatjara, la tierra se concede a un órgano corporativo que incluye a todos los Pitjantjatjara y que es administrado por Anangu Pitjantjatjara, que debe tener en cuenta los deseos y opiniones de todos los propietarios tradicionales y proteger sus intereses por lo que respecta al ordenamiento, el uso y el control de las tierras. La tierra de los Maralinga está administrada por Maralinga Tjarutja. Véase también la sección referente a las Tierras de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, en relación con el artículo 12, supra.

Tasmania

1413. La Ley de Tierras de los Aborígenes de 1995 confiere a la comunidad aborígen 12 zonas de tierras del Estado.

1414. La propiedad de la tierra se otorga al Consejo de las Tierras, órgano elegido por todos los aborígenes mayores de 18 años de Tasmania. El Consejo está administrado por un comité integrado por ocho aborígenes, incluidos dos representantes de las regiones septentrional, noroccidental y meridional de Tasmania y un representante de Cabo Barren y otro de las Islas Flinders.

1415. Existen varios arriendos y licencias, otorgados actualmente por la Corona, que afectan a las tierras que se han de transferir. En el futuro, el Consejo de las Tierras se encargará de la concesión y gestión de esos arriendos y licencias.

1416. Por lo que respecta a las tierras de Risdon Cove, el público seguirá teniendo derecho de acceso durante las horas diurnas con excepción de las fechas en las que se celebren en esas tierras acontecimientos culturales aborígenes importantes. Además, la Corona se reserva el derecho de construir y vallar una carretera que atravesase esas tierras.

1417. Las tierras que se transferirán a la comunidad aborígen estarán exentas de la adquisición obligatoria por parte de la Corona o las autoridades locales, pero estarán sujetas a la legislación de la administración local y el gobierno estatal por lo que respecta a la aprobación de las edificaciones, los controles de planificación y desarrollo, protección ambiental, seguridad y salud en el empleo y sanidad pública.

1418. El Consejo de las Tierras estará exento del pago de la contribución territorial de las tierras de importancia cultural siempre y cuando no reciba ingresos comerciales devengados por esas tierras ni las arriende a terceras partes. Asimismo, estará exento del pago de tasas siempre y cuando el lugar se utilice exclusivamente con fines culturales.

1419. El Consejo de las Tierras tendrá la propiedad de todos los minerales que se encuentren en esas tierras hasta 50 metros de profundidad, con excepción del petróleo, el helio, las sustancias atómicas y las sustancias geotérmicas. Además, esas zonas quedarán excluidas de las solicitudes de alquiler para realizar actividades mineras, con excepción de los casos en los que el Consejo de las Tierras apoye la solicitud.

Victoria

1420. La Aboriginal Lands Act 1970 (Ley de las Tierras de los Aborígenes de 1970) transfirió la propiedad de las antiguas reservas del lago Tyers y de Framlingham a las comunidades aborígenes. Este hecho constituyó la primera ocasión en que tierras de la Corona reservadas para los aborígenes se transfirieron a los aborígenes que residían en ellas con un título de propiedad incondicional.

1421. El Gobierno de Victoria aprobó también las siguientes leyes;

- La Aboriginal Lands (Aborigines' Advancement League) (Watt Street Northcote) Act 1982 (Ley de 1982 sobre Tierras de los Aborígenes (Liga para el Adelanto de los Aborígenes) (Watt Street Northcote)) y la Aboriginal Land (Northcote Land) Act 1989 (Ley de 1989 sobre las Tierras de los Aborígenes (Tierras de Northcote)), en virtud de la que se concedían tierras a la Liga para el Adelanto de los Aborígenes constituida en Northcote;
- La Aboriginal Lands Act 1991 (Ley de 1991 sobre Tierras de los Aborígenes) en virtud de la que se otorgaban el cementerio de la Misión de Coranderrk y el cementerio de la Misión de Ebenezer a diversas comunidades aborígenes; y
- La Aboriginal Land (Manatunga Land) Act 1992 (Ley de 1992 sobre Tierras de los Aborígenes (Tierras de Manatunga)) en virtud de la que se otorgaban tierras a la Cooperativa Aborígen del Valle de Murray en Robinvale.

1422. El Gobierno de Victoria apoya la concesión de tierras públicas suficientes a las comunidades aborígenes locales cuando ello está justificado históricamente. En esos casos, los títulos son de propiedad absoluta y normalmente están sujetos a los mismos derechos y responsabilidades que son de aplicación general en el Estado.

1423. El Gobierno de Victoria proporciona a las organizaciones de la comunidad aborígen asistencia en forma de donaciones de capital a través del Programa de Donaciones de Capital para los Aborígenes administrado por la Oficina de Asuntos Aborígenes de Victoria con el fin de ayudar a las comunidades a adquirir tierras y bienes de capital. En todo el territorio de Victoria, las organizaciones de la comunidad aborígen han comprado más de 50 propiedades.

Australia Occidental

1424. En la actualidad, las necesidades de la población aborígen de Australia Occidental por lo que respecta a las tierras se contemplan en la Land Act 1933 (Ley de Tierras de 1933) y en la Aboriginal Affairs Planning Authority (AAPA) Act 1972 (Ley de 1972 sobre la Dirección de Planificación de Asuntos Aborígenes). En virtud de la Ley de Tierras, las tierras se pueden reservar para uso y beneficio de los aborígenes, otorgando los derechos correspondientes al Fideicomiso de Tierras Aborígenes, y pueden arrendarse al órgano aborígen pertinente, constituido como sociedad anónima, por un período de 99 años en virtud de la Ley de la Dirección de Planificación de Asuntos Aborígenes. En muchos casos, el estatuto de las tierras reservadas a la población aborígen no

puede modificarse en modo alguno sin consultar previamente a ambas cámaras del Parlamento. En virtud de la modificación de 1995 de la Ley de Tierras los aborígenes pueden arrendar las tierras de la Corona con carácter permanente.

1425. A través del Departamento de Asuntos Aborígenes, el Fideicomiso de Tierras Aborígenes ha tratado de comprar tierras para la población aborígen mediante la adquisición o creación de reservas en tierras de la Corona y mediante la separación de tierras arrendadas para el pastoreo.

1426. La Land (Titles and Traditional Usage) Act (Ley de Usos Tradicionales y Títulos de Propiedad de las Tierras) se revocó como resultado de la decisión de 16 de marzo de 1995 del Tribunal Superior en la que se estipuló que la Ley en cuestión no era compatible con la Ley de Títulos de Propiedad de los Nativos del Commonwealth. Por consiguiente, el Gobierno de Australia Occidental cumple cabalmente la Ley de Títulos de Propiedad de los Nativos.

1427. Se ha puesto en marcha una revisión de la Ley de la Dirección de Planificación de Asuntos Aborígenes, que se desarrolla paralelamente a una revisión de patrimonio del Fideicomiso de Tierras Aborígenes.

1428. El Gobierno está examinando el Land Administration Bill (Proyecto de Ley sobre Administración de Tierras), que se prevé que sustituya a la Ley de Tierras.

Mujeres indígenas

1429. En el informe de la Comisión de Reforma Legislativa de Australia sobre el acceso de las mujeres al sistema jurídico, "igualdad ante la ley" (para más información, véase la sección referente a la igualdad ante la ley, en relación con el artículo 3, supra), se hace referencia a las dificultades con las que se enfrentan las mujeres aborígenes y las isleñas del Estrecho de Torres para acceder a la justicia y conseguir la igualdad ante la ley. La Comisión observó que, de todos los grupos de mujeres estudiados durante las consultas, las mujeres aborígenes y las isleñas del Estrecho de Torres eran las más desfavorecidas por el sistema jurídico. Las mujeres indígenas se enfrentan con numerosas desventajas, incluida la discriminación por motivos de sexo y como consecuencia de su entorno cultural. La Comisión señaló que existe la necesidad urgente de disponer de servicios jurídicos que respondan a las necesidades de las mujeres aborígenes y las isleñas del Estrecho de Torres.

1430. Por otra parte, el Comité Nacional sobre la Violencia contra la Mujer, que desarrolló sus actividades entre 1990 y 1993, se ocupó especialmente de las necesidades particulares de las mujeres aborígenes. El Comité estudió las necesidades de las mujeres aborígenes y las isleñas del Estrecho de Torres víctimas de la violencia. En la actualidad, la Oficina de la Condición de la Mujer está colaborando en el Programa de Intervención en Casos de Violencia Doméstica de la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres con miras a preparar material educativo sobre la violencia contra la mujer para ser utilizado en las comunidades aborígenes y de isleños del Estrecho de Torres.

1431. El programa federal de educación de la comunidad "No a la violencia contra la mujer", con presupuesto para el período comprendido entre 1992 y 1995, está especialmente destinado a las mujeres aborígenes, a las isleñas del

Estrecho de Torres y a las mujeres procedentes de medios no anglófonos. Entre los proyectos financiados figuran los siguientes:

- Cursillos y seminarios destinados a las mujeres aborígenes y las isleñas del Estrecho de Torres y a los proveedores de servicios sobre el modo de hacer frente a las agresiones sexuales;
- Consultas con las comunidades de aborígenes y de isleños del Estrecho de Torres sobre medidas destinadas a mejorar la situación de la mujer; y
- Producción de un vídeo didáctico sobre la violencia doméstica destinado a las comunidades de aborígenes y de isleños del Estrecho de Torres.

1432. En marzo de 1993, el Consejo Consultivo Nacional sobre la Mujer patrocinó una conferencia nacional australiana para representantes de las mujeres indígenas y los museos titulada "Safe keeping: women's business", en la que se establecieron directrices para los gobiernos con respecto a los museos y a la forma en que éstos representan la cultura de las mujeres aborígenes y las isleñas del Estrecho de Torres. En la conferencia se examinaron las opiniones, inquietudes y deseos de las mujeres indígenas por lo que respecta a la conservación y exposición de su patrimonio cultural.

Cultura y educación

Estudios sobre los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres

1433. En Australia, junto con el creciente interés por la preservación y la difusión de la cultura de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, se reconoce cada vez más el valor de la ciencia y la tecnología de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Organismos tales como el Instituto Australiano de Estudios sobre los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres, el Servicio de la Naturaleza y de los Parques Nacionales y la Organización de Investigaciones Industriales y Científicas del Commonwealth han empezado a investigar los conocimientos y las técnicas tradicionales de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres en materias tales como el uso del fuego (para la regeneración de la flora), las nociones de enfermedad y salud, el conocimiento de las plantas y la elaboración de alimentos.

1434. La aplicación de los conocimientos científicos de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres se lleva a cabo mediante la incorporación de las técnicas que utilizan esas comunidades a la conservación del medio ambiente en los parques nacionales del Territorio del Norte. En varias comunidades de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres de carácter tradicional se está utilizando a los curanderos tradicionales para que presten servicios sanitarios. En los programas de estudios de varias escuelas del Territorio del Norte se están incorporando también los conocimientos y las clasificaciones de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres con respecto a la flora y la fauna.

1435. El Instituto Australiano de Estudios sobre los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres se creó en 1989 en virtud de una ley del Parlamento Federal con el fin de fomentar los estudios sobre los aborígenes y los isleños

del Estrecho de Torres, de publicar o ayudar a la publicación de los resultados de ese tipo de estudios, y de promover y apoyar la cooperación entre las universidades, los museos y otras instituciones que se encargan del estudio de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. El Instituto también ayuda a esas instituciones en lo relativo a la formación de investigadores en cuestiones de interés para los estudios sobre los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.

Asistencia a los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres

1436. El desarrollo general y la educación de los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres pueden verse afectados por varios factores, entre los que figuran la incidencia superior a la media de las enfermedades y las consiguientes separaciones de la unidad familiar, y el hecho de que los centros de población se encuentran en zonas remotas. Pese a estar mejorando, las tasas de permanencia en la escuela de los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres son considerablemente inferiores a los de la población en general. Por ejemplo, entre 1985 y 1992 la tasa de permanencia hasta los 12 años de alumnos indígenas aumentó del 14 al 25 por ciento. En el cuadro 31 se indica la progresión en la enseñanza secundaria entre 1989 y 1992 de los niños y niñas aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y los demás australianos. Sin embargo, durante ese mismo período las tasas correspondientes a otros estudiantes aumentaron del 58 al 78 por ciento. El censo de 1991 indicaba que entre los jóvenes de 20 a 24 años el porcentaje de indígenas que asistían a instituciones académicas representaba aproximadamente una tercera parte de la tasa correspondiente a los no indígenas.

1437. Con el fin de remediar las desventajas educativas de los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, el Gobierno Federal creó un equipo de tareas para que se ocupara de la cuestión. Ese equipo de tareas presentó en 1988 un informe en el que se indicaba la necesidad de desarrollar una política general y coordinada a nivel nacional con respecto a la educación de la población aborigen. En la sección G del primer informe presentado por Australia en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño figura más información sobre la política y el programa encaminados a poner remedio a la desventaja educativa de los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.

Medios de comunicación

1438. Desde que Australia presentó su segundo informe periódico se han producido varias novedades importantes en la radiodifusión en relación con los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. En diversas regiones de Australia existen programas de radio destinados a los aborígenes y a los isleños del Estrecho de Torres y emitidos por miembros de esos grupos de población en sus propios idiomas y en inglés. Actualmente existen siete emisoras de la comunidad aborigen que operan con licencia en todos los Estados, con excepción del Territorio de la Capital de Australia, Tasmania y Victoria. Varias otras emisoras de radio de la comunidad proporcionan a los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres espacios para que puedan emitir sus programas. La Asociación Nacional de Medios de Comunicación Indígenas de Australia y las organizaciones de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres que utilizan los servicios de radiodifusión de la comunidad, cuentan con la asistencia del Gobierno Federal para realizar seminarios especiales de capacitación en técnicas de radiodifusión. En 1988 se otorgó la licencia de televisión comercial de

Australia Central a una compañía de televisión de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.

1439. Desde 1987, la Comisión de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres y sus antecesores aplican planes de radiodifusión para las comunidades aborígenes remotas en cuyo marco se proporciona a la población aborígen y a los isleños del Estrecho de Torres de las zonas remotas acceso a servicios locales de radio y televisión en sus propias comunidades, y control de esos servicios. En junio de 1993, había en Australia 80 comunidades a las que se habían aplicado esos planes. Los servicios de radiodifusión enmarcados en esos planes emiten más de 280 horas semanales de programas destinados a los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, buena parte de los cuales se emite en los idiomas locales.

1440. Además, la Australian Broadcasting Corporation (ABC) y el Special Broadcasting Service (SBS), en su calidad de organizaciones nacionales de radiodifusión (véanse las observaciones sobre la propiedad de los medios de radiodifusión, en relación con el artículo 19, supra) se encargan de dar su formación en técnicas de radiodifusión a miembros de la comunidad aborígen y de los isleños del Estrecho de Torres, tanto para que trabajen en esas empresas como para que lo hagan en las organizaciones de radiodifusión de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Actualmente trabajan en ABC más de 80 aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en todos los ámbitos y a todos los niveles de la radiodifusión. Algunas de las personas formadas por la propia empresa desempeñan actualmente una función importante en la gestión de ABC, tanto por lo que respecta a la radio como a la televisión.

1441. Con la introducción de las retransmisiones vía satélite, y las consiguientes posibilidades de llegar con programas de radio y televisión a zonas remotas, ABC está celebrando consultas con las comunidades de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres de esas zonas sobre las repercusiones de los medios de comunicación occidentales en su cultura y sobre el control que esas comunidades deberían ejercer sobre el acceso a los medios de comunicación en esas comunidades remotas de aborígenes e isleños.

1442. En las recomendaciones 205 y 208 de la Real Comisión para la Investigación de las Muertes de Presos y Detenidos Aborígenes se destacaba la necesidad de adoptar un enfoque estratégico con miras a la formación y el empleo de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en los medios de comunicación como una de las formas de subsanar la presentación negativa de las cuestiones relacionadas con los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres en los medios de comunicación de Australia. En respuesta, dos redes nacionales y dos redes regionales de televisión, tres organizaciones de medios de comunicación indígenas y cuatro productoras cinematográficas disponen de estrategias de capacitación y empleo para la contratación de personal indígena.

1443. Además, se ha firmado un acuerdo con la sección de recursos radiofónicos de ABC a fin de permitir a Alphatec, la sección técnica de ABC Radio, proporcionar capacitación técnica a las organizaciones de medios de comunicación indígenas. Esa capacitación contará con el reconocimiento y la acreditación del sector y se pondrá a la disposición de otras organizaciones de medios de comunicación indígenas.

1444. Con arreglo al código de conducta de ABC, los periodistas tienen que respetar la cultura de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres y actuar con cautela al abordar cuestiones relacionadas con sus tradiciones. ABC ha desarrollado también una política editorial en relación con la presentación de las cuestiones indígenas.

1445. ABC cuenta con tres coordinadores aborígenes o isleños del Estrecho de Torres, SBS con uno, y la Comisión Cinematográfica de Australia y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación Indígenas de Australia también disponen de sendos coordinadores indígenas. Tanto los servicios de radio como los servicios de televisión de ABC cuentan con dependencias especializadas en asuntos aborígenes. La Dependencia de Televisión se centra en la producción. El Comité de Empleo y Programación Aborígenes sirve de foro para promover la programación aborigen, supervisar las iniciativas y los progresos, identificar los problemas y proponer soluciones. La Sección Indígena de la Comisión Cinematográfica de Australia examina y desarrolla políticas, directrices y estrategias a fin de facilitar a los indígenas acceso a los programas de financiación de la Comisión. Patrimonio cultural indígena

1446. El Gobierno Federal ha adoptado las siguientes medidas para proteger el patrimonio cultural de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres y promover la comprensión intercultural entre los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres y los no aborígenes:

- La Australian Heritage Commission Act (Ley por la que se crea la Comisión del Patrimonio Australiano) contiene disposiciones especiales para proteger los lugares que guardan relación con la historia, la cultura o las creencias de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. En la actualidad, el Registro del Patrimonio Nacional incluye 830 lugares de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. La Comisión celebra estrechas consultas con los órganos de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres encargados de esos lugares. Tres de las cinco zonas australianas que figuran en la Lista del Patrimonio Mundial son de gran importancia para los aborígenes. Se trata del Parque Nacional de Kakadu, la región de los lagos de Willandra y los parques nacionales de Tasmania Occidental.
- En la Wet Tropics of Queensland World Heritage Area Conservation Act 1994 (Ley de 1994 de Conservación de la Zona Declarada Patrimonio Mundial de los Trópicos Húmedos de Queensland) se tienen en cuenta los intereses de los aborígenes en la zona, incluida su importancia espiritual, social, histórica y cultural. La Ley garantiza a la población aborigen la participación en la gestión de la zona. En concreto, dispone que los aborígenes estén representados en la Dirección de la Administración de los Trópicos Húmedos y en sus comités asesores. Cuatro de las 11 zonas australianas que figuran en la lista del patrimonio mundial lo están por sus sobresalientes valores culturales universales. Se trata del Parque Nacional de Kakadu, la región de los lagos de Willandra, los parques nacionales de Tasmania y el Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta.
- Las otras siete zonas australianas que figuran en la lista del patrimonio mundial comprenden también zonas de importancia para la

población aborigen y los isleños del Estrecho de Torres. Están en marcha iniciativas encaminadas a incrementar la participación de esas comunidades en la gestión de las zonas de Australia que forman parte del patrimonio mundial.

- La Aboriginal and Torres Strait Islander Heritage Protection Act 1984 (Ley de 1984 de Protección del Patrimonio de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres) brinda al Commonwealth un medio para proteger las zonas y los objetos de importancia para los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. La Ley complementa las leyes estatales vigentes y se utiliza sólo como último recurso cuando dichas leyes no protegen de forma eficaz esas zonas y objetos de la destrucción o profanación. La Ley faculta al Ministro de Asuntos de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres a dictar órdenes para la protección de esas zonas y objetos. La infracción de esas órdenes está castigada con multas elevadas.
- La National Museum of Australia Act 1980 (Ley de 1980 del Museo Nacional de Australia) dispone que una de las tres secciones principales del Museo sea la Galería de Arte de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres de Australia. En el apartado 4 del artículo 5 de la Ley se dispone el establecimiento de una política que permita la participación de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres o de sus descendientes.
- La Junta de Artes Aborígenes contribuye de manera significativa a conservar la cultura de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.
- El Reglamento de Aduanas sobre las Exportaciones Prohibidas prohíbe la exportación de ciertos objetos importantes de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.
- La Protection of Movable Cultural Heritage Act 1986 (Ley de 1986 de Protección del Patrimonio Cultural de Bienes Muebles) protege de la exportación los objetos que constituyen el patrimonio cultural de bienes muebles de Australia. En los reglamentos establecidos en el marco de esa Ley (en 1987 y 1988) se incluyen las categorías de objetos del patrimonio de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres que figuran en la Lista de Control del Patrimonio Cultural Nacional.
- En la actualidad algunos lugares de importancia para los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres están incluidos en el Registro del Patrimonio Nacional establecido en virtud de la Ley por la que se crea la Comisión del Patrimonio Australiano de 1975.

1447. La Ley de 1980 del Museo Nacional de Australia, en virtud de la que se creó el Museo de Australia, dispone mecanismos para facilitar la devolución de objetos relacionados con los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres de la colección nacional a sus comunidades de origen. En la Ley se dispone también que los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres puedan participar en el desarrollo y mantenimiento de la proyectada galería del Museo Nacional de Australia dedicada a los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.

1448. La legislación australiana no reconoce la titularidad colectiva de derechos de propiedad intelectual, como los derechos de autor. En virtud de la legislación en materia de derechos de autor, el creador de una obra literaria, teatral, musical o artística suele ser reconocido como titular del derecho de autor de la obra. Esa persona puede proteger su obra frente a la explotación no autorizada. En general, la protección de los derechos de autor se prolonga hasta 50 años después de la vida del creador.

1449. En 1994 el Gobierno Federal publicó un documento monográfico titulado "No a los plagios: protección de la propiedad intelectual de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres". En el documento se examinan las posibles reformas para corregir la insuficiente protección de la expresión cultural y las artes indígenas. Entre las opciones figuraban la aprobación de legislación especial que abordara los conceptos de propiedad y la duración de la protección, y el desarrollo de una marca de autenticación para identificar los productos indígenas genuinos. Las diversas opciones están siendo sometidas a consultas con las comunidades indígenas.

Estados

Nueva Gales del Sur

1450. En la New South Wales National Parks and Wildlife Act 1974 (Ley de 1974 sobre Parques Nacionales y Fauna y Flora Silvestres) se establece que el Director General del Servicio de Parques Nacionales y Fauna y Flora Silvestres será la autoridad competente para la protección de los vestigios y los lugares aborígenes en Nueva Gales del Sur. Puede declararse lugar aborígen cualquier lugar que revista especial importancia para la cultura aborígen. El Director General es el encargado del cuidado, la conservación y la protección idóneos de cualquier vestigio o lugar aborígen que se encuentre en las tierras reservadas o designadas en virtud de la Ley de Parques Nacionales y Fauna y Flora Silvestres (artículo 85). El Director General está facultado para cuidar, controlar y administrar las zonas aborígenes (artículo 63). Pueden designarse zonas aborígenes en cualesquiera tierras de la Corona no ocupadas a los fines de preservar y proteger de daños los vestigios o los lugares aborígenes dentro de una zona aborígen. Pueden aplicarse diversas multas de importe considerable por delitos relacionados con la destrucción de cualquier vestigio o lugar aborígen. En 1991 se promulgó la Ley Modificada de Parques Nacionales y Fauna y Flora Silvestres (Conservación de Tierras Cársticas). Dicha Ley establece medidas complementarias de protección para la conservación de las zonas de piedra caliza, los cursos de agua subterráneos y las cuevas, muchos de los cuales son de especial importancia para la cultura de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Las disposiciones de la New South Wales Heritage Act 1977 (Ley de 1977 sobre el Patrimonio de Nueva Gales del Sur) también proporcionan medios para proteger el patrimonio cultural de los aborígenes.

Territorio del Norte

1451. En 1989, la Aboriginal Sacred Sites Act 1978 (Ley de 1978 sobre Lugares Sagrados Aborígenes) fue sustituida por la Northern Territory Aboriginal Sacred Sites Act 1989 (Ley de 1989 sobre Lugares Sagrados Aborígenes del Territorio del Norte). La Ley de 1989 introduce varios cambios importantes en las disposiciones de la Ley de 1978, entre los que figuran los siguientes:

- La Ley obliga a la Corona, incluso por lo que respecta a las disposiciones relativas a la confidencialidad;
- La Dirección de Lugares Sagrados Aborígenes creada en virtud de la Ley de 1978 fue sustituida por la Dirección de Protección de Lugares Aborígenes (la mitad de cuyos miembros tienen que ser mujeres); y
- La presentación del Registro de Lugares Sagrados o de un certificado emitido por la Dirección o por el Director Ejecutivo se considera en todos los tribunales como indicio razonable de que la zona a la que se hace referencia en el Registro o en el certificado es un lugar sagrado.

1452. La Ley de 1989 establece multas mucho más elevadas por:

- La profanación de un lugar;
- La realización de trabajos no autorizados en un lugar sagrado o su uso no autorizado; y
- La entrada no autorizada en un lugar sagrado o la permanencia no autorizada en él.

1453. La multa aplicable a las empresas condenadas por delitos de esa índole es el doble de la aplicable a las personas físicas. Las personas físicas pueden ser también condenadas a penas de cárcel.

Queensland

1454. La Cultural Record (Landscape Queensland and Queensland Estate) Act 1987 (Ley de 1987 sobre el Registro Cultural (Zonas de Valor Paisajístico y Patrimonio de Queensland)) sustituyó a la Aboriginal Relics Preservation Act 1976 (Ley de Conservación de las Reliquias Aborígenes de 1976). La competencia para la administración de la Ley de 1987 se traspasó el 16 de enero de 1989 del Ministro de Servicios de la Familia y Asuntos Aborígenes al Ministro de Medio Ambiente y Patrimonio. La finalidad de la Ley de 1987 es promover la preservación y la administración de todos los elementos de las zonas de valor paisajístico de Queensland (zonas alteradas o afectadas por los seres humanos y que revisten importancia por motivos antropológicos, culturales, prehistóricos, históricos o sociales) y del patrimonio de Queensland (vestigios de asentamientos prehistóricos o históricos). Su objetivo es promover la difusión de conocimientos sobre las zonas de valor paisajístico y el patrimonio de Queensland y facilitar la comprensión de la continuidad histórica que se manifiesta en el territorio de Queensland.

1455. En la Ley se establecen varios delitos penales en relación con la entrada en las "zonas designadas" o su profanación, aunque esto no afecta al acceso a esas zonas, ni a su utilización, cuando éstos se justifican por las costumbres tradicionales. Se está tratando de crear comités asesores regionales aborígenes con el fin de que asesoren al Departamento de Medio Ambiente y Patrimonio.

1456. El Departamento de Servicios a la Familia y Asuntos de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres administra la sección de arte y cultura de

los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Esa sección concede subvenciones para la realización de proyectos que promuevan el arte y la cultura de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres de Queensland. También se financian proyectos destinados a mantener, revitalizar o preservar el patrimonio cultural de la comunidad de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres en Queensland. El Departamento administra también la galería Creaciones Aborígenes de Queensland, donde se venden y exponen todos los tipos de productos artísticos creados por artistas aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.

Australia Meridional

1457. En la Aboriginal Heritage Act 1988 (Ley de 1988 sobre el Patrimonio Aborígen) se dispone la protección de los lugares de importancia para los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. En la Ley se prevé también la protección y la preservación del patrimonio de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. El Ministro tiene el mandato de mantener un archivo del patrimonio de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, incluido un registro de lugares y objetos de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.

1458. Toda persona que descubra un lugar de importancia para la cultura aborígen y de los isleños del Estrecho de Torres o un objeto o vestigio de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres tiene la obligación de informar del descubrimiento al Ministro. Se considera delito dañar o alterar cualquiera de esos lugares, objetos o vestigios sin autorización del Ministro. El Ministro está facultado para restringir el acceso a la zona. La Ley controla también la venta de objetos de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres y los negocios conexos.

Tasmania

1459. En Tasmania, la Aboriginal Relics Act 1975 (Ley de 1975 sobre Reliquias Aborígenes) prevé la protección de los lugares, artefactos y restos humanos de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Dicha Ley es administrada por el Director del Servicio de Parques Nacionales y Fauna y Flora Silvestres. La Ley comprende disposiciones por las que se faculta al Director a ocuparse de los artefactos y vestigios como determinen el Ministro y un consejo asesor que incluye a representantes de la comunidad aborígen y de los isleños del Estrecho de Torres.

Victoria

1460. En Victoria, la modificación de la legislación aprobada recientemente ha permitido la devolución al museo de vestigios óseos, y la restricción total de la venta de artefactos y material cultural de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Victoria está también estudiando la adopción de nuevas medidas para proteger el patrimonio cultural de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres en el Estado.

1461. El Gobierno de Victoria sostiene el principio fundamental de que los aborígenes deben contar con el apoyo de la ley en sus esfuerzos por restaurar y salvaguardar su patrimonio cultural, y trata de obtener el apoyo de los principales partidos con miras a preservar y proteger el patrimonio cultural

aborigen. El Gobierno de Victoria reconoce la singularidad de la historia, la cultura y el patrimonio de los aborígenes y está decidido a conseguir que se entienda, preserve y proteja mejor.

1462. El Gobierno de Victoria presta apoyo principalmente a las actividades relacionadas con el patrimonio cultural aborigen que se enumeran a continuación.

- El Programa de Subvenciones para la Comunidad Aborigen proporciona financiación a las organizaciones de la comunidad aborigen para el desarrollo de proyectos destinados a preservar y promover su patrimonio cultural y su identidad regional. El Programa de Subvenciones a la Comunidad Aborigen tenía un presupuesto de 3,5 millones de dólares para 1994-1995 y ha financiado la creación de centros culturales y de conservación en Victoria.
- El Programa del Patrimonio Cultural Aborigen presta apoyo a las actividades que realizan las organizaciones de la comunidad aborigen con miras a preservar y proteger el patrimonio cultural aborigen de Victoria. El Programa del Patrimonio Cultural Aborigen disponía de un presupuesto de 1,49 millones de dólares para el período 1994-1995, y proporciona fondos al Subprograma de Oficiales Culturales y al Subprograma de Oficiales de Conservación.
- El Subprograma de Oficiales Culturales, que sólo existe en Victoria, proporciona fondos a 24 organizaciones de la comunidad aborigen para la contratación de un oficial cultural aborigen. Algunas de las tareas que desempeñan los oficiales culturales consisten en proteger y administrar los lugares aborígenes, informar sobre el patrimonio cultural aborigen y representar a la comunidad local en todos los asuntos relacionados con el patrimonio aborigen.
- El Subprograma de Oficiales de Conservación financia la contratación de cuatro oficiales regionales. Entre las funciones de esos oficiales figuran la vigilancia del estado y las necesidades de gestión de los lugares y yacimientos arqueológicos aborígenes de importancia.
- El Programa de Protección de Lugares Culturales cuenta con un presupuesto de 450.000 dólares para un período de tres años y su función es la protección y la gestión de los lugares y emplazamientos aborígenes de importancia para la comunidad aborigen de Victoria. Algunos de esos proyectos han creado oportunidades de empleo para miembros de la comunidad aborigen.
- En virtud de la Archaeological and Aboriginal Relics Protection Act 1972 (Ley de 1972 de Protección de las Reliquias Aborígenes y Arqueológicas), el Gobierno de Victoria tiene la responsabilidad jurídica de registrar todos los yacimientos arqueológicos significativos existentes en el territorio. Actualmente están registrados unos 17.000 yacimientos. La Ley de 1972 requiere también que se presenten al Gobierno de Victoria informes sobre los estudios arqueológicos que se realicen en el territorio. El Gobierno de Victoria administra la parte 11A de la Aboriginal and

Torres Strait Islander Heritage Protection Act 1984 (Ley de 1984 de Protección del Patrimonio de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres) en la que, entre otras cosas, se otorgan poderes a las comunidades aborígenes para proteger su patrimonio cultural.

- El Gobierno de Victoria ha nombrado a 15 oficiales culturales de la comunidad aborígen y les ha dado formación en relación con la Ley Federal de 1984 de Protección del Patrimonio de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres y con los poderes y responsabilidades que les incumben en virtud de dicha Ley.
- El Gobierno de Victoria ha solicitado y recibido una donación anual del Consejo de Investigaciones de Australia para financiar un proyecto conjunto con la Universidad de Latrobe a fin de estudiar gran número de piezas arqueológicas procedentes de yacimientos aborígenes en la zona sudoccidental de Victoria.

Australia Occidental

1463. La División de Cultura y Patrimonio del Departamento de Asuntos Aborígenes de Australia Occidental financia una amplia biblioteca especializada dedicada a la historia y la cultura aborígenes y a los temas contemporáneos relacionados con esa comunidad.

1464. El Departamento de Capacitación de Australia Occidental ha preparado y ejecutado varios programas encaminados a promover los idiomas aborígenes. Entre ellos figuran:

- Un curso de capacitación para intérpretes a cargo de Karrayili; y
- Módulos de perfeccionamiento del idioma aborígen ofrecidos como asignatura optativa en el programa general de estudios para la obtención de los certificados de educación general a tiempo completo para adultos.

1465. El Museo de Australia Occidental celebra reuniones con las comunidades aborígenes y presta apoyo a proyectos que incluyen la exposición, el registro y la preservación de la cultura tradicional y contemporánea. El Departamento de las Artes, el Museo y otros organismos gubernamentales celebran reuniones periódicas sobre asuntos culturales a fin de examinar la forma de prestar mejores servicios a la comunidad aborígen y de facilitar el acceso a los diversos servicios que ofrece cada uno de esos organismos mediante el establecimiento de redes.

Políticas multiculturales de Australia

1466. Como se indica en el cuadro 24, sólo algo más de la mitad de los habitantes de Australia son hijos de padres nacidos ambos en Australia. Aproximadamente una cuarta parte de la población ha nacido en el extranjero. Según estimaciones de 1991 de los grupos étnicos basadas en datos sobre los inmigrantes de primera y segunda generación, las personas de origen británico constituían el grupo étnico más importante de habla inglesa, y representaban alrededor del 8,5 por ciento de la población. Las personas de origen italiano constituían el grupo étnico más importante de habla no inglesa, y representaban

algo más del 2,5 por ciento de la población. Las personas de origen vietnamita constituían el grupo asiático más importante y representaban cerca del 1 por ciento de la población.

1467. El compromiso de Australia con el multiculturalismo se sustenta en un equilibrio de derechos y obligaciones. Los tres derechos básicos son:

- La diversidad cultural - el derecho de todos los residentes a expresar y compartir su patrimonio cultural, a practicar su religión y a utilizar su idioma;
- La justicia social - el derecho de todos los residentes a recibir el mismo trato y las mismas oportunidades y la supresión de todos los obstáculos que lo impidan; y
- La eficacia económica - la necesidad de mantener, desarrollar y utilizar eficazmente los conocimientos y talentos de todos los residentes, cualquiera que sea su origen étnico, y hacer el mejor uso posible de los recursos multiculturales.

1468. El Gobierno Federal y algunos gobiernos estatales han adoptado políticas en materia de acceso e igualdad destinadas a garantizar a todos los residentes de Australia el acceso a los recursos que el Gobierno administra en nombre de la comunidad.

1469. La finalidad de las políticas del Gobierno Federal en materia de acceso e igualdad es eliminar los obstáculos basados en la raza, el idioma, la religión, la cultura y el sexo de la formulación de políticas, el establecimiento de programas y la prestación de servicios, mediante, entre otras cosas, el suministro de un servicio de traducción e interpretación, la capacitación intercultural de los funcionarios públicos y la celebración de consultas con las partes interesadas.

1470. Según un informe presentado en 1995 por el Consejo Asesor Multicultural Nacional, los resultados en materia de acceso e igualdad de la mayoría de los departamentos y organismos federales han mejorado claramente desde 1989, en particular por lo que respecta a los que se ocupan del suministro de servicios, como, por ejemplo, los departamentos de seguridad social; empleo, educación y capacitación; inmigración y asuntos étnicos; y servicios humanos y de sanidad. Según un informe titulado "Acceso e igualdad: Informe anual de 1994" preparado por la Oficina de Asuntos Multiculturales, con pocas excepciones, los organismos indican que se han prestado algunos servicios encaminados a superar las dificultades de comunicación con los clientes y clientes potenciales que no hablan, entienden ni leen bien el inglés. Los organismos más avanzados están contratando a personal bilingüe y bicultural y otros se están percatando del valor del servicio telefónico de interpretación. Actualmente la mayoría de los departamentos gubernamentales proporcionan materiales traducidos y se esfuerzan por que sus medios de información lleguen a las comunidades que no hablan inglés y a las comunidades indígenas. Los programas de formación de los funcionarios públicos incluyen módulos con diversos niveles de sensibilización intercultural y entre los criterios de selección de nuevos funcionarios figura el de que, como mínimo, éstos sean conscientes de la existencia de los principios de acceso e igualdad y los entiendan. Cada vez es más frecuente entre los organismos la coordinación con los grupos de usuarios y con otros departamentos

gubernamentales, a medida que comprenden la importancia y la eficacia de aplicar un enfoque cooperativo en la prestación de servicios.

1471. Al propio tiempo, las consultas celebradas con las comunidades étnicas e indígenas ponen de manifiesto que todavía se considera que existen deficiencias, entre otros, en uno de los principales departamentos de servicios. Es frecuente que se critique a los organismos por la falta de comunicación adecuada con la comunidad y por las deficiencias en la difusión de información, los retrasos en el acceso a los intérpretes, la insensibilidad del personal con respecto a las diferencias culturales de los clientes y la recogida y utilización insuficientes de datos sobre las características étnicas para las actividades de planificación y evaluación.

1472. Se ha establecido una estrategia nacional integrada de asentamiento con el fin de mejorar la coordinación y la calidad de la prestación de servicios a los inmigrantes en todas las esferas del Gobierno, en consulta con la comunidad. La estrategia dispone de mecanismos de supervisión y evaluación.

Las comunidades étnicas y el Departamento de Seguridad Social

1473. Los servicios de interpretación y traducción corren a cargo del cuerpo de intérpretes del Departamento de Seguridad Social, complementados por un equipo de intérpretes y traductores que trabajan con contratos temporales en función de las necesidades. Cuando se precisa, esos servicios se complementan con el servicio telefónico de traducción e interpretación del Departamento de Inmigración y Asuntos Étnicos. El Departamento promueve también activamente la contratación de personal con conocimiento de idiomas. Ese personal recibe un suplemento salarial por sus aptitudes lingüísticas.

1474. El Departamento de Seguridad Social traduce gratuitamente a idiomas distintos del inglés los documentos relativos a los requisitos que debe cumplir un cliente para poder recibir asistencia. Se estudia la posibilidad de traducir todos los folletos, volantes y carteles. Los productos informativos más importantes de cada programa se traducen a diversos idiomas. En el caso de los productos que no se traducen, el Departamento ha adoptado la política de imprimir una nota en diversos idiomas en la que se informa a los lectores de que pueden obtener información sobre el programa o servicio en cuestión a través del Servicio Multilingüe de Información Telefónica.

1475. El Servicio Multilingüe de Información Telefónica se creó para ayudar a los inmigrantes que buscaban información y asesoramiento con respecto a la seguridad social en los idiomas de la comunidad. Las personas que no entienden bien el inglés pueden acceder a ese Servicio desde cualquier lugar de Australia a precio de llamada local y hablar con un operador en su propio idioma. Se atienden llamadas en unos 50 idiomas.

1476. Los medios de comunicación étnicos se utilizan frecuentemente para difundir información a la población de lengua materna distinta del inglés. Los comunicados de prensa de todos los departamentos se distribuyen a los medios de comunicación étnicos seleccionados. Los comunicados de especial interés para los clientes nacidos en el extranjero, por ejemplo los relativos a ayudas o acuerdos internacionales, se traducen a los idiomas de la comunidad. El boletín del Departamento de la Seguridad Social, Age Pension News, se publica en 15 idiomas de la comunidad como complemento de diversos periódicos étnicos. Se

publica gran cantidad de publicidad de pago en los periódicos étnicos y en las emisoras de televisión de la SBS y de las emisoras de radio étnicas de la comunidad.

1477. El Departamento de Seguridad Social aplica también el Programa de Oficiales de Enlace con los Migrantes, cuya finalidad es difundir en las comunidades étnicas información sobre los programas y servicios del Departamento. La información que se recibe de las comunidades étnicas sobre las necesidades en materia de información y los resultados de las iniciativas por lo que respecta a los clientes que no hablan inglés es esencial para la planificación y el desarrollo de los servicios que brinda el Departamento. Los oficiales de enlace con los migrantes también desempeñan una función clave por lo que respecta a facilitar el enlace a nivel local con miras a incrementar la participación de las comunidades étnicas en la prestación de servicios.

1478. Cada Estado cuenta con un comité asesor para los migrantes que se reúne aproximadamente cuatro veces al año. Los comités proporcionan un foro oficial para que la comunidad étnica pueda plantear al Departamento problemas relacionados con la prestación de servicios. Los miembros del comité representan a una amplia gama de comunidades y organizaciones de migrantes. En la mayoría de los Estados, el Departamento de Seguridad Social y el Departamento de Empleo, Educación y Capacitación prestan conjuntamente servicios a esos comités por considerar que ambos departamentos tienen los mismos usuarios. También se celebran seminarios especiales de la comunidad con el fin de explicar los cambios que se introducen en los programas de la seguridad social. Ejemplo de esas actividades son las organizadas en el marco del programa sobre acuerdos internacionales y antes de la integración de los pagos familiares.

Idiomas

1479. En muchas jurisdicciones se brinda apoyo para fomentar el uso de los idiomas de las comunidades étnicas. El inglés es el idioma común para la comunicación social y a los miembros de la comunidad que no hablan el inglés con fluidez se les alienta a aprenderlo. Existen programas especiales de asistencia tanto para los niños en edad escolar como para los adultos. El Gobierno otorga a todos los inmigrantes que carecen de conocimientos básicos de inglés un subsidio para el aprendizaje del idioma. Además, en el marco de los programas oficiales relacionados con el mercado laboral también se paga la matrícula para el aprendizaje del inglés.

1480. Se reconoce que siempre habrá grupos de la comunidad que no podrán comunicarse en inglés o que no hablarán inglés con suficiente fluidez para poder desenvolverse sin asistencia. Entre esos grupos figuran los recién llegados, las personas de edad y otras personas. Por tanto, en la mayoría de las jurisdicciones se ofrecen servicios de intérpretes para ayudar a los migrantes que tienen problemas con el idioma a comunicar sus necesidades, recibir asesoramiento y tener acceso a los servicios. El Servicio de Traducción e Interpretación financiado por el Gobierno Federal y varios servicios de interpretación y traducción estatales cubren la mayoría de los centros urbanos y regionales en los que viven personas cuya lengua materna no es el inglés. Asimismo, existe un servicio de traducción que se encarga de los documentos escritos necesarios para radicarse en el país. También se dispone de programas activos de apoyo a las emisiones radiofónicas para grupos étnicos, la televisión multicultural, los periódicos étnicos, la utilización de signos universales y

las escuelas étnicas. Por lo que respecta a los intérpretes, véase también la sección referente a la información en otros idiomas, en relación con el artículo 14, y el comentario relativo al apartado f) del párrafo 3, supra.

Educación

1481. En la sección C del primer informe presentado por Australia de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño figura información detallada sobre los programas educativos destinados a niños de lengua materna distinta del inglés.

Familias étnicas

1482. Las comunidades étnicas han informado al Gobierno Federal de que suelen surgir tensiones maritales como consecuencia del ajuste de la familia después de la migración, de los cambios en los derechos y la independencia de las mujeres, de las expectativas excesivamente optimistas previas a la emigración a Australia, de los conflictos interculturales, de los conflictos intergeneracionales, de la infidelidad y de la violencia doméstica.

1483. En 1993 la Oficina de Asuntos Multiculturales del Departamento del Primer Ministro y el Gabinete y el Departamento del Fiscal General encargaron un proyecto conjunto de investigación con miras a estudiar la utilización, la idoneidad cultural y la accesibilidad de los servicios de asesoramiento matrimonial y de pareja financiados por el Gobierno Federal con respecto a los grupos de lengua materna distinta del inglés. El proyecto de investigación confirmó que los servicios de asesoramiento matrimonial y de pareja financiados por el Gobierno Federal no tienen en cuenta los factores culturales; sin embargo, si se dotaran de recursos concretos, esos servicios podrían adaptarse mejor a los usuarios y prestarse con mayor eficacia. Los dirigentes étnicos han reconocido también que no es posible que el Gobierno Federal preste servicios de asesoramiento sobre las relaciones familiares adaptados a todos los grupos étnicos y que la facilitación del acceso a través de los oficiales de desarrollo de la comunidad promovería la sensibilización intercultural y permitiría desarrollar unos modelos de servicios idóneos.

1484. Reconociendo que los servicios tienen que ser más adecuados y accesibles, el Gobierno Federal ha financiado el nombramiento de nuevos oficiales de desarrollo de la comunidad. Se han financiado proyectos piloto relacionados con los oficiales de desarrollo de la comunidad, con una duración de cuatro años, a cargo de organizaciones de Nueva Gales del Sur (dos), Victoria (uno), Queensland (uno), Australia Meridional (uno) y Australia Occidental (uno). Las cifras que figuran entre corchetes indican el número de oficiales que se nombrarán en cada Estado.

Mujeres étnicas

1485. De acuerdo con el examen de 1993 de los mecanismos de asesoramiento para la formulación de las políticas gubernamentales relacionadas con la condición de la mujer, en la actualidad los distintos ministerios y carteras se encargan de garantizar que en las políticas y programas de su incumbencia se reconozca la situación de desventaja de las mujeres de lengua materna distinta del inglés. El Departamento de Inmigración y Asuntos Étnicos se mantiene permanentemente en contacto con las carteras pertinentes con el fin de supervisar las actividades

de todas las carteras y ministerios del Gobierno Federal que afectan a las mujeres de lengua materna distinta del inglés. En la actualidad la responsabilidad de atender a las recomendaciones del antiguo Consejo de Estado del Commonwealth sobre cuestiones relacionadas con las mujeres de lengua materna no ingresa (cuyo mandato finalizó en 1994) incumbe a las carteras y ministerios pertinentes.

1486. Como parte de su labor de asesoramiento para la formulación de políticas, la Oficina de la Condición de la Mujer mantiene estrechos contactos con el Subcomité de la Mujer del Consejo Asesor para los Asentamientos (Departamento de Inmigración y Asuntos Étnicos) y sigue alentando a los ministerios y carteras a que reconozcan las necesidades e intereses de las mujeres de lengua materna distinta del inglés en el marco de los programas que desarrollan, ejecutan y evalúan. Por ejemplo, la Oficina participó en el Comité Directivo encargado de la revisión del funcionamiento del Servicio de Empleo del Commonwealth en virtud del artículo 26 de la Ley sobre Discriminación Sexual (por la que se prohíbe la discriminación directa o indirecta en los servicios o programas). En las consultas realizadas en el marco del examen se recabó la opinión de mujeres de lengua materna distinta del inglés. Además, las organizaciones que representan a las mujeres de lengua materna distinta del inglés están incluidas en las mesas redondas semestrales patrocinadas por el Ministro adjunto del Primer Ministro encargado de la condición de la mujer.

1487. Como se indicaba en relación con el artículo 3, supra, el programa de educación de la comunidad del Gobierno Federal "No a la violencia contra la mujer", con presupuesto para el período 1992-1995, ha identificado como grupos objetivo a las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres y a las mujeres de lengua materna distinta del inglés. Entre los proyectos que se han financiado figuran los siguientes:

- Un seminario nacional para buscar soluciones a la violencia contra las mujeres filipinas;
- Un proyecto de información y educación en los medios de comunicación italianos destinado a emitir series radiofónicas sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres, publicar artículos complementarios en los medios impresos y crear un servicio telefónico de asesoramiento e información;
- La producción de una serie de programas de televisión, contra la violencia emitidos a nivel nacional en ocho idiomas;
- Una serie de cursillos, seminarios y reuniones informativas sobre medidas para frenar la violencia contra las mujeres de lengua materna distinta del inglés de la región de Pilbara Occidental (ciudad minera);
- La financiación de un puesto de asistente con miras a desarrollar una educación culturalmente adecuada para las mujeres musulmanas que buscan amparo de la violencia doméstica.

1488. La sección publicitaria del programa de educación de la comunidad incluye la emisión de anuncios radiofónicos a nivel nacional en los diez idiomas siguientes: árabe, cantonés, griego, italiano, español, chino mandarín,

vietnamita, croata, serbio y turco. Además, se han publicado anuncios en los medios de comunicación impresos étnicos en árabe, chino, croata, griego, italiano, macedonio, portugués, serbio, español, turco y vietnamita.

Medios de comunicación étnicos

1489. Los servicios de radio y televisión del Servicio Especial de Radiodifusión siguen acrecentando la amplia aceptación y prestigio que han conseguido a nivel nacional entre la comunidad australiana. En el sector de la radiodifusión para la comunidad, existen cinco emisoras étnicas a tiempo completo que emiten con licencia desde todas las capitales, con excepción de Darwin y Canberra. También tienen acceso a los grupos étnicos otras 60 emisoras de la comunidad. La prensa étnica ha ampliado su campo de acción, y en la actualidad se publican en toda Australia más de 120 periódicos y revistas en más de 30 idiomas. Las publicaciones impresas se financian de manera independiente.

Estados

1490. Las oficinas estatales de asuntos étnicos colaboran con la Oficina de Asuntos Multiculturales a fin de desarrollar el multiculturalismo en Australia. Los Estados han aplicado numerosos programas de importancia en el ámbito del multiculturalismo. A continuación se detallan algunos de ellos.

Nueva Gales del Sur

1491. La Comisión de Asuntos Étnicos de Nueva Gales del Sur supervisa la aplicación de la política en materia de asuntos étnicos en todas las actividades del Gobierno del Estado. Asimismo, se ocupa de garantizar que las aspiraciones y las inquietudes de las comunidades étnicas se tengan en cuenta en la formulación de la política del Gobierno y la prestación de servicios públicos. Para desempeñar ese mandato, la Comisión proporciona al Gobierno de Nueva Gales del Sur y a la comunidad en general servicios de enlace y formulación de políticas. Asimismo, suministra servicios de traducción e interpretación a la comunidad a través de su División de Servicios Lingüísticos, y administra un programa de subvenciones. La intervención del Gobierno de Nueva Gales del Sur en los asuntos étnicos se rige por la Carta de Principios de Nueva Gales del Sur para una sociedad culturalmente diversa. En la Carta se reconoce la diversidad cultural de Nueva Gales del Sur como recurso valioso y se dispone que todas las personas deben tener la oportunidad de contribuir y participar a todos los niveles de la vida pública. La Carta subraya también la responsabilidad de los organismos públicos de responder a una comunidad culturalmente diversa. En los últimos años, la Comisión de Asuntos Étnicos ha llevado a cabo una serie de proyectos, entre los que figuran los siguientes:

- La encuesta sobre la policía y las comunidades étnicas, un estudio oficial de amplio alcance sobre las relaciones entre la policía y las comunidades étnicas que ha dado lugar a la formulación de varias recomendaciones que se están aplicando actualmente;
- Un equipo de tareas sobre títulos académicos extranjeros en el sector público de Nueva Gales del Sur que ha examinado la utilización de la experiencia y los conocimientos extranjeros en el sector público de Nueva Gales del Sur;

- Dos foros multiculturales del Gobierno local que han examinado la forma en que el Gobierno local puede incrementar la eficacia de los servicios que presta a las comunidades culturalmente diversas;
- "Australia Multicultural" proyecto conjunto realizado con la Universidad de Tecnología y encaminado a documentar la evolución de la diversidad cultural en Australia en los decenios de 1970 a 1980.

1492. La Comisión concede también premios anuales en varias especialidades artísticas, incluidos premios de literatura y cinematografía, a fin de promover la inclusión de temas multiculturales en las artes. También se conceden premios a las innovaciones y la excelencia en las actividades de comercialización multicultural. También es importante promover la armonía dentro de la comunidad, por lo que la Comisión ayuda a los grupos de la comunidad que lo solicitan a resolver sus diferencias.

Territorio del Norte

1493. Por lo que respecta a los servicios a los grupos étnicos, la Oficina de Asuntos Étnicos del Territorio del Norte dispone de numerosos programas en cuyo marco se brinda asistencia a las minorías étnicas. El Servicio de Traductores e Intérpretes del Territorio del Norte atiende a las solicitudes que presentan el Gobierno, los grupos no gubernamentales, los grupos étnicos y los miembros individuales de la comunidad. Existe una Dependencia de Títulos Académicos Extranjeros que ayuda a las personas pertenecientes a minorías étnicas a tramitar la convalidación de sus títulos.

Australia Meridional

1494. La South Australian Multicultural and Ethnic Affairs Commission Act 1980 (Ley de 1980 sobre la Comisión de Asuntos Étnicos y Multiculturales de Australia Meridional) pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de ese Estado con respecto al multiculturalismo. Según el artículo 4 de la Ley, por multiculturalismo se entiende las políticas y prácticas que reconocen y responden a la diversidad étnica de la comunidad de Australia Meridional y tienen por objetivo principal la creación de condiciones en las que todos los grupos y miembros de la comunidad puedan:

- Vivir y trabajar juntos en armonía;
- Participar plena y efectivamente en la vida económica, social y cultural de la comunidad y emplear sus conocimientos y aptitudes para tal fin; y
- Mantener y expresar su patrimonio cultural distintivo.

1495. La Ley de 1980 sobre la Comisión de Asuntos Étnicos y Multiculturales confiere a los organismos públicos determinadas obligaciones por lo que respecta a la formulación, el desarrollo y la aplicación de las políticas multiculturales pertinentes. En virtud del apartado b) del párrafo 1 del artículo 12 de la Ley, una de las principales funciones de la Comisión de Asuntos Étnicos y Multiculturales de Australia Meridional consiste en asesorar al Gobierno y a las autoridades públicas y prestarles asistencia en todas las cuestiones relacionadas con el fomento del multiculturalismo y los asuntos étnicos. En los

apartados a) y d) del párrafo 2 del artículo 12 se establece que esa función comprende las siguientes responsabilidades:

- Contribuir al desarrollo de estrategias destinadas a garantizar la incorporación de políticas multiculturales y lingüísticas como parte integrante de las políticas de desarrollo económico y social generales;
- Colaborar con las autoridades públicas a fin de garantizar la coordinación de los enfoques que se aplican para la promoción del multiculturalismo y los asuntos étnicos;
- Supervisar la medida en que los servicios disponibles satisfacen las necesidades de los grupos étnicos minoritarios y asesorar al Gobierno y a las autoridades públicas al respecto; y
- Ayudar a las autoridades públicas a establecer métodos eficaces de evaluación y presentación de informes sobre las políticas y programas para la promoción del multiculturalismo y los asuntos étnicos.

1496. La Oficina de Asuntos Étnicos y Multiculturales, que es la rama operativa de la Comisión, dispone de dos programas que protegen de manera específica los derechos y las propiedades de las personas pertenecientes a minorías étnicas. Se trata del Programa de Promoción del Multiculturalismo y del Programa de Servicios de Traducción e Interpretación.

1497. Los objetivos generales del Programa de Promoción del Multiculturalismo son los siguientes:

- Ayudar al Gobierno y a los organismos de la comunidad a responder equitativamente a la diversidad cultural y lingüística de la comunidad por lo que respecta a la asignación de recursos, la gestión de los recursos humanos, la mejora de la administración y el suministro de servicios;
- Promover los beneficios económicos, sociales y culturales del multiculturalismo para todos los australianos meridionales; y
- Proporcionar información y asesoramiento a las personas que vayan a establecerse en el Estado.

1498. Uno de los principales objetivos de las políticas multiculturales del Gobierno de Australia Meridional es apartar a los organismos públicos de la percepción de que los servicios multiculturales constituyen actividades o programas aislados que guardan escasa relación con los programas más amplios de los organismos y, en los casos en los que el personal y los recursos utilizados para desarrollar esas actividades constituyen elementos marginales de los presupuestos generales, garantizar la integración de las actividades en cuestión en las actividades generales del organismo.

Tasmania

1499. El Gobierno de Tasmania está firmemente comprometido con las políticas de desarrollo que responden a las necesidades y aspiraciones de la comunidad multicultural. Para tal fin, en 1992 creó el Consejo Asesor de Tasmania en Asuntos Étnicos y Multiculturales.

1500. El Consejo está integrado por 12 miembros seleccionados para que constituyan una representación amplia de la diversidad cultural de Tasmania, teniendo en cuenta su experiencia, su sexo y los intereses de la comunidad y la región a la que representan.

1501. Las funciones del Consejo son:

- Asesorar al Ministro sobre la medida en que los servicios y programas están a disposición de los inmigrantes y los miembros de las comunidades étnicas y satisfacen sus necesidades;
- Indicar problemas relacionados con los asuntos multiculturales y étnicos y proporcionar asesoramiento al respecto;
- Promover la cooperación entre los grupos étnicos y las organizaciones en asuntos de interés común;
- Asesorar al Ministro sobre las cuestiones muticulturales y étnicas particulares que éste someta al Consejo.

1502. En 1994 el Gobierno de Tasmania adoptó un conjunto de principios para crear una sociedad culturalmente diversa en ese Estado:

- Reconocer y valorar la diversidad de los recursos culturales y lingüísticos y los conocimientos de todos los tasmanios como bienes económicos y sociales, y desarrollar y utilizar esos recursos y conocimientos en beneficio de toda Tasmania;
- Reconocer y promover el derecho de todos los tasmanios a participar en la vida social, política, económica y cultural de Tasmania y a contribuir a ella;
- Aceptar y respetar la cultura, el idioma y la religión de todos los tasmanios en el marco de la legislación del Commonwealth y del Estado;
- Reconocer los derechos de todos los tasmanios a acceder a los servicios públicos, teniendo en cuenta las necesidades derivadas de la diversidad cultural y lingüística de la comunidad.

1503. La Oficina de Asuntos Étnicos y Multiculturales del Gobierno de Tasmania, que forma parte del Departamento del Primer Ministro y el Gabinete, asesora a los departamentos gubernamentales y a las organizaciones del sector público en la aplicación de esos principios.

Victoria

1504. La Comisión de Asuntos Étnicos de Victoria se creó en virtud de una ley del Parlamento como órgano asesor del Ministro de Asuntos Étnicos de Victoria. Entre los objetivos de la Comisión figuran alentar a todos los grupos étnicos de Victoria a conservar y expresar su identidad social y su patrimonio cultural, y promover la plena participación de los grupos étnicos de Victoria en la vida social, económica, cultural y política del Estado. La Comisión concede subvenciones a las organizaciones étnicas para apoyar las actividades y proyectos que ejecutan.

1505. También se proporciona financiación a las organizaciones de la comunidad étnica de Victoria en el marco del Programa de Atención a Domicilio y en Centros Comunitarios, que es un programa conjunto del Estado y el Commonwealth en el que se prestan servicios de apoyo a domicilio y en centros de la comunidad a personas de edad, a jóvenes con discapacidades y a sus cuidadores.

1506. El Consejo de las Artes de Victoria presta apoyo a diversas organizaciones artísticas multiculturales, festivales étnicos y organizaciones que se dedican a la identificación, conservación y exposición de colecciones a fin de promover el patrimonio cultural de la población de Victoria de diversos orígenes culturales, religiosos y lingüísticos.

Australia Occidental

1507. En reconocimiento de la diversidad de la población de Australia Occidental, el Departamento de Desarrollo de la Comunidad dispone de una política de asistencia social multicultural que se basa en los principios de justicia social de equidad, acceso y participación. La aplicación de esa política pone de manifiesto el compromiso del Departamento de garantizar la idoneidad, pertinencia y accesibilidad de sus políticas, programas y servicios para toda la población de Australia Occidental, cualquiera que sea su origen cultural.

1508. La estrategia de aplicación de esa política tiene ocho objetivos:

- Garantizar que la legislación y la planificación del Departamento reflejen la diversidad de la población de Australia Occidental a la que se atiende;
- Garantizar que la política del Departamento en materia de recursos humanos refleje y promueva la aplicación de la política de asistencia social multicultural;
- Promover la capacitación del personal a fin de que pueda prestar servicios eficaces e idóneos a la población de Australia Occidental de distintos orígenes culturales;
- Desarrollar los procedimientos burocráticos adecuados y adaptados a la población de Australia Occidental;
- Informar eficazmente a las comunidades étnicas acerca de los programas y servicios del Departamento;

- Mejorar el acceso de las minorías étnicas a los programas de financiación del Departamento;
- Desarrollar estrategias para la reunión de datos sobre las comunidades étnicas; y
- Garantizar la celebración de consultas con las minorías étnicas con miras a la planificación y el desarrollo de políticas, programas y servicios.

1509. El Departamento ha nombrado un oficial superior de política encargado de los servicios étnicos para que preste servicios de asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las minorías étnicas y oriente la aplicación de la política de asistencia social multicultural.

Índice de cuadros

1. Aportación de la administración federal a la promoción de la mujer
2. Commonwealth - Participación de mujeres en la educación superior, por tipo de cursos y campo de estudio, 1983 y 1993
3. Tasas totales de fecundidad (número de hijos por mujer), 1991
4. Tasas de mortalidad por 100.000 habitantes, por edades y entre la población aborígen y la población total de Australia, 1990-1992
5. Población penal australiana, número de personas encarceladas por 100.000 adultos, junio de 1985 a 1994
6. Porcentaje de presos, por situación procesal, junio de 1982 y 1993
7. Número de presos aborígenes, 1988 a 1994
8. Porcentaje de presos indígenas sobre la población penal total, 1988 a 1994
9. Total de presos por 100.000 adultos, por jurisdicciones, junio de 1982 a 1993
10. Número de presos cumpliendo condena, por jurisdicciones, junio de 1982 a 1993
11. Número de presos cumpliendo condena por 100.000 adultos, por jurisdicciones, junio de 1982 a 1993
12. Número de presos condenados recibidos en cada jurisdicción durante junio de 1994
Tasas de encarcelamiento (número de presos por 100.000 habitantes) basadas en promedios diarios
13. Tasas de sobrerrepresentación de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, por jurisdicciones, 1988 a 1994
14. Presos preventivos por 100.000 adultos, por jurisdicciones, junio de 1982 a 1993
15. Número de presos preventivos, por jurisdicciones, junio de 1982 a 1993
16. Territorio del Norte - Promedios diarios de internados en instituciones para delincuentes juveniles, 1991
17. Fuentes de fondos para las comisiones de asistencia jurídica, 1987 a 1993
18. Número de sindicatos, por tamaños
19. Resumen nacional de los datos sobre la familia
20. Niños nacidos fuera del matrimonio reconocidos por el padre

21. Tasas de nupcialidad por edades (primer matrimonio)
22. Tendencias en la utilización de servicios estructurados y no estructurados de atención a la infancia
23. Votaciones, por Estados, Territorio del Norte, regiones de la Comisión de los Aborígenes y de los Isleños del Estrecho de Torres (ATSIC) y zona del Estrecho de Torres, 1994
24. Origen de la población australiana, 1991
25. Población, por país de nacimiento, 1981, 1991 y 1994 (miles de personas)
26. Inmigrantes, por principales lugares de procedencia, e hijos de inmigrantes nacidos en Australia, 1991
27. Relaciones con la ley y la justicia, por Estados, Territorio del Norte, regiones de la Comisión de los Aborígenes y de los Isleños del Estrecho de Torres (ATSIC) y zona del Estrecho de Torres, 1994
28. Muertes de presos y detenidos de 1980 a 1995, por año, autoridad responsable y pertenencia o no a la comunidad aborigen. Circunstancias institucionales
29. Muertes de presos y detenidos de 1990 a 1995, por año, autoridad responsable y pertenencia o no a la comunidad aborigen. Circunstancias institucionales y no institucionales
30. Muertes de presos y detenidos de 1990 a 1995, por año, autoridad responsable y pertenencia o no a la comunidad aborigen. Circunstancias no institucionales
31. Progresión en la enseñanza secundaria - Cohorte de 12 años en 1992

Cuadro 1

Aportación de la administración federal a la promoción de la mujer

PRIMER MINISTRO									
Ministro de Servicios Humanos y Salud y Ministro adjunto del Primer Ministro encargado de la condición de la mujer	Fiscal General								Ministro de Cooperación para el Desarrollo y Asuntos de las Islas del Pacífico
Departamento del Primer Ministro y el Gabinete	Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades	Ministro de Vivienda y Desarrollo Regional	Ministro de Asuntos de los Aborígenes y de los Isleños del Estrecho de Torres	Ministro de Medio Ambiente, Deporte y Territorios	Ministro del Sector Primario y la Energía	Ministro de Seguridad Social	Ministro de Relaciones Laborales	Ministro de Empleo, Educación y Capacitación	Oficina Australiana de Asistencia Internacional para el Desarrollo
Oficina de la Condición de la Mujer	Comisionado de Discriminación Sexual	Departamento de Vivienda y Desarrollo Regional	Comisión de los Aborígenes y de los Isleños del Estrecho de Torres	Departamento de Medio Ambiente, Deporte y Territorios	Departamento del Sector Primario y la Energía	Departamento de Seguridad Social	Departamento de Relaciones Laborales	Departamento de Empleo, Educación y Capacitación	Dependencia de la Mujer en el Desarrollo
Conferencia de Ministros del Commonwealth y de los Estados sobre la Situación de la Mujer					Dependencia de la Mujer Rural		Dependencia de Igualdad de Remuneración	Oficina de la Mujer	
Comité Permanente de Asesores Estatales y del Commonwealth sobre la Situación de la Mujer	Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres		Oficina de la Mujer Indígena	Dependencia de la Mujer en el Deporte			Sección de Igualdad en las Relaciones Laborales	Grupo Consultivo en Empleo, Educación y Capacitación para la Mujer	
Consejo Australiano de la Mujer	Comisionado de Discriminación Racial						Dependencia del Trabajo y la Familia	Política nacional para la educación de las niñas en las escuelas australianas	
Consultas de mesa redonda									
Departamento de Servicios Humanos y Salud	Comisionado de Discriminación a los Discapacitados						Organismo de Promoción de la Mujer		
	Comisión de Reforma Legislativa de Australia								
Dependencia de Salud de la Mujer									

Nota: La Conferencia de Ministros del Commonwealth y de los Estados y el Comité Permanente de Asesores del Commonwealth y de los Estados sobre la Situación de la Mujer se establecieron como foros consultivos para el debate estratégico, el intercambio de información y la coordinación de las actividades del Commonwealth y de los Estados para la promoción de la mujer.

Fuente: Oficina de la Condición de la Mujer.

Cuadro 2

Commonwealth - Participación de mujeres en la educación superior,
por tipo de cursos y campo de estudio, 1983 y 1993

<i>Tipo de cursos/campo de estudio</i>	<i>Mujeres matriculadas</i>		<i>Porcentaje de mujeres en la matrícula total</i>	
	<i>1983 (en miles)</i>	<i>1993 (en miles)</i>	<i>1983 (%)</i>	<i>1993 (%)</i>
Agricultura/silvicultura	1 710	3 884	27.9	35.3
Arquitectura/construcción	1 610	4 189	20.7	33.9
Artes/humanidades/ciencias sociales	54 890	86 476	63.7	67.7
Economía/administración de empresas	18 539	52 069	29.5	43.2
Educación	48 945	55 643	65.9	72.7
Ingeniería/prospección	1 280	5 736	4.6	12.5
Salud/medicina	10 496	52 741	53.5	74.5
Odontología				
Derecho/estudios jurídicos	4 168	9 332	40.1	47.8
Ciencias puras y aplicadas	17 237	33 631	35.5	40.2
Veterinaria	639	961	43.6	55.9
Sin titulación	1 746	2 969	47.2	49.7
Total	161 260	307 631	46.3	53.4

Fuente: Series estadísticas de la División de Educación Superior del Departamento de Empleo, Educación y Capacitación.

Cuadro 3

Tasas totales de fecundidad (número de hijos por mujer), 1991

<i>Estado</i>	<i>Población aborígen</i>	<i>Población total</i>
Nueva Gales del Sur	3,0	1,9
Victoria	3,0	1,8
Queensland	3,2	1,9
Australia Meridional	3,0	1,7
Australia Occidental	3,6	1,9
Tasmania	2,6	1,9
Territorio del Norte	3,4	2,3
Territorio de la Capital de Australia	2,6	1,8
Total	3,1	1,9

Fuente: Registros de nacimientos; Censo de población y vivienda: Dugbaza (1994).

Cuadro 4

Tasas de mortalidad por 100.000 habitantes, por edades
y entre la población aborígen y la población total de Australia, 1990-1992

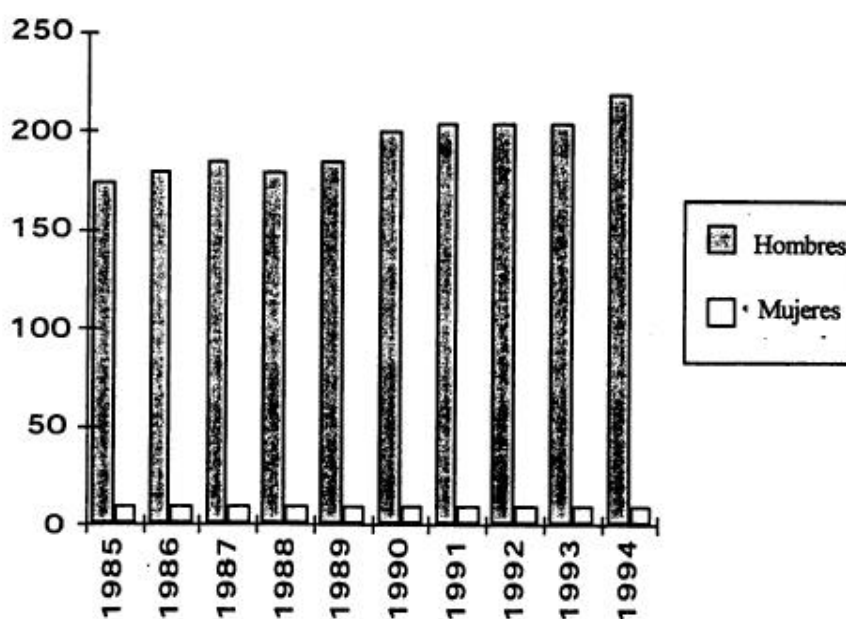
Grupo de edad (años)	Población aborígen*		Población total de Australia	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
0	2 681	2 485	789	622
1-4	155	129	38	30
5-14	50	46	21	15
15-24	402	156	108	41
25-34	665	367	129	54
35-44	1 115	583	177	93
45-54	2 228	1 465	404	242
55-64	3 601	3 530	1 212	646
65-74	6 187	6 395	3 090	1 689
75+	13 843	10 424	12 386	9 285

Nota: * Las cifras correspondientes a la población aborígen se basan en datos de Australia Occidental, Australia Meridional y el Territorio del Norte.

Fuente: Instituto Australiano de Salud y Bienestar Social, sobre la base de datos del registro de defunciones; Instituto Australiano de Salud y Bienestar Social, An overview of Aboriginal and Torres Strait Islander health: present status and future trends, Servicio de Publicaciones del Gobierno de Australia, Canberra, 1995.

Cuadro 5

Población penal australiana, número de personas encarceladas
por 100.000 adultos, junio de 1985 a 1994



Fuente: Instituto Australiano de Criminología, Australian Prison Trends, N° 217, junio de 1994.

Cuadro 6

Porcentaje de presos, por situación procesal, junio de 1982 y 1993

	NGS		VIC		QLD		AO		AM		TAS		TN		TCA		AUST	
	1982	1993	1982	1993	1982	1993	1982	1993	1982	1993	1982	1993	1982	1993	1982	1993	1982	1993
Cumpliendo sentencia	83,40	80,50	86,70	85,10	90,70	84,30	88,40	87,80	87,30	78,70	88,90	85,30	91,90	91,90	0,00	0,00	86,50	82,70
Condenados																		
Esperando apelación	4,10	9,10	0,80	2,10	2,00	3,20	4,30	1,00	0,00	0,00	3,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	5,20
Esperando sentencia	2,30	0,40	0,60	0,00	0,00	0,00	1,20	0,70	3,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,30
No condenados	9,90	9,80	9,50	12,80	6,70	12,40	5,90	10,10	8,70	21,30	6,30	13,60	6,70	7,80	100,0	100,0	8,50	11,60
Sin defensa	-	0,30	-	0,00	-	0,00	-	0,20	-	0,00	-	0,40	-	0,20	-	0,00	-	0,20
Esperando deportación	0,08	0,00	0,20	0,00	0,40	0,10	0,07	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,17	0,10
Otras situaciones	0,05	-	2,30	-	0,06	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,45	-

Fuente: Censos nacionales de prisiones, 1982 y 19930

Cuadro 7

Número de presos aborígenes, 1988 a 1994

	<i>NGS</i>	<i>VIC</i>	<i>QLD</i>	<i>AO</i>	<i>AM</i>	<i>TAS</i>	<i>TN</i>	<i>TCA</i>	<i>AUST</i>
1988	385	65	431	528	114	10	276	0	1 809
1989	415	86	412	558	102	9	243	0	1 825
1990	579	88	367	585	124	12	286	0	2 041
1991	664	91	346	577	150	10	328	0	2 166
1992	648	106	370	574	187	13	322	3	2 223
1993	729	105	427	637	185	14	319	0	2 416
1994	788	141	544	681	219	17	342	1	2 733

Fuente: 1988-1993, Censos nacionales de prisiones; 1994, Australian Prison Trends, junio de 1994.

Cuadro 8

Porcentaje de presos indígenas sobre la población penal total, 1988 a 1994

	<i>NGS</i>	<i>VIC</i>	<i>QLD</i>	<i>AO</i>	<i>AM</i>	<i>TAS</i>	<i>TN</i>	<i>TCA</i>	<i>AUST</i>
1988	8,2	3,1	18,2	32,0	13,5	3,4	72,4	0,0	14,7
1989	7,9	3,8	17,2	35,6	11,7	3,7	69,2	0,0	14,1
1990	9,1	3,8	16,0	34,0	13,3	5,1	68,9	0,0	14,3
1991	9,3	3,9	16,5	33,4	14,4	3,8	70,5	0,0	14,4
1992	8,7	4,7	18,3	30,3	16,2	4,8	72,0	15,8	14,3
1993	9,6	4,6	20,6	31,4	15,9	5,3	75,6	0,0	15,2
1994	12,4	5,6	22,3	28,6	16,6	6,9	73,1	0,9	17,2

Fuente: 1988-1993, Censos nacionales de prisiones; 1994, Australian Prison Trends, junio de 1994.

Cuadro 9

Total de presos por 100.000 adultos, por jurisdicciones, junio de 1982 a 1993

	NGS	VIC	QLD	AO	AM	TAS	TN	TCA	AUST
1982	96,3	60,8	95,4	142,3	83,1	77,6	369,3	3,2	89,8
1983	95,4	68,1	96,9	154,2	77,0	67,7	300,7	9,2	91,6
1984	84,7	62,0	104,4	155,0	56,0	76,9	266,3	10,0	85,6
1985	102,3	62,1	108,4	146,5	76,7	71,6	339,0	6,3	94,1
1986	103,3	63,5	115,0	152,3	78,1	79,7	412,4	9,3	97,6
1987	108,9	62,4	120,3	149,2	83,4	85,6	435,5	7,4	100,8
1988	110,1	65,0	118,3	147,0	79,4	90,0	352,7	7,2	100,4
1989	121,6	69,6	115,0	135,6	80,9	73,3	319,2	11,1	103,5
1990	145,2	70,3	107,4	145,2	85,4	69,7	369,9	11,8	112,2
1991	159,8	69,2	95,6	143,3	94,4	77,0	407,9	7,6	116,0
1992	166,3	67,5	89,5	154,4	103,3	77,4	386,9	8,8	118,3
1993	168,0	67,0	89,0	163,0	103,7	75,7	360,5	6,8	119,2

Nota: Por adultos se entiende las personas que hayan cumplido 17 años, a fin de facilitar la comparación con otras tasas utilizadas en el presente informe.

Fuente: Censos nacionales de prisiones.

Cuadro 10

Número de presos cumpliendo condena, por jurisdicciones, junio de 1982 a 1993

	NGS	VIC	QLD	AO	AM	TAS	TN	AUS
1982	3 261	1 577	1 522	1 253	710	220	287	8 830
1983	3 212	1 826	1 548	1 399	645	181	229	9 040
1984	2 873	1 665	1 702	1 429	454	210	205	8 538
1985	3 483	1 654	1 796	1 361	589	207	274	9 364
1986	3 611	1 749	1 962	1 459	620	227	356	9 984
1987	3 883	1 705	2 171	1 439	665	238	416	10 517
1988	3 948	1 811	2 155	1 459	643	264	331	10 611
1989	4 524	1 956	2 183	1 396	684	219	307	11 269
1990	5 517	1 954	2 094	1 539	714	204	349	12 371
1991	6 260	1 925	1 884	1 563	759	232	413	13 036
1992	6 732	1 913	1 849	1 700	862	236	413	13 705
1993	6 852	1 982	1 809	1 807	915	229	389	13 983

Fuente: Censos nacionales de prisiones.

Cuadro 11

Número de presos cumpliendo condena por 100.000 adultos, por jurisdicciones,
junio de 1982 a 1993

	NGS	VIC	QLD	AO	AM	TAS	TN	AUS
1982	84,4	54,7	88,6	132,1	72,7	72,1	339,7	80,7
1983	82,1	62,3	87,8	143,5	65,0	58,6	257,9	81,2
1984	72,5	55,9	94,5	143,5	45,1	67,0	219,2	75,4
1985	86,6	54,7	97,4	133,4	57,7	65,0	278,1	81,3
1986	88,2	56,8	103,3	137,8	59,8	70,1	342,2	84,8
1987	92,9	54,4	111,4	132,0	63,4	72,7	387,9	87,5
1988	92,7	56,8	107,4	130,0	60,5	80,0	306,4	86,5
1989	104,6	60,3	105,0	120,7	63,5	65,5	279,2	90,0
1990	125,9	59,3	97,9	129,9	65,5	60,0	311,0	97,0
1991	140,8	57,6	86,0	129,7	68,8	67,4	362,3	100,6
1992	149,5	56,7	82,0	138,7	77,3	67,9	357,5	104,2
1993	150,9	58,4	77,8	145,2	81,6	65,4	332,3	105,0

Fuente: Censos nacionales de prisiones.

Cuadro 12

Número de presos condenados recibidos en cada jurisdicción durante
junio de 1994
Tasas de encarcelamiento (número de presos por 100.000 habitantes)
basadas en promedios diarios

	Presos encarcelados		Promedio diario	Población general <u>b/</u> (en miles)		Tasas de encarcelamient	
	Total	I.M. <u>a/</u>		Adulta	Total	Adulta	Total
NGS	481	7	6 438	4 594	6 058	140,1	106,3
VIC	150	11	2 481	3 412	4 475	72,7	55,4
QLD	408	53	2 459	2 393	3 195	102,8	77,0
AO	433	228	2 065	1 265	1 698	163,3	121,6
AM	388	176	1 316	1 129	1 467	116,6	89,7
TAS	60	27	250	353	474	70,8	52,7
TN	72	30	459	117	169	392,8	271,1
TCA	0	0	107	228	304	47,2	35,3
AUS	1 992	532	15 576	13 490	17 840	115,5	87,3

a/ Sólo por impago de multas.

b/ Proyecciones de población a final de junio de 1995 contenidas en Estimated Resident Population by Sex and Age: States and Territories of Australia June 1987 to Preliminary June 1992 (Nº de catálogo 3201.0 de la Oficina Australiana de Estadística). Por adultos se entiende todas las personas que hayan cumplido 17 años.

Cuadro 13

Tasas de sobrerrepresentación de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, por jurisdicciones, 1988 a 1994

<i>Año</i>	<i>NGS</i>	<i>VIC</i>	<i>QLD</i>	<i>AO</i>	<i>AM</i>	<i>TAS</i>	<i>TN</i>	<i>TCA</i>	<i>AUST</i>
1988	11,4	12,8	12,4	23,8	19,5	3,1	11,4	0,0	16,0
1989	10,1	15,0	12,4	28,3	16,4	3,3	9,5	0,0	14,9
1990	12,1	14,3	11,3	26,5	18,8	4,4	9,2	0,0	15,2
1991	12,3	14,2	11,8	25,8	20,3	3,0	9,8	0,0	15,2
1992	10,6	16,3	12,4	22,3	22,8	3,5	10,3	37,8 ^{a/}	14,2
1993	10,9	16,5	13,7	23,6	22,4	0,8	11,7	0,0	14,6
1994	17,1	18,9	16,3	25,9	25,7	7,9	13,0	0,0	19,4

^{a/} Cifra no significativa por basarse en un número muy pequeño de presos.

Fuente: Censos nacionales de prisiones; Instituto Australiano de Criminología, Australian Prison Trends, junio de 1993 y marzo de 1994. Las cifras correspondientes a Nueva Gales del Sur se han ajustado para incluir a los reincidentes. Las cifras de la población aborigen y de isleños del Estrecho de Torres se interpolaron en las cifras de los censos de 1986 y 1991, y se utilizó una simple extrapolación para obtener las estimaciones correspondientes a 1992, 1993 y 1994. Las cifras de población total utilizadas son las de la Oficina Australiana de Estadística.

Cuadro 14

Presos preventivos por 100.000 adultos, por jurisdicciones, junio de 1982 a 1993

	<i>NGS</i>	<i>VIC</i>	<i>QLD</i>	<i>AO</i>	<i>AM</i>	<i>TAS</i>	<i>TN</i>	<i>TCA</i>	<i>AUS</i>
1982	11,9	6,1	6,8	10,2	10,4	5,6	29,6	3,2	9,1
1983	13,3	5,8	9,1	10,7	11,9	9,1	42,8	9,2	10,4
1984	12,1	6,0	7,8	11,4	10,9	9,9	47,1	10,0	9,9
1985	15,7	7,4	9,1	13,1	19,0	6,6	60,9	6,3	12,5
1986	15,1	6,7	9,6	14,5	18,3	9,3	70,2	9,3	12,5
1987	16,0	8,0	7,7	17,2	20,0	12,8	47,6	7,4	13,1
1988	17,4	8,2	9,1	13,8	18,9	9,7	46,3	7,2	13,3
1989	17,0	9,3	9,5	13,9	17,4	7,8	40,0	11,1	13,4
1990	19,4	11,0	9,4	15,3	19,9	9,7	58,8	11,8	15,2
1991	19,0	11,5	9,1	13,5	25,6	9,6	44,7	7,6	15,2
1992	16,7	10,8	7,5	15,7	26,0	9,5	29,4	8,8	14,1
1993	17,2	8,6	11,1	17,8	22,1	10,3	28,2	6,8	14,1

Fuente: Censos nacionales de prisiones.

Cuadro 15

Número de presos preventivos, por jurisdicciones, junio de 1982 a 1993

	<i>NGS</i>	<i>VIC</i>	<i>QLD</i>	<i>AO</i>	<i>AM</i>	<i>TAS</i>	<i>TNT</i>	<i>TCA</i>	<i>AUST</i>
1982	458	176	116	97	102	17	25	5	996
1983	521	170	161	104	118	28	38	15	1 155
1984	481	180	140	114	110	31	44	17	1 117
1985	632	225	168	134	194	21	60	11	1 445
1986	619	206	183	153	190	30	73	17	1 471
1987	668	251	150	188	210	42	51	14	1 574
1988	743	260	183	155	201	32	50	14	1 638
1989	737	300	198	161	187	26	44	22	1 675
1990	849	362	202	181	217	33	66	24	1 934
1991	843	385	200	163	283	33	51	16	1 974
1992	753	364	168	193	290	33	34	19	1 854
1993	780	290	259	222	248	36	33	15	1 883

Fuente: Censos nacionales de prisiones.

Cuadro 16

Territorio del Norte - Promedios diarios de internados en instituciones
 para delincuentes juveniles, 1991

<i>Detention Centre</i>	<i>Malak House</i>	<i>Giles House</i>	<i>Wilderness Work Camp</i>	<i>Total</i>
Enero	17,87	3,32	16,77	37,96
Febrero	17,86	1,21	16,96	36,03
Marzo	17,39	2,58	13,06	33,03
Abril	20,90	7,23	14,63	42,76
Mayo	18,74	7,61	17,06	43,41
Junio	16,53	3,17	15,90	35,60
Julio	12,68	2,58	15,81	31,07
Agosto	14,07	2,48	11,77	28,32
Septiembre	15,13	1,67	10,63	27,43
Octubre	16,10	0,58	10,80	27,48
Noviembre	15,17	1,03	8,83	25,03
Diciembre	17,52	Cerrada	10,13	27,65
Total 1991	16,66	2,79	13,53	32,98
Año anterior	12,07	7,94	9,83	29,84

Fuente: Gobierno del Territorio del Norte, 1991.

Cuadro 17

Fuentes de fondos para las comisiones de asistencia jurídica, 1987 a 1993
(en millones de dólares)

<i>Fuentes</i>	<i>Ejercicio financiero</i>					
	<i>1987-88</i>	<i>1988-89</i>	<i>1989-90</i>	<i>1990-91</i>	<i>1991-92</i>	<i>1992-93</i>
Donaciones del Commonwealth	85,2	92,8	100,6	105,3	114,9	117,7
Donaciones de los Estados	18,5	27,0	25,2	31,1	41,2	57,8
Fideicomiso especial e interés reglamentario	28,9	39,0	42,5	43,6	45,6	29,5
Aportaciones de clientes y recuperación de costos	18,5	24,5	27,1	29,1	39,5	40,3
Intereses sobre inversiones	4,6	6,6	10,1	7,6	4,7	4,1
Otros ingresos	0,4	0,5	2,5	2,2	1,6	2,4
Ingresos totales	156,1	190,3	208,0	218,9	247,6	251,9

Nota: Se incluye a la Oficina de Asistencia Jurídica de Tasmania hasta el 31 de diciembre de 1990. Los totales pueden no coincidir exactamente por haberse redondeado las partidas.

Fuente: Comité Asesor sobre el Acceso a la Justicia, Access to Justice. An Action Plan, 1994, pág. 233.

Cuadro 18

Número de sindicatos, por tamaños

<i>Tamaño (número de afiliados)</i>	<i>Número de sindicatos</i>				<i>30 de junio de 1994</i>		
	<i>30 de junio de 1990</i>	<i>30 de junio de 1991</i>	<i>30 de junio de 1992</i>	<i>30 de junio de 1993</i>	<i>Número de sindicatos</i>	<i>Porcentaje del total</i>	<i>Porcentaje acumulativo del total</i>
Menos de 100	40	35	32	29	26	16,6	16,6
De 100 a 249	34	34	26	20	21	13,4	29,9
De 250 a 499	18	17	18	14	10	6,4	36,3
De 500 a 999	44	38	28	26	19	12,1	48,4
De 1.000 a 1.999	34	31	21	18	15	9,6	58,0
De 2.000 a 2.999	18	13	14	11	11	7,0	65,0
De 3.000 a 4.999	23	24	16	15	7	4,5	69,4
De 5.000 a 9.999	21	18	19	14	11	7,0	76,4
De 10.000 a 19.999	18	21	15	8	9	5,7	82,2
De 20.000 a 29.999	11	11	7	5	4	2,5	84,7
De 30.000 a 39.999	11	8	6	3	4	2,5	87,3
De 40.000 a 49.999	5	6	5	4	3	1,9	89,2
De 50.000 a 79.999	6	5	5	8	4	2,5	91,7
De 80.000 a 99.999	5	7	7	4	-	-	91,7
De 100.000 en adelante	7	7	8	9	13	8,3	100,0
Total	295	275	227	188	157	100,0	

Fuente: Trade Union Statistics, Australia, 30 de junio de 1994, N° de catálogo 6323.0 de la Oficina Australiana de Estadística.

Cuadro 19

Resumen nacional de los datos sobre la familia

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Total de familias (en miles)	3 947	3 983	4 033	4 087	4 146	4 236	4 319	4 456	4 502	4 587	4 638
Personas que viven solas (en porcentaje del total de personas de más de 15 años)	7,6	7,9	8,2	8,2	8,3	8,5	8,4	8,2	8,6	8,9	10,2
Tamaño medio de las familias (número de personas)	n.d.	n.d.	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Parejas con familiares a cargo (en porcentaje del total de familias)	47,6	47,2	46,7	45,8	45,5	45,7	44,7	44,3	43,7	43,4	42,9
Familias monoparentales con familiares a cargo (en porcentaje del total de familias)	7,5	7,9	7,8	7,8	8,4	8,1	7,6	8,1	8,5	9,0	9,0
Parejas solas (en porcentaje del total de familias)	29,4	28,9	29,6	30,2	30,4	30,7	31,5	31,2	31,3	31,1	32,1
Parejas de hecho (en porcentaje del total de parejas)	n.d.	n.d.	n.d.	5,7	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8,2	n.d.	n.d.
Parejas con familiares a cargo y con ambos miembros empleados (en porcentaje del total de parejas con familiares a cargo)	40,3	42,4	45,5	48,5	50,2	50,9	53,8	55,9	53,4	53,3	52,5

Períodos de referencia: Los datos sobre las parejas de hecho se refieren a la fecha del censo. Los demás datos se refieren al 30 de junio hasta 1985 y al 30 de junio a partir de 1986.

Cuadro 20

Niños nacidos fuera del matrimonio reconocidos por el padre

<i>Grupo de edad de la madre (años)</i>	<i>1976 (%)</i>	<i>1993 (%)</i>
Hasta 19	33,6	74,5
20 a 24	48,2	81,5
25 a 29	61,6	84,3
30 a 34	63,3	85,6
35 a 39	63,2	84,6
40 o más	54,4	76,6
Total	46,9	81,7

Fuente: Oficina Australiana de Estadística, Australian Social Trends 1995.

Cuadro 21

Tasas de nupcialidad por edades (primer matrimonio)

<i>Grupo de edad (años)</i>	<i>Hombres</i>				<i>Mujeres</i>			
	1966	1976	1986	1993	1966	1976	1986	1993
Hasta 19	14,9	9,9	2,4	1,4	61,5	49,0	15,2	7,4
20 a 24	152,8	122,6	63,4	40,5	272,0	187,5	112,0	73,7
25 a 29	195,7	135,9	105,0	90,4	183,9	138,8	120,2	105,9
30 a 34	100,3	81,8	77,6	72,3	90,8	86,5	74,0	69,8
35 a 39	48,6	45,9	42,7	42,0	45,0	49,8	39,8	35,6
40 a 44	27,9	25,5	22,2	21,9	24,9	26,3	22,9	17,8
45 a 49	15,7	15,7	13,4	12,1	15,9	15,5	12,8	9,8
50 o más	5,8	6,4	4,6	4,0	3,6	3,9	2,1	2,3

Tasa de nupcialidad: Número de matrimonios por 1.000 hombres o mujeres de más de 15 años de edad no casados.

Fuente: Oficina Australiana de Estadística, Australian Social Trends 1995.

Cuadro 22

Tendencias en la utilización de servicios estructurados y no estructurados de atención a la infancia

<i>Tipos de servicios utilizados</i>	<i>1984 (%)</i>	<i>1987 (%)</i>	<i>1990 (%)</i>	<i>1993 (%)</i>
Sólo estructurados	8,7	9,1	9,3	11,0
Sólo no estructurados	26,1	31,7	33,9	29,4
Estructurados y no estructurados	3,7	6,6	8,4	8,3
Total de servicios estructurados y/o no estructurados	38,5	47,5	51,6	48,8
Sin servicios estructurados ni no estructurados de atención a la infancia	61,5	52,6	48,4	51,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Total de niños (miles)	2 897,4	2 887,9	3 003,7	3 085,9

Fuente: Oficina Australiana de Estadística, Australian Social Trends 1994, N° de catálogo 4102.0.

Cuadro 23

Votaciones, por Estados, Territorio del Norte, regiones de la Comisión de los Aborígenes y de los Isleños del Estrecho de Torres (ATSIC) y zona del Estrecho de Torres, 1994

	<i>Personas de más de 18 años</i>			
	<i>Total (en miles)</i>	<i>Porcentaje de votantes en la elección federal</i>	<i>Porcentaje de votantes en la elección de la ATSIC</i>	<i>Total (en miles)</i>
AUSTRALIA	197,5	66,2	39,4	163,8
Nueva Gales del Sur	52,0	64,2	25,0	43,0
Victoria	12,6	67,2	29,9	10,6
Queensland	52,1	70,1	43,3	43,1
Australia Meridional	11,9	57,7	30,3	10,1
Australia Occidental	30,2	60,6	48,2	25,0
Tasmania	6,6	87,1	20,0	5,4
Territorio del Norte	30,9	66,9	59,8	25,5

Fuente: Encuesta nacional de 1994 sobre los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.

Cuadro 24

Origen de la población australiana, 1991

<i>Lugar de nacimiento de los progenitores</i>	<i>Porcentaje de la población</i>
Ambos progenitores nacidos en Australia	54,3
Indígenas	1,6
Un progenitor nacido fuera del país	11,0
Ambos progenitores nacidos fuera del país	8,1
Lugar de nacimiento de los progenitores no especificado	0,5
Nacidos fuera del país	22,3
Lugar de nacimiento no especificado	2,2

Fuente: Multicultural Australia. The Next Steps. Towards and Beyond 2000, volumen 2, Informe del Consejo Asesor Nacional Multicultural, Servicio de Publicaciones del Gobierno de Australia, Canberra, 1995.

Cuadro 25

Población, por país de nacimiento, 1981, 1991 y 1994
(miles de personas)

<i>País de nacimiento</i>	<i>1981</i>	<i>1991</i>	<i>1994</i>	<i>Porcentaje de variación, 1981-1994</i>
AUSTRALIA	11 812,3	13 318,8	13 779,7	16,7
OTROS PAÍSES:				
Oceanía				
Fiji	9,5	34,3	36,3	282,1
Nueva Zelandia	175,7	286,4	285,5	62,5
Otros países	28,5	50,3	51,1	79,3
Total	213,7	371,0	372,9	74,5
Europa y ex URSS				
Chipre	24,7	22,4	21,8	-11,7
Alemania	115,2	120,4	118,8	3,1
Grecia	153,2	147,4	145,2	-5,2
Hungría	29,3	27,5	26,2	-10,6
Italia	285,3	272,0	263,9	-7,5
Malta	59,9	54,6	52,8	-11,9
Países Bajos	100,5	100,9	98,2	-2,3
Polonia	62,1	69,5	67,7	9,0
Reino Unido e Irlanda	1 175,7	1 244,3	1 216,1	3,4
Ex URSS y Estados Bálticos	53,3	44,6	46,9	-12,0
Ex Repúblicas Yugoslavas	156,1	168,0	174,8	12,0
Otros países	131,0	143,8	145,0	10,7
Total	2 346,3	2 415,3	2 377,3	1,3
Oriente Medio y África septentrional				
Egipto	32,3	37,8	38,5	19,2
Líbano	52,7	78,5	80,9	53,5
Turquía	25,7	31,7	32,5	26,5
Otros países	6,6	47,6	56,2	751,5
Total	117,3	195,7	208,1	77,4
Asia sudoriental				
Indonesia	16,4	35,4	39,0	137,8
Malasia	32,5	79,9	88,0	170,8
Filipinas	15,8	79,1	88,4	459,5
Singapur	12,4	26,0	32,7	163,7
Viet Nam	43,4	124,8	142,0	227,2
Otros países	37,1	53,8	56,6	52,6
Total	157,7	398,9	446,8	183,3
Asia nordoriental				
China	26,8	84,6	91,4	241,0
Hong Kong y Macao	16,3	62,4	85,8	426,4
Otras procedencias	13,7	55,6	66,2	383,2
Total	56,8	202,6	243,4	328,5

<i>País de nacimiento</i>	<i>1981</i>	<i>1991</i>	<i>1994</i>	<i>Porcentaje de variación, 1981-1994</i>
Asia meridional				
India	43,7	66,2	74,9	71,4
Sri Lanka	17,9	40,4	44,8	150,3
Otros países	0,0	12,2	16,3	*
Total	61,6	118,8	136,0	120,8
Norteamérica				
Canadá	17,3	25,6	27,1	56,6
Estados Unidos	30,6	49,5	55,5	81,4
Otros países	0,0	0,4	0,5	*
Total	47,9	75,5	83,0	73,3
Sudamérica, América Central y el Caribe				
Chile	14,6	27,5	27,4	87,7
Otros países	33,1	53,7	56,3	70,1
Total	47,7	81,2	83,8	75,7
Otros países de África (excluida África septentrional)				
Sudáfrica	28,0	55,8	58,6	109,3
Otros países	34,0	50,4	53,8	58,2
Total	62,0	106,3	112,4	81,3
Total de nacidos en el extranjero	3 110,9	3 965,3	4 063,6	30,6
Total	14 923,3	17 284,0	17 843,3	19,6

Nota: Australia no empezó a reconocer a los países de la ex Yugoslavia hasta enero de 1992.

* No calculado por tratarse de cifras exiguas.

Fuente: Multicultural Australia. The Next Steps. Towards and Beyond 2000, volumen 2, informe del Consejo Asesor Nacional Multicultural, Servicio de Publicaciones del Gobierno de Australia, Canberra, 1995.

Cuadro 26

Inmigrantes, por principales lugares de procedencia, e hijos
de inmigrantes nacidos en Australia, 1991

<i>Origen</i>	<i>Número de inmigrantes</i>	<i>Hijos nacidos en Australia</i>	<i>Total</i>	<i>Porcentaje de la población australiana</i>
Reino Unido	1 122 412	314 334	1 436 746	8,5
Italia	254 780	198 072	452 852	2,7
Nueva Zelandia	276 073	21 107	297 180	1,8
Grecia	136 327	106 124	242 451	1,4
Ex Yugoslavia	161 076	72 653	233 729	1,4
Viet Nam	122 325	20 372	142 697	0,9
Alemania	114 915	23 471	138 386	0,8
Países Bajos	95 818	39 122	134 940	0,8
Líbano	69 014	51 243	120 251	0,7
Malta	53 838	37 508	91 346	0,5
Polonia	68 931	20 854	89 785	0,5
China	78 835	10 240	89 075	0,5
Filipinas	73 673	5 669	79 342	0,5
Malasia	72 566	5 916	78 482	0,5
India	61 602	9 873	71 475	0,4
Irlanda	52 448	14 947	67 395	0,4
Hong Kong	58 955	4 108	63 063	0,4

Nota: Australia no empezó a reconocer a los países de la ex Yugoslavia hasta enero de 1992.

Fuente: Multicultural Australia. The Next Steps. Towards and Beyond 2000, volumen 2, informe del Consejo Asesor Nacional Multicultural, Servicio de Publicaciones del Gobierno de Australia, Canberra, 1995.

Cuadro 27

Relaciones con la ley y la justicia, por Estados, Territorio del Norte,
regiones de la Comisión de los Aborígenes y de los Isleños del
Estrecho de Torres (ATSIC) y zona del Estrecho de Torres, 1994

	<i>Porcentaje de personas de más de 13 años de edad</i>			
	<i>Que sufrieron agresiones físicas o amenazas verbales</i>	<i>Que necesitaron servicios jurídicos en los últimos 12 meses</i>	<i>Que fueron detenidos en los últimos cinco años</i>	<i>Que consideran que las relaciones con la policía han mejorado en los últimos cinco años</i>
AUSTRALIA	12,9	16,9	20,4	21,5
Nueva Gales del Sur	14,6	17,2	22,5	19,6
Victoria	25,2	25,3	22,6	21,1
Queensland	8,8	14,2	14,9	18,7
Australia Meridional	15,4	22,1	28,5	24,1
Australia Occidental	13,5	17,3	25,4	20,6
Tasmania	13,4	17,4	12,6	15,4
Territorio del Norte	10,2	14,7	19,6	30,6

Fuente: Encuesta nacional de 1994 sobre los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.

Cuadro 28

Muertes de presos y detenidos de 1980 a 1995, por año, autoridad responsable y pertenencia o no a la comunidad aborigen. Circunstancias institucionales*

Año	Policía			Prisión			Centro de detención de menores			Total		Grand Total
	Abgn.	No abgn.	Total	Abgn.	No abgn.	Total	Abgn.	No abgn.	Total	Abgn.	No abgn.	
1980	5	7	12	5	25	30	1	-	1	11	32	43
1981	3	12	15	1	27	28	1	-	1	5	39	44
1982	4	15	19	4	21	25	-	-	-	8	36	44
1983	6	10	16	5	26	31	-	1	1	11	37	48
1984	3	12	15	4	27	31	-	-	-	7	39	46
1985	6	16	22	4	22	26	-	-	-	10	38	48
1986	8	13	21	1	16	17	-	1	1	9	30	39
1987	15	26	41	5	48	53	-	1	1	20	75	95
1988	7	14	21	6	36	42	1	-	1	14	50	64
1989	10	11	21	3	37	40	-	1	1	13	49	62
1990	1	17	18	6	27	33	-	1	1	7	45	52
1991	3	12	15	8	31	39	-	-	-	11	43	54
1992	4	9	13	2	32	34	-	-	-	6	41	47
1993	2	7	9	6	43	49	-	1	1	8	51	59
1994	1	6	7	10	43	53	-	1	1	11	50	61
1995**	-	5	5	15	39	54	-	1	1	15	45	60

* Se contabilizan las muertes en prisiones, calabozos de la policía o centros de detención de menores, en instalaciones de atención médica o durante un traslado bajo custodia.

** Datos preliminares.

Fuente: Instituto Australiano de Criminología.

Cuadro 29

Muertes de presos y detenidos de 1990 a 1995, por año, autoridad responsable y pertenencia o no a la comunidad aborígen.
Circunstancias institucionales y no institucionales*

Año	Policía			Prisión			Centro de detención de menores			Total		Grand Total
	Abgn.	No abgn.	Total	Abgn.	No abgn.	Total	Abgn.	No abgn.	Total	Abgn.	No abgn.	
1990	5	26	31	6	27	33	1	1	2	12	54	66
1991	5	23	28	8	31	39	-	-	-	13	54	67
1992	6	24	30	2	34	36	-	-	-	8	58	66
1993	3	24	27	6	43	49	-	1	1	9	68	77
1994	3	23	26	10	43	53	-	1	1	13	67	80
1995**	4	19	23	15	39	54	-	2	2	19	60	79

* Se contabilizan tanto las muertes en circunstancias institucionales como en otras circunstancias, como persecuciones y tiroteos policiales.

** Datos preliminares.

Fuente: Instituto Australiano de Criminología.

Cuadro 30

Muertes de presos y detenidos de 1990 a 1995, por año, autoridad responsable y pertenencia o no a la comunidad aborígen.
Circunstancias no institucionales*

Año	Policía			Prisión			Centro de detención de menores			Total		Grand Total
	Abgn.	No abgn.	Total	Abgn.	No abgn.	Total	Abgn.	No abgn.	Total	Abgn.	No abgn.	
1990	4	9	13	-	-	-	1	-	1	5	9	14
1991	2	11	13	-	-	-	-	-	-	2	11	13
1992	2	15	17	-	2	2	-	-	-	2	17	19
1993	1	17	18	-	-	-	-	-	-	1	17	18
1994	2	17	19	-	-	-	-	-	-	2	17	19
1995**	4	14	18	-	-	-	-	1	1	4	15	19

* Se contabilizan las muertes distintas de las ocurridas en prisiones, calabozos de la policía, centros de detención de menores o instalaciones de detención médica o durante traslados (por ejemplo, durante intentos de detención por la policía).

** Datos preliminares.

Fuente: Instituto Australiano de Criminología.

Cuadro 31

Progresión en la enseñanza secundaria - Cohorte de 12 años en 1992

